CATATUMBO:

MEMORIAS DE VIDA Y DIGNIDAD

Centro Nacional de Memoria Histórica

CATATUMBO:

MEMORIAS DE VIDA Y DIGNIDAD

Centro Nacional
de Memoria Histórica

CATATUMBO: MEMORIAS DE VIDA Y DIGNIDAD

María Fernanda Pérez Trujillo
COORDINADORA, INVESTIGADORA Y RELATORA

Jaime Landínez Aceros
INVESTIGADOR Y RELATOR

Isabel Caballero
INVESTIGADORA PRIMERA ETAPA

Mónica Márquez Ramírez
Juliana Duarte Ospina
INVESTIGADORAS SEGUNDA ETAPA

José Rodríguez Vaca
INVESTIGADOR REGIONAL

María Daniela Giraldo Zapata
Ana María Murcia Sotelo
Daniel Santiago Rocha Ruiz
ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN

Silvia Monroy Álvarez
Alanis Bello Ramírez
Gloria Restrepo Castañeda
ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y TÉCNICO

Carmen Rosa Prieto
TRANSCRIPTORA

Patrick Morales Thomas
LÍDER DEL ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO

Angélica Medina Mendoza
COORDINACIÓN Y APORTE
PROCESO DE MEMORIA PUEBLO BARÍ
ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO

Juan Pablo Gamboa
ENLACE TERRITORIAL
ESTRATEGIA NACIÓN TERRITORIO

COMPONENTE DE COMUNICACIONES Y TRABAJO CON JÓVENES

Nelsón Paéz Celis
Yeimi Paola Torres Torres
PASTORAL DE VÍCTIMAS DIÓCESIS DE TIBÚ

Sara Márquez Ramírez
Daniel Valencia Yépez
Angélica Rodríguez Gutierrez
Ignacio Neuta
Camilo Ara
Diana Cucalón
Mario Laborde
Giselly Mejía
Salomón Echavarría Castro
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

IMPULSORES DE LA INICIATIVA

DIÓCESIS DE TIBÚ
Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos
OBISPO DE TIBÚ

PASTORAL DE VÍCTIMAS
Víctor Hugo Peña
DELEGADO DIOCESANO

ÑATUBAIYIBARÍ
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO BARÍ

Ashkayra Arabadora Acrora
REPRESENTANTE LEGAL

Acucuara Bashuna
COORDINADOR MEMORIA HISTÓRICA

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

Gonzalo Sánchez Gómez
DIRECTOR GENERAL

Camila Medina Arbeláez
DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

La Estrategia de Comunicaciones del proyecto Catatumbo: memorias de vida y dignidad contó con los apoyos del Programa Propaz implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, por encargo del Gobierno Federal alemán; y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA). Los contenidos son responsabilidad del CNMH y no necesariamente reflejan las opiniones de GIZ ni de la MAPP/OEA.

Las ideas, afirmaciones y opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan, necesariamente, las posiciones de la Organización de los Estados Americanos ni de sus Estados Miembro.

CATATUMBO: MEMORIAS DE VIDA Y DIGNIDAD

ISBN: 978-958-5500-15-0
PRIMERA EDICIÓN: noviembre de 2018.

NÚMERO DE PÁGINAS: 676
FORMATO: 18 x 23 cm.

LÍDER ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES
Adriana Correa Mazuera

COORDINACIÓN EDITORIAL
Diana Gamba Buitrago

EDICIÓN GENERAL
María Victoria Duque López

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Andrea Leal Villarreal

FOTOGRAFÍAS
Portada: © Camilo Ara para el CNMH. Janeth Pedroza. Presidenta de Junta de Acción Comunal, San Calixto, 2017.

Internas: Camilo Ara, Karolay Arabadora Chimana, Acucuara Bashuna, Jaime Landínez Aceros, María Luisa Moreno, María Fernanda Pérez Trujillo y José Rodríguez Vaca para el CNMH. Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, Ñatubaiyibarí.

COORDINACIÓN DE DIVULGACIÓN, MULTIMEDIA Y EXPOSICIÓN
Natalia Vélez Rincón

IMPRESIÓN
Panamericana Formas e Impresos S.A.

© Centro Nacional de Memoria Histórica
Calle 35 Nº 5 – 81
PBX: (571) 796 5060
comunicaciones@centrodememoriahistorica.gov.co
www.centrodememoriahistorica.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

Impreso en Colombia. *Printed in Colombia*
Queda hecho el depósito legal.

CÓMO CITAR
Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), *Catatumbo: memorias de vida y dignidad,* CNMH, Bogotá.

Este informe es de carácter público. Puede ser reproducido, copiado, distribuido y divulgado siempre y cuando no se altere su contenido, se cite la fuente y/o en cualquier caso, se disponga la autorización del Centro Nacional de Memoria Histórica como titular de los derechos morales y patrimoniales de esta publicación.

Catatumbo : memorias de vida y dignidad / Centro Nacional de Memoria Histórica [y otros]. -- Bogotá : Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018.

676 páginas : mapas ; 23 cm. -- (Catatumbo: memorias de vida y dignidad)

ISBN 978-958-5500-15-0

1. Conflicto armado - Catatumbo (Región, Colombia) 2. Violencia - Catatumbo (Región, Colombia) 3. Memoria histórica - Catatumbo (Región, Colombia) 4. Memoria colectiva - Catatumbo (Región, Colombia) I. Castro Hernández, Diana, ilustradora II. Centro Nacional de Memoria Histórica, autor III. Serie.
303.60986 cd 21 ed.
A1613908

CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS **13**

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA **15**

Cómo surgió esta iniciativa y cómo se desarrolló **20**

Hacer memoria en el Catatumbo **28**

Reflexiones preliminares **31**

Hitos de la memoria sobre violencias y resistencias **34**

1. PRIMEROS HITOS DE MEMORIA DEL CONFLICTO **41**

1.1. Los Barí: sus mundos y coloridos **44**

1.1.1. Los Barí y la ley de origen 50

1.1.2. La Ishtana: vida, ancestros, historia de lucha 52

1.1.3. Lugares sagrados 54

1.2. Las guerras de los Barí **59**

1.2.1. Primera violencia contra la Ishtana y los barira 61

1.3. Kua, el petróleo **69**

1.3.1. Las empresas y su infraestructura 69

1.3.3. Alimentando el poblamiento 70

1.3.4. Explotación del quackayra, afectación a los Barí 85

1.4. Las misiones religiosas 91

1.5. La afectación persiste para los Barí 96

2. SOMOS DE TIERRA, MADERA Y AGUA 101

2.1. Marginamiento y Estado 112

2.2. Luchas por la autonomía 121

2.3. Se expanden las organizaciones 142

2.3.1. Trabajadores petroleros y movimiento sindical 143

2.3.2. Consolidación de los movimientos políticos de izquierda 150

2.3.3. Movimiento cívico popular 156

2.3.4. Las movilizaciones más recordadas 158

2.4. Elección popular de alcaldes y movimientos cívico-populares 173

2.5. Se viene la represión 179

3. LA LARGA HISTORIA DE LAS GUERRILLAS 197

3.1. Memorias sobre la llegada de las guerrillas 200

3.2. La vertiginosa expansión de las guerrillas 209

3.3. Memorias sobre la legitimidad guerrillera 220

3.3.1. El trabajo político 220

3.3.2. Formas cotidianas de interacción 225

3.3.3. Orden social impuesto 229

3.4. Consolidación del dominio armado 236

3.4.1. Tomas y destrucción de bienes públicos 237

3.4.2. Estricta regulación de la vida diaria 243
3.4.3. Estrategias de control, vigilancia y castigo 256
3.4.4. Fortalecimiento económico de las guerrillas..... 261
3.4.5. Detrás del tubo vino la guerrilla..... 272
3.5. Cargando el estigma..... 280

4. PARAMILITARISMO: VIOLENCIA SIN PRECEDENTES 293
4.1. Antecedentes..... 295
4.2. Paramilitarismo en el Catatumbo 297
4.2.1. Frente Héctor Julio Peinado Becerra..... 298
4.2.2. Frente Resistencia Motilona 306
4.2.3. Bloque Catatumbo..... 308
4.2.4. Por qué llegaron los paramilitares al Catatumbo.....314
4.3. Arremetida y consolidación paramilitar 318
4.3.1. Irrupción al bajo y medio Catatumbo 325
4.3.2. Expansión al alto Catatumbo 353
4.3.3 Establecimiento del control paramilitar..... 369
4.4. Control social y territorial 383
4.4.1. Tibú 383
4.4.2. Pueblo Barí 389
4.4.3. Sardinata 394
4.4.4. El Tarra..... 396
4.4.5. Teorama 398
4.4.6. Convención..... 399
4.4.7. San Calixto..... 401

4.4.8. La Playa de Belén 405
4.4.9. El Carmen 406
4.4.10. Ocaña 407
4.5. Afrontar y resistir la violencia paramilitar 410
4.5.1. Resistiendo el control paramilitar 410
4.5.2. Dignificación y trámite del dolor 412
4.5.3. El papel de los actores externos 414
4.6. Salida paramilitar 416

5. EL PASADO Y EL PRESENTE DE LA COCA 419
5.1. La inserción de la coca en el Catatumbo 421
5.1.1. La Gabarra: eso era oro puro 421
5.1.2. El alto Catatumbo: presencia tardía y re-territorialización 435
5.2. El cultivo y la raspa de la hoja de coca 444
5.3. Mercancía, compra e intermediación 456
5.4. Compleja interacción de los grupos armados con la coca 461
5.5. Paisajes envenenados: fumigas, erradicación y sus impactos 475
5.6. Movilizaciones cocaleras 491
5.7. Impactos de la coca en la tierra y en el cuerpo 500

6. PERSISTENCIAS, RECONFIGURACIONES Y DISPUTAS 507
6.1. Disputas por el control militar 509
6.1.1. Reacomodo de la fuerza pública 509
6.1.2. Breve recuento sobre ejecuciones extrajudiciales 517

6.1.3. Persistencia de las guerrillas 527

6.2. Mirada panorámica a los GAPD 549

6.2.1. Temprana presencia y expansión de los GAPD 550

6.2.2. Control de las rentas ilegales 559

6.3. Disputas por la tierra y los territorios 563

6.3.1. El cultivo de la palma 565

6.3.2. Disputas por el subsuelo: petróleo y carbón 577

6.4. Renace el Catatumbo 584

6.4.1. Las JAC: el corazón de la organización social 594

6.4.2. Un tejido de voces 596

7. REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 605

7.1. Atender las necesidades apremiantes de la gente 606

7.2. Reconocer y proteger las dinámicas organizativas 610

7.3. Desarmar estigmas y cerrar ciclos de violencia armada 614

7.4. Ampliar espacios de consulta, información y participación 618

7.5. Replantear las políticas frente a la coca 621

7.6. Verdad, reparación y no repetición 623

8. A MANERA DE EPÍLOGO. EN MEDIO DE UNA GUERRA QUE NO DA TREGUA: LA VIDA 627

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 633

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a todas las catatumberas y catatumberos por permitirnos escuchar su voz, sentir sus corazones y respirar sus sueños de cambio.

Agradecemos a todos los niños, niñas y jóvenes, a los maestros, a las mujeres, al Pueblo Barí, a las personas LGBT, a los campesinos, a los habitantes urbanos, a los líderes y lideresas, a los sacerdotes, a las personas mayores, a los funcionarios. A todas aquellas personas que nos permitieron conocer un pedacito de esta hermosa y diversa región y nos enseñaron tanto.

Deseamos que en las líneas de estas páginas vean plasmadas sus luchas y aspiraciones, sus batallas para enfrentar con entereza la vida y se sientan reconocidas y valoradas. Porque nosotros también soñamos, como ustedes, con un Catatumbo con dignidad y paz.

Equipo de investigación.

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El Catatumbo: "casa del trueno" en lengua Barí, es una región fronteriza con Venezuela, ubicada al norte de Norte de Santander, de la que en Colombia se ha escuchado poco. Al Catatumbo lo conforman los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa de Belén, El Tarra, Tibú y Sardinata, alberga los resguardos Motilón-Barí y Catalaura, donde habita el Pueblo Barí. Ocaña y Tibú funcionan como puertas de entrada a la región y son paso obligado para acceder a los demás municipios[1].

Estos municipios comparten rasgos socioculturales, históricos y ambientales que permiten comprender al Catatumbo como una misma región. Uno de ellos es el río del mismo nombre, que nace en el Cerro Jurisdicciones sobre los 3.500 msnm en el municipio de Ábrego, (de la unión de los ríos Oroque

1 En muchos casos se hará referencia al municipio de Ábrego que, aunque no hace parte del Catatumbo, ha compartido dinámicas similares a las de esta región.

y Frío, que cuando se juntan toman el nombre de río Algodonal y, una vez terminado su tránsito por Ocaña, adquiere el nombre de río Catatumbo) y desemboca en el Lago Maracaibo, en la República Bolivariana de Venezuela. En su cuenca recibe las aguas de los ríos Tarra, de Oro, San Miguel, Socuavo Sur, Socuavo Norte, Tibú, Sardinata, Nuevo Presidente, entre otros, y recibe también las aguas de cientos de quebradas.

La región del Catatumbo también comparte la existencia ancestral del Pueblo indígena Barí[2], de su población campesina, de olas de poblamiento y colonización, de procesos de movilización social y de la propia dinámica de la guerra[3]. Sin embargo, el Catatumbo también presenta matices subregionales. Por ello, las personas en la región hacen la distinción entre el bajo Catatumbo, que corresponde a los municipios de Tibú y Sardinata y que se caracterizan por tener tierras planas; el medio Catatumbo, que corresponde a los municipios de El Tarra y parte de Teorama (en particular los corregimientos de La Cecilia, El Aserrío, San Pablo); y el alto Catatumbo, la zona más montañosa de la región y que recoge la

2 En este informe se hará referencia al Pueblo indígena Barí o Pueblo Barí, acogiendo el concepto del convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales, y que es acogido por el Estado colombiano, y por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, del Ministerio del Interior, encargada de hacer registro de los pueblos indígenas en Colombia. Se hará referencia también a las comunidades Barí, en tanto lugares específicos de asentamiento de este pueblo indígena en su territorio. Así mismo, la noción de nación Barí será utilizada en apartados específicos, cuando los Barí hicieron énfasis en su uso, al reivindicarse como tal, ante eventos que los han vulnerado, como se observará en el apartado de cierre.

3 Lo ocurrido en el Catatumbo no sucedió de manera aislada y hace parte de fenómenos más amplios que abarcan todo el departamento y la zona de frontera, por ejemplo, las acciones reivindicativas con un carácter territorial mayor, como el Paro del Nororiente (que se dio en varios departamentos) o el accionar de grupos armados en una área de influencia mayor, como la actuación del Bloque Catatumbo en el Zulia, el área metropolitana de Cúcuta, Puerto Santander y los estados fronterizos en Venezuela. Así mismo, en diversas dinámicas sociales se dan importantes vínculos con los departamentos de Cesar (por ejemplo, en la organización y movilización social, y en el accionar de guerrillas y paramilitares) y Santander (entre otras con la actividad de los sindicatos petroleros y del movimiento cooperativo). Sin embargo, con esta investigación se ha querido relevar lo sucedido en el Catatumbo con sus particularidades, para responder a las exigencias de las víctimas y a la necesidad de aportar elementos en la comprensión de lo sucedido en todos los municipios de la región. Con ello se busca la dignificación y visibilización de las personas y comunidades catatumberas y de los aprendizajes que deja la memoria para la construcción de paz en este territorio.

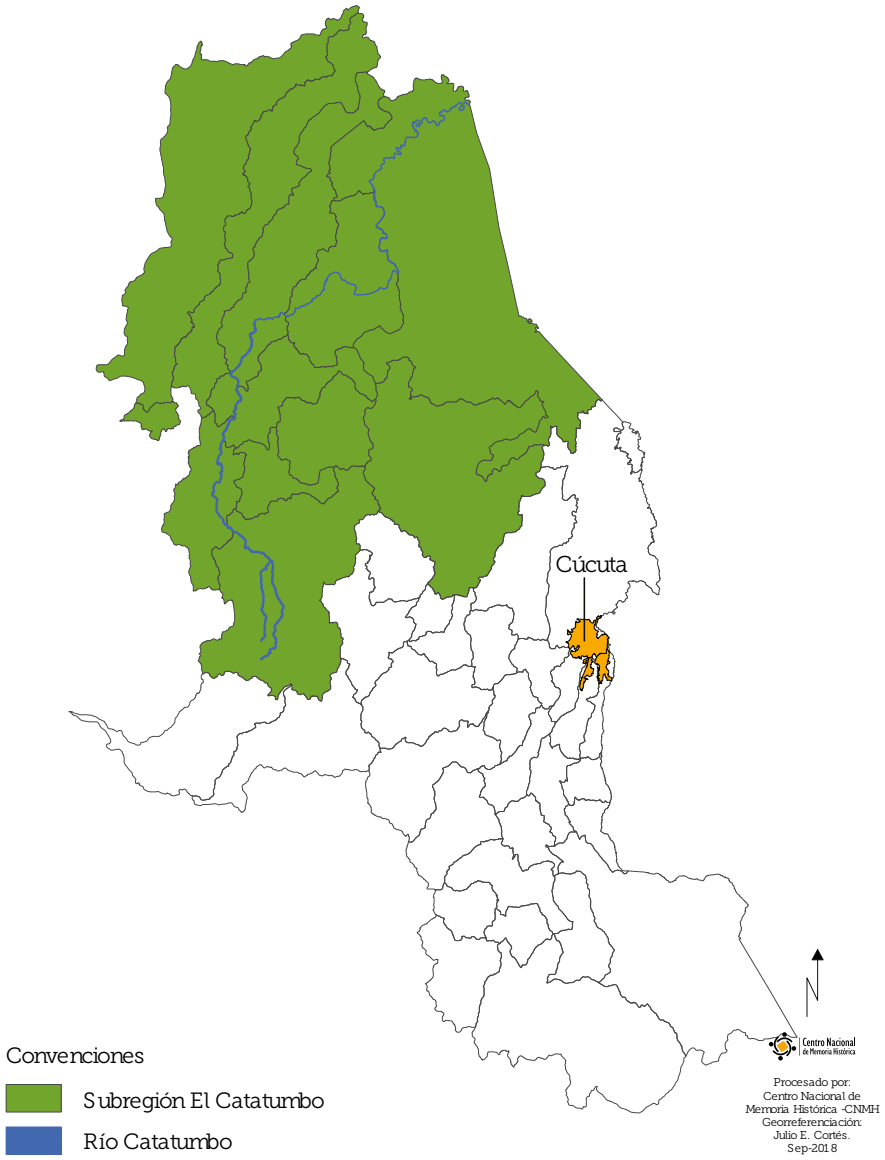
parte restante de Teorama (casco urbano y algunas veredas), Hacarí, San Calixto, La Playa, El Carmen, Convención y Ocaña[4].

Mapa 1. Norte de Santander en Colombia

Fuente: CNMH, 2018.

4 En ocasiones también se hará referencia a la Provincia de Ocaña, forma en que muchos catatumberos denominan a los municipios del alto y medio Catatumbo.

Mapa 2. Catatumbo en Norte de Santander



Fuente: CNMH, 2018.

Mapa 3. Región del Catatumbo y zonificación (Catatumbo bajo, medio y alto)

Fuente: CNMH, 2018.

Cómo surgió esta iniciativa y cómo se desarrolló

En tiempos recientes el Catatumbo se hizo visible a nivel nacional por la presencia y accionar del Bloque Catatumbo de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) entre 1999 y 2004. Esta estructura convirtió a Tibú y a El Tarra en referencia nacional por las masacres, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, violencia sexual y el amplio repertorio de modalidades o tipos de violencia que desató en este territorio.

Además, porque en 2004 se registró de manera amplia en los principales medios de comunicación la masacre cometida por las FARC contra *raspachines*[5] de La Gabarra, corregimiento del municipio de Tibú. Después las referencias se han ampliado y han relacionado a esta región con una fuerte presencia guerrillera, extensos cultivos de coca e intensas y nutridas movilizaciones campesinas, como la realizada en 2013 contra la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y por la creación de una ZRC (Zona de Reserva Campesina). Más reciente, en mayo de 2016, el expresidente Juan Manuel Santos aseguró que el Catatumbo "es una especie de Bronx a nivel nacional"[6], después de que fueran secuestrados y luego liberados tres periodistas.

Estos múltiples estigmas se han profundizado y ampliado a lo largo de la historia del Catatumbo y permanecen en la opinión pública, desconociendo, o mejor, con un conocimiento parcial de los aspectos que configuran esta compleja, diversa y rica región. Si bien en el Catatumbo

5 Recolectores de hoja de coca.

6 El Bronx es un sector adyacente a la plaza de Los Mártires en la ciudad de Bogotá. Se conformó como zona residencial y de comercio mayorista, pero se fue deteriorando y, tras el desmonte de la vecina calle de El Cartucho -lugar de expendio de drogas-, se convirtió en el principal centro de venta y consumo de estupefacientes en la capital. Por lo que ha sido estigmatizado, en especial por la élite bogotana.

se han vivido múltiples violencias, no es suficiente lo que se conoce de lo que ha ocurrido en el marco del conflicto armado y, sobre todo, de los innumerables procesos de movilización social, organización comunitaria y resistencias que han desarrollado sus pobladores para tener una mejor y más digna vida.

Por esto, la diócesis de Tibú y su Pastoral de Víctimas apalancaron un proceso de reconstrucción de memoria histórica sobre el conflicto armado, que visibilice al Catatumbo a nivel nacional, por un lado y, que produzca materiales útiles para las comunidades en la región, por el otro. Estos materiales se pensaron como instrumentos que sirvieran a catatumberas y catatumberos para: su autorreconocimiento, la difusión de su pasado, la reflexión sobre sus experiencias y aprendizajes como sociedad regional y la forma en que han enfrentado las dificultades, todo para proyectar de mejor manera su futuro.

Para dar forma a esta iniciativa a la que se sumó la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí Ñatubaiyibarí[7] y que, poco a poco, recibió el apoyo de una multiplicidad de organizaciones y entidades de la región, invitaron a participar al CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica), que ya había realizado ejercicios de reconstrucción de memoria histórica en el departamento, en particular los informes *Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú Catatumbo* (CNMH, 2015b) y *Hacer la Guerra y Matar la Política. Líderes políticos asesinados en Norte de Santander* (CNMH, 2014).

7 Para llevar a cabo este proceso de reconstrucción de memorias con el Pueblo Barí, el CNMH convocó, socializó y concertó con la máxima autoridad del resguardo Motilón-Barí, la asociación Ñatubaiyibarí que agrupa a 23 comunidades. Es preciso señalar que no se trabajó con el Cabildo Indígena de Karikachaboquira, organización que representa al Resguardo Catalaura-La Gabarra, y que agrupa a dos comunidades. Por tal razón, la información Barí contenida en este informe busca acercarse a la comprensión de afectaciones generales a que las han sido expuestos los Barí como pueblo, en especial, aquellas ocurridas en el periodo de llegada de las empresas petroleras, cuando aún no habían sido definidos los resguardos, tal y como hoy se conocen. La información de periodos posteriores consignada en este texto corresponde a lo ocurrido en el resguardo Motilón Barí.

Esta invitación coincidió con la demanda al CNMH de hacer memoria con enfoque territorial por parte de distintos sectores sociales, ejercicios que visibilizaran las formas en que el conflicto armado se ha desarrollado y ha impactado de manera diferente en cada región.

En este contexto nace el proyecto *Catatumbo: Memorias de vida y dignidad*, que se planteó dos metas, la primera, propiciar escenarios de encuentro, escucha y comprensión sobre los conflictos y resistencias vividos en el pasado reciente con personas de la región y, la segunda, subsanar la necesidad de que la sociedad colombiana conozca más sobre esta región, reconozca y aprecie a su población en función de su identidad y de su historia, sepa lo que han vivido en el marco del conflicto armado y cómo le han hecho frente. Además, se busca posicionar el reconocimiento de sus voces a nivel nacional, en la perspectiva de aportar en la construcción de paz territorial.

Que sea una investigación con sello regional implica además que no se abordará a profundidad un tipo de violencia específica (por ejemplo, masacres, violencia sexual o desplazamiento forzado), ni se desarrollará un hito de memoria de forma extensa y tampoco se centrará en el accionar de un actor armado particular o un tipo de víctima determinado. Lo que se busca con este informe es construir una mirada histórica, transversal y comprehensiva de lo sucedido en la región. Para poder cumplir con estos propósitos se concibieron cinco componentes.

El primero, el de comunicaciones, con el objetivo llegar a un público más amplio y con lenguajes más accesibles que no se basan en textos escritos y que incorporó una estrategia de sensibilización y difusión del proceso. Se consolidó con la elaboración de siete videos sobre la región y con la implementación de un espacio de formación en radio y fotografía con jóvenes, que tuvo como resultado la elaboración de ocho programas de radio y una muestra fotográfica. Este material nutrió un especial di-

gital (CNMH, 2017) y conformó la exposición itinerante *Ishtana Joven*, que transitó en 2017 y 2018 por Tibú, Cúcuta, Ocaña y El Tarra. Este componente fue apoyado por ProPaz (Programa de Apoyo a la Construcción de la Paz en Colombia) de la GIZ (Agencia Alemana de Cooperación Técnica) y fue llevado a cabo por los equipos de comunicaciones e investigación del CNMH y por la Pastoral de Víctimas de la diócesis de Tibú.

Taller de memoria con jóvenes en la Casa de la Cultura de El Tarra, 2016. Fotografía: María Fernanda Pérez Trujillo para el CNMH.

El segundo consistió en la realización de diálogos por la memoria con adolescentes y jóvenes, campesinos y docentes que buscó realzar la voz y comprender el aporte y la experiencia de estos perfiles sociales significativos, pero invisibilizados en la región.

El tercero fueron los escenarios públicos por la memoria, dentro de los que se desarrollaron el Foro Paramilitarismo y Violencia en el Catatumbo realizado el 10 de septiembre de 2016 en Tibú, impulsado por la diócesis de Tibú y la Pastoral de Víctimas, la MAPP/OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos) y el CNMH; y una exposición exhibida entre el 4 y el 10 de septiembre de 2017 en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y que contó con el apoyo de ProPaz de la GIZ, en el marco de la FLIC (Fiesta del Libro de Cúcuta).

El cuarto componente se centró en el proceso de reconstrucción de memoria ancestral del Pueblo Barí, desarrollado por Ñatubaiyibarí y apoyado por las áreas de enfoque étnico y comunicaciones del CNMH. En el marco de este convenio, se hicieron dos recorridos territoriales por zonas del resguardo Motilón Barí[8], durante los cuales se ubicaron bohíos ancestrales y lugares de caza y pesca y se buscó entender los daños que ha sufrido este pueblo indígena en su integridad y la de su territorio, lo que implicó no tener en consideración de manera exclusiva las afectaciones en el marco del conflicto armado, sino también aquellas producidas por las misiones religiosas, la explotación petrolera y la colonización campesina[9].

8 El primer recorrido fue desde La Gabarra (Tibú) hacia Caño Tomás y de ahí a las comunidades de Brubucanina, Obbabuda, Asarabarincaira, Chuacbarina y Sobacaira. El segundo por Bridikayra y Korronkayra.

9 Dados estos énfasis de memoria, la información relacionada con el conflicto armado y sus afectaciones (eje central de esta investigación) fue reducida, hecho evidente en la menor profundidad que se le otorga a la narrativa sobre este tema. La metodología de trabajo entre el CNMH y Ñatubaiyibarí se construyó en perspectiva diferencial y reconociendo que para construir sus memorias los Barí se basan en la tradición oral, en donde narran acontecimientos importantes sin mencionar meses y años, dado que su concepción del tiempo no es lineal. Así, si bien se incorporan referencias a lo que estaba sucediendo con los Barí en el territorio, la inclusión de esta información no se hace bajo una lógica cronológica y lineal en respeto a sus formas particulares de entender la vida, la muerte, el espacio y el tiempo y, en todo caso, responde al deber del CNMH de incorporar lo sucedido y realizado por este pueblo indígena, sin el cual no se podría entender ni narrar al Catatumbo.

El quinto componente: la investigación en memoria histórica tuvo como finalidad acercarse a la historia del Catatumbo a partir de las voces de sus habitantes, para identificar las distintas violencias que han vivido, por qué se han dado, cómo se han materializado, de qué manera han impactado a la región y cómo las y los catatumberos les han hecho frente.

Una de las apuestas de este componente fue apelar a la pluralidad de voces que habitan la región, con énfasis en las vivencias, interpretaciones y sentidos que las personas ponen a lo sucedido y, desde una perspectiva diferencial, entender que el conflicto ha afectado de manera diferente a mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos y mayores, al Pueblo Barí y a personas LGBT, entre otros.

Además de acopiar los relatos sobre el conflicto, se tuvo siempre presente la necesidad de realzar las memorias de las luchas y las resistencias, como mecanismos de dignificación y reconocimiento de las víctimas y comunidades y como forma integral de comprender la región.

El equipo de investigación consideró que la manera más dignificante y responsable de llevar a cabo esta tarea, era caminar la región y conversar con sus habitantes. Por ello, este informe se basa en lo que narraron las personas del Catatumbo, sus relatos y comprensiones de lo sucedido. Para acercarse a estas memorias el equipo recorrió el territorio, realizó diversos talleres colectivos y entrevistas.

El trabajo de campo se llevó a cabo durante 2016 y el primer semestre de 2017, fueron 17 los talleres colectivos de construcción de memoria,

nueve de estos fueron territoriales[10], seis sectoriales[11], dos por tipo de violencia[12] y se realizaron 196 entrevistas[13]. Además de recorrer el territorio del Catatumbo[14] se visitó la frontera del lado venezolano[15] para acceder a las distintas miradas sobre la región. Se realizaron recorridos por lugares del horror[16] del municipio de Tibú, dos grupos focales con representantes de Ñatubaiyibarí, dos grupos focales con Ascamcat (Asociación Campesina del Catatumbo) y uno con habitantes del municipio de El Carmen. Distintos municipios de la región fueron visitados para acopiar material fotográfico y documental. Una vez estuvo escrita la pri-

10 La metodología de los talleres territoriales, es decir, aquellos dedicados a reconstruir la historia de un municipio en particular, abordó dos herramientas de trabajo, la primera, la línea de tiempo, con la que se buscó identificar y ordenar los acontecimientos cronológicos y, la segunda, la cartografía social realizada por periodos históricos, con la que se ubicaron lugares específicos relacionados con la vida diaria, el conflicto y las resistencias de los habitantes de la región durante este tiempo particular y, por esta vía, explorar las transformaciones del territorio por causa del conflicto armado y establecer lugares significativos de memoria. Estos se realizaron en Campo Dos - Tibú, San Martín de Loba - Sardinata, Luis Vero - Sardinata, Las Mercedes - Sardinata, casco urbano de El Tarra, de Teorama, de Hacarí, de San Calixto, de Convención y de El Carmen. A estos talleres fueron invitadas personas de las zonas urbanas y rurales y se conformaron grupos que incluyeran hombres, mujeres, jóvenes y mayores.

11 Mujeres, sacerdotes de la Diócesis de Tibú, personas de sectores LGBT, adolescentes y jóvenes, docentes y personeros. Además, del Conversatorio "Escenarios de memoria: aportes de diversos actores y territorios para la construcción de paz", realizado por el CNMH y la Trigésima Brigada del Ejército Nacional en Cúcuta, en julio de 2016.

12 Con personas víctimas de violencia sexual y con mujeres víctimas de desplazamiento forzado.

13 A víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, habitantes de la región, *raspachines*, sindicalistas, líderes sociales, dirigentes de movimientos políticos, exiliados, artistas, defensores de derechos humanos, funcionarios, expertos, líderes comunales y personas de La Playa y Ocaña (municipios donde no se hicieron ejercicios territoriales).

14 En Tibú: Punto La Balera, caserío La Llana, río San Miguel, vereda Ambato, caserío Petrólea, caserío Campo Tres, puente Socuavo, caserío El Mirador, vereda Caño Indio, caserío Vetas Central, casco urbano La Gabarra, río Catatumbo, caserío Km. 60. En El Carmen: casco urbano y parque principal, cementerio. En Ocaña: barrio Brisas del Polaco.

15 Se visitaron los caseríos de Casigüa El Cubo y Santa Bárbara en el Estado Zulia, y El Vigía en el Estado Mérida.

16 Los lugares del horror son sitios donde ocurrieron hechos violentos en el marco del conflicto armado y la violencia socio política y, por tanto, están atados a experiencias de dolor, por lo cual tienen un peso simbólico que los dota de significado y de sentido. En general, estos lugares son un referente fundamental para los habitantes de la zona.

mera versión del informe, se propiciaron cuatro escenarios de encuentro en la región para presentar los principales hallazgos y recibir aportes y recomendaciones[17].

El trabajo se complementó con información secundaria de diversas fuentes: sentencias de Justicia y Paz y de la Corte Constitucional, Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y otras fuentes oficiales, documentos provenientes del archivo de la diócesis de Tibú, medios de comunicación locales y nacionales, documentos académicos e históricos, informes de organizaciones de defensa de los derechos humanos, de gremios, de la MAPP/OEA, de Naciones Unidas y de organizaciones sociales regionales, entre otros.

Se tuvo acceso a los archivos de la Asociación Minga, organización a la que se agradece su disposición y colaboración permanentes en este proyecto[18]. Así mismo se agradece al Cisca (Comité de Integración Social del Catatumbo), Ascamcat, Asociación de Personeros del Catatumbo y a la Defensoría del Pueblo, por su valiosa participación en aspectos relevantes.

Para la información cuantitativa se contó con los datos del OMC (Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH)[19], a información de Onu-

17 En Ocaña con representantes institucionales y con víctimas del alto y medio Catatumbo, en Tibú con víctimas, representantes institucionales, indígenas Barí y la Diócesis de Tibú, y dos en Cúcuta, uno con víctimas de Cúcuta y Sardinata, el otro con representantes de instituciones y agencias internacionales.

18 La Asociación Minga es una organización pionera en el Catatumbo en el trabajo de defensa de los derechos humanos y de acompañamiento a las comunidades desde que se fundó, en 1991.

19 El OMC del CNMH tiene como objetivo la documentación de los hechos de violencia en el marco del conflicto armado en Colombia, ocurridos entre 1958 y la actualidad. Para la presente investigación, las cifras del OMC fueron construidas a partir de información de organizaciones sociales tales como la Asociación Minga, el Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular), la Corporación Reiniciar y Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado). De instituciones oficiales como la Fiscalía General de la Nación, el Observatorio de Paz de la Vicepresidencia de la República, la Uariv y las Sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, se utilizaron

dc (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga) y de la Uariv (Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas), entre otras.

Como resultado se tiene un abanico de productos de investigación: este informe, su resumen ilustrado, seis relatos temáticos (centrados en experiencias de mujeres; niñas, niños y adolescentes, campesinado, personas LGBT, docentes y Pueblo Barí) y un mapa con lugares significativos para la memoria sobre el conflicto armado en la región, con representaciones sobre las transformaciones que la violencia le ha impreso al territorio y con las rupturas que produjo en las relaciones de las comunidades y el territorio.

Hacer memoria en el Catatumbo

Para el CNMH ha sido enriquecedora y valiosa esta experiencia de trabajo con las y los catatumberos y ha sido una oportunidad para advertir, como entidad oficial, el valor de un ejercicio que las comunidades han venido reclamando hace décadas. Por un lado, una mayor presencia del Estado referida a prestación de servicios básicos como salud, educación, vías y condiciones propicias para el sector agropecuario, porque las personas allí quieren, como lo mencionó una mujer en Ocaña, "exigirle al Gobierno y decirle: sacúdase hermano que allá hay una situación bien brava, es abandono total" (CNMH, taller con mujeres, Ocaña, 2016). Por otro, que esta presencia sea respetuosa, dialogada y concertada con la población del

fuentes primarias como el periódico La Opinión. La integración de distintas fuentes de información obliga a la depuración permanente de los casos para evitar duplicidades, al tiempo que se presenta en un escenario de subregistro de información, producto de información fragmentada de las fuentes consultadas. Es por ello por lo que los datos suministrados por el OMC están en constante actualización. Así, el lector podrá observar distintas fechas de corte en los datos cuantitativos y gráficas presentados, lo que corresponde al tipo de reportes que el sistema de información del OMC arrojó para las solicitudes realizadas.

Catatumbo, evitando la imposición de proyectos y modelos de vida que no reconocen formas de existencia y aspiraciones de las poblaciones locales.

La comunidad percibe la presencia estatal con su cara militar o antinarcóticos, en forma de militarización, fumigaciones o erradicaciones forzadas de los cultivos de coca. Reclama que con la presencia de otras instituciones, por ejemplo, con las responsables del cumplimiento y satisfacción de los derechos de las víctimas, no se generen actuaciones que -en ocasiones- terminan revictimizando a sus habitantes. Esto genera desgaste en las comunidades, cansadas de contar su historia una y otra vez a distintas instituciones sin que se vean transformaciones concretas y de largo plazo en el territorio. Transformaciones efectivas, capaces de romper los círculos de pobreza y violencia.

Cuando se indagó a la comunidad por la utilidad de hacer memoria histórica y para qué, las respuestas fueron positivas y se nutrieron de distintos sentidos y apreciaciones sobre el proceso de recordar. En su conjunto resaltaron, como lo enfatizó un líder social en Ocaña, que se tiene la obligación de mostrar que en el Catatumbo pasó "algo gravísimo que no debe volver a pasar y de la enorme importancia que tiene para que los hechos no se repitan, para aprender de la historia" (CNMH, entrevista, hombre líder social, Ocaña, 2017). Así mismo, una mujer de Campo Dos (Tibú) mencionó que hacer memoria es importante para "darles ejemplo a los jóvenes, para que ellos no sigan ese camino de violencia, porque hay muchos jóvenes que cargan un fusil" (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016), pero además en términos de responsabilidades, resaltaron que el Estado debe ser el garante en la prevención y protección de la seguridad y derechos de las comunidades.

Reconocieron que "la identidad de los pueblos se construye a través de la memoria" y que "la memoria permite crear un sentido común de las cosas, crea conciencia colectiva" (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016) y, en

esta vía, se reivindicó que estos ejercicios les permiten a las y los catatumberos reconocerse en el otro, ser conscientes de que los demás vivieron experiencias similares y despertar empatía. La misma que debe tejerse entre las personas de la región, pero también con aquellas de afuera para vencer la indiferencia. Ello redundaría en que, como fue referido por varias mujeres, "el Catatumbo se meta en el corazón de los colombianos", para que los demás "sientan algo" por lo que ha ocurrido en la región y aporten "a que esta vaina cambie" (CNMH, taller con mujeres, Ocaña, 2016).

Y aunque hacer memoria es un proceso difícil y doloroso para las víctimas pues, como lo relató un tibuyano, "para algunos trae angustia, como que el cielo se nos cae y nos aplasta" y que conlleva el revivir los sentimientos asociados a los eventos traumáticos de la violencia, también es un proceso que permite "hacer conciencia de lo que pasa para construir nuestra propia sanación" (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016). Porque recordar es sensibilizarse y sensibilizar a los demás y permite abrir una puerta para renovarse y renacer, después de que se tiene otra oportunidad. Además, como lo dijo una mujer de Campo Dos, porque del pasado "se puede obtener elementos para reconstruir comunidades" (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016), para corregir lo que se hizo mal y, en esta perspectiva, la memoria permite proyectar y construir un futuro mejor.

Hacer memoria es para muchos en la región la oportunidad para propiciar una actitud autorreflexiva y una ocasión para preguntarse "¿yo en qué tuve la culpa?", como lo hizo una mujer tibuyana. También para debatir sobre cómo las actuaciones individuales permitieron la comisión de un daño y las razones para que lo que pasó, sucediera. Al mismo tiempo y de manera reiterada, revela la posibilidad de "que nosotros mismos somos la fuerza para cambiar eso" (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

Es también un escenario que permite hacer un reconocimiento y un homenaje a las víctimas. Reconocimiento que va más allá del mero re-

cuerdo de las que ya no están, es que "se nos tenga en cuenta", frase que, aunque la dijo una mujer en Ocaña, fue repetida en todos los talleres colectivos. Y que se les tenga en cuenta significa que las entidades del Estado conozcan la situación y, como también fue resaltado en varios ejercicios colectivos, "puedan traer soluciones al campo", que se reconozca que las y los catatumberos pueden y quieren "ser parte de la solución", quieren ser "constructores de paz", tienen voz y propuestas y conocen más que nadie su región.

Significa que conociendo la historia de lo sucedido se derriben los estigmas asociados a la gente que habita la región y no se repita que "el Catatumbo es el Bronx", o que "Teorama no era Teorama sino *Terrorama*", como lo refirió enojado un hombre de este municipio (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016). Este tipo de afirmaciones genera gran indignación entre la gente y alimenta sus sentimientos de distancia entre las instituciones del Gobierno central y las regiones.

Con este transitar y compartir se busca dignificar y visibilizar a las víctimas y comunidades de esta región en sus resueltos esfuerzos por construir, por existir con equidad y dignidad. Mueve la esperanza de aportar a echar abajo los estigmas que recaen sobre las y los catatumberos y que perpetúan los ciclos de violencia. Se aspira a contribuir a la construcción de la paz en el territorio, a visibilizar y exigir a las entidades del Estado que cumplan con su papel de garantes de los derechos de los ciudadanos.

Reflexiones preliminares

Como resultado de las conversaciones con personas de distintos sitios de la región, se observa que en sus relatos surgen tres tensiones que permiten entender lo que ha ocurrido en la región:

El Catatumbo es rico en recursos naturales. Allí desde hace un siglo se extrae petróleo, tiene tierras fértiles, es rico en agua, fauna y maderas y, por la diversidad de sus pisos térmicos, produce variedad de cultivos. Es sobre todo una región de profunda raigambre campesina, con una población que tiene fuertes vínculos con su territorio, los cuales han sido construidos poco a poco y durante varias décadas. Esta población es laboriosa, sabe y le gusta cultivar el campo, conoce y exige sus derechos y construye propuestas de autonomía con gran diversidad y riqueza.

A su vez, el Catatumbo está marcado por la marginalidad y la pobreza. Son altos los índices de necesidades básicas insatisfechas en todos sus municipios, más marcados para su población rural; no cuenta con vías adecuadas para el tránsito de personas y para la comercialización de los productos agrícolas; son insuficientes los centros de salud, las escuelas, los docentes, las opciones laborales y las condiciones propicias para el buen vivir de quienes habitan la región.

Esta realidad genera una tensión para los pobladores, quienes perciben una persistente contradicción entre la abundancia y riqueza de su territorio y una profunda y sostenida precariedad y escasez en la que se han visto sumergidos históricamente. Como lo refirió un habitante de la zona "el Catatumbo está nadando sobre un pozo de petróleo desde toda la vida y ese petróleo está sirviendo es de miseria para la gente. Las regalías del petróleo que el Catatumbo recibe son miserias, son limosnas y no han podido jamás terminar una carretera de Tibú a La Gabarra, entonces ¿qué se ha hecho con la riqueza?" (CNMH, entrevista, hombre movimiento cívico, Cúcuta, 2016).

Esta marginalidad se debe a la débil presencia del Estado y los insuficientes recursos invertidos en suplir las necesidades más sentidas de los pobladores. De hecho, la explicación más extendida que dan las y los catatumberos al conflicto armado está ligada a lo que denominan la "au-

sencia del Estado", que se refiere a la poca presencia institucional -en su mayoría limitada al accionar de la fuerza pública, relacionada con excesos y represión, o a una presencia interesada en explotar o proteger la explotación de los recursos naturales- y que, en todo caso, no resuelve las grandes carencias de sus gentes.

Frente a esto las comunidades han optado desde los inicios del poblamiento y la colonización de la región y hasta la actualidad por formas alternativas para exigir y enfrentar las precarias condiciones en las que han vivido, que para los años treinta inició y en adelante continuó con el sindicato de trabajadores petroleros; en los años sesenta consistió en desarrollar procesos de organización comunitaria a través de las JAC (Juntas de Acción Comunal) y que, para los años setenta y ochenta, se habían desarrollado en una apuesta más estructurada de producción, transformación y comercialización de productos, por medio de una red de JAC, tiendas comunitarias y cooperativas, a las que en los años noventa se sumaron las Asojuntas (Asociaciones de Juntas), los movimientos políticos, los movimientos cívico populares, otros sindicatos, las opciones de Gobierno local que propició la elección popular de alcaldes y Asocbarí (Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia).

Así se fortaleció en el Catatumbo una organización social regional que ha sido fuerte frente al Estado departamental y nacional y que continúa con procesos contundentes de reclamación a través de movilizaciones y propuestas, entre las que se encuentran la creación de una ZRC, de Territorios Campesinos Agroalimentarios y de la ampliación de los resguardos indígenas a una zona denominada por los Barí como "la línea negra", es decir, el área en la que se encontraban ubicados los bohíos ancestrales del Pueblo Barí y, por tanto, territorio que se encuentran reclamando. Esto ha generado una tensión entre el marginamiento y la ausencia del Estado (o su presencia militar) y las apuestas por la autonomía que las comunidades del Catatumbo han desplega-

do durante décadas, desencadenando enfrentamientos con el Estado y múltiples ciclos de violencia.

La tercera tensión se centra en los estigmas. La percepción y en consecuencia la acción del Estado sobre la población de la región se ha validado en torno a diversos estigmas a lo largo de la historia. Inició con la caracterización de los Barí como pueblo de "salvajes", continuó con el señalamiento de los primeros sindicalistas de la empresa petrolera como comunistas, percibiéndolos como revoltosos y peligrosos, estigma que en años posteriores se tradujo en la acusación de ser guerrilleros o terroristas. La estigmatización se generalizó y extendió luego a líderes y lideresas cívicos y comunales, dirigentes políticos y a la población, así como a cualquier forma de expresión organizada de su gente.

Así, los habitantes de la región han vivido bajo el señalamiento de ser guerrilleros, *paracos*, peligrosos, cocaleros o narcotraficantes. Esta multiplicidad de estigmas construidos alrededor de las y los catatumberos y de la región ha justificado las más graves violencias y en la actualidad alimenta la perpetuación de los conflictos. Frente a lo que las y los catatumberos levantan su voz y reclaman dignidad. Dicen que no son lo que dicen que son y se redefinen como personas buenas, del campo, trabajadoras y honestas, que se han dedicado a buscar salidas para prosperar.

Hitos de la memoria sobre violencias y resistencias

Como ya se mencionó, con este proyecto de memoria histórica se busca conocer y comprender cómo se han dado el conflicto armado y las resistencias en el Catatumbo, desde la perspectiva de interpretación y

sentido de su población. Con esa hoja de ruta se inició el diálogo con habitantes de la región, se indagó sobre el inicio del conflicto, su desarrollo y las formas de resistencia desplegadas por sus comunidades.

Sin embargo, las respuestas empezaron a llevar a una primera comprensión. Las violencias y resistencias vividas en el Catatumbo no se encuadran en exclusivo en la categoría de conflicto armado, marco de análisis de la investigación. La mayoría identificó la llegada de las empresas petroleras como un primer hito de violencia, a partir del cual se desencadenó una desgarradora persecución a sangre y fuego contra el Pueblo Barí, la que produjo la drástica disminución de su población y la pérdida sustancial de su territorio ancestral. Sin embargo, al hablar directamente con los Barí, fueron aún más atrás en el tiempo, ubicaron como primer hito de violencia la llegada de conquistadores españoles, lo que marcó el comienzo de sucesivos periodos de violencia en contra de su pueblo.

De esta manera se identificaron los primeros hitos de violencia que para los habitantes de esta región del país son definitivos para entender los inicios de los conflictos del presente. Además, a través de sus relatos y memorias se hizo evidente que las comunidades del Catatumbo han construido múltiples y variados procesos de resistencia y organización que, empezaron mucho antes de la llegada de los primeros actores armados a la zona, hacen parte integral de la construcción de la región que habitan y que, paradójicamente, su despliegue y fortalecimiento, desencadenaron respuestas violentas enmarcadas -estas sí- en el conflicto armado y la violencia sociopolítica.

Las y los catatumberos subrayaron un elemento que ha sido significativo en el incremento de los conflictos en la región, el cultivo de la hoja de coca. Sin embargo, aunque reconocen que alrededor de esta planta giran actividades y actores económicos ilegales y que ha traído importantes perjuicios a la región, manifiestan con igual contundencia que es la

opción más estable y segura que tienen para generar ingresos, en un contexto de falta de condiciones para la subsistencia y que hay que desviar la mirada de su relación con el narcotráfico para redirigirla hacia una perspectiva de reconocimiento y garantía de sus derechos como ciudadanos.

Así pues, las conversaciones sobre memoria histórica empezaron a girar no solo en torno al accionar de guerrillas, paramilitares y fuerza pública, sino que involucraron un conjunto de tópicos que ampliaron la perspectiva prevista para la investigación. Por estas consideraciones, la estructura de este informe no está hilada solo en función de los actores armados que han hecho presencia en el territorio, ni tampoco en un riguroso orden cronológico, aunque, para entenderlos, este subyace en la narrativa de los acontecimientos. Se ha optado entonces por una presentación por hitos (de violencias, resistencias, tópicos significativos) que fueron enfatizados con mayor frecuencia por las y los catatumberos consultados en los recorridos por su territorio.

En consecuencia, el capítulo 1 recoge, en primer lugar, los énfasis de memoria que fueron priorizados por los Barí en el proceso de construcción de su memoria ancestral, elementos de su cosmogonía, ley de origen, sus lugares sagrados y algunos aspectos claves de su cultura.

Luego, la narración se hila en torno a las primeras violencias que como pueblo enfrentaron, la llegada de los españoles, el arribo de las empresas petroleras norteamericanas y las misiones religiosas. Sin embargo, pese a que este primer apartado se centra en el Pueblo Barí, no se puede desconocer que, durante el periodo abordado, por la presencia de las empresas petroleras y su necesidad de infraestructura, al territorio llegaron otros pobladores que fueron parte estructurante de la región: colonos y trabajadores petroleros a quienes se dedicarán algunas referencias (Otro hito de memoria fue la violencia bipartidista. Recordada como “la guerra de los colores” en parte de la región, fue vivida de forma “muy violenta” en

el Catatumbo, en especial, la masacre del 16 de noviembre de 1949 en El Carmen -bastión del liberalismo en una región con predominio conservador-. Se recuerda que "la policía chulavita" ejecutó a 46 personas, generando el desplazamiento de decenas de personas).

El capítulo 2 caracteriza, para los años sesenta, setenta y ochenta, la marginalidad de los habitantes ya asentados de la región, provenientes en buena medida de la colonización petrolera y consolidados como población campesina, así como sus procesos de organización comunitaria y autogestionaria. En este marco se aborda el surgimiento y consolidación de formas de organización en principio campesinas, como las JAC, las tiendas comunitarias y las cooperativas, a las que se sumaron expresiones sindicales, movimientos cívicos y movimientos políticos de izquierda. Estos sectores organizados optaron por las movilizaciones sociales y la participación política para la exigencia de derechos ante el Estado y lograr una mayor incidencia en la toma de decisiones sobre su territorio.

Estas acciones, aunque les significaron reconocimiento regional y nacional y algunos logros en términos de mejoras en la prestación de servicios básicos, produjeron un escenario de represión y guerra sucia, en la que fueron responsables algunos agentes de Estado y "escuadrones de la muerte".

En el capítulo 3 se analiza la llegada, asentamiento y dominio armado de tres guerrillas, el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el EPL (Ejército Popular de Liberación) y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La presencia guerrillera estableció no solo la primera relación de cercanía permanente de las y los catatumberos con un grupo armado, sino que marcó a esta región como "zona roja", lo que produjo la estigmatización creciente y particulares formas de violencia en el marco de la estrategia contrainsurgente. En este capítulo se aborda la compren-

sión que tienen habitantes del Catatumbo sobre la llegada, accionar y dominio guerrillero entre la década de los setenta y la del noventa.

Para ello, más que describir los repertorios de cada uno de los grupos insurgentes, se narran los sentidos construidos en la región sobre las guerrillas. Así, de una primera percepción relacionada con legitimidad, en especial durante los primeros años, se pasa a perderla, dada la consolidación de un orden militar con frecuentes acciones de mayor contundencia bélica como las tomas a poblados y la destrucción de bienes públicos, asesinatos selectivos, secuestros, extorsión y el control de la vida cotidiana, entre otras. La presencia de este actor armado en la región origina el estigma sobre la población catatumbera como guerrillera, marca que se instaló en los imaginarios de la sociedad nacional, con consecuencias sobre la vida y la seguridad de las personas.

El capítulo 4 recoge lo que para los habitantes del Catatumbo ha sido la violencia de mayor impacto y devastación en su región, aquella producida por los paramilitares. Así, en el texto se presentan la caracterización de las tres estructuras paramilitares que coparon el territorio y cómo se dio su llegada, expansión y consolidación en los diferentes municipios de la región. Se hace un recuento de lo que los pobladores denominan la "arremetida paramilitar" y sus características en el Catatumbo bajo en 1999 y, luego, en 2002, su expansión por los municipios del alto Catatumbo. Después se describen por municipio, los hechos que caracterizaron la toma de control territorial por parte de este actor armado y las formas de hacerles frente y resistir la agresión y humillación.

El capítulo 5 está dedicado al cultivo de la hoja de coca y sus violencias, dado el vínculo con los actores armados y la fuerte estigmatización sobre una población sospechosa de narcotráfico. Sin embargo, para las y los catatumberos la coca tiene otros significados. Se le asigna un sentido de continuidad en la relación del campesino con la tierra, es decir,

la perciben como un cultivo como cualquier otro, pero que crece más rápido, pagan mejor y cuenta con más facilidades de comercialización. La opción laboral más extendida en la región. Se abordan las condiciones que hicieron posible su llegada al bajo y medio Catatumbo y las características diferentes que adoptó en el alto Catatumbo. Se muestra cómo se desarrolla esta actividad, sus múltiples efectos en la región y las políticas antinarcóticos promovidas por el Gobierno central, causantes de múltiples tensiones y rechazo entre los pobladores.

En el capítulo 6 se abordan el ajuste y accionar de las guerrillas y la posterior llegada de los grupos posdesmovilización después de la desmovilización paramilitar, las nuevas formas en que ha operado la fuerza pública en una región que sigue siendo considerada guerrillera y las formas en que las y los catatumberos siguen organizándose y movilizándose por las condiciones de marginalidad persistentes.

En los dos apartados de cierre se presentan algunas reflexiones sobre la continuidad del conflicto armado en la región y los riesgos que enfrenta la población en la actualidad, la persistente debilidad en la presencia del Estado y algunas recomendaciones que surgen de las lecciones que deja la memoria en este recorrido por la historia del Catatumbo, en función de hacer posible y viable la construcción de la paz duradera en este territorio.

Representación simbólica de la región del Catatumbo. Diálogo de jóvenes, Cúcuta, 2017. Fotografía: Camilo Ara para el CNMH.

1.

PRIMEROS HITOS DE MEMORIA DEL CONFLICTO

En el Catatumbo, la casa del trueno, muchas personas se sienten identificadas con cuatro referentes que definen las características e historia de su territorio: los indígenas Barí y su presencia ancestral en un territorio que era mucho mayor al que en la actualidad tienen; la identidad campesina de su gente; el conflicto armado que ha estado allí por décadas y el auge del cultivo de la coca. Esta percepción también la tienen hoy los jóvenes, tal y como lo refleja la ilustración elaborada durante un encuentro juvenil en Cúcuta y que da apertura a este capítulo.

Al profundizar en las comprensiones que las personas en esta región tienen sobre el conflicto, se identificó que muchos catatumberos no ubican como

primer hito de violencia la llegada de los grupos guerrilleros, como lo habría mostrado una línea de tiempo centrada en el conflicto armado[20]. Aún más, un importante porcentaje identificó que el conflicto en el Catatumbo arranca a inicios del siglo XX, con la llegada de empresas petroleras norteamericanas que comienzan la exploración y explotación de este recurso. Lo que produjo en el Pueblo Barí un arrinconamiento espacial, la pérdida de gran parte de su territorio ancestral y una disminución significativa de su población, debido al grado de violencia de la que fueron objeto en el marco de la política extractivista.

Sin embargo, cuando se indaga a los Barí se remiten mucho más atrás en el tiempo, ubican la llegada de los españoles como primera referencia de violencia en contra de su pueblo, para ese momento, única población habitante de ese territorio.

Para narrar las múltiples violencias ocurridas en este rincón del país, es imprescindible entender a sus primeros habitantes, el Pueblo Barí. Se busca comprender la forma distinta y distintiva bajo la cual este grupo humano concibe y apropia el territorio y la profunda conexión que tiene con la vida y con la naturaleza. Esta entrada permite no solo entender aspectos de su cosmogonía, de su comprensión del mundo y algunos elementos relevantes de su cultura, sino los impactos o afectaciones que las distintas violencias les produjeron a partir de la llegada de los españoles y en adelante, en una aproximación a los conflictos de larga duración.

Así pues, se inicia este recorrido por el Catatumbo a partir del abordaje de algunas características de este pueblo indígena, con el relato de su origen como pueblo y de la identificación de las bases simbólicas que

20 Conflicto Armado No Internacional, según la definición que proporciona el DIH (Derecho Internacional Humanitario). Si el análisis se ajustara a este concepto, se quedarían por fuera eventos que son considerados generadores de profundas violencias en el territorio y que, en consecuencia, se han incorporado a este informe.

han sostenido su identidad. Luego, una aproximación a las violencias iniciales con énfasis en i) la llegada de los españoles y sus repercusiones, ii) el establecimiento de la industria petrolera en la región, en especial en el bajo y medio Catatumbo y, iii) el papel de las misiones religiosas[21].

Vale reiterar que la industria petrolera y la construcción de la infraestructura significó una ola de colonización que pobló y dio forma a los primeros asentamientos, en especial los que se configuran hoy como los municipios de Tibú, El Tarra (y en menor medida Convención). Esta nueva mano de obra se vinculó laboralmente a las empresas petroleras, escenario en el que surge la primera forma de organización social en la región[22], el sindicato y, con él, las primeras acciones colectivas de exigencia por mejores condiciones de vida y de trabajo. Este escenario dibuja lo que fue una constante en la historia de la región: la construcción de los estigmas en torno a la población catatumbera y, como consecuencia, la ejecución de variados tipos de violencia.

Además, se puede observar lo que para los indígenas ha significado, desde la temprana época del siglo XX, la histórica forma en que el Estado no ha sido garante de la autonomía territorial, política, económica y espiritual de los pobladores de esta región, más bien, ha favorecido proyectos que van en contra de sus intereses, como se hace evidente en la tensión entre este pueblo indígena y las empresas petroleras, lo que se profundizó unas décadas más tarde y que permanece en la actualidad.

21 El CNMH acompañó un proceso de recuperación de su memoria ancestral a Ñatubaiyibarí, representante de las comunidades del resguardo Motilón Barí. Los apartados a continuación han sido elaborados con base en estos documentos y en la información surgida en las entrevistas realizadas a miembros de este resguardo. Es así como la narración referida a este pueblo indígena presenta los énfasis puestos por Ñatubaiyibarí, dado el interés de privilegiar su voz, lo que va en correspondencia con el Decreto Ley de Víctimas No. 4633 de 2011, en particular, sus artículos 121, 122 y 123, sobre los derechos a la verdad, a la justicia y las garantías de no repetición de los pueblos indígenas y al mandato del CNMH en este mismo sentido.

22 O segunda, si se tiene en cuenta la forma de organización y Gobierno propio de los Barí.

1.1.
Los Barí: sus mundos y coloridos

"Al principio todo era oscuridad, no existía nada, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas en el cielo. No existía nada conocido. Cuando llegó el Barí nació el día, la noche y el territorio. Porque el Barí antes no dormía, peregrinaba de sur a norte, de occidente a oriente"

(Ñatubaiyibarí, 2017b).

Niña Barí pescando. Fotografía: Camilo Ara para el CNMH. Cortesía de Ñatubaiyibarí, 2016.

El Barí es un pueblo indígena binacional, asentando históricamente en un territorio que abarca zonas de lo que en la actualidad son Colombia y Venezuela[23]. En Colombia ocuparon grandes extensiones de tierra que comprendían la gran cuenca del río Catatumbo y la serranía del Perijá, en lo que hoy se conoce como el departamento del Cesar, los valles de Pamplonita, el Zulia y Cúcuta. En Venezuela estuvieron en una región que llegaba hasta el lago Maracaibo, cubriendo zonas de los estados Zulia y Barinas.

Antes del siglo XX los Barí vivían de manera seminómada, lo que les permitía conservar y proteger la selva, manteniendo su equilibrio y el de los lugares sagrados de caza y pesca y de las plantas utilizadas para la recitación del secreto, su medicina curativa[24]. Con el tránsito permanente por su territorio evitaban además que otros indígenas intentaran asentarse en estas zonas. Para finales del siglo XIX, los caminos -lugares sagrados- eran:

- Ocaña-Convención
- Convención-Hacarí
- Hacarí-Teorama
- Teorama-San Calixto
- Ocaña-Pamplona-Cúcuta-Zulia-Tibú
- Tibú-La Gabarra-La Pista Río de Oro
- Tibú-El Tarra
- El Tarra-El Aserrío
- El Aserrío-San Pablo
- San Pablo-Convención

23 Dado que son un mismo pueblo, las comunidades Barí de Colombia y Venezuela realizan permanentemente intercambios culturales en ambos países, en los cuales practican sus actividades tradicionales en conjunto. Por ser un pueblo indígena binacional, los Barí pueden trasladarse a uno u otro lado de la frontera sin requerir permisos especiales.

24 La medicina tradicional ha sido practicada por los Sadou (ancianos sabios) por generaciones para proteger a su pueblo de las enfermedades.

También iniciaron las actuales rutas veredales de Cartagenita, Miraflores, La Unión, La Trinidad, Güasiles, Honduras y Santa Fe en el municipio de Convención. Y, aunque se habían vivido olas de colonización y ocupación antes de 1930[25], la región permaneció más o menos aislada hasta los años cincuenta y sesenta cuando se acentuó la colonización producida por la violencia bipartidista y por la consolidación de la industria petrolera. En estas dos décadas sus caminos fueron retomados por los colonos y las empresas petroleras y se constituyeron en las actuales vías y a las que se sumaron otras en el territorio, de acuerdo con la necesidad de los nuevos actores.

Con la entrada masiva de nuevos pobladores, los Barí optaron por el sedentarismo, como estrategia para proteger el territorio al que fueron confinados, lo hicieron para resguardar sus bohíos, lugares sagrados aún existentes, su identidad cultural y su pervivencia como pueblo.

Se constituyeron los resguardos sobre las resoluciones entregadas a los Barí desde los años sesenta, el Catalaura-La Gabarra en 1981 con la ayuda de las monjas Lauritas, con trece mil hectáreas y el Motilón Barí en 1988 con el apoyo de Bruce Olson[26], con 108 mil hectáreas que abarcan zonas de los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, Tibú y El Tarra, lo que representó la posibilidad legal de delimitar el territorio que aún conservaban, obtener títulos de propiedad comunitaria y regirse por

25 Entre 1530 y 1662 se dieron incursiones expedicionarias y la fundación de los primeros poblados; entre 1662 y 1772 se acentuó la guerra por la invasión producida por los españoles; entre 1772 y 1818 las comunidades religiosas se internaron y entablaron contacto con los Barí, a partir de 1930 se inició la exploración y explotación petrolera (Aponte, 2012, página 369).

26 Representantes de Ñatubaiyibarí relataron que le tienen gran estima a Bruce Olson, noruego que llegó a su comunidad en 1961, y que es considerado como uno de sus líderes, entre otras cosas por su labor para lograr el reconocimiento de los derechos territoriales del Pueblo Barí, y en la posterior delimitación de los resguardos.

una organización ajustada a sus usos, costumbres, formas de Gobierno, pautas y tradiciones culturales[27].

En la actualidad existen 25 comunidades en los dos resguardos, 23 en el Motilón Barí y dos en el Catalaura-La Gabarra. En 2003 se llevó a cabo el último censo[28] que determinó la población indígena en 3.129 indígenas Barí distribuidos en 417 familias (1.081 en el Carmen, 734 en Convención, 619 en Teorama, 663 en Tibú y 42 en El Tarra). Las 25 comunidades se encuentran distribuidas en estos cinco municipios de la siguiente manera[29]:

27 Los resguardos se constituyeron respondiendo a la necesidad de garantizar un área para este pueblo indígena, ya que las colonizaciones petroleras y campesinas, en especial, las de las décadas del cincuenta al setenta del siglo XX amenazaron con expropiar los últimos y pocos espacios habitados por ellos. Se pensó que con esta figura se facilitaría el reconocimiento de sus derechos territoriales -sustentados en su posesión ancestral-, pero esto no ha sido suficiente, como se verá en este informe, pues la declaración de las tierras resguardadas no les ha garantizado el ejercicio pleno de su territorialidad.

28 Con el apoyo de Corponor (Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental) y de Ecopetrol.

29 La población aproximada del pueblo Barí en Venezuela es de 3.749 indígenas que hacen parte de 805 grupos familiares distribuidos en trece comunidades ubicadas en la Sierra de Perijá: cuatro comunidades (Bokshi, Karañakae, Saimadoyi y Bachichida) en las que viven alrededor de 265 grupos familiares con una población aproximada mil indígenas, y que están ubicadas en los municipios Machiques de Perijá y Jesús María Semprún; y nueve comunidades (Arutatakaee, Girogdoubari, BakugBarí, Kumandá, Lugdudari, Asogbayi, Senkai, Audoubari, La Campiña), en las que viven 540 grupos familiares con una población de 2.759 personas, ubicadas en la parte baja de la Sierra de Perijá, entre las parroquias Río Negro del municipio Machiques de Perijá y la parroquia Barí del municipio Jesús María Semprún (Asociación Civil Perijá, 2011).

Tabla 1. Distribución de las comunidades Barí

Resguardo	Municipio	Comunidades
Resguardo Motilón Barí	El Carmen	Iquiacarora, Ayatuina, Phatuina, Corroncayra, Aractobarí, Axdosarira, Ichirrindacayra, Yocaira y Boysobi
	Convención	Caxbaríncayra, Batroctrora, Saphadana y Bridycaira
	Teorama	Asacbaríncaya, Brubucanina, Ocbabura, Suerera, Yera, Sacacdu y Shubacbarína
	El Tarra	Irocobincayra
	Tibú	Beboquira, Isthoda
Resguardo Catalaura - La Gabarra	Tibú	Caricachaboquira, Bacuboquira

Fuente: CNMH, elaboración propia, 2018.

Los Barí están organizados en comunidades alrededor de bohíos, encabezadas por un cacique o Ñatubai, que coordina las acciones de subsistencia del grupo como la cacería, la pesca y el trabajo agrícola, o las actividades comunitarias y culturales. Los caciques conforman la actual Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí Ñatubaiyibarí[30], que se propuso entablar diálogos directos con el Gobierno y luego una relación con ONG (Organizaciones no Gubernamentales) nacionales y organismos internacionales, entre otros[31].

30 Esta asociación de autoridades tradicionales se llamó en periodos anteriores Asocbarí y posteriormente Asopbarí.

31 Para conocer más sobre la organización del pueblo Barí, remítase a la cartilla Somos Barí: hijos ancestrales del Catatumbo. Voces y memorias del Pueblo Barí, dentro de la serie de relatos temáticos que acompañan este informe.

Ejercicio de cartografía social sobre su territorio. Resguardo Motilón Barí. Fotografía: Camilo Ara para el CNMH. Cortesía de Ñatubaiyibarí, 2016.

La zona que habitan los Barí es montañosa, salpicada de pequeños valles y cruzada por múltiples caños y ríos. La selva, aunque es espesa, presenta claros naturales en donde establecen sus asentamientos. Los Barí rigen su vida por los ciclos de la naturaleza, ancestralmente han seguido los ciclos de la luna para sembrar sus cultivos tradicionales (piña, plátano, ñame, fique y yuca). Durante los periodos de verano realizan actividades de caza y pesca, o el festival del canto y de flecha. Practican deportes de fuerza o de destreza como lucha, carreras, maratones y competiciones de resistencia en el agua.

1.1.1.
Los Barí y la ley de origen

> Cuando todo era oscuro y no había en la tierra sol, agua, árboles, peces, fuego, ni gente alguna, solo existían piñas y pequeños arbustos, donde se encontraban Sabaseba y sus acompañantes.
> Pasaba el tiempo y todo seguía oscuro. Entonces Sabaseba vio la necesidad de organizar la vida y poblar la Ishtana.
>
> Pensamiento Barí

Los Barí mantienen una fuerte vinculación con la memoria de sus ancestros que siguen vivos en sus relatos que transmiten a través de la oralidad a los Barí más jóvenes. Se fundamentan en el mito que les dio vida como pueblo y que con orgullo consideran su *ley de origen,* uno de los cimientos fundamentales de su cultura y pensamiento propio.

Los Barí piensan que antes de ellos existía un mundo que se encontraba en caos y en plena oscuridad y que, Sabaseba, su dios y padre creador propició el ordenamiento de la Ishtana (el territorio) y permitió el nacimiento de sus gentes:

> Sabaseba se encontraba ordenando el mundo, aplanando las montañas, creando más seres como animales y plantas. Se sentía muy cansado, sudado con el trabajo realizado. Sintió hambre y sed, pues llevaba mucho tiempo sin comer ni beber nada.
>
> Fue en busca de algo para comer y calmar la sed y se encontró con algunas piñas. Cogió una madura, la abrió por la mitad y le aparecieron un hombre y una mujer Barí adultos. Al abrir una segunda piña le apareció otra pareja Barí igual a la anterior. Al abrir una tercera piña muy pequeña encontró un hombre solo sin mujer.

> Al abrir la cuarta piña (que también era pequeña) se encontró una mujer, quien formó pareja con el anterior.
>
> Por último, encuentra una piña de color morado y en ella halló a los Ichikbarí[32]. Sabaseba siguió con sed e insistía en comer piña y vio unas que estaban muy maduras, que no más con tocarlas se levantaban las parejas y ellas se fueron separando y formaron el Pueblo Barí. Él no pudo tomar agua pues nunca encontró una piña vacía.
>
> Al ver el número de personas que había creado, sintió alegría y se le acabó la sed y el hambre. Se sintió muy feliz con la creación y les dio como consejo la alegría, por eso el Barí siempre es alegre. De ahí surge el gran Pueblo Barí, quienes construyeron un gran bohío para vivir en él. Sabaseba nos sigue acompañando en los trabajos y actividades (Ñatubaiyibarí, 2017b, página 7).

Sabaseba es el creador, el gran maestro y consejero. Sus enseñanzas definen el modelo de comportamiento: "él nos guía, nos acompaña, nos orienta y nos enseña en el caminar de la vida. Es el que se hizo Barí, el que organizó el trabajo, sufrió, tuvo sed, organizó la tierra y todo lo que hay en ella y nos aconsejó. Él quiere a los Barí y nos entregó todo (la naturaleza, los animales, las plantas) para mantener el equilibrio y la armonía dentro del territorio" (Ñatubaiyibarí, 2017b, página 4).

Antes de partir, Sabaseba dio una serie de consejos a su pueblo para que viva en unidad y sus gentes sigan siendo alegres y dulces como lo fueron desde de la primera piña. Estos consejos hacen parte de su tradición oral y los mayores, depositarios de la sabiduría transmitida por Sabaseba, lo transmiten a las nuevas generaciones:

- Trabajar, cazar y pescar en comunidad

32 Espíritus enviados por Sabaseba para proteger a los Barí.

- Vivir en comunidad en el bohío
- Dar consejos, especialmente los mayores sabios o Sadou
- Enseñar el trabajo de la tierra, la caza, la pesca y la construcción del bohío
- Mantener la alegría como la piña madura
- Mantener el respeto en los trabajos de los hombres y de las mujeres
- Respetar a los Sadoyi[33]
- Cuidar y proteger la naturaleza
- Respetar a los Sadou
- No olvidar los consejos de los Sadou
- Practicar la medicina tradicional
- Elaborar las artesanías

Siguiendo estos consejos los Barí han intentado vivir en armonía con la naturaleza, guiados por Sabaseba y por los espíritus protectores. Al irse Sabaseba depositó su pensamiento en los ancianos hombres y mujeres por la que son considerados sabios. Los ancianos son los responsables de dirigir las actividades de pesca, caza, trabajo, guerra, limpieza de caminos, cuidado de la tierra y de transmitir las enseñanzas a la comunidad.

1.1.2. La Ishtana: vida, ancestros, historia de lucha

Para los Barí, además de la ley de origen, es fundamental en su pensamiento ancestral, la referencia a la Ishtana que es la tierra con la que inicia el cosmos. A Ishtana pertenecen hombres, mujeres, animales y todos los seres de la selva.

33 La palabra Sadoyi es otra manera de nombrar a los sabios.

La Ishtana. Vereda Mirador, en la vía que conduce de Tibú a La Gabarra desde donde se observa el Cerro Tres Tetas. Fotografía: Camilo Ara, para CNMH, 2016.

La Ishtana fue dejada por Sabaseba a los Barí con todas sus riquezas. Para corresponderle, deben cuidar los animales, las plantas, la tierra, mantener el trabajo en comunidad y mejorar su entorno. En el Plan de Vida Barí se afirma que "El Territorio es el origen del hoy, la construcción del mañana. Es la otra mitad del Barí, es la vida, el reflejo de los ancestros, es la historia de una lucha, es leyenda viva. Eso lo saben los jóvenes y lo retienen con su cuerpo, con su razón, con sus sueños, con su memoria" (Ñatubaiyibarí, 2017b). En el territorio se encuentran los espíritus de la naturaleza, del río, la selva, los lagos y las nacientes:

> Son formas de estar ahí que el hombre no indígena no percibe, pero que nosotros necesitamos porque son quienes nos brindan protección, nos cuidan nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Son muchos seres espirituales que se encuentran en el aire, en el

> agua y en la tierra, todos ellos son bariras[34] que sufren desplazamientos constantes por la violación de nuestros territorios. Cada vez es más difícil conservar los lazos que nos amarran, que nos mantienen unidos (Ñatubaiyibarí, 2016b).

Ishtana es la vida y el medio natural, es el conjunto de conocimientos, usos y costumbres que los Barí han construido desde épocas milenarias y que deben conservarse para pervivir en la selva. Es el saber que tienen, en torno a cómo se puede lograr la armonía con la naturaleza, y a reconocer la cooperación y mutua dependencia entre las formas de vida que coexisten.

Ishtana es mucho más que las hectáreas de tierra que los Barí habitan, transitan y cultivan. Es parte estructurante de su identidad como pueblo indígena; parte esencial de su pensamiento cultural, mágico y simbólico. Los Barí no se entienden sin territorio. Atesoran en su memoria las luchas de sus ancestros o Saymadoyi por conservarlo, para mantenerse unidos como pueblo. Sin el territorio y sin su relación con él no es posible garantizar su pervivencia cultural, pues es en la Ishtana donde se dinamizan los elementos sustanciales de su organización social, fundamento de su integridad y autodesarrollo. La Ishtana alberga los lugares sagrados donde se transmite su sabiduría ancestral y se hace posible mantener una estrecha relación con los abuelos y sus ancestros.

1.1.3. Lugares sagrados

Los bohíos, los caminos y cementerios ancestrales y los lugares de caza y pesca son sagrados para los Barí. Escenarios que guardan el co-

34 El término barira hace referencia a varios Barí.

nocimiento ancestral de su pueblo: "Son lugares muy importantes para nosotros porque en ellos habitan espíritus que merecen respeto. En ellos se enseña la historia propia y el debido comportamiento" (Ñatubaiyiarí, 2017a, página 20).

Los bohíos son los que en la actualidad tienen una mayor carga simbólica, pues son sitios de conocimiento y de presencia de los espíritus y permiten su vínculo ancestral. Marcan además el extenso territorio que han venido perdiendo con el paso del tiempo. El bohío o casa comunal es su asentamiento tradicional y tiene otra conexión importante con su mito de origen, pues su estructura ovalada representa la forma de las piñas, origen de su pueblo.

> Al ver nuestros bohíos pueden notar la diferencia entre una vivienda individual occidental y nuestra vivienda colectiva, símbolo Barí de nuestra unidad y armonía entre todos. Nuestra identidad siempre ha estado viva y queremos que así permanezca. Por eso nuestra labor es transmitir la enseñanza de nuestros ancestros a nuestros hijos y nietos, del mismo modo en que fuimos enseñados (CNMH, entrevista, sabio Barí, Resguardo Motilón Barí, 2017).

Los bohíos que fueron destruidos o abandonados "aún nos acompañan porque han quedado guardados en la memoria del territorio, éste guarda sus voces, por eso nuestro territorio siempre nos está susurrando, hablando, porque son nuestros ancestros acompañándonos, aconsejándonos" (Ñatubaiyibarí, 2016a, página 15). En la antigüedad el establecimiento de un bohío significaba el dominio de una porción de selva que brindaba los medios para obtener alimentos y recursos vitales como el agua. Hoy en día sigue siendo vital:

> En un bohío puede haber entre 200 y 300 personas. Eso implica construir una vida, para nosotros eso es familia, es unión, ahí todo se sabe, si alguien dice: va ir a pescar, entonces ya sabe el cacique

> de pesca que el otro va a ir a pescar, el que va a ir a cazar. Eso para nosotros y para los abuelos en aquella época era muy importante (CNMH, entrevista, líder Barí, Resguardo Motilón Barí, 2016).

Un sabio mayor relató sus memorias en torno al que fue uno de los bohíos más importante ya desaparecido:

> Estamos parados en unos de los bohíos más antiguos de la época de la conquista de los españoles (Ishtankaira). En este bohío habitaban dos mil personas. Por acá se miraba muchas cosas de artesanías y canto Barí. Aquí se hacía el Festival del Canto y de la Flecha. Los caciques más reconocidos eran Abaichimba y Bisandou. Estos bohíos estaban asentados en todas las planicies de las mesetas. Los Barí salían a pescar por Teshicana o Shricbannican donde era abundante la pesca, allí había mucho pescado. El cacique Abaichimba era el de más arriba, ellos practicaban mucho la espiritualidad ancestral. Incluso existían sabios que tenían grupos de jóvenes para enseñarles, además conocían y practicaban mucho el secreto [la medicina ancestral]. La piel de los Barí era oscura. En ese bohío hacía frío por la altura. Cuando las personas de estos bohíos participaban en una de las festividades e invitaban a otras comunidades, ellos les enseñaban los conocimientos que consideraban que eran necesarios para ese bohío. No competían en las carreras. Si venían, competían los otros Barí de diferentes comunidades. Pescaban sin necesidad de tener un chuzo, cazaban. Igual eran buenos en todo, pero ellos sí cantaban, los cantos la mayor parte era agradecerle a Sabaseba y los espíritus de la naturaleza (Ñatubaiyibarí, 2016b página 15).

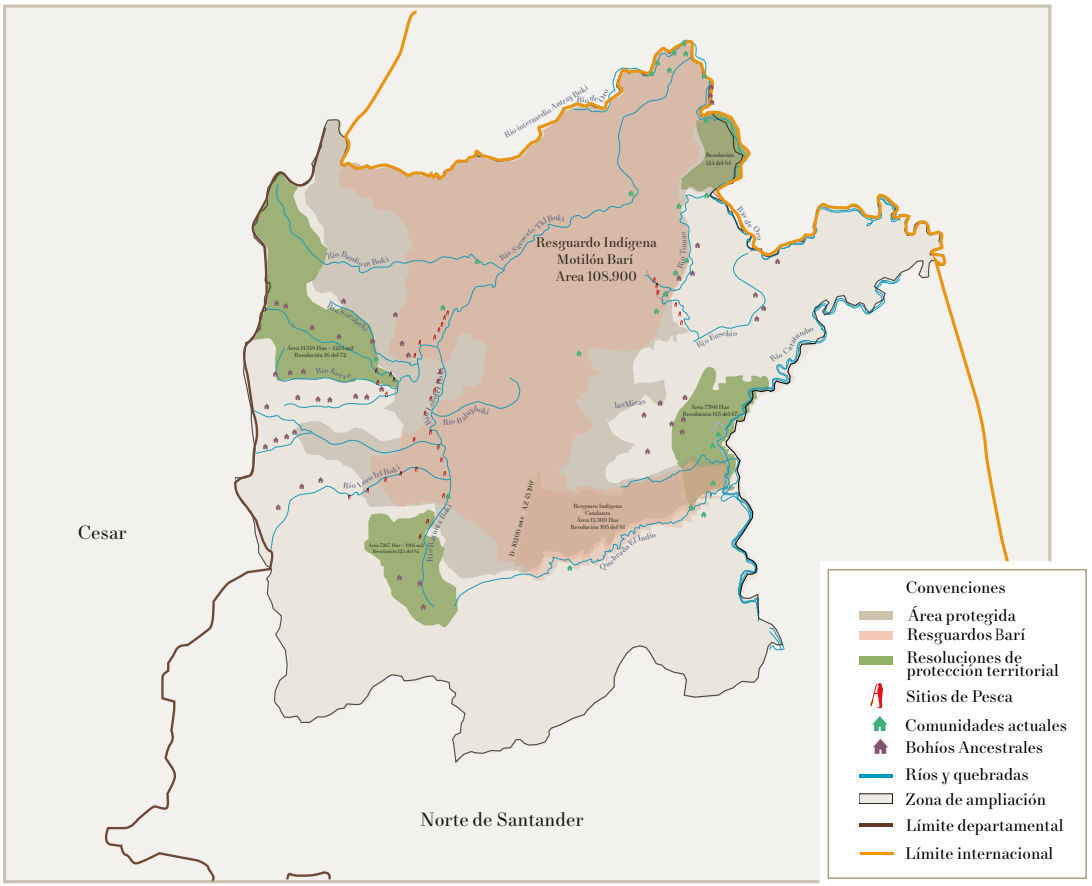
Principal bohío de Bridicayra en la actualidad. Fotografía: Camilo Ara para CNMH, 2016. Cortesía de Ñatubaiyibarí.

Antes de que llegaran los llamados civilizados, se encontraban muchos bohíos en diferentes partes del territorio. En la parte alta del Catatumbo se encontraban los bohíos de Nochidasakaic, Asankaic, Kochidansakaic en la vereda Santafé (Convención); Octruackaic, Baicquiakaic, Bogotankaic, en la vereda La Bogotana (El Carmen); Bashinshikaic en la vereda Playas Ricas (El Carmen); Sacbakaic, Verrekaic, Nacsarorunkaic (en Aguas Claras, el Carmen); y Acbarínkaic en la vereda La Florida (El Carmen).

Otros bohíos también fueron desaparecidos en los municipios de Tibú y El Tarra, como el Neckaducay (donde queda actualmente el Acueducto Municipal), Buyyocbacay (en una finca en Campo Yuca), Axdobaríncayra (en la actual casa Barí de Ñatubaiyibarí), Dabacbaríngcay (en Bertrania), Caryccancay (en donde está la torre parabólica del barrio El Bosque), Sa-

gcrakdakayccay (Alcabala número 1, conocido como La Uno, saliendo de Tibú hacia Cúcuta), Igdaynancay (en las instalaciones de Ecopetrol), Canshiak Oru (vía al Tarra) y Shricbancay (en Vetas, vía La Gabarra) y Shinma Ckany (en el casco urbano El Tarra).

Mapa 4. Bohíos ancestrales del pueblo Barí



Fuente: CNMH, elaborado por Ana Cuervo para el Museo Nacional de la Memoria, 2017. Cortesía de Ñatubaiyibarí.

Otros sitios sagrados para los Barí han sido los lugares de pesca. Los mayores identificaron los siguientes: Octribarín-kay, Aricbaybarín-kay, Barín-Barín-kay, Ducubokyi (en el río San Miguel), Daran o Dabokyi (en el río Catatumbo), Abruncay, Ychucdandobim, Kairacyobin, Dababio Aca, Abironocshada, Baicyinsraaka y Shrirocdobonnickan. Los sitios de desove de peces también son considerados sagrados, por lo cual es prohibido realizar allí actividades de pesca. Algunos de ellos son Totocgbaric-can, yayaric-can, YIdchugdari-can (Pozo Dormido).

Luego de las olas de colonización e invasión de su territorio, en especial, después del "último y definitivo contacto con la cultura occidental" que representó la llegada de las petroleras, se dio el derrumbe, la tragedia o el "etnocidio más significativo de este pueblo indígena" (Ñatubaiyibarí, 2017a). No solo se dio un proceso de exterminio físico contra este pueblo ancestral, sino un arrinconamiento de sus comunidades a un territorio mucho más reducido que el originario, la destrucción o abandono forzado de sus bohíos y otros lugares sagrados y un significativo empobrecimiento ambiental. Todo lo que afectó de manera significativa los conocimientos y las prácticas tradicionales de las comunidades, generando un sentimiento de desarraigo territorial y, en consecuencia, el abandono físico -no espiritual- de sus lugares sagrados. Estos han sido procesos acumulativos que se enmarcan en lo que los Barí comprenden como las guerras que han enfrentado.

1.2. Las guerras de los Barí

Los Barí han transitado por múltiples procesos de cambios profundos en su vida como pueblo indígena. Los más destacados son: los procesos

de colonización, pacificación y evangelización; los auges extractivos y la expansión del sistema de economía de mercado en su territorio[35].

Aunque la palabra guerra o violencia no existe en lengua Barí, hay expresiones que se acercan, como la ira o la rabia. Pese a muchos imaginarios que existen en Norte de Santander en torno a este pueblo indígena[36], los Barí no se describen a sí mismos como agresivos o violentos, por el contrario, explican que para evitar la ira y la rabia llevan a cabo acciones como seleccionar con cuidado los alimentos que consumen:

> Nosotros los Barí nos educamos para no ser personas violentas (que no tengan rabia, ni ira). No podemos comer todas las partes de los animales (...) Hay una dieta especial que debemos cumplir. Hay unas prohibiciones de no comer ciertos alimentos que generan rabia, ira, ser agresivo. Comer ciertas partes de los animales en la edad que no corresponde, como la cabeza, el hígado y las vísceras hace que la persona sea violenta. Cuando son pequeños sólo pueden comer extremidades del cuerpo de los animales. La cabeza y las vísceras se comen luego de los cuarenta años de edad, así sea las de los pescados (...). Sí se comen alimentos que están prohibidos, en los jóvenes se producen celos, envidia y rabia y esto produce violencia interior y entre la gente (Ñatubaiyibarí, 2017a, página 3).

Y aunque no son un pueblo violento, sí se consideran hábiles guerreros, porque han buscado proteger y mantener control sobre su territorio y formas de vida propia, ante lo que consideran una agresión o alguna imposición violenta externa, primero con la flecha y luego a través de la palabra. Así son reconocido por otros habitantes del Catatumbo. Un do-

35 Más reciente, la presencia de grupos guerrilleros, los cultivos de uso ilícito, el accionar de paramilitares, las fumigaciones en el marco del Plan Colombia y todavía más reciente, la firma del acuerdo de paz entre Gobierno nacional y las FARC.

36 Muchas personas en el departamento suelen describir incluso hoy a los Barí como violentos, agresivos y salvajes, estigmas que les han valido agresiones y el desconocimiento de su historia e identidad como pueblo indígena.

cente en Ocaña explicó que "Barí significa gente defensora, gente cuidadora, gente guerrera pero no en ataque sino en defensa de su territorio" (CNMH, entrevista, hombre docente, Ocaña, 2016).

Los Barí explican que la guerra "es la forma que tienen de defenderse cuando alguien viene a invadir su territorio" (CNMH, grupo focal 1 Barí, Tibú, 2016). No usan la palabra guerra, sino guerrero y recalcan que en épocas pasadas las personas se formaban para ser guerreros, se les enseñaba a combatir para defender su territorio y para cuidarse entre ellos. Los guerreros eran personas valoradas dentro de su pueblo por ser protectores de la comunidad y porque estaban acompañados por los espíritus. Ser guerrero era un honor.

Para los Barí, existen dos tipos de guerras, las que llevaban a cabo contra otros pueblos indígenas y aquellas que les han significado el exterminio como pueblo. Así, aunque hubo enfrentamientos contra los U'wa y los Yukpas, fue a partir de la llegada de los conquistadores que comenzaron a vivir el exterminio.

Y cuando se indagan las razones, expresan: "Esta situación del conflicto [se] suscita solamente con dos términos, se llama tenencia de tierras y el tema de sacar hidrocarburos en el Catatumbo, no hay otra discusión, son esas dos razones" (CNMH, entrevista, líder Barí, Resguardo Motilón Barí, 2016).

1.2.1. Primera violencia contra la Ishtana y los barira

El primer referente de las guerras que han enfrentado, caracterizado por los Barí en su Plan de Vida, se remonta a la llegada de "los intrusos

venidos por el mar", conflicto aún vigente en su memoria colectiva como pueblo y en sus relatos, gracias a su rica tradición oral, con la cual han transmitido de generación en generación los sucesos del pasado por el profundo respeto con que viven su ancestralidad:

> Antiguamente nuestra Nación[37] estaba poblada por muchas tribus indígenas, que hablaban lenguas diferentes, pero permanecían unidas por el mismo espíritu. En este territorio prevalecía entonces la más perfecta armonía. Así fue por muchos siglos, hasta el funesto día en que intrusos venidos por el mar impusieron a los legítimos pobladores el atropello a la dignidad y la negación total de los derechos. A nosotros los Barí nos llegaban rumores persistentes: ¡dolor y lágrimas sembraban estos seres a su paso! Todos los informes coincidían en describir derramamientos de sangre, violación de mujeres, enfermedades, desgracias y esclavitud (Ñatubaiyibarí, 2017b, página 8).

Los guerreros Barí se defendieron de los U'wa y de los Yukpas, dado que los Barí eran mejores guerreros, los Yukpas terminaron retirándose hacia la Sierra del Perijá. Luego en la invasión de los españoles y posterior con la llegada de las empresas petroleras. Las armas utilizadas fueron solo el arco y la flecha, en esta labor eran guiados por los Barí de ojos limpios:

> Antes se luchaba y aún se lucha por la defensa del territorio con los otros grupos de indígenas, como los Yukpas o la gente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Así se mantenía el dominio territorial. Después de unos años, los Barí de ojos limpios avisaron a los caciques, líderes y comunidades que venía gente por el río grande, que habían llegado a las orillas del río infinito o el mar llamado Sabokyi

37 Los Barí se reconocen como una de las primeras naciones existentes en territorio de lo que es actualmente Colombia.

> o Oatrendre bokyi[38]. Los Barí se prepararon durante varias lunas para saber qué quería esta gente nueva que había llegado (Ñatubai-yibarí, 2016a).

La llegada de los rabadora (los blancos invasores)[39] es la primera referencia violenta de los Barí en contra de su pueblo. La razón que aducen los indígenas para que se gestara esta violencia inicial fue la riqueza del territorio, vigente en los conflictos actuales.

> Ahí [en todo el territorio ancestral] estábamos nosotros, que es el pueblo Barí, pero resulta que como ahí había mucha riqueza, llegaron los españoles primero ¿a qué? a matarnos, a abrir carreteras, *a encontrar las riquezas que hay en nuestro mundo y todavía nos siguen molestando*. Y ahí viene la violencia. Los Barí miraron que mataban a los paisanos, entonces ahí se armó la guerra (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017).

La primera avanzada contra los Barí la emprendió Ambrosio Alfinger hacia 1530, luego de fundar la actual ciudad de Maracaibo en Venezuela y de realizar expediciones de conquista hacia el interior del continente (Salazar, 2005). El enfrentamiento es relatado por ellos:

> Pasó algún tiempo de expectativa y suspenso, hasta que un día llegaron nuestros vigilantes sin aliento. Para la tribu Barí el momento crucial había llegado ¡nuestra selva estaba siendo invadida! Todo lo que éramos quedaba, a partir de entonces, en manos de nuestros guerreros. Lo que nuestros antepasados vieron les heló la sangre. Los forasteros eran más altos que tres hombres juntos,

38 Hace referencia a los ríos Zulia y Catatumbo.

39 El término rabadora hace referencia a varias personas blancas, el término nabadó hace alusión a una sola. Los Barí los usan para referirse tanto a la entrada de los españoles, como para hablar de los colonos y hoy para las personas no Barí que llegan o habitan en los municipios donde los indígenas tienen presencia.

tenían cuatro patas y medio cuerpo brillante como el resplandor de la luna, ¡pero lo más aterrador eran sus bocas!

Los Barí los persiguieron por varias lunas, era fácil seguir el rastro, puesto que solo tenían que perseguir el penetrante hedor a rancio de quienes no usaban el agua para lavarse, sino solo para beber. Pero se detuvieron para acampar y entonces nuestros bravos guerreros les dieron flechas. Sorprendentemente en vez de caer heridos nuestra excelente puntería hacía que sus monstruosos cuerpos se partieran en dos y usaban cuatro patas o solo dos, la mitad de aquel horrible ser salía corriendo.

Matar no ha sido el oficio de un Barí, pero en aquella ocasión no tuvieron descanso hasta que los últimos invasores ya no se movían, ¡fue un acto de valor muy grande! Más tarde se acercaron cautelosamente, solo para llevarse otra sorpresa más pasmosa, el trozo de cuatro patas estaba completo, ¡si era un animal!, pero tan sumamente extraño... distintos a cuantas bestias habían observado los Barí hasta entonces en la selva.

Quitaron luego cuidadosamente la cáscara al pedazo resplandeciente y duro que quedó también tendido. Debajo encontraron hombres, pero estos seres humanos no eran bellos como el Barí, tenían el rostro cubierto de pelos, su cabellera era desteñida y frágil y la piel muy pálida. Les llamaron "corrorrona", que en idioma Barí significa "hombres de lata". Con el correr del tiempo nos enteramos de que ese día nuestros antepasados habían matado a un tal Ambrocio Alfinger, quien había salido de Tamalameque llevando consigo un cargamento de oro, para despachar a Europa desde Maracaibo. La fundación de los primeros poblados como Pamplona en 1549 y *el descubrimiento de sus minas de oro en 1559 atrajeron la atención de encomenderos, mineros y comerciantes sobre la zona y provocaron nuevos enfrentamientos*, al pretender establecer una ruta que uniera a Pamplona con el sur del lago Maracaibo por el

> río Zulia, atravesando territorio Barí. Pero a la llegada de los invasores "españoles" sucedía en la zona una presión demográfica por una tribu de habla caribe, los Yukpas – provenientes de Guayana-, que entran al territorio por el denominado corredor del Orinoco, presentándose masivas guerras en la lucha por el territorio, entre las dos tribus. Por esos mismos años, los Barí comenzaron a ser presionados por los colonos cultivadores y negociadores de cacao, que los obligaban a adentrarse cada vez más en la selva y a dejar tierras a su dominio (Ñatubaiyibarí, 2017b, página 8).

Así se refuerza la idea de que las riquezas del Catatumbo y sus tierras son la razón principal para explicar las causas de esta primera violencia, en este caso, las minas de oro y la posibilidad de hacerse a terrenos para implementar el cultivo del cacao, lo que generaba presión sobre territorio indígena y su posterior pérdida, debido a los procesos de poblamiento, deforestación y a las actividades económicas de los nuevos pobladores.

Entre 1622 y 1772 los conquistadores españoles avanzaron en busca de oro y suelos aptos para el cultivo de café y cacao, propiciando rutas de comunicación entre el mar Caribe y el interior para establecer más poblados en territorio ancestral Barí:

> Esta gente venía con animales grandes, tenían gente que ponían a abrir caminos o trochas por la profunda selva y empiezan a atravesar[se] por el territorio Barí. Los Barí esperaron varias lunas siguiéndolos por todo el territorio, hasta que atravesaron por la Serranía de los Motilones hasta llegar a encontrarse con los que venían de Venezuela, que también eran muchos. Así pasaron muchas lunas. Los Barí no los enfrentaron en ese momento hasta que *los mismos conquistadores blancos empezaron a invadir y a abrir más trochas*, y luego iniciaron a atacar a los Barí *con el fin de apropiarse de las tierras y expandirse por todo el territorio*. Los Barí lucharon para defender su territorio, no era atacando. A pesar de eso,

> después de la pacificación con los invasores blancos *se perdieron grandes extensiones de tierra* (Ñatubaiyibarí, 2016b, página 15).

A la par, a la conquista de los españoles y la fundación de nuevos poblados, respondiendo al interés que personas de Maracaibo, Salazar de las Palmas, Cúcuta y Pamplona, se consolidaron haciendas para el cultivo de cacao y café, con lo que la economía local empezó a girar en torno a su comercialización hacia Cúcuta y Ocaña.

Los ríos navegables estimularon el comercio con Venezuela. El descubrimiento de minas de oro en la macro-región atrajo a encomenderos, mineros y comerciantes que llegaron hasta Cúcuta y San Cristóbal (Venezuela), con lo que penetraron al corazón del territorio ancestral Barí[40] (Aponte, 2012, página 369-370).

En el proceso de asentamiento, los hacendados contaron con el respaldo de empresas militares de las élites regionales que, junto a la conquista española y al interés por consolidar las nacientes actividades comerciales y las propiedades, desembocaron en la implementación de acciones "pacificadoras" o de "reducción" del pueblo Barí y en políticas misionales de la Iglesia que buscaban "civilizarlos" (Aponte, 2012, página 370). La disminución del territorio y población Barí se hacía evidente:

> Desde Venezuela y por el centro del país venían fundando casas con grandes números de personas. Por el lado colombiano se empezó directamente con los nabadó por las tierras en Pamplona, Cúcuta, en Ocaña, abriendo consigo carreteras y vías de acceso.

40 Se puede observar que el poblamiento de esta región se fue dando más por voluntad individual de colonos y hacendados interesados en implementar el cultivo de cacao y en las tierras que por una política estatal que hubiera promovido o planificado la colonización, labor costosa dado lo retirado de la zona (Aponte, 2012, página 375), lo que se reflejó luego en la capacidad del Estado de hacer presencia en la región e integrarla de forma satisfactoria a la nación.

> *Por donde entraban, iban matando baris y quemando bohíos a su paso* (Ñatubaiyibarí, 2017b, página 9).

Las actividades privadas y comerciales, apoyadas con una estrategia militar, promovieron el asesinato de indígenas y el arrasamiento de sus comunidades, con el fin de apropiarse y explotar los recursos de la región. Sin embargo, el pueblo indígena no permaneció pasivo ante el ataque y llevó a cabo acciones de resistencia y de defensa de su territorio. Desde entonces, los Barí fueron reconocidos como hábiles guerreros, pues realizaban continuos ataques a los asentamientos que fueron establecidos, entre ellos los de las provincias de San Cristóbal, Maracaibo y Mérida en Venezuela y, en Salazar y Ocaña en Colombia.

La primera pacificación se dio entre 1722 y 1818, cuando los Barí incursionaron en los poblados y haciendas establecidas en la periferia de su territorio, buscando herramientas como cuchillos, machetes y hachas. Los españoles ensayaron entonces contactarlos y establecer acuerdos con ellos para que cesaran sus ataques y aceptaran la catequización que les ofrecían los misioneros capuchinos a cambio de herramientas, concretando una afectación cultural y espiritual y un desconocimiento de la valía de su cultura e identidad. Para 1792 se habrían establecido en la región trece centros misioneros que contaban con participación de los Barí (Salazar, 2005).

No obstante, la aparente calma con los Barí fue interrumpida por los intentos de conquista de los españoles en territorio colombiano, con lo cual los Barí respondieron con la destrucción del poblado colonial de Chiriguaná, sobre la vertiente del Río Magdalena, en 1789 (Salazar, 2005).

La guerra de independencia forzó a los misioneros capuchinos españoles a abandonar las colonias y a regresar a la metrópoli, por lo que los

centros misioneros quedaron abandonados y los Barí volvieron a su territorio y a su vida tradicional. El siglo XIX transcurrió en relativa calma, hasta el punto de que en 1895 los Barí permitieron el libre tránsito entre Tamalameque y el río Tarra venezolano[41], para facilitar el transporte de ganado. Este camino se cerró luego de que los Barí se resistieron al hurto que realizaban de forma permanente los mestizos a sus pequeños cultivos (Salazar, 2005).

El proceso de instauración de nuevos poblados y actividades económicas, no se llevó a cabo con la construcción de infraestructura adecuada que permitiera la posterior integración de esta región a la nación colombiana a lo largo de siglo XIX, puesto que la precaria construcción de vías se dejó en manos de los hacendados que respondían a sus propios intereses. La distancia que tenían estos puntos de los centros administrativos de la región y del país y los altos costos hacían onerosos los reclamos de baldíos, lo que fomentó la ocupación de facto de las tierras del Catatumbo[42] (Aponte, 2012).

Hacia 1914 siguieron llegando órdenes religiosas y empresas de explotación maderera (otro de los recursos explotables significativos de la región) que, junto con la llegada y consolidación de las empresas petroleras, continuaron generando impactos negativos para el Pueblo y el territorio Barí (Tobri y Rincón, 2014, páginas 62-72 y Vega y Aguilera, 1995, páginas 148 - 149).

41 Confluencia de los ríos Nuevo Presidente, Sardinata y Tibú, del lado colombiano.

42 Elemento relevante porque de allí en adelante ésta fue la forma en que los colonos y campesinos ejercieron el uso y la tenencia de la tierra, hasta el punto de que la informalidad en la propiedad en el Catatumbo es predominante en la actualidad.

1.3. Kua, el petróleo

Como se señaló, la referencia a las primeras violencias ocurridas en el Catatumbo, para catatumberas y catatumberos no Barí, es la industria petrolera y su aparejada y masiva colonización del territorio. En consecuencia, son el punto de partida o primer hito de violencia de lo que fueron conflictos sucesivos contra el Pueblo Barí.

En este punto se abordarán elementos, en términos de pervivencia del pueblo Barí, de lo que significó la entrada de las empresas norteamericanas a esta región selvática y apartada y la consolidación de la actividad de extracción del hidrocarburo. Además, de la construcción de infraestructura petrolera y con ello del surgimiento de los primeros poblados, todo lo que dio forma física a los municipios de Tibú y El Tarra. Es significativo que con las actividades petroleras empieza a hacerse presente en la región el Estado.

1.3.1. Las empresas y su infraestructura

Es en los primeros años del siglo XX cuando se da paso a la exploración y explotación petrolera en el Catatumbo "el papá de Virgilio Barco [expresidente de Colombia] vivía por acá pa' esta región, entonces él principió a llevar petróleo hacia Cúcuta en unos zurrones de cuero de res (...). El petróleo salía por fuera de la tierra (CNMH, entrevista, hombre exsindicalista, Bogotá, 2017). En 1905 se firmó entonces la llamada Concesión Barco, un contrato entre el Gobierno de Rafael Reyes y Virgilio Barco Martínez por el cual el Estado colombiano le otorgaba al general

Barco una concesión en la zona nororiental del país, ubicada en los actuales municipios de Tibú y El Tarra, para que realizara labores de exploración y explotación[43].

En 1914 el general Virgilio Barco Martínez cedió sus derechos y en 1931 las compañías estadounidenses Colombian Petroleum Company[44], a la que en la región conocen como la Colpet (y que fue la encargada de la exploración y explotación del petróleo) y la South American Gulf Oil Company, la Sagoc (que lo transportaba), obtuvieron un área de 186.805 hectáreas para comenzar su actividad (Vega, Núñez y Pereira, 2009b).

Las personas consultadas afirmaron que para la época "se saca un edicto junto con el Gobierno [en el que se decía] que matar Barí no era pecado, que matar Barí era matar salvajes porque no tenían alma ¡[en pleno] siglo XX diciendo eso!" (CNMH, entrevista, hombre adulto, Ocaña, 2016).

En efecto, en la ley 80 de 1931 y "por la cual se aprueba un contrato sobre explotación de petróleo nacional de yacimientos de Norte de Santander" a las compañías norteamericanas, señalaba, en el literal b del parágrafo XIX, que:

> El Gobierno les prestará a las Compañías contratantes la protección debida para prevenir o repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de motilones o salvajes que moran en las regiones de que hacen parte los terrenos materia de este contrato, lo que hará por medio de cuerpos de Policía armada o de la fuerza pública en cuanto sea necesario (Ley 80 de 1931).

43 La figura de concesión refiere a que la empresa extranjera construye la infraestructura que necesita; utiliza mano de obra nativa, pero pone los técnicos y métodos productivos; cuenta con el con respaldo incondicional del Gobierno nacional y regional; extrae el recurso para llevarlo al mercado internacional, dejándose en manos de las empresas la atención a las demandas sociales de la población (Acosta, 2011).

44 Subsidiaria de la Mobil y la Shell.

Esto, en la práctica, significó dejar abierta la posibilidad de asesinar a los Barí para que no torpedearan el desarrollo de las labores de las empresas petroleras. Así llega la primera institución del Estado al territorio: la fuerza pública y lo hace para proteger y asegurar la actividad petrolera, con la gravedad de que sus acciones iban en contra de la integridad del pueblo indígena ancestral del territorio.

Las personas mayores que vivieron su infancia y juventud en estas tierras, en particular en Tibú, recuerdan que la empresa petrolera inició las labores de exploración y ubicación de los pozos petroleros en el bajo Catatumbo y en Petrólea[45] estableció sus primeras instalaciones administrativas y una pequeña refinería. Así lo relata un antiguo trabajador de la empresa:

> [Es] en 1933 cuando la Colpet llega al Catatumbo ya con más bases, porque en 1918 había perforado un pozo en Río de Oro, pero entrando por Venezuela[46]. Ahí perforaron el pozo número 1, que todavía está funcionando (...). En 1933 se asientan en Petrólea y ahí construyen una cantidad de viviendas para los petroleros, para los rasos, para el técnico y para el *gringo*[47] (CNMH, entrevista, hombre extrabajador petrolero, Tibú, 2017).

45 Hoy corregimiento cercano al casco urbano de Tibú.

46 Como no había carreteras, todo lo que se necesitaba entraba por barcos y lanchas desde el lago Maracaibo hacia el Catatumbo. Para hacerlo había tres opciones, la primera, tomar por la arteria fluvial que es el río Catatumbo directamente hasta Puerto Barco (hoy conocido como Kilómetro 60, muy cerca de La Gabarra); la segunda, tomar por el río Catatumbo y al entrar en territorio colombiano coger por Río de Oro para llegar a La Pista; y la tercera, avanzar por el río Tarra venezolano y, en la frontera del lado colombiano, desembarcar en el puerto de Tres Bocas (donde se encuentran los ríos Nuevo Presidente, Sardinata y Tibú), siguiendo por el río Sardinata para llegar a Puerto Reyes (junto al actual Campo Dos).

47 Para trasladar los materiales desde el puerto de Tres Bocas hasta Petrólea se utilizaban primero mulas y luego las empresas construyeron una vía férrea que los llevaba hasta allí. Luego, para trasladar hacia Cúcuta el personal que trabajaba en la zona, construyeron un tren que llegaba hasta Puerto León (cerca al actual municipio de Puerto Santander) sobre el Río Zulia, el que se conectaba más adelante con el que llegaba hasta el Parque Santander, en la capital nortesantandereana.

La Colpet empezó a construir la infraestructura que necesitaba para desarrollar su actividad, lo cual se constituía en una labor titánica pues era una región selvática. Entre las obras se destacan varias pistas de aterrizaje necesarias para trasladar el material a la región. Así, se hicieron pistas en Orú (actual corregimiento de El Tarra), Puerto Reyes, Petrólea, Tibú, Río de Oro (en Tibú), en Ayacucho (Convención), la principal fue la de El Tarra[48], terminada en 1938 y que, se consolidó para estos años como la de mayor tránsito de aviones en Sudamérica y la segunda en el mundo, después de Washington (Vega, Núñez y Pereira, 2009a). Un habitante de El Tarra relata cómo se hizo viable la construcción de las obras:

> Venían los aviones norteamericanos y como no se podían traer por tierra, porque cómo, los aviones norteamericanos botaban en bolsas grandes las herramientas: picas, palas, azadón, pólvora. Necesitaban urgente que ese avión aterrizara porque había peligro de que se lo bajaran los Barí[49] (...). [Frente a los ataques de los Barí] los aviones respondieron con bombas y mataban mucho. Entonces seis mil obreros construyeron la pista aérea, buscando, triturando, explanando. El aeropuerto de El Tarra aproximadamente tiene 800 metros, era pa' avioneta y para aviones de esa época (CNMH, entrevista, hombre docente, Ocaña, 2016).

Se ve cómo en el proceso de transporte de materiales para la construcción de la infraestructura petrolera, comenzó el asesinato de indígenas, práctica que se hizo recurrente. Se evidencia la cantidad de mano de obra que se requirió para abrir selva y adelantar un significativo número de obras, lo que abrió paso a la entrada de miles de personas y a la construcción de viviendas para albergarlas.

---

48 Cerca de lo que es hoy el casco urbano. La zona actual de este municipio era para entonces parte de la Provincia de Ocaña, que después pasa a ser el corregimiento de San Calixto y que finalmente se conforma como municipio en 1990.

49 Expresión que hace referencia a que los Barí con sus flechas podrían producir un accidente y que el avión colisionara en tierra.

Seis años después, en 1939, el funcionamiento administrativo de la empresa se trasladó de Petrólea a lo que empezó a configurarse como el casco urbano de Tibú. Continuó la apertura de campos petroleros en Puerto Reyes, Petrólea, Campo Giles, Campo Tres y Campo Seis. En 1940 este consorcio norteamericano ya había construido un oleoducto de más de 400 kilómetros que unía estos campos con Coveñas, en el departamento de Sucre (Tibú-Convención-Costa Caribe) y contaba con más de 38 pozos en producción.

La Colpet construyó una carretera que unía Cúcuta-Tibú-La Gabarra-Río de Oro-Caño Tomás; y la Sagoc hizo la vía Tibú-Filo Gringo-El Aserrío-Convención-La Mata (Cesar), que iba paralela al oleoducto, el primero que atravesó la región.

Carreteables construidos por la Colpet para acceder a los campos petroleros. Cortesía Julio Jaimes, Tibú. Archivo personal. 2016

Además, la Colpet hizo un sinfín de carreteables cortos que comunicaban con los diversos pozos y con las instalaciones al interior del área de la concesión, pero no hacia el exterior. Después y en contra de los intereses de la empresa, estos caminos sirvieron para que la primera ola de colonos ubicara sus fincas y viviendas alrededor de los caminos y obras de infraestructura, lo que continuaba la presión sobre el territorio Barí, en donde los indígenas veían llegar e instalarse a nuevos y numerosos habitantes[50].

Según las personas entrevistadas, éstas carreteras permanecían bien mantenidas pues la empresa contaba con un departamento de transportes y vías y con motoniveladoras, tractores, volquetas e ingenieros de vías para su mantenimiento. Además, la Colpet construyó una serie de puentes sobre los caudalosos ríos de la región, que persisten en la actualidad. Así los describe un habitante histórico de Tibú:

> Los puentes que nosotros tenemos [actualmente] fueron construidos en el año 1937, 1938, casi todos los puentes grandes sobre el río Sardinata, sobre el río Nuevo Presidente y sobre el río Tibú; sobre el río Nuevo Presidente por la vía antigua, que era Campo Dos, Campo Tres, Campo Seis. Hacia 1960 la vía era Campo Dos, Campo Tres (saliendo a Campo Seis), regresándose por Bertrania y de Bertrania se llegaba a Tibú (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor sacerdote, Tibú, 2016).

De esta manera, el conjunto de obras y el poblamiento que requirió comenzar las actividades de exploración y explotación petrolera y el desarrollo de la industria en adelante reconfiguró de manera radical el paisaje en este territorio. La Ishtana, tal como la había heredado Saba-

50 De acuerdo a los relatos de las personas adultas mayores que se entrevistaron, la compañía prohibió los asentamientos de personas en áreas aledañas al territorio de la concesión, para no cubrir los servicios asistenciales de esta población, pues como se ha visto, el Estado no hacía presencia sino con la policía, y la región se fue consolidando, la parte baja con las compañías petroleras y, la alta, con haciendas.

seba a sus hijos de la selva, se había modificado de forma irremediable y se encontraba herida, pues se vieron violentados animales y plantas, lugares sagrados, los seres espirituales del aire, el agua y la tierra. De esta forma empezó la afectación a los vínculos de los indígenas con sus ancestros. Para el Pueblo Barí esta era una violación trágica a su territorio.

Además de la infraestructura, estaba el trazado de los oleoductos y campos petroleros, de este modo, las empresas marcaron una nueva manera de entender, delimitar, nombrar y usar el territorio. En adelante, personas no Barí poblaron estas zonas.

Habitantes de San Martín (Sardinata) recordaron que hacia 1945 la empresa llevó a un señor al que llamaban el guardabosques. Iba "con unas plaquitas, con unos tubos amarillos y en cada tubo estaba el nombre de cada kilómetro" (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016). Estos nombres de los campos petroleros y de la ubicación en la instalación del tubo fueron asumidos por muchos de los caseríos que se crearon con posterioridad, varios de los cuales persisten. Por ello, en Tibú, en especial, existen veredas y corregimientos con nombres que se encuentran ligados a este trazado de tubos, campos y campamentos, como Campo Dos, Campo Seis, Petrólea, Kilómetro 60, entre otros.

Para alojar a los trabajadores la empresa construyó viviendas que, aunque modificadas aún permanecen, y que se concibieron con una característica particular: la estratificación social. En este sentido, los norteamericanos tenían un mayor rango que los técnicos colombianos y estos estaban por encima de los obreros y todos por encima de los Barí: "Eran tres viviendas diferentes, tres clubes diferentes, tres teatros diferentes, un solo hospital, pero un hospital con tres pabellones separados, para el raso, para el técnico y para el *gringo*, tenían también un pabellón para

atender a los colonos[51] (CNMH, entrevista, hombre extrabajador petrolero, Tibú, 2017).

Para los estadounidenses se edificó el Barrio Técnico, una zona residencial con amplias casas de estilo norteamericano que contaban con protección contra animales, agua, luz, alcantarillado, teléfono, radio mensajería, vías, talleres, club y comisariato.

Para el nivel medio de trabajadores se construyó el Barrio intermedio, con viviendas de buena calidad, pero más sencillas y pequeñas. Para los obreros rasos se construyó el Barrio Barco, con casas más austeras.

51 Nótese que, ante la ausencia del Estado, eran las empresas petroleras las que cubrían las necesidades básicas de la población que comenzó a consolidarse en la zona.

Casas construidas por la Colpet que se mantienen en la actualidad, aunque modificadas. Fotografía: José Rodríguez Vaca para CNMH, 2018.

Además, la empresa construyó un colegio, para darle educación a los hijos de los trabajadores y un hospital con la misma estratificación social, que contaba con servicios de buena calidad, como lo cuenta un extrabajador petrolero que vivió para estos años los avatares de la industria:

> Se construye el Hospital de Tibú donde tenían más o menos quince médicos, tres o cinco especialistas, dos odontólogos, tres profesionales de laboratorio y se convierte el hospital de la Colpet en un centro de elaboración de medicinas, se importaban las bases y allí en el laboratorio farmacéutico tenían tres farmaceutas para preparar las medicinas. Entonces el Hospital de Tibú exporta medicinas para los trabajadores de la zona, para llevar atención médica y salud a los trabajadores que se encuentran a lo largo del oleoducto. Así encontramos que tenía atención médica en Orú, Bellavista, Convención, Puerto La Gloria y en Coveñas y todo era proveído por el Hospital de Tibú (CNMH, entrevista, hombre extrabajador petrolero, Tibú, 2017).

Esta organización jerárquica y discriminatoria de la comunidad definió la presencia de las empresas petroleras en la región. El extrabajador petrolero entrevistado recuerda esa diferenciación en el trato hacia la población:

> Era una forma de segregación de la comunidad, los gringos tenían tres escalas en todo. El comedor era un comedor para gringos, un comedor para los colombianos del staff, o sea los que tenían un poco de mando, un comedor para los oficinistas y un comedor para los obreros. Lo mismo sucedía en el hospital: allí había un pabellón para los gringos y los jefes, así fuesen colombianos, un pabellón para las damas, también con el mismo estilo de grado, un pabellón para los obreros y un pabellón para los indígenas, entonces no se mezclaban (CNMH, entrevista, hombre extrabajador petrolero, Tibú, 2017).

Así, las empresas petroleras norteamericanas dieron forma tanto física como social a estos lugares y establecieron una forma jerarquizada de relacionamiento en donde primaban para unos los privilegios y para otros las precarias condiciones de trato, trabajo y existencia. Esto fue evidente con el exterminio hacia el Pueblo Barí, pero también se hizo presente con el nivel más bajo de la escala de trabajadores, los obreros rasos, como se verá en el capítulo 2, cuando se presentó el inicio y posteriores desarrollos del sindicalismo en el Catatumbo.

Terminadas las obras de infraestructura se generó un despido masivo de trabajadores que comenzaron a colonizar las tierras de la región. Después de que la producción de los campos se restringiera por los efectos que trajo al país la Segunda Guerra Mundial entre 1943-1945 y que obligaron a la empresa a paralizar las actividades petroleras, se produjo de nuevo el licenciamiento de miles de trabajadores, quienes se establecieron con sus familias como nuevos colonos, abriendo zona e instalando sus parcelas[52]. De esta manera la presencia de población no se vinculaba exclusivamente a las actividades laborales que ofrecía la empresa, sino que se abrió camino una población independiente que se dedicó a las labores del campo.

1.3.3. Alimentando el poblamiento

Con la nueva actividad económica se generaron dos olas de migración espontánea. La primera por las oportunidades laborales, económicas y comerciales que brindaban la industria petrolera, las vías y los nuevos puer-

52 Para 1960, de 575 pozos solo 265 se mantenían (Vega y Aguilera, 1995), así que en 1975 la Colpet entregó los campos agotados a Ecopetrol, que asumió la Concesión Barco.

tos fluviales; la segunda compuesta por colonos campesinos expulsados de tierras por el paulatino cierre de la frontera agrícola, buscaban instalarse, cultivar y ofrecer productos agropecuarios (Vega y Aguilera, 1995).

Otro factor que estimuló la colonización fue la exuberancia y riqueza natural que la región ofrecía, pues había mucha "carne de monte, una abundancia de comida natural: bocachico, que usted tiraba un tarrayazo[53] y uno solo ya tenía para 30, 40 personas, ahí en el Catatumbo, ahí en el río El Tarra (...) y estaba la danta que es bien rica, venados y hasta osos. Venados, osos, danta, caimán (CNMH, entrevista, hombre docente, Ocaña, 2016)[54].

Balancín para extracción de petróleo. Cortesía de Julio Jaimes. Archivo personal, 2018.

53 Cuando se lanza la atarraya en el río para pescar.

54 Los Barí, por ejemplo, han sustentado su alimentación además de en los peces y los frutos, en el consumo de diversos animales que cazan de manera controlada en la selva, como monos marimonda, monos cotudos, loros, patos, guacamayas, papagayos, pelícanos, palomas, lapas o ñeques, faras, armadillos, puerco espín, báquiros, venados, iguanas, osos perezosos, osos mieleros, osos hormigueros, osos negros, ardillas, ranas, cangrejos y gusanos, entre otros.

Los actuales municipios de Tibú y El Tarra surgieron a raíz de esta colonización que comenzó en los primeros años del siglo XX, se conformaron asentamientos alrededor de los campos petroleros y, en torno a la infraestructura de transporte del crudo, como los oleoductos o estaciones de bombeo, por lo cual el municipio de Convención también tiene en su infraestructura e historia la impronta del petróleo[55].

Muchas de estas personas recién llegadas a la región se apostaron en los márgenes de los ramales y vías construidas por las compañías petroleras, como lo confirma un extrabajador de la Colpet:

> Con esa apertura de carreteables, con la construcción de las fincas, el campesino que vino a buscar trabajo con la Colpet y no lo consiguió decidió montar su finca, sembrar la yuca, el plátano y venderle esos productos a la Colpet. Además, que ellos pusieron su ganadería y le vendían ganado a la Colpet, porque tenía su matadero particular (CNMH, entrevista, hombre extrabajador petrolero, Tibú, 2017).

Para los años del arribo e instalación de las empresas, a Tibú y a El Tarra llegaron a trabajar personas de diversos lugares, en especial de la provincia de Ocaña, de Boyacá, Tolima, Casanare, Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero y ciudadanos venezolanos. Según se recuerda y como ha sido frecuente en los enclaves petroleros, junto a la instalación de infraestructura, surgieron lugares de prostitución, actividad que se relacionaba, en muchas ocasiones, con la conformación de nuevos poblados, como ocurrió en el caso de Tibú, como fue recordado por un habitante de Campo Dos: "entonces comenzaron a traer mujeres a que vendieran su cuerpo, ahí también comenzó a generarse [el casco

55 En Convención se construyó una de las principales estaciones de bombeo y por ser un punto importante para el transporte del crudo, allí tenía más presencia la Sagoc, mientras que en la parte baja del Catatumbo tenía mayor presencia la Colpet, por ser donde se exploraba y explotaba el hidrocarburo. Incluso Convención sigue siendo un punto importante para el cuidado de la infraestructura petrolera, por lo que allí se encuentra ubicado el Batallón Energético y Vial No. 10 Coronel José Concha, del Ejército.

urbano de Tibú] a la par de la prostitución (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

Como ya se mencionó, Colpet, en principio, prohibió los asentamientos buscando restringir el acceso de los colonos al área de la concesión, pues esto implicaría cubrir sus necesidades básicas, en un área desprovista de bienes y servicios ofrecidos por el Estado -a excepción de la presencia de fuerza pública-, como lo confirma un hombre adulto mayor:

> Los colombianos campesinos que llegaron buscando tierra y buscando vida no se podían meter al territorio donde estaban perforando porque eran invasores, eran ilegales, siendo colombianos, en un territorio colombiano, de terrenos baldíos que eran del Estado. Lo más obvio era que esos terrenos fueran adjudicados lentamente a los campesinos, pero como eran concesionados a una empresa, entonces los campesinos no podían estar ahí (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor sacerdote, Tibú, 2016).

Frente a esta restricción, los colonos empezaron a construir sus ranchos a escondidas y de noche, sin usar martillo ni puntillas para que no los escucharan y sin tumbar el monte para no ser tan visibles:

> Había un señor, Rosalino, que era inspector de bosques. Él tenía la autorización de no dejar construir ninguna vivienda. Entonces el Ejército, vivienda que encontraban, vivienda que tumbaba. Pero la gente le ganó, la invasión ganó, todo eso se fue construyendo. El Concejo [municipal] de Cúcuta le da el título a Tibú de corregimiento el 8 de marzo de 1945. En 1966 se inicia el primer movimiento promunicipio[56], entonces el Concejo de Cúcuta, para evitar que Tibú siguiera en ese movimiento cambia la razón social de Tibú como corregimiento y lo nombra Unidad Piloto

56 Hasta entonces era corregimiento de Cúcuta.

> Administrativa de Tibú, pero seguían mandando desde Cúcuta (CNMH, entrevista, hombre extrabajador petrolero, Tibú, 2017).

Luego, la gente se enfrentó a las autoridades que no permitían que se hicieran las viviendas y con una resistencia pasiva empezaron a construir casas por toda la avenida central de Tibú, en donde se encontraba el tubo de forma superficial.

En 1954 hicieron presencia otras figuras estatales en Tibú, además de la fuerza pública: el corregidor, un "inyectólogo" y una profesora. Sin embargo, fue la empresa la que siguió proveyendo a los pobladores de los requerimientos básicos, como lo comenta el extrabajador de Colpet:

> [Este año] se decide construir un puesto de salud, a través de los fondos obtenidos en un bazar organizado por la empresa, en donde la Secretaría de Salud nombra a un "ampolletero" o "inyectólogo. La Secretaria Departamental [de Educación] nombra a una profesora, doña Carlina. Ella pone la escuela (...) en toda la [avenida] central. Ahí se montó la escuela primaria, se atendían niños y niñas, pero como en esa época no podían estar revueltos, se colocaba un día para niños y un día para niñas, y toda la primaria [tenía] un solo profesor. La Colpet le daba la alimentación a la profesora y el almuerzo a todos los niños que llegaran a estudiar ahí, fueran hijos de trabajadores o no lo fueran (CNMH, entrevista, hombre extrabajador petrolero, Tibú, 2017).

Y así como la actividad petrolera dio forma al surgimiento y consolidación de Tibú, sucedió con El Tarra[57]. Se replicó la jerárquica organización de la comunidad. Este municipio surgió por el asentamiento de trabajadores de la construcción de la pista aérea. Ellos empezaron a levantar las primeras casas "unos ranchos, porque las cabinas móviles eran solamente

57 Cuyo nombre significa *entre ríos*, porque al río Tarra lo alimentan varios afluentes.

para los norteamericanos" (CNMH, entrevista, hombre docente, Ocaña, 2016). De acuerdo con los testimonios, el poblado empezó con algunas viviendas pequeñas en Orú en 1934, luego en Bellavista en 1935, lo que es el actual casco urbano en 1937 y por último en Filo Gringo en 1938.

En El Tarra fue la empresa Sagoc la que construyó la primera escuela en Bellavista en 1948. De 86 estudiantes de primero de primaria, 25 eran norteamericanos. Se construyeron dos comisariatos, tanques de almacenamiento del crudo y la estación de bombeo de Bellavista que enviaba el petróleo hacia Ayacucho (sur del Cesar)[58]. En el marco de esa dinámica se formaron "centros de prostitución" desde 1944 (CNMH, entrevista, hombre docente, Ocaña, 2016).

Dados los constantes ataques de los Barí a trabajadores petroleros y por sus incursiones a las instalaciones petroleras, la empresa permitió la colonización: "ahí no le puso ningún problema la Colpet para que se metiera por la carretera todo el que quisiera a colonizar, buscaban que ellos se fueran metiendo para arrinconar a la gente [Barí] y ellos no tener problemas con los indígenas, porque los indígenas eran muy guapos[59]" (CNMH, entrevista, hombre extrabajador petrolero, Tibú, 2017). Así llegaron no solo trabajadores petroleros o personas que ofrecían bienes y servicios sino también aquellos que querían tierra y una vida en la región. Lo que abrió las puertas del Catatumbo para la colonización y marcó el arrinconamiento territorial definitivo del Pueblo Barí.

58 Las otras estaciones de bombeo estaban ubicadas en La Esmeralda (Convención), Orú (El Tarra) y Tibú. Personas de la región recuerdan que al lado de las estaciones de bombeo el Ejército instalaba bases militares "todas las bases militares se instalaron para cuidar las estaciones de bombeo, en Orú hay una base militar, en Bellavista hay todavía una base militar, en Convención ya es un batallón porque era una estación importante, las otras eran estaciones pequeñas" (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2017). Por ello, existe la percepción de que "el Ejército está es para cuidar el tubo". Esta apreciación se vincula, y refuerza la idea extendida en la región, del Estado ausente o presente de forma represiva e interesada en la explotación de recursos.

59 Se refiere a que eran valientes, aguerridos, bravos.

Los principales centros poblados fueron El Tarra, Tibú casco urbano y la zona limítrofe de Puerto Barco, hoy conocido como Kilómetro 60, muy cerca al actual casco urbano de La Gabarra. En resumen, las empresas petroleras cubrieron funciones de Estado: construcción de vías, prestación de servicios básicos como la salud y educación, montaje y manejo del régimen laboral de sus trabajadores y provisión de justicia -que ejercían con total autonomía-, en un contexto de ausencia de instituciones estatales (Aponte, 2012, página 376).

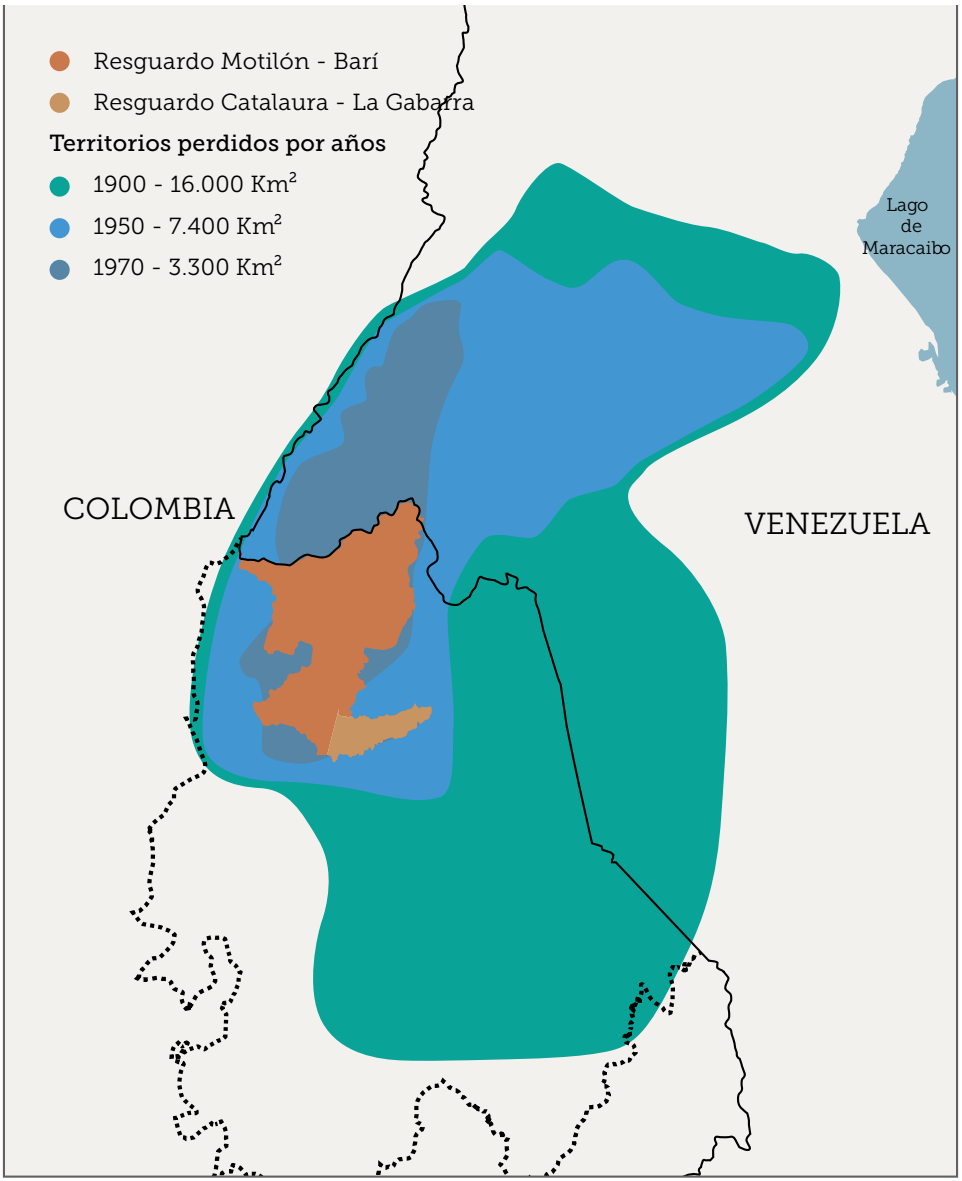
Después del auge petrolero en los años 30, entre 1940 y 1958 se paralizó la industria por los efectos de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, por la pérdida del mercado francés, el oleoducto se suspendió y la producción de los campos se restringió al consumo interno y al envío de crudo en pequeñas cantidades a Portugal y Canadá. Luego, por la necesidad de petróleo que impuso la guerra, se reactivó la exportación de crudo desde Coveñas (Moré, sf).

1.3.4.
Explotación del quackayra[60], afectación a los Barí

La irrupción de las compañías petroleras y la constante entrada de trabajadores y de campesinos colonizadores hicieron que el territorio ancestral de los Barí se viera modificado drásticamente: reducción de sus tierras, de la vida silvestre y efectos ambientales adversos como deforestación y contaminación de los principales ríos y sus afluentes, entre otras. Así, se afectaron las actividades de caza y pesca, fuente importante de alimentación y componente vital del ancestral Pueblo Barí.

60 Oro negro

Mapa 5. Pérdida del territorio ancestral del pueblo Barí



Fuente: Pueblo Barí, reproducido en Salazar, 2005.

El avance de la infraestructura petrolera y el establecimiento de poblados -con el apoyo del Ejército- representó la desaparición de nueve comunidades indígenas, la eliminación de un número mayor de bohíos, la muerte y desplazamiento de la población y la muerte de destacados guerreros Barí.

En la ruta entre Cúcuta, Tibú y Convención, los Barí constataron la destrucción de las siguientes comunidades: Karibokaira, Saboukay, Ombirronkayra (y los bohíos de Buiyocbakaira donde se abrió el pozo Campo Yuca y CarincaKayra donde luego se instaló el Batallón del Ejército), Axdobarinkayra (en el actual Tibú), Tokbokay (actual El Tarra), Shimakarinckay (filo de El Tarra), Datribackayra (corregimiento de El Aserrío, en Teorama), Ankayra (entre Convención y el Carmen) e Ishtandabocyira (Salazar, 2005).

Los pobladores de la zona identifican al corregimiento de El Aserrío (Teorama) como uno de los sitios que tuvo mayor presencia de los guerreros Barí, según sus testimonios, la quebrada La Tiradera deriva su nombre de la "tiradera de flechas de los Barí". Según testimonios de los caciques Barí, en los enfrentamientos "murieron destacados guerreros como Barikarichinba, Abotrichimbana, Bachiashikba, Acayllema y murieron muchos ayudantes y gentes Barí" (Salazar, 2005, página 33).

En el proceso de la construcción de vías, pozos, oleoductos y poblados sobre el sector oriental del territorio ocupado por los Barí, entre Tibú, La Gabarra y Río de Oro, fueron destruidas las comunidades y bohíos de Chicbari, Acka, Quiocbocayra, Bocsrocbakayra y Nankadukayra. Cuentan los Barí que en esta comunidad de Nankadukayra se realizó la última defensa armada de su territorio. Así relatan la tragedia de entonces:

> Los rabadora [blancos] bombardearon los bohíos e instalaron la base petrolera de la Colpet y el nombre del bohío Nankadukayra fue cambiado por Quackayra, que significa petróleo, oro negro. Entonces los rabadora encerraron el bohío y los ataques se hicieron constantes. En el ataque de respuesta que hicimos los Barí al campamento de la Colpet participaron varias comunidades y entre guerreros, ayudantes y miembros de las comunidades murieron cerca de sesenta Barí. Al ser atacados por el Ejército y los grupos armados de la Colpet, muchos Barí murieron electrocutados al hacer contacto con las cercas electrizadas del campamento de la Colpet. Entre los muchos caciques guerreros que murieron se destacó Atoundoura. Mientras nosotros peleábamos con habilidad y honor para defender nuestra tierra, los rabadora nos atacaban con armas que no conocíamos. Así peleamos hasta principios de los años sesenta [del siglo XX] (Salazar, 2005, página 36).

Además de las persecuciones del Ejército y de los trabajadores instigados por las petroleras, los Barí fueron víctimas de ataques de los colonos y de los "safari" que los ejecutivos norteamericanos de la Colpet realizaban los fines de semana cuando disparaban contra los indígenas en los alrededores selváticos de sus campamentos, en la región oriental de su territorio (Salazar, 2005):

> El kua (petróleo) es la sangre de nuestra tierra que nos dejó Saymadoyi, nuestros ancestros, en los lugares seleccionados. A la llegada de las compañías petroleras ellos atacaron uno de nuestros lugares sagrados Ishdaynakay. Ahí había un bohío y una gran comunidad Barí dirigida por el Ñatubay Ororogshimba. Todo este territorio fue incendiado y *arrasado*[61] por las máquinas. Luego

61 Esta es la primera referencia que se hace sobre el arrasamiento en la región. Posteriormente, en periodo paramilitar, esta fue una de las características del accionar de este actor armado, como se verá en el capítulo 4.

> llegaron los hombres armados a *masacrar*[62] a todo nuestro pueblo. Desde ahí se rompió el equilibrio de la naturaleza, se contaminó el agua de los ríos, llegaron las enfermedades, desaparecieron muchos animales, y nuestra unidad como comunidad se vio afectada (CNMH, entrevista, sabio Barí, Resguardo Motilón Barí, 2016).

Catatumberos no Barí en la actualidad tienen presente y son conscientes de la magnitud de la violencia ejercida contra este pueblo indígena. Hacen referencia histórica a partir de los relatos de sus abuelos y padres:

> No tengo la fecha muy exacta, porque era lo que me contaba mi abuelo: más o menos en los [años] treinta, cuarenta por ahí, aquí llega la Company, la compañía petrolera, pero comienza con un fenómeno de una vez de violencia. En ese entonces el pie de fuerza militar andaba a favor de la compañía y andaba haciendo repliegues del Barí. Pero también comenzó que a los empleados que ellos contrataban -porque mi abuelo era de esos-, les decían: los días sábados, los domingos -que de ustedes es un día libre- se les paga recompensa por Barí que maten, o por perseguirlos. Entonces [los trabajadores] hacían sus grupos y se iban a perseguirlos para tratar de alejarlos de los campos petroleros. Entonces él [el abuelo] decía: comienzan a generarse problemas fuertes, fuertes de violencia, es decir, *que nunca nos hermanábamos con el Barí*, sino que era el enemigo. *Nos metieron como la sicología del enemigo y comenzamos ahí* (...) Él dice que de ahí para acá comienza toda una temporada de violencia (CNMH, Taller de memoria, Tibú, 2016).

Este relato establece el punto de inicio de, por una parte, la mirada como "enemigo" hacia el Barí por parte de los nuevos pobladores y, por la otra, de una relación sustentada en la violencia, el desconocimiento, el racismo y la discriminación. Racismo y discriminación que aún persisten.

---

62 Primera mención de la palabra masacrar que será con frecuencia utilizada para referirse al periodo de copamiento paramilitar.

Un teoramense recordó que "antes de la explotación petrolera la población Motilón Barí (...) la teníamos en el corregimiento de San Pablo y en la vereda Quince Letras (Teorama) y de ahí los sacaron a punta de plomo. En cada ventana había un ser apostado con una escopeta de dos cañones, e indígena que se asomaba, indígena que lo partían a plomo" (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

Según recuerdan moradores del Catatumbo, para estos años la empresa pagaba treinta pesos, daba herramientas, semillas y empezó a permitir que la gente colonizara el Catatumbo, "porque los indígenas estaban atacando" en defensa de su territorio:

> Como hasta el [año] 40, fueron como unos seis años de lucha, de ataque de los indígenas a cualquier petrolero, cualquier carro, los atacaban con flechas. Estos carros los tenían todos cubiertos de mallas y cuando salían los carros [los petroleros] tenían que ir no muy pegados a las ventanas para que no los fueran a chuzar (CNMH, entrevista, hombre docente, Ocaña, 2016).

Son múltiples los relatos sobre las formas que tenían las empresas para incentivar a los colonos a que asesinaran a la población Barí. Como narró un habitante de El Tarra: "Mi suegro trabajó como pesero para la empresa, era el matarife, era el que mataba [reses] y le pagaban y, fuera de que le pagaban la carne, le pagaban para que hiciera el favor de matar [a los Barí] (CNMH, entrevista, hombre docente, Ocaña, 2016).

Otra persona recordó que la empresa daba dotación de repelente, comida y un revólver para que fuera usado con el mismo fin (CNMH, entrevista, adulto mayor sacerdote, Tibú, 2016). Fueron reiteradas las acciones que se profirieron en contra de la vida de los Barí, desde distintos sectores de la sociedad.

Los Barí llaman a este etnocidio de la explotación del petróleo como el Chiractoidracan: "La guerra del petróleo nos llevó a que nos disminuyeran tanto en territorio como en la población Barí como tal. De dieciséis mil viviendas que eran, sólo quedamos ochocientas. Hoy en la actualidad somos sólo setecientas" (CNMH, entrevista, líder Barí, Cúcuta, 2017). Por esta razón ubican a la explotación petrolera como el principal -aunque no el único- factor de despojo de tierras y de exterminio de su pueblo.

Alrededor de la extracción y explotación del petróleo en el Catatumbo se configuró la región tal y como se conoce, en especial, la zona baja, en cuanto a la conformación de los municipios de Tibú y en menor medida El Tarra, la construcción de la red vial que permanece, la definición arquitectónica de barrios y la configuración poblacional vinculada a la llegada de trabajadores petroleros y olas de colonización atadas a la actividad petrolera. Desde entonces son evidentes las diversas formas de violencia, el arrasamiento y las masacres cuyo objetivo, en principio, fue el Pueblo Barí. Aun cuando la industria y colonización petroleras se constituyen para el pueblo indígena como el hito de violencia más relevante en su contra, los Barí han querido dar a conocer, por primera vez y en el marco del trabajo con el CNMH, otro acontecimiento violento y que se relaciona con la presencia y afectaciones producidas por las misiones religiosas.

1.4. Las misiones religiosas

Este tercer factor de afectación a los Barí, agrupados en Ñatubaiyibarí, tiene que ver con los frailes capuchinos y con las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, conocidas en la región como las

hermanas Lauritas[63]. Cabe resaltar que en 1947 los capuchinos fundaron un centro misional que les permitió, por una parte, continuar con las campañas "pacificadoras" y, por otra, penetrar en territorio Barí, durante los primeros años de la década de los sesenta del siglo XX (Instituto de Desarrollo de la Comunidad Tomo 3, 1971, página 22).

> Entonces ¿qué fue lo que trataron de hacer los capuchinos y las monjas en esa época? conquistar al indígena en su forma de pensar, como una especie de evangelización, es decir: "ustedes deben creer en Dios como cualquier ser humano, si nosotros somos de la religión católica, así deben ser ustedes, católicos como nosotros". Entonces el pueblo Barí les decía: ¡No! porque yo pienso diferente, vengo de una cultura diferente, vengo de una religión diferente, creo en Dios, estamos de acuerdo, usted cree en Dios, sí. Mi Dios se llama Sabaseba, su Dios usted le dice Dios. Cosas como esas (CNMH, entrevista, líder Barí, Cúcuta, 2017).

63 En este punto es necesario aclarar que, aunque son el mismo pueblo indígena, las comunidades de los dos resguardos en Colombia (el Motilón Barí y el Catalaura La Gabarra) no necesariamente tienen la misma postura sobre los acontecimientos. Frente a las misiones religiosas, por ejemplo, las personas que integran el resguardo Catalaura La Gabarra tiene más aceptación y valoran como positivos los aportes que ha traído a sus comunidades la presencia y acompañamiento desde la visión cristiana católica de las hermanas Lauritas, tanto, que le asignaron al nombre de su resguardo el de la Misión Catalaura. Esta misión buscó hace más de cincuenta años llevar el mensaje del evangelio y brindar acompañamiento a los Barí, trabajo inspirado en la madre Laura Montoya, primera santa colombiana, beatificada el 12 de mayo de 2013.

Fray capuchino y personas Barí 1940-1950. Fotografía Cortesía Ñatubaiyibarí, 2018.

Un hecho no difundido por los mayores Barí a personas ajenas a este pueblo indígena fue relatado por los ancianos de Bridicayra y de otras comunidades como clave en la desaparición de algunos bohíos ancestrales. Ellos lo llamaron: El Genocidio. Ocurrió en la comunidad de Asacgcayra, entre 1940 y 1970, cuando los frailes capuchinos y las monjas ingresaron a esta comunidad:

Se dice que se abre y se cierra la puerta del bohío como un mensaje de los Barí de Ojos Limpios anunciando lo que iba a pasar. En ese momento se confiaron con los religiosos porque según las monjas y los frailes capuchinos, venían a conversar sobre "Dios". Muchos de los Barí estaban en sus cultivos tradicionales limpiando y desyerbando las yucas, los plátanos, los ñames, las piñas, entre otras. En esa época no había blancos en el territorio. Ese día las monjas deciden hacer una olla comunitaria. Así empieza El Genocidio, porque las monjas distribuyeron bebidas envenenadas a algunos paisanos [Barís] que venían de otra comunidad de visita, por [la] cercanía y por [inter]cambios de artesanías y así todo empezó a oscurecerse para los que habían consumido la comida comunitaria y eran la mayoría. La primera Barí que fallece es una mujer de edad, de nombre Atonchingba, cuando va a orinar. El cacique de esta comunidad fallece y empieza el fallecimiento de los demás Barí. Se está hablando de aproximadamente 400 Barí que mueren en este bohío.

Se menciona que José Landino fue quien trajo a las monjas y [que] la monja Mendoza de Venezuela es quien en compañía de otras monjas causan este genocidio. Esto sucede cuando los Barí regresan de atacar una vereda de invasores [colonos] en el sector de Curumaní y Pailitas [Cesar]. Algunos Barí acompañaban a las monjas: Abosagcayi, Obandou, Aycho. Así mismo, vino un helicóptero en las horas de la tarde y el cacique de esta comunidad fallece (...). En Asacgcayra solo se ven muertos sin diferencia de edades. Se ve todo regado, como hamacas, canastas, totumos, arcos y flechas. Muchos de los niños sobreviven cuando vieron caer a la abuela Atonchingba, porque sus padres evitaron que comieran o bebieran lo que estaban repartiendo las monjas. Y al día siguiente parten los que pudieron sobrevivir esa noche. En el camino de Candashigquero se ven muertos niños, madres, padres, abuelos y abuelas cuando se trasladan a otras comunidades.

Muchos de los afectados con ayuda de la medicina tradicional Barí pudieron sobrevivir, pero muchos que bebieron lo que les ofrecieron las monjas fallecen estando en otras comunidades. El único Barí que regresó a la comunidad afectada fue Ochiaricgcaychimba y encontró a algunos niños sobrevivientes, los protegió y los llevó a otras comunidades. Hoy en día deben estar en Venezuela formando nuevas familias. Aricgcaychimba es el único sobreviviente que narra esta historia y por eso hoy la contamos en memoria de nuestros antepasados. En esa época los blancos no habían llegado al territorio, manifiestan estos dos sabios y lo recuerdan con mucha tristeza (Ñatubaiyibarí, 2017b, páginas 12-13)[64].

Helicóptero aterrizando en comunidad Barí. Fotografía cortesía Ñatubaiyibarí, 2018.

64 El 5 de septiembre de 2017, mientras el Papa Francisco se encontraba en Colombia, Ñatubaiyibarí y sus autoridades tradicionales le enviaron un mensaje en el cual daban a conocer por primera vez estos hechos y le solicitaban "los expedientes y documentos de las misiones católicas realizadas por las hermanas Lauritas y los sacerdotes Capuchinos en territorios ancestrales y sagrados pertenecientes al Resguardo Motilón Barí, documentos producidos por la Iglesia a mediados del siglo XIX". Le reclamaban además por la muerte de sus hermanos Barí.

De acuerdo con las autoridades y líderes de Ñatubaiyibarí entrevistados y según se puede ver en los documentos que compartieron con el equipo de investigación, el papel que jugaron las misiones religiosas ha sido negativo para su territorio y su cultura, porque facilitaron la colonización y el despojo del territorio ancestral Barí. Según los integrantes de esta organización, las personas del resguardo Motilón Barí han enfrentado la colonización espiritual -en los diferentes periodos- escuchando, sin debatir, sin contradecir y guardando silencio. Incluso mencionan que algunos Barí se han bautizado y han expresado que acogen la nueva fe, pero en el fondo siguen siendo fieles a Sabaseba, a su cosmovisión, a su ley de origen y a su espiritualidad.

1.5. La afectación persiste para los Barí

Si bien los mayores impactos en relación con la actividad petrolera se dieron en las primeras cinco décadas del siglo XX, la industria aún opera en la región y sus impactos perjudican el territorio indígena. Con la reactivación de la industria petrolera a finales de los años cincuenta, avanzó el establecimiento de nueva infraestructura hacia al oriente del territorio ocupado por los Barí, entre el casco urbano de Tibú y Río de Oro, con ello se destruyeron otras cinco comunidades y numerosos bohíos. Inició entonces un periodo de alrededor de doce años que significó la última y dolorosa lucha de este pueblo indígena por su territorio.

Como respuesta a los ataques de los Barí en contra de los colonos, los campesinos decidieron organizarse para perseguir a los indígenas y vengar a sus compañeros muertos, que según el Instituto de Desarrollo de la Comunidad (Tomo I, 1971), llegaron a cien entre 1957 y 1963 (Salazar, 2005).

La violencia entre liberales y conservadores -o la "guerra de los colores" como se conoce en la región-, fue intensa en varios municipios del Catatumbo y determinó la llegada masiva de personas que huían de regiones aún más violentas. Este fenómeno nutrió la ya considerable ola poblacional de la "colonización petrolera". A principios de la década de 1960, otros grupos de campesinos colonos continuaron penetrando al territorio Barí, desde Tibú hasta La Gabarra por el oriente; desde el sur por Convención, El Carmen y El Tarra y, desde el occidente, por Curumaní y Pailitas.

En ese contexto de confrontación con los colonos, los Barí optaron por el sedentarismo como una medida extrema, sus prácticas de subsistencia se modificaron, establecieron, contrario a su tradición, un sistema de cultivos estacionario y comenzaron a comercializar los excedentes de su producción a la manera campesina. Incursionaron incluso en cultivos tecnificados de cacao y adoptaron la ganadería como forma de ampliar su base alimentaria.

La entrada masiva de pobladores vino a la par con nuevos virus y enfermedades que los Barí no conocían y para las cuales no tenían las defensas necesarias. En consecuencia, sufrieron cientos de muertes por epidemias de bronquitis y sarampión y, pese a los tratamientos, no lograron combatir eficazmente estas enfermedades.

Estas situaciones i) las diversas y nutridas olas de colonización en varios periodos, ii) las misiones religiosas, iii) los asesinatos promovidos por las empresas petroleras y, iv) las enfermedades, significaron la muerte de más de la mitad de la población Barí: según Roberto Pineda (Salazar, 2005), en menos de una década -entre 1950 y 1960- la población Barí pasó de tener 1.800 a 800 personas. Beckerman sostiene que la población Barí, a lo largo del siglo XX, pasó de tener 2.500 habitantes en 1910, a 800 en 1960, lo que indica una reducción de cerca del 70 por ciento de su población (Salazar, 2005).

Un sabio mayor de Bridicayra relató que para 1970 los indígenas optaron por entablar otro tipo de relacionamiento con los colonos, esta vez con la negociación a través de la palabra, estableciendo un acuerdo que les permitiera a los campesinos asentarse en esas tierras por un tiempo limitado, luego del cual debían abandonar el territorio. Los colonos no solo incumplieron el convenio, sino que incrementaron el número de personas y alinderaron terrenos. De acuerdo con un sabio Barí, "rompieron ese lazo de amistad que se había creado":

> Nosotros les permitimos que ingresaran porque ellos dijeron que se iban a quedar unos días y luego resultó que faltaron a la palabra y se quedaron todo el tiempo. De esta forma ellos empezaron a trabajar la tierra durante varias lunas y luego ellos regresaron para Curumaní, en el departamento del Cesar. Después regresaron no solo ellos, sino que trajeron más compañeros blancos que no conocían los Barí. Estos colonos siguieron abriendo caminos y terrenos, talando bosques para cultivar la tierra y así empezaron a alinderar fincas. Los Barí no sabían qué estaba pasando, ni lo que pretendían hacer. Con el tiempo se dieron cuenta que se habían adueñado de las tierras, porque cada uno de ellos y sus familias habían agarrado pedazos inmensos de tierra. Estos colonos le daban a los Barí panela, sal y otros productos alimenticios, supuestamente regalados. Cuando los Barí les fueron a reclamar las tierras, les dijeron que les tenían que pagar (...). Los blancos nos engañaron en ese entonces, les dimos toda la confianza y rompieron ese lazo de amistad que se había creado (Ñatubaiyibarí, 2017a).

Pese a su historia de pueblo guerrero, los Barí optaron por una lucha sin violencia, para evitar más muertes a causa de la defensa de su territorio. Dada la presencia de quienes consideran como invasores, los Barí ya no pueden practicar la caza, la pesca, transitar por sus caminos ancestrales, o ir a sitios donde quedaban los bohíos ancestrales, lugares sagrados

donde realizaban pagamentos, porque estos ya "han sido poseídos y destruidos por estas personas, generando propiedades privadas".

Perdieron la posibilidad de movilizarse libres por su territorio, hecho que resienten como pueblo, en especial los mayores, porque ya no pueden transmitir sus conocimientos a los jóvenes. Así se consolida la pérdida de la sabiduría ancestral que, con la muerte de los ancianos, es en la práctica un menoscabo definitivo.

Los mayores se sienten desplazados de su territorio ancestral. Los jóvenes dejan de conocer elementos fundamentales de su cultura y de su historia. Las mujeres ya no pueden hacer sus actividades tradicionales propias, como cazar tortugas. El pueblo indígena se queda sin su legado. Todos pierden.

Las reivindicaciones actuales del pueblo Barí se relacionan con i) la legalización, ampliación y reconocimiento del territorio ancestral, ii) la de los territorios colectivos y, iii) el derecho a moverse libres por su territorio: "queremos movernos libremente sin que nadie nos tenga que estar limitando, así como los peces, los bocachicos que vienen del lago de Maracaibo y suben hasta las cabeceras de Río de Oro sin ninguna complicación, así nos debemos sentir nosotros, para nosotros es libertad, eso es lo que nosotros queremos" (CNMH, entrevista, líder Barí, resguardo Motilón Barí, 2016).

2.

SOMOS DE TIERRA, MADERA Y AGUA

A la existencia ancestral del Pueblo Barí, se suma que la región es de predominio campesino, población que se ha dedicado históricamente al cultivo de la tierra, la pesca, la cacería y cría de animales. Han planteado su subsistencia sobre la base de la producción y comercialización agropecuaria. Los Barí recibieron de su padre creador Sabaseba instrucciones que han determinado su forma de relacionarse con su territorio: trabajar, cazar y pescar en comunidad; vivir en comunidad en el bohío; enseñar el trabajo de la tierra, de la caza, de la pesca y de la construcción del bohío; y cuidar y proteger la naturaleza (Ñatubaiyibarí, 2017b).

La identidad de las y los catatumberos está entrelazada a la interacción con el territorio que habitan. Lo des-

criben a profundidad, lo dibujan con precisión, lo colorean y lo narran. Sus relatos en torno a la vida campesina e indígena durante los años sesenta, setenta y ochenta se basan en la descripción de su territorio, sus percepciones ante el marginamiento, la precariedad en la que han tenido que inventarse la vida y en las organizaciones sociales, campesinas e indígenas que han liderado para mantener una vida digna.

De la diversidad, del relieve, de la variedad de suelos, del sinnúmero de cultivos y de la crianza de animales, del plátano y la pesca en la zona baja hasta el fríjol y el café en las partes altas, de la riqueza hidrográfica y de los bosques como ejes de su identidad, hablaron una y otra vez habitantes del Catatumbo. Coincidieron en afirmar que, en los sesenta, setenta y ochenta, el Catatumbo era una región exuberante, una tierra fértil donde "nace lo que usted siembre". Como lo expresó un habitante de Hacarí "una tierra fértil, prolífica en vegetación (...) en cualquier parte donde haya tierra y caiga agua, crecen matas" (CNMH, hombre adulto, taller de memoria, Hacarí, 2016).

El Catatumbo se había consolidado como la despensa agrícola no solo de Cúcuta, sino que distribuía parte de su producción agropecuaria a Bucaramanga, a algunos sectores de la región caribe (Comité Provisional Impulsor, 1990) y a Bogotá[65]. En el caso de La Gabarra (Tibú), un poblado al que apenas en los años sesenta habían llegado sus primeros pobladores, sus habitantes recordaron la abundancia que les permitía desarrollar una intensa producción agrícola: "cuando yo llegué a la finca donde nosotros nos criamos, llegué a los siete años, ahí sacaban *camionados* de cacao, de maíz, de plátano, de yuca, de zapote, bueno, de todo sacaban, de ganado, cerdos. Abundancia de todo, pesca. Eran camiones que salían de todos esos cultivos" (CNMH, taller violencia sexual, Cúcuta, 2016).

65 Ocaña es la vía de acceso y conexión del Catatumbo con las principales ciudades de la costa Caribe. Este carácter fue definitivo en esta época y lo ha sido también en términos de la dinámica armada y del tráfico de drogas.

Habitantes de La Gabarra y Campo Dos (Tibú) recordaron que la producción agrícola, la pesca y la ganadería eran la base del sustento de quienes habitaban esta zona baja de la región. En particular, la producción de cacao, maíz, patilla, yuca y plátano, cultivos de pancoger que permitían el sustento familiar. Un estudio elaborado por el Instituto de Desarrollo de la Comunidad de la Corporación Minuto de Dios en los años sesenta, mostró cómo la tierra se destinaba, según el porcentaje de superficie cultivada, al cultivo pastos, plátano, arroz, maíz, cacao y yuca. Un poco más del 80 por ciento de las fincas (consideradas en el estudio) destinaban parte del área cultivada al plátano (Tomo 1, 1971, página 262).

En el caso de los habitantes del alto y medio Catatumbo, dadas las condiciones ambientales y el relieve de esta parte de la región, sus habitantes se dedicaron al cultivo de fríjol, café, caña panelera, cacao, plátano, arroz, cebolla y arveja, en menor escala.

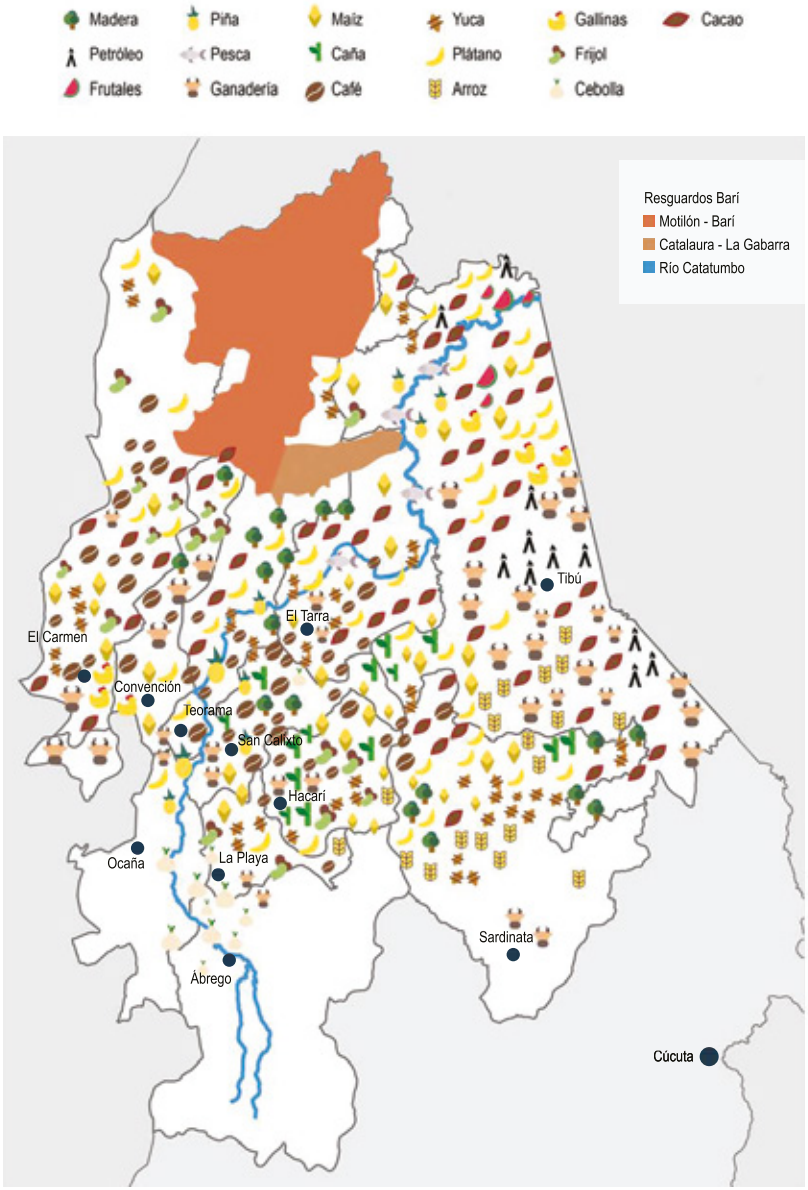
Representación gráfica de las veredas El Limón y El Pantano del municipio de Teorama "en el tiempo de antes", en referencia a los años 60 y 70 (detalle). CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016. Fotografía: Jaime Landínez para el CNMH.

En las zonas norte y centro del municipio de Convención, uno de sus habitantes recuerda:

> Convención y la parte norte y centro del municipio, donde quedan las veredas de Cartagenita hacia abajo, Miraflores, Las Pitas, La Trinidad, La Libertad y Honduras, eso eran unas veredas o un sector del municipio donde el producto insignia o lo que se cultivaba era el fríjol, salían toneladas de fríjol. No te podría decir una cifra en este momento porque sería mentirte, pero salían era toneladas porque yo trabajé en los camiones con mis hermanos y trabajé como comerciante también comprando fríjol para allá (CNMH, entrevista, hombre adulto, Convención, 2017).

Los Barí también desarrollaron producción agropecuaria en sus territorios, predominaban los cultivos de cacao y plátano, pero también maíz, fríjol y en menor escala, arroz, a la par de la ganadería en pequeña escala. En general eran para su consumo interno, pero también para la venta y la generación de ingresos, con los que compraban arvejas, azúcar, aceite y herramientas de trabajo (CNMH, hombre adulto Barí, Cúcuta, 2017).

Mapa 6. Producción agropecuaria en el Catatumbo 1960-1990



Fuente: CNMH, elaboración propia con base en ejercicios colectivos de cartografía social y entrevistas, 2018.

La vida campesina e indígena en el Catatumbo pasa por su riqueza hidrográfica. La cuenca del río Catatumbo recoge las aguas de otros ríos, quebradas y caños que se extienden por veredas y poblados. Son lugares sagrados, fuente de alimento, medio de comunicación, espacio para el encuentro y la recreación y símbolo de su identidad como catatumberos y Barí.

En particular, participantes de los talleres recordaron cómo en los años setenta y ochenta estos cuerpos de agua solían ser mucho más caudalosos, de modo que "cuando eso no se podían pasar", destacando además la abundancia de peces y de fauna acuática que albergaban, que unido a la diversidad de especies terrestres en los bosques y montañas de la región, hacen de esta una zona rica en biodiversidad. Con respecto a la pesca, un habitante de Campo Dos (Tibú) relató cómo:

> Mi papá nos decía que cuando él llegó a Tibú el único pescado que compraban en el puerto era rampuche, pero rampuche muy grande, muy bonito; paletón, balardo, esas tres variedades. Lo que era la mariana, manamana, todos los otros peces los regalaban. El pescador lo sacaba de la atarraya y lo volvía a soltar al río porque no lo compraban, pero de vez en cuando echaban pa' regalar a la gente que llegaba por ahí [y le decían] "tome, llévelo" y vendían los otros. Luego fue escaseando eso, ahorita no hay nada, o sea, lo que antes regalaban ahorita ni vendido se consigue, ha cambiado tanto eso ahí (CNMH, recorrido territorial 12, Tibú, 2016).

En Tibú la pesca fue una actividad tan importante que en Campo Dos se creó una asociación de pescadores "que la vida de ellos era pescar porque había muchisisísimo rampuche" (CNMH, recorrido territorial 12, Tibú, 2016) y otra dedicada a hacer harina de pescado dada su abundancia (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016). Un sacerdote recordó que, hacia finales de 1986, cuando fue por primera vez a La Gabarra, vio cómo salían camiones llenos de pescado seco con destino a Bogotá y cómo de las veredas llegaba en abundancia ganado para sacrificio.

En síntesis, los relatos de campesinos e indígenas muestran que entre 1960 y 1990 había tanta abundancia de alimentos que era mínimo lo que no se producía en la región.

Los ríos son un referente identitario muy importante en la región, en particular para aquellas personas que habitan lugares por donde cruza el río Catatumbo. Detalle de dibujo. CNMH, diálogo con campesinos, Cúcuta, 2016. Fotografía: Camilo Ara para el CNMH.

Por ser una región de selva húmeda tropical la explotación maderera se convirtió, en especial en los años tempranos de la colonización, en actividad fundamental de los nuevos habitantes, al punto de que en el municipio de Teorama existe un corregimiento que se llama El Aserrío, un habitante de Teorama lo recuerda así:

> Se trabajaba mucho en la explotación maderable en esa época. La gente, principalmente había muchos antioqueños que se movían era sacando madera de abarco[66] en la región, en la parte de Filo

66 Madera colombiana conocida porque tiene una muy alta durabilidad natural.

> Gringo, toda esa zona de Tibú, vivían de sacar madera de abarco y sacaban la raíz de abarco y la sacaban para venderla, para hacer muebles (CNMH, entrevista, hombre líder comunal, Teorama, 2016).

En la memoria de los habitantes de la región están grabadas las múltiples actividades culturales que unían a la comunidad. Por ejemplo, la Fiesta del Campesino en La Gabarra, en la que se hacían reinados de la ganadería, del cacao y del comercio. "Eran las reinas muy hermosas" recuerda un tibuyano. Otra remembranza que los emociona son los grupos de música en las ferias y fiestas, grupos que incluían guitarra, tiple, acordeón y bandola, se hacían coplas y se bailaba la *machetilla,* música tradicional cercana a la carranga que aún se interpreta y disfruta en el Catatumbo, en particular en la zona alta.

Agrupación de machetilla en el municipio de El Tarra, sin fecha. Fotografía cortesía de Alirio Antonio García, El Tarra. Archivo personal.

Los Barí relatan que para esa época llevaban a cabo actividades tradicionales que, en su mayoría, se mantienen en actualidad. Estas actividades se realizaban en conjunto con la población Barí del lado venezolano: festival del canto y la flecha, la carrera o maratón, el tiro al blanco con arco, la lucha, el nado y la resistencia al agua, actividad que:

> Consiste en agarrar un caimán, debe ser una persona fuerte, además de ser fuerte, tiene que ser resistente en el agua, porque es una lucha en sí con lo físico (...) una vez que se enlaza el caimán (...) la otra persona lo debe agarrar al caimán, de modo que no lo puede soltar. El otro lo que hace es jalar el lazo, dándole la seña que ya lo agarró, [que] ya lo tiene. Entonces lo jalan dentro de cinco [personas] para sacarlo de modo del que va sosteniendo con fuerza crea conveniente. Entonces cuando él cree conveniente saca el caimán, que no se pueda mover (CNMH, entrevista, hombre líder social Barí, Cúcuta, 2017).

Barí practicando el tiro al blanco. Fotografía de Karolay Arabadora Chimana para el componente de comunicaciones del proyecto Catatumbo, memorias de vida y dignidad, 2016.

En los años sesenta y setenta, los campesinos que llegaron a habitar el Catatumbo recuerdan haber interactuado con los Barí, aunque se dificultaba por cuanto no hablaban la misma lengua. Una mujer que creció en La Gabarra lo relató de este modo:

> Era todavía selvático, muy montañoso, mi papá fue fundador [colono] de allá (...). En ese entonces [los Barí] hablaban mucho el idioma de ellos y yo molestaba mucho a aprenderlo pero no era capaz, me decían que volviendo a nacer lo aprendía (...) ellos siempre hablaban Barí y nosotros no nos podíamos comunicar (...). Los miré muchas veces en el pueblo y también a la finca pasaban muy seguido, a veces hablaban español, pero casi siempre trataban de hablar el idioma de ellos (...) entonces yo terminaba peliando con los niñitos pequeños indígenas y yo les decía en mi idioma que por qué no me hablaban español, que por qué tenía que hablarles y no me contestaban, tal vez no me entendían tampoco, ¡entonces quedábamos en la misma! Jugábamos, sí, haciendo travesuras, pero ya era con señas porque no podía hablarles (CNMH, entrevista, mujer adulta, Cúcuta, 2017).

Además del idioma, los campesinos sentían extrañeza hacia los Barí por su desnudez: "no andaban así con ropa como uno, andaban tapadas las partes íntimas y la mujer era sin camisa, ella solamente se tapaba abajo y lo otro era destapado" (CNMH, entrevista, mujer adulta, Cúcuta, 2017).

Campesinos del municipio de El Carmen recuerdan cómo, cuando ya se podían comunicar en español, los Barí les ayudaban y asesoraban en labores del campo: "ellos más bien le daban consejos a uno, esto se hace así, porque ellos tienen más conocimiento que uno para tratar lo que es la montaña o los caminos. Ellos nos decían a nosotros que había[mos] perdido la fuerza por haber comido sal y que había[mos] perdido la vista por haber comido sal" (CNMH, grupo focal, El Carmen, 2017).

Para los Barí, aunque los campesinos no siempre entraron a la fuerza a sus tierras, la llegada de colonos significó seguir perdiendo de a poco su territorio ancestral (CNMH, grupo focal 1 Barí, Tibú, 2016). Además de la marcada diferencia cultural entre campesinos e indígenas, sobre todo, en su relación con la tierra, pues los primeros lo hacían de forma individual y los Barí de manera colectiva:

> Los Barí nunca se dieron cuenta que cada vez que ingresaba un campesino [a territorio Barí] lo primero que hacía era marcar la tierra como una forma de propiedad de ellos (...). Los Barí siempre hemos sido nobles, entonces por ser mi amigo yo le decía: "toma, aquí te dejo este pedazo de tierra para que tú cultives plátano, yuca y cultivos de pan. Te dejo esta tierra para que usted cultive", entonces lo que hacía era que el Barí nunca se daba cuenta que él se podía quedar con esa tierra (CNMH, entrevista, hombre líder social Barí, Cúcuta, 2017).

Los colonos llegaron tumbando la montaña, impulsaron procesos de economía campesina de auto subsistencia y buscaron relacionarse con los mercados en los principales centros urbanos. Esto produjo el encuentro -y en ocasiones desencuentro- de formas diferentes de relacionarse con la tierra, llevar a cabo la producción de alimentos y comprender el territorio. Ante esta nueva dinámica, los Barí mencionaron que Sabaseba les legó la responsabilidad de comunicar a los campesinos que "este es nuestro territorio" (CNMH, grupo focal 1 Barí, Tibú, 2016), una relación que en momentos fue de tensión, como se describió en el capítulo 1 y que se constituyó en una disputa aún vigente en el Catatumbo, como se verá en detalle en el capítulo 6.

2.1. Marginamiento y Estado

En general, las descripciones que hicieron habitantes de la región sobre sus condiciones de vida durante los años sesenta, setenta y ochenta están relacionadas con la precariedad. Si bien reconocen que en el campo podían subsistir al labrar la tierra y cultivar productos de pancoger, sus relatos de la vida en el campo hablan de situaciones de pobreza, falta de vías y de acceso a servicios de salud y educación, así como graves problemas para comercializar la abundante producción agropecuaria descrita.

Para la época, en las zonas rurales del Catatumbo con frecuencia las personas se movilizaban a pie durante horas de marcha y era necesario sacar los productos agrícolas en mula o en canoa, pues solo los cascos urbanos de los municipios contaban con carreteables, aunque siempre en mal estado, que les permitían relacionarse con los centros urbanos más habitados como Ocaña y Cúcuta. Una mujer de Hacarí recordó los impactos que traía a los campesinos el pésimo estado de las vías:

> La comunidad [era] muy trabajadora, sembraban plátano, yuca, fríjol, maíz, cacao, todo se producía, una parte del San José del Tarra tenía arroz. ¿Cuál era el problema del campesino en ese entonces? Esos caminos tan difíciles para sacar sus productos, hasta aquí [casco urbano de Hacarí] en mula, luego sacarlo en camiones para Ocaña y ya no se los compraban porque el plátano estaba negro, ya estaba dañado y ellos preferían botar ese plátano, la yuca y lo mismo pasaba a veces con el fríjol (CNMH, entrevista, mujer adulta mayor docente, Hacarí, 2016).

Estas trochas y caminos que se abrieron, en principio por los Barí, luego por las empresas petroleras norteamericanas y después por los procesos de colonización descritos en el capítulo 1, jugaron un papel central en

el poblamiento del territorio, pues los colonos llegaron por allí a hacerse a sus tierras de manera informal y otros a través del programa de titulación de baldíos a cargo del Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), en especial, en el bajo Catatumbo.

Para la década de los noventa, se estimaba que "en los municipios del Carmen, Convención y Teorama (...) solo existe alguna red vial alrededor de las cabeceras municipales y el 80 por ciento de sus territorios no tienen ninguna integración" (Comité Provisional Impulsor, 1990, página 2). Pese a la precariedad de vías, es importante considerar que las existentes jugaron un papel central en tanto base de la primera y la segunda ola de colonización en la zona del bajo y medio Catatumbo. Se pueden definir cuatro grandes olas de colonización, en particular para el bajo Catatumbo (CNMH, 2015b):

- Colonización por petróleo: comenzó en los primeros años hasta los años cincuenta del siglo XX y fue liderada en esencia por trabajadores de las empresas petroleras.
- Colonización del río: que puede trazarse a mediados de los años cincuenta, cuando un grupo de colonos se asentaron en lo que se conoce hoy como La Gabarra y el Km. 60 en Tibú. A estos le siguieron familias venidas de otros municipios y departamentos huyendo de los estragos de La Violencia.
- Colonización dirigida: entre 1967 y 1968, cuando el Incora (hoy Agencia Nacional de Tierras), con oficina en Tibú, inició un programa de titulación de tierras baldías a colonos. Para el primer semestre de 1971 había adjudicado tierras a 100 colonos por un total de 5.505 hectáreas, correspondientes a más del 10 por ciento de los fundos calculados para ser adjudicados en la región (Instituto de Desarrollo de la Comunidad, 1971, página 261)[67].

67 El 80 por ciento de los baldíos titulados por el Incora entre 1901 y 2012 se concentra en el período 1901-1988, de tal modo que, en el caso de Tibú, la mitad de su superficie corresponde a predios que iniciaron su tradición como baldíos (CNMH, 2015b, página 39).

- Colonización por coca: que se hace patente a finales de los años ochenta y que tiene como eje principal la expansión del mercado de la coca, con énfasis en La Gabarra y sus veredas aledañas.

Sobre la posibilidad de hacerse a un predio de manera informal, es importante señalar que en la región se logró por medio de la práctica del jornal. Como lo narró un habitante San Calixto:

> Él [su padre] consiguió la tierra al jornal. A él se la vendió don Enrique y siguió trabajándola al jornal. Él le dio un contadito como de cinco pesos y de ahí siguió pagándole a punta de jornal. Cuando don Enrique tenía trabajo entonces él iba y le ayudaba y le siguió pagando así hasta que le pagó su propio pedacito de tierra y ya comenzamos a trabajar (CNMH, entrevista, hombre campesino de San Calixto, Cúcuta, 2016).

Esto conllevó a que en la región se estableciera una estructura de propiedad de la tierra donde la palabra y el trabajo jugaron un papel central, por lo cual en la gran mayoría de los casos la tenencia de la tierra no se encontraba respaldada por un documento jurídico que la legalizara, salvo en algunos casos donde existía una carta venta que se asumía como las escrituras del predio[68].

En este sentido, al tratarse de una región habitada en gran parte por colonos que iban abriéndose camino por ríos y montañas, aserrando y cazando, en el Catatumbo no se estructuró un grupo de grandes terratenientes y hacendados, a diferencia del vecino departamento del Cesar. La excepción fueron Sardinata y la zona sur del municipio de Tibú, donde

68 Esta situación ha implicado que, pese a que las y los catatumberos reconocen una tradición en la propiedad de sus predios, hay una percepción de ilegalidad desde el nivel central del Estado. Esta tensión entre legalidad/ilegalidad se hace presente en otros aspectos de la vida de los habitantes de la región, como en el caso del cultivo de la hoja de coca en sus inicios, cuando los campesinos percibían su cultivo como cualquier otro, mientras el Estado ya lo criminalizaba.

los entrevistados anotan que se asentaron dueños de grandes extensiones de tierra, muchos de ellos militares y contratistas de las empresas petroleras ("doctores"), las que abandonaron décadas después por presión de la guerrilla, como consecuencia de los procesos de parcelación que llevó a cabo el Incora y a la invasión de predios que efectuaron algunos campesinos[69].

Esto implicó que el problema para el campesinado del Catatumbo no fuera el acceso a la tierra, sino cómo sobrevivir aun teniéndola pues, aunque sus predios fueran suficientemente productivos, no se lograba sacar los productos a los mercados regionales.

Si bien puede afirmarse que la región del Catatumbo fue marginada del resto de Norte de Santander (y así continúa), veredas y centros poblados alejados de las cabeceras municipales lo vivieron con mayor intensidad. Esto produjo que sus habitantes no tuvieran acceso a servicios básicos como salud, educación, acueductos, agua potable y fluido eléctrico; así mismo, que comunicarse con las poblaciones cercanas fuera, cuando menos, una travesía.

Las personas de las áreas rurales no contaban con las más básicas condiciones para enfrentar situaciones comunes que afectaran la salud, como lo narró un habitante de la zona rural de El Carmen: "si se enfermaba una persona de mordida de culebra o una señora de mal de parto, enseguida este le gritaba a aquel y así salir sesenta o cuarenta personas a

69 En Tibú se hizo referencia a los casos de las haciendas La Galicia, que abarcaba lo que hoy son dos veredas, La Ponderosa y Los Lirios (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016) y en Sardinata las haciendas Ecuador, Paisandú y Berlín, que luego fueron veredas (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016). Esta estructura de la propiedad de la tierra de pequeños fundos facilitó el proceso de organización, movilización y demandas campesinas, a diferencia del Cesar, donde sí se dio la consolidación de una clase terrateniente que contó con más recursos para detener los reclamos sociales (CNMH, entrevista, defensora de DD.HH., Bogotá, 2016).

traer un güando[70], de Honduras, de la Bogotana, hasta aquí [a] Guamalito" (CNMH, grupo focal, El Carmen, 2017).

Habitantes de La Gabarra narraron cómo para los años ochenta podían tomarse días para viajar desde su corregimiento hasta Cúcuta o desde el casco urbano de su municipio a Convención, en particular por las malas condiciones de la carretera, siempre agravadas por lluvias y deslizamientos. Un habitante de El Aserrío, corregimiento de Teorama, comentó que esto pasaba "porque [estábamos] sumidos en la pobreza absoluta". La educación muy precaria. Nosotros en la región nos enfermábamos y si no echábamos para Ocaña o echábamos para Cúcuta nos teníamos que dejar morir o teníamos que ir donde los yerbateros (...); unas carreteras pésimas. No teníamos energía, la educación era pésima porque había que pagar el docente" (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

El acceso a la educación y las condiciones en las cuales se ejercía la labor docente son dos ejes sobre los que se hizo énfasis en los espacios colectivos, al relatar la vida cotidiana de los habitantes del Catatumbo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Maestros de la región narraron las condiciones de precariedad en la que muchos tuvieron que arrancar sus labores como profesores, algunas de las cuales se mantienen, como lo contó la que para entonces era una niña estudiante de El Tarra:

> El padre Horacio Olave nos llevó a Bucaramanga (...). Yo estuve con las Hermanas de la Presentación, estuve allá 14 meses (...) porque la idea del padre era llevar algunos muchachos a prepararlos allá en La Turena para que termináramos el estudio porque aquí no había escuelas, era muy lejos. Yo cuando estudié la primaria y eso, de la vereda caminábamos hora y media para ir a la escuela a estudiar (CNMH, entrevista, mujer adulta, lideresa comunal, El Tarra, 2017).

70 Especie de hamaca o chinchorro utilizado en la zona para movilizar enfermos entre varias personas.

Cuando existían, las escuelas se encontraban en malas condiciones y poco abastecidas, como lo referenció un docente que recuerda cuando llegó a la zona rural de Las Mercedes:

> Llegué allá y era un establo con techo, sin puertas, totalmente abierto, un solarcito. Paredes tenían como tres, cuatro hileras de bloque en cemento, unos muros donde en la noche se quedaba el ganado, los animales. Era un potrero, no había portón ni nada, entraban y salían. Había un pequeño bordo donde algunos chicos y unos padres de familia habían hecho una similitud a un campo deportivo, les hizo falta arreglarlo, más tarde con la ayuda de ellos logramos arreglarlo; hicimos varios campeonatos inclusive. Pues en mi novatez me daba nostalgia llegar y encontrar que no había bancas, tocó encima de troncos con orillones, cortaban la madera para venderla y esos pequeños orillos de la madera que sacaban los convertimos en pupitres, en mesas para poder trabajar con los chicos, muchos en el piso. Los poquitos libros que había ahí en la entre comillas biblioteca... habían unas habitaciones que no tenían puertas, no había cocina (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

Frente a este panorama, la entonces Prelatura de Tibú (hoy diócesis de Tibú), en cabeza de Monseñor Leonardo Gómez Serna, puso en marcha los programas de Maestros Misioneros, promotores de salud y celebradores de la palabra, que duraron hasta entrada la década de los noventa y se implementaron en el municipio de Tibú y El Tarra, entonces corregimiento de San Calixto. Así lo relató un sacerdote de la diócesis:

> Él desde que llegó a finales del año 1979, lo primero que hizo fue colocarse a favor del campesino, porque el campesino en el Catatumbo no había ni una escuela, y Monseñor lo primero que hizo fue: vamos a recuperar la legitimidad de los derechos humanos desde la salud, desde la educación, desde el agua potable, desde la energía eléctrica. Y él comenzó esa campaña. Tanto que todo el

> plan de Maestros Misioneros fue generar una escuela para cada vereda y Gilberto, Rey, Luis Eduardo, todos los sacerdotes paisas que llegaron, son todos de esa experiencia. Él se reunía con las empresas [petroleras] y donde se podía, se hacía una escuela, se hacía un puesto de salud. Tanto que el seminario fue hecho con esta visión, porque aquí no había instalaciones (CNMH, taller de memoria sacerdotes, Tibú, 2016)[71].

En medio de estas condiciones en la prestación del derecho a la educación de pobladores rurales del Catatumbo, el personal docente contratado por el Estado jugó un papel decisivo al convertirse en una de las pocas formas en que hacía presencia, tal y como lo relató un docente al referirse a las circunstancias de las escuelas rurales de los corregimientos de Luis Vero (Sardinata) y Pachelli (Tibú):

> Ahí estuve dos años [escuela rural en Pachelli] y ya le digo también, una situación parecida [a la de Luis Vero], o sea, son corregimientos parecidos: el abandono del Estado por ejemplo en el caso de las vías, de los servicios públicos, la escuela. La escuela donde yo trabajé carecía absolutamente de todo: no había agua, los niños para tomarse un agua tenían que llevar de la casa, no había servicios sanitarios, si el niño tenía necesidades, corra pa'l monte. Energía eléctrica, ya les digo, no había en los caseríos mucho menos en las veredas, entonces automáticamente un abandono total del Estado. La única presencia del Estado únicamente el profesor y eso cuando lo contrataban y cuando lo contrataban a veces duraban dos, tres meses en ser contratado para llegar. Y el corregidor, el corregidor, el inspector de policía era la única presencia que tenía el Estado en esas zonas (CNMH, entrevista, docente, Tibú, 2016).

71 También fue recordado que monseñor Leonardo Gómez Serna impulsó programas de construcción de vivienda en el casco urbano de Tibú y creó la emisora Ecos del Catatumbo: "esa fue una emisora importante para ese momento, tenía una cobertura bastante buena, y pues fue una cosa que vinculó mucho a la gente, la gente participaba, escribía" (CNMH, entrevista, sacerdote, Pamplona, 2016).

Como la educación era más que precaria y los servicios básicos insuficientes, la presencia del programa de alfabetización para adultos de Radio Sutatenza -traído a la región también por un sacerdote de Ocaña-, fue bien recibido por las comunidades en las veredas, y recordado en particular en La Playa, Hacarí y Teorama. A través de sus radios, muchas personas "aprendieron a sumar, a conocer las vocales, a aprender a firmar, a conocer el abecedario y mucho más" (CNMH, entrevista, adulto mayor, líder comunal, Hacarí, 2016) y sus orientaciones abarcaron un amplio abanico de temas para mejorar las condiciones en el campo:

> Yo me dediqué ese tiempo a alfabetizar, a enseñar a leer, lo poco que yo sabía se los transmitía y tuve 35 alumnos. La gente era muy agradecida. Yo les explicaba lo que sabía y muchos aprendieron (...). Muy dedicado leía algunos libros, cualquier enfermedad [de los animales] ahí mismo mi papá recurría era a mí. Que tal remedio, apliquémosle esto (...). Yo era muy técnico en eso porque en ese entonces existía Radio Sutatenza. Yo hice un curso a distancia, por el radio y me mandaban las cartillas (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Ocaña, 2017).

La débil presencia del Estado en la región devino en que muchas de sus funciones y responsabilidades, fueron asumidas, entre otros, por la iglesia católica, en particular en la zona del bajo y medio Catatumbo. De hecho, hasta 1991 las partidas de bautismo fueron la única forma de identificación en las zonas rurales, pues no se contaba con registradurías municipales. Como lo narró un habitante de un corregimiento de San Calixto, resumiendo su percepción: "en esa época como no había ni guerrilla ni la ley, tampoco. La ley era poco lo que aparentaba por ahí en esos lados" (CNMH, entrevista, campesino, Cúcuta, 2016).

Las referencias adicionales sobre el Estado para las décadas de los años sesenta y setenta se centraron, en lo fundamental, en la presencia de los corregidores y los inspectores de Policía. Los primeros eran nombrados

por la Gobernación del Departamento y representaban la máxima autoridad en veredas y corregimientos: "él llegaba [y] era como si llegara el presidente" (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016), pues se le tenía mucho respeto. Este funcionario se encargaba de delimitar linderos, resolver conflictos entre vecinos, hacer levantamiento de cadáveres, controlar el consumo de "chirrinche" o tapatusa, tragos tradicionales destilados y recibir las partidas para los caminos (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016). En ocasiones, el corregidor era acompañado por un inspector de Policía o por un puñado de policías auxiliares. Sin embargo, en otros casos ni estos representantes del Estado estaban presentes y no había a quién acudir, como fue relatado en Teorama.

Luego, desde la gobernación departamental, se nombró por decreto a los alcaldes como representantes del Estado en los municipios, aún no había elecciones populares. Sin embargo, es a partir de la figura del alcalde que las personas sienten que empieza un inconformismo en las comunidades por los "malos gobiernos" y las "malas administraciones" y por la falta de planificación de la acción estatal en términos de desarrollo social, porque "si hubiéramos tenido desde el comienzo del nacimiento de la república buenos administradores, con buena conciencia y buena voluntad de hacer las cosas bien hechas, habrían planificado el desarrollo del país, mirando al país desde el punto de vista social" (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016).

Según la percepción de algunos habitantes, los alcaldes nombrados por decreto no respondían a las demandas ni a las necesidades de las comunidades y, junto a su figura, surgieron las primeras referencias a la corrupción en la región, como otro de los elementos que ha alimentado el conflicto y que aún se mantiene vigente.

Personas consultadas en el Catatumbo, de alguna manera relacionan la presencia del Estado con la Caja Agraria, entidad que hacía préstamos

para adquisición de predios e insumos; la Federación de Cafeteros, que apoyaba la comercialización del grano, en especial en los municipios del alto Catatumbo; el Incora, en particular, en Tibú con su programa de reforma agraria y titulación de tierras baldías y el Idema (Instituto de Mercado Agropecuario) que fue referido en el municipio de El Tarra, donde hizo una presencia esporádica con capacitaciones para las cooperativas que surgieron con posterioridad.

2.2. Luchas por la autonomía

Ante estas circunstancias de precariedad y marginamiento, que se contraponían a la abundancia en recursos agropecuarios e hidrográficos de la región, se generó una tensión, campesinos e indígenas Barí se organizaron y buscaron, de manera colectiva, no solo paliar esta dinámica, sino ser reconocidos y proponer acciones y planes de mediano plazo que garantizaran una vida digna en sus territorios.

Las JAC, creadas por la Ley 19 de 1958, emergen como la primera y más importante forma de organización campesina que los habitantes rurales del Catatumbo recuerdan. Si bien se hizo referencia a formas colectivas previas como "los convites"[72], las "juntas campesinas", los "grupos de hecho"[73], o las primeras organizaciones de colonos, todas ellas buscando solucionar temas relacionados con linderos o intervenir en asuntos de riñas o peleas entre vecinos, son las JAC el germen del proceso organizativo autogestionario de los campesinos del Catatumbo y, luego, de otras

72 Jornadas de trabajo comunitario para arreglar caminos o mejorar construcciones, comunes en los años cincuenta y sesenta.

73 Grupos de menos de 25 vecinos de una vereda que se unen para resolver algunos problemas en su comunidad. Cuando el número excedía los 25 integrantes ya se podía conformar una JAC.

múltiples apuestas organizativas en la región, como se describirá más adelante y se detallará en el capítulo 6.

Las JAC, de esta manera, se concentraron en garantizar la provisión de servicios básicos para los habitantes de una vereda dada, en particular por medio de la intermediación y gestión ante las administraciones locales, con un énfasis en el trabajo colectivo que permitió el mejoramiento y/o construcción de obras tan importantes como la escuela veredal, los caminos, el acueducto y los puentes. Este trabajo colectivo era posible, pues "cuando eso la gente era muy bondadosa, muy colaboradora, muy generosa y aportaba trabajo gratis cuando se necesitaba alguna cosa" (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016).

Dado que, para legalizarse y obtener algún tipo de recursos, las JAC requerían de personería jurídica, en las comunidades adquirieron además un peso simbólico importante, pues representaban el órgano de autoridad y de Gobierno local de cada vereda. Como se les exigía tener estatutos, presidente, vicepresidente, fiscal, secretario y tesorero, ser presidente de la junta representaba ser "presidente de la vereda", un cargo con un estatus importante de autoridad y legitimidad. Así lo recordó un líder campesino de la época:

> En ese entonces llegué al pueblito. Tenía unas dificultades grandes el pueblito, no tenía servicios públicos ni básicos, obras muy insatisfechas. Me organicé, empecé a trabajar en movimiento comunal y ya en menos del año ya hacía parte de la mesa directiva de la junta de acción comunal y empezamos a hacer equipo para empezar a gestionar proyectos en búsqueda de servicios (...). En ese entonces se carecía mucho de las vías de acceso, no había acueducto, ni alcantarillado, electrificación y muchos servicios, la educación estaba en muy pésimas condiciones, el agua llegaba por tomas al pueblito, calles empedradas (...) y nosotros mirando la situación tan difícil que se vivía en esa época, en esa situación

> tan caótica empezamos a conformar delegaciones para empezar a gestionar proyectos a nivel departamental, incluso a nivel nacional. Mirábamos que era una zona muy abandonada por parte de los políticos de ese entonces, venían en épocas electorales y llevaban sus votos y prácticamente pues no dejaban nada, las prebendas que dejaban caían en manos de dos o tres personas y las absorbían, pero en servicio públicos y básicos no teníamos ninguna posibilidad (CNMH, entrevista, adulto mayor, Ocaña, 2017).

Desde principio de los sesenta, se registró el surgimiento de estas formas organizativas en el Catatumbo. Por ejemplo, la JAC de La Silla (Tibú) data de 1963, la de Maracaibo (Hacarí) de 1965, la de Mesa Rica (La Playa) de 1966, la de Pacelli (Tibú) de 1967, las de San Pablo (Teorama) de 1968. Un habitante del corregimiento Jurisdicciones, en Teorama, recordó así estos primeros años de organización comunal:

> Nosotros empezamos con un grupo de personas y en ese entonces hubo una historia hasta muy bonita y fue que empezamos a organizarnos (...) nosotros conformábamos cada ocho días, todos los sábados, la escuelita que teníamos en Jurisdicciones, porque allá había una escuelita viejita, una casita ahí con un saloncito mejor dicho y en ese saloncito todos los sábados hacíamos fiesta, hacíamos fiestas para recoger fondos (...) y poco a poco fuimos conformando el grupo. Entonces la gente empezó a organizarse (...). Llegaba la gente del Pantano, del Limón, de Guaranau, de San José, del mismo Jurisdicciones, de la Estrella Baja y de Santo Domingo y llegamos a tener casi un grupo de personas reunidas dentro de la comunidad, que no hacían parte de la Junta de Acción Comunal pero que llegaban todos los sábados y eran alrededor como de 150 personas, eso era mucha gente, mucha gente. Yo tengo una fotografía y precisamente yo compré una cámara fotográfica en ese entonces (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

Las escuelas veredales se convirtieron en el espacio que articuló muchas de las apuestas de las JAC. Fue allí donde tuvieron lugar con más frecuencia las reuniones de las juntas, se tomaron decisiones de importancia y fue desde donde se construyó un sólido tejido vecinal.

La importancia dada por pobladores rurales a las escuelas como espacios de encuentro y reflexión, así como al trabajo de docentes, motivó en las comunidades el trabajo colectivo en torno al mejoramiento del acceso a la educación de niños y niñas. De tal modo que, contando con espacios y prácticas de organización comunitaria como las JAC, en muchos casos se dio que las comunidades negociaron con la alcaldía local: ellos se encargaban de la construcción física del espacio y el municipio les debía garantizar el docente, como se realza en el relato de una mujer mercedeña que llegó a trabajar como docente en La Gabarra:

> Hubo una comunidad que no tenía escuela, la planta física no la tenían, entonces se reunieron ellos como comunidad y acordaron construir una escuelita con esfuerzos de la comunidad, se llama Caño Guaduas la vereda y que, sin que el municipio les aportara para la construcción de la planta física de la escuela sino lo que le exigían al municipio era que le garantizara el docente. Entonces yo fui la candidata para ir a trabajar a esa vereda que iban a construir allá (CNMH, entrevista, lideresa social, Cúcuta, 2016).

Además de su trabajo en torno a las necesidades básicas, las JAC representaron el escenario para encontrarse, compartir, conocerse mejor y llevar a cabo actividades de recreación y deporte entre los vecinos de una misma vereda. En el contexto de una región con predominio católico, las personas recordaron las celebraciones de Semana Santa, las épocas decembrinas, las fiestas patronales y los bautizos. Pero también se realizaban otro tipo de actividades, como bazares, campeonatos de fútbol, fiestas y carnavales:

> Se hacía un carnaval en La Playa el seis de enero, eran unas fiestas muy bonitas. La gente hacía sus disfraces, sus bailes, buscaban un sitio para hacer sus fiestas, salían los enmascarados y juntaban sus cosas, gallinas y muchas cosas y se hacía sancocho colectivo para toda la gente. Entonces era muy bonito, el dueño de casa colaboraba muchísimo, eso había buena producción de marrano, mataban un marrano, había gallinas (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Ocaña, 2017).

Escuela rural de El Tarra, vereda La Esmeralda. Fotografía: cortesía archivo Parroquia El Tarra, sin fecha.

Fue tan significativo el referente de las JAC en la región que hacia 1994 en Hacarí surgió la iniciativa de crear la primera JAC infantil, o "minijunta", en donde niños y jóvenes "jugaban a ser como los grandes, pero mejor" y que surgió en el marco de un trabajo artístico y cultural que se hacía preguntas por la realidad de la región. "Ellos, por ejemplo, planificaban el tener que hacer la visita al alcalde y (...) qué iban a gestionar. Al

comienzo comenzaron a gestionar caballetes de pintura, instrumentos musicales, gestionaron que la alcaldía aprobara el arrendamiento de una casa" (CNMH, entrevista, exgestor cultural, Bogotá, 2017), iniciativa que luego se convirtió en la Casa de la Cultura del municipio.

Uno de los promotores culturales recordó que para la época era necesario crear espacios que permitieran hacer catarsis del conflicto social y armado que se instalaba en el territorio, como se describirá en capítulos posteriores: "estos niños literalmente eran hijos de la guerra. Eran hijos de campesinos perseguidos, de campesinos que habían tenido que optar por la insurgencia, o que habían sido obligados a estar en el escenario de la guerra porque habían tenido que entrar también al servicio militar. Entonces encontrabas en una misma familia representantes de todos los actores armados (...). Hoy por hoy muchos de esos chicos son líderes, ya son gente grande, están en cargos administrativos, otros cayeron en ese mar turbulento de la guerra y entonces hicieron parte de los actores armados" (CNMH, entrevista, hombre exgestor cultural, Bogotá, 2017).

Uno de los niños participantes de la "minijunta", saxofonista y poeta, que se convirtió en el director de la Casa de la Cultura de Hacarí varios años después, fue asesinado por paramilitares en Aspasica (La Playa) y su caso es uno de los referentes de memoria del conflicto en Hacarí.

En las JAC se reprodujo una estructura de división del trabajo que asignó a las mujeres labores de cuidado, provisión de alimentos y tareas logísticas, mientras los hombres asumieron cargos de dirección y representación. Sin embargo, como lo expuso en su testimonio un líder comunal de La Playa, poco a poco este contexto se transformó:

> La mujer ha desempeñado un papel muy valedoso en todos los espacios tanto comunales como asociativos, ha llevado la batuta en la misma producción del hogar, en la parte también de las nece-

> sidades de la misma comunidad. Cuando ellas no podían trabajar como el trabajo duro, brusco, pero colaboraban mucho llevando la ración de comida por allá al corte, colaboraban haciendo los sancochos allá colectivos para todos, almuerzos allí en general, entonces ellas estaban siempre al tanto en la colaboración, en la ayuda mutua también, porque ellas han sido muy conscientes del beneficio. [En la junta directiva] en ese tiempo era muy poco lo que participaba la mujer, porque era muy sujeta cuando eso al hombre, los derechos eran muy limitados, entonces el mismo esposo le decía a la mujer: "no, mija, usted no puede porque mire los niños, quién hace el almuerzo para que lleve al corte" (...) y por cumplir con sus obligaciones en el hogar pues era muy poco lo que participaba como en la Mesa Directiva. Pero ya digamos en la década de los setenta, del [año] 75 en adelante, en los ochenta ya la mujer empezó a participar, ya empezó a sacarse un poco más de la cabeza, ya el tiempo se empezó a dividir (...). Yo conozco mujeres que en ese entonces eran mujeres emprendedoras, presidentas de JAC, mujeres inspectoras de policía también (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Ocaña, 2017).

Como ya se mencionó, las probabilidades de abastecimiento de bienes básicos, así como la comercialización de la producción agropecuaria, eran mínimas o inexistentes en el caso de mayoría de veredas y corregimientos. Las condiciones de comercialización en tiempos de cosecha implicaban participación de intermediarios que eran quienes al final se quedaban con las ganancias. A ello se sumaba que en la región no se hacía transformación de los bienes primarios que se producían, restándole posibilidades de ingresos a los campesinos y mayores opciones de mercadeo.

Las JAC comprendieron que esta situación impedía el desarrollo de otras iniciativas vecinales y que en la base de su identidad campesina se encontraba el intercambio en condiciones justas de su producción agro-

pecuaria. Es por esto por lo que, posterior a las tiendas familiares, diversas JAC impulsaron la creación de tiendas comunitarias, organizaciones de 10 o 15 familias que se propusieron hacerle frente a tres situaciones en concreto: i) la especulación y los altos precios de la canasta básica familiar, ii) el abastecimiento de productos y, iii) el transporte y comercialización de la producción agropecuaria hacia los principales centros de venta y consumo. Como lo expresa en detalle un líder campesino de la época:

> Yo comienzo a recorrer poco a poco el Catatumbo a partir de los ochenta y me encuentro con tiendas comunitarias en gran cantidad de veredas, municipio a municipio y comienzo a indagar sobre ellas y encuentro que no vino ningún chacho, ni ningún mago, ni ningún dirigente político de ninguna parte a crear las tiendas comunitarias, fue una necesidad de los campesinos desde siempre. Llegó el momento que esa comunidad a partir de su junta comunal se organizó, miró que tenía problemas por decir algo, de comercialización de sus productos, que tenía problemas de consumo porque necesitaba sus mercados y cada vez eran cuatro, seis horas de camino, dos o tres horas en una canoa o más para ir a conseguir una libra de panela y entonces simplemente por lógica determinaron que necesitaban esas tienditas para tener ahí un punto de abastecimiento mucho más cercano a sus casas, a sus viviendas, a sus fincas. Y entonces esas tiendas surgen del esfuerzo inclusive económico de la comunidad y de ahí su nombre (...). Fueron el ahorro personal del campesino que sacaba de su mismo fondito de alimentación semanal, daba una cuotica y esa sumatoria de 20, 30, 50, 80 cuotas de cada campesino, de cada vereda, sumaban un primer capitalito y con él se iba y se hacía un primer mercado, se traía, se vendía en la tienda, quedaban unos remanentes y cada vez se agrandaba un poquitico más el capital y así fueron surgiendo (...). Ya algunas comenzaban a liderar algunas cosas más, los mismos directivos de las tiendas que eran los directivos de la junta comunal, comenzaban a hacer un esfuerzo mínimo, por ejemplo, de

> comercialización. Entonces había un campesino que tenía un marranito para vender, porque tenía que ir a pagar una deuda a la Caja Agraria, o un novillito porque tenía una cuota vencida, entonces en vez de que se fuera a vendérselo al primer sinvergüenza intermediario que encontrara, la misma tienda comunitaria le compraba ese animalito, se lo dejaba a utilidades para que se siguiera beneficiando de él en su propia producción y con ese capitalito fortalecía mucho más la tienda. Fíjate que se comienza a dar rudimentos de comercialización en todo esto. Entonces cuando encontramos ese fenómeno nos proponemos comenzar a articularlo y cuando hablo de nos es porque no soy yo solo, yo soy uno de los dirigentes del Catatumbo. Pero comenzamos a aunar esfuerzos con la misma gente desde lo local hasta lo regional en un esfuerzo por ir articulando ese esfuerzo y que tuviera un sentido regional y ya no local; entonces unimos la tienda La Angalia con la de la otra vereda y vamos articulando y vamos como generando políticas comunes, vamos ayudándoles a fortalecerse económicamente, la que está más fuerte apoya un poco a la otra, comenzamos a reunirnos con los campesinos para que vean la importancia de ahorrar cualquier cosita que puedan en su tienda, que se lo aportan a su tienda para que le represente beneficios mayores y así va surgiendo eso (CNMH, entrevista, hombre movimiento cívico, Cúcuta, 2016).

Las tiendas comunitarias -había también droguerías comunitarias- se extendieron por toda la región, al punto de que en casi todas las veredas existió una. Incluso surgieron apuestas organizativas más amplias como la Astienjuri (Asociación de Tiendas y Entes Jurídicos), constituida en julio de 1993 en Tibú, respaldada por cuarenta y cuatro JAC y que se proponía producir y distribuir bienes y servicios con el fin de "contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y culturales" de las comunidades (Rincón, 2003, página 18).

En San Calixto, sus habitantes recordaron cómo "en todas las veredas" existió una tienda comunitaria y en particular hicieron énfasis en la Tienda del Niño Pobre, que estaba ubicada en el casco urbano del municipio, así como en las tiendas de las veredas La Taya, Palmarito y la del corregimiento Santa Catalina. En Hacarí, se hizo referencia a las tiendas de las veredas El Recuerdo (abierta en los ochenta), Maracaibo, Maracaibito, Buenos Aires y San Miguel. En El Carmen recordaron cómo los indígenas Barí iban a comprar a la tienda de La Bogotana, (cercana al bohío de Bridicayra en Convención), mientras en Teorama la tienda comunitaria de San Pablo se puso como un referente para la región por su alcance en esta comunidad. Con referencia a la tienda comunitaria de su vereda en Teorama, un habitante recordó:

> En Filo de San José habían tres tiendas: dos tiendas y la tienda comunitaria estaba en medio. Más sin embargo la gente iba a comprar a la tienda comunitaria porque era doscientos o cien pesos más barato. ¿Y cómo era más barato? Si yo tenía dos mulas y había que sacar el surtido de un producto hacia San José, que es prácticamente a una hora, yo iba, pero no cobraba. "Le tocó a Antonio ir a traer el surtido mañana, Antonio compra y trae el surtido; pasado mañana va Pedro, el domingo va Marina, después va José" y así íbamos, después iba menos; entonces eso hacía que las cosas se pudieran dar más económico, menos que los demás y así lo hacíamos (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

Al principio de los años ochenta, las tiendas comunitarias se habían extendido por toda la región[74]. Fueron la piedra angular de lo que en la región se reconoce como el movimiento cooperativo, cuyos inicios se remontan a los primeros años de la década de los setenta y que personas de la región relacionaron con el trabajo de los sacerdotes Horacio Olave

74 Estas expresiones de asociación comunitaria empezaron a disminuir en los años 91-93 con la violencia guerrillera, pero desaparecen por completo con el accionar paramilitar, como lo recordó un líder comunal del municipio de La Playa.

Velandia[75] y otros como Vicente Moreno y Eduardo Toscano (en El Tarra), principales impulsores y cuyo trabajo decidido hacia 1978 promovió la creación, junto con 32 campesinos, de la experiencia cooperativa que con mayor orgullo recuerdan las y los catatumberos: la Coomultar (Cooperativa Multiactiva de El Tarra):

> Para mediados de los ochenta ya teníamos cooperativas que hacían muy buena presencia en la región. Antes de El Tarra ser municipio, surgió allí Coomultar, la cooperativa multiactiva de El Tarra y era una cooperativa eminentemente de los campesinos. Y no solamente tenía la parte del consumo para los campesinos, sino que montó almacén agrícola que le compraba a los campesinos la producción de su cacao y de todos sus productos, la comercializaba en Cúcuta, en Bucaramanga. Una cooperativa que llegó a tener varios camiones propios, que comercializaba gran parte de los productos de toda la provincia de Ocaña. Entonces fue una cooperativa de mucho peso (CNMH, entrevista, hombre movimiento cívico, Cúcuta, 2016).

> En la junta directiva como en las reuniones del Consejo se llegó a tener un 30 por ciento en participación de mujeres y ellas llegaron a incidir en la toma de decisiones (CNMH, entrevista, mujer adulta, lideresa comunal, El Tarra, 2017).

> Yo [como gerente de Coomultar por varios años] llegué a comercializar todo el café que se producía aquí en la región, hasta ciento ochenta toneladas de café llegué a comercializar; trecientas cincuenta toneladas de maíz en un año. Lo que más comercialicé fue el cacao, alcancé a comercializar ciento cincuenta toneladas por año, que eso se comercializaba con Chocolates Quesada de Bucaramanga. El maíz con la fábrica de concentrados en Bucaramanga,

75 Párroco de El Tarra en el período 1971-1982. Obispo de la Diócesis de Tibú desde enero de 1988, hasta su trágica muerte dos meses después.

el café se comercializaba con la Federación Nacional de Cafeteros (CNMH, entrevista, hombre líder comunal, El Tarra, 2017).

Inauguración de la Cooperativa Multiactiva de El Tarra (Coomultar). Fotografía: cortesía de Alirio Antonio García, El Tarra. Archivo personal, sin fecha.

Comunidades del Catatumbo reconocen que el papel de la iglesia en la consolidación del movimiento cooperativo fue decisivo, de tal modo que, en veredas de Tibú, Sardinata y El Tarra, monseñor Horacio Olave y religiosas fueron quienes les enseñaron a organizarse (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016). En la Playa fue recordado el padre Ramón Emilio Mora, "muy impulsador de las cooperativas, ayudó a tramitar mucho las personerías jurídicas, la organización y nos dio muchas charlas a la comunidad en ese entonces" y el Obispo Ignacio Gómez Aristizábal fundador de la cooperativa Crediservir en Ocaña (CNMH, entrevista, líder comunal, Ocaña, 2017).

Monseñor Luis Madrid Merlano, obispo de la diócesis de Tibú entre 1988 y 1995, es recordado por haber puesto a la iglesia "a disposición de todos los proyectos de desarrollo del Catatumbo", así como por gestionar recursos en Europa que financiaron diferentes proyectos de los campesinos organizados (trapiches paneleros, molinos de arroz, procesadoras de yuca), entre otros. En El Tarra fueron especialmente recordados los recursos otorgados por Misereor[76] para fortalecer la cooperativa, las tiendas y el trapiche panelero (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, El Tarra, 2017).

Algunas personas entrevistadas asociaron también la creación y consolidación de las JAC y de las cooperativas en la región a la presencia de las comunidades eclesiales de base y a los grupos de trabajo Hombres Nuevos, que estaban conformados por profesores. Con actividades en el alto y medio Catatumbo y en Cúcuta, más que un proyecto de evangelización fue un proyecto social, que buscaba brindar mayor sentido de pertenencia e identidad y mejorar las condiciones de vida de los campesinos (CNMH, entrevista, defensor de DD.HH., Bogotá, 2016).

Las tiendas comunitarias se fueron convirtiendo en una red y surgieron las precooperativas que dieron paso a las cooperativas que se consolidaron en la región. Las cooperativas buscaron apalancar de manera decidida el histórico problema del acopio, compra, comercialización, transporte y transformación de la producción agropecuaria de los habitantes rurales del Catatumbo, cuando toda la región dependía de dos centros económicos administrativos, Cúcuta, del cual Tibú fue un corregimiento hasta 1977 y Ocaña del cual dependían el medio y alto Catatumbo.

76 Obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo.

Trapiche panelero en El Tarra, parte de un proyecto más amplio que buscaba incentivar la producción local y la transformación de productos, así como abastecer el mercado interno. Fotografía cortesía de Alirio Antonio García, El Tarra. Archivo personal, sin fecha.

Algunas cooperativas buscaron prestar servicios de ahorro y crédito a sus asociados, reinvertir los intereses y ganancias entre sus propios asociados, para constituirse en cooperativas multiactivas, como en el caso de Coomultar. Las cooperativas se vieron como la solución a los problemas que los campesinos tenían con los bancos estatales, ya que "en una cooperativa de ahorro y crédito se ahorraban recursos, pero también se le podían hacer préstamos al ahorrador, porque en ese tiempo hubo una avalancha con la Caja Agraria [que] remató una cantidad de bienes o de predios porque la gente no pudo pagar sus compromisos" (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016). Así refirió su experiencia un líder comunal de La Playa:

> Nosotros empezamos primero con la cooperativa de caficultores (...), que está la sede aquí en Ocaña. Eso inició en la década del ochenta con el fin de comprar el café, cuando eso estaba la Federación de Cafeteros y lo pagaban a como querían, había un monopolio del café, lo pagaban a peores precios y lo rechazaban siempre para alimentar a unos comerciantes aquí de Ocaña que tenían tostadora y nos pagaban el café demasiado barato. Entonces en el municipio de Convención surgió la idea de unos cafeteros de organizarse, para cooperar y sacar café para otro lado y venderle a la Federación de Cafeteros de Bucaramanga, no venderle más acá a la Federación de Cafeteros de Ocaña, entonces nace la cooperativa de caficultores en Convención que siempre ha sido por excelencia un municipio cafetero y luego San Calixto, Teorama y en la Vega de San Antonio tuvimos una agencia de la cooperativa (...) Nosotros tuvimos nueve sedes a nivel de la región del Catatumbo, tuvimos en la Vega de San Antonio, en San Calixto, todavía existe esa, en Convención, todavía se mantiene, en Hacarí también se mantiene, la sede aquí en Ocaña, otra en Pueblo Nuevo, la otra se montó en Teorama, otra en El Tarra, también en El Carmen, (...) solamente en Ábrego no se montó, pero ese ha sido un trabajo que todavía se mantiene (...). Allá la mayoría de gente producía buen café, el precio del café se mantenía, alcanzaba para algo, para sustentar la necesidades y luego pues no había tampoco la roya, ni la broca, entonces el café era rentable. La cooperativa se encargaba de pagar el transporte, entonces le quedaban unos excedentes buenos al caficultor, se movía la plata y había una bonanza cafetera que valió la pena (CNMH, entrevista, hombre líder comunal, Ocaña, 2017)[77].

La difusión y crecimiento de las cooperativas fue consistente, en cada municipio de la región existió al menos una, cuyo trabajo buscó articularse a otras en diversos municipios por medio de campeonatos de fútbol y espacios de encuentro e intercambio.

77 Años después llegó la crisis cafetera y, con ello, el declive en los precios del café que obligó a que muchos de sus cultivadores abandonaran esta actividad.

Habitantes de San Calixto recordaron la cooperativa Coomulsan (Cooperativa Multiactiva de San Calixto), que con el tiempo se fortaleció, al punto de contar con un local, dos o tres bodegas y carros. Comercializaba maíz, harina y granos y vendía "línea agropecuaria", es decir, herramientas e insumos para el trabajo de la tierra (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016). Habitantes de Hacarí anotaron cómo una cooperativa, a diferencia de las tiendas comunitarias, "vendía la cosecha, hasta crédito tenía uno" (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016), otros recordaron cooperativas de transporte en Ocaña.

Con respecto a la profusión de cooperativas en la región, es importante destacar que, si bien muchas se originaron en procesos previos como las tiendas comunitarias y bajo el liderazgo del trabajo de JAC, otras fueron impulsadas por programas estatales como el PNR (Plan Nacional de Rehabilitación), en particular a partir de la segunda mitad de los años ochenta (CNMH, entrevista, hombre movimiento cívico, Cúcuta, 2016).

En ese sentido, el PNR, inaugurado en la presidencia de Belisario Betancur, facilitó la puesta en marcha y ampliación del proceso cooperativo en el Catatumbo, una dinámica que diferentes líderes de la región reconocen como positiva aún en la actualidad. Este programa del Estado es recordado como uno de los pocos capaz de poner en el centro las necesidades y capacidades de las comunidades de la región, con un impacto evidente en la construcción de condiciones para vivir dignamente. Su éxito en la consolidación del cooperativismo pone de presente la tensión que muchos habitantes de la región sienten con respecto a políticas de desarrollo que apalancan sus capacidades y propuestas, frente a otras centradas en lo militar que, por el contrario, les criminalizan y perpetúan los estigmas que recaen sobre ellos, o aquellas que les impone un modelo de desarrollo que les es ajeno y va en contravía de sus intereses.

De otra parte, la lucha por el reconocimiento y autonomía del pueblo Barí se vio fortalecida en estos años por la constitución de los dos resguardos que existen en la actualidad, el Resguardo Catalaura-La Gabarra, distribuido en los municipios de Tibú y Teorama, y el Resguardo Motilón-Barí, distribuido en El Carmen, Convención, Teorama, Tibú y El Tarra.[78]

También el pueblo Barí consolidó su propia cooperativa para mejorar la comercialización de sus productos y llevarlos a los centros urbanos, en especial a Cúcuta, Bucaramanga y Barranquilla. Coobarí, fundada en 1982, contó con tres sedes, una en La Gabarra donde se captaban los productos provenientes de los sectores del Río Catatumbo y el Río San Miguel; otra en La Pista-Río de Oro que recibía los productos de los Barí del lado venezolano; y otra en Saphadana, donde se recibían productos de Bridicayra (Convención), Corroncaira, Youkaira y Chirrondacayra (en El Carmen). La cooperativa Barí llegó a tener un camión y una droguería comunitaria. Luego, en 1984, se hizo un acuerdo entre los Barí y campesinos de la zona, de forma tal que estos terminaron asociándose a la cooperativa indígena.

Carné de asociado a Coobarí. Fotografía: cortesía de José Rodríguez Vaca. Archivo personal.

78 Bruce Olson ayudó a conformar el resguardo Motilón Barí y fue secuestrado por la guerrilla del ELN en 1989, acción que "cayó mal" entre los Barí y produjo un mayor distanciamiento con este grupo (CNMH, grupo focal 1 Barí, Tibú, 2016 y Notas de capo).

Durante estos años es relevante destacar el papel de Cencoser (Central Cooperativa de Servicios de la Provincia de Ocaña), que surge por la alianza de las cooperativas de Mesa Rica, El Tarra, San Pablo, Ábrego y Ocaña, y las tiendas comunitarias del Aserrío y Pueblo Nuevo, como una asociación de segundo nivel que llegó a agrupar cuarenta cooperativas ofreciéndoles servicios tales como el acopio y la comercialización de productos; educación y capacitación en cooperativismo; asistencia técnica y asesoría en vivienda, entre otros programas (CNMH, entrevista, hombre líder social, Ocaña, 2017).

La profusión de cooperativas muestra la existencia de un movimiento cooperativo en la región, cuyo auge se dio entre la segunda mitad de los ochenta y finales de los noventa, cuando se consolidó la presencia paramilitar en la región.

Tabla 2. Cooperativas y grupos asociativos en el Catatumbo a mediados de 1990

Organización	Ubicación de la sede
Coomulsan	Río San Miguel – La Gabarra (Tibú)
Coobarí	Río de Oro – Caño Tomas, La Gabarra - La Pista Río de Oro (Tibú) y Saphadana (Convención)
Coproyuca	Km. 60 – La Gabarra (Tibú)
Colsag	Tibú (caso urbano)
Cooluver	Luis Vero (Sardinata)
Copihacarí	Hacarí
Copromer	Ábrego

Prevesap (Precooperativa veredal)	Corregimiento San Pablo (Teorama)
Coopuma (Cooperativa Unión de Mesa Rica), hoy Asocoopuma	Mesa Rica, con sede en La Vega de San Antonio (La Playa)
Copintégrate	Teorama
Coomultar, Grupo Catatumbo	El Tarra
Comusan	San Calixto
Cooperativa de caficultores del Catatumbo	La Playa
Coopromet	Ábrego
Cooaserrío	San Pablo
Cooperativa de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo-Ocaña
Cencooser. Cootransunidos. Crediservir. Cooperativa de caficultores. Cootransregional. Grupo Pueblo Nuevo	Ocaña

Fuente: CNMH, elaboración propia con base en talleres de memoria histórica y entrevistas 2016-2017 y Comité Provisional Impulsor, 1990.

Y así como las JAC iniciaron un proceso de formación de liderazgos y promovieron las relaciones de confianza y trabajo colaborativo, las cooperativas hicieron lo propio y consolidaron las capacidades de liderazgo, como lo relató un dirigente comunal mayor: "A mí me daba pena hablar allá al público y uno aprende como a ser más sociable y a discutir los problemas" (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Ocaña, 2017). También generaron espacios de capacitación:

> La cooperativa capacitó muchísimos líderes, esos líderes hoy pertenecen a la JAC, trabajan en las veredas, son logros muy buenos porque por la misma integración de la cooperativa nos llevaron a talleres a Ocaña, venían también de Bucaramanga, nos prepararon, yo digo que nos despertaron. Antes nosotros no sabíamos

> que era un líder y la gente se preparó" (CNMH, entrevista, lideresa comunal, El Tarra, 2017)[79].

Además, fortalecieron las relaciones entre los asociados en una comunidad más amplia, como ocurrió a través del deporte: "se hacían campeonatos a nivel de cooperativas, participaba Ocaña, participaba El Carmen, Convención, Hacarí, González, o sea, se hacían campeonatos de fútbol entre las mismas cooperativas. Usted saca a sus asociados a que jueguen y vamos y participamos (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016). Todo lo anterior generó sentimientos de arraigo y un vínculo fuerte con el territorio en la población que lo habitaba. Como fue puesto de presente por habitantes de la región, son por lo menos cinco los factores que convergieron para que se diera un declive en el movimiento cooperativo que se consolidó en la región:

- La falta de una legislación que permitiera el crecimiento del cooperativismo, en tanto se aplicaron los mismos estándares a las cooperativas de ahorro y crédito que a los bancos más grandes y con mayor trayectoria en el país.
- Los casos en los cuales las cooperativas se endeudaron y fueron incapaces de pagar de contado al campesino por su producción.
- En el caso particular de las JAC, muchos de sus impulsores expresaron que al interior se generaron divisiones asociadas al apoyo electoral hacia uno u otro candidato y que, en ocasiones el presidente de esta organización devino en un proveedor de votos para el político de turno, lo cual generó que muchas personas se sintieran utilizadas.
- La falta de experiencia de los asociados en temas administrativos y de mercadeo, lo que produjo manejos ineficientes de los recursos con los que contaban, y

79 En el proceso cooperativo fueron recordados líderes de la región como Abraham Ascanio, Abel Sanguino, Adriano Ascanio, Ramón Emilio Pérez, Nicasio Torres y Judith Lizcano.

- El paramilitarismo que produjo el debilitamiento definitivo y, en muchos casos, el exterminio de estas formas organizativas.

Al respecto, un dirigente campesino de la época expresó: "Ese era el proyecto general y estábamos caminando sobre eso hasta que nos impidieron caminar. Ya vendrá esa historia de cuando nos impidieron caminar, nos mataron, nos encarcelaron, destruyeron todo, pisotearon todo, *masacraron* la región. Estoy hablando de la presencia paramilitar en la región a partir del año 99" (CNMH, entrevista, hombre movimiento cívico, Cúcuta, 2016).

Ahora bien, es necesario señalar que, si bien fueron predominantes las JAC, las tiendas comunitarias y las cooperativas no fueron las únicas formas de organización campesina de los habitantes del Catatumbo en este periodo. Por una parte, en la región se crearon grupos asociativos de productores de pescado, cacaoteros, lecheros, entre muchos otros. Y a su vez, los habitantes recordaron que en la región tuvieron asiento organizaciones como la Anmucic (Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia) en San Calixto –aún vigente– y la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), con énfasis en Tibú, Sardinata, Convención, San Calixto, Teorama, La Playa y Ocaña y sus representaciones municipales y corregimentales, como la AMUC (Asociación Municipal de Usuarios Campesinos) en San Calixto, o la Asociación Corregimental de Usuarios Campesinos en San Martin de Loba (Sardinata).

Esta organización campesina nacional, que se recuerda como muy combativa y que inició su presencia en el Catatumbo en los años setenta, tuvo su auge entre 1980 y 1985, cuando se inició una persecución contra ella al punto que fue "diezmada por la arremetida de los paramilitares que los trataban de guerrilleros, de izquierdistas" (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016). La ANUC fue significativa en la región por la distribución

de tierras e invasiones llevadas a cabo en las haciendas de Campo Dos y otras zonas de Tibú, haciendo eco de su lema "tierra pa'l que la trabaja", también porque promovió la creación de casas campesinas y el intercambio entre cooperativas del Catatumbo con otras regiones del país[80].

La ANUC cumplió además un papel fundamental al lograr que se amortizaran las deudas de los campesinos de San Martín de Loba (Sardinata) con la Caja Agraria:

> Nosotros en acompañamiento con la ANUC hicimos una actividad de reclamarle al Gobierno esa cuestión, nosotros teníamos unos créditos en ese tiempo con la Caja Agraria, entonces la ANUC nos facilitó a nosotros un viaje a Bogotá (...) organizamos el documento y se lo presentamos al Presidente [Samper] y es así como el Gobierno en ese entonces creó un fondo que se llama el Fonsa, el Fondo de Solidaridad Agropecuario [hoy Finagro] y a nosotros nos rebajaron esas deudas con esa actividad (...) si no, nosotros no estuviéramos por aquí, las parcelas ya eran del Banco Agrario (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

2.3. Se expanden las organizaciones

En el Catatumbo surgieron otras formas organizativas que ampliaron el panorama social y político durante los años ochenta y noventa. Las JAC fueron la semilla que sirvió para que se diversificaran las apuestas por la autonomía y por una vida digna. En ellas se apoyaron los nacientes movimientos políticos y sociales de la región. Además, se desarrollaba y

80 En este contexto es recordado el asesinato de Ramona Tarazona, el 31 de mayo de 1989, fue tesorera de la ANUC en Norte de Santander y dirigente de la ANUC en Tibú (Rincón, 2003).

ampliaba el movimiento sindical surgido con la primera ola de trabajadores petroleros, agrupado en lo que fue el Sidelca (Sindicato de Trabajadores del Catatumbo).

2.3.1. Trabajadores petroleros y movimiento sindical

Como se vio en el capítulo 1, con la entrada masiva de obreros y colonos petroleros se da inicio a las primeras luchas organizadas por parte de los trabajadores petroleros, congregados en torno al sindicato Sidelca, opción organizativa que se convirtió en un camino para otros sectores sociales de la región.

Trabajadores petroleros en el Catatumbo en 1930. Fotografía: Cortesía Julio Jaimes. Archivo personal. 2017.

Vale reiterar que la entrada de las empresas petroleras produjo en la región el arrasamiento de áreas significativas de selva y que la construcción de infraestructura para la instalación de la industria requirió de mucha

mano de obra, la cual tuvo su pico más alto entre 1938 y 1940, cuando hubo alrededor de ocho mil trabajadores (Vega y Aguilera, 1995, página 195)[81].

Sin embargo, la situación de los trabajadores rasos no era fácil. Por las malas condiciones alimenticias, ubicados aún en Petrólea, los obreros realizaron en 1936 La Huelga del arroz, en la que también reclamaron por acceso a salud, a una mejor calidad en las viviendas (López, 2016). Al referirse a sus condiciones de alimentación, en 1939 un extrabajador expresó que:

> Es horroroso ver la forma como vejan al colombiano, ver la clase de alimentación que dan al trabajador, oír como traquean los granos de arroz crudo entre los maxilares de los obreros. Allá las leyes sociales que existen no cobijan al obrero del Catatumbo. Si reclaman se les despide (Vega y Aguilera, 1995, página 166).

En el mismo año, otro trabajador hacía referencia a las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que debían permanecer los obreros: "Aquí en el mismo dormitorio hay obreros enfermos; las camas se apretujan fatalmente y sobre los camastros están colgadas las hamacas para que en ellas duerman otros obreros. Aquí la cocina es algo inmundo; el comedor asqueroso y reducido, tanto, que los obreros han de sentarse en las mesas por 'tandas'" (Vega, Núñez y Pereira, 2009a, página 392).

En adelante, los obreros petroleros recurrieron a distintas formas de organización y de reclamación por mejores condiciones de vida, de trabajo y por la nacionalización de la explotación del hidrocarburo[82],

81 Inclusive Cúcuta se desplegó como ciudad a partir de la actividad petrolera del Catatumbo. Barrios enteros se construyeron con las personas que vinieron a trabajar en las empresas petroleras, como el barrio Colsag, nombre que se le designó por la contracción de los de las empresas Colpet y Sagoc.

82 Como se observa, la reivindicación por la nacionalización del petróleo es de tiempos tempranos en el siglo XX, aspecto importante pues décadas más adelante, la guerrilla del ELN asumió esta consigna, lo que afectó de manera directa al movimiento social, en particular, al sindicato de trabajadores petroleros porque fueron acusados de hacer parte de esta insurgencia, al coincidir con la demanda.

a través de paros y huelgas, como lo muestran las primeras y sucesivas acciones:

Tabla 3. Huelgas de los trabajadores petroleros del Catatumbo 1934-1971

Año	Fechas	Días de duración	Reivindicaciones o exigencias
1934	8 de agosto-16 de agosto	8	"Huelga del arroz". Pésimas condiciones de alimentación
1946	29 de octubre-26 de noviembre	29	Mejoras en las condiciones de alimentación, manejo en los comedores, agua potable, servicio médico, escuela nocturna para los trabajadores, entre otros.
1948	4 de febrero-14 de marzo	40	Igualdad de salarios entre colombianos y extranjeros, uso de ambulancias, construcción de panteón en Cúcuta solo para trabajadores muertos prestando el servicio a la empresa, construcción de escuelas para trabajadores, reconocimiento educativo, entre otros.
1960	6 de agosto-10 de septiembre	34	Acabar con la facultad que tenía la empresa de reducir el personal con preaviso de 45 días, terminar los contratos con personas no sindicalizadas, mejoras salariales, vivienda para los trabajadores.
1963	23 de abril-24 de mayo	32	Estabilidad laboral, alza de salarios y cese de vinculación de contratistas por la Colpet en cualquiera de las actividades esenciales de la industria petrolera.
1969	2 de octubre-7 de octubre	5	Denuncia de la política de la Colpet encaminada a burlar sus compromisos con la nación, al desmontar la infraestructura destinada a exploración y explotación del petróleo.
1971	11 de mayo-2 de junio	22	Denuncia de la política de la Colpet encaminada a burlar sus compromisos con la Nación, al desmontar la infraestructura destinada a exploración y explotación del petróleo.

Fuente: Vega, Núñez y Pereira, 2009b.

Estas acciones, el surgimiento y organización, primero clandestina y luego pública, de Sidelca, y la reivindicación de sus derechos representaron para los trabajadores petroleros el surgimiento del primer señalamiento y estigmatización como sujeto organizado: ser "comunistas", es decir, indeseable y peligroso[83], lo que les significó represión y, en varios casos, el desplazamiento forzado de sus dirigentes[84]. Desde entonces, la organización sindical en el municipio de Tibú se fortaleció y más adelante se consolidó con la conformación de la USO (Unión Sindical Obrera) en 1976 y de otros sindicatos. Así, Sidelca se configuró como la primera organización social de la región y, por ello, la primera que fue estigmatizada y reprimida, en un camino que se repitió con las organizaciones posteriores.

La USO tuvo una importante incidencia en Tibú, porque después de las huelgas adelantadas entre 1934 y 1971, la organización y acción sindical de trabajadores petroleros continuó en y logró dos resultados contundentes: i) la fundación del municipio de Tibú en 1977 y, ii) la reversión de la Concesión Barco en 1975, cuando la Colpet entregó los campos y Ecopetrol asumió la concesión. La USO se fortaleció en años posteriores, en parte por sus logros, pero también por el acenso del movimiento sindical en el país, en Tibú se vivió un momento de vigor del sindicalismo. Este sindicato desarrolló múltiples acciones obrero-sindicales en las décadas siguientes, dentro de las que se destacó la huelga de 1977.

83 Al respecto, y sobre unas acciones de protesta impulsadas por trabajadores petroleros, un periódico publicaba en 1934 lo siguiente: "En grandes carteles fijados en las esquinas de la ciudad [de Cúcuta] algunos elementos que se dicen defensores de los obreros que trabajan en las petroleras del Catatumbo… se dirigieron hasta el parque Santander portando banderas rojas y algunos carteles con leyendas ofensivas para la honorable Colonia Norteamericana residente entre nosotros. Ocuparon la tribuna de la glorieta del parque los 'camaradas' Pedro J. Marín y Segundo Reyes, siendo conducidos inmediatamente a la cárcel municipal, en donde aún se encuentran, por orden del comandante de la policía nacional. Este fue el voto de aplauso y el premio conquistado por este par de personajes que siempre están agitando el ambiente de sus doctrinas perniciosas y absurdas" (Vega, Núñez y Pereira, 2009b, página 65).

84 Para conocer una historia a profundidad del movimiento obrero petrolero del país, y de su desarrollo particular en el Catatumbo, consultar (Vega, Núñez y Pereira, 2009a).

Siguiendo la tradición organizativa de los campesinos de la región en estos tiempos, la USO conformó su propia cooperativa a la que llamó Colsag. A través de Colsag el sindicato construyó la primera biblioteca pública del municipio, un supermercado y el teatro municipal -comprado por la cooperativa- se convirtió en el centro de acopio de los productos que se expendían.

Los exsindicalistas de la USO de Tibú entrevistados, recordaron que además de los reclamos por asuntos petroleros y laborales, el sindicato mantenía una relación permanente con la población del casco urbano y con los indígenas Barí:

> Nos reuníamos porque ellos [los Barí] tenían bastantes problemas de acoso de la fuerza pública, de sus alegatos frente a la invasión de sus tierras (...). Cada vez que bajaba una comisión de este grupo indígena, lo primero, llegaban al sindicato a saludar, a ver como estábamos y a ver que hacíamos, qué reuniones habían planteadas, o los mandábamos llamar o ellos mandaban llamar y mandábamos algunos compañeros a que estuvieran allá [en las comunidades indígenas]. No era fácil bajar un grupo grande de indígenas a la población, porque era bastante retirado... su centro de habitaciones era como a tres horas y pico, cuatro horas, río Catatumbo arriba, bastante lejos y luego unas caminadas gigantescas. Ningún petrolero se resistía esas caminatas y entonces no era fácil, pero sí bajaban los compañeros [Barí] e intercambiábamos opiniones (...) ellos en algunas oportunidades se quedaban también en la casa de la USO en el pueblo (CNMH, entrevista, hombre exsindicalista, Bogotá, 2017).

Además del de los trabajadores petroleros, el segundo sindicato en la región fue Asinort (Asociación de Institutores de Norte de Santander), creado en 1957 y que existe en la actualidad, cuya primera presidenta fue una mujer. Este sindicato buscaba promover el mejoramiento de las

condiciones de trabajo de las y los educadores y de las escuelas y colegios en el departamento. Aunque surgió en Cúcuta, logró organizar subdirectivas en los municipios de El Tarra, San Calixto, Hacarí, El Carmen, Teorama y Ábrego, tuvo desde siempre una sólida organización en Ocaña.

Esto se explica porque, así como en las áreas rurales del Catatumbo se vivían condiciones de pobreza y dificultad para acceder a la educación, también en las zonas urbanas las condiciones eran precarias. Por esta razón docentes en Ocaña, con vocación de servicio, apoyaron e incluso proveyeron con recursos propios las necesidades de sus estudiantes, como lo narró el hijo de Hernando Sanguino, docente y dirigente de Asinort en esta ciudad: "Papá tenía dos trabajos y nunca tenía dinero en el bolsillo porque era el que si le faltaban los tenis a los *chinos*[85], coja! [tome dinero]. Él tenía muy identificadas las necesidades de los estudiantes y les colaboraba abiertamente, no se resumía simplemente a su horario laboral, sino que era una vocación que él tenía por ayudar a la gente" (CNMH, entrevista, hombre líder social, Ocaña, 2017).

Asinort agrupaba a docentes oficiales y provisionales. Además de sus reivindicaciones gremiales, recuerdan que en Tibú solía movilizarse los 1 de mayo[86] y que se solidarizaba con otras acciones de exigencia de derechos, por ejemplo, cuando la población o los trabajadores desarrollaban jornadas de protesta reclamando mejores condiciones de salud.

Para inicios de los años ochenta también hacían presencia y eran fuertes en la región sindicatos como el de Telecom en Ocaña; el del antiguo Ministerio de Obras Públicas Sintraminobras en Cúcuta y Ocaña, y el de la empresa Centrales Eléctricas en Cúcuta, según lo recuerdan los habitantes de la región.

85 Jóvenes.

86 Día internacional de los trabajadores, conmemoración promovida por el movimiento obrero mundial y por distintos sectores para hacer reivindicaciones sociales y laborales.

Marcha de Anpes (Asociación Nortesantandereana de Profesores de Secundaria) en Pamplona, 1971. Fotografía: cortesía familia Sanguino Salcedo, Ocaña, archivo familiar.

2.3.2. Consolidación de los movimientos políticos de izquierda

En el Catatumbo llegaron y se consolidaron los movimientos políticos de izquierda. En Tibú, por ejemplo, existía el PC (Partido Comunista), donde participaron campesinos llegados de otras regiones del país y personas provenientes de Cúcuta. Habitantes de la región que hicieron parte de este partido relataron que el PC se consolidó con personas a quienes unía un sentimiento de rebeldía, como lo cuenta un campesino: "llegaron campesinos de otras regiones del país como Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Huila, Boyacá, Cundinamarca, el Pacífico. Es que el Catatumbo realmente fue recibiendo gente de diferentes partes del país y fueron formando sus finquitas, pero traían la rebeldía por dentro y aquí nos encontramos todos" (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2017).

Aunque parezca extraño, una de las personas entrevistadas y que hizo parte del PC para estos años destacó que algunos miembros del PC tenían sus creencias religiosas y que por sus convicciones políticas se fueron encontrando y convergiendo en torno a las mismas inquietudes sobre el desarrollo de sus vidas en esta región (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2017). Así, se empezaron a formar lo que llamaron las células comunistas, que tuvieron como espacio de encuentro las reuniones, como lo expresó un militante de Cúcuta:

> La primera vez que yo asisto a una reunión, resulta que llegan y me dicen: "camarada, primero vamos a leer la biblia". Pa' mí fue una sorpresa, pero bueno. Y [le dijeron]: usted que sabe leer entonces nos hace el favor y nos lee esta partecita. Entonces yo leí y pagaron los diezmos y fueron como dos horas. Después entonces sube el desayuno y en la tarde hacemos la reunión de la célula del partido.

> ¡Uy, esto sí es una vaina insólita, así como pagábamos el diezmo, teníamos que pagar la cuota del partido! (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2017).

El PC fungió como ente en la resolución de conflictos entre vecinos por linderos y animales, problemas familiares y de pareja, en especial, en las zonas rurales del municipio. Su objetivo inicial fue el crecimiento en número de militantes al interior de cada célula y, en las memorias de las personas entrevistadas, se resalta que en Tibú el PC llegó a tener cerca de 3.400 adscritos, número que le exigió organizarse por *radios* que agrupaban treinta células, cada una con diez o quince personas. Estos grupos debían ir a tumbar las cinco o las seis hectáreas de tierra para la siembra, producción que les dio para recolectar los fondos en beneficio de la misma organización (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2017).

En sus inicios como organización, el PC en Tibú desarrolló un trabajo de formación político-ideológica, que consistía en estudiar temas como el comunismo o aspectos de la historia de Colombia, con lo que se buscaba generar conciencia política entre sus afiliados, temas de mayor interés que centrar su acción en hacer reivindicaciones concretas para algún sector particular (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Cúcuta, 2016)[87].

En Tibú y en El Tarra hizo presencia la JUCO (Juventud Comunista). En particular en Tibú se recuerda que esta organización juvenil hizo presencia entre 1990 y 1996, pero que se consolidó a partir de 1992 con la llegada de Tirso Vélez a la alcaldía del municipio.

87 Pese a que en el marco de esta investigación se intentó acopiar más información sobre la labor del PC en la región, en particular durante sus primeros años de conformación, fue infructuoso. Sin embargo, se considera importante que se conozca la labor e ideario político del PC a nivel nacional y sus particularidades regionales y temporales, por lo que se convierte en una deuda de memoria histórica y una invitación para continuar desarrollando ejercicios en este sentido en el Catatumbo.

Según comentó una persona entrevistada, los jóvenes de esta organización empezaron a hacer un trabajo desde los colegios y tenían como forma de agruparse y compartir la realización de actividades conjuntas como lectura, guitarra y tertulias. Desde estos lugares de encuentro empezaron a trabajar por ganar espacios de participación, como la representación en sus colegios, o en los comités estudiantiles, en donde realizaban formación ideológica para la consolidación de sus cuadros o dirigentes.

Se recuerda que, los integrantes de la JUCO se dedicaron a trabajar en la ley de la juventud. En 1993 los representantes de la JUCO de los colegios de Tibú asistieron al Primer Encuentro de Estudiantes de Secundaria en Bogotá, donde se concretó la propuesta de su participación en los Comités Municipales de Educación. Sin embargo, muchos de los jóvenes participantes fueron "ajusticiados"[88], como sucedió con tantos líderes y lideresas sociales en años posteriores y como aún ahora continúa sucediendo. Hoy "somos muy pocos los que quedamos vivos y podemos contar esta historia" (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2016).

De los diálogos entre el Gobierno de Belisario Betancur y las FARC, nace el movimiento político UP (Unión Patriótica)[89] que llegó a la región hacia 1986. En el Catatumbo, una parte significativa de la militancia del PC pasó entonces a fortalecer a la UP, sin separarse del PC. Se crearon Juntas Patrióticas en las veredas y en el casco urbano de Tibú, grupos que les permitieron, según un actual dirigente de la UP en la región, viabilizar "una vinculación masiva de la gente porque no les suena, no les sabe a nada el Partido Liberal, el Partido Conservador, porque no los representa" (CNMH, entrevista, hombre líder social, Convención, 2017).

88 Asesinados.

89 De las conversaciones de paz entre el Gobierno del presidente Belisario Betancur y las FARC en 1984, surgió la Unión Patriótica en 1985, que sobrevivió como un movimiento político legal a la ruptura del proceso.

La UP empezó a crecer también en San Calixto, Hacarí, Convención, Teorama, Ocaña y El Tarra, a acercarse a sus habitantes, en particular a las JAC, con unos idearios políticos que en el Catatumbo eran afines a las sentidas necesidades de la gente, como lo explica un campesino que muy temprano empezó a hacer parte de la UP:

> Los ideales políticos de la Unión Patriótica primero que todo era poder organizar a un pueblo para que pudiera comprender cómo se vivía socialmente, dignamente, sin que hubieran unos intermediarios, especuladores que acabaran con esto. El otro era como poder incluso construir un país donde la democracia fuera el principio fundamental de los gobiernos, que la democracia no fuera esa democracia únicamente de ir a votar y ya, y el que ganó haga lo que quiera, sino que se pudiera dar seguimiento, que se pudiera hacer control, que pudiera haber veeduría (...), para nosotros era como incluso crear un Gobierno que fuera de un modelo diferente del Gobierno de la derecha, que fuera un Gobierno verdaderamente participativo, democrático y popular, un Gobierno que pudiera trazar el camino hacia el socialismo (...). Ahí fue cuando llegan los primeros hombres, entre ellos Miguel Sánchez, que lo recuerdo tanto, Manuel Giraldo (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Convención, 2017).

Además de la UP, en la región hizo presencia durante los años ochenta el movimiento político A Luchar. Este, de acuerdo con las personas entrevistadas, llegó a la región a través de la USO, por lo cual una de las actividades iniciales consistió en estudiar la política petrolera, pues se aproximaba la puesta en marcha del oleoducto Caño Limón Coveñas en la región, así como trabajar en torno a las necesidades históricas del Catatumbo. De acuerdo con los relatos que se recogieron, este movimiento buscó trabajar en forma directa con campesinos y sus organizaciones, en especial, con las JAC, en donde encontró su principal escenario de expansión, como lo relató un líder comunal de El Tarra:

> Los líderes nos reunieron y nos propusieron las ideas para poder formar esa organización A Luchar, porque había que mirar las necesidades del Catatumbo y nosotros como líderes de las Juntas de Acciones Comunales les propusimos a las comunidades y eso sonó, era para salir a hacer manifestaciones en favor de buscar y solicitar los proyectos para la región (CNMH, entrevista, líder comunal, El Tarra, 2017).

A Luchar, que también surge en el contexto de la búsqueda de la paz que emprende el Gobierno de Belisario Betancourt, planteó la necesidad de tramitar una reforma política que facilitara los acuerdos de paz. Este movimiento, se nutrió del Bloque Sindical Independiente, de movimientos sociales que adquirieron notoriedad regional en esos años (como el campesino, estudiantil, o los cívicos y culturales).

Los rasgos fundamentales de A Luchar, de acuerdo a las personas cercanas a este movimiento político consultadas, fueron: i) el poder popular, entendido como el desarrollo de las luchas sociales hacia formas de Gobierno propio, en lo que A Luchar llamó la Asamblea Nacional Popular, en consecuencia, ii) la extra institucionalidad de sus acciones políticas, priorizando la movilización social[90] y, iii) unas bases ideológicas de fuentes diversas, que se nutrió de los procesos revolucionarios centroamericanos (Nicaragua, El Salvador y Guatemala) de donde adaptó varios de sus planteamientos políticos y organizativos[91].

90 Las personas entrevistadas, así como la bibliografía secundaría, coinciden en que A Luchar se estableció como una organización de hecho y no buscó personería jurídica. De las elecciones de 1990 participó abanderando el abstencionismo.

91 La información sobre el movimiento político A Luchar en el Catatumbo es mínima, por lo que seguir desarrollando ejercicios de memoria histórica en esta región se constituye en un deber y una tarea pendiente. Recientemente tres estudiantes de posgrado realizaron tesis en torno a esta temática a nivel nacional: *Propuesta y trayectoria del movimiento social y político A Luchar 1984-1991*, de Nubia Fernanda Espinosa Moreno; *Luchas, resistencias y genocidio del movimiento ¡A Luchar!*, de Diego Mauricio Fajardo Cely; y *Estudio comparado de la acción política de las organizaciones A Luchar Y Unión Patriótica en Colombia, años 1985-1990*, de Nayib Gustavo Nizo Cárdenas.

Personas consultadas que hicieron parte de este movimiento en la región, recuerdan que el trabajo de A Luchar en el Catatumbo se centró en lo reivindicativo, es decir, movilizaciones por vías, escuelas, servicios públicos. Su forma organizativa fue a partir del poder popular, buscaban que en la región "las comunidades fueran autónomas de decidir en lo económico, lo organizativo, lo político, lo ambiental" (CNMH, entrevista, hombre líder social, El Tarra, 2017). A Luchar tuvo una amplia presencia en la región, en especial en El Tarra.

En la región, además, se registró trabajo del Frente Popular, una amplia organización legal de orientación maoísta, con una afinidad con el PCC-ML (Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista). Su presencia en la región se recuerda en especial a través de su trabajo con el sector del magisterio y con su sindicato Asinort:

> Yo estaba en una cosa que se llama la Liga Marxista Leninista de Colombia y todos éramos muy hermanables, éramos como una familia (...) ¿sabe qué hacíamos? Nos reuníamos con los de la Liga, que había maestros y otros que no eran maestros y leíamos mucho, estudiábamos mucho y le dedicábamos tiempo al estudio, al marxismo-leninismo y al maoísmo porque yo era maoísta. Y me gustó mucho ese proceso que se vivió en la China. Y nos reuníamos y nos quedábamos, dormíamos juntos para poder estar toda la noche dedicando tiempo a culturizarnos políticamente y no era que fuéramos guerrilleros ni nada de eso (CNMH, entrevista, mujer adulta mayor exsindicalista, Bogotá, 2017).

Aunque este movimiento político tuvo presencia en Ocaña y Tibú, en este último fue donde logró su mayor impacto y empezó a vincularse además con el movimiento comunal, con la Asociación de Desempleados de Tibú, con organizaciones juveniles y con personas vinculadas al sector de la salud (CNMH, entrevista, hombre sindicalista, Cúcuta, 2017).

La UP, A Luchar y el Frente Popular vivían "una especie de competencia, (...) porque cuando surge un tipo de organización social y política liderado por una de estas líneas, los otros movimientos buscan también impulsar su propio espacio" (CNMH, entrevista, hombre líder social, Cúcuta, 2017), lo que, en el Catatumbo, produjo choques. Estas organizaciones llegaron a hacer "trabajo político de masas", a una región con un alto grado de abandono, numerosos conflictos y donde la población traía una larga tradición organizativa y acogía las exigencias reivindicativas y de derechos.

2.3.3. Movimiento cívico popular

Al abanico de organizaciones campesinas, sindicales y políticas en la región se le incorporó el crecimiento y auge del movimiento cívico y popular, el cual impulsó un momento de activa lucha social, en especial entre 1980 y 1985, en las ciudades más grandes del departamento, Ocaña y Cúcuta y en zonas del Catatumbo, Tibú, El Tarra (en ese momento corregimiento de San Calixto), San Calixto y Convención.

En Ocaña, por ejemplo, empezaron a surgir comités cívicos de vivienda como Asovipa (Asociación de Vivienda Popular y Autoconstrucción) que buscaban desarrollar proyectos de vivienda popular a través de lo que el Gobierno llamó invasiones de lotes urbanos, los barrios Camilo Torres y 26 de Julio son producto de este proceso. A ellos se sumaron las CEB (Comunidades Eclesiales de Base) con procesos de trabajo barrial en las comunas populares[92], los comités cívicos por los servicios

92 Barriadas, en muchas ocasiones invasiones en zonas periféricas de las ciudades, en donde sus habitantes se organizan para conseguir acceso a servicios públicos, la legalización como barrio urbano y mejorar las condiciones de sus viviendas.

públicos, el grupo Cristianos por el Cambio, la ANUC con procesos de recuperación de fincas, el movimiento de estudiantes de secundaria y un grupo significativo de sacerdotes y monjas comprometidos con el trabajo social.

Empezaron a surgir asociaciones de jóvenes, de deportistas y de madres comunitarias -del cual surgió el Sindimaco (Sindicato de Madres Comunitarias)-. En Cúcuta se fortalecieron los viviendistas, las CEB y la Junta Cívica por el Rescate de Cúcuta y sus Barrios que se realizaba en los barrios populares de la ciudad.

De la confluencia de todas estas organizaciones sociales y políticas empieza a surgir lo que las personas entrevistadas recuerdan como la alianza obrera, campesina y popular. El obispo de Tibú, Monseñor Leonardo Gómez Serna, se vinculó durante los años ochenta a actividades con las organizaciones sociales presentes, como lo recuerda un extrabajador petrolero:

> Entonces empezamos a crear organizaciones sociales más allá de los sindicatos, pues ahí se creó una que se llamaba la Coordinadora Regional del Catatumbo, que tuvo bastante incidencia en esa zona. El obispo Monseñor Leonardo Gómez era el presidente y yo era el vicepresidente (...) fundamentalmente el propósito era más político, era para generar movilización, protesta (CNMH, entrevista, hombre exsindicalista, Bogotá, 2017).

La multiplicación de organizaciones sociales surge de las difíciles condiciones de la región y de "la necesidad de que nos organizáramos las personas para poder exigirle al Gobierno" (CNMH, entrevista, hombre líder social, El Tarra, 2017), pues como lo dijo un campesino: "cuando eso nosotros no mirábamos una ayuda de nada, de nada, las comunidades eran las que en veces, porque en ese entonces eran las comunidades muy organizadas, trabajan mucho por el socialismo ¿sí ve? entre todos uni-

dos se miraban en la enfermedad del vecino (CNMH, entrevista, hombre campesino, Cúcuta, 2016).

La gente en la región era consciente de que: "si nosotros no nos organizamos, no vamos a tener un puesto de salud, no vamos a tener electrificación, no vamos a tener nada en la región" (CNMH, entrevista, hombre líder social, El Tarra, 2017).

Con este universo de organizaciones campesinas, cívicas, políticas, sectoriales, agrupadas en torno a distintos intereses y conformadas por una gama muy amplia de participantes, se desarrollaron diversas acciones ciudadanas, expresadas en movilizaciones y protestas en la región.

2.3.4. Las movilizaciones más recordadas

En principio fue de las expresiones campesinas de donde nace en 1985 la idea de exigir derechos frente al abandono estatal en la región, lo que da paso a las marchas campesinas, iniciativas que promovieron la movilización hacia los centros poblados para hacer visible su problemática y exigencias ante la población urbana y el Gobierno local, regional y nacional. Las primeras se dirigieron hacia Convención, Tibú, Ocaña y Cúcuta.

También llamados paros cívicos, estas primeras movilizaciones de 1985 fueron detenidas por el Ejército. La marcha que salió de veredas y corregimientos hacia Tibú y luego desde el casco urbano de este municipio hacía Cúcuta fue detenida en Campo Giles (Tibú). Las personas que se movilizaron desde El Tarra hacia Ocaña fueron contenidas por la Policía de San Pablo (Teorama) y por el Ejército.

Las primeras marchas campesinas fueron entendidas por las y los catatumberos como ejercicios de agitación, calentamiento y preparación para lo que vino dos años después: el Paro del Nororiente, entre el 6 y el 11 de junio de 1987, en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar y Arauca. Este paro se convirtió en un hito importante de la movilización social en el Catatumbo, no ha tenido parangón ni para los años ochenta, ni en épocas recientes cuando se desarrollaron importantes movilizaciones sociales, como se verá en el capítulo 6.

El paro del 87, como también fue conocido, involucró alrededor de treinta mil personas solo en el Catatumbo y tuvo como epicentro Ocaña, pero hubo tomas campesinas también en Cúcuta y en Valledupar (Cesar) y una movilización con paro cívico en Barrancabermeja (Santander).

Los pliegos de peticiones empezaron a ser elaborados desde las marchas campesinas de 1985, pues los promotores del paro duraron "dos años conquistando a la gente y ¿quién no iba a estar de acuerdo con mejorar esas condiciones y poder socializar el pliego de peticiones? Participaron desde el niño hasta el anciano porque el que no podía salir producía comida, le llevaba la comida a los cerdos, llevaba la comida a los pollos, cortaban leña, [todo] para llevar al paro (...) hasta que hubo la producción para poder sostenerse porque no se sabía cuánto iba a durar el paro (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Ocaña, 2017).

En el Catatumbo, la formulación de los pliegos, se hicieron con base en las necesidades de veredas y corregimientos, e involucraron aspectos relacionados con servicios públicos, agua potable, acueducto, alcantarillado, vías, electrificación, escuelas y salud, como fue narrado por un habitante de El Tarra:

> Es que la región no tenía inversión. Para ir de Ocaña a El Tarra a veces se gastaba uno dos o tres días en llegar porque la carretera era una trocha. Por El Tarra pasa una red de alta [tensión] y nosotros no teníamos luz, ni tenía luz El Paso, ni La Cecilia, ni El Aserrío, ni San Pablo, ni hasta Quince Letras, por allá no había luz y para abajo menos, Filo Gringo, Orú, Versalles, todo eso no tenía luz, la visión más grande del Paro del Nororiente era la luz del Catatumbo (CNMH, entrevista, hombre líder social, El Tarra, 2017).

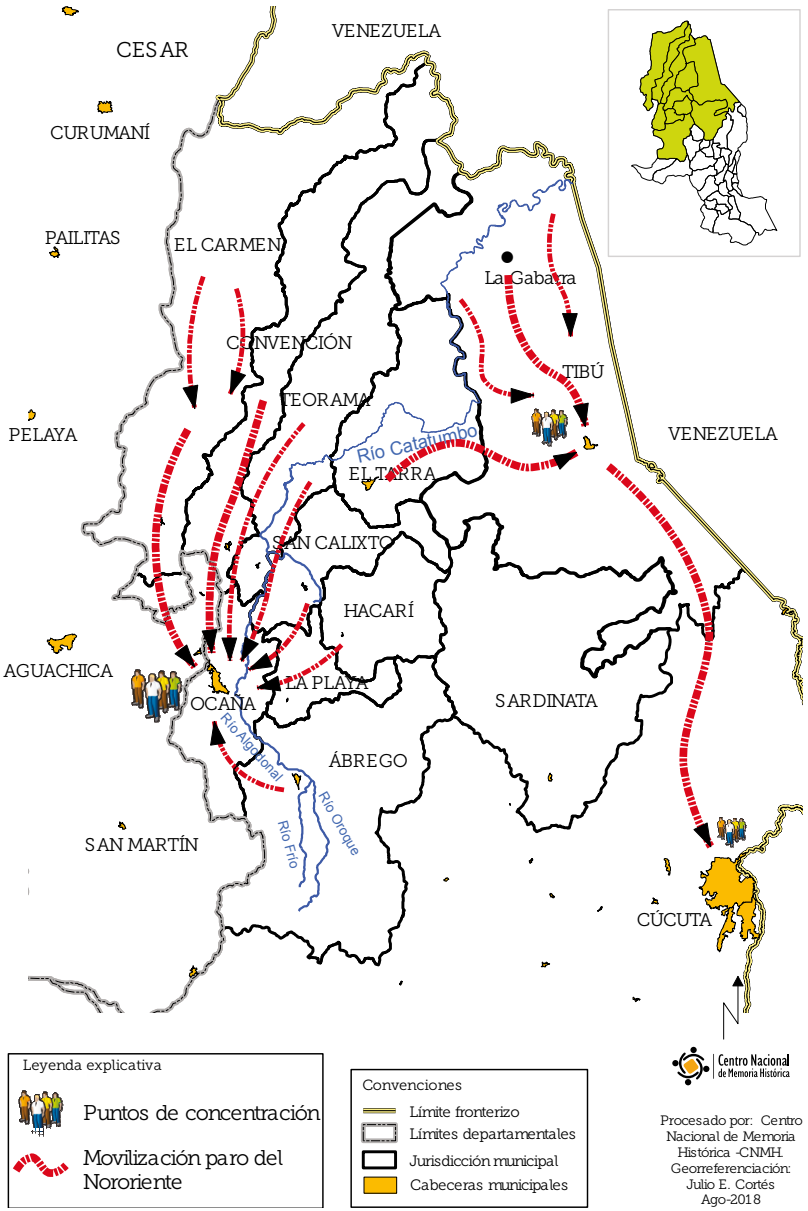
El paro fue una señal de inconformismo por el trabajo de "los funcionarios de turno y la vida politiquera", pues los campesinos sentían que había grandes necesidades y para intentar resolverlas debían hacer gestiones directas con los alcaldes, pero "siempre la palabra de los funcionarios del municipio era: no hay plata, no hay plata y nosotros estábamos cansados de eso y promesas y promesas, elegíamos a los candidatos e íbamos a las oficinas de ellos y nos decían, no hay plata, no hay plata" (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Ocaña, 2017).

En el mapa de organizaciones sociales de la región estaba también la Coordinadora Popular del Nororiente Colombiano, que pretendía vincular el trabajo organizativo de las expresiones campesinas, sindicales y cívicas de Santander, Norte de Santander, Cesar y Arauca. En febrero de 1987 se realizó en San Alberto -sur del Cesar- el Encuentro Obrero, Campesino y Popular, impulsado por el sindicato de los trabajadores de la industria de la palma aceitera, en el cual tenía una influencia importante el naciente A Luchar. Ahí se decidió oficialmente la fecha del Paro del Nororiente, se recogieron los elementos generales del pliego de peticiones -construidos previamente- y se definieron las tareas para concretarlo (CNMH, entrevista, hombre dirigente del Paro del Nororiente, Bogotá, 2017).

En el Paro del Nororiente, aunque participaron la UP y el PC, no lo hicieron de manera activa, pues estaban preparando la elección popular de alcaldes. En este sentido A Luchar actuó como articulador de las diferentes expresiones organizativas, como lo cuenta un líder social: "A Luchar fuimos los impulsores, nos echamos el paro al hombro, lo hicimos, nosotros duramos más de seis meses en la organización, porque nosotros queríamos que fuera histórico y la verdad que fue histórico. Para nosotros fue un logro muy bueno porque se logró hacer visible la región, que era lo que queríamos y se logró pactar con el Gobierno" (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Convención, 2017). La ANUC también convocó y organizó a un gran número de participantes del paro.

El paro requirió de un esfuerzo de preparación importante y de altos niveles de articulación dadas las dimensiones que alcanzó. Se conformaron grupos de coordinadores regionales y zonales (municipales) definidos en colectivo. Estos grupos iban a hablar con los presidentes de las JAC de la región, recogiendo los pliegos y socializando las acciones que se iban a desarrollar.

Mapa 7. Movilizaciones del Paro del Nororiente en el Catatumbo, 1987



Fuente: CNMH, elaboración propia con base en ejercicios colectivos de reconstrucción de memoria histórica y entrevistas 2016-2017.

Así, la mayoría de los marchantes en el alto y medio Catatumbo tenían como epicentro, para visibilizar la protesta, la ciudad de Ocaña y el sur del Cesar, mientras que los ejes de concentración para las personas del bajo y medio Catatumbo fueron Tibú y Cúcuta[93].

Paro del Nororiente. Movilización en Ocaña. Fotografía: Cortesía de Aurora Vega, Ocaña. Archivo personal.

93 Esto refleja la dinámica territorial que desde la conformación de los poblados adquirió la población en la región, y que se mantiene en la actualidad: las personas del Catatumbo medio y alto mantienen mayor vinculación con la ciudad de Ocaña, mientras que los pobladores de la zona baja la tienen con la capital departamental.

En Ocaña, aunque las memorias de catatumberas y catatumberos difieren -varían entre los diez y los 25 mil- en el número campesinos apostados en los parques 29 de Mayo, San Francisco y San Agustín y en los colegios José Eusebio Caro y Francisco Hernández (gracias al apoyo de los maestros que prestaron las instalaciones), sí hay consenso al recordar que la ciudad fue paralizada y que el paro del 87 tuvo en esta ciudad un impacto significativo. A los campesinos movilizados se les unieron los docentes, habitantes de los barrios periféricos y miembros de las organizaciones cívicas.

En el casco urbano de Tibú, donde se concentraron cerca de diez mil personas, además de los campesinos, es recordado que se articularon funcionarios, docentes, padres y madres de familia y comerciantes, haciendo labores de apoyo. En Campo Dos-Tibú un habitante mencionó que "era una cosa impresionante las masas cómo se movilizaban, había mucha organización social y él [su papá] decía: la gente se organizaba, se entrelazaba con El Tarra, todo eso era como que hablaban un solo idioma (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016). Para el caso de La Gabarra, en Tibú, fue significativa la labor de organización comunitaria y los deseos de habitantes de este corregimiento por salir a pronunciarse, como lo recuerda un organizador:

> Siete mil personas de La Gabarra, entre campesinos e indígenas salimos ese día. A mí me llegaba la gente, los camioneros, los transportadores a ofrecer su vehículo, los vendedores de gasolina (porque tú sabes que el contrabando de gasolina venezolana ha existido siempre desde que hay esta frontera) a ofrecer por canecas el aporte de gasolina para el transporte de los carros, los campesinos llegaban desde las veredas con canoas cargadas de plátano, yuca, cabros, marranos, hasta novillos traían para el paro (...). A mí me tocaba incluso de manera responsable decirles a los líderes de las veredas: orienten la gente de que no todo mundo se puede ir,

> algunos tendrán que quedar por familia cuidando las casas, los animales, qué se yo, porque había un entusiasmo tan grande, porque había generado la idea de un paro, de una movilización, había generado una expectativa muy grande de la gente de cambiar en alguna forma esa realidad (CNMH, entrevista, hombre líder social, Cúcuta, 2017).

Las memorias de las personas en torno a esta masiva movilización ligan sus relatos a la mística que tenía la gente, la disciplina y la voluntad de hacer esta movilización, sin que se instalara un espíritu de confrontación con la fuerza pública. En los relatos fue puesto de presente que, pese a que el Ejército intentó impedir el paso de los marchantes en las carreteras, no hizo uso de la fuerza.

Además de las reivindicaciones campesinas por servicios básicos, el Paro del Nororiente buscó posicionar el tema de la soberanía nacional y la lucha contra el saqueo de los recursos naturales. Esta bandera se expresaba concretamente en lo referente a la explotación del petróleo, de forma tal que, en los casos de Tibú, Barrancabermeja y Arauca, algunas de las demandadas del paro se relacionaban con la extracción de petróleo o la manera como se repartían las regalías por esta actividad. En varios pliegos se incluyó la renegociación de los contratos de Ecopetrol con las compañías multinacionales, razón por la cual el paro también fue impulsado de forma significativa por la USO tanto en Tibú como en Barrancabermeja (CNMH, entrevista, hombre movimiento cívico, Cúcuta, 2016).

El sindicato de maestros Asinort también participó, no solo llevó a cabo actividades concretas dentro de la organización, sino que además se incluyeron reivindicaciones propias en el pliego de peticiones, como involucrar recursos para colegios y escuelas y asignación de docentes para los centros educativos.

Una de las tensiones que surgió en torno al Paro del Nororiente se relaciona con la participación de las guerrillas en su convocatoria y despliegue. Muchas personas recuerdan que la insurgencia promovió la participación de los campesinos en la movilización pues "las guerrillas tratan es de movilizar a la gente socialmente a que se pronuncien en contra del Estado" (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

En Campo Dos fue relatado que "la orden era que el que no iba al paro no podía trabajar" o que tenía que hacer un aporte. Recuerdos similares surgieron en el municipio de Convención, en donde se mencionó que, si bien el Paro del Nororiente fue liderado desde el sector campesino por las JAC, el ELN intimidó a la población para que salieran a marchar.

Esta enorme movilización generó tensión con las autoridades y gran preocupación en varios sectores de la provincia de Ocaña porque fue una demostración de fuerza de un número importante de organizaciones sociales haciendo una acción concertada, por el despliegue tan significativo de campesinos y por la posible incidencia de la guerrilla en su convocatoria.

Al final, después de las grandes movilizaciones y concentraciones de personas venidas de todos los rincones de la región, se instalaron mesas de negociación en Ocaña, Tibú y Cúcuta entre los voceros o delegados de las marchas y los representantes del Gobierno departamental y nacional.

Paro del Nororiente. Concentración en Ocaña. Fotografía: Cortesía Aurora Vega, Ocaña, archivo personal.

En Ocaña se llevó a cabo la negociación con más presencia campesina. Como representantes del Gobierno estuvieron el delegado del PNR para Norte de Santander, las secretarías de hacienda, desarrollo y salud y el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) y, por parte de las comunidades, la Coordinadora Popular Local y representantes de los municipios y veredas, de forma tal que las negociaciones se hicieron por zonas y municipios:

> En la primera fase se lograron acuerdos con los dirigentes de Güamalito, corregimiento del municipio de El Carmen. En la segunda parte se hizo con los voceros de Hacarí y San Calixto y así sucesivamente. Se decidió negociar por municipios debido a que el pliego conjunto que presentaron inicialmente era gigantesco, pues abarcaba peticiones de 168 veredas de la provincia de Ocaña (CNMH, entrevista, hombre movimiento cívico Cúcuta, 2016).

Los campesinos concentrados en Tibú y los pobladores urbanos que participaron en el paro negociaron tras la llegada del gobernador Eduardo Assaf Elcure a este municipio, quien se comprometió a dotar de energía eléctrica a la región, promesa que permitió el levantamiento del paro.

Aunque en Cúcuta la concentración de campesinos no fue masiva, se calcula que llegaron cerca de quinientos, allí se logró que el alcalde de la ciudad, Jorge Enrique Maldonado Vargas, se sentara con la coordinadora del movimiento a discutir un pliego de peticiones de más de cuarenta puntos sobre salud, educación, política petrolera nacional, aspectos laborales, reforma agraria y obras públicas.

En torno al Paro del Nororiente giran distintos relatos sobre las ganancias y los aprendizajes que les dejó a los habitantes de la región: Lo primero que se destaca es que se logró visibilizar las condiciones del Catatumbo a nivel regional y nacional y se logró por primera vez tener una interlocución con representantes del Gobierno departamental y nacional.

Lo segundo, es el mejoramiento de algunas condiciones de vida en la región, por ejemplo, en Ocaña la construcción del hospital Emiro Quintero Cañizares y de la Universidad Francisco de Paula Santander, además, del nombramiento de profesores, construcción de escuelas, instalación del puesto de Telecom en La Gabarra, mejoramiento de carreteables como el de La Trinidad en Convención, las vías que de La Gabarra conducen a veredas como Caño Tomás y la carretera departamental, la electrificación en Convención, La Gabarra (Tibú) o de El Tarra y el inició de los trámites para la conformación El Tarra como municipio.

Lo tercero que las personas del Catatumbo mencionaron es cómo la realización del Paro del Nororiente aportó en la formación y consolidación de los liderazgos de las personas, como lo menciona una líder de Cúcuta que vivió de cerca el proceso de negociación en esta ciudad:

> La gente aprendió a investigar su entorno, hacían diagnósticos de lo que había en su pueblo o vereda, tenían un conocimiento de su entorno mucho mejor que cualquiera que estaba allá en la Alcaldía, o un concejal, o un asambleísta, ¿por qué? porque ellos lo estaban sufriendo, lo estaban viviendo (CNMH, entrevista, mujer adulta mayor, exsindicalista, Bogotá, 2017).

Para un militante de la UP, además, el paro fue concebido como una catapulta política porque era la primera vez que las distintas tendencias políticas se ponían de acuerdo. En ese momento se consolidaron procesos unitarios pero diversos de coordinación de acciones reivindicativas de lucha social y política, porque antes "parecíamos perros y gatos". Esto les permitió ganar en "madurez política" y en la comprensión de que eran necesarias acciones de mayor envergadura, eso "nos alimentó muchísimo" (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2017).

Sin embargo, la perspectiva de los logros es matizada por muchos de los participantes en talleres y entrevistas, pues fue reiterada la mención a las graves consecuencias en términos de la vida y la seguridad de los participantes, en especial de los dirigentes, pues muchos fueron asesinados y otros se tuvieron que desplazar para salvar su vida:

> La mayoría de personas que dieron mucha cara, la mayoría los mataron, otros tuvieron que irse, hay unos en Canadá, otros en Venezuela, otros en México, en diferentes partes. De los 44 negociadores del pliego de peticiones de ese entonces solamente contamos con vida en el momento ocho de toda la pro-

> vincia de Ocaña. De los 44 había 5 mujeres únicamente (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Ocaña, 2017).

Entre las víctimas fueron recordados Benjamín Quintero y Jorge Vivas de La Playa; Luis Pérez de Cerro Negro, en Convención; Carmelo Velásquez de Teorama; Hernando Sanguino de Ocaña; así como Hugues López, Víctor Contreras y Jesús Amaya. La persecución y asesinato de los dirigentes del paro repercutió contundente en el deseo de las personas de seguir promoviendo procesos de reclamación, por lo cual la gente ya no quería exponerse.

Así mismo, las personas recalcan los incumplimientos que se dieron por parte del Gobierno y la idea de que las cosas que se lograron fueron mínimas frente a las grandes necesidades existentes. Justo por los incumplimientos, después de establecer los acuerdos en las negociaciones, se inicia un nuevo ciclo de movilizaciones.

En septiembre de 1987, a tres meses de haber finalizado el Paro del Nororiente, se inició una nueva marcha de aproximadamente dos mil campesinos hacia Cúcuta, con el propósito de reclamarle al Gobierno por el incumplimiento de los compromisos pactados, pero esta vez con situaciones de represión y fuerte militarización del recorrido.

Después de varios intentos de continuar pese a los bloqueos y a la mediación del gobernador, los campesinos lograron llegar a la capital departamental en donde se ubicaron en el Parque Santander y empezaron a recibir apoyos de los sindicatos, en especial de la USO y de Asinort (los cuales jugaron papeles protagónicos en esta negociación) y de las organizaciones cívicas de la ciudad, pero también reacciones de rechazo por parte de los cucuteños:

> El primer acto simbólico de la toma es preparar el desayuno-almuerzo matando ahí un novillo (...) se despresa y se monta la alimentación para dos mil y pico de campesinos. Entonces, mirar esa situación en la ciudad de Cúcuta que en general el ciudadano está bien desconectado de esas realidades del campo o de las zonas marginales, vive su vida citadina y mirar esta gente en ese volumen, bañándose y lavando su ropa en la fuente central del Parque Santander, sacando el agua de ahí para el gasto, montar las ollas comunitarias y despresar el novillo, la sangre que queda regada, los campesinos sin camisa vueltos nada, ayudándose a bañar unos a otros, comienza a generar una situación de reacciones de todo orden, de rechazo (CNMH, entrevista, hombre movimiento cívico, Cúcuta, 2016).

A las conversaciones les siguió que el movimiento terminó levantándose pacíficamente alrededor de tres días después, pero a partir de esta nueva jornada de protesta las personas empezaron a sentir el riesgo, la persecución y las detenciones de algunos dirigentes.

Luego de estas movilizaciones, las organizaciones sociales de la región comenzaron a concebir una acción que trascendiera su marco regional y que tuviera una mayor contundencia en el nivel nacional. La intención era movilizarse inicialmente hacia Bucaramanga para llegar a Bogotá. Así, empezaron a planear lo que se conoce en la región como la toma de Bucaramanga o las marchas de mayo del 88[94].

Esta vez, sin embargo, los marchantes no pudieron cumplir con su objetivo. En el Catatumbo, el también conocido como paro del 88, se desarrolló con movilizaciones en Convención, El Tarra, Hacarí y San Calixto, las cuales fueron bloqueadas por la fuerza pública en las vías.

94 Estas manifestaciones fueron territorialmente más amplias que el Paro del Nororiente pues además hubo marchas campesinas en la Costa Caribe y en el Nordeste antioqueño, y fueron impulsadas bajo el liderazgo de A Luchar.

> Nosotros montamos resistencia y dijimos, vamos a echar pa' lante porque no podemos echar pa' atrás, entonces organizamos el paro hacia Bucaramanga, ese sí nos quedó grande, porque no nos dejaron pasar de La Esmeralda y nos tocó que estancarnos entre San Pablo y El Aserrío, los de aquí de El Tarra hacia arriba y los de El Tarra hacia abajo para Cúcuta. Llegó un grupo de Ejército y nos lo mandaron por la parte de La Trinidad, a caer a El Aserrío al puente, nos rompieron, llegando al puente fue plomo corrido y fue palo corrido, pero muy bravo intentar la bala con un garrote muy difícil, ahí a todo el mundo nos dio miedo y ya fuimos hacia atrás, hacia las veredas (CNMH, entrevista, hombre líder social, El Tarra, 2017).

En esas marchas se hizo una negociación en principio en cada sitio de concentración, "porque en cada sitio donde el Ejército montó una barricada se generaron concentraciones de cinco mil, de seis mil, de ocho mil, de diez mil campesinos en toda la región. Había por lo menos unas diez concentraciones en toda la región" (CNMH, entrevista, hombre dirigente del Paro del Nororiente, Bogotá, 2017). Sin embargo, estas negociaciones se vieron interrumpidas por la masacre de Llana Caliente, punto cercano de San Vicente de Chucurí, en Santander, por lo que se produjo la cancelación inmediata de las movilizaciones y la pretensión de llegar a Bucaramanga.[95]

Es en este punto cuando se presenta un declive de la movilización y la protesta social en el Catatumbo y es cuando las remembranzas de las personas entrevistadas ubican el inicio de la represión y la guerra sucia en la región, dirigidas, en especial, contra las personas que participaron y lideraron estas movilizaciones.

95 Aunque no está plenamente esclarecido, una organización de víctimas relata el 29 de mayo, 38 campesinos fueron asesinados y otros 58 heridos por 240 efectivos del Batallón de Infantería No. 40 "Luciano D' Elhuyar", al mando del Teniente Coronel Rogelio Correa Campos (Vidas Silenciadas, 2017).

2.4. Elección popular de alcaldes y movimientos cívico-populares

Además de las movilizaciones, puntos de concentración y bloqueos como forma de expresión y mecanismo para hacerse escuchar en el Catatumbo, las organizaciones, en especial las cívicas, la UP y, en menor medida, el Frente Popular, apostaron a otras maneras de ejercer participación de las comunidades.

Al principio, uno de estos canales fue la elección popular de alcaldes y luego la consolidación de movimientos cívico-populares. La elección popular de alcaldes fue uno de los mecanismos a través de los cuales el Gobierno nacional buscó avanzar en la descentralización. Se buscaba, por un lado, democratizar el ejercicio del poder en las regiones, aumentando la participación de las comunidades en las decisiones que se tomaban sobre sus territorios y, por el otro, dar más responsabilidades y autonomía fiscal a los entes territoriales. Además, se proponía acercar a organizaciones sociales y políticas que se sentían excluidas de los escenarios de participación electoral y crear mecanismos que contrarrestaran el clientelismo y la corrupción.

Como lo expresaron algunas personas consultadas, en la región había un cansancio frente a la persistencia de los partidos Liberal y Conservador como únicos contendientes, por lo cual esta apertura democrática en marzo de 1988 trajo entusiasmo por ejercer cargos públicos de forma diferente a como se había realizado hasta entonces. Se abrieron escenarios nuevos de participación para los liderazgos construidos al interior de las comunidades.

Fue un momento de auge de las ideas en torno a la participación ciudadana y la democracia que se expresó de diversas maneras, una de las cuales fue el programa radial "semillas de democracia" promovido por un grupo de dirigentes en la emisora de la diócesis en Tibú, durante el cual se desarrollaban análisis y debates sobre la problemática regional y que pretendía convertirse en escenario para llevar a cabo ejercicios de veeduría y rendición de cuentas a los funcionarios de la administración local, incluido el mandatario municipal (CNMH, entrevista, hombre movimiento cívico, Cúcuta, 2016).

La elección popular de alcaldes fue entendida además como un elemento a los procesos de articulación y construcción de autonomía que se desarrollaban en la región, una posibilidad para que los pobladores pudieran ejercer la administración de sus territorios, como una oportunidad para prescribir la politiquería[96].

Fue muy significativa la experiencia en Tibú. Esta fue la primera oportunidad que tuvieron las organizaciones locales de este municipio -encabezadas por la UP- de pensarse el ejercicio de los gobiernos locales. Este movimiento político logró que fueran elegidos en la primera elección popular tres concejales y el alcalde en coalición con el Partido Conservador, como lo narra un líder cívico del municipio:

> Comenzó a ser ya matizado, ya no eran solamente liberales o conservadores, sino que ya llegó la izquierda al Concejo. Fue el primer acceso al poder municipal, fue a partir del Concejo que comenzamos a hacer escuela y conocer de cerca la administración, a confrontarla para aprender de ella, para cuando tuviéramos ya un alcalde nuestro de los movimientos sociales, ya supiéramos con

96 Otro hecho significativo que se dio en este periodo fue el cambio a la Constitución Política de 1991. Abrió la posibilidad de creación de los movimientos cívicos municipales y regionales y de Asojuntas (Asociaciones de Juntas Comunales).

> qué se comía la administración. No queríamos ser irresponsables, por eso apoyamos a Eduardo Rolón sin importar que fuera conservador, porque era de una familia muy querida de Tibú, un hombre formado, profesional, humilde, tranquilo, sin petulancias, no era un politiquero, fue un hombre muy bueno que lo hizo muy bien y por eso lo apoyamos en su gestión (CNMH, entrevista, hombre movimiento cívico, Cúcuta, 2016).

Después de esta primera experiencia de apoyo a un candidato que representaba una coalición de diversos sectores en Tibú, la UP tuvo participación electoral con David Jaimes, quien llegó a la alcaldía de Tibú entre 1990 y 1992. Su alcaldía es recordada como un Gobierno que buscó escuchar a las personas vereda a vereda y como la primera escuela de formación en administración y de "participación del pueblo en la toma de decisiones, en qué quiere decir la democracia" (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Convención, 2017). Además, se recuerda que, durante su alcaldía, fueron nombrados aproximadamente 40 profesores oficiales que habían sido maestros misioneros con monseñor Madrid Merlano, obispo que además apoyó otros programas de Gobierno, como las operaciones de labio leporino, la construcción y mejoramiento de escuelas y la construcción de la planta de tratamiento de agua[97].

Después vino la alcaldía de Tirso Vélez entre 1992 y 1994, una fuerza política organizada que recibió el respaldo de movimientos cívicos del municipio, cooperativas, organizaciones campesinas y de miembros de los partidos Conservador y Liberal. Este alcalde también tuvo abiertos escenarios para escuchar a los habitantes del municipio propiciando la participación comunitaria en las labores de Gobierno[98].

---

97 David Jaimes fue asesinado por paramilitares en junio de 2004, en una dinámica que se replicó en toda la región.

98 Para más información sobre esta alcaldía y Tirso Vélez, remítase al informe *Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados* (CNMH, 2014). Tirso Vélez fue asesinado también en junio de 2003 en la ciudad de Cúcuta.

Durante estos años, la UP en Tibú llegó a convertirse en referente nacional del movimiento, pues en el país ya había iniciado el exterminio contra sus integrantes, por lo que "el Gobierno de la UP en Tibú era muy famoso a nivel nacional, era uno de los últimos fortines de la UP en ese momento, era lo más grande que tenía" (CNMH, entrevista, hombre líder social, Convención, 2017).

Además de las alcaldías populares, surge una experiencia significativa en la memoria de habitantes del Catatumbo: la creación de los movimientos cívico-populares en El Tarra y San Calixto, los cuales tenían más perspectiva de cambio, a diferencia de Convención, Teorama, Ábrego y Ocaña, más influenciados por los partidos tradicionales.

Fue especial la referencia al de El Tarra, cuya base fueron las JAC y las cooperativas y que surgió después de conformarse como municipio en noviembre de 1990, proceso en el cual la Cooperativa Multiactiva de El Tarra tuvo un importante liderazgo. Desde 1991 y hasta 1999 fueron seis los alcaldes provenientes del movimiento cívico y popular en este municipio: Víctor Ballesteros, Diosemiro Bautista Ascanio, José de Dios Díaz Núñez, José Manuel Giraldo Martínez, José Aníbal López y Javier Carrascal.

Acto político en apoyo al candidato a la alcaldía de El Tarra para el período 1995-1997, Diosemiro Bautista. Fotografía: cortesía de Víctor Ballesteros, El Tarra, archivo personal.

Según los relatos de las personas entrevistadas, la mayor parte de la población de El Tarra estaba afiliada al Movimiento Cívico Popular y durante la alcaldía de Diosemiro Bautista se cumplieron las expectativas de participación de las comunidades. Se recuerda que durante su mandato el trabajo de base creció y aumentaron las juntas comunales.

La elección de Javier Carrascal en diciembre de 1999 fue muy significativa, se dio por primera vez un proceso para elegir un candidato único para la alcaldía, intentando superar dificultades que se habían presentado con las alcaldías precedentes[99]. Así, se buscó un candidato único que tuviera el respaldo de la comunidad:

99 La alcaldía de José Manuel Giraldo Martínez de la UP fue interrumpida pues debió renunciar ante una incompatibilidad de intereses, y a José Aníbal López los paramilitares le secuestraron un hijo en la vía Ocaña Bucaramanga, y él decidió retirarse del cargo por temor.

> Que todas las JAC enviaran su presidente y dos delegados más y las asociaciones que hubieran de peseros, de comerciantes, de padres de familia enviaran también sus delegados y se hiciera una asamblea solo de delegados y allí se pusieron a consideración los nombres de dos candidatos y cada uno tuviera la posibilidad de responder preguntas de los asistentes y, finalmente, someterlos a una votación y quien tuviera la mayoría de votos de los delegados ahí presentes, representantes de las comunidades, fuera considerado el candidato único e iría ya a la elección con la seguridad que era el alcalde (CNMH, entrevista, hombre exfuncionario de El Tarra, Canadá, 2017).

Otra de las alcaldías cívicas recordadas por su significación política fue la de Pauselino Camargo, entre 1992 y 1994 en Cúcuta. Este sacerdote ganó la elección para la alcaldía de la capital del departamento con 72 mil votos, la más alta votación de la historia de la ciudad[100].

En suma, en el Catatumbo las fuerzas sociales y políticas a favor de los escenarios electorales asumieron el reto de prepararse y ocupar el Gobierno municipal en diferentes municipios y lo ejercieron con mayores niveles de participación comunitaria, impulsaron una mayor participación de las juntas comunales. Todas estas expresiones cívicas empezaron a agruparse a nivel nacional en lo que se conoció como la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, la cual tuvo un capítulo en Norte de Santander. Sin embargo, estas experiencias de poder local se quedaron truncadas por la represión y guerra sucia y luego por la arremetida paramilitar, tiempo en el que la mayoría de sus dirigentes fueron asesinados o desplazados forzadamente.

---

100 Pauselino Camargo fue asesinado cuando pensaba volverse a lanzar a las elecciones. El paramilitar Jorge Iván Laverde Zapata, alias *El Iguano*, confesó ser el responsable de los asesinatos de Pauselino Camargo en 2000 y de Tirso Vélez en 2003, cuando este último lideraba las encuestas como candidato a la Gobernación de Norte de Santander (Verdad Abierta, 2008, 29 de diciembre)

2.5. Se viene la represión

Después del Paro del Nororiente y más significativo luego de las jornadas de mayo de 1988 y hasta finales de los años noventa, se dio en la región lo que las personas llamaron la represión o un periodo de feroz persecución contra los dirigentes más visibles de las organizaciones comunales, las movilizaciones y las elecciones populares. Este periodo se vinculó también a la guerra sucia y en la región se asoció con las detenciones arbitrarias y los montajes judiciales (CNMH, 2018a).

Años de arremetida silenciosa, acciones de castigo con carácter selectivo en las que se ejecutaron asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos forzados y detenciones contra líderes sociales y sectores políticos de oposición, personas que participaron de acciones de reclamación social o de escenarios de participación y apertura democrática. Por sus liderazgos fueron catalogadas como colaboradoras de la guerrilla o guerrilleras, o con tendencias ideológicas afines a ellas, como sindicalistas, miembros de los movimientos políticos de izquierda y de las organizaciones cívicas y comunales como JAC y cooperativas. Se usaba la lógica de "quitarle el agua al pez", en donde el pez eran las insurgencias y el agua tanto los líderes sociales y comunitarios, como la comunidad en general, lo que concebían como la base social de las guerrillas, como se amplía en el capítulo 3.

Sin embargo, la población consultada recalcó en varias ocasiones que las personas asesinadas eran ajenas a cualquier tipo de acción violenta, que no era gente armada, eran campesinos, líderes de la región. Consideran que las acciones en su contra tuvieron amplias repercusiones en la desestructuración del tejido social, en la pervivencia y trayectoria de liderazgos y de propuestas alternativas en la región y en las iniciativas de

movilización social, pero no afectaron la existencia y permanencia de las guerrillas en la región.

Rememoran que, hacia 1988, surgieron en Ocaña lo que en la época se llamó "escuadrones de la muerte", grupos que adoptaron distintos nombres y actuaron en toda la región. De los ejercicios de memoria colectiva e individuales, se logra identificar que los habitantes establecen que estos grupos criminales tuvieron la anuencia de algunas instancias oficiales y, relacionan este momento, con el germen o a los inicios del paramilitarismo en la región.

El primero de estos grupos fue la Sociedad de Amigos de Ocaña SAO, que actuó entre 1988 y 1995 en la provincia y que, en la percepción y recuerdo de habitantes de la región, presuntamente contó con la participación de personas pudientes, comerciantes, sectores de la iglesia y organismos del Estado. Este grupo identificaba a los líderes que venían de otros municipios de la región hacia la ciudad de Ocaña y los asesinaban. Esta situación generó en los líderes miedo y que adoptaran mecanismos de protección como "esconderse" y dejar de transitar por la ciudad, pues "estaba vetado"[101].

De igual manera son nutridas las memorias en torno al surgimiento en Ocaña de la "Mano Negra", grupo que posteriormente se fue extendiendo a otros municipios y al que se le asocian acciones de "limpieza social" en la que involucraban "no solamente delincuencia, indigentes, sino también lo que ellos consideraban enemigos del Estado, como personas

101 Como respuesta a esta serie de acciones de la SAO habitantes del Catatumbo recuerdan que las guerrillas -en particular el ELN y el EPL, pues las FARC no tuvieron una presencia fuerte en Ocaña- cometieron asesinatos selectivos contra personas que presuntamente hacían parte de este grupo.

de izquierda o líderes muy importantes" (CNMH, entrevista, hombre líder social, Cúcuta, 2017).

Como lo relató un habitante de Tibú, la existencia de este grupo fue relacionada con la llegada de la Brigada Móvil No. 2 del Ejército al Catatumbo:

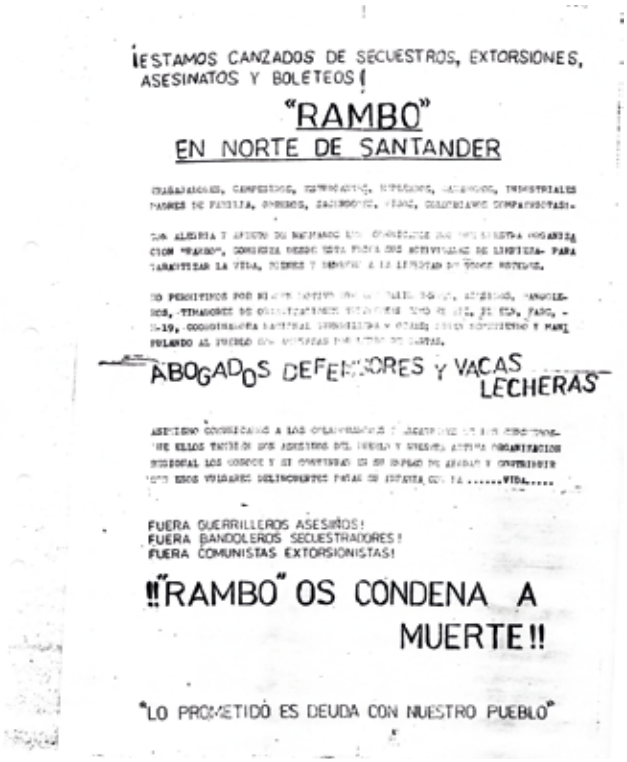
> Fue cuando la entrada de la llamaba Brigada Móvil 2, porque en El Tarra llegaron en el 91 y de ahí se desplazaron para esta zona [Tibú]. Entonces debido a toda esa resistencia y las denuncias y todo empezaron a quejarse lo que fue a la Procuraduría, la Fiscalía, Derechos Humanos y a mucha gente de esa la destituyeron, la sacaron de las instituciones del Estado porque es que el Estado tenía esos batallones donde ahí mismo operaba lo que llamaban la 'Mano Negra' y toda esa cuestión, torturas y muertes y ya por la presión de la misma comunidad y las denuncias a esa gente la sacaron de ahí de esos puestos del Gobierno, pero se fueron a parar a los paramilitares (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016)[102].

La "Mano Negra" fue referida en Sardinata, Tibú, El Tarra y La Playa. En Las Mercedes (Sardinata), por ejemplo, se mencionó que eran personas de civil con armas que hacían inteligencia, preguntaban a los habitantes por su identidad y actividades y con su presencia y accionar generaban en la comunidad "una impresión bastante tremenda" (CNMH, entrevista, hombre líder social, El Tarra, 2017).

En La Playa, algunas personas consultadas, expresaron que el grupo La Mano Negra era estimulado por miembros de élites políticas de la región, que empezó a ser utilizado de forma genérica para llevar a cabo acciones anónimas, entre las que se cuentan asesinatos selectivos contra aspirantes alternativos a cargos de poder local, acusados de pertenecer

102 La Brigada Móvil No. 2 fue creada en 1993 y operó en los municipios de Ocaña, Hacarí, El Carmen, San Calixto, Teorama, El Tarra, Tibú, Ábrego y Cáchira.

a la insurgencia. Pero estos no fueron los únicos grupos de este tipo. En la región surgieron referencias reiteradas sobre el grupo MAS (Muerte a Secuestradores) también conocido como Masetos, y del cual se tienen referencias en Tibú y en Ocaña generando amenazas, hostigamientos y asesinatos, Colsingue(r) (Colombia sin Guerrilla), MACO (Muerte a Comunistas), Rambo, los Rampuches (en Tibú) y el CRMC (Comité por la Reivindicación Moral de Convención).



¡ESTAMOS CANZADOS DE SECUESTROS, EXTORSIONES, ASESINATOS Y BOLETEOS!

"RAMBO"

EN NORTE DE SANTANDER

ABOGADOS DEFENSORES Y VACAS LECHERAS

FUERA GUERRILLEROS ASESINOS!
FUERA BANDOLEROS SECUESTRADORES!
FUERA COMUNISTAS EXTORSIONISTAS!

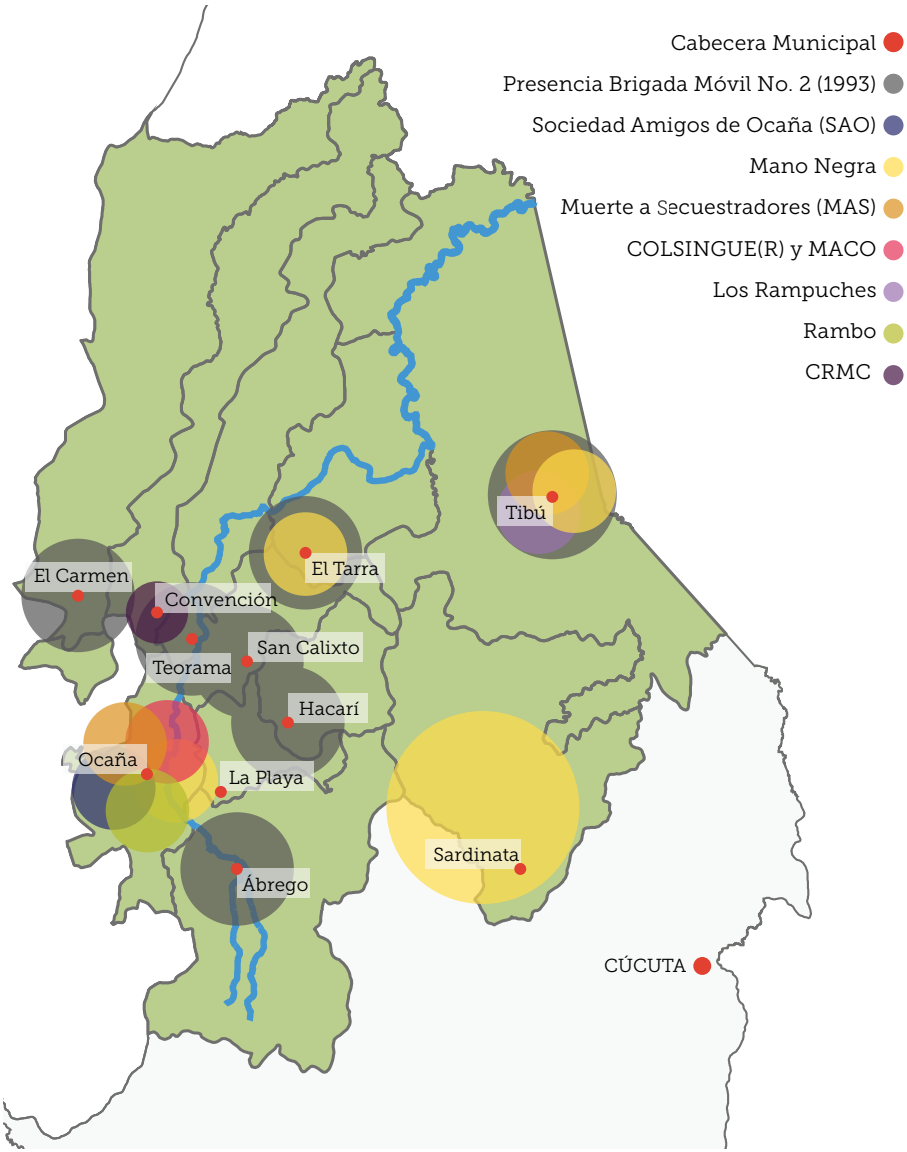
!!"RAMBO" OS CONDENA A MUERTE!!

"LO PROMETIDO ES DEUDA CON NUESTRO PUEBLO"

Panfleto de amenaza de Rambo. Sin fecha. Fotografía: Cortesía Asociación Minga.

Ocaña es el municipio donde estos grupos comienzan a hacer presencia para luego extenderse a otros municipios de la región, como lo muestra el siguiente mapa:

Mapa 8. "Escuadrones de la muerte" en el Catatumbo 1988-1997



Fuente: CNMH, elaboración propia con base en entrevistas individuales 2016-2017; revisión de archivos y literatura secundaria.

Además de estos grupos, fue significativa la percepción de los habitantes de la región consultados en torno a la participación de la fuerza pública en lo acontecido en contra de estos mismos liderazgos. Los participantes y dirigentes recordaron que durante el Paro del Nororiente fueron reseñados por personas vestidas de camuflado, es decir, que habían sido fotografiados "de frente, de lado, de espaldas, acostados, sentados, de todo" y posteriormente identificados al tomar su nombre y su número de cédula (CNMH, entrevista, hombre líder comunal, Teorama, 2016).

Luego de esta reseña, recibían amenazas de muerte por lo que tenían que salir desplazados. La amenaza consistía en mensajes del tipo "ábrase que lo vamos a pelar", que llegaba a través de un amigo, un panfleto, o a través de alguien que escuchaba, no a través de un policía o un soldado. El comentario se generaba y "llegaba hasta oídos de la persona que estaba siendo sentenciada" (CNMH, taller de memoria, Convención, 2017).

Esta situación se replicó no solo con dirigentes de las movilizaciones sino también con funcionarios del nivel local, como lo cuenta un exconcejal del municipio de San Calixto: "en esa época fue que iniciaron a perseguir a los concejales (...). Como uno se identificaba con una escarapela para asistir al Concejo, entonces la Policía le decía a uno: tiene la lápida colgada, quería decir: en cualquier momento le damos *materile*[103]" (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

Así mismo, fueron recordados casos de tortura en contra de líderes en Tibú, El Tarra, Hacarí, Convención y Ocaña, que implicaron repertorios como el ahogamiento con bolsas en la cabeza, hundimientos de cabeza en piletas de agua, patadas, degollamiento, introducción de objetos en

103 Expresión utilizada para referirse a darle muerte, asesinarlo.

órganos sexuales y cercenamientos, entre otros. En muchos casos, la tortura estuvo acompañada de desaparición forzada y asesinato, como lo relata un habitante de Hacarí:

> Resulta que una vez en casa del señor llegó un grupo del Gobierno, del Ejército a patrullar por ahí y entre esas habían tres señores que iban desplazados de Ocaña hacia La Vega de San Antonio (Hacarí) y los tildaron como organizadores del paro (...). [Los tres señores] asumieron los riesgos de irse para la casa de ellos, (...) y entonces se subieron al vehículo y se fueron y los agarraron en el monte y los dieron por desaparecidos, porque duramos ocho días buscándolos. (...) a ellos los torturaron, el Ejército los torturó, los degolló, al señor, al buen señor lo violaron con un palo (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016).

Para el caso de los movimientos políticos de izquierda que hacían presencia en la región la persecución fue frontal. Para el Partido Comunista vender el periódico Voz Proletaria se convirtió en un motivo de persecución y para la UP llevar material que representara a su partido era suficiente para que en los retenes militares una persona fuera acusada de ser guerrillera y luego amenazada (CNMH, entrevista, hombre líder social, Cúcuta, 2017).

De hecho, es en estos años cuando se da el exterminio de la UP, como es expresado por sus militantes. Una fecha de significativa recordación es el 26 de enero de 1988, día en que ocurrió lo que conocen como la masacre de Convención, en la cual fueron asesinados el presidente departamental de la UP, Ramón Aníbal Díaz Carvajal -aspirante a la alcaldía-, la personera municipal y militante de la UP Elba Cecilia Castro y Alirio Vera, tesorero municipal (del Partido Conservador) que se encontraba con ellos (CNMH,2018).

De esta masacre las memorias hablan de un presunto contubernio entre el grupo ejecutor y miembros de la fuerza pública, debido a que fue ejecutada a dos cuadras del comando de Policía municipal y a que la ruta de escape utilizada por los perpetradores -única vía hacia Ocaña y por entonces en su mayoría destapada, por lo que la duración del trayecto era aproximadamente de una hora- no encontró obstáculos y pudieron escapar sin problema.

Era tan fuerte la inseguridad que algunas personas que aspiraban a cargos de concejalías y alcaldías no pudieron ejercer, pues posesionarse representaba un riesgo para la vida. A partir de allí la UP "debió quedarse quieta" (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2017) pues ya no había garantías y tuvieron que desistir de sus proyectos y guardar silencio (CNMH, entrevista, hombre líder social, Convención, 2017). Los militantes recuerdan que "todos los cuadros fueron asesinados" (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Tibú, 2017), como ocurrió además con Emiro Pacheco, Bernabé Sánchez (concejal), Manuel Pinilla (concejal), Hugo Fernel Sanguino, Roberto Contreras, David Jaimes y Tirso Vélez (exalcaldes de Tibú) (CNMH, 2018)[104].

Una situación similar ocurrió con A Luchar. Después de jugar un papel protagónico en las movilizaciones del nororiente colombiano, este movimiento político empezó a sufrir un arrasamiento en contra de sus militantes, por lo cual las marchas de mayo de 1988 se constituyeron en su última acción.

Un integrante de A Luchar recordó cómo era la sensación de riesgo que vivía para esta época: "Yo tuve mucho material de ese y sabíamos que

104 En los ejercicios de memoria se señaló que en este periodo no solo los "escuadrones de la muerte" y la fuerza pública llevaron acciones en contra de la UP. Algunos entrevistados hicieron alusión al asesinato de dirigentes de este partido político por parte del ELN, como fueron los casos de Eliecer Pérez en El Tarra y Daniel Cantillo en La Gabarra (Tibú).

el Ejército estaba por ahí cerquita y tocaba quemarlo porque al que le encontraban alguna cuestión de A Luchar, lo iban matando, se buscó descabezar a los líderes como victimización ideológica" (CNMH, entrevista, hombre líder social, El Tarra, 2017), es decir, un señalamiento de que sus dirigentes eran guerrilleros y, por tanto, eran proclives a ser victimizados por sus ideas políticas.

Este periodo, que coincide con la desaparición por acciones criminales de A Luchar, y que se basó según sus integrantes en "matar a una persona porque piensa distinto y porque quiere un cambio en la región", corresponde al mismo periodo en el cual fueron asesinados Hernando Sanguino (dirigente de Asinort y líder del Paro del Nororiente), Carmelo Velásquez, Javier Acosta (presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos) y Miguel Gallardo.

La misma situación, en mismo periodo, la vivió el movimiento político Frente Popular, lo que provocó su desaparición del espectro político regional. Así lo recuerda uno de sus dirigentes: "Nosotros después del Paro del Nororiente nos tocó salir de Tibú, desterrados, hasta que lograron finalmente que esas organizaciones desaparecieran del panorama político" (CNMH, entrevista, hombre sindicalista, Cúcuta, 2017). De esta experiencia organizativa se recuerda el asesinato de Ramón del Carmen Álvarez Peñaranda de El Tarra y de Ramona Tarazona de Campo Dos (Tibú), dirigentes de la ANUC.

Las personas de estos tres movimientos en la región relataron que en esta época tuvieron que esconderse durante años, sin pasar por las carreteras o por donde había Ejército o Policía porque se ponía en riesgo su vida, o podían caer encarcelados (CNMH, entrevista, hombre líder social, El Tarra, 2017). El exilio o el destierro fue la opción para muchos de ellos, varios de los cuales recibieron refugio en Canadá. También apelaron a los exilios académicos, salir del país para realizar estudios durante algún

tiempo y así proteger la vida. Los tres movimientos políticos desaparecieron de la región por asesinato y silenciamiento de sus integrantes.

A raíz de esta persecución y del incremento de asesinatos selectivos, torturas y desplazamientos, empiezan a surgir colectivos de derechos humanos, como el Equipo Coordinador por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Provincia de Ocaña, el que denunció, por ejemplo, las amenazas realizadas en 1991 a 26 personas de Convención por el CRMC, grupo paramilitar de reciente conformación (Equipo Coordinador para la Defensa y Promoción de los DD.HH. Provincia de Ocaña, 1991). Estas eran amenazas anónimas de muerte por su labor. La siguiente circuló en este municipio en septiembre de 1991, se reproduce textualmente:

> Las gentes de bien observamos con profunda preocupación cómo los comunistas y bandoleros del ELN y FARC siguen violando nuestros derechos humanos, con su principal activista a la cabeza de Edwar Álvarez [integrante de Equipo Coordinador en Ocaña]. Esto lo observamos en los continuos secuestros, extorciones, atracos que los bandidos antes mencionados vienen cometiendo contra los ciudadanos honestos y trabajadores. ¿Por qué el mal llamado Comité para los Derechos Humanos no se pronuncia al respecto?, sencillo, porque todos los integrantes son de los mismos. (...) cuídense señores comunistas de los derechos humanos. No sabemos ahora qué ideología van a seguir pregonando, cuando los países que crearon esta falacia en el mundo acaban a través del pueblo de acabar con el comunismo porque se dieron cuenta que duraron mucho tiempo bajo dictadura, opresión, marginados en el subdesarrollo y con la libertad perdida (...) dejen de tener ese organismo de los derechos humanos como fachada. Dejen de ser bandidos y engañar al pueblo y a la gente de bien. La van a pagar bien caro (Archivo de la Asociación Minga)[105].

105 De hecho, uno de sus integrantes, Hermes Rendón, fue asesinado en octubre de 1994 (Amnistía Internacional, 1995, página 4).

Además de las amenazas y los asesinatos, fueron significativos los relatos sobre detenciones masivas y arbitrarias que se dieron para finales de los años ochenta y durante la década del noventa por parte de la fuerza pública, como lo mencionaron en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú:

> [Se dieron] las capturas masivas por parte del Ejército nacional a líderes comunales, líderes sindicales, líderes políticos, que son treinta meses que duran detenidos la gran mayoría de ellos y son absueltos, pero eso menguó el liderazgo de la región (...). El 14 de noviembre de 1996 fue un operativo militar, el personal del Ejército llegó y se tomó Tibú, lo militarizaron y habían camionetas por todos lados con encapuchados que señalaban ´ese es´ y así fue como ese día detuvieron 17 personas (...) a muchas personas las llevaron dentro de los [camiones] cascabeles del Ejército, los transportaron y todo esto se da con muertes a civiles (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2012).

Muchos de estos dirigentes encarcelados, entendidos como presos políticos y acusados de ser miembros del ELN, el EPL o las FARC fueron enviados a cárceles en Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá[106]. Uno de los casos más recordados fue el de los quince sindicalistas de la USO capturados en Tibú[107].

El sindicato fue incriminado de ser aliado de las guerrillas y sus dirigentes, en particular, su presidente, acusados -bajo el régimen de justicia sin rostro, ideada para la lucha contra el narcotráfico- de la voladura de oleoductos y del secuestro de Bruce Olson, con testigos falsos pagos por

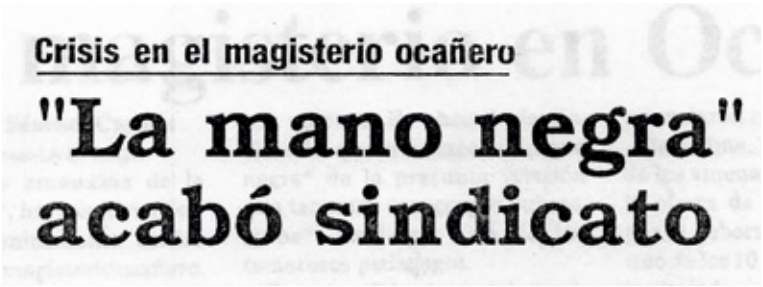
106 Entre los encarcelados estuvo Tirso Vélez de la UP, quien fue detenido porque había escrito un libro de poemas titulado "Poemas prohibidos", entre los que se encontraba el poema "Paz, te han vestido de negro". Al salir de prisión, habitantes del municipio y representantes de la Diócesis de Tibú le organizaron una caravana de solidaridad.

107 Sobre la USO fueron significativas las memorias sobre Manuel Gustavo Chacón, dirigente de este sindicato en Barrancabermeja y uno de los organizadores del Paro del Nororiente y de las marchas de mayo del 88, fue asesinado después de las protestas.

los militares (Fiscalía Regional de Bogotá, 1996, 9 agosto), la mayoría de los cuales fueron asesinados y "se estableció que era un proceso montado por la inteligencia militar contra el sindicato" (CNMH, entrevista, hombre exsindicalista, Bogotá, 2017).

El abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza que se vinculó a la USO para defender a algunos de estos dirigentes, descubrió que los tres principales testigos era uno solo. Este hecho significó una sanción a la Procuraduría General de la Nación para tres fiscales sin rostro y que los dirigentes sindicales fueran absueltos por el Gobierno del presidente Andrés Pastrana[108].

A raíz de la defensa de los sindicalistas de la USO, el abogado enfrentó amenazas de muerte. "Cuatro meses antes de su asesinato, él denunció que había un plan de sectores de la Brigada XX del Ejército, funcionarios de Ecopetrol y de la Fiscalía para matarlo. Eduardo Umaña Mendoza fue asesinado en mayo de 1998. En 2015, el exjefe paramilitar alias Don Berna afirmó que ese crimen fue ordenado por Carlos Castaño e instigado por militares" (El Espectador, 2017, 18 de abril). En septiembre de 2016, la Fiscalía General de la Nación declaró su muerte como de lesa humanidad.


Crisis en el magisterio ocañero

"La mano negra" acabó sindicato

Titular del periódico Vanguardia Liberal, 22 de julio de 1994, página 3A. Fuente Archivo Asociación Minga.

108 Puede ampliar sobre este caso en Revista Alternativa, 1998, No 19..

El sindicato de maestros Asinort fue una organización sindical muy victimizada. Varios de sus dirigentes fueron desplazados e inclusive asesinados. Los docentes recordaron las amenazas de La Mano Negra que llegaban a través de sufragios a casas y oficinas, por lo cual los maestros se dirigían a la ciudad de Cúcuta a denunciar[109].

A nivel del magisterio fue recordado Hernando Sanguino, quien fuera asesinado por la SAO saliendo de la institución educativa en la que trabajaba. "Fue uno de los primeros muertos que puso la docencia en Ocaña. Eso fue retaliación del Paro del 87, fue el primer muerto después del Paro del Nororiente Colombiano (CNMH, entrevista, hombre líder social, Ocaña, 2016). Particularmente la directiva sindical de Ocaña fue muy perseguida, según los testimonios.

Profesor Hernando Sanguino con otros docentes en seminario de Fecode en Cundinamarca en 1981. Fotografía: Cortesía familia Sanguino Salcedo, Ocaña. Archivo familiar.

109 Estas amenazas también se dieron a través de panfletos amenazantes, como ocurrió en mayo de 1994 cuando La Mano Negra amenazó de muerte a toda la directiva del sindicato en su seccional Ocaña, y extendieron la amenaza a todos los dirigentes sindicales de la región.

Además de la USO y Asinort, estuvo en la región Anthoc (Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios), sindicato del sector de la salud que se estableció en la región en 1993. En el archivo de la Asociación Minga fueron encontradas varias denuncias de la seccional Tibú que referían a asesinatos, desapariciones forzadas, allanamientos y acusaciones hacia sus dirigentes o de promotores rurales de salud de ser colaboradores de la guerrilla, por parte de miembros de la fuerza pública. La situación de zozobra de los miembros de este sindicato fue significativa en Tibú, Convención y Ocaña. En Ocaña se encontraba el presidente del sindicato a nivel departamental y tuvo que abandonar la ciudad por amenazas de muerte (Asociación Minga, 1994, 24 de junio).

Otro sindicato que hizo presencia en el Catatumbo, referido en especial en Cúcuta y Ocaña, fue Sindimaco (Sindicato de Madres Comunitarias). Sin embargo, lo que queda en el recuerdo de las personas, más que sus acciones concretas como sindicato, fue la victimización a la que fue sometido este grupo de mujeres organizadas, como lo cuenta una docente:

> Fue muy duro ese proceso de formación del Sindicato de Madres Comunitarias porque varias madres comunitarias murieron, (...) las mataron en Cúcuta y en la provincia, en el Catatumbo (...) Pues [hacían] en el Catatumbo lo que hacíamos todos los sindicatos, ir a organizar las subdirectivas, entonces en Cúcuta se organizó la Junta Directiva Central, (...) estaba de presidenta también Sor María Ropero, a Sor María la mataron en la sala de la casa, en La Ermita [en Cúcuta] delante de los hijos y cuentan que le metieron como 25 tiros (...). Y lo que decían [era] que a ella la acusaron de que era cómplice de la guerrilla (CNMH, entrevista, mujer adulta mayor exsindicalista, Bogotá, 2017).

También se obtuvo referencias sobre asesinatos de miembros de Sintraminobras (Sindicato de Obras Públicas de Ocaña), por ejemplo, la

muerte de su presidente, Eliécer Ojeda, en mayo de 1994, o el asesinato de Cristóbal Navarro, presidente de Asovipa (Asociación de Vivienda Popular y Autoconstrucción de Ocaña) en febrero de 1994 a causa de los disparos que recibió cuando atravesaba la plaza central de la ciudad. Según los informes, su nombre había aparecido en una "lista de la muerte" de sesenta dirigentes comunitarios locales (Amnistía Internacional, 1995, páginas 3-4).

Las "listas de la muerte" o "listas negras", contenían nombres de líderes de las comunidades y fueron utilizadas por los escuadrones de la muerte para identificar, amenazar y ejecutar algún tipo de acción violenta en su contra, fueron recordadas por las personas entrevistadas como instrumento de intimidación y generación de temor. Las primeras que se conocieron fueron hacia 1982 en Ocaña en donde, entre otros, amenazaban a los líderes estudiantiles de la zona.

Fue significativo el caso de las "listas negras" distribuidas en Convención en 1993, cuando doscientas personas fueron amenazadas de muerte a través de panfletos que aparecieron en las paredes. A quienes aparecían en los anónimos se les obligaba a marcharse del pueblo o de lo contrario sus vidas corrían peligro. Estos panfletos fueron firmados por un grupo llamado Grupo Zona Roja, amenazaron a comerciantes, agricultores, amas de casa, dirigentes políticos y sindicales, maestros y trabajadores hospitalarios, aunque días después corrió el rumor que los primeros en ser asesinados serían los dirigentes sindicales tanto del magisterio como del hospital (Asociación Minga, 1994).

Este contexto de violencia durante los años ochenta y noventa afectó de muy variadas maneras a la población organizada del Catatumbo. En las memorias de las personas hay referencias directas al daño producido en el terreno personal e íntimo y otras en las afectaciones al carácter social y político de las organizaciones.

Para las personas que estuvieron comprometidas con un proyecto político colectivo les sobreviene una sensación de soledad y de tristeza, como lo cuenta un líder de El Tarra:

> Personalmente me siento solo, yo fui una de las personas que le gustó mucho A Luchar y fui una de las personas que trabajé con la gente, con las comunidades y hoy en día, aunque a mí no se me acaba eso, mi sangre de A Luchar vive, pero uno ya no puede hacer, como anteriormente que uno podía reunirse con las comunidades, con los compañeros y mirábamos todas esas necesidades de la región, ya en este momento no, como digo, me siento triste (CNMH, entrevista, hombre líder social, El Tarra, 2017).

"Se pierde la secuencia, pues si matan a los mayores pensadores pues matan el movimiento" (CNMH, hombre adulto, líder social, El Tarra, 2017) y junto a su desaparición, se acaban las aspiraciones de cambio, de participación y de propuesta que tuvieron estas variadas formas de organización social y comunitaria en el Catatumbo, además la continuidad de un proyecto político que giraba en torno a la región.

Este tipo de violencia "menguó el liderazgo de la región por lo cual las personas no quisieron volver a organizarse para buscar soluciones a los problemas que los agobiaban, lo que hizo que la región se estancara" (CNMH, entrevista, hombre líder social, El Tarra, 2017).

Además, uno de los sentimientos que aún persisten es la sensación de temor, pues "si acabaron con esos movimientos y organizaciones pueden acabar lo que sea", de modo tal que persiste el miedo frente a un riesgo que se percibe como vigente.

Como se puede apreciar, el Catatumbo fue un escenario de efervescente organización social y comunitaria que, frente a la situación de marginalidad y precariedad en sus condiciones de vida, decidió organizarse,

en principio para solventar sus necesidades y, luego, para reclamar al Estado inversión en servicios públicos básicos. En este contexto se forjaron y consolidaron liderazgos individuales y colectivos que aprendieron a identificar las necesidades concretas de su territorio, a buscar soluciones y a gestionar recursos que permitieran ir solventando de forma progresiva las condiciones de precariedad, a través de la planeación y puesta en marcha de diversos proyectos que se concretaron en los escenarios locales.

Esto hizo que las comunidades sintieran cada vez más arraigo por su territorio, lo habitaron, lo conocieron en detalle y lo mejoraron por medio de ejercicios de planeación comunitaria y de concreción de iniciativas en aspectos fundamentales como infraestructura vial, educativa, contratación de docentes, comercialización de productos, créditos, entre otros.

Este proceso consolidó a nutridos sectores de la sociedad catatumbera, los incentivó a una activa participación en proyectos formales de planeación y ejecución de planes de Gobierno, en diversos municipios, con base en el conocimiento adquirido sobre las necesidades del territorio, sustentados en la construcción colectiva de propuestas (en las que se involucraba un abanico amplio de organizaciones) y, en muchos casos, posible por la oportunidad que ofreció la elección popular de alcaldes. La fortaleza en la construcción de estos procesos se sustentaba en la autonomía que las comunidades del Catatumbo habían edificado, en un contexto de muy débil presencia institucional del Estado. Estas corrientes de participación y planeación del territorio se habían nutrido de manera importante por corrientes de pensamiento de izquierda, que se hicieron presentes en la región y que fueron acogidas.

Todo este escenario representó para el Estado y para algunos actores locales (segmentos de comerciantes, políticos tradicionales y terratenientes), un contexto de amenaza y riesgo en contra de sus intereses, te-

mían a la sublevación, a la desobediencia que podría alterar la estructura de poder que sostenía sus privilegios. Esto enmarcado en una región con considerable presencia guerrillera, como se verá en el siguiente capítulo, configuró el escenario para que en el Catatumbo se llevara a cabo un proceso de arrasamiento de sectores organizados y, en consecuencia, de sus propuestas y proyectos.

Así, esta época significó para las formas de organización social y comunitaria su momento de mayor esplendor, un período en el cual emergió la esperanza y se lograron articular sectores sociales en torno a demandas que continúan vigentes. Paradójicamente, esta época también representó su desaparición, pues quienes no fueron asesinados o desplazados forzadamente, debieron callar y suspender sus labores comunitarias. Esto trajo consigo no solo la pérdida de personas y liderazgos, sino también la desaparición de ideas y aspiraciones que se tenían para la región a mediano y largo plazo, construidas con esfuerzo y asentadas en los intereses de las comunidades.

Con la llegada del paramilitarismo, las pocas iniciativas que habían sobrevivido desaparecieron casi por completo, como se verá en detalle en el capítulo 4.

3.

LA LARGA HISTORIA DE LAS GUERRILLAS

Conforme avanzamos por una carretera sin pavimentar en un todoterreno viejo a cuyo conductor nos recomendaron y luego de pasar el retén militar de rutina cuando se va hacia la zona rural, comenzamos a notar los símbolos de la continuada presencia guerrillera en la región. Una bandera del ELN se ondeaba en lo alto, marcando una frontera entre el "allá" más urbano que dejábamos a nuestro paso y, un "aquí", en presente; en una misma pared de una casa observamos, una al lado de la otra, las 'pintas' o grafitis del ELN, el EPL y las FARC. A sabiendas que no podíamos sacar la cámara para tomarle una foto a las marcas del control guerrillero, hicimos dibujos de lo que vimos. Aunque es una realidad evidente, hablar de las guerrillas en la región sigue siendo una conversación de puertas hacia adentro, en voz baja. Cuando se hace.

Catatumbo, notas de campo, septiembre de 2016

En los ejercicios de reconstrucción de memoria histórica en la región, se evidenció que, las personas para referirse a la historia del conflicto armado en sus veredas, corregimientos y municipios consideraban necesario remitirse a las décadas de los años setenta y ochenta, cuando comenzó el proceso

de llegada, expansión y asentamiento de tres grupos guerrilleros: el ELN, el EPL y las FARC en la región.

Si bien las memorias colectivas del conflicto se suelen centrar -para la mayoría de las personas- en los años del horror paramilitar, las narrativas en torno a la disputa política, militar y económica de las guerrillas ocuparon un lugar importante en los ejercicios grupales realizados. Este énfasis en los grupos paramilitares se explica por dos hechos. Por una parte, los repertorios armados del paramilitarismo corrieron las fronteras de lo comprensible y les dejaron marcas indelebles. Por otra, en el Catatumbo, hasta la firma de los acuerdos de paz con las FARC en noviembre de 2016, hacían presencia activa las mismas tres guerrillas desde los años setenta y ochenta. En ese sentido, algunas formas de violencia que se describirán en este apartado ocurren en la actualidad, incluso, con mayor intensidad.

Aunque uno de los propósitos del equipo de investigación fue indagar por diferencias en el accionar de las tres guerrillas y, en efecto, emergieron elementos que permiten distinguir unas de otras, se encuentra que no es usual que las personas con las que se trabajó hagan esta diferenciación y, en cambio, en sus relatos se refieran de manera general a "la guerrilla" -o "la guerra", como sinónimo- para narrar la experiencia con el ELN, el EPL y las FARC.

Las principales razones son, por un lado, las personas de la región han construido dos hitos en su comprensión del conflicto armado: el de la presencia y accionar guerrillero (desde los ochenta hasta 1999) y el del dominio paramilitar, que se inaugura con la entrada del Bloque Catatumbo de las AUC a Tibú en 1999. Por ello, agrupan de manera general al ELN, EPL y a las FARC en un mismo conjunto: "las guerrillas", muchas veces en contraste con "los paramilitares".

Por otro lado, los habitantes de la región, en muchos casos, no logran distinguir con claridad a cuál de los grupos insurgentes están haciendo referencia en sus relatos. En sus memorias, es frecuente encontrar la referencia al momento en el cual guerrilleras y guerrilleros[110] irrumpían en un espacio colectivo o en una finca, a veces, solían establecer con claridad a qué grupo pertenecían; en otros casos, las personas se fijaban en los brazaletes o insignias que portaban para conocer de qué grupo se trataba. Sin embargo, al hecho de que estos símbolos distintivos no siempre eran visibles o reconocibles, se sumaba que para inicios de los años noventa las tres guerrillas hacían presencia continuada en toda la región, o estaban expandiéndose, lo que dificultaba saber de cuál de ellas se trataba[111].

Este apartado describe la manera en que las personas en el Catatumbo recuerdan la presencia y el dominio armado del ELN, el EPL y las FARC desde 1979 hasta 1999, cuando se consolida el proyecto paramilitar.

Para ello, en lugar de establecer una exposición en estricto orden cronológico sobre la llegada, posicionamiento y accionar de las guerrillas, este capítulo se ha estructurado siguiendo los hilos de las narraciones que para este período construyen las y los habitantes del Catatumbo: se parte de un contexto de proximidad en el que, en muchos casos, se entendieron como legítimos la presencia y el accionar guerrillero, para

110 Es de resaltar que, en las memorias de llegada y presencia de las guerrillas, habitantes de la región referencian a mujeres guerrilleras. Esto dista de las memorias sobre la presencia paramilitar, pues las narraciones de las personas giran en torno a una presencia masculina. A lo largo de este informe, la referencia a "guerrilleros" o "la guerrilla", recoge e incluye a mujeres guerrilleras.

111 Aunque esto no signifique que, en distintos casos, las personas aclaren y establezcan diferencias entre guerrillas. Por ejemplo, un habitante de la zona rural de Hacarí recordó que el ELN y el EPL eran las que más han estado "en medio de la comunidad", en comparación con las FARC, que es "totalmente aislada". Un habitante de Las Mercedes (Sardinata) refirió que las FARC "hacían cumplir" sus estatutos al pie de la letra, a diferencia del ELN y el EPL, "más laxos". Tales percepciones difieren al interior de la región y guardan relación con las dinámicas de interacción entre las guerrillas y las comunidades en contextos específicos.

presentar sus memorias en torno a la disputa de las guerrillas por el poder militar, económico y político en la región.

En el segundo momento, se percibieron transformaciones en los énfasis del proyecto guerrillero: los relatos evidencian un orden armado que pasó de tener como centro el trabajo en torno a las necesidades de las personas y las relaciones de respeto hacia las comunidades, a otro donde la sospecha, la disputa militar y los intereses económicos, fueron el eje. Este cambio produjo un declive en la percepción inicial en torno a las guerrillas.

A la par de esta dinámica, los testimonios dan cuenta de que la región experimentó, la no habitual y ahora continuada presencia de la fuerza pública en sus poblados y veredas, abanderando una política de lucha contra la subversión que, conforme avanzaba, consolidó al Catatumbo como "zona roja". Se recuerdan los desmanes en la disputa entre la fuerza pública y las guerrillas. Se generó un escenario de confrontación que puso a la población en medio del fuego cruzado y que, en muchos casos, la criminalizó, en el marco de una política de la sospecha que se instauró en ambos bandos y tuvo efectos nefastos en su vida.

3.1. Memorias sobre la llegada de las guerrillas

Las personas que participaron de los ejercicios de memoria, recordaron con claridad que la primera guerrilla en hacer presencia en la región fue el ELN, que llevó a cabo la acción que en la memoria colectiva se ubica como hito de su entrada y posterior asentamiento en el Catatumbo:

La toma guerrillera de Convención tuvo lugar en la madrugada del 31 de enero de 1979. Durante esta acción, unos 60 guerrilleros del ELN saquearon la Caja Agraria y el Banco Cafetero y atacaron la estación de Policía del municipio, causando la muerte de "Cauchito", una persona sordomuda quien recibió disparos al no acatar las órdenes de alto. Así lo recordó un habitante de este municipio: "En el año 79 fue la primera toma guerrillera aquí en Convención, fue cuando izaron el pabellón de ellos, le hicieron a la Policía[112], los obligaron a tener que bajar el pabellón nacional e izar el de ellos" (CNMH, taller de memoria, Convención, 2017)[113].

El entonces alcalde del municipio, Sixto Barriga, declaró al periódico El Tiempo que "Nunca aquí (...) se tuvo noticia de la existencia de guerrillas que pusieran en peligro a sus moradores. Ni siquiera se veía gente extraña merodeando en la región. La gente está descontrolada, pero esta mañana llegó el Ejército y retornó la calma" (El Tiempo, 1979, 1 de febrero).

En Hacarí relataron que años antes de la entrada del EPL a este municipio, se habían escuchado rumores sobre su posible llegada. Frente a ello y, con el precedente de la toma en Convención, algunas personas se armaron para estar preparados en caso de necesidad. Su entrada pública se dio el 4 de noviembre de 1985 con una acción dirigida a atacar la estación de Policía. Horas después de iniciada esta acción militar, los guerrilleros del EPL "sacaron a todo el personal, tocaban puerta por puerta y que saliera. Nos reunieron allá al lado de la estación" (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016). Esta fue la primera de las varias tomas de este municipio.

112 Forma coloquial para referirse al ataque contra la estación de Policía

113 Más adelante se profundiza en las tomas guerrilleras como modalidad y su expansión por toda la región. La referencia aquí está centrada en su carácter como hito de memoria.

Aparte de estas dos acciones -que se volvieron recurrentes a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta-, las memorias en torno a la llegada de las guerrillas están relacionadas con formas de presencia mucho más sutiles, a cuenta gotas, en particular, irrumpiendo en el marco de actividades colectivas. De acuerdo con los relatos, los grupos que frecuentaban las zonas rurales en los primeros años estaban integrados por pocos guerrilleros, dotados con armas poco sofisticadas.

En el caso de los municipios de Teorama, San Calixto y Hacarí, los pobladores recuerdan al EPL como la primera guerrilla en hacer presencia, remontándose a principios de los años ochenta, como lo relataron algunos habitantes: "Si yo le refiero, el EPL se fundó primero en San Calixto[114] y por eso comenzó a operar entre los municipios de Hacarí, San Calixto y sus alrededores. [Ocurrió antes de 1985], porque eso fueron las primeras acciones que ellos hicieron. Se supone y se sabe que antes de eso ellos estaban haciendo reuniones y eso se supo después, con el tiempo" (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016).

Los habitantes del municipio de San Calixto coinciden con que el EPL es la guerrilla que primero hace presencia en su territorio, con una característica particular: "eran más recatados, se daban menos a conocer, transitaban los sectores, las regiones más cercanas de la cabecera, eran muy, muy precavidos" (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016). Una persona que nació y vivió en el corregimiento de Luis Vero (Sardinata), rememora:

> Yo por lo menos conocí el primer grupo guerrillero más o menos como a los 15 años, a la finca llegaron. Eso fue en el 84, por ahí. Cuatro personas vestidas de verde llegaron a la finca donde nosotros vivíamos, se identificaron como pertenecientes a las

114 El municipio de El Tarra se fundó en 1991. Para entonces era corregimiento del municipio de San Calixto

> FARC...pero las apariciones de ellos eran esporádicas. Por ejemplo, ya cuando empezó verdaderamente a tener influencia y a hacer presencia reiterativa fue nada menos en 1989. Sí, después de 1988 empezaron a hacer presencia allá (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

Para habitantes de las zonas rurales de la región, la presencia de guerrillas fue novedosa. En el siguiente fragmento una mujer de una vereda de Teorama relata su experiencia y la de sus vecinos cuando el EPL se presentó por primera vez , justo en el espacio de reunión de la JAC:

> Cuando la EPL[115] llegó para allá para la vereda de nosotros fue como en el 75, porque nosotros estábamos en una reunión de junta comunal, o sea, de padres de familia en la vereda. Y estando en la reunión cuando vimos llegar una persona uniformada y armada y entonces todo el mundo: hagámonos a un lado, porque no estábamos enseñados a eso de ver gente armada en la vereda. Cuando de una vez dijo que se hacía presente la EPL; la primera palabra que dijo, así: estamos presentes la EPL y traían brazaletes y todo de la EPL (...) pero yo siempre diario me ha gustado hablar en reuniones y en todo y entonces cuando dijo uno de ellos que no se asusten que aquí no se le va hacer nada a nadie, entonces yo vengo y le digo: ¿cómo van a calcular que a uno no le va a dar susto? Uno no está enseñado a ver personas así. Porque siempre uno ha visto personas armadas, pero por allá en los pueblos y cuando eso no se veía casi el Ejército, tenía que ir a los batallones pa' poder ver, pero así en los pueblos no se veía (...) Ellos todos [los habitantes de la vereda] sacaron a los niños y todo el mundo ya dejó de hablar, el presidente [de la JAC] que estaba hablando, la profesora se desmayó. Al fin yo dije: ¿cómo va a calcular usted que la gente no se va a asustar si nunca está enseñado uno a ver? y ve un personal de esos como el que había llegado, como unas 25 personas y se nos

115 En la región, habitantes se refieren a "la EPL" y "la ELN"

> zamparon[116] así... eso fue como en el 75 (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

El ELN y el EPL son las primeras guerrillas en hacer presencia en los municipios del alto Catatumbo y se extienden por todos los municipios que conforman la región en los años venideros. Tal y como los habitantes lo indican en sus relatos, en algunas zonas percibieron una presencia más cercana, mientras en otras veían a las guerrillas de forma esporádica.

El ELN, en particular, durante la década de los ochenta amplió su zona de influencia a todos los municipios del Catatumbo, primero en la zona más alta, extendiéndose desde El Carmen hasta Tibú (en particular la zona de Campo Dos y La Gabarra) y Sardinata (corregimiento San Martín de Loba). Para el caso de Tibú, algunas personas ubicaron en 1983 el primer acto de violencia perpetrado por la guerrilla del ELN: "Una columna del ELN ataca en La Batea y mueren alrededor de 11 policías y se salvan unos 4. Nosotros vimos pasar un camión en puros rines (...) y dentro del camión venían todos los heridos y los muertos (...) Ese fue el primer hecho violento que personalmente a nosotros nos marcó" (CNMH, taller de memoria con sacerdotes, Tibú, 2016).

En el caso del Pueblo Barí, en particular aquellas comunidades localizadas en la zona de Río de Oro, zona rural del corregimiento La Gabarra, río abajo, se recuerda que "no había ningún armado allá en la zona" hasta que el ELN secuestró, en 1988, al pastor evangélico Bruce Olson, acompañante y promotor de obras sociales en el pueblo Barí. Indígenas Barí recuerdan que unos cinco o seis guerrilleros del ELN llegaron a la zona y que "esos primeros que llegaron fueron los que lo secuestraron" (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017).

116 Expresión que en este caso denota que llegaron de sorpresa

Sin llegar a alcanzar el mismo nivel de presencia territorial que el ELN, esta dinámica de expansión la replicó el EPL desde los primeros años de la década de los ochenta, llegando a tener una presencia sostenida en Hacarí y San Calixto, así como, en sectores de los corregimientos de Las Mercedes (Sardinata) y La Vega de San Antonio (La Playa).

Las FARC, en cambio, si bien lograron consolidarse en la zona más plana a mediados de los noventa, hicieron presencia en la región años después que el ELN y el EPL. Su proyecto de expansión se focalizó en las zonas donde se dieron procesos de colonización durante la segunda mitad del siglo XX, en especial, en el corregimiento de La Gabarra.

Algunos habitantes del casco urbano de Tibú y La Gabarra recuerdan que fue a mediados de la década de los ochenta que hicieron presencia los primeros guerrilleros y milicianos de las FARC y que, previo a eso, no habían conocido de otros grupos armados. Su accionar se incrementó de tal modo que, para mediados de los noventa, logró asegurar su capacidad política y militar en la zona rural de La Gabarra, entre otros, por medio de la estricta regulación del cultivo de la hoja de coca, como se verá más adelante[117].

Aunque en la actualidad se suele dar por sentada la relación de las guerrillas (que hacen o hicieron presencia en el Catatumbo) con el usufructo de las rentas provenientes del sabotaje a la industria petrolera, para el caso del ELN, o de la regulación de la economía de la coca, en el caso de las FARC y el EPL, en las memorias de personas del Catatumbo esto no correspondió al interés principal en la entrada de las guerrillas a sus

117 Con respecto a la guerrilla M-19, las referencias de habitantes del Catatumbo fueron mínimas. En general, esta guerrilla estuvo de paso por la región. Su influencia provino del sur del Cesar donde, a diferencia de Norte de Santander, contaban con una estructura armada. En el caso de San Martín de Loba (Sardinata), fue relatado que en ocasiones guerrilleros del M-19 pasaron cobrando cuotas a dueños de fincas de este corregimiento. Por su parte, se reconoció la influencia ideológica del M-19 en jóvenes de la región, en particular en Teorama, quienes por medio de la lectura de textos seguían las ideas de esta guerrilla.

territorios. Durante un primer período, que puede ubicarse entre finales de los años setenta hasta entrada la mitad de los ochenta, las acciones del ELN, el EPL y las FARC se concentraron en el trabajo político más que en el militar y el económico.

Esto implica comprender cuáles son las principales causas que las y los catatumberos aducen como explicación para la presencia guerrillera en la región. En muchos casos, los propósitos de las guerrillas de "trabajar por el pueblo" y exigir al Estado una justa distribución de los inmensos recursos en la región, generó sentimientos de empatía y proximidad en muchas personas, como fue expresado por un habitante de San Calixto: "lo que pasa es que el tiempo de nosotros, desde entrar primeramente la guerra, uno miraba que la guerra tenía un objetivo pues bueno, que había objetivos buenos porque era luchar por el pueblo, decían ellos. Era una lucha por el pueblo y miraba uno que pues ellos nos ayudaban y... no ayudaban, sino que defendían al pueblo" (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

En nuestros ejercicios de memoria, se puso de presente que la incapacidad estatal para atender las demandas y proveer a la región de bienes y servicios básicos, en un territorio rico en recursos, fueron las razones principales que explican la llegada y expansión de las guerrillas. Las denuncias hechas por las guerrillas durante los primeros años, en torno a esta forma de interacción del Estado con comunidades locales, en particular de zonas rurales, fue recibida con particular expectativa por habitantes del Catatumbo. Para muchos, la presencia de las guerrillas apalancó la posibilidad de denunciar no solo las condiciones de marginamiento en las que se hallaban, sino el reconocimiento de su existencia. En el caso del municipio de San Calixto, algunos de sus habitantes mencionaron que:

> Participante 1: yo digo que las guerrillas llegaron por el abandono del Estado, [porque] es que el Estado en estos municipios era poca la presencia que llegaba. No había inversión, no había absolutamente nada, o sea, un abandono, pero total. Entonces pues la gente se pensaba incluso irse pa' la guerrilla porque no encontraban más qué hacer pa' poderle reclamar al Gobierno los derechos, algo así.
>
> Participante 2: no había presencia. Otra cosa es que el Estado, el Gobierno, más armas que inversión al campesino ¿sí ve? Entonces ellos defendían eso
>
> Moderador: ¿para qué vienen las guerrillas?
>
> Participante 1: pues hacerse sentir porque el Estado no invierte
>
> Moderador: ¿y las guerrillas sí invierten?
>
> Participante: pues ellos no invierten, pero entonces reclaman
>
> Moderador: ¿reclamos en torno a qué?
>
> Participante 1: reclamos que el Gobierno se presentara con proyectos, con obras, que hubiera la salud, que sea una salud buena, que haiga buena educación, que haigan vías, todo eso (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

Algunos miembros de la fuerza pública interpretaron en líneas similares el contexto de llegada de las guerrillas, asociándolo a lo que reconocieron como ausencia del Estado en la región:

> Todo esto nace por la ausencia del Estado, que es reemplazada por esos actores y que toman provecho de esa incapacidad, en un principio con ideologías políticas que se intentan imponer. Luego con una degradación social por esa ausencia, el narcotráfico empieza a permear con mayor fuerza y se pierden en sí las ideologías políticas, a cambio del dinero fácil (CNMH, Conversatorio Trigésima Brigada del Ejército Nacional, Cúcuta, 2016).

Otra razón que explica la entrada de la guerrilla y de una diversidad de actores armados ilegales al Catatumbo es su posición geográfica privilegia-

da: conecta el norte; la región del Magdalena Medio y el occidente del país con Venezuela. Esta referencia es reiterada en los ejercicios de memoria:

> Ocaña es un corredor estratégico para la parte binacional en el país porque desde la época de Bolívar unir el Magdalena Medio con Venezuela, es paso obligado pasar por acá por Ocaña o por la zona de la Provincia de Ocaña[118]. Entonces ese ha sido un corredor estratégico por siempre en el narcotráfico, en los insumos, en el contrabando (...) esa es una de las cosas que nos tiene a nosotros ahí en el ojo del huracán y es la parte estratégica que tienen el municipio de Ocaña y la zona de la Provincia de Ocaña para todos los actores armados ilegales que existen en el país (CNMH, entrevista, hombre defensor de DD.HH., Ocaña, 2016).

A la llegada y posicionamiento de las guerrillas en la región, asocian las comunidades, la creciente presencia de la fuerza pública. Muchos recuerdan cómo detrás de las guerrillas vino el Ejército. Aunque para los habitantes de veredas y corregimientos alejados de los cascos urbanos, la presencia del Ejército era esporádica y solía hacerse visible durante los períodos electorales. Miembros del Ejército se acantonaron en veredas y poblados, donde hacían jornadas, actividades de salud u obras públicas. Una habitante de una vereda de Teorama narró del siguiente modo los inicios de su interacción con miembros del Ejército, poniendo de presente que tanto la presencia de las guerrillas, como de soldados, fue una novedad:

> Cuando eso pues uno no estaba aprevenido porque uno pensaba: ¿el Ejército qué va ir por allá?. Porque donde vivíamos nosotros era afuera de la vereda, lejos, en una montaña, porque lo que se veía era montaña para allá, montaña para acá y había era tan solo una casa cerca de la de nosotros. Pero uno pensaba: ¿qué Ejército va entrar por ahí? Y vamos a ver que ellos [EPL] que se acantonan en la vereda

118 Conformada por los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí y Ábrego.

> más abajo de la casa de nosotros y que el Ejército les cae y que hicieron la masacre esa (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

La fuerza pública jugó un papel definitivo en la disputa por el control militar y económico en la región, así como en la percepción del conflicto armado, sus dimensiones y daños en los habitantes del Catatumbo.

3.2. La vertiginosa expansión de las guerrillas

Desde los primeros años de presencia de las guerrillas en la región, hasta finales de la década de los noventa, el ELN y las FARC pasaron de ser lideradas por grupos de mediano tamaño, con armas poco sofisticadas a alcanzar el máximo grado de fortalecimiento militar, político y económico de su historia en el Catatumbo y a nivel nacional. Como lo afirma Echandía, para 1985, 173 municipios registraban presencia guerrillera, mientras que en 1991 ascendía a 437, para llegar a 622 en 1995 (Echandía, 2006, página 28).

En el caso del ELN, se ha registrado que entre mediados de la década de los setenta y principio de los ochenta se dio un desplazamiento progresivo de guerrilleros provenientes del sur del Bolívar hacia la Serranía del Perijá y los municipios del Catatumbo (Vicepresidencia de la República, 2007, página 13).

Como resultado de decisiones estratégicas que adoptó esta guerrilla en el escenario nacional: la Reunión Nacional de Héroes y Mártires de Anorí, celebrada en 1983 y el I Congreso, en 1986, el ELN inicia un vertiginoso proceso de crecimiento, expansión y profundización de acciones

armadas en todo el país y también en el Catatumbo. Ello coincidió con la puesta en funcionamiento del oleoducto Caño Limón-Coveñas en 1986, en torno al cual giró el proyecto económico, político y militar de esta guerrilla (Echandía, 2006, páginas 25-26).

El ELN creó en 1986 dos frentes de guerra para Norte de Santander, el Carlos Armando Cácua Guerrero[119] y el Efraín Pabón Pabón[120]. Para finales de la década del noventa, municipios de influencia del Frente Carlos Armando Cácua Guerrero fueron a Ábrego, Ocaña, El Carmen, Convención, San Calixto, Hacarí, El Tarra, Tibú y Sardinata. El Frente Efraín Pabón Pabón ejerció una considerable influencia sobre los municipios de la Provincia de Pamplona: Pamplona, Chitagá, Silos, Cácota y Mutiscua[121].

Hacia 1991 se creó el Frente Juan Fernando Porras Martínez, con presencia en los municipios de Cúcuta, Arboledas, Durania, El Zulia, Sardinata, Ábrego y Bucarasica y en 1995 el Frente Carlos Germán Velasco Villamizar hacía presencia en el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta que incluye Villa del Rosario, Los Patios y Puerto Santander.

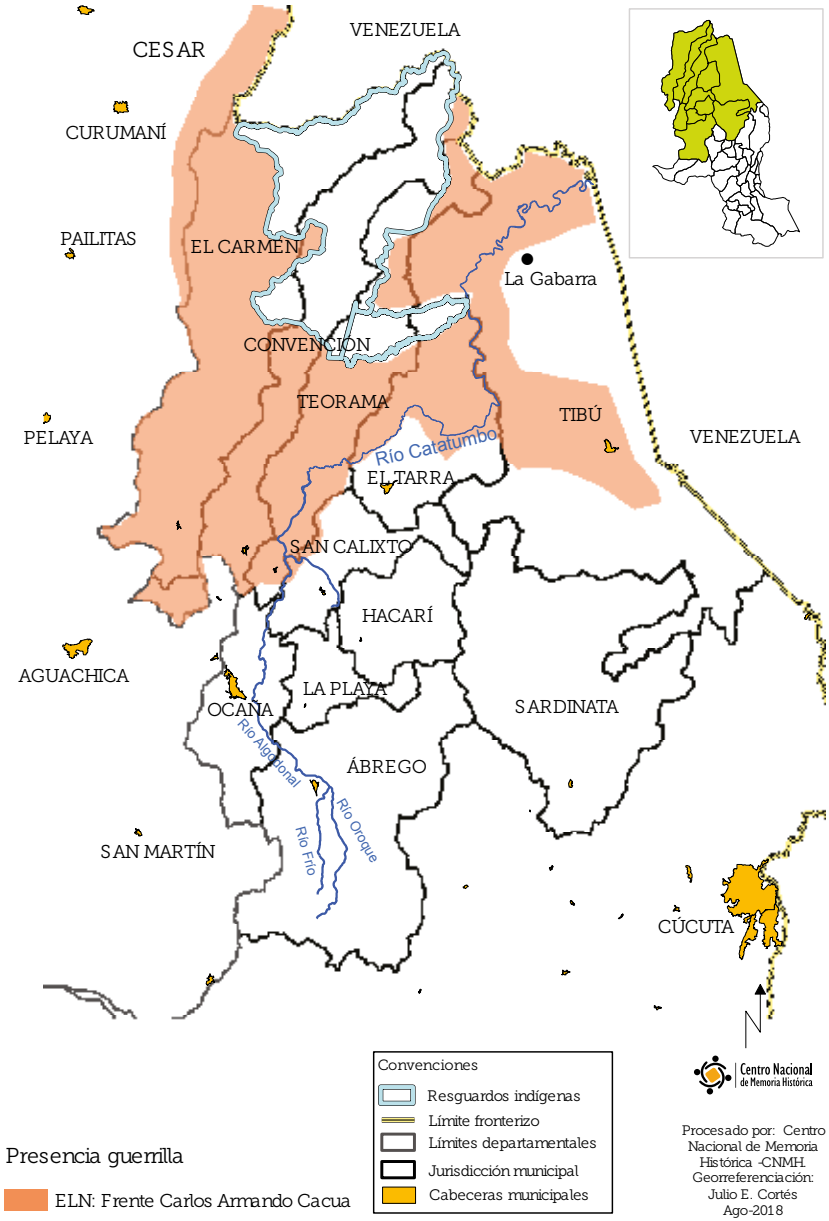
En el Catatumbo se crearon tres compañías del ELN en la década de los noventa: Héroes de Catatumbo, con influencia en Convención, Teorama y El Carmen; Capitán Francisco Bossio, compañía móvil con presencia en Teorama, Convención, El Tarra y El Carmen; y Comandante Diego, creada en 1999, que por un período tuvo a su cargo la seguridad de los miembros del COCE (Comando Central), quienes se habían trasladado a la parte norte del Catatumbo (Vicepresidencia de la República, 2007, página 14).

119 Surgió del desdoblamiento del Frente Camilo Torres Restrepo, con influencia en la Serranía del Perijá y apareció por primera vez durante la toma a San Pablo (corregimiento de Teorama), en 1987.

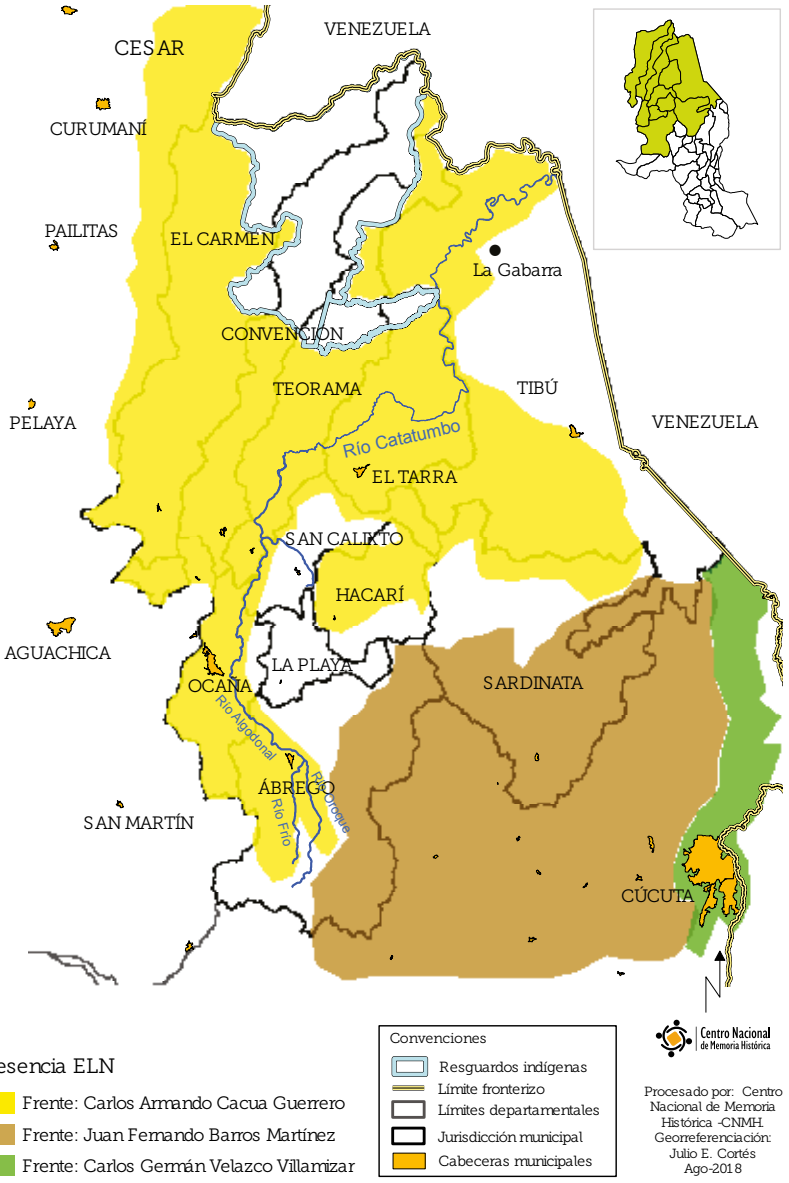
120 Surgió por el desdoblamiento del Frente Domingo Laín Sánchez (con influencia en la región del Sarare)

121 A principios de los ochenta, el ELN contaba con lo que hoy se llama frentes de guerra Nororiental y Noroccidental; los frentes Domingo Laín Sánchez y Camilo Torres Restrepo pertenecían al primero (Echandía, 2006, página 25).

Mapa 9. Presencia armada del ELN mediados años 80



Mapa 10. Presencia armada del ELN finales años 90



Fuente: CNMH, talleres colectivos de reconstrucción de memoria histórica, entrevistas individuales y revisión de fuentes secundarias, 2018.

De acuerdo con lo expresado por habitantes de Hacarí, el EPL ha hecho presencia en el Catatumbo con el Frente Libardo Mora Toro, creado entre 1973 y 1974 en las veredas de El Tarra, para entonces municipio de San Calixto (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016).

Cabe recordar que el EPL suscribió un acuerdo de paz con el Gobierno de Cesar Gaviria el 15 de febrero de 1991 (luego de las negociaciones fallidas durante el Gobierno de Belisario Betancur) y su desmovilización efectiva se dio el 1 de marzo de 1991. En el sector de Campo Giles (al sur del municipio de Tibú), se llevó a cabo la desmovilización de los frentes de Norte de Santander, Cesar, Santander, Boyacá y Cundinamarca, el primer proceso de desarme y desmovilización de un grupo armado que tuvo lugar en esta región.

No obstante, Francisco Caraballo lideró una disidencia[122] que para 1995 contaba con 13 frentes y con cerca de 400 combatientes (Echandía, 1998). El Frente Libardo Mora Toro -con considerable influencia en los municipios de la región- incrementó su poder militar y económico después de la desmovilización de los paramilitares con presencia en el Catatumbo[123].

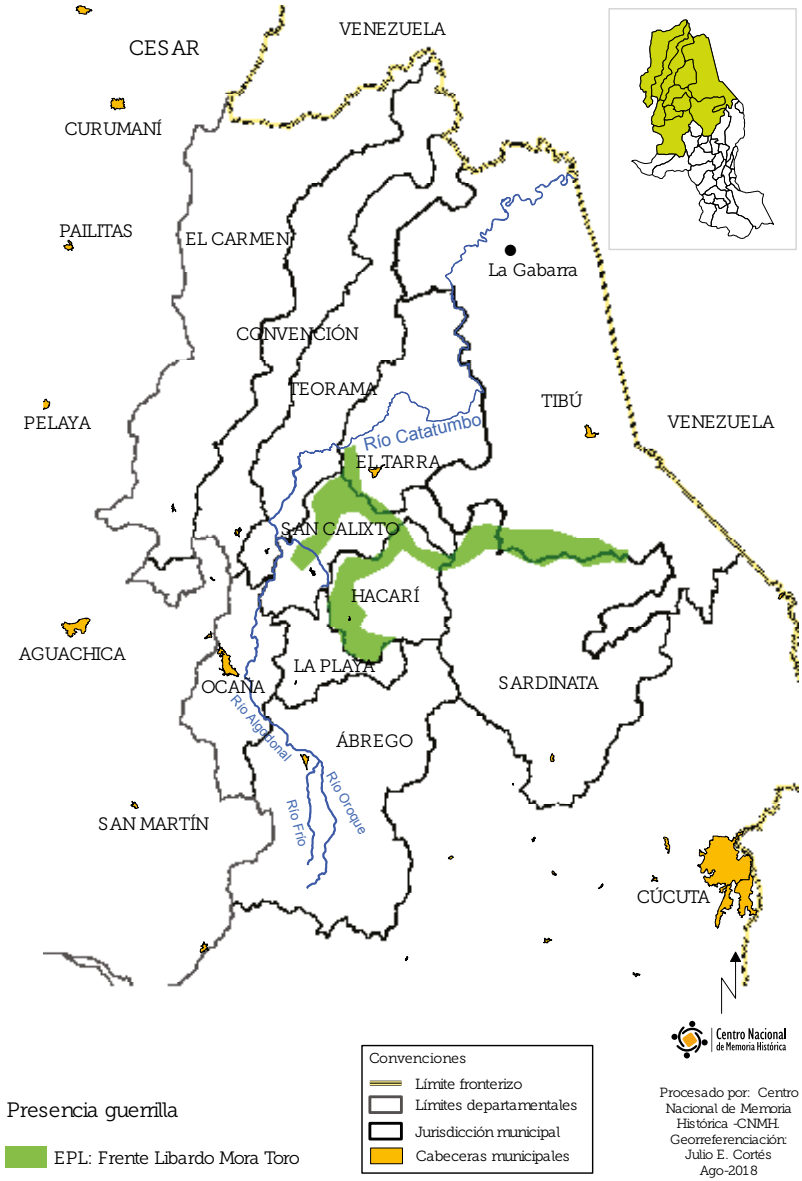
Como lo relató una persona desmovilizada del EPL para principios de la década de los noventa:

122 Se ha señalado que esta disidencia concertó con el resto del EPL, de manera voluntaria, su no desmovilización (CNMH, entrevista, hombre líder social, Cúcuta, 2017). En este informe, se hará referencia a esta disidencia como EPL, pues es la manera en que habitantes del Catatumbo reconocen e identifican a esta estructura. En la región, las personas le han llamado *Los Pelusos o Los Peludos*, mucho antes de que el Gobierno nacional le denominara *Pelusos* en 2016, para enfatizar su carácter como Grupo Armado Organizado (y no como insurgencia), de acuerdo con la Directiva N. 15 del Ministerio de Defensa Nacional.

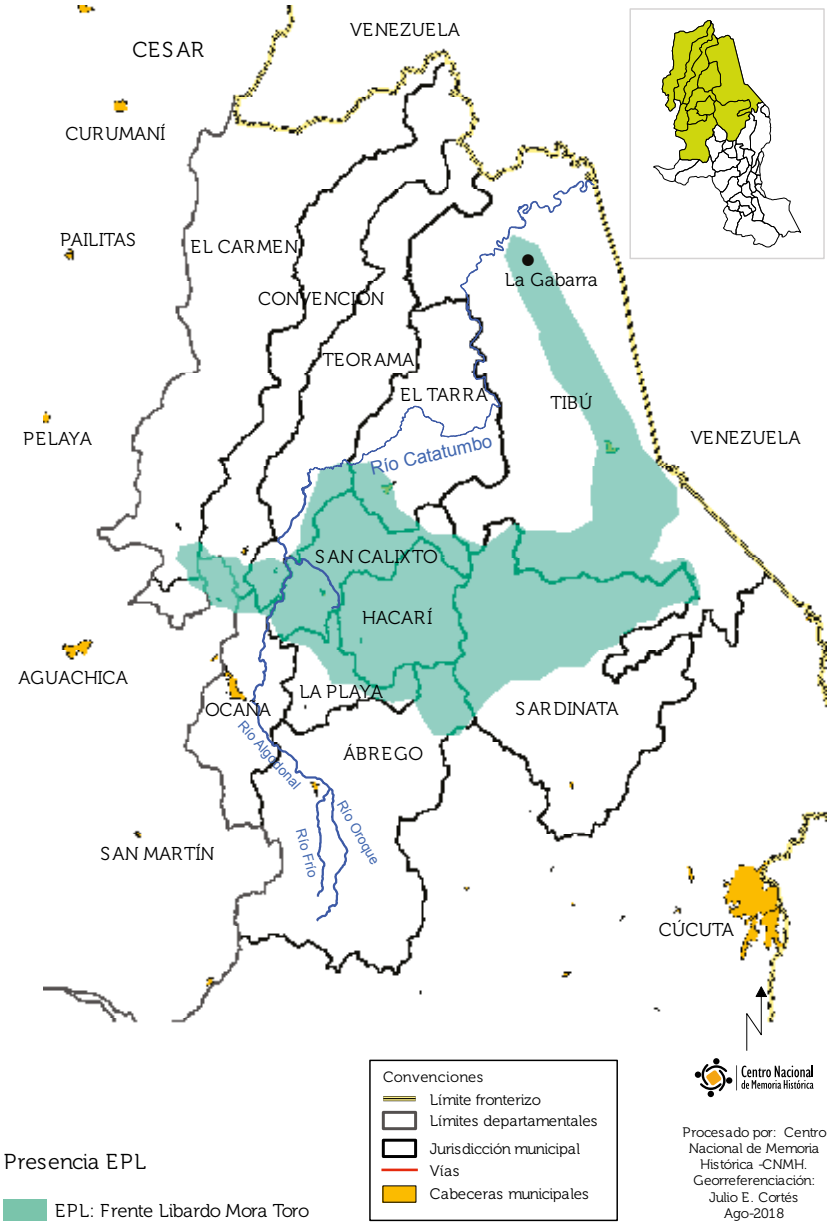
123 El ELN prestó apoyo logístico y militar al grupo de Caraballo cuando optaron por no acogerse a los acuerdos de desmovilización (CNMH, entrevista, hombre defensor de DD.HH., Cúcuta, 2017).

La presencia nuestra como EPL fue mucha en la zona del Catatumbo, nosotros le llamábamos a eso [corregimiento Campo Giles] cariñosamente 'campo rutina', dándole vueltas a lo que era Hacarí, La Vega de San Antonio, Las Mercedes, Tibú, San Martín de Loba, Sardinata, San Calixto, Teorama, El Tarra, Convención. Luego pasamos a Cesar y abarcamos todo el sur de ese departamento y pasamos hacia Santander también, abarcamos gran parte de Santander ya con frentes diferentes, pero nuestros inicios fueron en 'campo rutina', en la zona del Catatumbo adentro (CNMH, entrevista, hombre excombatiente del EPL, Ocaña, 2016)

Mapa 11. Presencia armada del EPL mediados de los 80



Mapa 12. Presencia armada del EPL finales de los 90



Fuente: CNMH, elaboración propia con base en talleres colectivos de reconstrucción de memoria histórica, entrevistas individuales y revisión de fuentes, 2018.

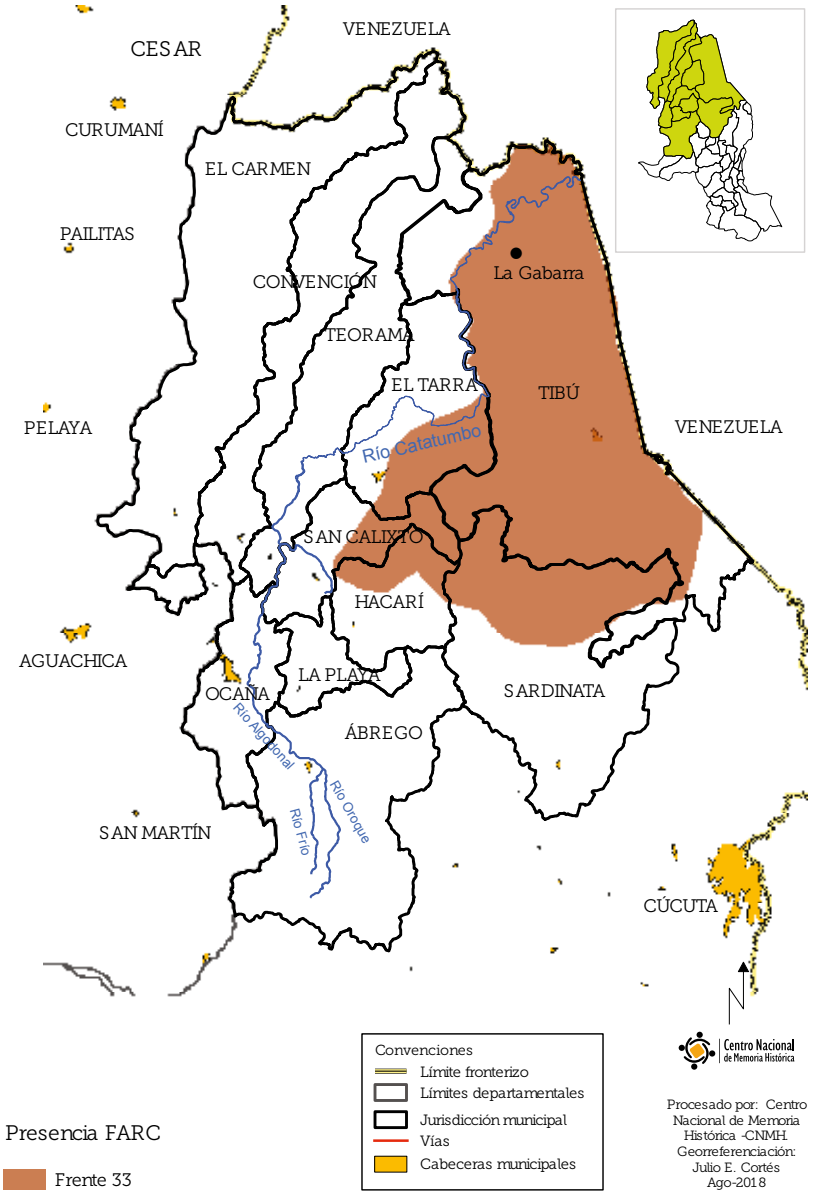
En lo referente a las FARC, es luego de la VII Conferencia (1982) que esta guerrilla hace presencia en el Catatumbo. Este órgano decidió que la guerrilla avanzara en el cumplimiento de las siguientes metas: i) el incremento de frentes, ii) el desdoblamiento e incursión en regiones donde no habían hecho presencia y, iii) la diversificación de sus fuentes de financiación (González, Bolívar y Vásquez, 2003, página 55). Por el tema de la financiación, el corregimiento de La Gabarra se convirtió en el principal asiento de las FARC en la región hasta bien entrada la década de los noventa, en particular, por la dinámica de la economía de la coca que convergía en este poblado y sus veredas, como se verá en el capítulo 5.

A mediados de los ochenta, las FARC hicieron presencia primero en el sur de Norte de Santander, para luego expandirse hacia los municipios de Sardinata y Tibú en el Catatumbo, por medio del Frente 33 o Mariscal Antonio José de Sucre, que fue creado a mediados de 1985 como resultado del desdoblamiento del Frente 20, con influencia en el nororiente del departamento de Santander[124].

Solo a finales de los noventa y durante la primera década del siglo XXI, las FARC crearon compañías que expandieron su zona de influencia más allá de algunas veredas de los municipios de Tibú y Sardinata, con el fin de repeler la expansión paramilitar y ampliar su presencia en municipios como El Tarra, San Calixto, La Playa y Hacarí. Al respecto, los Barí ubican 1991 como el año en que el Frente 33 incursiona en su territorio (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017).

124 Durante los años que duró la tregua entre las FARC y el Gobierno de Belisario Betancur (1984-1986) esta guerrilla vivió un "sostenido avance" de sus frentes Para 1987, las FARC contaba con 33 frentes, y en 1991 el número ascendió a 48. Su crecimiento fue tan vertiginoso durante los noventa que, entre 1991 y 1992, se registró el mayor número de acciones armadas en toda su historia (González, Bolívar y Vásquez, 2003, página 57).

Mapa 13. Presencia de las FARC– finales años 90



Fuente: CNMH, elaboración propia con base en talleres colectivos de reconstrucción de memoria histórica, entrevistas individuales y revisión de fuentes secundarias, 2018.

Como se hace evidente en los mapas, el ELN, el EPL y las FARC han coexistido en la región y es común que las personas refieran la presencia y accionar simultáneos incluso de las tres guerrillas en sus veredas o poblados. Un rasgo distintivo del accionar de las guerrillas en el Catatumbo es que, si bien hay zonas donde una guerrilla en particular ejerció una presencia continuada y significativa, eso no implicó que fueran zonas de exclusividad (CNMH, entrevista, hombre líder social, Cúcuta, 2017)[125].

Por último, las dinámicas de expansión de las guerrillas en la región no pueden comprenderse sin su confluencia en órganos de toma de decisiones y de acción conjunta que se conocieron como coordinadoras. En 1985, se creó la CNGSB (Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar), conformada por el EPL, el M-19, el ELN, el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), el MIR (Movimiento de Integración Revolucionario) y el Quintín Lame. Dos años después, con la llegada de las FARC a la Coordinadora, pasó a llamarse CGSB (Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar). Fue entonces cuando se trató de negociar un acuerdo para la terminación del conflicto con el Gobierno del presidente César Gaviria en mesas que tuvieron lugar en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), negociación que fracasó en 1992, dando lugar a la disolución de CGSB.

Al respecto es importante destacar que habitantes de la región recuerdan algunas de las acciones de las guerrillas en el marco de la CGSB, en particular, en el caso de las tomas de poblados y ataques a estaciones de Policía.

125 Durante las décadas de los noventa y dos mil, el ELN y el EPL fueron cercanos en el Catatumbo, y se comenta que combatientes de estas guerrillas se llamaban "primos" entre sí. A partir de la desmovilización de la FARC en 2016, esta dinámica se transformará. Esta cercanía no existió entre el EPL y las FARC, entre quienes siempre hubo diferencias en lo político y en lo militar.

3.3. Memorias sobre la legitimidad guerrillera

Durante los primeros años en el Catatumbo, las guerrillas generaron sentimientos de proximidad y, en muchos casos, de legitimidad por medio de trabajo político, interacción en la vida cotidiana, relaciones no impositivas y el papel que jugaron en la administración de justicia y acciones correctivas.

Los relatos de pobladores del Catatumbo en torno a esta legitimidad, hilan los argumentos centrales que se han construido para explicar la presencia de las guerrillas en su territorio y reafirman su percepción sobre la responsabilidad del Estado, dadas a las condiciones de marginamiento.

3.3.1. El trabajo político

Habitantes de la región que participaron de los talleres colectivos identificaron que las guerrillas entraron al territorio "construyendo proceso", por lo cual el trabajo político y organizativo fue uno de los principales rasgos del accionar guerrillero en sus inicios. Como ya se ha mencionado, componentes de los proyectos políticos del ELN, el EPL y, más adelante, las FARC, en particular, los relacionados con las demandas por acceso a bienes y servicios, una distribución equitativa de la propiedad, la nacionalización de los recursos minero-energéticos y la redistribución de sus rentas, así como la participación política efectiva, encontraron eco en pobladores del Catatumbo.

Las formas de trabajo fueron diversas: reflexión política, participación en movilizaciones y protestas -en ocasiones apelando al recurso de la intimidación-, difusión de mensajes a través de periódicos que, en algunas veredas, era de compra obligatoria, así como el intento por lograr una interacción directa con algunos líderes de sindicatos u organizaciones campesinas. Lo último configuró una injerencia directa de las guerrillas en las demandas y apuestas organizativas campesinas y sindicales, produciendo rechazo a su interferencia y temor de que las guerrillas se apropiaran de sus procesos y aspiraciones.

No obstante, durante el trabajo de campo en la región se encontró que algunas personas hicieron un énfasis particular en dos formas del trabajo político de las guerrillas: las "reuniones" y "talleres", términos con los que habitantes de la región hicieron referencia a los espacios de información y formación impartidos por las guerrillas:

> hacer talleres de política, empezando ellos a darle información a los jóvenes, nos citaron a unos talleres que hacían. Nos mostraban el abandono que tenía el campesino por parte del Estado, la política del marxismo y leninismo, que esos países estaban desarrollados por tal cosa ¿no? y como el campesino estaba tan abandonado, todos esos talleres eran captados porque nunca se conocía la presencia del Estado en las veredas. El campesino vivía completamente abandonado (...) entonces eso fue caldo de cultivo para incrementar las filas en los grupos (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

En el corregimiento Luis Vero, en Sardinata, un habitante narró como:

> [Las FARC] más que todo utilizaban los días domingo, cuando salía la gente del campo a hacer el mercado, a ir a misa, entonces precisamente a esa hora esperaban cuando la gente iba saliendo de misa para hacer reunión en el parque o reunión en la escuela. Todo mundo tenía que cerrar todo, todo los que tenían el comercio, las

> tenditas, todo el mundo tenía que cerrar. En esas reuniones echaban su discurso, su discurso de siempre, las razones por las cuales luchaban contra el Estado. Sí, los ideales de ellos ¿no? Algunos sí, para qué, o sea, uno en eso ve gente que de pronto tiene una preparación intelectual, que más o menos manejan un discurso, les ve uno coherencia. Pero hay gente que no, gente muchas veces analfabeta que únicamente repiten lo que los otros dicen, no les ve uno sentido a lo que dicen (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

Una dinámica que se replicaba en las veredas de Teorama, por parte del ELN, así:

> También era muy común que los fines de semana llegaran [el ELN] a invitarlos [a sus padres] a una reunión en el centro de la vereda...hay un sitio bastante grandecito entonces ahí prácticamente se ubicaban las reuniones y esas cosas. Yo recuerdo que mi mamá me llevaba a esas reuniones pa' no dejarme solo, como era pequeño, entonces me llevaban y recuerdo que algunos [guerrilleros] estaban uniformados, otros con la cara tapada. Y por lo general [ese sector rural] era habitado por ellos. Entonces llegaban, un tiempo se ubicaban en una finca, después se iban (CNMH, entrevista, hombre adulto, Ocaña, 2016).

A estas formas de "trabajo político" sumaron los habitantes de la región el respeto y, en algunos casos, impulso por parte de las guerrillas a sus proyectos colectivos, propiciando "unión" entre los habitantes. Estas dinámicas de trabajo colectivo en las comunidades, en particular en las rurales, fueron las que apalancaron el arreglo de caminos y carreteras, la realización de ferias y fiestas, entre otras. Como lo expresó un habitante de Luis Vero: "era que cuando eso las guerrillas no pensaban en plata, sino pensaban era unir a los campesinos" (CNMH, taller de memoria 2, Sardinata, 2016).

Para un habitante de Convención, quien al relatar está contrastando el accionar de los grupos guerrilleros con el de los paramilitares, las guerrillas respetaron las formas organizativas que existían. Esto propició que las personas desarrollaran sus actividades colectivas en un contexto de tranquilidad, lo que repercutió en su posterior éxito. Desde su perspectiva, es importante destacar su respeto por las formas asociativas de sus pobladores:

> En los territorios donde estaban los grupos al margen de la ley y la guerrilla la gente vivía asociada, se trabajaba mancomunadamente, organizados, sin mucho temor. Y en los territorios donde estaba el paramilitarismo era un caos total porque todo el mundo vivía con miedo, vivía con terror, desesperado porque no se sabía la hora que cualquiera iba y te denunciaba (CNMH, entrevista, hombre adulto, Convención, 2017).

Aunque en el relato se reseña falta de temor entre los habitantes, es importante hacer notar que la participación en espacios convocados por las guerrillas no estuvo exenta de la intimidación que produce el uso de las armas. En el caso de La Gabarra y sus veredas, docentes que trabajaron durante los años noventa en esta zona, relataron que las FARC organizaba con frecuencia reuniones en las escuelas. Los docentes se vieron en la obligación de prestarlas y, a su vez, constreñidos a participar, en contra de su voluntad:

> En más de una ocasión estábamos nosotros dando clase y nos tocaba desocupar el salón porque llegaron ellos [guerrilleros de las FARC]... iban a hacer una reunión con la comunidad entonces teníamos nosotros que mandar los niños para la casa y dejar el salón para que ellos hicieran la reunión, eso sí sucedió. Uno tenía claro que ese cuento de si quería ir o no quería ir, es que le tocaba (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

La continuada presencia y el trabajo político de las guerrillas generaron que muchos habitantes de la región, en particular hombres jóvenes, ingresaran a sus filas no necesariamente bajo coacción sino motivados por una serie de circunstancias propias de sus contextos, tal y como lo evidencia un habitante de Convención en su relato:

> Sí, claro [conozco personas que ingresaron a la guerrilla], por supuesto que sí. Inclusive hasta familiares, primos y eso, que ingresaron por la misma razón, a veces por las pocas oportunidades del Estado. Había obreros que llegaban a la finca de mi papá, porque en la finca de mi papá había muchísimos obreros y se cultivaba café, cacao, maíz, fríjol y normalmente era una finca muy productiva, normalmente habían 20, 30 obreros diarios, que cuando no estaban cogiendo el café, el maíz, el fríjol, mi papá también tenía ganado, rozando potreros. Y claro, uno veía muchos obreros de mi papá que hacían una cosecha y de pronto no les iba bastante bien o al contrario quedaban debiendo plata y esa gente muchas veces decepcionada por el precio del mismo grano pues optaban por meterse a los grupos armados, en ese entonces pues el ELN, porque no había ni FARC ni EPL y mucho menos paramilitarismo. Te estoy hablando de los años 80 (...) pero claro muchísima gente motivada en primer lugar por la falta de oportunidades, en segundo porque como había era un solo grupo, el ELN, pues ellos también tenían sus reuniones y en esas reuniones invitaban a las comunidades y a más de uno con la ideología que ellos tienen pues convencían y los metían a los grupos. Y una parte muy pequeña que realmente tengo que ser muy sincero, se metían por pereza, por no trabajar; porque dentro de los grupos armados como el ELN, EPL, FARC, el mismo Estado, hay gente con convicción que se mete porque le gusta, porque quiere. Si estás en un grupo guerrillero es porque querés de pronto ver un país distinto, porque tenés unas ideas, hay una ideología bien afianzada. Si estás en el Estado bueno pues por lo mismo, porque querés defender el Estado. Pero sí hay una parte mínima que realmente se meten es por pereza, o sea, por no tra-

bajar. Esa es la verdad y te lo digo porque yo veía eso en mi finca (CNMH, entrevista, hombre adulto, Convención, 2017)[126].

3.3.2. Formas cotidianas de interacción

La presencia guerrillera implicó una temprana y extendida interacción entre habitantes de la región (en particular en áreas rurales) con estos grupos armados.

Como se señaló, durante los primeros años de presencia y accionar guerrillero, estas formas de interacción no se asociaron al ejercicio de la intimidación ni la violencia armada. Si bien las guerrillas se presentaban portando armamento, lo que generaba amenaza, habitantes de la región recuerdan los márgenes de interlocución y acción que les eran permitidos, así como, la posibilidad que tenían de negarse a los requerimientos hechos por alguna de las guerrillas.

Como lo relató una habitante de Teorama, refiriéndose a los años ochenta: "ellos no lo obligan a uno a nada, porque el que quiso, quiso, y el que no quiso, también" (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016). Especial relevancia cobra aquí el contexto desde el cual se están elaborando los recuerdos en torno a los primeros años de control guerrillero. Estas formas de interacción menos autoritarias desaparecieron durante el período de presencia paramilitar, por lo cual muchas personas han construido su percepción basándose en la oposición: con los paramilitares no

126 Ello no excluye que, en algunos casos, hubiere reclutamiento forzado por parte de alguna guerrilla. Aunque fue mencionada en un par de casos, esta dinámica no recibió especial énfasis durante las conversaciones individuales y colectivas sostenidas con habitantes de la región. Los Barí denunciaron que para 1991, el ELN había reclutado forzosamente a 4 Barís en la comunidad Bridicayra (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017).

fue posible desarrollar, ni siquiera en la más mínima forma, dinámicas de interacción como las que posibilitó la guerrilla durante los primeros años de presencia en la región.

Con la manera exponencial como se extendió y consolidó el accionar de las guerrillas las comunidades terminaron considerándolas una parte constitutiva de su cotidianidad: "Porque aquí el que diga que no conoció la guerrilla y vivía en el campo, es mentiroso. Uno los conocía a los del EPL, los de las FARC, pero eso es porque pasaba el uno o pasaba el otro" (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2012).

Así como muchas personas adultas vivieron una relación de proximidad con las guerrillas en su cotidianidad, sucedió de forma similar con los niños y las niñas durante la década de los ochenta. En algunos casos, esto significó que el primer grupo armado que conocieron muchas personas de la región, antes que al Ejército, fuera alguna de las guerrillas. Como lo relató un habitante de Convención, quien para mediados de los ochenta no superaba los ocho años:

> Uno veía eso normal [la presencia de guerrilla] pues no tenía la concepción entre fuerza pública, entre lo legal y lo ilegal, pues porque uno nació viendo esas personas (...) Te comento una anécdota especial que me pasó allá [en su vereda]. Tenía como unos 8 años y mi papá me compró una bicicleta. Uno a esa gente, al ELN, le decía "compa", y ellos le decían a uno "compa" y uno eso lo veía como familiar, normal. Una vez que entró el Ejército, un soldado me buscó la bicicleta prestada y yo se la presté y él dio como unas vueltecitas ahí en la carretera, yo estaba niño entonces yo me fui y le dije "compa, entrégueme la bicicleta". ¡Imagínate! para que te des cuenta, yo pensaba que ellos eran guerrilla, qué cosa tan verraca. Entonces recuerdo que el muchacho soltó la bicicleta y empezó a reírse y le dijo a un compañero: "cómo está lleno de guerrilla esto por aquí que mire, el muchacho nos dice compa". Pero yo inocen-

> temente porque yo veía era al ELN, yo no veía presencia del Estado, yo vi presencia del Estado después como a los tres, cuatro años (CNMH, entrevista, hombre adulto, Convención, 2017).

Habitantes de las veredas recuerdan que las guerrillas con frecuencia visitaron sus fincas en busca de alimentación, refugio o el préstamo de medios para transportarse. Si bien este tipo de acciones podían comprometer[127] a las personas y, en muchas oportunidades, les ocasionaron sentimientos de miedo y angustia, algunos recuerdan que fue cierto que estas formas de interacción estuvieron mediadas, con excepciones, por la posibilidad de la réplica y la negación. Así lo narró un habitante de una vereda de Teorama:

> Yo recuerdo que una vez llegaron a la casa y le dijeron a mi papá: vea patrón, que necesitamos que usted nos colabore con una verdura, y me parece que estoy escuchando la respuesta de mi papá, que les dijo: allá está la finca, vayan y arranquen la [verdura] que necesiten. Esa fue la respuesta que le dio mi papá, y cogió la catabra[128] y se fue a coger café y los dejó ahí. Eso recuerdo yo perfectamente, no supe quiénes eran porque no se identificaron, llegaron y no dijeron de cuál grupo ni nada, sino que llegaron y de una vez [preguntaron] ¿quién es el patrón? (...) yo ahora escuchándolos digo: uy ¿qué tal que hubieran obligado a mi papá? como lo hicieron las AUC cuando venían y: ¡necesitamos tal cosa! (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

Como lo narró otra habitante de la zona rural de este municipio, guerrilleros de las FARC interrumpieron una reunión de la JAC en la que participaba, por lo que les pidió respetar ese espacio: "¿usted está de muy

127 En la región algunas personas usan este término para referirse a aquellos actos de las guerrillas que envían el mensaje de que esa persona o comunidad "trabaja con ellos", poniendo en riesgo su integridad.

128 Recipiente que se ata a la cintura y es utilizado para recoger los granos de café de la planta.

alzadita? [me dijo el guerrillero] Dije yo: de alzadita no, que les digo la verdad porque la reunión de junta es una cosa y reunión de guerrilla es otra" (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

Las escuelas, como espacios privilegiados por su ubicación e infraestructura, revistieron especial importancia para las guerrillas y, en cierto modo, fueron decisivas para establecer relaciones de proximidad con las comunidades en tanto fueron utilizadas para sus reuniones políticas. Algunos profesores de las zonas rurales expresaron que las guerrillas pretendieron además utilizar las escuelas como zona de vivienda o de sitio de descanso, poniendo en riesgo a los estudiantes y a la misma comunidad que habitaba la vereda. No obstante, también narraron que su liderazgo y rol como educadores les permitió interpelar a los armados y exigir el respeto por las instalaciones de los centros de formación y de reunión, aunque ello les acarreó, en ocasiones, altercados e incluso amenazas por parte de los mandos guerrilleros:

> Un día estaba haciendo formación [con los estudiantes de la escuela] cuando llegaron ahí, se metieron [guerrilleros del EPL]; el agua que llegaba a la escuela caía a un tanque que cuando se llenaba salía el chorro enorme y caía casi cerquita al patio donde yo hacía la formación con los chicos. Todas las mañanas rezaba en las filas, cantábamos el himno nacional y seguíamos al salón. Ese día vi que se metían unos [guerrilleros] al baño; otros, como el chorro era enorme, les parecía sabroso y se desnudaron prácticamente, bañándose delante de los chicos (...) Y les dije: "hágame el favor y me respeta a los estudiantes, mire que hay niñas y niños. ¿Cómo se les ocurre?", y las mujeres se desnudaban como si nada, [decían] que "esa era la milicia, que de malas". Entonces como eso yo sí le reproché bastante eso fue motivo de discusión con ese señor comandante (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

Aunque habitantes de la región narraron su temor e incertidumbre dado que las guerrillas recurrieron a la intimidación por medio del uso de las armas, pero el énfasis lo ponen en la posibilidad de interpelar y negarse a cumplir una orden en contaste con el accionar de los paramilitares.

3.3.3. Orden social impuesto

Uno de los factores que influenció en la región esa cierta legitimidad del proyecto guerrillero en los primeros años fueron las acciones de "limpieza" que llevaron a cabo entonces y que aún se mantienen[129]. Respondían a una idea de control y buscaban dirimir conflictos comunales recurriendo para ello a la imposición de castigos ejemplarizantes, llamados de atención, amenazas, asesinatos y *correr*[130] a habitantes "indeseados" o "peligrosos" en las comunidades bajo control guerrillero. Este ha sido un repertorio central en la consolidación de un orden social de todas las guerrillas con presencia en la región que, no obstante, transformó la percepción que de ellas tenían las comunidades con el pasar de los años, como se mostrará más adelante.

En el caso de Campo Dos, uno de sus habitantes recuerda de qué modo fue este proyecto de "limpieza general" una de las banderas de entrada del ELN a este corregimiento del municipio de Tibú:

129 La mal llamada "limpieza social" hace referencia a las prácticas de exterminio letal que buscan "regular la convivencia" a través de la generación de un efecto disuasivo en personas del entorno para que no repitan actuaciones consideradas "incorrectas". Es realizada por agentes que buscan ganar legitimidad y además tienen algún grado de consentimiento social (CNMH, 2015a). Accionar cuestionable desde cualquier punto de vista y que viola los derechos humanos.

130 *Correr* es el término que utilizan habitantes del Catatumbo para referirse a la orden expresa dictada por los armados de abandonar el territorio.

> En el año 83, me recuerdo tanto, hubo una reunión del ELN en un sitio llamado La Laguna, aquí a pocos pasos de Campo Dos. Reunieron a la comunidad y la hicieron ir hasta allá donde ellos. Decían que ellos iban a estar acá dentro de la zona todo ese tiempo, en el cual iban a hacer una limpieza general, que fueran ladrones, viciosos, bueno, tantísimas...sapos. Que ellos iban a hacer una limpieza general, que si llegaban a haber muertos por ahí, sabían por qué era y a los pocos tiempos se empezó la *rumba* (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

En el caso de Teorama, uno de sus habitantes manifestó:

> La limpieza social siempre ha estado de presente en ellos [las guerrillas], siempre tienen como esa modalidad de hacer cualquier tipo de acciones con tal de mantener la comunidad libre de cualquier persona: atracadores, violadores, personas consumidoras de algún tipo de alucinógeno (...) ellos, por decirlo así, eran la autoridad. Allá una situación de problemas entre vecinos no se iba a arreglar en la inspección de Policía o con el personero. Lo arreglaba la guerrilla, la guerrilla que en su momento estaba, bien fuera el ELN, las FARC (...) (CNMH, entrevista, hombre adulto, Ocaña, 2016).

"En ese tiempo ellos sí investigaban", comentaron con frecuencia participantes de los talleres de memoria, para referirse al procedimiento por medio del cual las guerrillas tomaban decisiones: llamar la atención, castigar, *correr* o asesinar a una persona, como resultado de un proceso de investigación que, desde su perspectiva, parecía corresponder de manera adecuada al grado de severidad de la falta cometida.

Poco espacio para la arbitrariedad reconocen habitantes de la región en estas primeras formas de castigo y control por parte de las guerrillas y, sobre ello, construyen sentidos que le dotan de legitimidad. Algunos pobladores recordaron que a las muertes ejecutadas por las guerrillas se les llamaba "ajusticiamientos":

> Participante 1: eso sí era el control total, aquí no podía nadie robarse nada. Un ejemplo era que teníamos algunos horarios para salir, tipo 6 de la tarde uno ya no podía salir. [A los violadores] los *pelaban*[131], los *pelaban* de *porrazo*[132]. El mismo caso con los ladrones.
>
> Participante 2: y el tema para ellos no era matar, sino ajusticiar.
>
> Moderadora: ¿Pero hacían juicio?
>
> Participante 1: no, pero ya quería decir que si se lo llevaban, lo mataban. La misma gente los denunciaba (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

Un habitante de Convención relata cómo el ELN logró que en el municipio funcionaran "muchas cosas", en referencia a los primeros años de la presencia de esta guerrilla en los ochenta:

> Pero hay algo que yo quería contar y es que en esa época que hacía presencia el ELN había muchas cosas que funcionaban por mandato de ellos y funcionaban bien. Era el comportamiento de las personas, por ejemplo. Les llamaban la atención a quien estuviera molestando, [le decían]: se arregla, se porta como debe ser o entra en el cuento con nosotros[133], usted verá, y el que no aceptaba las condiciones lo iban pelando, pero funcionaban bien las cosas (...) había muchas personas que no manejaban una conducta adecuada dentro de la sociedad, faltándole el respeto a los demás, llamamos por aquí muy coloquialmente poniéndose de ruana un negocio; si tenían un carro, cometiendo arbitrariedades con el vehículo o una moto. Entonces ellos trataban de ponerle orden a eso, y muchas cosas funcionaron, pero otras llegaban hasta el último extremo, insistían mucho y no hacían caso, se los llevaban, le hacían una investigación y lo ajusticiaban (CNMH, taller de memoria, Convención, 2017).

131 Asesinar

132 Golpe contundente

133 Ingresa a las filas del grupo armado

Esta idea de orden tiene un significativo arraigo en las comunidades que han estado bajo el control guerrillero y, de forma más marcada, en las áreas rurales marginadas, en donde subsiste un precario acceso a mecanismos legales eficientes de provisión de justicia.

Un joven participante de un taller de memoria narró la forma en que su padre le había transmitido su percepción de los primeros años de presencia guerrillera en el Catatumbo, justificando su accionar: " (...) según lo que yo he escuchado, lo que mi papá me dice, él dice que antes de entrar lo que era la guerrilla había mucho *ladronismo*, un *ladronismo* que se levantó y las personas no podían tener nada porque había un grupo que robaba y todo lo que tenían se lo quitaba. Entonces a causa de eso fue que entró la guerrilla, para acabar con eso" (CNMH, taller de memoria, El Carmen, 2017).

En Tibú, habitantes de este municipio recordaron que a finales de los años ochenta la guerrilla hizo "limpieza" de una serie de asaltantes y extorsionistas que consideraban una "plaga":

> Yo me acuerdo más o menos que en esa carretera de aquí [Tibú] a Cúcuta era mucho lo que atracaban. No solamente atracaban, violaban ahí en ese punto. A una mujer la mataron y violaron. Eso le daba a uno miedo, esa gente [la guerrilla] mató toda esa plaga. Mataron extorsionistas que ahí en la misma vereda donde yo vivía había extorsionistas. Sí, ladrones, los mismos vecinos se ponían bigotes, se encapuchaban y llegaban donde usted a quitarle lo que usted había trabajado. Sabían que usted había cogido una cosecha de maíz, usted tenía que darles, si no les daba, lo mataban. Esos eran los extorsionistas, esa gente llegó e hizo limpieza. La guerrilla mató un poco de gente de esa (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2012).

Las guerrillas llevaron a cabo acciones correctivas y de castigo contra aquellos considerados como "indeseados" en las comunidades: borrachos y presuntos consumidores de alucinógenos; hicieron llamados de atención ante comportamientos considerados como reprochables; *corrieron* a personas que habían incurrido en algún tipo de falta; dirimieron conflictos cotidianos por medio de "comités conciliadores", como sucedió en veredas de La Gabarra y prohibieron llevar el machete a reuniones comunitarias, previniendo heridos o muertos en caso de altercados.

En la actualidad, personas de sectores LGBT son consideradas -por las guerrillas y algunos habitantes de la región- como parte de ese grupo de "indeseados", por lo cual sus cuerpos y subjetividades son estrictamente controlados por las guerrillas en el Catatumbo. Sin embargo, en los ejercicios de memoria, aunque el tema se puso sobre la mesa, se encontraron mínimas referencias a violencias de las guerrillas contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas desde su llegada hasta 1999. Fue referenciado solo un caso en San Calixto de un hombre gay "que se vestía como mujer" y fue *corrido* por la guerrilla (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

Este intenso control de las guerrillas sobre el comportamiento de los habitantes de la región provocó que algunas JAC, que habían integrado en sus funciones la regulación de los conflictos comunitarios, disminuyeran su capacidad de intervención. Como lo relató un habitante de San Martín, a mucha gente "le gustó la guerrilla".

Es importante resaltar que también hubo gente que se opuso a estas prácticas y fueron críticos de las acciones correctivas implementadas a través de las armas, a algunos les costó la vida. El hijo de un líder comunal que no vio con buenos ojos la escalada de muertes que dejaba a su paso la guerrilla, lo recuerda:

> Hubo varios ajusticiamientos, entre esos mataron a un señor que porque tomaba guarapo, que porque se emborrachaba, él era aserrador (...), lo sacaron de la casa como a las seis de la mañana y lo mataron. Entonces mi papá estaba en contra de la violencia, no solo él, sino que había otras personas que le decían, porque mi papá era líder comunal. [Decían las guerrillas]: no, es que fulano de tal hay que matarlo, que no sé qué. Dijo mi papá: yo no permito que en mi vereda se derrame sangre. Si está cometiendo un error, llámenle la atención o que se vaya para otra parte. Decían: no, es que si llegan a otra parte llegan haciendo lo mismo (...) Entonces mi papá debido a eso que se estaba cometiendo que no le parecía bien, él decía que no estaba de acuerdo con eso (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

La amenaza e intimidación y, en otros casos, la muerte como fórmula para solucionar los problemas comunitarios, generó un impacto mayor entre los habitantes del Catatumbo. Por una parte, ello "rompía con el esquema de pensamiento" existente en lo referente a las formas de resolución de conflictos que lideraban las JAC o las comunidades religiosas; por otra, generó un contexto en el que se llegó a justificar la muerte de personas consideradas como "plaga", de tal modo que fue un grupo armado el que definía qué era un "buen comportamiento" y, por esa vía, se abrogó el derecho a castigar lo que se escapara a sus márgenes. Esto generó incertidumbre frente a los procedimientos de control impartido por las guerrillas, sus límites y sus alcances, e incrementó sentimientos de desconfianza entre las personas. Como lo expuso un habitante de Hacarí:

> Me di cuenta que había una situación diferente cuando vi que la gente ya no era lo mismo que era cuando me fui en el 84; ya se mostraba muy reservada, abstraída, muy precavida y desconfiada. Se veía que no había la misma amistad, la misma confianza entre la gente y a la vez conmigo. La reciprocidad en la amistad que había antes había cambiado, era diferente (...) Me di cuenta

> que estaba ocurriendo en el sector rural un fenómeno nuevo que no conocíamos, el cual consistía en que había personas armadas con nombres que se hacían llamar en ese entonces como EPL, que andaban recorriendo y haciendo reuniones por las veredas. Para mí eso era desconocido, era nuevo, hablaban mucho de las malas administraciones a nivel nacional, de los malos gobiernos, de la inmoralidad y corrupción que había a nivel social, de las malas costumbres de la gente común y corriente. Mal comportamiento, se decía en ese momento. Que ellos se organizaban en grupos así para corregir todo esto, para reformar nuevamente las costumbres de la población, que hubiera más honradez. Siempre hay gente que acostumbra a veces a abusar de la confianza ajena o tomarse cosas que no le corresponden; o por ejemplo cosas del desorden social como riñas o conflictos interpersonales por diferentes motivos. Y entonces que supuestamente ellos estaban resolviendo eso, que la gente aprendiera a vivir y también dirimiendo conflictos linderantes o entre fincas, o por ejemplo el caso de que alguien se le mete a la huerta a otro o que le robaba las gallinas o que levanta un chisme, o que de alguna forma se estaba portando mal. Ellos entraban corrigiendo esas situaciones con mano fuerte, con mano drástica, pero también con diálogo, con charlas. Entonces yo me di cuenta que la gente se sentía muy confundida, no se sabía qué pensar, qué creer, porque eso rompía con el esquema de pensamiento que venía anterior. Y también había mucha desconfianza en la gente. Veía que eran reservados, porque se corría el riesgo de que si usted hacia un mal comentario de alguien no se sabía con quién estaba conversando y esa persona podría ser una que ya estaba vinculada en secreto con ese grupo. Esa era la reserva que se veía en la población (CNMH, entrevista, hombre adulto, Hacarí, 2016).

La forma que tomó la administración de conflictos comunales y la consecuente implementación de castigos no se circunscribió solo a la década de los ochenta. Se extendieron y profundizaron con el transcurrir de los años, cuando factores como su expansión territorial, su interacción con fuentes

de financiación y la confrontación directa con la fuerza pública, volvieron difusa la delgada línea entre el "buen" y el "mal" comportamiento.

Lo que se vio reflejado en un vertiginoso crecimiento en la percepción de los habitantes sobre lo inapropiado de la imposición de castigos "sin investigación", o de las "muertes injustas". Esto explica la referencia constante al pasado: "en ese tiempo", las guerrillas "sí investigaban". Esto se pone en el centro de sus relatos en torno al declive en la legitimidad otorgada a las acciones de las guerrillas.

3.4. Consolidación del dominio armado

Una serie de acciones relacionadas con la disputa militar y el fortalecimiento económico de las guerrillas generó, en las y los catatumberos, la percepción de que habían perdido sus ideales de trabajo "por el pueblo", se habían convertido en ejércitos con una capacidad militar sobresaliente, cuyo interés principal era la obtención de recursos económicos para su sostenimiento y que se había alejado de las dimensiones políticas de su proyecto[134].

Acciones como tomas[135] a poblados, la escalada en la ejecución de secues-

134 Al respecto, es importante anotar que el énfasis dado por una guerrilla a la obtención de recursos económicos o su fortalecimiento militar no significa el abandono de sus apuestas y proyectos políticos. En este apartado, se hace hincapié en las percepciones que habitantes del Catatumbo construyeron en torno a esta dinámica.

135 Una *toma guerrillera* es una operación militar que se caracteriza por la penetración transitoria de un grupo armado en una cabecera municipal o un centro poblado. Durante la toma, el grupo ejerce un control de carácter militar que combina varias de las siguientes acciones: confrontación con la fuerza pública buscando su derrota o rendición; convocatoria pública a la población civil; ejercicio de la justicia guerrillera; ataque y consecuente destrucción parcial o total de dependencias gubernamentales y administrativas (alcaldías, oficinas de la registraduría, entre otras) y de la fuerza pública, entidades financieras, iglesias, entre otros; apropiación de bienes; victimizaciones de

tros y el ataque a bienes civiles (en particular infraestructura petrolera), aunadas a las llamadas "muertes injustas" que empezaron a ser cada vez más frecuentes, generaron en muchos habitantes una relación de distancia con las guerrillas, un declive paulatino en su percepción de legitimidad. Esta sección aborda los principales componentes de esta dinámica que operó en el Catatumbo con particular énfasis a partir de la década de los noventa.

3.4.1. Tomas y destrucción de bienes públicos

Uno de los hitos más recurrentes en los ejercicios de memoria colectiva en el Catatumbo con respecto a la presencia y accionar de las guerrillas, en particular del ELN y del EPL, tiene que ver con las tomas, evento límite por el uso de la fuerza, su potencial destructivo y sus efectos sobre la población.

Los relatos hacen referencia a ataques a estaciones de Policía y a tomas de poblados, acciones que se incrementaron en el Catatumbo y en todo el país en la década de los noventa. Por ello, más allá de descripción del concepto de la nota de pie 133, aquí se hará referencia a las tomas en el sentido amplio otorgado por habitantes de la región. Estas, como lo describieron participantes de los talleres colectivos, en varios casos inauguraron un orden social hegemónico de presencia continuada y sistemática de una guerrilla como ordenadora de la vida social, política y económica de centros poblados.

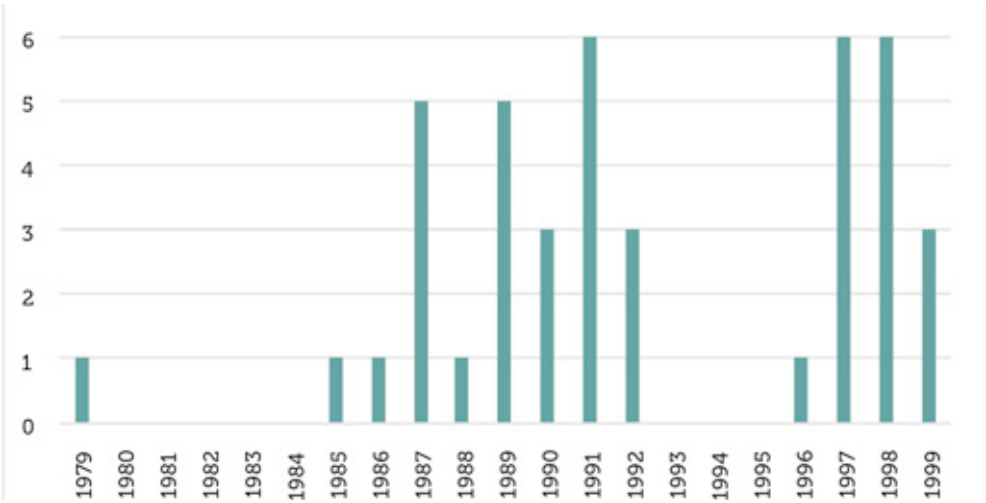
A excepción del corregimiento San Martín de Loba, en Sardinata, en todos los municipios donde se realizaron talleres colectivos de recons-

diverso tipo que se producen premeditadamente o no. El *ataque contra la estación de Policía* es un ataque localizado y limitado espacialmente que se dirige contra esta dependencia y miembros de la fuerza pública (CNMH, 2016a, página 48). Pese a que existe esta diferencia conceptual, habitantes de la región se refieren indistintamente a los dos tipos de acciones como "tomas", y así se comprenderá en este subapartado.

trucción de memoria histórica, hubo tomas de la guerrilla en el período 1979-1999. El ELN fue el actor armado que más recurrió a esta modalidad de violencia: ejecutó las tres primeras tomas que tuvieron lugar en el Catatumbo: la de 1979, en el casco urbano de Convención; la de 1986, en el corregimiento de Guamalito (El Carmen); y la de 1987, simultánea, en el corregimiento San Pablo (Teorama) y el casco urbano de Convención.

Pese a ello, muchas otras tomas ocurridas con posterioridad fueron acciones conjuntas entre las FARC, el ELN y, en ocasiones, el EPL, en el marco de la CGSB, los habitantes de la región las recuerdan como "tomas conjuntas". En particular, habitantes de San Calixto se refirieron a las tomas de los años noventa como ejecutadas "por las tres guerrillas", aunque después "quedara mandando" solo un grupo. En el caso de El Carmen la revisión de fuentes secundarias permite reconstruir que la primera toma, en julio de 1992, se trató de una acción conjunta entre las FARC y el ELN (CNMH, 2016a).

Gráfico 1. Tomas guerrilleras en el Catatumbo 1979-1999



Fuente: CNMH, 2016a y talleres de memoria, 2016-2017[136].

136 Incluye asaltos armados, ataques a estaciones de policía y tomas de poblados. La base de datos no tiene registros para los años 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1993, 1994 y 1995.

El escenario de las tomas guerrilleras fueron los cascos urbanos de El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto y Hacarí, así como los corregimientos Las Mercedes (Sardinata), Campo Dos (Tibú), San Pablo (Teorama) y Guamalito (El Carmen), en los que, al menos, hubo una toma guerrillera entre 1979 y 1999.

Tabla 4. Tomas guerrilleras enfatizadas en los talleres de memoria

Territorio	Fecha	Responsable
Convención (casco urbano)	31 enero 1979	ELN
Guamalito (El Carmen)	24 diciembre 1986	ELN
Hacarí (casco urbano)	4 noviembre 1985	EPL
San Pablo (corregimiento de Teorama)	16 marzo 1987	ELN
Convención (casco urbano)	16 marzo 1987	ELN
Estación de Policía Campo Dos (Tibú)	1 julio 1991	CGSB
Estación de Policía Petrólea (Tibú)	1 julio 1991	CGSB
El Carmen (casco urbano)	21 julio 1992	CGSB
Teorama (casco urbano)	14 diciembre 1992	CGSB
Las Mercedes (Sardinata)	7 febrero 1997	Sin identificar
Las Mercedes (Sardinata)	28 septiembre 1998	Sin identificar
Hacarí (caso urbano)	17 octubre 1998	ELN
El Carmen (casco urbano)	8 diciembre 1999	ELN

Fuente: CNMH, talleres de memoria, 2016-2017 y CNMH, 2016a[137]

137 Esta tabla no refleja el universo de tomas de poblados, asaltos armados y ataques contra estaciones de policía perpetrados por las guerrillas que tuvieron lugar en el Catatumbo entre 1979

Entre finales de los ochenta y la década de los noventa, habitantes de la región vivieron de manera incesante la amenaza de tomas guerrilleras o paramilitares en sus territorios, a tal punto que el hecho fue normalizado y era habitual escuchar rumores sobre una posible toma.

En Teorama, por ejemplo, se relata que durante los años ochenta "siempre existió la amenaza" de una toma guerrillera, cimentada en comentarios sin fundamento pero que buscaban amedrantar a la población civil y generar sentimientos de zozobra ante un eventual ataque armado cuyas dimensiones se desconocían. Secuela que aún hoy acompaña el día a día de habitantes de esta región.

> En ese tiempo que hubo la toma, yo estudiaba en Las Rosaristas, y como vivía en el campo entonces me quedaba donde una tía acá [en el casco urbano de Convención]. Mi tía mandó por las hijas, yo vi que ellas salieron, pero uno desconocía el caso y al rato llegó un muchacho que a recogerme. Y ahí en la escuela hay una bajada, el muchacho venía conmigo y yo vi esos tipos todos encapuchados en un carro y empezaron a disparar y el muchacho me tiró al piso y después él se colocó encima a protegerme y el carro pasó (CNMH, taller de memoria, Convención, 2017).

Aunque eran horas de confusión y miedo, los pobladores tienen presente que los ataques de la guerrilla iban direccionados a destruir, o por lo menos a afectar, las estaciones de Policía y las instituciones que representaban al Estado, tales como la Caja Agraria y la Registraduría Municipal. Es claro, desde la perspectiva de los sobrevivientes, que las tomas no perseguían el exterminio de la población civil, las personas que perdieron la vida fueron, en su mayoría, policías y guerrilleros.

---

y 1999. Recoge los hechos de este tipo referidos por las personas participantes de los talleres de memoria.

> Cuando en el 98 hubo la arremetida guerrillera que hemos tenido, que duró 12 horas, de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, acabaron con el pueblo y mataron un solo policía y eso porque el comandante de la policía se salió y de una bomba le cayó una pared y lo mató. Al otro día llegó la fuerza pública y sacó toda la policía, quedamos nosotros al margen de la ley. Ya como a los tres días llegó el grupo, me acuerdo tanto que se presentaron como los elenos, nos reunieron a todos en el parque, a todos nos sacaron de la casa y nos reunieron. Me acuerdo tanto un señor que tenía hasta un brazo chueco se paró ahí y habló: "es que ahora somos nosotros los que mandamos, esto lo que quedó aquí, la estación de Policía la vamos a tumbar porque no queremos nada del Gobierno, no queremos nada (CNMH, taller de memoria con mujeres, Ocaña, 2016).

En los casos de Convención, El Carmen y Teorama, la muerte y afectación de civiles en las tomas fue consecuencia del fuego cruzado. En esta perspectiva, en Convención fue recordada una persona con discapacidad sensorial que, durante la toma de 1979, no cumplió la orden de abandonar el espacio de confrontación y murió producto del fuego cruzado. En el caso de la toma a Teorama, ocurrió que "un hombre en estado de embriaguez no obedeció la orden de la guerrilla de resguardarse. Al no cumplirla, los guerrilleros lo amarraron a una banca de la iglesia con un lazo para que no saliera al parque, pero logró soltarse, abandonar el recinto y quedó así en medio de la confrontación" (CNMH, taller de memoria, Convención, 2016). Este tipo de muertes de civiles se guardan en la memoria colectiva como efecto de las tomas guerrilleras.

De la reconstrucción de memorias emerge que las tomas son un hito en la población, en particular en los habitantes adultos de cascos urbanos y centros poblados, quienes las vivieron o luego constataron el nivel de la destrucción, dejan ver los sentidos que les atribuyen en la actualidad y los efectos que les produjeron: "a nosotros no nos dejaron lesiones físi-

cas, yo creo que las mentales y las sentimentales son terribles" (CNMH, taller de memoria, El Carmen, 2017).

> La que más me impactó fue la segunda toma que fue el día de las primeras comuniones. Como era ese día, entonces mi familia estaba concentrada en una primera comunión. Y tipo 6 de la tarde cuando escuchamos fue el accionar, las bombas, los disparos y enseguida se fue la luz. Y en mi familia unos se metieron debajo de la cama, los otros salíamos a *chismosiar* a ver qué es lo que pasaba, escuchamos disparos en todos los barrios, vimos pasar un carro de la subversión armada. Y a media noche llegó un helicóptero artillado, salíamos a mirar...como estábamos en la oscuridad, uno veía salir las balas del helicóptero y nosotros decíamos: ¿cómo quedaría el parque, la iglesia? porque todas las balas iban dirigidas a la zona céntrica, más que todo al parque principal. Y fueron afectadas unas familias, porque a la familia Mendoza una bala de esas de fusil atravesó el techo y le atravesó la pierna de la señora (CNMH, taller de memoria, El Carmen, 2017).

Las tomas guerrilleras significaron daños materiales y emocionales a las comunidades. En los relatos de habitantes de la región se destacan sus sentimientos de "miedo profundo", angustia y sufrimiento ante lo inesperado de los resultados de este tipo de acción bélica que se prolongó y que parecía no tener punto final. Una mujer relató cómo vivió los ataques a las estaciones de Policía en Campo Dos y en Petrólea (Tibú), en julio de 1991:

> La luz se fue totalmente y entonces uno escuchaba los gritos desesperantes de las personas que estaban afuera, de los policías, de la gente alrededor del puesto de policía. Pedían auxilio, pedían ayuda y eso fue una cosa espantosa porque fue casi toda la noche, creo que como hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces a uno le caía tierrita de los techos, le caía tierrita encima. Eso fue algo que duramos como dos meses para superarlo. Gritos angustiosos, se oía mucho... muchos gritos desgarradores. [Eso genera en uno] un

> miedo profundo, las ganas de irse, de no estar más ahí, de no vivirlo más (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

Las afectaciones producidas en los bienes públicos son relatadas por habitantes de la región como uno de los principales efectos de las tomas guerrilleras. Un elemento común tiene que ver con la destrucción de sus principales símbolos identitarios y la infraestructura en torno a la cual se desarrolla su vida cotidiana: la iglesia, el parque central, las construcciones históricas que circundan la estación de Policía. Un hombre nacido en Teorama y que vivía en Bogotá al momento de la toma de 1992, lo relata:

> Yo vivía en Bogotá, pero cuando a mí me dan la noticia de que la guerrilla se tomó Teorama, yo me imaginé el parque totalmente destruido. Esa fue mi primera imagen: las palmeras en el piso, porque siempre nos dijeron que eso estaba totalmente dinamitado, que la Policía se había preparado y que todo el parque estaba dinamitado en caso tal de que llegara la guerrilla y ellos detonaban eso. Por eso mi imagen inicial fue esa de todo totalmente destruido (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

Otra consecuencia de las tomas fue la retirada de los agentes de Policía de los centros poblados en las que ocurrieron. Para finales de la década de los noventa esto sucedió en municipios y centros poblados como Campo Dos (Tibú), Guamalito (El Carmen) y La Gabarra (Tibú)[138]. Según sus habitantes la Policía solo retornó cuando en sus territorios ya hacían presencia las AUC.

> Aquí las tomas guerrilleras han durado mucho. Igual la primera toma fue desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Eso fue toda una noche, uno como ciudadano escuchando esas detona-

138 Aunque en La Gabarra no se dio una toma como las descritas aquí, la Policía se retiró aduciendo el peligro eminente de que una tuviera lugar, dado el contexto regional y nacional de constantes tomas a poblados.

> ciones, sí, todo al tiempo, porque obviamente uno ni duerme ni nada. Y la primera [toma] igual, yo en esa estaba por fuera [del casco urbano del municipio], pero yo creo que uno en ese sentido uno sufre mucho. Yo llamaba a mi mamá y se escuchaba completico todo lo que estaba pasando. Uno también por fuera es mucho lo que sufre porque la tensión, la impotencia, ya cuando hay muerte aquí todo el mundo se conoce, fue la muerte de esta señora que desafortunadamente pasaba en ese instante por la base, que pudo haber sido cualquiera de nosotros, tanto niño que había por fuera [de sus casas] (CNMH, taller de memoria, El Carmen, 2017).

Las tomas guerrilleras constituyeron un hito en la construcción de un orden hegemónico por parte las guerrillas en el Catatumbo, con el máximo nivel de control armado de las poblaciones. Les permitieron poner en jaque al Estado. Un habitante de Hacarí relató cómo, después de la toma, "el pueblo de ahí para acá quedó fantasma, ya ellos patrullaban aquí como la Policía" (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016), mientras en Teorama el control posterior a la toma por parte del ELN fue vivido así por uno de sus habitantes:

> De ahí pa' acá se empieza a vivir la zozobra (...) yo me acuerdo que [el ELN] primero empiezan a asumir las funciones de la ofensiva frente a la autoridad. Inicialmente uno los veía hacer lonas, camuflado y poco a poco se van quitando el pasamontañas y ya van cogiendo confianza con la gente y la gente ya empieza a entablar una conversación con ellos, pues son 10 años [sin Policía en el casco urbano del municipio], imagínese (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

Para el año 2000, el Gobierno nacional destinó recursos para la reconstrucción de las estaciones de Policía que habían sido destruidas. En el municipio de Hacarí, no obstante, el ELN "prohibió (...) trabajar en la estación" y asesinó al alcalde Wilder Torres, quien estaba adelantando el proceso de ejecución de las obras de reconstrucción. Días después de ocu-

rrida la toma, cuentan habitantes de Hacarí, la guerrilla amenazó con volar lo que había quedado en pie de la estación de Policía, acción que hubiera afectado las instalaciones de la alcaldía, la iglesia, la casa cural y el parque (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016). Jóvenes hacaritenses idearon una fórmula para impedir que este hecho ocurriera: habitar las ruinas:

> Yo siempre he sido, con unos jóvenes, como muy picanticos en el pueblo. Entonces como teníamos la alcaldía ahí, la casa cural, la iglesia, el parque y si van a meter bombas a esa vaina nos acaban con todo lo que quedó. Entonces ¿qué hicimos nosotros? Nos juntábamos en la tarde y en la noche y cuidábamos la estación de policía, lo que nos había quedado. Y ellos [guerrilla] siempre llegaban todas las noches con las bombas. Me acuerdo tanto que era el grupo de los *elenos* con las bombas a meterlas allí y nosotros a no dejar y así duramos dos años (...) nos quedábamos ahí y en la noche hacíamos un arroz de dulce, hacíamos una reunión de jóvenes, inventábamos algo, (...) porque si acababan con la estación de policía, acababan con todo el centro del pueblo. ¿Cómo íbamos a dejar nosotros? (CNMH, taller de memoria con mujeres, Ocaña, 2016).

Para la población civil de los cascos urbanos de municipios y corregimientos las tomas generaron sentimientos de rechazo al accionar armado de las guerrillas, tal y como fue narrado durante los ejercicios de memoria. Estas acciones exhibieron una faceta hasta entonces poco conocida en la región: el poder militar de las guerrillas. En adelante, las tomas fueron interpretadas como actos de fuerza militar desproporcionados, que produjeron cicatrices en los cuerpos, emociones y paisajes urbanos, e instauraron el accionar y presencia continuada de las guerrillas en el territorio[139].

139 Al respecto, es fundamental señalar que la forma en que se interpretan estas acciones militares difiere entre habitantes de los centros poblados y aquellos de las zonas rurales de los municipios, en particular veredas que están más alejadas del casco urbano. Como se anotó, en muchos casos habitantes rurales oyeron las noticias de la toma, y no tuvieron que experimentarla con la cercanía que los habitantes urbanos. En el caso de El Carmen, a su vez, habitantes de veredas distantes del casco urbano hicieron saber que habían oído de las tomas muchos días después, manifestando

3.4.2. Estricta regulación de la vida diaria

Con algunas excepciones, habitantes del Catatumbo relataron el modo en que las tomas guerrilleras fueron un punto de quiebre entre un período de presencia difusa y presencia continuada y sistemática.

La retirada de la Policía, así como el fortalecimiento militar de las guerrillas[140] en el marco de la disputa por el poder político, militar y territorial, las convirtieron en ordenadoras de economías locales como la de la coca y, en cierto sentido, del petróleo. Además de incidir en la regulación de la vida cotidiana de las poblaciones a través de prácticas de vigilancia y sospecha, que se proponían eliminar cualquier rastro de presencia o influencia de la fuerza pública, el Gobierno y de pobladores considerados como no deseados.

Un perfil social bajo la mira de las tres guerrillas en el Catatumbo fue el del "desconocido". Las guerrillas vigilaban estrictamente quién entraba y salía de las zonas bajo su control, prestando especial atención a "sospechosos", de quienes se presumía podían llevar y traer información, es decir, ser informantes del Ejército, la Policía, el Gobierno o de grupos paramilitares. En esta perspectiva, cualquier persona que no hubiera sido reconocida por el mando guerrillero a cargo, podía ser considerada como sospechosa.

---

que en algunos casos no conocían el impacto que estas habían producido en las personas del casco urbano. Esta distinción cobra especial relevancia en tanto permite comprender formas diferenciadas de interacción con las guerrillas, y por lo tanto percepción en torno a su accionar, entre habitantes de la región.

140 Eventos como la VII Conferencia de las FARC (1982) y reuniones donde se definieron estrategias para desarrollar los planteamientos allí elaborados (Verdad Abierta, 2013, 2 de octubre; la Reunión Nacional de Héroes y Mártires de Anorí (1983) y el I Congreso (1986) del ELN.

Quienes participaron en los talleres relataron que entre los considerados sospechosos usuales por parte de las guerrillas, estaban vendedores que venían de afuera, personas que visitaban la región por motivos familiares o de amistad y docentes. Los indígenas Barí dieron a conocer que en 1998 el ELN amenazó a la comunidad Caaxbaringcayra con matar a aquella persona que vieran hablando con el Ejército o la Policía (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017).

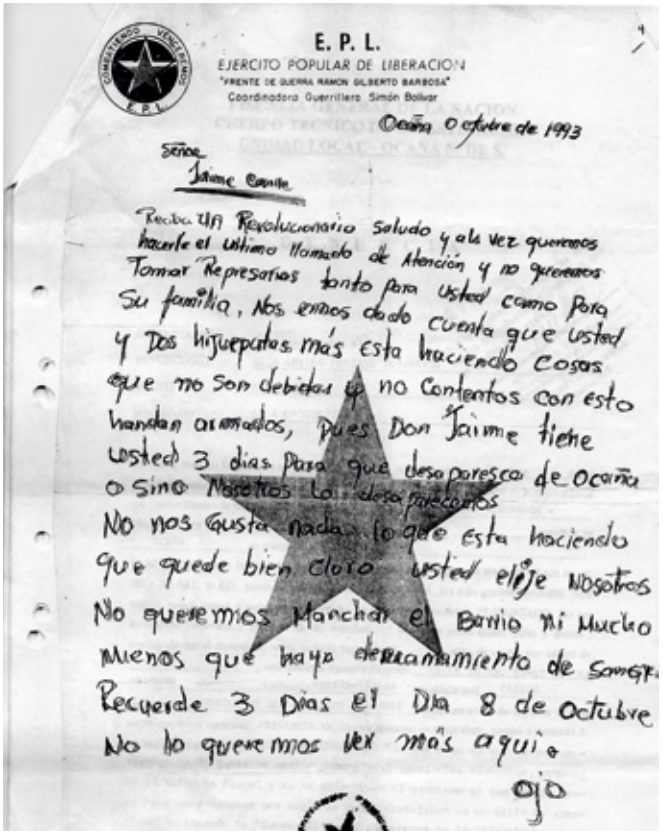
En Teorama habitantes recuerdan que después de la toma guerrillera de diciembre de 1992, hubo asesinatos a desconocidos: "comienzan también los homicidios selectivos, porque llegan las gentes, llegan los vendedores de afuera, entonces ellos los consideraban como enemigos y entonces se los llevaban y los mataban (...) era problema entrar cuando eso" (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016). En San Calixto, un habitante recordó esta época:

> Entonces acá no se podía entrar ni fotógrafos ni gente que viniera a meter algo, cositas[141], ni nada, porque era bajado de la carretera y desaparecía. Acá yo creo que hay muchas personas enterradas que ni los familiares saben a dónde están. Porque acá asesinaron a un fotógrafo porque tomó [una foto] a una presentación que estaba haciendo el EPL (...) a los pocos días le decomisaron la cámara y lo mataron. Y después vino un señor de Ocaña (...), él traía un caballito para tomarle fotos a los niños. Ese señor, viniendo yo de la esquina, lo encontré aquí en la salida, aquí en la parte de abajo (...) que ya lo llevaban [para asesinarlo]. A ese señor lo echaron para la zona de Lagunita y desapareció (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

La comunidad recuerda que las guerrillas recurrieron a los panfletos y volantes para dar a conocer los listados o nombres de personas ame-

141 Hace referencia a comerciantes provenientes de centros urbanos como Ocaña o Cúcuta que llevaban mercancías para su venta en este municipio.

nazadas o consideradas sospechosas, en lo que un participante del taller de memoria de Convención denominó "una constante" en la región: una estrategia usada no solo por las guerrillas, sino de manera predominante por los primeros grupos de autodefensa de la región, como se detalló en el capítulo 2.



E. P. L.
EJERCITO POPULAR DE LIBERACION
"FRENTE DE GUERRA RAMON GILBERTO BARBOSA"
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar

Ocaña 0 octubre de 1993

Señor
Jaime Conte

Recba. Un Revolucionario Saludo y ala vez queremos hacerle el ultimo llamado de Atención y no queremos Tomar Represarias tanto para Usted como para Su familia, Nos emos dado cuenta que usted y Dos hijuepatos más esta haciendo Cosas que no Son debidas y no Contentos con esto mandan armados, Pues Don Jaime tiene usted 3 dias Para que desaparesca de Ocaña o Sino Nosotros lo desaparecemos No nos Gusta nada lo que esta haciendo que quede bien claro usted elije Nosotros No queremos Manchar el Barrio ni Mucho Menos que haya derramamiento de Sangre Recuerde 3 Dias el Dia 8 de Octubre No lo queremos Ver más aqui.

ojo

Fuente: Archivo de la Asociación Minga, panfleto del EPL.

Los maestros y maestras fueron objeto de esta forma de violencia, dado que, en su mayoría, son nombrados para trabajar en poblados y veredas diferentes a su lugar de origen. Su presencia y acciones fueron vistas con sospecha por parte de las guerrillas. Un profesor que trabajó en una vereda del corregimiento Las Mercedes (Sardinata) lo recordó así:

> Un buen día estábamos en una reunión cuando aparecieron dos tipos armados con un fusil M-1 que necesitaban hablar conmigo. La gente se asustó, yo no sabía que ahí estaba esa gente (...) Me llevaron hacia un lugar determinado ahí en la escuela aparte de las personas que estaban ahí (...). Pues me entrevistaron, que yo qué hacía, que por qué estaba ahí y de dónde era. Yo dije 'no, yo soy de Las Mercedes, soy mercedeño'. Les comenté la situación, a qué me dedicaba y pues que había llegado a descansar unos días y me ofrecieron trabajar de profesor y me pareció bueno porque quería trabajar con la gente (...) en esa época era las FARC, eran dos muchachos, se identificaron del Frente 33 de la FARC y que simplemente estaban ahí de paseo y que estaban asegurando la zona que no se metiera gente desconocida, porque ya tenían información que posiblemente fuera a llegar gente del Gobierno y se estaban utilizando para buscar información dónde estaban ellos [FARC] ubicados y qué hacían (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

Esta era la dinámica:

> Y para nadie es un secreto que un profesor llegaba a una vereda y era investigado por ellos: ¿usted de dónde viene? ¿de quién es hijo? Conmigo lo hicieron: permítame sus papeles, le vamos a hacer unas preguntas y eso y lo otro y aquello. Era rutina, lo llamaban ellos que era rutina de ellos, pero el que nada debe, nada teme (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

Maestros y maestras tenían que entrar recomendados o contar con un conocido en la zona para poder trabajar. Por ello, lo primero que debían hacer al llegar a una nueva plaza era recurrir al presidente de la JAC, no solo para darse a conocer a la comunidad, sino porque este era quien debía responder, de ser el caso, frente al grupo guerrillero por su presencia.

Aunque en las entrevistas y ejercicios colectivos no se encontró que esta fuera una práctica común, una profesora relató que las FARC la invitaron a que incentivara a los estudiantes a conocer más sobre la organización guerrillera: "Le decían a uno que tenía que leer libros de ellos pa' decirle a los estudiantes cómo era el grupo, como incentivar a los estudiantes a que conozcan qué era la revolución, qué era las FARC. [Yo les decía]: yo no hago eso y [ellos respondían] ah, no ¿entonces qué estamos haciendo profesora?, le decían a uno así" (CNMH, taller violencia sexual, Cúcuta, 2016).

Habitantes de las veredas y los centros poblados vieron restringidas sus posibilidades de moverse por su territorio y llevar a cabo actividades cotidianas, en especial, aquellas que implicaban visitar zonas alejadas. Así lo recordó un campesino de Teorama, arriero, quien compraba café y otros productos en las veredas para venderlos en el casco urbano:

> En el caso mío que yo arriaba, yo era arriero mucho tiempo, como 10 años arriando. Y a mí me decían [los guerrilleros]: ¿usted qué hace yendo al pueblo tantas veces? ¿Usted por qué va tanto al pueblo? ¿A qué va usted al pueblo? [Y yo les respondía:] pues yo saco carga, yo saco carga a fulano y a domicilio. Mire a ver en qué anda. Llegaban los vecinos a la casa de uno a buscarlo para que levantara dos *carguitas*[142] mañana [y me tocaba responderles] no, mañana no voy (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

Mujeres de La Gabarra relataron cómo las FARC regularon cuestiones propias de la vida cotidiana como el uso de *piercing*, el cabello largo en los hombres, o las interacciones de las mujeres casadas con otros hombres, para identificar a las supuestas infieles, a quienes la guerrilla podía incluso matar como castigo (CNMH, taller violencia sexual, Cúcuta, 2016). También hicieron énfasis en la forma en que prohibió portar cualquier

142 Una carga es un bulto o costal de productos agrícolas (yuca, fríjol, maíz, café, entre otros).

símbolo alusivo a la fuerza pública. En ese sentido, cortes de cabello estilo militar y el uso de prendas que se asemejaran a los camuflados fueron prohibidos y castigados hasta con la muerte:

> Pues también que las modas, el peluquiado, ahí sí era todo más el peluquiado de los hombres. El corte militar sí lo prohibía la guerrilla (...) no podía, si fuera el civil que fuera, pero si tenía un corte militar allá lo tildaban que era del Gobierno, así no fuera. [Otra mujer agrega]: el camuflado, nadie podía usar camuflado. Ahorita esos pantalones que utilizan camuflados...eso. Ah, otra cosa: las botas esas de moda que sacaron allá en La Gabarra, no, porque decían que eran militares. El que llevara esas botas es soldado y lo agarran allá (CNMH, taller violencia sexual, Cúcuta, 2016).

Una de las prácticas más generalizada de las guerrillas en el Catatumbo, que sigue vigente como se verá en el capítulo 6, es la vigilancia y regulación de la interacción de los habitantes con agentes de Policía o miembros del Ejército. Este fue un elemento sobre el cual hicieron especial énfasis las personas que participaron de este proceso de reconstrucción de memoria histórica, en particular las mujeres.

En ese contexto, tener un familiar en las instituciones militares o prestar servicios médicos, de alimentación o lavado de ropa a miembros de la fuerza pública, se convertía en una sentencia de muerte, según lo describieron en la región.

En el primer caso, se hizo referencia a aquellos que optaron por una carrera militar y a aquellos jóvenes de la región que prestaban el servicio militar obligatorio. Por ejemplo, en un caso específico, para que un militar pudiera entrar al municipio de Convención a participar del entierro de un familiar, fue necesario pedir permiso al mando de la zona, en tanto podía estar en la lista de la guerrilla. La respuesta del mando fue:

"él puede venir, el todo es que no siga *chimbiando*[143]" (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

Una de las primeras muertes civiles a manos del ELN en Campo Dos (Tibú), fue la de una mujer que le llevaba a su yerno -soldado- la correspondencia de su hija al batallón. Como lo relató su esposo, "cuando eso era prohibido entrar a ese lugar, por lo cual, después de incumplir la advertencia que recibió para dejar de visitar el batallón, fue asesinada". Habitantes de La Gabarra (Tibú) narraron que un miliciano de las FARC, encargado de "ajusticiar a la gente que él quería matar", asesinó a un niño de nueve años "porque iba a la base militar y le daban *repelos*[144] de comida ahí" (CNMH, taller de memoria, La Gabarra, 2012).

En el marco del taller de memoria con docentes, se recordó el caso del profesor German Contreras, asesinado por la guerrilla a finales de la década de los noventa, acusado de tener relación con la fuerza pública:

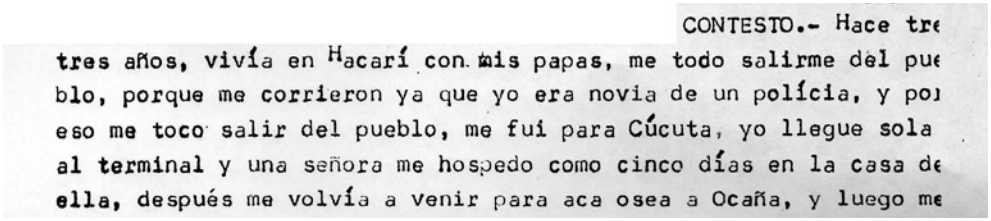
> Que yo recuerde bien el caso del profesor German Contreras. Pues el profe sí nos había mencionado en más de una ocasión que ya lo había abordado la guerrilla y lo habían estado investigando que si era que él hacía parte del Ejército. Porque el problema de él era que la mamá recibía una pensión por parte de las Fuerzas Militares, creo que por un hijo que le habían matado y ellos tenían que ir todos los meses a recoger el cheque allí en la base militar. Por ahí inició el problema... él era profesor en Campo Dos en ese momento, pero un muchacho que vivía acá, un muchacho que tenía sus años de estar acá, un muchacho muy activo en la parte cultural (...) El día que lo mataron incluso estaba con unos compañeros nuestros ahí en el parque (...) él que se monta al carro, llegaron y lo acribillaron

143 Molestando, fastidiando, en referencia a su labor en las Fuerzas Militares

144 Restos o sobrantes

> ahí dentro del carro. Aquí en Tibú, sí, a la salida de misa, eso fue a la salida de misa (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

En particular sobre las mujeres de la región recayó el estigma de ser colaboradoras o informantes de la fuerza pública, una dinámica que se mantiene aún. En ese sentido, las guerrillas regularon la interacción entre las mujeres, soldados y policías, prohibiendo cualquier tipo de relación de amistad o amorosa bajo el riesgo de ser castigadas con la muerte[145]. Esto les ha generado, aún en el presente, sentimientos de temor, impotencia e, incluso, la obligación de desplazarse: "Prácticamente uno tenía que vivir como a escondidas por el temor de que no lo fueran a ver ni hablando ni saludando a nadie de la fuerza pública ni haciéndole un favor" (CNMH, taller de memoria con mujeres, Ocaña, 2016).



CONTESTO.- Hace tre
tres años, vivía en Hacarí con mis papas, me todo salirme del pue
blo, porque me corrieron ya que yo era novia de un policía, y por
eso me toco salir del pueblo, me fuí para Cúcuta, yo llegue sola
al terminal y una señora me hospedo como cinco días en la casa de
ella, después me volvía a venir para aca osea a Ocaña, y luego me

Fuente: Archivo de la Asociación Minga, fragmento de denuncia ante la Personería municipal de Ocaña.

Algunas tareas que en lo usual recaen sobre las mujeres como la enfermería, atención en restaurantes y lavado de ropa, realizadas en ocasiones bajo coacción, significaron riesgo de muerte, como en el caso de una mujer tuvo que hacer curaciones a soldados heridos (corregimiento de

145 Las guerrillas (y otros sectores de la sociedad) han considerado a las mujeres como sujetos más proclives al chisme, poniéndolas en un lugar de subordinación y perpetrando estereotipos que justifican las violencias contra sus cuerpos y proyectos individuales y colectivos. Además, ello les borra su capacidad de agencia en tanto se parte del supuesto de que son "engañadas" o que han caído en la trampa de un militar cuando acceden a ser amigas o pareja de uno de ellos.

Luis Vero) o vendió chance a miembros de la Policía (El Tarra). Otras, tuvieron que actuar estratégicamente, como en el caso de una mujer en El Tarra, que obtenía buena parte de sus ingresos del lavado de las prendas de policías del municipio y se veía obligada a hacerlo en la más estricta confidencialidad.

La Gabarra, a mediados de la década de los noventa, es uno de los casos más emblemáticos de la estricta regulación de la vida cotidiana por las FARC, pues la zona rural de este corregimiento concentraba el mayor índice de área sembrada de hoja de coca del departamento, por lo cual su casco urbano se convirtió en el punto de llegada de personas de todo el país: trabajadores, compradores de la hoja de coca y de la pasta base, comerciantes, trabajadoras sexuales, entre otros.

En ese contexto, las FARC pusieron en marcha una política de carnetización de habitantes de veredas de La Gabarra, para vigilar y controlar la llegada de desconocidos y corroborar "que tenía antigüedad en la zona" (CNMH, taller de memoria, La Gabarra, 2012).

Obtener el carné costaba quince mil pesos y era obligatorio para todas las personas que vivían o visitaban la zona: "la carnetización la hizo la guerrilla para controlar qué personas estaban en la zona, o sea, qué personas la habitaban, entonces tener el control de las personas (...) toda la persona que entraba a trabajar a la zona tenía que carnetizarse" (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

Los carnés conllevaron un efecto perverso con el paso de los años. Como lo recuerdan muchas personas de La Gabarra, cuando llegaron los paramilitares a esa zona de la región a finales de la década de los noventa, "empezaron a pedir los carnés por toda la vereda" (CNMH, taller de memoria con docentes, Tibú, 2016), presumiendo que sus portadores tenían claros vínculos con la guerrilla y eran sus colaboradores. Por su parte,

las FARC, conocedoras de la posible entrada de paramilitares, castigaban con severidad a quienes consideraron posibles informantes, como lo relata una habitante de Tibú:

> Ya cuando se empezaron a meter las autodefensas que aquí no podían ver un negro, un moreno, porque todos eran sapos de las autodefensas. No podía venir un comerciante a trabajar de afuera porque era un sapo de las autodefensas. Ahí mataron a un muchacho en la camioneta que lo bajaron de la camioneta por matarlo porque supuestamente era un sapo de las autodefensas. No, esos fueron tantos conflictos en ese tiempo. Del 96 para acá sinceramente yo vi demasiada violencia, hasta el 2001 que yo estuve acá para mí eso fue un infierno, eso se veía mucha sangre (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2012).

Revisten importancia las referencias sobre personas de la comunidad que, por su reconocido liderazgo, intercedieron ante la guerrilla por alguien considerado "sospechoso". Esta se volvió una práctica necesaria cuando se percibía que estaba cometiendo una injusticia:

> En el 92, que fue la primera vez que fueron a esa vereda, fue la guerrilla a asesinar a una familia y yo me tocó ir con el presidente [de la Junta de Acción Comunal] (...) a hablar con, como que eran los *elenos* y ellos ese día nos dijeron: bueno, nosotros no los vamos a matar, pero ellos quedan bajo la responsabilidad de ustedes, si ellos la vuelven a cagar, venimos por ustedes. Nosotros dijimos que sí, porque como eran de la vereda y eran conocidos, únicamente que porque, no sé qué habían hecho en ese entonces por ahí (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

3.4.3. Estrategias de control, vigilancia y castigo

En todos los espacios de construcción de memoria colectiva, los participantes expresaron lo que consideran una serie de injusticias en el marco de las estrategias de control, vigilancia y castigo impartidas por las guerrillas. Estas son explicadas como consecuencia de dos dinámicas interrelacionadas: por un lado, la poca o nula investigación que llevaron a cabo las guerrillas para castigar a una persona cuyo comportamiento fue denunciado; por el otro, la práctica a la que recurrieron muchos habitantes de la región de *mal informar*, señalar y acusar a una persona como sospechosa de una acción prohibida así no fuera verdad[146].

Un hombre cuyo padre fue asesinado por la guerrilla en 1987 narró cómo, más de 10 años después, uno de los perpetradores le confesó que la muerte de su papá fue "un error":

> Años después, (...) en el año 98 (...) recuerdo que estaba yo una mañana amarrándome las botas para irme a trabajar, cuando llega un señor y me dice ¿usted me conoce? Entonces yo me quedé mirándolo y dije no. Y dijo: sí, yo lo conozco a usted desde pequeño. Dijo: usted es el hijo del finado fulano de tal. Dije sí. Entonces dijo: el asesinato, la muerte de su papá sí fue un error que se cometió. Entonces le dije yo: y se siguen cometiendo errores. No hablamos más (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

De los relatos de los habitantes es razonable entender que se trató de una práctica difundida para dirimir conflictos personales, o a la cual recurrieron como respuesta a la constante presión por parte de los armados para dar información e identificar a un presunto sospechoso.

146 También se utilizan los términos *sapiar*, echar dedo, informar.

Interesa plantear de qué modo la popularización de esta práctica ocasionó una profunda desconfianza frente al accionar de las guerrillas, lo que llevó a interpelar severamente los proyectos de control que abanderaban y restaron legitimidad a su accionar. La percepción de que las guerrillas no estaban "investigando", sino basando sus decisiones sobre la vida y bienestar de los habitantes en comentarios y señalamientos sin fundamento, generó en la población una sensación de injusticia que durante los talleres colectivos fue señalada una y otra vez:

> Sí, la guerrilla mataba mucha gente por eso, porque mal informaban la gente por nada, como dice allá el compañero, por nada, por tenerle bronca a uno, al otro le decían: no, maten a ese *man* porque es malo, que no nos sirve en la región. Y no lo investigaban, sino que tenga, lo mataban y ya. Y nos afectaba mucho porque yo recuerdo que cuando yo estaba muy niño, eso era como en el 94, por ahí, mataron a un señor [en Luis Vero] porque él tenía una tienda al lado de la escuela donde nosotros estudiábamos y lo mataron porque le vendía comida al Ejército. Y eso era injusto porque de igual manera uno sabía que ese señor era un señor sabio. Entonces lo mal informaron y eso le causó la muerte, o sea, eso era una guerra injusta porque de igual manera era una persona que era sana en la comunidad y todo el mundo sabía que no debía nada de nada. ¿Por qué tenían que quitarle la vida así? o sea, esa guerra viene así desde...y así han pasado muchos casos (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

Esto produjo sentimientos de impotencia, rabia y dolor, como lo relata una habitante del corregimiento Campo Dos (Tibú):

> En el 92 hubo muchos asesinatos; entre los asesinatos estuvo el señor Miguel y su señora Luz, que vivían al otro lado del río en la hacienda de ahí del lado de la quebrada. Esos señores los mata-

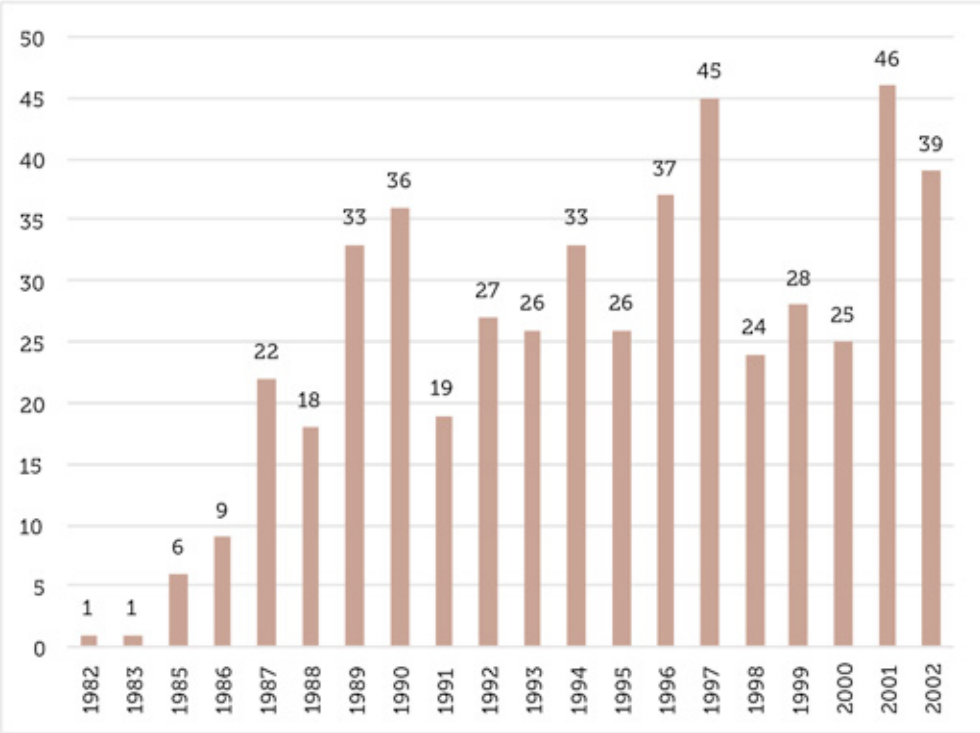
> ron en la vigilia de Pentecostés de 1992. Eran líderes y colaboradores enormes, no solamente de la parroquia sino de la comunidad. Yo refiero aquí unos asesinatos porque esos nos dolieron mucho. Mataron a un muchacho de unos 16 años que estaba pescando. El papá era un señor muy pobre y el día en que lo velaron le llegó el papelito de parte de la guerrilla: "qué pena, nos equivocamos. Le matamos a su hijo, pero nos equivocamos". Y eso nos dolió mucho (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

Un profesor relató el asesinato de una persona "extraña" y el sentimiento de injusticia que lo rodeó:

> Era muy difícil por ejemplo una persona extraña venir a trabajar acá porque de una vez era sindicada de que era de los servicios de inteligencia del Estado. Más de una vez pasó acá. Recuerdo un caso de un muchacho que venía a trabajar con la Federación de Cacaoteros (...) había venido y dio la charla, incluso salimos ahí a una tiendita cercana y el muchacho se tomó unas cervezas con nosotros, se vino y estaba almorzando en uno de los restaurantes acá cuando llegaron y lo ajusticiaron ahí sin decirle absolutamente nada, sin preguntar si era cierto que hacía parte de una cosa, no, el hecho de ser extraño eso le ocasionó la muerte y en más de una situación de esas pasó, o sea, donde no se pregunta sino después de que ocurren los hechos, ahí es que se pregunta si sí era o no. Eso era gente inocente (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

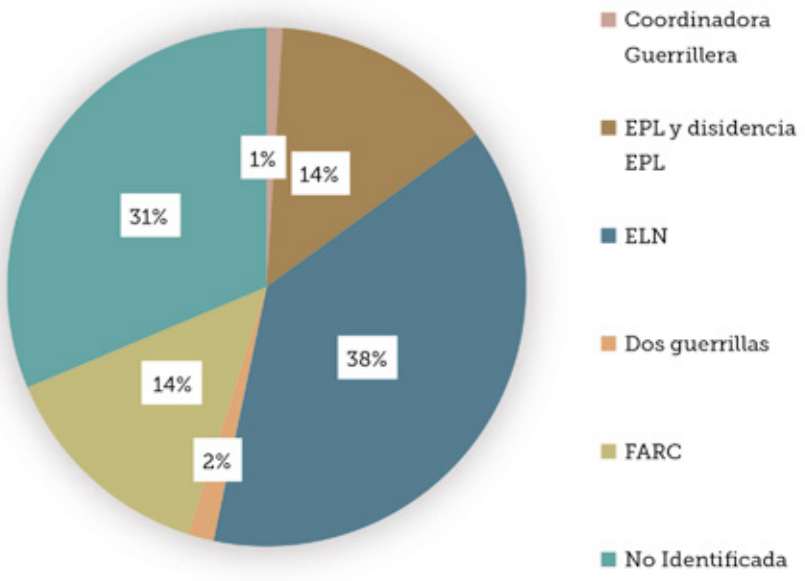
En San Calixto hicieron referencia a esta como una crisis, al argumentar que solamente con señalar a la persona, era asesinada. Vale reiterar el efecto que estas prácticas generaron en el tejido social en la región y advertir que puede leerse como un resultado previsible de la dinámica de regulación del cuerpo, la vida cotidiana y las interacciones, que las guerrillas implementaron.

Gráfico 2. Asesinatos selectivos de las guerrillas en el Catatumbo 1982-2002



Fuente: CNMH-OMC, fecha de corte: 29 de mayo de 2018.

Gráfico 3. Asesinatos selectivos por grupo insurgente en Catatumbo 1982-2002



Fuente: CNMH-OMC, fecha de corte: 29 de mayo de 2018[147].

Como lo expresaron algunos habitantes de la región, la confianza con los vecinos e incluso familiares se fracturó: bajo el dominio guerrillero cualquier comentario podía significar un castigo o la muerte. Desconfianza no solo con los foráneos sino entre habitantes de poblados y veredas, una dinámica que persiste en la región y que el paramilitarismo agravó. Las y los catatumberos expresan que "uno no sabe con quién está hablando", que hay que hacerlo "con mucha prudencia, porque no se sabe qué bandos existan". Hablar del conflicto armado o hacer un comentario, en particular, acerca de las guerrillas, debe hacerse con cuidado.

147 A partir de 1992, los asesinatos selectivos perpetrados por el EPL corresponden a "disidencia EPL".

3.4.4. Fortalecimiento económico de las guerrillas

Otra de las razones por las cuales la percepción de legitimidad en torno a las guerrillas sufrió una significativa disminución, provino de la expansión de sus intereses económicos. Si bien el secuestro con fines extorsivos y la extorsión se habían practicado en el Catatumbo desde los primeros años de la presencia de las guerrillas, según cifras del OMC del CNMH, se generalizaron a partir de la segunda mitad de los años noventa. Los secuestros perpetrados por las guerrillas pasaron de 12 casos en 1989 a 171 en 1999. El ELN fue la guerrilla que más apeló a esta práctica entre 1982 y 2002, seguida del EPL[148]. Se debe anotar que el ELN secuestró tanto con fines extorsivos como políticos, lo hizo contra funcionarios, candidatos y líderes de la región. El EPL justificó algunos secuestros como "juicios políticos".

A la par de la consolidación de sus proyectos políticos y militares, las guerrillas en el Catatumbo buscaron afianzar su poder económico a través de prácticas como el secuestro extorsivo, el cobro de cuotas a establecimientos de comercio, la extorsión y la estricta regulación del mercado de la coca, en el caso de las FARC en La Gabarra.

Según habitantes de la región, el ELN y el EPL basaron su obtención de recursos en gran medida en el secuestro y la extorsión, lo que repercutió en la percepción de la población y en eventos de importancia nacional como las negociaciones de paz en Tlaxcala durante el Gobierno Gaviria.

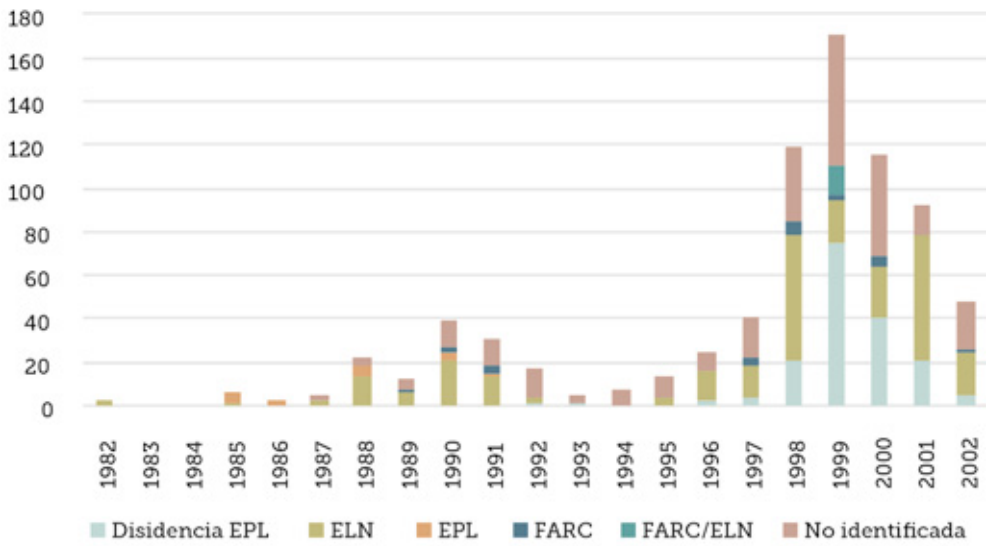
Para el caso del EPL, habitantes de San Calixto percibieron que el secuestro fue la principal fuente de financiación de esta guerrilla: "en esa época no

148 Según Echandía (1998), entre 1989 y 1997, a nivel nacional los secuestros son cometidos también por grupos de delincuencia común, organizaciones del narcotráfico y grupos de justicia privada, entre otros, estos superaron a los de las guerrillas.

existía el narcotráfico y acá en la zona del Catatumbo no había la implantación todavía de la mata. Entonces el EPL la forma de conseguir recursos lo hacía por medio de extorsiones y de secuestros, esa era la forma de poderse mantener la organización" (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

Esta percepción se reitera en Sardinata. Un participante del taller expresó: "era que cuando eso no había mata, eran puros cultivos de yuca, café, maíz, cacao. Cuando eso no tocaban el tema, eso la vida de ellos era un grupo de *guerrillos*[149] y encontraban hasta tres, cuatro secuestrados en esos grupos, cuidándolos, dándoles comida y ellos el billete que no les bajaba, o sea, cuando eso no se mantenían del narcotráfico como ahora" (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

Gráfico 4. Casos de secuestro en la región del Catatumbo 1982-2002



Fuente: CNMH-OMC, fecha de corte 29 de mayo de 2018.

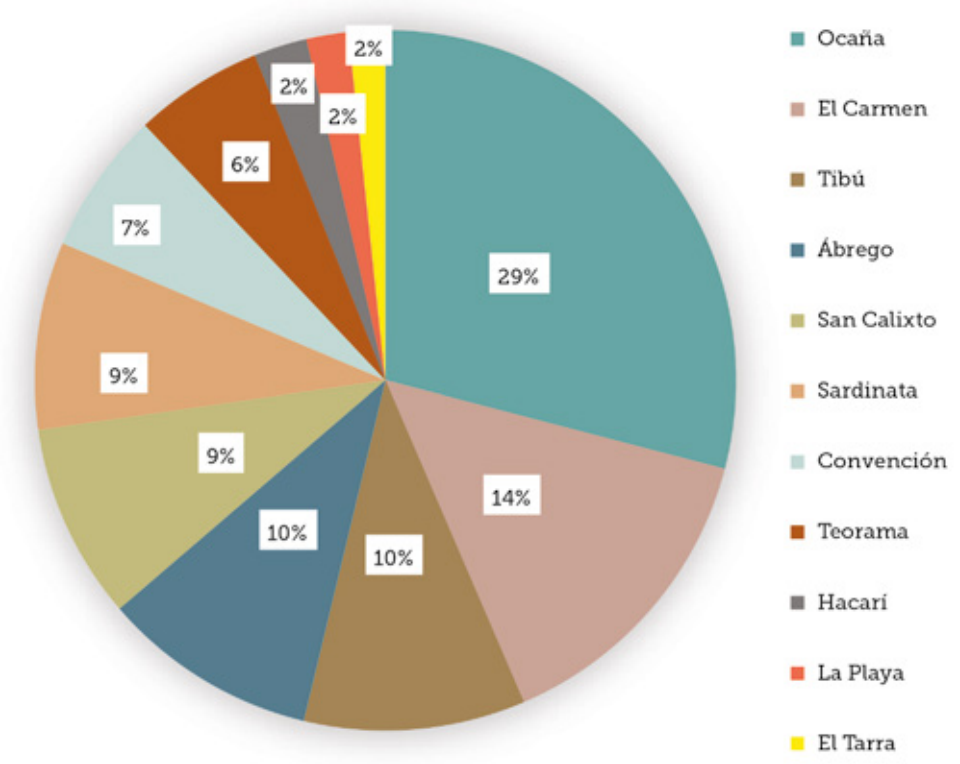
149 Guerrilleros

En la Zona Dos de Tibú (Campo Dos, Campo Tres y Caño Victoria, entre otros poblados), por tradición ganadera, las guerrillas secuestraron y con mayor frecuencia extorsionaron a los dueños de las fincas, lo que ocasionó múltiples desplazamientos o abandono de las actividades productivas:

> Participante 1: la época del 91 al 93 o 94 es el desplazamiento que se realizó porque, por ejemplo, en Caño Victoria, que era una zona ganadera, esas fincas andaban solas, eso eran unas rastrojeras; lo mismo La Libertad, El 88, eso eran unas rastrojeras porque la gente tuvo que dejar abandonadas sus fincas y salir corriendo y dejar eso ahí solo (...)
>
> Participante 2: yo estuve un tiempo trabajando recogiendo leche por todas estas veredas y yo a veces andaba con un compadre, que es de los antiguos por acá y él me contaba por ejemplo que por allá por Campo Tres, El 19, El 48, por aquí en la finca El Porvenir en la vía a Petrólea para arriba y había muchas fincas, era una zona ganadera, entonces cuando entró en esa época la guerrilla, no sé qué grupo sería en esa época, el ELN o EPL, entonces hubo mucho conflicto con los hacendados, que con los obreros (...), a unos mataron, otros se fueron (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

El secuestro fue una práctica que afectó en su mayoría a personas que habitaban las zonas urbanas de la región, muchas de las cuales no habían sentido los efectos del conflicto armado. En el período 1982-2002, según datos del OMC del CNMH, Ocaña fue el municipio donde más se presentó esta práctica, con 225 casos denunciados; seguido de El Carmen, con 112; Tibú, con 79; y Ábrego, con 77.

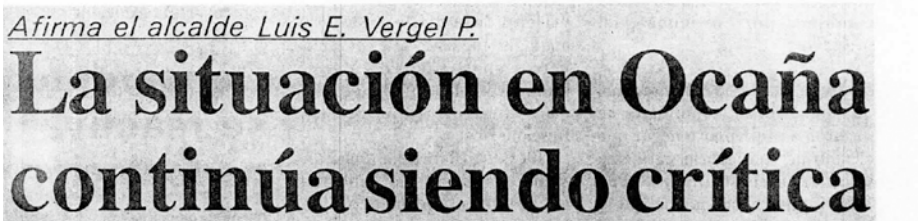
Gráfico 5. Casos de secuestro por grupo insurgente en Catatumbo 1982-2002



Fuente: CNMH-OMC, fecha de corte 29 de mayo de 2018.

En Ocaña fueron secuestrados -y en ocasiones, muertos en cautiverio- comerciantes, políticos, candidatos a cargos de elección popular, dueños o administradores de fincas. Ello generó sentimientos de angustia y temor entre la población civil[150], hechos que se sumaban al accionar de grupos de autodefensa -algunos de los cuales justifican sus acciones en el accionar desproporcionado de las guerrillas-.

150 En su edición del 11 de octubre de 1995, el periódico Vanguardia Liberal titulaba: "La zozobra campea en Ocaña".



Afirma el alcalde Luis E. Vergel P.

La situación en Ocaña continúa siendo crítica

Titular del Periódico La Opinión. 13 de junio de 1994. Fuente: Archivo Asociación Minga.

Familias de la región con condiciones económicas estables vieron cómo la escalada de secuestros y extorsiones de las guerrillas les robaba la tranquilidad. Situación enmarcada en la práctica de la retención económica que puso en marcha el ELN, como lo reconoció Manuel Pérez, comandante de esta guerrilla: "nosotros en ese momento teníamos muy metido en la cabeza que los recursos económicos de infraestructura para el desarrollo y sostenimientos de la confrontación los tenía la burguesía y había que arrebatárselos. Es con esa concepción que se valida la retención económica, como un mecanismo para sostener la guerra" (Medina Gallego, 1996, página 104).

Una habitante del casco urbano de un municipio del Catatumbo, cuya familia tenía una tienda, narró cómo el secuestro de su hermano por parte del ELN fue el momento en que le "tocó la violencia", sintió más cercano el dolor que otros experimentaban en la región y en el país. Su relato, además, habla de su capacidad para encarar a los armados y negociar con el mando de esta guerrilla la suma que le exigían a su familia para liberar a su hermano: "Yo lo dejé que hablara y saqué una mochila que había llevado: vea, aquí están las facturas de mi papá que está debiendo en Ocaña en tales y tales negocios, vaya averigüe. ¿Usted no es que averigua? Averigüe si estamos en deudas. ¡Y ustedes nos van a sacar veinte millones! Llévese la tienda, llévese la casa, todo lo que ustedes quieran, pero no hay plata" (CNMH, taller de memoria con mujeres Ocaña, 2016).

Aunque las personas relataron que este tipo de reclamos era posible, nunca estuvieron exentos de sentimientos de miedo y angustia frente al poder de las armas desplegado por los guerrilleros, el temor a ser relacionados con el grupo guerrillero por entablar una conversación e incluso por un posible combate con la fuerza pública mientras esto sucedía.

> "Con una multitudinaria marcha, el pueblo ocañero, sus autoridades e instituciones, rechazaron la ola de violencia que se registraba, en especial el delito del secuestro que hacia el mes de febrero había golpeado varias familias de la región de Ocaña. En la lista de personas retenidas por los grupos armados estaban Henry Alfonso Machado, alcalde de San Calixto; Hugo Solano, exalcalde de Convención y el comerciante abreguense radicado en Ocaña, Luis Felipe Trillos" (Academia de Historia de Ocaña, 2012).

Algunos sectores interpretaron esta escalada como una ruptura con los postulados iniciales de las guerrillas, parecía haberse impuesto el mero interés económico. Un habitante de San Calixto narró cómo se transformó su percepción del EPL por su marcado interés en las utilidades producidas por la práctica del secuestro, un momento que fue a su vez referido por una mujer de La Gabarra como aquel en que "las guerrillas se crecieron en billete"[151]. Así lo narró el habitante de San Calixto:

> En ese tiempo tenían un secuestrado aquí que le quitaron ochenta millones de pesos (...) ahí estaba él con toda la guerra, con todo lo que tenían ellos, toda la escuadra. Y el día ese tenían cuatro estopas[152] así de plata, tomando cerveza y tenían las cuatro estopas de plata que les había entrado de los secuestrados y me recuerdo

151 El pueblo Barí identificó la existencia de dos caletas de la guerrilla en su territorio ancestral. La primera en 1994, cerca de la comunidad Bridicayra, que contenía armas. La segunda presuntamente perteneciente al ELN fue identificada en 1998 en la comunidad Caaxbaringcayra y contenía armas, víveres y dinero (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017).

152 Costales

> tanto que el día ese yo lamenté, lamenté mucho. Yo quería participar en la organización de la EPL porque me ha gustado desde mucho tiempo, tal vez desde que inició, pero con eso que yo miré, yo me cogió tanto fastidio, que yo miré la crueldad que tiene el mando[153]. Miré ese día que una señora..., su esposo que estaba en el hospital estaba en una situación muy difícil, muy crítica, estaba pa' morirse; ella estuvo aquí en la alcaldía pidiendo algo para llevarlo (...) y siguió casa por casa y por la calle recogiendo a que le dieran algo. Nosotros le dijimos a la señora: vaya dígale al mando este que le dé algo. Nosotros pensábamos que aunque fuera veinte mil pesos, en ese tiempo veinte mil pesos era plata. ¿Y sabe qué les dijo?: señor, que yo vengo con el papel, le mostró el papel [certificado médico] (...), le mostró todo y le respondió: no tengo ni cinco centavos para darle a usted, señora, le dijo. Eso a mí me desagradó tanto y nos desagradó tanto a los que estábamos mirando que nosotros repudiamos lo que es la organización esa (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

Participantes de los talleres colectivos recordaron a alcaldes, concejales y personeros secuestrados y/o asesinados mientras ejercían sus funciones o se postulaban a un cargo de elección popular. De acuerdo con la base de datos del proyecto *Hacer la guerra y matar la política* (CNMH, 2014), entre 1998 y 2000 las guerrillas llevaron a cabo 23 acciones violentas[154] contra candidatos, alcaldes, concejales y exalcaldes de la región del Catatumbo. El secuestro fue la acción más frecuente y el ELN el principal responsable.

Al respecto, es importante destacar que el ELN había tenido una posición abstencionista desde sus orígenes -un "signo de la identidad de aquel grupo guerrillero", afirma Aguilera (2006)- que, no obstante, sufrió algunas

153 Comandante guerrillero

154 Incluye secuestro, homicidio y amenaza

transformaciones, en particular, con los procesos de apertura democrática que arrancaron a mediados de la década de los ochenta y que se expusieron en el capítulo 2. De tal modo que se abrogó la responsabilidad de actuar como "veedor" de la dinámica democrática local y del funcionamiento de las administraciones municipales, haciendo "juicios políticos" a alcaldes, funcionarios, concejales y líderes, al juzgarlos por prácticas que consideraban un detrimento a los intereses de la ciudadanía, así como por presuntos manejos corruptos de recursos y funciones en el ejercicio de su cargo.

Estos juicios consistían en el secuestro del dirigente o líder y, en algunos casos, su asesinato, práctica que se extendió por toda la región del Catatumbo:

> Era una presencia muy fuerte [del ELN], un enjuiciamiento, de tratar de cuestionar, el tema de la corrupción, de los malos manejos, el tema del abandono, del Estado. A nosotros nos llamaba mucho la atención que muchas de esas cosas que se cuestionaban, luego terminaban en arreglos económicos con el ELN (...) Entonces los cuestionamientos a su labor [de la persona secuestrada] terminan con el acuerdo de pago. No sé si eso sería una especie de sanción que el ELN imponía, es posible. Pero por lo menos la lectura de la gente era que el tema llegaba hasta cuando pagaba. Pero era muy fuerte el cuestionamiento. Era muy fuerte. A los alcaldes de Ocaña, era muy fuerte (CNMH, hombre adulto, defensor de DD.HH., entrevista 42, Cúcuta, 2017).

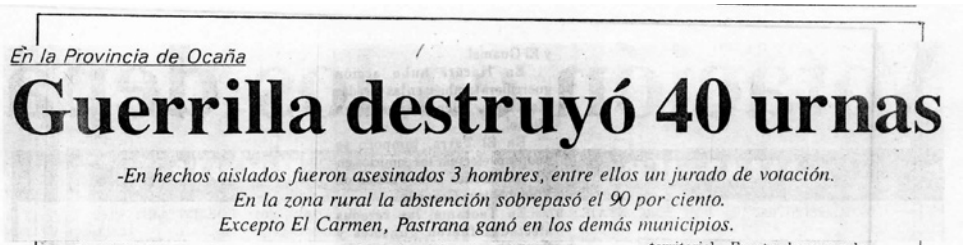
Una de las formas más contundentes de injerencia del ELN en el juego democrático local fue el sabotaje a las elecciones. En Convención relataron que en los comicios de 1998 el ELN "secuestró un poco de docentes que eran jurados de votación y quemaron las votaciones" (CNMH, taller de memoria, Convención, 2017).

Este tipo de prácticas se focalizaron en las áreas rurales; si bien en los cascos urbanos no se interrumpieron completamente las elecciones, en veredas y poblados más alejados las guerrillas llevaron a cabo un sinnúmero de prácticas de intimidación entre la población antes o durante las jornadas electorales. Como fue narrado por un habitante de una vereda de Teorama:

> Recuerdo mucho que en tiempos de elecciones, yo estaba pequeño [pero] ya más o menos tenía uso de razón, el día anterior de las votaciones en la noche llegaban dos, tres personas, en esa fecha se identificaban como guerrilleros del ELN y le recogían las cédulas a mis papás, que eran las personas habilitadas para votar. O sea, no permitían que fueran a ejercer el derecho al voto (CNMH, entrevista, hombre adulto, Ocaña, 2016).

La prensa local hizo eco de este tipo de hechos. En las elecciones legislativas del 13 de marzo de 1994, el periódico La Opinión reseñó hechos protagonizados por las guerrillas en San Calixto, Hacarí y El Tarra, que tenían como propósito impedir las votaciones. La nota de prensa habla de 96 votos quemados en San Calixto y de que "guerrilleros se llevaron la documentación electoral". En el corregimiento San José de El Tarra, en Hacarí, la CGSB quemó 50 sufragios y en una vereda de El Carmen incautó y quemó una urna (La Opinión, 1994, 15 de marzo).

Durante las elecciones presidenciales de mayo de 1994: en distintas veredas y poblados alejados de los cascos urbanos de los municipios de San Calixto, El Carmen, El Tarra, Teorama, Convención y La Playa no se pudieron llevar a cabo las elecciones como consecuencia del accionar de las guerrillas (La Opinión, 1994, 31 de mayo).



En la Provincia de Ocaña

Guerrilla destruyó 40 urnas

-En hechos aislados fueron asesinados 3 hombres, entre ellos un jurado de votación.
En la zona rural la abstención sobrepasó el 90 por ciento.
Excepto El Carmen, Pastrana ganó en los demás municipios.

Titular de periódico La Opinión, 31 de mayo de 1994. Fuente: Archivo de la Asociación Minga.

Actos de este tipo tuvieron un impacto definitivo en comunidades y, en algunos casos, en la política nacional. Los tres casos de secuestro descritos a continuación son apenas una muestra de esta práctica.

En octubre de 1988, el pastor evangélico Bruce Olson, quien vivía con los Barí desde hacía tres décadas y con un papel importante en las dinámicas organizativas de este pueblo, fue secuestrado por el ELN como "prisionero político". Para los Barí que habitaban la zona de Río de Oro en La Gabarra, este fue su contacto con las guerrillas. Olson fue condenado a muerte a principios de julio de 1989, argumentando su injerencia en el exterminio del Pueblo Barí (Revista Semana, 1989, 7 de agosto), sin embargo, fue liberado el 19 de julio, en gran medida por las acciones de protesta de los Barí. Su secuestro marcó de forma definitiva la desconfianza entre este pueblo indígena en las guerrillas.

El 26 de enero de 1992, el EPL secuestró al exministro y exparlamentario Argelino Durán Quintero en Ocaña quien, como lo narraron habitantes de San Calixto, pasó días retenido en una vereda de este municipio. Murió en marzo de 1992 en cautiverio, sufrió un ataque cardiaco producido, según participantes del taller de memoria, por las extensas caminatas a las que fue sometido. Este hecho provocó la ruptura de los diálogos de paz entre el Gobierno de César Gaviria y representantes de la CGSB, que se llevaban a cabo en Tlaxcala, México[155].

155 Para un recuento de la vida de Durán y el contexto político en el cual se dio su cautiverio y muerte, ver CNMH, 2014.

En Tibú, el ELN y el EPL secuestraron en dos oportunidades al obispo de la diócesis, monseñor José de Jesús Quintero Díaz, el 24 de noviembre de 1997 y el 15 de agosto de 1999. Al secuestro del obispo le siguieron, tres días después, el del alcalde saliente de Tibú, Humberto Gómez Rangel, y el del alcalde recién electo, Raúl Centeno Porras, el 1 de diciembre.

En el comunicado emitido por el ELN con ocasión del secuestro del obispo, se aduce a la supuesta permisividad del sacerdote ante las violaciones de derechos humanos que ocurrían en la región, así como su presunto apoyo a los planes contrainsurgentes del Estado. Además, el ELN buscaba que organismos internacionales hicieran presencia en la región para "evitar nuevas arbitrariedades y masacres", así:

> La retención de Monseñor Quintero Díaz, obedece a su posición de encubrir y apoyar el Plan contrainsurgente en la región y a la vez abrir una ventana de información para dar a conocer la impunidad que hay e informar que hay un Plan para detener y asesinar obreros y Dirigentes Populares en Tibú denominado "Diciembre Negro" (Archivo de la diócesis de Tibú).

En un comunicado, los sacerdotes de la diócesis de Tibú repudiaron el hecho y pidieron por el respeto a la vida del obispo y su liberación inmediata. Dos días después, junto a la administración municipal, la diócesis promovió una marcha de protesta en Tibú. El 9 de diciembre, ante una comisión integrada por el defensor del pueblo, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia y un representante de la OEA (Organización de Estados Americanos), fue liberado (Archivo de la diócesis de Tibú).

Monseñor Quintero fue secuestrado por segunda vez el 15 de agosto de 1999 por el EPL, por presuntamente no denunciar la entrada de paramilitares a Tibú. Liberado 33 días después, su secuestro motivó al papa Juan Pablo

II, máximo jerarca de la iglesia católica, a pronunciarse desde El Vaticano a favor de la "pacificación del país" (Caracol Radio, 1999, 18 de agosto)[156].

El secuestro no solo fue una fuente de financiación del EPL y el ELN, sino que en muchos casos apalancó las apuestas de estas guerrillas, en particular del ELN, como "veeduría" de la administración de recursos públicos y del accionar de líderes frente a las comunidades. Al tratarse de una práctica que constriñe las libertades básicas individuales y, por su efecto al desarticular proyectos individuales, familiares y colectivos, fue cuestionado y rechazado por la población, por medio de marchas, comunicados públicos y denuncias, se movilizaron con el fin de poner su voz en alto y exigir el fin de esta práctica atroz.

3.4.5. Detrás del tubo vino la guerrilla

Suele relacionarse la presencia del ELN en el Catatumbo con el ataque a la infraestructura petrolera, señalando que la economía del petróleo es el principal eje que articula su accionar en esta región. No obstante, se encontró que existen habitantes que sostienen que la entrada del ELN a su territorio no estuvo en un principio motivada por los réditos económicos, políticos y militares de la economía petrolera, si no que éste fue un interés que se enfatizó con el paso de los años, lo que fortaleció económica y militarmente a esta guerrilla.

Como lo expresa Aguilera (2006), fue entre la realización del I Congreso del ELN (1986) y el II (1989) que esta guerrilla definió como estrategia

156 Alias Manuel, responsable del secuestro del obispo, fue condenado a 300 meses de prisión en septiembre de 2010, por el secuestro extorsivo agravado, justamente por su responsabilidad en este hecho (El Espectador, 2010, 9 de septiembre).

de guerra el ataque a los principales ejes de la economía nacional, estableciendo como objetivo militar a la industria petrolera y a la infraestructura eléctrica y de transporte. En el caso del Catatumbo, esta estrategia recayó de manera particular sobre la infraestructura petrolera, uno de los ejes fundamentales de la economía del país[157].

La interacción del ELN con la explotación petrolera es de doble vía: por un lado, se convirtió en una sustanciosa fuente de recursos económicos (Aguilera, 2006), en particular por las extorsiones a compañías petroleras (boleteos)[158]; por el otro, le permitió la cimentación del proyecto por la soberanía y la defensa de los recursos mineros del país, que ha sido una de las principales banderas políticas del ELN. En particular, en diciembre de 1986, esta guerrilla lanzó su campaña "Despierta Colombia, nos están robando el petróleo", que buscó abordar desde lo político y lo militar la cuestión minero-energética en el país.

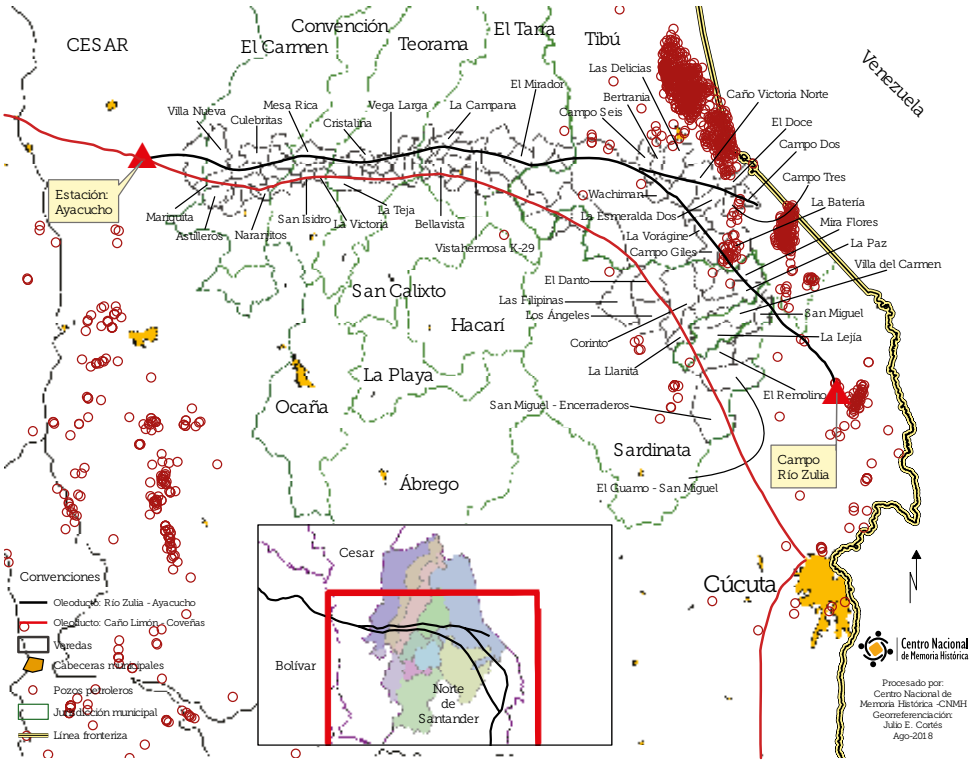
Al respecto, un artículo de la revista Semana destacó algunas de las exigencias que el ELN elaboró en el marco de un Foro Energético llevado

157 Desde inicios de los años setenta, Ecopetrol asumió la administración de los recursos petroleros de la región por medio del Distrito de Producción Norte (hoy Superintendencia de Operaciones Tibú), que tenía como base los campos de Tibú (Río Zulia, Carbonera La Silla, Campo Yuca, Petrólea, Sardinata, Tibú, Orú, Río de Oro – Puerto Barco) y los de Cicuco, en Bolívar. En 1986, entró en funcionamiento el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que transporta crudo desde los campos de explotación en Caño Limón (localizados en Arauca), hasta el terminal de Coveñas en el departamento de Sucre. Cuenta con 770 kilómetros de longitud y en el Catatumbo atraviesa los municipios de Sardinata, Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen (con una extensión de 130,5 kilómetros de longitud). Este se sumó al ya existente oleoducto Río Zulia-Ayacucho (en la actualidad propiedad de la empresa Petronorte), que tiene una extensión de 180 kilómetros y conecta el campo de Río Zulia (ubicado en el corregimiento Agua Clara, cerca de Cúcuta) con la estación Ayacucho, en el departamento de Cesar. Corre paralelo, en el territorio del Catatumbo, al Caño Limón-Coveñas, y fue el oleoducto utilizado para el transporte de crudo durante los años de la Concesión Barco.

158 Aguilera sostiene que esta se convirtió en la fuente más importante de recursos para el ELN (2006). Echandía coincide al afirmar que los ingresos provenientes de secuestros corresponden a la segunda fuente de financiación del ELN y las FARC durante la década de los noventa, a nivel nacional; los principales ingresos de la primera provienen de lo que "cobra al sector minero" y los de la segunda de la protección al negocio de la coca (Echandía, 1998).

a cabo en mayo de 1987 y que dirigió al Gobierno del presidente Barco, entre las que se encontraban la congelación del precio de la gasolina, el cobro de un impuesto "social" de un dólar por barril a las multinacionales y la exigencia de que asumieran el pago de la deuda externa del sector energético; todo ello manejado por una junta popular (Revista Semana, 1989, 24 de julio).

Mapa 14. Infraestructura petrolera en el Catatumbo

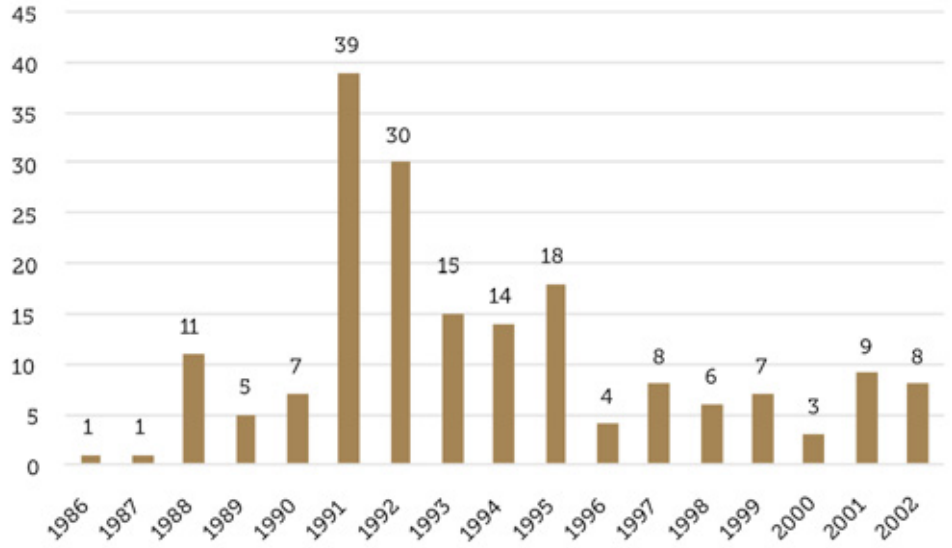


Fuente: CNMH, 2018.

El ELN fue el mayor responsable de los actos de sabotaje a la infraestructura energética instalada en el Catatumbo, acciones que no se direccionaron solo contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, sino que abarcaron toda la estructura petrolera existente en la región.

Entre 1986 y 2002, se presentaron 186 casos de sabotaje contra la infraestructura energética y, aunque fuera una estrategia trazada por el ELN, estos ataques no fueron perpetrados solo por esta guerrilla. Según datos del OMC, el ELN es responsable del 78 por ciento de los casos en este período, la Coordinadora Guerrilla Simón Bolívar del 8 por ciento, las FARC del 2 por ciento, las FARC y el ELN (acción conjunta) y una disidencia, del 1 por ciento, cada una, y el 10 por ciento restante corresponde a guerrillas sin identificar. Por mencionar un caso, en el campo Río de Oro-Puerto Barco, juntos, el ELN y las FARC, llevaron a cabo diferentes actos de sabotaje contra la infraestructura instalada allí, como fue relatado por un extrabajador petrolero (CNMH, entrevista, hombre exsindicalista, Bogotá, 2017).

Gráfico 6. Casos de sabotaje contra infraestructura energética en Catatumbo 1986-2002



Fuente: CNMH-OMC, fecha de corte 15 de noviembre de 2017.

Estos ataques se hicieron insostenibles para Ecopetrol. En 1992, la empresa cerró las actividades de refinación en Tibú, argumentando su baja rentabilidad y un contexto de constantes saboteos a la infraestructura petrolera ubicada allí, en particular por parte del ELN. Este último factor llevó además al cierre del campo Río de Oro-Puerto Barco, ubicado en zona rural de La Gabarra, a partir de 1999, actualmente se encuentra inactivo (CNMH, taller de memoria con sacerdotes, Tibú, 2016).

Los impactos medioambientales de las prácticas de sabotaje producidos por incendios, contaminación de fuentes hídricas (que abastecen los acueductos veredales o municipales), mortandad de peces, afectaciones a pastos y cultivos, así como sus efectos en la vida cotidiana de habitantes de la región, generaron que la escalada de atentados contra la infraestruc-

tura petrolera fuera entendida como dañina, produciendo sentimientos de distancia y rechazo frente a esta forma de accionar de las guerrillas:

> Otro problema que tenemos nosotros aquí es la cuestión del oleoducto y cada vez la guerrilla que le da la gana le hace un atentado al oleoducto y el crudo viene a caer sobre el río Tibú, donde se saca el agua para nosotros. Yo por lo menos he durado hasta 15 días sin una gota de agua, sin poder uno, se puede decir hasta sin bañarse. Aquí en el casco urbano de Tibú, porque allá es donde se saca el agua... hay gente por lo menos que tienen pozos para sacar el agua, pero ¿el que no los tiene? Sí es difícil, o sea, aquí hemos pasado situaciones bastante, bastante... (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

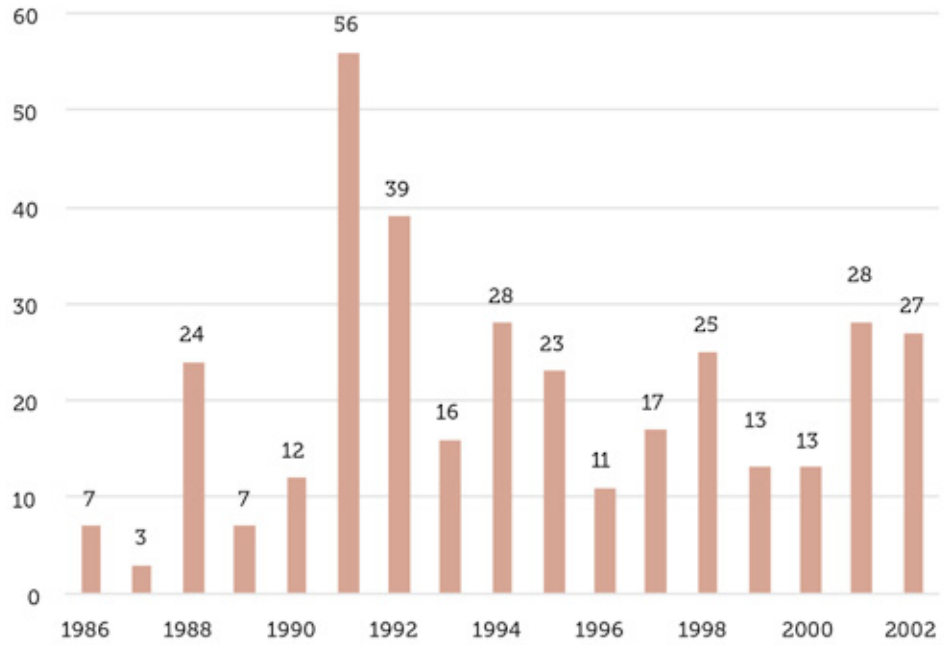
Un habitante de San Martín (Sardinata) narró de este modo su relación de proximidad con un comandante del ELN, con quien sostuvo un debate en torno a los ataques a la infraestructura eléctrica y energética y su postura sobre este tema:

> Yo por lo menos tuve una noche una controversia (...) con un comandante del ELN, me acuerdo tanto. Yo les decía a ellos: ¿por qué ustedes atacan la infraestructura petrolera, si eso son los recursos del Estado? Lo que crea divisas hacia el exterior en el país son los recursos naturales. La infraestructura eléctrica que es la que nos alumbra a nosotros aquí en la zona rural que somos marginados (...) y me responde: "¿Y a usted le parece muy cara esa bomba? (...) A los ladrones de cuello blanco no les hacen nada ¿Por qué dicen que ellos se pueden robar la plata? Porque son los ladrones de cuello blanco y dicen 'es que fue el doctor'. a ese no se le puede decir nada porque es el doctor. No, es la distribución de la riqueza que tiene que hacerse equitativa en Colombia. ¿Cómo es posible que 20 familias se lleven todos los beneficios del Estado y los campos estén abandonados?". Esas son políticas de ellos (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

Detalle de un mapa elaborado en un ejercicio de cartografía social que da cuenta de un atentado al *tubo* en la zona rural de El Carmen. Nótese la cercanía del evento con la quebrada Mariquita. Fotografía: Jaime Landínez para el CNMH, 2017.

Participantes de los ejercicios de memoria recordaron acciones de las guerrillas contra bienes civiles, en particular la voladura de torres de energía, así como la quema de carros (de servicio público), que afectaron de manera significativa su capacidad para generar ingresos, comunicarse con centros poblados como Ocaña o Cúcuta, todo lo que producía sentimientos de ansiedad e incertidumbre frente al accionar de las guerrillas. Una serie de prácticas recurrentes durante la década de los noventa (Gráfico 7), cuyo principal responsable, en el período 1986-2002, corresponde al ELN con un 69 por ciento, las FARC y la CGSB el 6 por ciento, cada una y, el EPL del 2 por ciento. El 13 por ciento es responsabilidad de una guerrilla no identificada y el 4 por ciento de otras guerrillas.

Gráfico 7. Casos de daño a bien civil en Catatumbo 1986-2002



Fuente: CNMH-OMC, fecha de corte 15 de noviembre de 2017[159].

Los ataques dirigidos de manera directa a afectar bienes civiles, así como los impactos producidos por los actos de sabotaje contra la infraestructura petrolera, generaron entre habitantes de la región un impacto negativo en la percepción sobre la presencia y accionar de las guerrillas, por lo desproporcionado de su accionar.

Algunas personas narraron su desconcierto ante la dificultad para comprender que actos como la voladura de una torre de energía, el derrame de crudo en una quebrada veredal o la quema de un bus de transporte

159 Incluye acción bélica, ataque a instituciones, ataque a organizaciones, ataque a propiedad, atentado, quema de vehículos y sabotaje.

público, no signifiquen, en sí mismos, un ataque contra sus condiciones básicas de subsistencia, ya de por sí precarias. Como se mostrará en el capítulo 6, este tipo de actos continuó y, en algunos casos, se profundizó después de la salida de los paramilitares de la región, con consecuencias nefastas para los civiles.

3.5. Cargando el estigma

Uno de los rasgos más significativos de las conversaciones con las y los catatumberos acerca de la presencia guerrillera en su territorio, tiene que ver con su percepción, tanto en personas jóvenes como adultas, de que habitan una "zona roja". Una y otra vez emerge en sus relatos la referencia a sentimientos de extrañeza, indignación y rabia al reconocer que recae sobre ellos y ellas un estigma por haber nacido o habitar la región del Catatumbo.

Es posible rastrear tal comprensión de esta región como "zona roja" o "zona de orden público" en el efecto de las campañas y políticas emprendidas por la fuerza pública para eliminar a los grupos guerrilleros que han hecho presencia en el Catatumbo desde finales de los años 70. Como ya se dijo, para muchas personas de la región, en particular aquellas que habitaban las zonas más alejadas de los cascos urbanos, la presencia de la fuerza pública era esporádica o inexistente.

Ello fue cambiando conforme las guerrillas se expandieron territorialmente y alcanzaron cierto poder político, militar y económico en la región. Detrás de las primeras guerrillas, habitantes del Catatumbo recuerdan que vieron llegar al Ejército, en consonancia con una política de seguridad nacional que se concentró en eliminar al "enemigo inter-

no": los grupos guerrilleros. Esta comprensión del "enemigo interno" estructuró el Estatuto de Seguridad Nacional, el principal instrumento de la política de seguridad del presidente Turbay Ayala, que entró en vigor en 1978 hasta el cambio de Gobierno en 1982. Se trataba de "un cuerpo doctrinario y normativo que instrumentalizó la doctrina de Seguridad Nacional y con ella el concepto del enemigo interno, entendido como cualquier adversario político que opera dentro de las fronteras de la nación" (CNMH-GMH, 2013a, páginas 132-133).

En tal contexto, se comprendió que la eliminación de las guerrillas pasaría también por considerar a la población civil como presuntamente cercana o afín. Para citar un caso, el Reglamento de combate de contraguerrilla – EJC-3-10 del Comando General de las Fuerzas Militares de 1987, dividía las "fuerzas subversivas" en dos componentes: "población civil insurgente y grupo armado". En el caso de la población civil, esta fue definida como "la masa heterogénea conformada por elementos provenientes de diferentes sectores y unificada a través de un proceso de actividad sicológica" (CNMH-GMH, 2013a, página 140).

Este tipo de presupuestos sobre el que se basó el Estatuto de Seguridad Nacional guiaron la política antisubversiva en el país durante años, incluso después de la promulgación de la Constitución Política de 1991. Así, los Relatores Especiales de Tortura y de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dieron a conocer, en su informe conjunto de 1994, que a mediados de la década de los noventa la doctrina de Seguridad Nacional continuaba siendo aplicada en aquellas consideradas "zonas rojas", como el Catatumbo:

> En esas zonas [departamentos de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cesar, Bolívar y Meta], las fuerzas armadas continúan aplicando, al parecer, una estrategia antisubversiva basada en el

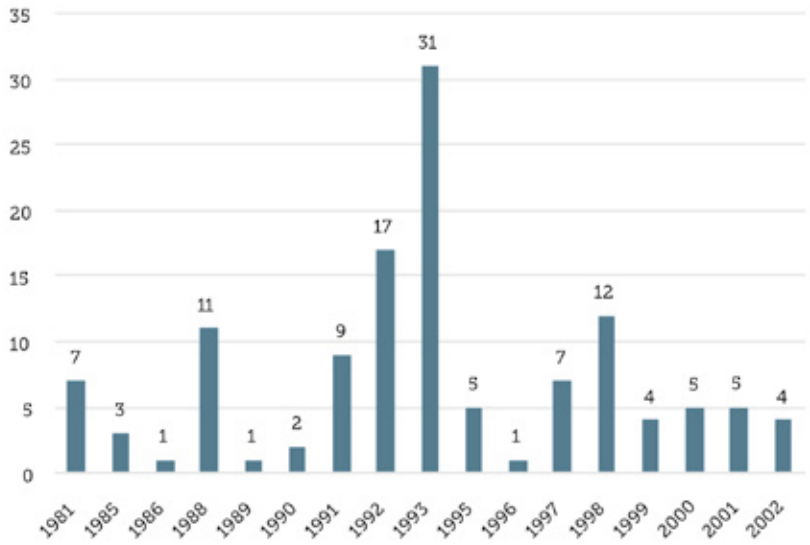
> concepto de la "seguridad nacional", en virtud del cual toda persona de la que se sabe o se sospecha que está vinculada a los guerrilleros es considerada como un enemigo interno. Según la información recibida, en las zonas calificadas de "zonas rojas"(...) donde actúan los insurgentes y tienen lugar enfrentamientos armados, las fuerzas de seguridad consideran que prácticamente todos los civiles son colaboradores de la subversión, alegación que fue denegada por los miembros de las fuerzas armadas con que se entrevistaron los Relatores Especiales (...) La categoría de "enemigo interno", aplicada a toda persona de la que se considera que apoya a la guerrilla de una u otra forma (incluso si los insurgentes utilizan la fuerza para obtener, por ejemplo, alimentos o dinero de los civiles), se ha hecho extensiva, al parecer, a todos los que expresan insatisfacción ante la situación política, económica y social, sobre todo en las zonas rurales (Oacnudh, 1994, Párrafos 24 y 25).

Como lo reconocieron las personas con las que se conversó en la región, la mencionada lucha antisubversiva expandió su marco de acción para incluir no solo a los grupos armados, sino a personas, comunidades y procesos de la región que fueron considerados afines o cercanos a la expansión política y militar de las guerrillas.

En paralelo a la implantación de una micropolítica de sospecha contra todo aquello que podría ser considerado cercano a la fuerza pública por parte de las guerrillas y, por tanto, poner en peligro sus intereses de expansión y hegemonía, la fuerza pública construyó una noción de la lucha contrainsurgente según la cual los pobladores de la región eran, por el hecho de habitar el Catatumbo, cercanos o afines a las guerrillas. Esto moldeó un poderoso estigma que aún hoy en día recae sobre catatumberos y catatumberas y que ha justificado los más atroces actos de violencia. Ser del Catatumbo, en este contexto, significó (y en algunos casos continúa significando), una marca negativa, un estigma.

Habitantes de la región coinciden en que es a partir de finales de la década de los ochenta y, más aún, durante la década de los noventa, que se presentó una serie de desmanes por parte de miembros de la fuerza pública, en particular, en las zonas rurales del Catatumbo. Fueron mencionados señalamientos, requisas constantes, allanamientos ilegales, destrucción de bienes, detenciones ilegales, tortura e incluso muerte y desaparición, en algunos casos tomando la forma de ejecuciones extrajudiciales, es decir, el asesinato de civiles para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combates. Esta, una práctica atroz que salió a la luz pública en 2006 ha sucedido en el Catatumbo desde los ochenta, ciertamente con diferencias en su magnitud.

Gráfico 8. Víctimas de violencia letal perpetrada por agentes de Estado 1981-2002



Fuente: CNMH-OMC, fecha de corte 29 de mayo de 2018[160].

160 No se presentan los años en los cuales no se reporta información en las fuentes consultadas, lo que no significa que no se hubieran cometido actos de violencia letal.

En las veredas más apartadas, sus habitantes fueron más vulnerables a los desmanes por parte de algunos agentes de Estado. Una habitante de una vereda de Campo Dos (Tibú) relató de este modo las torturas de las que fue objeto su esposo a finales de los años ochenta:

> En ese entonces ya empezaron los conflictos ¿no? que ya empezó la persecución del Ejército. Cada vez que entraba a la vereda preguntando por la guerrilla torturaba a la gente, a los ancianitos, no tenían respeto ni para los ancianos ni para nadie, eso trataban a todo el mundo por igual. Por ahí en el año 88 más o menos (...) de vuelta a la vereda [desde Cúcuta], había entrado el Ejército. Nosotros entramos, nosotros no sabíamos que el Ejército había entrado esa noche y estaban por ahí metidos en la montaña. Mi marido se fue a donde el papá que era el que sabía inyectar, pero con la misma ropita que salió el día antes, con esa misma ropa se la puso y se fue a que el papá lo inyectara, en la casa del papá. Cuando llegó, el hermano le dijo: ayúdeme a sacarle una rueda a un *potecito*[161], para echarle aceite a una cadena. Cuando resulta que estando haciendo ese oficio ¡tran! llegó el Ejército y de una vez (...) se refirió a él tratándolo de guerrillero, le dijo: ¿qué hace guerrillero, está haciendo bombas? Imagínese, era una lata y metiéndole aceite y una cadena, que se llama lo que le ponen a esas espadas de motosierra para aserrar...mi esposo no le dijo nada, porque a esas personas como no se les puede ni hablar (...) y a él lo sacaron de la casa y lo metieron detrás de una mata de piñuela que había grandota y la mamá no se dio de cuenta... las torturas que le hicieron a él. Bueno, eso le dieron culatazos por acá, con esa culata del fusil y él tenía una úlcera gástrica y con eso casi lo matan. Se lo llevaron y como eso fue en la mañana, como a las ocho y como a las cinco de la tarde, algo así, lo dejaron ir de una. A él les tocó ponerlo por allá en una trocha y a esa hora un soldado más buena persona le dijo a él: mire, váyase por esta trocha, dizque él pensaba que cuando él voltiara la espalda de pronto lo iban a matar. El soldado le dijo:

161 Recipiente pequeño

> mire, váyase (...) por esta trocha porque atrás viene mi teniente y ese sí no lo deja ir y hasta lo mata, le dijo el soldado de buena gente (...) y regresó a la casa como a las siete de la noche. Ese hombre golpiado, vuelto nada, entonces dijo: no, vámonos ¿qué vamos a hacer aquí? mire cómo me volvieron y eso. Entonces nosotros nos fuimos, nos desplazamos, ese fue el primer desplazamiento, nos fuimos por allá para el lado de Cúcuta (CNMH, entrevista, mujer adulta, Tibú, 2016).

Uno de los primeros casos recordados de violencia ejercida por miembros de fuerza pública contra habitantes de la región, que es reiterado en la zona del alto Catatumbo, es el de la masacre de siete miembros de la familia Ascanio en la vereda Mesa Rica, en el municipio La Playa, el 8 de marzo de 1981.

Un familiar de las víctimas relato que más de 200 personas participaban del velorio de dos miembros de la familia Ascanio, que el día anterior habían muerto como consecuencia de rencillas personales que se produjeron en un baile. Es en medio de este acto que hacen presencia uniformados pertenecientes a la compañía Pantera, base militar de comunicaciones perteneciente al Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander con sede en Ocaña, comandados por el cabo Jaime Alfonso Peregrino (Movice, 2008).

Se cuenta que los soldados solicitaron los documentos de identidad de las personas que estaban siendo veladas y requisaron a sus familiares, ante lo cual un miembro de la familia solicitó respeto hacia el espacio y el dolor de quienes participaban de este ritual: "él hablándole por las buenas, que mire, que estamos en una *novena*, más bien acompáñenos, esto y esto. ¿Es que estás *arrechito*[162], viejo no sé qué? [respondió el cabo] (...) y él todavía le hablaba: hombre no se porte así con nosotros, mire que estamos en una novena". De manera inesperada, el cabo dio orden de abrir fuego contra las personas que participaban del velorio, provocando la muerte de siete miembros de la

162 Bravo, disgustado, "alzado"

familia Ascanio, entre ellas de los adultos mayores Antonio y Teodoro Ascanio, hijos, hija y sobrinos suyos. Uno de sus familiares asegura que la aparente causa de este hecho es que a las víctimas los tildan como guerrilleros del M19 (CNMH, entrevista, hombre adulto, alto Catatumbo, 2016).[163]

Desde comienzos de 1993, se asienta en la región la Brigada Móvil No. 2 del Ejército (con puesto de mando en el Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander), con influencia en los municipios de Ocaña, Hacarí, El Carmen, San Calixto, Teorama, El Tarra, Tibú, Ábrego y Cáchira, estructura militar que jugó un papel definitivo en la lucha antisubversiva en la región. En el caso de Tibú, hacían presencia el Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 General Hermógenes Maza (y su Comando Antiextorsión y Secuestro- CAES), adscrito a la V Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga y el Batallón de contraguerrillas No. 46, Héroes de Saraguro. Este último jugó un papel definitivo en la entrada y posterior asentamiento del Bloque Catatumbo de las AUC en Tibú.

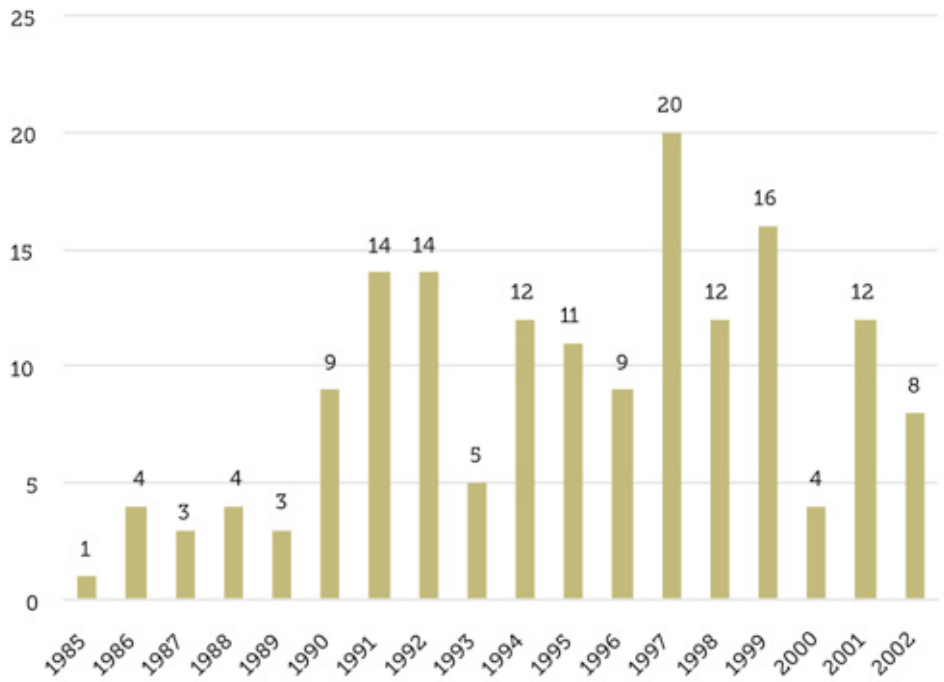
Ello reconfiguró la dinámica de la confrontación armada en la región. Entrada la década de los noventa, cobró relevancia la ejecución de acciones bélicas contra la fuerza pública como iniciativa de las guerrillas, que se sostuvo hasta 1999, aunque sin alcanzar las dimensiones que tuvo entre 2009 y 2015. En particular, estas se concentraron en la ejecución de hostigamientos por parte del ELN, las FARC y el EPL.

Este nuevo escenario facilitó la comisión de una serie de violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública. Muchas de las denuncias de habitantes de la región dan cuenta de abusos y constantes vejaciones presuntamente ejecutadas por soldados adscritos a la Brigada Móvil No. 2.

163 La familia Ascanio fue perseguida por algunos miembros de la fuerza pública antes y después de este hecho (Archivo de la Asociación Minga; Movice, 2008, páginas 72-81). La persona de la familia que fue entrevistada para este informe fue torturado por miembros del Ejército a finales de los noventa, en apariencia, por su perfil de líder comunal y por su trabajo con la ANUC.

En el "Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el municipio de Tibú, Norte de Santander", el personero municipal de la época y presidente del Comité Municipal de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, alertaba que "la situación que se presenta en el Municipio a raíz de las acciones militares contra los grupos insurgentes no corresponden al marco legal de un Estado de derecho; presentándose una situación generalizada de terror en la población frente a las actuaciones de la fuerza pública" (Archivo de la Asociación Minga).

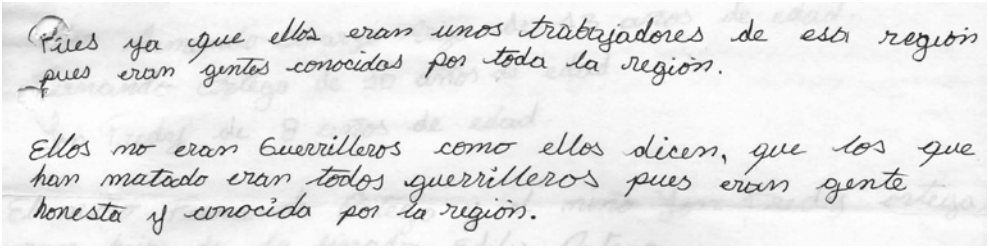
Gráfico 9. Acciones bélicas de las guerrillas contra la fuerza pública 1985-2002



Fuente: CNMH-OMC, fecha de corte 15 de noviembre de 2017.

En el documento, el personero destacaba una multiplicidad de casos denunciados por abusos de soldados acantonados en el municipio, entre otros: detenciones ilegales que no contaban con orden de captura o no fueron realizadas en condiciones de flagrancia; violación y/o acoso sexual a menores por parte de soldados de la Brigada Móvil No. 2; allanamientos ilegales y utilización de residencias de civiles para acampar y cadáveres de campesinos del municipio presentados como guerrilleros muertos en combate.

Estas acciones se enmarcaban en la lectura de miembros de la fuerza pública, según la cual la población civil era "auxiliadora de la subversión", como lo expone el personero: "las fuerzas militares sindican reiteradamente a toda la población de ser guerrilleros o auxiliadores de la subversión, motivo por el cual haber nacido en Tibú o residir en el municipio hace presumir automáticamente por parte de los militares la comisión de un delito" (Archivo de la Asociación Minga).


Pues ya que ellos eran unos trabajadores de esta región pues eran gentes conocidas por toda la región.

Ellos no eran Guerrilleros como ellos dicen, que los que han matado eran todos guerrilleros pues eran gente honesta y conocida por la región.

Fragmento de una carta dirigida por una mujer de La Gabarra denunciando el asesinato de tres personas en Puerto Barranca, presuntamente por parte de soldados de la Brigada Móvil No. 2, con fecha del 14 de noviembre de 1993. Fuente: Archivo de la Asociación Minga.

En San Calixto se presentaron hechos similares. En un comunicado a la opinión pública, la alcaldía y la administración municipal y organizaciones sociales de la región denunciaron "múltiples atropellos" presuntamente ejecutados por miembros de la Brigada Móvil No. 2. Un joven del

municipio, ante acusaciones de ser guerrillero, se vio obligado a desplazarse de la zona:

> De igual forma, una patrulla de la Brigada Móvil No. 2, detuvo al estudiante y deportista [nombre] a quien acusaron de ser guerrillero, la víctima puso la denuncia ante las autoridades legales y cuando se hicieron presentes en la base militar el estudiante denunció la amenaza de muerte, pues los militares le habían dicho "este H.P. está bueno para llenarle la cara a tiros (...). También denunciamos que varios efectivos de la BM No. 2 realizan patrullajes en el casco urbano, en avanzado estado de embriaguez constituyendo esta conducta un peligro inminente para toda la población (Archivo de la Asociación Minga).

Sobre docentes y miembros de la iglesia católica también recayó esta presunción de afinidad con las guerrillas. En el caso de la diócesis de Tibú, sacerdotes que participaron del taller de reconstrucción de memoria histórica recordaron que en el año 1991 miembros del Ejército llevaron a cabo un acto de amedrentamiento y amenaza al trabajo comunitario del obispo y, en general, de la iglesia:

> Es que aquí el centro del conflicto es el territorio. Y en el territorio quien ha permanecido es el campesino. La guerrilla se escuda en el campesino; el ejército se escuda del campesino y el uno golpea al campesino y el otro golpea al campesino cuando toca que golpear. El uno lo utiliza, el otro lo suelta, el otro llega, lo golpea, porque le ayuda, por todo. Hasta porque le da los hijos para la guerra. Entonces ese es el conflicto. Aquí por ejemplo a los tres campesinos que mataron en La Gabarra y se los dieron aquí a Monseñor Luis Madrid Merlano, que se los botaron ahí en la entrada de la curia. Eso no fue que llegaron y se los botaron ahí. Dijeron: "mire, ahí están los guerrilleros que usted defiende". Eso fue en el año 1991. Y aquí se perseguía a los campesinos. Aquí desaparecieron campesinos el ejército (CNMH, taller de memoria con sacerdotes, Tibú, 2016).

En el caso de Campo Dos, el sacerdote de este corregimiento fue recordado por enfrentarse al Ejército y denunciar abusos que soldados cometían contra las y los pobladores:

> En esa época [mediados de los noventa] también fue una gran búsqueda, estaba en auge la búsqueda del cura Pérez y en alguna oportunidad empapelaron la casa cural los miembros del Ejército diciendo: se busca. Y era el cura [Manuel] Pérez al que se buscaba ¿no? Como hecho de resistencia en ese momento yo creo que estaba el párroco, que era el que estaba pendiente de cuanto preso cogían, de cuanta persona cogía el Ejército (...) él siempre estaba enfrentándose con el Ejército por los abusos que cometían con la gente. Mucha gente de la La Soledad, de Villanueva, fueron cogidos presos y fueron torturados. Entonces él vivía pendiente de darse cuenta a quién tenían preso para irle a decir: vea, yo sé que ustedes tienen aquí preso a fulano de tal y si lo torturan yo los declaro ante los derechos humanos (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

La labor docente no fue vista con sospecha solo por parte de las guerrillas. Dado que en muchas oportunidades en las escuelas se hacían reuniones de las guerrillas y algunas veces incluso pasaban la noche, profesores y profesoras de la región fueron considerados portadores de información valiosa no solo sobre las guerrillas, sino sobre las comunidades y sus dinámicas de interacción con estas. Como lo ilustró un profesor que fue docente de la escuela rural de la vereda La Pita (del corregimiento Las Mercedes, en Sardinata):

> Las comunidades me buscaban para liderar proyectos y eso ha sido mi mayor orgullo, trabajar con las comunidades menos favorecidas. Y eso me llevó a inconvenientes precisamente inclusive con el mismo Ejército. Cuando me desplazaba hasta La Pita en las madrugadas me maltrataban verbalmente, me faltaban [el respeto], que yo era un *hache pé*, groseramente, porque yo sabía dónde estaba la guerrilla y no les quería dar información. Supuestamente yo

> tenía información de que la guerrilla la pasaba ahí en La Pita. Yo le decía: señor, pero si tienen información, entonces ¿por qué no van y lo buscan? Ese es el trabajo de ustedes. Mi trabajo como profesor es enseñar a los chicos allá, yo me encierro, porque por ahí pasaba gente armada, en las cuatro paredes de la escuela a enseñar con mis estudiantes, yo no sé quién pase. Yo no le pregunto si usted es de la izquierda o es de la derecha, a mí no me interesa eso. Que si el papá es *guerrillo*, que la mamá es *guerrilla,* tampoco ese es mi problema (...). Sí, que yo era un *hache pé* que no les decía nada, por eso la guerrilla hacía lo que hacía en las comunidades (...) y no fue una vez, más de una vez agarraban a veces hasta estudiantes que pasaban, la gente de civil para allá también la misma historia, a veces los maltrataban para que les dieran información y la misma respuesta les daban [los civiles] porque era la verdad (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

El estigma que recae sobre el Catatumbo al ser una región considerada desde los años 80 como "zona roja", se extiende a sus habitantes, quienes reconocen que en múltiples espacios y oportunidades han tenido que llevar como una marca el pertenecer a esta región. Ello es más notorio cuando se desplazan a municipios como Ocaña y Cúcuta, donde nombrarse catatumbero puede llegar a producir extrañeza, e incluso miedo, entre los habitantes de estos centros urbanos.

Este proceso se ha configurado con el tiempo y se ha justificado con múltiples desmanes de parte de algunos miembros del Ejército y de la Policía, sobre todo en el marco de la lucha antisubversiva, así como la ejecución de formas de violencia que, bajo el pretexto de eliminar la presencia guerrillera, ha dejado profundas cicatrices en la vida individual y comunitaria de las y los catatumberos. El estigma que ha recaído sobre la región ha producido efectos devastadores.

4.

PARAMILITARISMO: VIOLENCIA SIN PRECEDENTES

Como se mencionó en la introducción, el acopio de información en la región se surtió a través de talleres colectivos de memoria y de entrevistas. En particular, en los talleres territoriales, las personas que participaron dedicaron la mayor parte del tiempo a relatar los hechos que vivieron en el marco de la ocupación paramilitar del Catatumbo.

Esto fue así dado que, si bien habían convivido con la presencia guerrillera durante décadas, fue a partir de 1999 cuando sus vidas y territorios se transformaron de manera drástica y comenzaron a enfrentar un tipo de violencia sin precedentes. Así, sus relatos se fueron llenando de descripciones detalladas y desgarradoras de la violencia y del dolor que debieron soportar durante estos años.

En los ejercicios colectivos de memoria se pudo conocer lo ocurrido durante la violencia paramilitar en el bajo Catatumbo, una violencia más difundida por medios de comunicación y más documentada por diversas instituciones en Colombia, dado el impacto que las primeras masacres tuvieron por el número de víctimas mortales y por sus repercusiones a nivel regional y nacional. Además, el equipo de investigación se propuso avanzar en la comprensión de la presencia y accionar de los paramilitares en el medio y alto Catatumbo, tema poco documentado y menos conocido, incluso para muchos habitantes de la región, en particular para aquellos de la zona baja.

Así mismo, se indagó por las diferencias en el accionar de las distintas estructuras paramilitares presentes en la región, los momentos de llegada y tiempos de permanencia, los tipos de violencias, la magnitud del control social o el despliegue territorial que alcanzaron.

Con este apartado se quiere dejar escuchar la voz de las víctimas en el marco de la violencia paramilitar y destacar los hechos que fueron resaltados por ellas, aquellos que se inscriben con más fuerza en su memoria porque causaron el mayor impacto.

Pero antes de dar paso a la voz de las víctimas, se ofrecerán algunos elementos de contexto que permitan comprender de manera integral el paramilitarismo en la región. Por ello, este capítulo parte de breves aportes sobre los antecedentes de la conformación del paramilitarismo en el país, para luego -con base en información de Justicia y Paz- enmarcar los contextos de conformación, algunas formas de financiación y apoyos recibidos por las tres estructuras paramilitares que hicieron presencia en la región: el Frente Héctor Julio Peinado Becerra, el Frente Resistencia Motilona y el Bloque Catatumbo. Luego se expone, a partir de las voces y sentires de las víctimas, la forma en que vivieron la irrupción paramilitar en cada municipio y la instauración del control social y territorial, al

final se destacarán aquellas formas encontradas por la comunidad para afrontar y resistir la violencia y el dolor.

4.1. Antecedentes

Como se vio en el capítulo 2, a finales de los años ochenta y durante la década de los noventa en Ocaña y otros municipios del Catatumbo se materializó la violencia en forma de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y exilio, tanto de campesinos y habitantes urbanos de la región como de líderes sociales y de sectores políticos de oposición, personas que fueron catalogadas como colaboradores, afines o miembros de las guerrillas.

Al recordar estos acontecimientos, las y los catatumberos referenciaron como responsables a "escuadrones de la muerte", grupos que adoptaron distintos nombres como SAO, Mano Negra, MAS o Masetos, Rambo, Rampuches o CRMC y que, presumiblemente, contaron con la anuencia y participación de algunos miembros de sectores oficiales.

Además, operaba la lógica del enemigo interno. En este contexto se reglamentó, a través de la expedición de la Ley 48 de 1968, la conformación de grupos de autodefensas y se autorizó la entrega de armas de uso privativo de la fuerza pública a particulares (CCJ-CNMH, 2013).

El Ejército adoptó disposiciones reglamentarias que incorporaron, por ejemplo, la creación de juntas de autodefensa, adoptó el reglamento de combate de contraguerrillas-EJC 3-10, que aprobado por Disposición No. 005 de 9 de abril de 1969, del Comando General de las Fuerzas Militares, contemplaba "objetivos de las operaciones de organización de la población civil: a) organizar en forma militar a la población civil para

que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate" (CNMH, 2018, página 207).

La ley que permitía la creación de las juntas de autodefensas fue modificada en 1989, cuando su aplicación fue suspendida ante las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos (CCJ-CNMH, 2013), luego declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia. Pero como lo señaló la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: "no se previó su desmantelamiento efectivo ni se hizo un deslinde claro con el Estado" (Oacnudh 1998, párrafo 87), por el contrario, las autodefensas no solo siguieron operando, sino que se fortalecieron.

Durante el Gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) las autodefensas fueron legitimadas y sustentadas legalmente bajo el nombre de Convivir (Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural), con el Decreto 356 de 1994, aunque fue en el Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) cuando se expandieron por todo el país.

Las Convivir siguieron generando protestas de sectores de la sociedad, que exigían su desmonte, dadas las violaciones permanentes a los derechos humanos. Razón por la que fueron desmanteladas como grupos de autodefensas, aunque muchos de sus liderazgos se negaron a desarmarse y se unieron a los grupos paramilitares, bajo el mando de Carlos Castaño, quien ya se hacía conocer ante la opinión pública como cabeza de las AUC[164].

164 El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, al dictar sentencia contra Hébert Veloza García, alias *HH*, jefe de los bloques Bananero y Calima de las AUC, aseguró que las Convivir fueron creadas "por particulares, especialmente entre 1995 y 1998 con el auspicio o con el visto bueno de gobiernos departamentales, Fuerza Pública, organismos de inteligencias y las correspondientes autorizaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada" y que se convirtieron en pieza clave para la expansión paramilitar (Verdad Abierta, 2013, 31 de octubre). Según el magistrado Eduardo Castellanos en la sentencia contra alias *HH*, las Convivir fueron la fachada bajo la cual "los grupos paramilitares consolidaron y expandieron sus redes criminales y sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales" (Verdad Abierta, 2017, 20 de junio).

4.2. Paramilitarismo en el Catatumbo

La presencia de las autodefensas en la región del Catatumbo se remonta a los años noventa, en especial, en Ocaña y su área de influencia, dado que el accionar de las del sur del Cesar se extendía hasta este municipio. Luego, en mayo de 1999, se marca un hito regional cuando los paramilitares -bajo el mando de Salvatore Mancuso- irrumpen al municipio de Tibú y desde allí comienzan a extenderse. Fueron los paramilitares de alias *Juancho Prada* y los de alias *Jorge 40* los que actuaron en la región, en especial, en los municipios de la zona alta.

Aunque estos grupos paramilitares son conocidos en la actualidad como Frente Héctor Julio Peinado Becerra y Frente Resistencia Motilona, que se desmovilizaron bajo la estructura del Bloque Norte y el Bloque Catatumbo[165], no es así como los identificaron las poblaciones del Catatumbo. Un habitante del municipio de Tibú lo recordó:

> Cuando ellos ingresan a Tibú y a La Gabarra, los primeros grafitis que colocan decían Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU. Eso duró todo el 99, yo me acuerdo que hasta el 2000. Después se hacen llamar Autodefensas Unidas de Colombia. Cuando estaban pretendiendo hablar con [el presidente] Uribe, ya después

165 La Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz fue el marco legal bajo el cual se desmovilizaron las estructuras paramilitares en Colombia. En sus primeras etapas investigativas, los postulados rendían versión libre, procedimiento mediante el cual "los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley" "[confesaban] los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia [al] grupo armado, (...) anteriores a su desmovilización" (Congreso Nacional de la República, 2005, 25 de julio), "Ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" (Diario Oficial 45.980, 2005, 25 de julio), por lo cual las versiones libres jugaron un papel importante en el conocimiento de los hechos ocurridos (CNMH, 2012b, página 47).

> del 2002, es que ellos plantean unirse todas las autodefensas, porque antes eran autodefensas en cada una de las regiones. Y en esa reestructuración a nivel nacional, ellos comienzan a pensar en una dirección nacional, pero también en bloques, así como las FARC, en frentes, en compañías, incluso en compañías móviles. Entonces después es que aparece el Bloque Catatumbo y con el Bloque Catatumbo aparecen el Frente Fronteras, el Frente La Gabarra, el Frente El Tarra. Y arriba en la parte alta [del Catatumbo] se llamaba el Bloque Norte, el de *Jorge 40*, y ellos nombraron los frentes Resistencia Motilona y Frente Héctor Julio Peinado (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2017).

Ahora bien, aunque el Bloque Catatumbo es el grupo paramilitar de mayor recordación para los habitantes de la región (en especial de la zona baja y media) y a nivel nacional, por el impacto y dimensión de sus acciones, no debe perderse de vista el accionar sostenido, violento y devastador de los frentes Héctor Julio Peinado Becerra y Resistencia Motilona, el alto Catatumbo.

4.2.1. Frente Héctor Julio Peinado Becerra

Frente Héctor Julio Peinado Becerra fue como se hicieron llamar las Acsuc (Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar). Nombre que adoptaron en 2004, cuando se vincularon al Bloque Norte, razón por la cual los habitantes del Catatumbo no lo reconocen ni les es familiar.

Como se ha visto, la historia del alto Catatumbo ha estado vinculada en varios aspectos a los sucesos ocurridos en la vecina región del sur del

Cesar[166]. Por ello, para entender el surgimiento y consolidación de las Acsuc, hay que conocer el germen de este fenómeno.

Así como en el Catatumbo la acción de las guerrillas se expandía, fortalecía y consolidaba a finales de los años ochenta y durante los noventa, en el contiguo departamento del Cesar el accionar guerrillero era aún más fuerte. El ELN, las FARC, el EPL y el M-19 crecían y ejecutaban homicidios, extorsiones, secuestros, robo y destrucción de las instalaciones de grandes propiedades rurales, por lo que muchos arroceros, algodoneros y ganaderos tuvieron que abandonar sus fincas dadas las amenazas y los hostigamientos[167].

En el Cesar como en el Catatumbo, se vivía un clima de organización y agitación social y política por similares razones, pero en el Cesar se sumaba la crisis del algodón[168]. Esta fue una de las razones por la que campesinos cesarenses, junto con los movimientos políticos de izquierda y sectores de movimientos cívico populares participaron masivamente en las movilizaciones del Paro del Nororiente de 1987, en ese marco, unas diez mil personas, entre labriegos y habitantes de varios municipios de Cesar, Magdalena y La Guajira, se concentraron en la plaza Alfonso López de Valledupar reclamando mejores condiciones en sus territorios y bloqueando el ingreso de alimentos.

166 Se han mencionado los desarrollos similares y complementarios que se generaron en torno a las JAC, y a la organización campesina que tuvieron su pico máximo de acción conjunta en el Paro del Nororiente, pero también en el marco de la guerra sucia, y luego ya con la presencia paramilitar a tope, con los desplazamientos de población cesarense a territorio catatumbero.

167 Roberto Lacouture, empresario agrícola de la región, fue secuestrado en 1989 por las FARC, así como 36 de sus familiares: "Nos atacaron durísimo a finales de los ochenta, levantaban las fincas a dinamita, mataban el ganado cuando no se lo podían llevar, y en otros casos asesinaban a los administradores de las fincas" (Verdad Abierta, 2010, 26 de octubre).

168 Después de la bonanza que tuvo este producto, los algodoneros enfrentaron una drástica caída del precio en el mercado internacional, y los cultivos en el Cesar pasaron de 123.000 hectáreas en 1970 a 25.000 en 1983, lo que produjo que muchos finqueros perdieran sus predios y que 30.000 mil puestos de trabajo se redujeran a 3.000 (Verdad Abierta 2010, 26 de octubre).

Igual que en el Catatumbo, el movimiento social crecía y se fortalecía en el Cesar, en particular en el sur, como lo recordó un defensor de derechos humanos:

> Va caminando el accionar paramilitar de San Alberto y San Martín y paralelamente, va caminando en su organización, fortalecimiento y defensa el movimiento social desde las expresiones cívicas, las expresiones comunales, las expresiones sindicales, sobre todo ahí en San Martín y San Alberto, por ser dos municipios con una organización sindical y comunal fuerte, por el cultivo de la palma. Aguachica es el primer municipio del sur del Cesar que alcanza, por sus niveles avanzados de organización, a tener la primera alcaldía desde un movimiento cívico y toman el poder del control municipal y el poder administrativo. Eso tiene unas repercusiones negativas y positivas para el movimiento social, porque alcaldes, personeros y contralores entran a hacer todo un trabajo de control y de denuncia de corrupción política en el municipio. Alternamente, en Pelaya, siguiente municipio a Aguachica, se va dando otro proceso, en la medida que históricamente la familia Marulanda Grillo despoja a los primeros asentamientos que se hicieron en esa colonización, los Marulanda entran a hacerles despojo. Entra todo el problema de lo que en esa época se llamaba "recuperación de la tierra" por [parte de] la ANUC, las Juntas de Acción Comunal, las asociaciones, esas expresiones agrarias, y es todo el caso conocido de la hacienda Bellacruz, con un ministro que estuvo implicado en una situación de paramilitarismo, y que eran los mismos paramilitares en conexidad con los Rivera y Prada de San Alberto y San Martin (CNMH, entrevista, hombre defensor de DD.HH., Bogotá, 2016).

Como sucedió en algunos municipios del Catatumbo en menor escala, en el Cesar la ANUC venía en un proceso de activación y agitación política, sustentando sus reclamos en la consigna de que la tierra es para quien la trabaja, denunciando inequidad en su explotación y tenencia y pidiendo al Gobierno nacional redistribución de la tierra

inoficiosa. Al no obtener una respuesta, por las vías de hecho, se llevaron a cabo procesos de "recuperaciones de tierras". Las guerrillas aprovecharon el descontento popular generalizado, se pronunciaron a favor e impulsaron las tomas para alentar acciones ciudadanas hacia una reforma agraria.

Este contexto prendió las alarmas en diversos sectores del Cesar, desde las familias pudientes tradicionales de la región hasta las élites políticas[169]. Así, se desencadenó una reacción que comenzó en el municipio de San Alberto (sur del Cesar) entre 1988 y 1989 cuando Rodolfo Rivera Stapper, hacendado y dirigente conservador, conformó y comandó el grupo Masetos[170].

Aunque Rodolfo Rivera Stapper fue asesinado en 1994 por la guerrilla, el grupo de autodefensas "tomó autonomía y empezó a ser liderado por personas de la región, entre ellos los miembros de la familia Prada Gamarra, secundados por otros reconocidos ganaderos los municipios de San Alberto, San Martín, Aguachica y Pelaya"[171] (Tribunal

169 "La apertura política y las negociaciones de paz, combinadas con la descentralización y la elección de alcaldes, pusieron en riesgo –o al menos esa fue la percepción de los liderazgos tradicionales– los equilibrios políticos establecidos en las regiones en donde la guerrilla y sus aliados electorales habían logrado influencia. Pero, además, esa misma apertura institucional y del régimen también ofreció posibilidades para la acción colectiva de grupos y sectores sociales que habían sido marginados por la forma limitada del sistema de representación electoral, y el aplastante dominio de las élites locales y rurales en la política regional y nacional" (Romero, 2002, página275).

170 Los Masetos fue el primer grupo de autodefensas surgido en el Cesar, y en San Alberto sus integrantes también eran conocidos como "los de Riverandia", ya que su principal lugar de ubicación era la finca "Riverandia", propiedad de Rodolfo Rivera Stapper, quien además de comandar este grupo, era una destacada personalidad política de la región, llegando a ser congresista de la República. También existió La Mano Negra, grupo que estuvo apoyado por algunos agentes de la Fuerza Pública, y que llevó a cabo asesinatos en esta zona (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 2006 -80014, 2014).

171 Este mismo grupo tomó en ocasiones el nombre de Colsingue (Colombia sin guerrilla) (Tribunal Superior Distrito Judicial Barranquilla-Atlántico, Justicia y Paz, Radicado: 08001-22-52-002-2009-83560, 2016), que al igual que "Los Masetos" y La Mano Negra hicieron presencia en el Catatumbo.

Superior Distrito Judicial Barranquilla-Atlántico, Justicia y Paz, Radicado: 08001-22-52-002-2009-83560, 2016). Para 1992 ya varios grupos de autodefensas hacían presencia en el sur del Cesar, los que expandieron hacia el Catatumbo:

> Inicialmente su área de injerencia cubría la región del sur del César: Aguachica, San Martin, San Alberto, Gamarra y grupos como el de Luís Ofrego Ovallos Gaona también lo hacían en el municipio de Ocaña, El Carmen, Ábrego en Norte de Santander, municipios con una fuerte presencia de grupos subversivos (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 110016000253 - 200782862 y 200680082, 2013).

En particular el grupo de Ovallos Gaona había tenido un crecimiento acelerado desde 1994 y, cuando él fue desaparecido de manera forzada en 1997, los hombres bajo su mando se plegaron a los grupos de Manuel Alfredo Rincón, alias *Manaure,* y Martín Velasco Galvis, alias *Jimmy,* dos comandantes de estructuras armadas que también operaban en el Cesar. La regulación de la zona fue asumida entonces por Juan Francisco Prada Márquez, alias *Juancho Prada*, quien desde 1995 estaba dirigiendo un grupo de autodefensas perteneciente a la estructura de su primo Roberto Prada Gamarra. En ese momento el Gobierno apoyaba la creación de grupos de autodefensa y *Juancho Prada* -junto a su primo- iniciaron labores, entregándole información al Ejército sobre la ubicación y accionar de los grupos insurgentes y después cometieron algunos asesinatos basándose en listas que la propia fuerza pública les suministraba (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 2006-80014, 2014)[172].

172 Según Juancho Prada, a partir de 1992 su primo Roberto constituyó su propio grupo de autodefensas con aproximadamente cinco exsoldados del Batallón Los Güanes, del Ejército Nacional, ante la incapacidad de la Fuerza Pública para brindarles respuestas oportunas y contundentes antes sus informaciones y denuncias (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 2006-80014, 2014).

La presencia de estos primeros grupos estuvo ligada a la bonanza de la marihuana o bonanza "marimbera" y al auge del narcotráfico. Estas primeras organizaciones armadas de carácter privado prestaron el servicio de protección a narcotraficantes y a rutas ilegales de exportación e importación de droga, una de las cuales se ubicaba en los municipios de Aguachica, San Martín, Gamarra, Río de Oro y San Alberto y estaba liderada por los primos Roberto Prada Gamarra y *Juancho Prada* (CNMH, 2017a, página 29).

Así, "los Prada se fueron perfilando como grupo armado con más poder y mejor organizado de la región" (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Radicado: 110016000253 - 200782862 y 200680082, 2013). Roberto Prada Gamarra fue capturado en 1996 y fue asesinado en la cárcel en 2001, así su primo Juan Francisco Prada asumió la comandancia total de los grupos de autodefensa de la zona, que para este periodo tuvieron distintos nombres: Acsuc y Autodefensas del Sur del Cesar y la Provincia de Ocaña[173].

Las Acsuc adhirieron a las AUC en 1998 y se les dio la orden de unificarse con los grupos existentes en Santander y Norte de Santander, comandados por Guillermo Cristancho Acosta, alias *Camilo Morantes* y por Nelson Zabala Vergel, alias *Mario Zabala*[174]. Así, las Acsuc tomaron control de "un territorio que cubría los municipios de Rionegro, San Martín, San Alberto y Aguachica, en el Cesar; Ocaña, La Esperanza y La Playa, de

173 Quienes hacían parte de los grupos de autodefensas también fueron participantes de las Convivir "que tuvieron licencia de funcionamiento en la zona del Sur del Cesar [y] fueron conocidas como "Renacer Cesarence", "Santa Lucía" y "Los Arrayanes", y contribuyeron con la legalización de los grupos de autodefensa que hacían presencia en la región. En efecto, reconocidos paramilitares que delinquieron en esta región del país (...) fungieron como fundadores, representantes legales o gerentes de las Convivir" (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 2006-80014, 2014).

174 En 1998, las autodefensas de Morantes se dividieron en dos: por un lado, las de *Camilo*, quien conservó el nombre de Ausac, y por el otro Nelson Zabala Vergel, el comandante disidente, formó una organización que con la entrada del Bloque Central Bolívar en 2000 a Santander, llegó a ser conocida como el Frente Alfredo Socarrás (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Radicado: 110016000253200680012-02. Postulado Rodrigo Pérez Álzate, 2013).

Norte de Santander y Puerto Wilches y Barrancabermeja [en Santander]" (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Radicado: 110016000253200680012-02, 2013).

Aunque en una suerte de formalidad se denominaron Ausa, continuaron funcionando de manera independiente en sus zonas hasta 1999, año en que el asesinato de *Camilo Morantes* fracturó el grupo, que retornó a la denominación de Acsuc o ACUC y que continuó en cabeza de *Prada* (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Radicado: 110016000253 - 200782862 y 200680082, 2013). En este mismo año sus acciones se expandieron hacia los municipios nortesantandereanos de Ocaña, La Playa, Hacarí y Ábrego, creando un corredor estratégico entre la Provincia de Ocaña y el sur del departamento del Cesar (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 2006-80014, 2014).

En 2004 las Acsuc o ACUC debieron replegarse al Bloque Norte -bajo el mando de alias *Jorge 40*-, tras perder un combate con el BCB (Bloque Central Bolívar) que había incursionado a los límites entre Santander y Cesar en busca de crear un corredor estratégico con la región del Catatumbo que facilitara entre otras actividades el tráfico de narcóticos. Luego de la adhesión de las autodefensas comandadas por *Prada* al grupo de *Jorge 40*, comenzaron a llamarse Frente Héctor Julio Peinado Becerra y cedieron el control del área urbana del municipio de Aguachica (en Cesar) al Frente Resistencia Motilona.

Esta estructura estuvo, en principio, conformada por habitantes de municipios del sur del Cesar y luego su conformación cambió "al punto de preferir integrantes con algún tipo de formación militar" (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Radicado: 110016000253 - 200782862 y 200680082, 2013). Para su financiamiento recurrió a diversas prácticas, una de ellas el impuesto al gramaje de pasta base de coca, como lo mencionó *Juancho Prada* en versión libre:

> [Este grupo] no se organizó con la finalidad de desarrollar actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito, sino que en sus inicios se trató de un grupo propiamente de autodefensas que posteriormente, para mantener su sostenibilidad, acudió al cobro del impuesto de gramaje como una fuente de financiación posterior (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 2006-80014, 2014).

Además del impuesto al gramaje, el Frente Héctor Julio Peinado Becerra hacía extorsiones y "vacunas" a comerciantes, como lo mencionó Armando Madriaga Picón, en octubre de 2008, en el marco de Justicia y Paz: "se les ponía una cuota 100.000, 50.000 o 20.000 mil pesos, eso dependía de lo grande del negocio y de dónde estuviera, esa plata era mensual y se recogía después de todos los 5 de cada mes (...) yo en el comercio recogía entre 40 y 60 millones de pesos" y más adelante agrega: "El distribuidor de Postobón mensualmente me daba 15 cajas de gaseosas, yo las negociaba en un depósito y le ordenaba al carro que salía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba 150.000, eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba en el año 1999 o 2000. Unas cuotas eran voluntarias y otras obligatorias" (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 11001600025320078279 4, 2016).

El postulado Javier Antonio Quintero Coronel complementa:

> Hizo referencia a las contribuciones que daban empresas nacionales, como las que producen palmeras en la región y señaló que el monto del aporte obligatorio pagado por estas empresas era proporcional a la extensión de tierra y producción. Igualmente refirió que con la participación en política de algunos miembros de la organización se logró obtener ingresos adicionales, poniendo de presente que no se trató de una fuente casual (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 11001600025320078279 4, 2016).

Ante la gravedad de las versiones de los postulados, que ponen de presente la posible financiación que empresas importantes habrían hecho a los paramilitares, el Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigara la presunta colaboración de esta empresa Postobón para financiar al Frente Héctor Julio Peinado Becerra. En específico, la Fiscalía deberá señalar "la presunta participación del gerente de esa empresa para la época de 1999 a 2000 y evidenciar si este aporte fue voluntario", indagación que sigue pendiente, pues es necesario que en el país se conozca, en términos de esclarecimiento histórico, el papel que jugaron en la creación y accionar paramilitar sectores económicos, empresariales y políticos.

4.2.2. Frente Resistencia Motilona

El Frente Resistencia Motilona[175] devino de los grupos de combatientes que Carlos Castaño envió hacia los departamentos de Cesar y Magdalena en 1996, siendo alias *Santiago Tobón* o *René Ríos* su comandante. Este grupo comenzó a realizar acciones en coordinación con *Jimmy* en 1998[176] y, al finalizar este año, *Manaure* entregó su comandancia a *Jimmy*, reemplazado en 1999 por Enrique Martínez López, alias *Omega*[177] quien

175 Es necesario indicar que en el marco de esta investigación se identificó que la información primaria y secundaria sobre la presencia y accionar del Frente Resistencia Motilona no es suficiente, en tanto, no se encuentra referida por entidades oficiales o entes judiciales, lo que constituye una deuda en términos de memoria histórica y de esclarecimiento.

176 Para esta época el grupo de *Jimmy* tenía influencia en los municipios de Pailitas, Curumaní, Astrea y Tamalameque en el Cesar (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 110016000253200782794, 2016).

177 Previo a la llegada de *Omega*, Jesús Atehortúa Gómez, alias *Julio Palizada* o *Julio Pailitas*, comandó la estructura durante tres meses, hasta el momento de su asesinato, el cual fue planeado por *Omega*, quien era el segundo al mando (Tribunal Superior Distrito Judicial Barranquilla-Atlántico, Justicia y Paz, Radicado: 08001-22-52-002-2009-83560, 2016).

a la postre se convirtió en el comandante del Frente Resistencia Motilona, denominación que comenzó a ser usada en 2001, cuando *Jorge 40* ordenó que se reagruparan los paramilitares que delinquían desde varias haciendas ganaderas de la zona (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 2006-80014, 2014).

Por lo tardío en el uso de este nombre, los pobladores de la región no lo reconocen y, al hacer referencia al accionar de esta estructura armada, la denominan como las AUC, las autodefensas o la gente del Bloque Norte. Este Frente, también conocido como Los Motilones, antes de hacer parte del Bloque Norte, fue constituido para proteger las haciendas palmeras y ganaderas en municipios del Cesar y Norte de Santander, por lo que en sus inicios estuvo conformado por gente de la región y, luego de su alineación a los propósitos de expansión de las AUC, fue nutrido por combatientes de otras zonas.

En las versiones libres, los desmovilizados narraron que entre las acciones de Los Motilones estuvo el desplazamiento de los campesinos que ocuparon la hacienda Bellacruz de la familia Marulanda (Verdad Abierta, 2011, 7 de septiembre). De acuerdo con la sentencia en contra de *Juancho Prada*, esta estructura paramilitar se financió en gran parte con los pagos voluntarios que recibió de muchos finqueros, así como de los "impuestos" por hectárea que obligaron a pagar a otros hacendados, con este primer músculo financiero pudieron expandirse a los municipios de Convención, El Carmen, Teorama, San Calixto y Hacarí (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 2006-80014, 2014).

Juancho Prada contó, además, que el Frente Resistencia Motilona cobró cuotas ilegales a negocios lícitos e ilícitos, entre ellos, los de alimentos y combustibles, que se robaban la gasolina del tubo y obligaban a varias estaciones a comprarla o la utilizaban para su propio abastecimiento

(Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 2006-80014, 2014).

En versión libre, tres exparamilitares contaron que el Frente Resistencia Motilona tuvo 40 predios, varios de ellos despojados a campesinos. También robaron ganado de las fincas donde los dueños no pagaban la "vacuna" y cobraron cuotas al narcotráfico por cada kilo de coca que pasara del Catatumbo al sur de Bolívar. Este grupo paramilitar cobró extorsiones a todas las empresas o personas que trabajaran para los municipios del Cesar y Norte de Santander en donde delinquieron (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 2006-80014, 2014).

Un funcionario entrevistado recordó que el Frente Resistencia Motilona, luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo, ocurrida en diciembre de 2004, empezó a incorporar a aquellos combatientes que no se desmovilizaron[178] (CNMH, entrevista, hombre funcionario, Valledupar, 2017). Luego, el Frente Resistencia Motilona se ubicó en el Carmen, Convención y la parte norte de Teorama.

4.2.3. Bloque Catatumbo

El Bloque Catatumbo, como fue conocido hacia 2002 -articulado también al Bloque Norte-, fue la estructura paramilitar más recordada en toda la región, dada su irrupción vertiginosa y violenta al territorio en mayo de 1999, recordada por la población como la "arremetida" para-

178 Además, el entrevistado señaló que entre estructuras era común que se rotaran combatientes, por lo cual es posible identificar a una misma persona haciendo parte de estructuras diferentes. Lo que muestra un apoyo permanente entre estructuras en el cumplimiento de objetivos similares.

militar. En su ejecución, los paramilitares bajo el mando de Salvatore Mancuso, cometieron masacres, ejecutadas con sevicia[179] y tomaron el control del territorio a través del terror, en especial en los municipios de Tibú y El Tarra.

Las personas en la región referencian esta estructura como los *paracos*, las autodefensas, "los que hicieron la arremetida paramilitar", "los que venían de Córdoba", o "las AUC". De hecho, recuerdan que los primeros letreros que aparecieron en las casas en Tibú decían ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2017). Las AUC (que provenían de los grupos de autodefensas de origen estatal y que se convirtieron en grupos paramilitares, especialmente en el Magdalena Medio), luego se extendieron a Córdoba y Urabá, bajo el mando de Fidel, Vicente y Carlos Castaño (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 11001600253200680008, 2014), conocidos como la casa Castaño.

Con la consolidación de la casa Castaño en el departamento de Córdoba y en el Urabá, Carlos y Vicente Castaño decidieron expandirse, encargaron de la creación del Bloque Norte a Salvatore Mancuso, quien se les había unido a principios de los años noventa[180]. Esta estrategia tuvo como objetivo expandir la organización a otras áreas del departamento de Córdoba y a los demás departamentos de la costa norte del país[181]. Esto

179 Para profundizar en las masacres y el fenómeno de desplazamiento forzado ocurridos en el municipio de Tibú ver *Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo"* (CNMH, 2015).

180 Mancuso en versión libre mencionó que fue "reclutado y entrenado por el Estado, bajo una política de seguridad nacional madre del paramilitarismo de Estado. Yo soy hijo legítimo de esa invención para hacerle frente a un fenómeno comunista que combinó todas las formas de lucha y estuvo a punto de hacer colapsar al país" (El Espectador, 2009, 22 de).

181 Al respecto, Mancuso aseveró: "Asumí como comandante de este bloque desde ese entonces y permanecí en esta posición hasta mi desmovilización, a partir de allí la comandancia fue asumida por *Jorge 40* cuando yo me desmovilicé. El Bloque Norte creció de tal forma que algunos de sus comandantes a mi cargo adquirieron autonomía total a partir de algunas épocas, no obstante, lo cual se quiso conservar su estructura orgánica más no funcional, para efectos de mantener su

implicaba su incursión y posicionamiento en el Catatumbo, con lo cual tomaban el control de la franja que comunica el Urabá y el departamento de Córdoba con Norte de Santander y Arauca.

La incursión al Catatumbo fue anunciada en la entrevista que realizó y publicó el diario El Tiempo a Carlos Castaño, en la que mencionó que: "este año [1999] va a haber una fuerte confrontación con el ELN. Nuestras tropas están avanzando en este momento hacia el norte, en Santander y el mayor escenario de confrontación se va a establecer en las riberas del río Tarra, donde permanecen Gabino y Antonio cuando no están vacaneados[182] en el extranjero" (El Tiempo, 1999, 15 de marzo)[183]. Pese a los anuncios públicos, la cruenta incursión paramilitar se dio sin que encontrara impedimento alguno por parte del Ejército o la Policía o alguna institución del Estado, encargada de proteger a la población civil.

El Bloque Catatumbo estuvo conformado por combatientes enviados por Castaño quienes, bajo órdenes de Mancuso, permanecían en el sur del Córdoba, en la zona de Tierralta. "Esa gente no tenía familia por ahí cerca" (CNMH, recorrido territorial 7, Tibú, 2016), dijo un habitante de Tibú, confirmando su carácter foráneo.

En la ejecución de lo que Carlos Castaño denominó proyecto Catatumbo, doscientos veinte paramilitares integrantes de las ACCU partieron desde Los Guayabos, vereda del municipio de Tierralta, pasaron

presencia política" A partir de estas declaraciones se puede entrever que los bloques que hicieron presencia en la región del Caribe y en Norte de Santander constituían una unidad denominada Bloque Norte, pero que funcionalmente estaba fraccionada en varios grupos, frentes o bloques, incluyendo un grupo que tenía esa misma denominación, los que, si bien obedecían a la Casa Castaño, con el crecimiento económico y militar de sus estructuras, fueron alcanzando autonomía y lograron sostenimiento económico independiente (CNMH, 2012a, página 37).

182 Divertidos, de paseo.

183 Se refería a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino y a Eliécer Erlinto Chamorro Acosta, alias *Antonio García*, comandantes del ELN.

-sin ser detenidos- por cuatro departamentos: Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena, hasta llegar a Pelaya, en el Cesar, en donde se instalaron antes de llevar a cabo su sangrienta incursión en el municipio de Tibú (CNMH, 2015b, página 64)[184].

En audiencia del 28 de julio de 2012, Mancuso mencionó que Carlos Castaño se reunió con altos mandos militares y élites políticas y nombró entre sus presuntos contactos a los exgenerales del Ejército Iván Ramírez Quintero y Martín Orlando Carreño, con quienes presumiblemente se coordinó la expansión por todos los departamentos de la Costa Caribe, Santander y Norte de Santander (CNMH, 2015b). Al referirse a Norte de Santander, Mancuso habló de los apoyos que presuntamente recibió del exgeneral Mario Fernando Roa comandante de la Segunda División del Ejército, del exgeneral Alberto Bravo Silva de la Quinta Brigada y de José Miguel Narváez (condenado a treinta años en agosto de 2018, como determinador del homicidio agravado del periodista Jaime Garzón) exsubdirector del DAS (liquidado en 2011).

La ejecución del Proyecto Tibú fue coordinada por Armando Pérez Betancourt, alias *Camilo*, Fernando Fino Rodríguez, alias *Marlon*, y José Bernardo Lozada Artuz, alias *Mauro*, exoficiales del Ejército. Además, estuvieron en la acción militares activos que hacían presencia en la región, entre los que se encontraban el exmayor Harvey Hernández Correa y el excapitán Alexander Gutiérrez Castro, *El Capi*, excomandantes del Distrito de Policía de Tibú[185], el exmayor Mauricio Llorente, excomandante

184 A ellos se sumaron cincuenta paramilitares más designados por alias *Julián Bolívar*, segundo al mando del Bloque Sur del Bloque Central Bolívar, y los quince que llegaron antes a Cúcuta con Jorge Laverde Zapata, alias *El Iguano*, excomandante del Frente Fronteras que incursionó en mayo de 1997 en la capital (CNMH, 2015b, página 64).

185 El segundo fue capturado como miembro de bandas criminales después de desmovilizarse con el Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar (Caracol Radio, 2011, 14 de abril).

del Batallón de Contraguerrillas Héroes de Saraguro en Tibú y el exteniente Luis Fernando Campuzano Vásquez, excomandante de la base militar en La Gabarra. Los tres fueron condenados por las masacres de La Gabarra y Tibú y confesaron el maridaje- Ejército-AUC (CSJ, Sala de Casación Penal, Proceso 28017. J. Socha, 2007).

Paramilitares del Bloque Catatumbo, expusieron además que esta estructura recibió apoyo por parte de personal de Ecopetrol. Esquivel Ruiz, alias *El Osito*, contó que "cuando los [paramilitares] urbanos iban a entrar a Tibú (...), ese señor Montaño [exjefe de seguridad de Ecopetrol] llevó un carro de Ecopetrol y nos recogió en Campo Dos (...) y nos metió a Ecopetrol (...) duramos ocho días mientras planeábamos cómo entrábamos a Tibú" (CNMH, 2015b, página 67). Alias *Mauro* declaró que Armando Montaño "colaboró con armas, equipo y en logística" (CNMH, 2015b, página 67).

Giovanny Velásquez, exintegrante del Bloque Catatumbo, condenado por la masacre del 29 de mayo de 1999 y testigo en procesos judiciales contra miembros de la fuerza pública en los procesos de Justicia y Paz, preguntaba en un programa de televisión "¿Cómo es posible que [en] un helicóptero que presta Ecopetrol para que transporte militares del Maza, se haya montado un militar como Mancuso?" (Especiales Pirry, 2012).

Jorge Iván Laverde Zapata, alias *El Iguano* y comandante del Frente Fronteras, reconoció ante la Fiscalía General de la Nación que la Hidroeléctrica Termotasajero entregó al Bloque Catatumbo trescientos millones de pesos y que se comprometió a aportar cinco millones mensuales, lo que hizo desde enero de 2001 hasta mayo de 2004. Con estos dineros los paramilitares compraban armas y municiones y, en contrapartida, se comprometían a prestarle seguridad, porque la empresa manifestaba que había sido objeto de extorsiones por parte de la guerrilla (Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Radicado: 11001600253200680008, 2014).

De acuerdo con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, Laverde expresó que, a propietarios de estaciones de gasolina, la mayoría de los comerciantes de Cenabastos y de los San Andresitos, representantes de las casas de cambio, ganaderos y empresas de transporte "se les informó los requerimientos de la organización y se acordó una cuota mensual" (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Radicado: 11001600253200680008, 2014).

Jorge Iván Laverde Zapata reconoció que las AUC no habrían podido llegar y asentarse en el Catatumbo y en Norte de Santander sin el apoyo de la fuerza pública, ganaderos, arroceros, comerciantes y empresarios de la región[186]:

> Al mes de estar allá, los citamos a una reunión donde él, él la citó, a una reunión con unos ganaderos, comerciantes, empresarios, de hecho voy a dar sus nombres, porque de lo contrario si allí no hubiésemos tenido el apoyo de la fuerza pública, el apoyo de los ganaderos, de los comerciantes, de los empresarios, de la gente que cuando llegábamos nos vio como la salvación, que estaba, realmente era un departamento muy duro y muy controlado por las guerrillas de las FARC, ELN y el EPL que aún existe por allí, y las bandas criminales y nos vieron como esa salvación y por eso la gente se abalanzó hacia nosotros a prestarnos ese apoyo, a darnos información y nos vieron como una fórmula de tranquilidad (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Radicado: 11001600253200680008, 2014).

186 Jorge Iván Laverde Zapata también aseguró que el congresista nortesantandereano Ricardo Ariel Elcure Chacón, financió su campaña de 2003 con 80 millones de pesos provenientes de grupos paramilitares (Radio Santa Fe, 2008, 2 de diciembre).

4.2.4. Por qué llegaron los paramilitares al Catatumbo

Salvatore Mancuso adujo los siguientes intereses para ingresar y tomar control de la región del Catatumbo:

> Dentro de la guerra irregular, lo primero que uno hace es mirar de dónde se financia el enemigo de la nación colombiana: la guerrilla y uno de los mayores focos generadores de economía para las guerrillas estaba en Norte de Santander, además de ser estratégico por ser limítrofe al país vecino de Venezuela, por donde ingresaban armas y sacaban droga y narcotraficaban y hacían una serie de situaciones, que se convertía en una retaguardia estratégica tanto militar, económica, como política, porque de allí emanaban directrices del Bloque y del Estado Mayor de él, conformado por las FARC en esa área y por el ELN,- porque además ahí quedaba el Comando Central del ELN, el COCE, en un sitio conocido como La Bogotana donde pasaba el cura guerrillero y donde pasaban varios de los comandantes del ELN y FARC en esta zona, Timochenko incluso está en esa área" (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Radicado: 11001600253200680008, 2014).

Los argumentos de Mancuso se quedan cortos para entender tanto los intereses como las consecuencias del accionar paramilitar en la región. De los diversos relatos se puede inferir, de manera razonable, al menos cinco razones que revelan el interés paramilitar en la región: i) acabar con la guerrilla, ii) controlar el corredor estratégico Córdoba-Bajo Cauca-Sur de Bolívar-Sur de Cesar-Catatumbo-Frontera con Venezuela; iii) obtener rentas de la economía de la coca, iv) promover condiciones que favorecieran la explotación de los recursos y v) aniquilar los procesos de

organización social y comunitaria, imponiendo un férreo control social y territorial.

El argumento paramilitar de acabar con la guerrilla fue interpelado en repetidas ocasiones por las víctimas en todos los municipios, dado que además de que no acabaron con la guerrilla, esta razón fue usada para estigmatizar y en consecuencia violentar a la población civil. Así lo describieron varias personas en el taller de San Calixto:

> No, [los paramilitares llegaron] por la presencia de la guerrilla, porque esos son enemigos acérrimos, (...) pero no acabaron con la guerrilla sino [que] acabaron con la población civil. A la guerrilla no le hicieron ni un tiro (...). Ellos decían que como todos los civiles éramos guerrilleros, entonces ellos querían acabar era con los civiles (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

El interés de controlar la economía de la coca, puesto como central por las comunidades, se corrobora al observar los datos del crecimiento de las áreas de cultivo y de la producción de kilos de cocaína, aunque en momentos específicos la producción se vio afectada por la erradicación forzada. Así lo señaló la Fiscalía:

> En el año 2000 se recogían en promedio para las autodefensas 1.750 kilogramos de coca, total anual en el año 2000 por las autodefensas 21.000 kilogramos, 3.500 hectáreas controladas por las autodefensas... En el año 2001, 2.500 kilogramos mensuales recogidos por las autodefensas, 30.000 kilogramos recogidos anuales, y 5.000 hectáreas controladas por las autodefensas. En el 2002, 2.700 kilogramos de coca mensual por las autodefensas, para 32.400 kilogramos de coca recogidos anualmente, 5.400 hectáreas controlábamos las autodefensas de sembrados de coca en ese año 2002. En el año 2003, 1.500 kilogramos mensuales y 18.500 kilogramos anuales recogidos por las autodefensas, 3.000 hectáreas controladas. En 2004, 1.100 kilogramos mensuales recogimos 11.000 ki-

> logramos al año, 2.200 hectáreas [controladas] (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Radicado: 11001600253200680008, 2014).

En lo que se refiere a la explotación de recursos ambientales, las referencias fueron específicas sobre el cultivo de palma de aceite, extracción de petróleo y carbón en el bajo Catatumbo. Lo que explica por qué en la zona baja de la región, la violencia paramilitar tuvo unas dimensiones mayores para la población y el territorio, mientras que en la zona media y alta, la resistencia más organizada de las comunidades y el mayor control guerrillero impidieron que los paramilitares tuvieran una marcada presencia o un férreo control. En relación con la palma de aceite, muchas personas en la región encuentran vínculo entre la llegada paramilitar y el interés de instaurar el cultivo agroindustrial. Así lo narró un líder de la región que conoce a profundidad la dinámica palmicultora de su corregimiento:

> [Los paramilitares] comienzan a fraccionar toda la economía campesina (...), llegaban a una finca, se comían las gallinas, se comían el cerdo y las tres, cuatro reses que había y se las llevaban. ¿Qué quedó del campesino? ¡Pues nada! y ¡corra para que no me maten! (...) ¿Qué pasa ahí? llega la estrategia, la propuesta de la palma. Llega con dos cosas muy claras, la primera, llega a recuperar la economía que han fraccionado en ese entonces, es decir, si a mí me quitan todo y [luego] me dicen: la propuesta es palma, tome cuatrocientos [mil pesos] mensual, tome para que invierta en obreros, es una propuesta económica que va a servir en el momento. Lo segundo, [decían]: aquí tiene una cédula palmera, usted va a ser identificado, pero además va tener protección (...). Nosotros, que andábamos bien llevados del miedo, de la economía que nos han fraccionado, pues accedíamos a eso, pero no se sabía que eso era la estrategia para que el territorio hoy en día se convirtiera en palmero y viniera toda la estrategia de compra de tierras (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

Así mismo, la entrada paramilitar en la región es explicada por sus habitantes como un medio para conseguir condiciones favorables para llevar a cabo actividades extractivistas, impulsadas por distintos gobiernos, pero inviables en la zona por la presencia, el accionar y la oposición abierta de las guerrillas, como fue referido por un campesino y un docente de la región:

> Ellos [los paramilitares] traían la estrategia de matar la población porque Álvaro Uribe le tiene mucha hambre a la zona del Catatumbo, porque es rica en muchas minerías. La estrategia que traían los paramilitares era matar [a] la población para que los poquitos que quedaran se fueran, para él poder entrar a explotar las minerías que hay aquí en la región del Catatumbo (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016)[187].

> Para mí la entrada de los paramilitares es un asunto de Estado. Eso vino planiado desde el mismo Estado, de los gobiernos que había en ese momento. Por ejemplo (...) era Pastrana presidente cuando entraron los paramilitares. Yo lo digo porque acá ya se venía anunciando desde años anteriores que se iba a volver a reactivar la explotación petrolera y la guerrilla no dejaba. La guerrilla llegaba y les quemaba los carros, les devolvían [a] los obreros, no los dejaban trabajar a gusto, tenían que pagarles una "vacuna" para poder entrar a la zona para poder trabajar (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016)[188].

187 Además del petróleo y el carbón, existen exploraciones de minerales no energéticos en la región, especialmente de cobre en los cerros del Bobalí, sobre la Serranía del Perijá, y también de florita, cuarzo, uranio y oro en otros municipios del departamento (Asociación Minga y Fundación Progresar, 2008, página 182).

188 Entre 2003 y 2006 se reactivaron los prospectos petroleros hechos por el Gobierno y las empresas años atrás, mostrando un incremento, en comparación con el escenario que dominaba en 1999. De acuerdo con la Asociación Minga y a la Fundación Progresar (2008, página 182) se buscaba aumentar la producción de 1.800 a 15.000 barriles diarios de petróleo. El actuar paramilitar favoreció la consecución de este propósito.

Otra razón que, para los habitantes de la región, explica la entrada y arrasamiento paramilitar fue la intención de acabar con los procesos organizativos, de reivindicación y autonomía territorial que habían construido y fortalecido en décadas precedentes. Así, el accionar paramilitar acabó con el tejido social, con las relaciones de confianza y solidaridad que se generaban a través de organismos de gobierno propio, como las JAC, las asociaciones de juntas, las cooperativas y los escenarios de autovisibilización y exigencia que habían logrado construir a través de las movilizaciones regionales y las protestas sociales. En la voz de un defensor de derechos humanos que acompañó a las víctimas de la región:

> [Los paramilitares] mataron varios líderes comunales y del movimiento cooperativo (...). También [el propósito de ellos] era hacerle perder autonomía al proceso de base, que lo consiguieron en un momento determinado y, por un tiempo, que fue la desarticulación de todo el proceso cooperativo y comunal en la región. Muchos de los líderes hoy están por fuera de la región, algunos lograron regresar (...), eso fue un vacío del movimiento social, fue el saqueo a las cooperativas, fue [la pérdida de] toda esa autonomía de construcción de base (...). El movimiento social lo acabaron del 99 al 2004 (CNMH, entrevista, hombre defensor de DD.HH., Bogotá, 2016).

4.3. Arremetida y consolidación paramilitar

Las estructuras paramilitares que estuvieron en el Catatumbo tuvieron orígenes, composición y propósitos disímiles. Además, entraron a los distintos municipios en tiempos diferentes: el Bloque Catatumbo inició su presencia y expansión en 1999 y los frentes del Bloque Norte

en 2002[189]. Las comunidades tuvieron que enfrentar y resistir de varias maneras esta arremetida.

El Bloque Catatumbo usó las masacres como estrategia para infundir terror y adquirir control territorial, generando un número elevado de víctimas mortales, mientras tanto, en el medio y alto Catatumbo, hicieron uso de otros recursos de guerra. Así es percibido este fenómeno por un habitante de Convención:

> La arremetida de los paramilitares en La Gabarra [Tibú] a donde llegaron y asesinaron a más de 30, 40 personas en la sola noche fue muy distinto a la entrada de los paramilitares -en ese sentido de asesinatos- por ejemplo, acá en Convención. Aquí hubo asesinatos, pero asesinatos selectivos, o sea, mataban a una persona hoy, a los 15 días, al mes mataron otra persona (...), mientras que allá en el Catatumbo parte baja, lo que es Tibú y ese sector, allá sí hubo masacres (CNMH, entrevista, hombre adulto, Convención, 2017).

Las poblaciones que soportaron la irrupción paramilitar en 1999, en especial las del corregimiento de La Gabarra y de la cabecera municipal de Tibú, fueron tomadas por sorpresa. Las acciones violentas que dieron inicio al copamiento paramilitar provocaron desplazamientos masivos desordenados y caóticos, producto de iniciativas individuales y familiares con el propósito de salvaguardar la vida.

En el alto Catatumbo la reacción social fue más organizada y colectiva, dado que ya se conocía la forma violenta de irrumpir y operar de los paramilitares y que las comunidades tuvieron más tiempo para preparase y organizarse. Un caso significativo en este sentido fue el ocurrido en Con-

189 Aunque los habitantes de Ocaña no vivieron una arremetida paramilitar en la ciudad -razón por la cual no se expone en el presente apartado-, sí experimentaron una presencia sostenida desde los años ochenta, que incrementó su accionar con la conformación de las AUC y a partir del año 2002.

vención, en tanto las comunidades buscaron además de proteger su vida, desarrollar una estrategia que les permitiera permanecer en su territorio.

Pese a que, en su conjunto, los paramilitares produjeron drásticas transformaciones en la vida cotidiana de la gente, se pueden notar también marcadas diferencias en el tipo de control que desplegaron en cada zona. Así, es posible observar cómo, en algunos casos, los paramilitares coparon todo el territorio de un municipio y por un periodo prolongado de tiempo, como en Tibú, mientras que, en otros, su presencia fue circunstancial y pasajera, como en Hacarí.

Al accionar del Bloque Catatumbo en la zona baja se le atribuyen, con mayor recurrencia, transformaciones drásticas sobre el territorio después de su desmovilización, relacionadas con el significativo abandono forzado de tierras, el arrasamiento y el vaciamiento de veredas y poblados, para facilitar el despojo[190]. En los municipios del medio y alto Catatumbo, si bien los frentes paramilitares accionaron durante varios años, su presencia no significó cambios tan drásticos, en la tenencia y propiedad de la tierra, o en los usos que con posterioridad se establecieron.

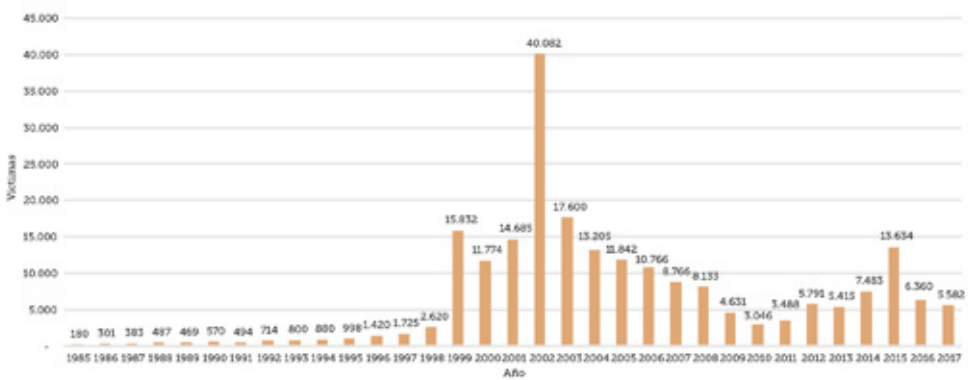
En el apartado sobre la instauración del control paramilitar se expondrán, por un lado, el significado del accionar violento para la población del Catatumbo y, por el otro, las formas diferenciadas de dominio social y territorial que establecieron en cada municipio y los tipos de violencia más utilizados, de acuerdo con los testimonios de las personas de la región. Pese a que se dieron contrastes, las tres estructuras paramilitares se complementaron y cumplieron objetivos similares y coordinados. Una mujer defensora de derechos humanos lo entiende de la siguiente manera:

190 Lo que generó un mercado desregulado de predios y cambios sustantivos en los usos productivos del suelo (capítulo 6).

> En Tibú y en Convención eran dos bloques que estaban allí cerrando la región: el uno era el de Castaño y Mancuso, que era por el lado de Tibú; y el otro era el de *Jorge 40*, que era liderado por el Bloque Norte, que era por Convención y Ocaña y también por el Cesar, por el lado de Pailitas, [porque] por el sur del Cesar hay una entrada que es por El Carmen. Eso también fue bloquiado por el Ejército y los paramilitares, o sea, todo eso fue bloquiado estratégicamente en alianza fuerza pública con paramilitares (CNMH, entrevista, mujer adulta defensora de DD.HH., Bogotá, 2016).

Los paramilitares, independiente de la estructura a la que pertenecieron, produjeron eventos masivos de desplazamientos forzados en todos los municipios de la región. Entre 1985 y 2017 se desplazaron del Catatumbo 166.295 personas y, entre 1999-2006, periodo paramilitar, lo hicieron 99.074. Esto indica que en los siete años de presencia paramilitar se desplazó el 59,5 por ciento del total de la población desplazada entre 1985 y 2017. Como puede observarse en el siguiente gráfico, hasta 1998 no se habían presentado eventos masivos de desplazamiento forzado, en 2002 se presenta un pico que obedece a que los paramilitares extienden su presencia a los municipios del alto Catatumbo.

Gráfico 10. Desplazamiento forzado en el Catatumbo



Fuente: UARIV-Red Nacional de Información, fecha de corte 1 de junio de 2018.

Los municipios más afectados por el desplazamiento forzado en periodo paramilitar fueron Tibú con 54.118 personas desplazadas, Convención con 16.649, El Tarra con 15.511, Teorama con 10.967 y Sardinata con 10.164 (Red Nacional de Información, 2018).

El desplazamiento de la población[191] generó desestructuración familiar y social, ruptura de los vínculos que los pobladores habían construido con su territorio y, en los lugares donde se asentaron, choque por las diferencias culturales, dificultades económicas, estigmatización y rechazo de las poblaciones receptoras. Un tipo de desplazamiento que afectó más drásticamente los vínculos de la población con su territorio fue la migración transfronteriza, pues no solo se debió abandonar el suelo regional, sino que se debió construir una nueva vida en un país extranjero, en algunos casos con idioma, clima y cultura diferentes[192], dejando atrás comunidades y procesos organizativos. Sobre los impactos que produjo este tipo de desplazamiento, un líder social de El Tarra exilado en Canadá explicó:

> Moderadora: ¿y cómo ha sido la vida en Canadá?
>
> Exiliado: inicialmente muy duro por el choque de cultura, el clima frío, el idioma y la falta de la gente nuestra, la relación con la comunidad. Para mí los primeros tres años fueron deprimentes totalmente, (...) tuvimos que llorar bastante.
>
> Moderadora: ¿cuántas personas del Catatumbo conoces en Canadá?
>
> Exiliado: entre niños y grandes creo que como unos 150 aproximadamente.
>
> Moderadora: ¿y cuál es la situación de estas familias?
>
> Exiliado: la mayoría hacen lo mismo que nosotros, unos trabajan en limpieza, otros trabajan en construcción (...). Nosotros pensábamos

191 Que tuvo diferentes formas, desplazamiento intraurbano, urbano-rural, rural-urbano, urbano-urbano, rural-rural y la migración transfronteriza.

192 Después de Venezuela, Canadá fue la segunda referencia geográfica que fue referida al hablar sobre la migración transfronteriza.

> regresar pronto, en tres o cuatro años, pero la situación en Colombia sigue, yo veo que ha mejorado muy poco en cuestiones de seguridad (...) todos los días leemos en el periódico que asesinan líderes.
>
> Moderadora: ¿qué es lo más duro de la experiencia del exilio?
>
> Exiliado: es perder el derecho de vivir en su tierra, el desarraigo de la tierra es lo más duro, tener que dejar todos los proyectos que teníamos de vida en la región (...), todo se dañó (...). uno estaba acostumbrado a otro tipo de vida, no a estar limpiando baños, ni trapiando, sino a estar en contacto con la comunidad, mirando cómo podía ayudar en una Junta Comunal, en la cooperativa, vinculado a las organizaciones de derechos humanos, en fin, y acá no se puede hacer nada de eso (CNMH, entrevista, hombre exlíder social, Canadá, 2017).

Muchas personas que debieron salir forzadamente del país no quieren volver ni rehacer su proyecto de vida en Colombia, porque perciben que los factores de riesgo persisten. Otras, consideran que no hay condiciones ni garantías para el retorno (CNMH, taller con mujeres desplazadas, Cúcuta, 2016).

El desplazamiento masivo generó el vaciamiento de veredas y cascos urbanos de corregimientos y municipios, por lo que las personas de la región los llamaron "pueblos fantasma"[193]. El vaciamiento estuvo acompañado de la destrucción de los bienes de los pobladores y de la infraestructura física de los poblados, es decir, del arrasamiento. Así, el arrasamiento produjo no solo la destrucción del entorno material y simbólico de las víctimas, sino, la destrucción de las relaciones sociales preexistentes ligadas al territorio (CNMH, 2015c, página 27). De esta manera se concretó en el Catatumbo la desestructuración de proyectos sociales, políticos, económicos, familiares y culturales, muchos de ellos incluso hasta su eliminación, como sucedió,

193 El vaciamiento hace referencia a aquellos pueblos abandonados en los que más del 50 por ciento de su población se vio obligada a desplazarse forzadamente (CNMH, 2015c, página 27).

por ejemplo, con el proceso cooperativo regional o con las apuestas alternativas y de izquierda que existieron en la región.

> Los paramilitares utilizaron ampliamente la estrategia de tierra arrasada como ejercicio de una violencia que no solo aniquila a las personas, sino que destruye su entorno material y simbólico, de manera que el territorio se vuelve inhabitable por la propagación de las huellas de terror, lo que fuerza el éxodo de la población, en especial en zonas de anclaje originario de la guerrilla. En múltiples oportunidades, estos grupos combinaron la comisión de masacres con la estrategia de tierra arrasada para, además de matar masivamente, atacar el entorno físico y simbólico de las comunidades, y crear una desocupación duradera de lugares donde los sujetos colectivos habían forjado una historia común de construcción social de su territorio y de su identidad (CNMH, 2015c, página 28).

En suma, para el conjunto de la región, la época paramilitar significó el padecimiento de una violencia sin precedentes que ha marcado de forma indeleble los espacios, los recuerdos, los cuerpos y los corazones de las y los catatumberos y ha dejado marcas significativas en el territorio y en la experiencia individual y colectiva de habitarlo.

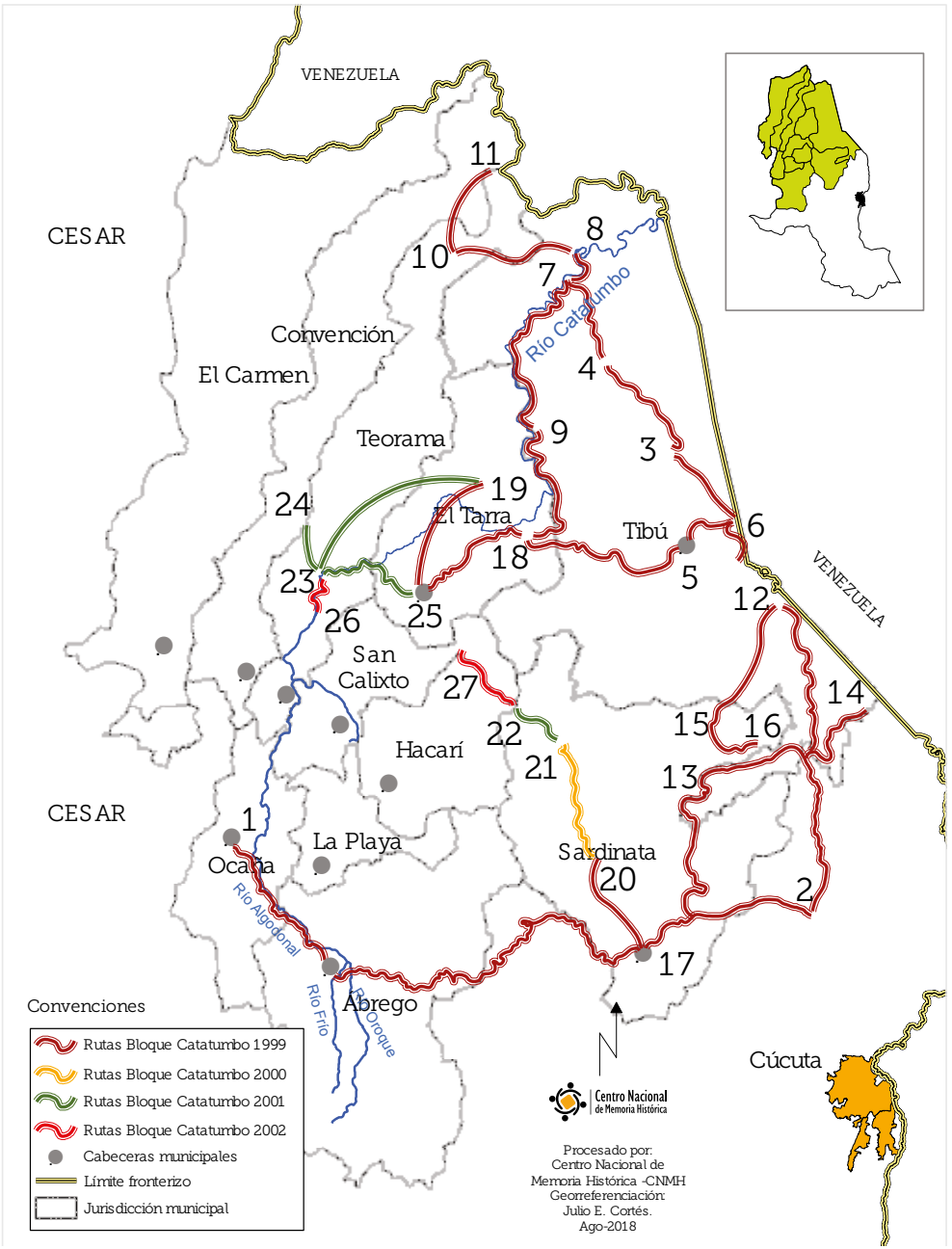
Los grupos paramilitares en el Catatumbo son recordados, descritos y caracterizados, aludiendo enfáticamente a su accionar armado. La violencia paramilitar inscribió un antes y un después en la vida de quienes la sufrieron. A pesar de que había tres guerrillas en el territorio, fue la presencia paramilitar (en menos de una década) la que generó los mayores impactos. Este grupo armado no solo produjo desplazamientos forzados en su máxima magnitud en la región, sino que ejecutó un número mayor de asesinatos y de desapariciones forzadas, si se compara con las guerrillas. Vale reiterar que no todas las poblaciones vivieron la arremetida paramilitar de la misma manera.

4.3.1. Irrupción al bajo y medio Catatumbo

Uno de los recuerdos más marcados en la memoria de los habitantes de todo el Catatumbo en torno a la arremetida paramilitar fue su entrada violenta y atroz al municipio de Tibú, en mayo de 1999, que tuvo como objetivo tomar el control de La Gabarra, corregimiento epicentro del cultivo de coca en la región.

Pese a que los paramilitares pretendían transitar de manera clandestina a La Gabarra, un hostigamiento del EPL los obligó a detenerse en la vía que conduce del casco urbano de Tibú a La Gabarra y a hacer pública su presencia. Una vez tomaron el control de la vía, comenzaron a expandirse hacia otras zonas rurales y urbanas del municipio y, durante ese mismo año, hacia Sardinata. En años posteriores continuaron su recorrido hacia El Tarra, Teorama y Convención, copando nuevas poblaciones de Sardinata. En el siguiente mapa se presenta el recorrido que, de acuerdo con las personas consultadas en los talleres de memoria, hicieron los paramilitares que luego conformaron el Bloque Catatumbo (los números indican el orden cronológico de llegada a cada uno de los lugares referenciados).

Mapa 15. Rutas de entrada del Bloque Catatumbo a la región



Fuente: CNMH, 2018.

4.3.1.1. Arremetida paramilitar a Tibú

En el marco de lo que Carlos Castaño denominó proyecto Catatumbo se concretó la estrategia para entrar a la región por la ciudad de Ocaña. Dado que su objetivo inicial era controlar La Gabarra, ese sábado 29 de mayo de 1999 los *paracos* (como son llamados los paramilitares por la mayoría de las y los catatumberos) transitaron por la ruta que conduce de Tibú a La Gabarra. El siguiente es el relato de un adulto mayor que fue obligado a transportar a la tropa paramilitar, comandada por Camilo Morantes, en su recorrido inicial hacia Tibú (empezó el 26 de mayo), vale resaltar cómo en el testimonio deja ver la complicidad institucional:

> Ya entramos (...) de Pelaya para adentro (...) y llegamos allá [a una finca] (...). Cuando llegamos nos encañonaron, nos quitaron la cédula y los celulares, quedamos incomunicados (...). Tipo cinco de la tarde, seis, llegó el helicóptero, bajito, por toda la cañada. Ahí venían municiones, camuflados y chalecos antibalas (...). Apenas llegamos, nos dieron una [ración de comida de campaña] igual a la que usa el ejército (...).
>
> Hicieron varios grupos, a cada camión le asignaron un grupo (...) seis camiones (...). Salimos de la finca y llegamos a La Mata [Cesar] (...). [Un compañero] venía con el comandante Camilo (...). Yo iba con [alias] *Alex Nicaragua* y [con alias] *El Paisa* (...).
>
> El Ejército estaba encuartelado. Patrón, esto venía de arriba, eso no era de cuenta de ellos, eso venía desde arriba (...). Es más, mandaron a un fiscal de allá directamente [de Bogotá], (...) y ese fue el que dejaron en la Y [en el Zulia] para que asegurara o comprobara lo que estaban haciendo ellos [los paramilitares] con el Ejército (...).

Cuando llegamos a Aguachica estaba la Policía en La 40 (...). Todos los que iban en el camión iban camuflados, y las armitas eran R-15 y Ak-45 (...). Ahí tuvieron palabras, se trataron mal (...). Yo como le prendí reversa [al camión], esos manes [los paramilitares] levantaron la carpa, y todos [los de la Policía] se montaron en la patrulla y se fueron (...).

Seguimos bajando (...), entramos a Ocaña (...), y resulta que había una buseta ahí en toda la entrada al hospital. Entonces yo *pi, pi*, el pito de ciudad [que tenía el camión]. Entonces el *man* [quien conducía la buseta] sacó la mano y dijo que [pasara] por encima [de la buseta], ¡imagínese!, y yo con los *cascudos* ahí, Virgen Santísima (...), y esos *manes* [los paramilitares] son alzaditos. Bueno, dijo [*Nicaragua*]: ¿qué es lo que dice ese no sé qué? Que pasemos por encima. Llegó y sacó [el radio] móvil uno, móvil uno, y decían: adelante: Páreme el tráfico de allá para acá, hágame el favor (...). Bueno, pararon el tráfico (...).

El paso obligado pa Cúcuta era por el Batallón, ahí siempre había un retén, (...) siempre había soldados, y paraban los carros, requisaban, y lo requisaban a uno (...). Como yo iba adelante miré pa allá (...), y nada, [no estaban] los soldados (...).

Póngale a la media noche llegamos a la Y de Zulia (...), es el cruce pa Tibú. Ahí llegamos, y yo iba puntiando, cuando el centinela [del Ejército] se acercó [y preguntó]: ¿qué llevan, señores?, dije: tropa (...). Cuando me dijo [el soldado]: hágale. El segundo camión también, ¿qué lleva?: tropa (...). Pasamos el primero y el segundo, cuando en el tercero le da a un centinela de esos por ir a destapar la carpa y ve ese reguero de gente (...). En el tercer camión iba el *Camilito*, el comandante (...).

Entonces salió el comandante [del Ejército], el jefe de ellos ahí. Total, que el señor que venía fiscalizando, que venía de negro, era

> un señor así, morenito, que venía de Bogotá. Dijo [Camilo]: él viene dirigiendo todo, fiscalizando todo. ¡Ahí se lo dejo pa que se ponga de acuerdo con él! (...), y el *man* se quedó ahí (...). El venía como de arriba (...), él era el que le decía a los militares: bueno, esta orden viene de su general acá adentro (...). Pasamos [hacia Tibú]. Entonces dieron hasta un santo y seña: pájaro azul no sé qué joda, pa los centinelas [del Ejército], eso venía de arriba (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Cúcuta, 2016).

En el recorrido, los paramilitares fueron hostigados desde un filo por el EPL en el puente sobre el río Socuavo, donde además, esta guerrilla instaló un explosivo, situación que obligó a parar y descender de los camiones e impidió por unos días su avance hacia La Gabarra. Una vez allí, asesinaron a cuatro personas en Refinería, Serpentino y Socuavo y luego a tres en Carboneras (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016), configurándose así la primera masacre.[194]

Los paramilitares instalaron su primer punto de control permanente y una base sobre la vía en la vereda Betas Central y desde allí comenzaron a expandirse. Veinte días después de su arribo a Tibú, el 17 de junio los paramilitares cometieron otra masacre en el puente ubicado sobre el río Socuavo, sin encontrar resistencia por parte de los agentes de Policía instalados en el cuartel, ni de los efectivos del Batallón de contraguerrilla No. 25 Héroes de Saraguro. Los paramilitares asesinaron a 13 personas y dejaron heridas a un número indeterminado.

Un mes más adelante ejecutaron una de las masacres más recordadas en Tibú, la del 17 de julio de 1999, en la cabecera municipal. Reunieron a la gente que se encontraba en los establecimientos públicos y la

194 Por tratarse del asesinato de cuatro o más personas, en uno o más lugares pero que se corresponden con un mismo recorrido o evento.

llevaron al sector conocido como la avenida principal y allí asesinaron a once hombres:

> Dos mujeres encapuchadas pasaron por cada uno de ellos [sitios donde la gente estaba] y señalaban. A los que iban señalando, los retiraban de la pared y los acostaban en el suelo. De igual manera con las mujeres. Cuando tuvieron a todos ahí, empezaron a matarlos, ahí mismo, tirados en el piso. Así fue que mataron a todas las personas que estaban ahí, todos los hombres, no caímos ninguna mujer. A algunos los echaron al carro (...) los llevaron y los otros quedaron ahí en el suelo (CNMH, recorrido territorial 1, Tibú, 2012).

Luego de esta masacre, dejaron en el pueblo a hombres vestidos de civil, a los que se les empezó a llamar los urbanos y los demás continuaron su expansión y toma de control territorial. Un mes después, el sábado 21 de agosto de 1999, fue la masacre de La Gabarra, que tuvo difusión por medios departamentales y nacionales. Como recordó un habitante de Campo Dos (Tibú), "eso era como si hubiera sido el fin del mundo, eso era una *plomacera* qué, mejor dicho. Y al otro día, cuando amaneció (...) tocaba pasar por encima de los muertos" (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

Para llegar a La Gabarra, los paramilitares ingresaron por el Km 60, río arriba y el cementerio, sitiaron la población y asesinaron a personas que se encontraban en la vía, en el casco urbano y en las veredas Los Cuervos y Barranca, dejando un saldo trágico de 36 víctimas, entre personas asesinadas y desaparecidas. Este hecho se recuerda por la sevicia que los paramilitares desplegaron sobre los cuerpos.

> Ya tenían como un mes de estar los paramilitares en la carretera, cuando entraron un sábado a las siete de la noche. Venían tres carros llenitos (...). Yo había escuchado rumores que en esa semana se iban a meter a hacer una masacre. Yo estaba sentada en el an-

> dén afuera, cuando vi que bajaban los carros, pero como a veces el Ejército también viste así (...). Entonces me entré y entré los pelaos y cerré las puertas (...). Yo que cierro, cuando se fue la luz y se formó esa plomacera, ¡Uy, no, no, no! Eso eran bombas. Y ese sábado, como había gente que venía a vender, a vender ropa, utensilios y cacharros por las calles, las residencias estaban llenas. Por eso fue que mucha gente cayó, gente de afuera (...). Otros sí eran de acá, eran propietarios (...). Al otro día yo me paré como a las seis de la mañana y me vine a mirar (...) y ese poconón de muertos, ¡Uy, no, no, no! (...) unos pocos conocidos que vivían acá y otros pues que no conocía (CNMH, 2015).

Las afirmaciones de la Fiscalía en relación con la responsabilidad del teniente del Ejército Luis Fernando Campuzano en este hecho son significativas, porque señala la acción y la omisión en su deber de proteger a la población civil[195]. El OMC documenta que mientras los agentes del Estado, entre 1999 y 2006, se enfrentaron a las guerrillas en 193 ocasiones, en el mismo periodo, hubo 36 combates o contactos armados con los paramilitares.

> El comportamiento (...) puede decirse que consistió en un "dejar hacer, dejar pasar", en hacer "oídos sordos" a su ineludible deber de combatir al grupo irregular que dejaba rastros de sangre a su paso y, de negarse a proteger a la población civil, respecto de cuyas vidas tenía posición de garante, con el argumento de que "el que la debe, que la pague", es indudable que (...) permitió la matanza en la noche nefasta, no solamente con su conducta omisiva, sino con actos positivos. Entre los últimos, cabe señalar el acuartelamiento temprano de los militares, en donde permaneció impasible sin salir en defensa de los pobladores, a pesar del ataque público realiza-

195 Argumentos símiles sostiene la Fiscalía en relación con la responsabilidad penal del mayor Llorente Chávez del Ejército y comandante del Batallón de contraguerrilla Héroes de Saraguro (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Radicado: 11001600253200680008, 2014).

> do, con argumentos en extremo cuestionables como una supuesta agresión a la base oficial (...). Tácita y expresamente permitió que las AUC actuaran como a bien tuvieran, como lo venían anunciando, y se comprometió y así lo hizo saber, a no combatirlas (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 11001600253200680008, 2014).

Desde su llegada, además de ejecutar masacres, los paramilitares cometieron asesinatos selectivos e indiscriminados e implantaron un régimen de saqueo, destrucción de bienes y arrasamiento. Esta situación produjo un éxodo masivo de personas que buscaban salvar su vida. Ante el terror por la incursión paramilitar a La Gabarra, más de tres mil personas, incluyendo habitantes de La Pista-Río de Oro y La Cooperativa, se desplazaron por los ríos y por la selva a otros lugares del departamento, antes de llegar a Casigua-El Cubo[196] y La Vaquera, en el estado Zulia, en Venezuela.

Más de dos mil, fueron trasladas al coliseo Eustorquio Colmenares de Cúcuta y otras prefirieron refugiarse en la zona montañosa de la ciudad. El corregimiento más afectado por el desplazamiento fue La Gabarra con 23.814 personas desplazadas (CNMH, 2015b, página 96), cerca de la mitad del total de personas desplazadas de todo el municipio de Tibú en periodo paramilitar.

Con esta estrategia de terror y muerte, Mancuso y su ejército montaron su mando operativo en La Gabarra, como recordaron personas de este corregimiento, a los pocos días empezaron a "despachar" desde un hotel céntrico que se habían tomado, "a escasos metros de la Policía" (CNMH, taller de memoria, La Gabarra, 2012). Montaron puestos de control en las veredas Cuervos, Barrancas, Caño Guadua, Matecoco y La Campana.

196 Casigua-El Cubo fue denominado La Segunda Gabarra, por la cantidad de personas que llegaron desplazadas.

Como lo refirieron mujeres de Campo Dos, los paramilitares "se expandieron por todas partes, abrieron camino, ahí se separaron los comandantes, los mandaron pa Tibú, los mandaron para arriba y empezaron mijito a hacer fiesta" (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016). En agosto irrumpieron en Campo Dos intimidando a la población y generando zozobra:

> Esa noche llegaron tocando puertas, todos [debíamos estar] con la cédula en la mano. Yo salí y [dijeron:] ¡salgan! Mi esposo salió por la otra puerta y yo salí por el frente. Ellos nos estaban apuntando y corra para el parque. Ahí nos trajeron las mujeres aparte y los hombres aparte (...). El comandante [estaba] ahí con otros señores, [con] una grabadora y una cámara. Pasaban por la mitad, [y nosotros] decíamos el nombre completo, en qué trabajábamos y la dirección de la casa donde vivíamos. Ese día nos dijeron un montón de cosas y ahí nos tuvieron como desde las nueve y media de la noche hasta las cinco de la mañana (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

Los paramilitares se interesaron por tomar el control de Campo Dos y luego de La Llana, pues se trataba de puntos estratégicos, por hallarse sobre la vía principal, puerta de entrada hacia el Catatumbo por la zona oriental, camino obligado para llegar desde Cúcuta hacia Tibú y de allí al interior del Catatumbo[197].

197 La Llana, es una vereda también conocida como Finaria, del corregimiento de Campo Dos, ubicada cerca de la vía principal, en un cruce que conduce a San Martin de Loba, al casco urbano de Sardinata y a Cúcuta. Allí se encuentra una casa conocida como La Hacienda, recordada como centro de operaciones de los paramilitares, desde allí salían a cometer asesinatos, incluso, ahí mismo se cometieron numerosos homicidios y se encontraron fosas comunes, por lo que es un lugar que genera terror en la población (CNMH, taller de memoria con sacerdotes, Tibú, 2016). Según el testimonio de un tibuyano allí: "llegaba el helicóptero blanco personal de Mancuso", además era un centro de acopio de la pasta base de coca (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2017).

Después se instalaron en el abandonado caserío La Silla, punto importante por ser lugar de tránsito de la guerrilla y porque desde ahí se tomaba control de la antigua vía de entrada a Tibú desde Cúcuta[198], corredor estratégico para el narcotráfico y el contrabando de gasolina. Además, les permitía conectarse con Palmarito, Puerto Santander, San Faustino y la frontera y con la zona plana del Zulia. Con este puesto, además, tomaban el control de la zona petrolera y ganadera (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2017).

Luego continuaron hacia las veredas Petrólea (Campo Dos), La Cuatro (del corregimiento de Tibú casco urbano) y Betas (La Gabarra) donde instalaron otro puesto de control.

Las masacres fueron una estrategia de los paramilitares para imponer el control social. El 6 de abril de 2000, bajo el mando de *Camilo,* cometieron otra de las masacres recordadas. Ese día, su tránsito comenzó en la zona comercial de la avenida principal, allí asesinaron a la propietaria de un supermercado conocida como "La Mona", continuó por los barrios Once de Febrero, La Unión y El Triunfo, en el recorrido dejaron 25 víctimas mortales:

> Habían matado [a] La Mona (...), allá ella quedó degollada. [Los paramilitares] se presentaron como guerrilla, que necesitaban un mercado para fulano de tal y La Mona dijo: pues tienen que esperarse más tarde, yo les envío eso. Pues con eso fue que (...) la acusaron de cómplice y de colaboradora y la asesinaron (...) Cuando comenzaron a sonar tiros en la pista[199] y todo mundo empezó a esconderse. [Hubo] personas que subieron hasta el puesto de Policía y les dijeron a los policías que qué pasaba que no salían, que había paramilitares en la pista (...) La Policía no salía, no reaccionaba, ni

198 Cúcuta-Puerto Villamizar-Puerto León-Banco de Arena-La Silla-Petrólea-Tibú.

199 El aeropuerto de Tibú.

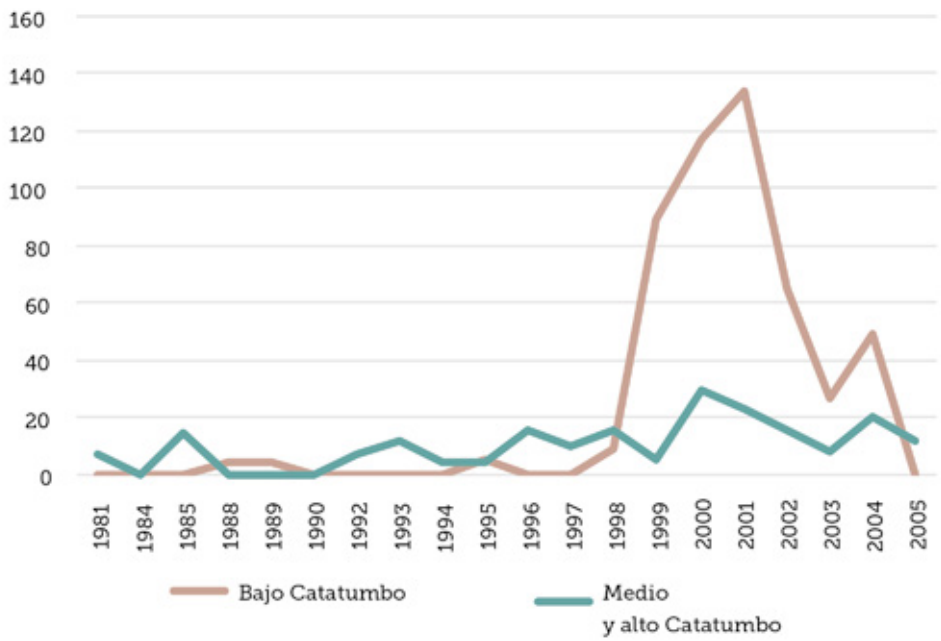
> el Ejército. A lo último, a la misma gente le tocó arrancar hacia la pista. Cuando se llegó a la pista eso fue macabro, había 24 personas muertas con tiro de fusil. Estaban destrozadas, la cara destrozada, los brazos. Donde les caía el tiro, los destrozaba completamente. Se procedió a ir a recogerlos, e irlos a tirar al cementerio. Allá se tiraron para que les hicieran el levantamiento y después del levantamiento cada quien a llevarlos a su casa a velarlos. Eso fue bastante penoso, sinceramente (Asociación Minga y Fundación Progresar, 2008).

Dada la atención que estas masacres despertaron en la comunidad nacional e internacional y en sectores sociales e institucionales, los paramilitares disminuyeron su utilización para evitar medidas de prevención y acción contra estos hechos. Sin embargo, fue tanto el impacto simbólico que produjeron, que de ahí en adelante los pobladores de todos los municipios describieron muchos de los asesinatos individuales con la palabra masacrar para referirse a la sevicia utilizada en el asesinato de una sola persona.

Antes de las masacres perpetradas por el Bloque Catatumbo en la zona baja, aunque se habían presentado, no tuvieron la dimensión de las cometidas por los paramilitares[200]. De acuerdo con el OMC el total de personas asesinadas en masacres, entre 1999 y 2005, fue de 599. De ellas, 403 víctimas atribuidas a paramilitares y 142 a la guerrilla.

200 Entre 1981 y 1998, el OMC registra 139 víctimas de masacres en la región, 42 en hechos cometidos por agentes del Estado, 40 por paramilitares, 37 por guerrillas, seis por desconocido, cinco por agentes del Estado y paramilitares y cuatro por agente extranjero (OMC, Fecha de corte: 29/05/2018).

Gráfico 11. Número de víctimas por masacres en el Catatumbo 1981-2005



Fuente: CNMH-OMC, fecha de corte 29 de mayo de 2018.

Como se puede apreciar, la dimensión de las masacres en el bajo Catatumbo representa el 80 por ciento del total de la región, siendo menor en la parte media y alta, aunque los frentes paramilitares que hicieron presencia en La Playa, El Carmen, San Calixto, Sardinata y Teorama también recurrieron a esta forma de violencia.

Ante la violenta arremetida paramilitar, la insurgencia reaccionó de diversas maneras. Algunas personas de la comunidad recordaron que, durante la incursión a Tibú, las FARC se replegaron: "se fueron, (...) cruzaron el río pal otro lado. Por eso se dice que cuando llegaron a La Gabarra no mataron guerrilleros, (...) guerrillero no iba a estar ahí en el

pueblo esperándolos, no. La guerrilla recogió su gente y pa' la montaña" (CNMH, entrevista, hombre adulto, Ocaña, 2016).

Dada la promesa de las guerrillas de proteger a la población, el repliegue generó un sentimiento de abandono y reclamos: "La guerrilla sí se perdió de la región (...). Yo decía a la misma guerrilla, ahora, después que volvió: Ustedes, que cuando los *paracos* estaban por ahí decían: ustedes no se muevan de noche que nosotros vamos a controlar esto. *Paraco* que entre a La Valera es muerto. Y entraron al medio día (...) aquí a La Cabaña, a Finaria y ellos se perdieron" (CNMH, recorrido territorial 1, Tibú, 2016). Sin embargo, otras personas recordaron que, visto el control territorial de los paramilitares, las guerrillas empezaron a enfrentarlos:

> Querían matarnos era a todos. El EPL fue la que peleó y defendió esta parte. Los *elenos* no querían meterse a esa pelea y al final, viendo las cosas que estaban [pasando], los veía uno pasar en carros, bien uniformados. Y las FARC a lo último también empezó a enfrentar la pelea con las autodefensas. Esos tres grupos se enfrentaron (...) y no fue pasito, fue duro. A ellos los vencían eran por el aire, pero por tierra eran bravos. Las mismas autodefensas decían ¡no! esos tipos son bravos, ¡nos acaban a todos! (...). No porque queramos darles esa fe [pero] (...) gracias a ellos aquí en La Gabarra hay muchos que somos vivos, porque esos jóvenes murieron, dieron su vida (CNMH, taller de memoria, La Gabarra, 2012).

El papel de la insurgencia fue relevante en otro aspecto: por el peligro que representaron los desertores de las guerrillas que se incorporaron a los grupos paramilitares. Así se refirió al tema Salvatore Mancuso:

> Cuando el Bloque Catatumbo iba incursionando hacia la zona del Catatumbo en el año 99, se fueron presentado entregas de la guerrilla, de combatientes, en su sentir era por la presión militar que el Bloque estaba haciendo [en] contra de las FARC y estos com-

> batientes de las FARC empezaron a desertar y a presentarse a los grupos de autodefensas, con armamento y todo lo demás, posteriormente se convertían en informantes y estos exmiembros de las FARC daban información, que tenían conocimiento de los milicianos o las personas que hacían parte de quienes estaban en conflicto con nosotros (...). Muchos desertaron de las filas de las FARC, se vincularon a las filas de las AUC (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 11001600253200680008, 2014)[201].

4.3.1.2. Experiencia Barí

El pueblo Barí se ha visto afectado de manera grave por el conflicto armado. En este marco, la comunidad Barí describe a los paramilitares como un "actor violento y ambicioso" (CNMH, grupo focal 1 Barí, Tibú, 2016).

Durante la arremetida paramilitar a Tibú, los Barí presenciaron asesinatos y masacres. Representantes de Ñatubaiyibarí recordaron cómo en una ocasión, en El Mirador, en la vía que conduce del casco urbano de Tibú a La Gabarra, los paramilitares asesinaron a un hombre, quitándole la cabeza con una motosierra, para generar terror en los pasajeros que iban en el bus. También mencionaron que entre los *paracos* se encontraban algunos "carnívoros" que "rajaban el corazón, lo sacaban y se lo comían y se comían el hígado". Este tipo de situaciones generaron pánico entre los indígenas:

201 También se dio la vinculación de desertores de las guerrillas al Frente Héctor Julio Peinado Becerra, como lo mencionó *Juancho Prada*: "consistía en enrolar miembros activos de la subversión que eran capturados y utilizados como guías para obtener información y ventaja militar" (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 2006-80014, 2014).

> ¡Eso temblaba como gallina! Cuando uno ve carnívoro ¿uno cómo se pone? Cuando un hombre llega armado con motosierra, con machetilla, por aquí con fusil, granadas y dos revólveres, o dos pistolas por el costado de las piernas ¿cómo uno no se va asustar? Y un campesino ahí colgado, amarrado ¡imagínese! cómo no se va a asustar uno. Es que pal pueblo Barí [fueron] asesinos malos, eso afecta mucho. Ahora somos como hombres paz, entonces como hombres paz nosotros no tenemos arcos, flechas. Temblamos como gallinas cuando un hombre... por la mitad con cuchillos, motosierras ¡Imagínese! (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017).

Los Barí fueron testigos del apoyo que los paramilitares recibieron de la fuerza pública: "la misma fuerza pública los dejaba pasar, el mismo batallón que está aquí en La Gabarra, que está aquí a la entrada de Tibú, batallón de Tibú. El Gobierno que está allá por la vía de la carretera, el Ejército, eso los dejaba entrar. Como son unos de ellos también, entonces los dejaban entrar (CNMH, socialización, Tibú, 2017). Producto de la arremetida paramilitar en Tibú, los Barí abandonaron la comunidad Socbakayra y sus miembros se dispersaron en otras comunidades. Un indígena Barí comentó:

> Entraron aquí, no sé cuántos, la tropa. Llegaron a Tibú, pero no venían al pueblo, sino se quedaban por arriba. Primero, asesinatos por esta vía, en Tibú, en el pueblo (...). Los hombres venían armados hasta los dientes, hasta las uñas. Después entraron a La Gabarra, una masacre fuerte, tuvieron. Ellos ahí se dividieron, entraron por Río de Oro, otros agarraron pa La India, eso entraron a todo lado. Ahí en el Catatumbo cayeron como tres Barí, uno cacique. Allá entraron y mataron, hicieron desastre (CNMH, socialización, Tibú, 2017).

Ya copada buena parte del territorio de Tibú, los paramilitares iniciaron su expansión por el municipio de Sardinata.

4.3.1.3. Sardinata: llegaron agrediendo

La entrada paramilitar al municipio de Sardinata fue por el corregimiento San Martín de Loba[202]. Esta incursión tuvo lugar el 26 de agosto de 1999. Sus habitantes recuerdan que en abril el Ejército los había amenazado diciéndoles que iban a llegar los paramilitares a su municipio:

> Finalizando los noventa y principios del 2000, cuando la incursión de paramilitares, fue una situación más compleja porque el mismo Ejército iba y saquiaba casas, [des]mantelaba a los pobladores, se los llevaban, amenazaban a la gente: que detrás de ellos iban otros ¡y sí! a los pocos días, como al mes, a los dos meses fue que entraron los paramilitares y muchas de las personas que iban con el Ejército eran paramilitares (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

Muy temprano los pobladores del Catatumbo empezaron a identificar simultaneidad en las acciones de los paramilitares y de la fuerza pública, al describir que sus acciones antecedían o se desarrollaban en conjunto con las de los paramilitares. Como había sucedido en Tibú y en San Martin los paramilitares llegaron agrediendo e intimidando a la población:

> Participante 1: El 26 [de agosto de 1999] eran las diez y treinta de la mañana cuando llegaron, eso echaban bala por esa calle pa arriba, entonces (...) yo me metí pa dentro. En eso llegó un señor con un tal *Cúcuta*. Ese *Cúcuta* ya llegó con patadas y mentando madres, que quién era yo (...) y otro negro de pa arriba no me dejaba pasar y ahí me llevaron empujado, el uno me atajaba y el otro

202 El corregimiento de San Martín es cercano a Campo Dos. Por esta razón, la vida de sus habitantes ha estado más atada a lo que ocurre en el municipio de Tibú, que a Sardinata. Esta cercanía produjo que los paramilitares tuvieran fácil acceso a San Martín, justo después de su arremetida a La Gabarra, al casco urbano y luego a Campo Dos.

> (...). Todos esos ranchos se estaban quemando. Llegamos y me dice *Cúcuta*: me cuenta esos maletines [100 morrales con material de guerra] y con tal que se me pierda uno ¡se muere! Llegan todos esos hijueputas y échele y échele y me llenaron el camión de maletines y llegué yo y lo vacié y dijo: inmediatamente me va traer unas vacas a Campo Giles.
>
> Participante 2: Para nosotros como comunidad la cosa se puso pesada fue el sábado en la noche. Se agarraron [con la guerrilla] a plomo casi toda la noche. Yo tenía una finca ahí con unas gallinitas y eso las quemaron todas, a todas las asaron a plomo, las incendiaron (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

El sábado 28 de agosto de 1999 los paramilitares se estaban preparando para un enfrentamiento con la guerrilla en el casco urbano de San Martín, por lo cual dieron plazo perentorio a los habitantes para que abandonaran el lugar "porque queremos quedarnos solos con la guerrilla, para ver si es verdad que no podemos con ellos", por lo cual "más de uno de las veredas se fue, varios, a buscar camiones para llevar los *corotos*[203]. "Como a las cinco de la mañana *pam pam,* las balas (...) si usted estaba descalzo, así agarraba a sus niños, a su esposo y ¡vámonos!". Lo primero que escucharon los pobladores fue un "bombazo" en una casa cercana a la iglesia, lo que produjo una salida masiva de personas, que se desplazaron y se ubicaron en el colegio de La Llana. Allí el Ejército no permitió que las personas se desplazaran hacia Cúcuta, dado que el éxodo de las personas de La Gabarra había sido numeroso y la gente se encontraba en el Coliseo y en colegios de la capital. Querían prevenir más congestionamiento y no llamar la atención (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

203 Ropa y enseres de la casa.

El 27 de agosto los paramilitares llegaron también a las veredas Berlín y Mirador del corregimiento de San Martín, reunieron a la población en una vivienda. Allí amarraron a cinco personas y luego fueron a buscar unas *pimpinas*[204] de gasolina "pa meterle candela a esas casas". Les dijeron: "la orden que tenemos del comando central es matarlos a ustedes, porque todos ustedes son guerrilleros y meterle candela a esto, esto hay que limpiarlo ¡esto está sucio!". A una mujer joven "la cogieron ahí y le hicieron quitar la ropa". Además, "nuestras casas nos las esculcaron y nos robaron un poco de cosas que teníamos". El paramilitar al mando -que había sido del Ejército- vio que uno de los presentes estaba prestando servicio militar y por esta razón se calmó, "los soltó y los empezó a tratar mejor", eso "fue una intimidación tremenda" (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

Según los relatos, los paramilitares les dijeron a unas personas que avisaran a los habitantes de las veredas que tenían que salir del corregimiento, por lo cual la mayoría empezó a desplazarse de inmediato:

> Nosotros nos fuimos a ordeñar la vaquita y veníamos con la leche cuando que la gente de San Martín iba con colchonetas, con maletines, con lo que podían. ¿Qué hacer? Mire caballero: sacar lo que uno podía, cerrar la puerta con un pinche candado y dejar todo lo que uno tenía en la casa, dejar los animales. A mí se me perdieron unos animales ¡pero las gallinas ni se diga! ¡se las comieron todas! y una pérdida grande material. Salir a La Llana. Allá nos acantonamos tres meses (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

Tres meses después, algunas personas intentaron regresar a sus hogares y al llegar vieron como todas las casas habían sido saqueadas y los pocos enseres que quedaban estaban destruidos en las calles. Lo mismo había sucedido en el casco urbano de San Martín. Estas comunidades

204 Envase plástico.

habían sido arrasadas. Según las memorias de sus habitantes, muchas de las personas que regresaron a sus veredas después del primer desplazamiento, fueron asesinadas.

En octubre de 1999, los paramilitares llegaron al casco urbano de Sardinata. Pusieron un punto de control en la redoma de la virgen[205] y se instalaron en el hotel El Prado, apoderándose de varias casas que la gente había abandonado a raíz del desplazamiento preventivo, ocurrido antes de que llegaran. Lo primero que hicieron fue citar a una reunión a los gremios de peseros[206], transportadores y comerciantes para informarles que "ya estaban bajo sus condiciones" y que tenían que pagarles un "impuesto". Así mismo, comenzaron a llamar a todos los que tenían coca sembrada en sus predios para que se registraran, informaran cuánta extensión tenían sus cultivos y empezaran a pagar "la vacuna".

Luego de su incursión comenzó el desplazamiento: "¡claro! ¡No ve que eso acabaron con todo!: finca, ganado, animales. Se robaron bestias y empezaron a matar gente de noche y a la hora que fuera". Sin embargo, el desplazamiento había empezado tiempo atrás, dado que los paramilitares desde los retenes "enviaban razones" de que ya iban hacia esta cabecera municipal, "entonces la gente por miedo salía". Ese mismo día se expandieron hacia el casco urbano de Las Mercedes, aunque allí la violencia "no fue tan masiva como en Luis Vero" (CNMH, taller de memoria 2, Sardinata, 2016).

El 23 de diciembre de 2001, casi dos años después de su entrada a la cabecera municipal, los paramilitares ingresaron al corregimiento de Las Mercedes. Esta demora se dio porque en esta zona el ELN y el EPL hicie-

205 Lugar estratégico ubicado en la Ye que lleva a Sardinata y a Ocaña. Punto de transito de Las mercedes, Luis Vero y Sardinata hacia Cúcuta. Además de cometer asesinatos, comenzaron a controlar el transporte y las personas que ingresaban a la región.

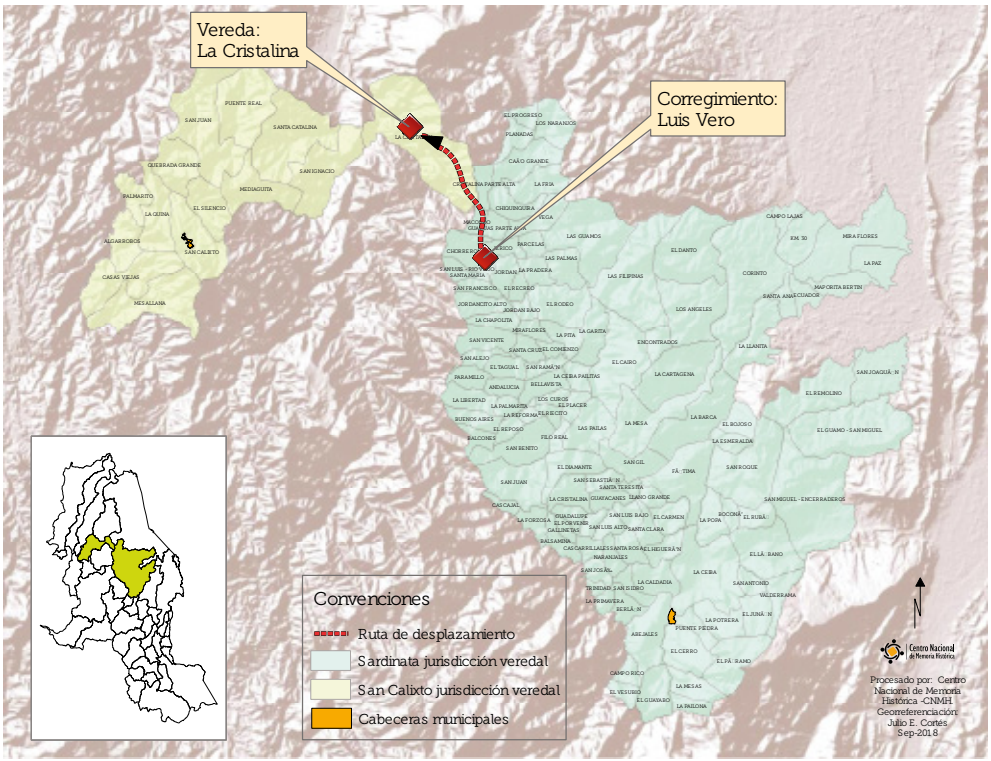
206 Carniceros.

ron resistencia. Las personas recordaron que "el Ejército fue el que abrió camino y se ubicó ahí. "Antes de entrar los *paracos*, hacía poquito había entrado el Ejército y después, fueron muchas las familias que se fueron por etapas de cada una de las veredas" (CNMH, taller de memoria 2, Sardinata, 2016).

El 28 de diciembre de 2001, los paramilitares llegaron al casco urbano de Luis Vero, cercano a Las Mercedes, donde tenía fuerte presencia la insurgencia, por lo que se dieron varios combates, pero por ser un punto estratégico, un cruce que conecta con Las Mercedes, El Tarra, San Calixto y Tibú, los paramilitares querían su control. Instalaron una base en el cerro Las Mesas y desde allí comenzaron a incursionar en veredas del corregimiento como Jericó, Macondo y El Placer.

Como ya se escuchaban los rumores de la entrada paramilitar, algunas comunidades decidieron desplazarse antes de su ingreso, como lo comentó un habitante: "Ahí fue donde nos reunimos y reunimos unas cien, ciento veinte mulas: bueno señores los que se van, porque ya pasaron los *paracos* de Las Mercedes pa abajo y vienen pero matando a raimundo y todo el mundo y reunimos aproximadamente como a unas ochocientas personas" (CNMH, taller de memoria 2, Sardinata, 2016). Según recuerdan, el recorrido que inició en Luis Vero duró más de cinco días, en los que se caminaba incluso en la noche. Fueron los líderes de las JAC quienes buscaron mejorar las condiciones durante el viaje y la alimentación de los marchantes, hasta llegar a La Cristalina (vereda de San Calixto).

Mapa 16. Ruta de desplazamiento Luis Vero – La Cristalina.



Fuente: CNMH, 2018.

Las guerrillas en este contexto también impulsaron el desplazamiento. Bajo el argumento de que era mejor que dejaran su corregimiento, pues ya iban a llegar los paramilitares, les profirieron amenazas a los pobladores, diciéndoles que si no lo hacían serían asesinadas o por los paramilitares o por la insurgencia:

> Ya estaban los rumores que los paramilitares se iban a meter, entonces nosotros nos reunimos con el poquito de representantes que había. La guerrilla nos había dicho: yo no es porque se vayan y que dejen solo, pero es mejor que se vayan porque todo el que se

> quede los paramilitares lo matan, o los ponen a trabajar con ellos y después venimos nosotros y los matamos a ustedes. Entonces es mejor que se vayan, así no les sirven a uno ni les sirven a los otros. Ustedes se van y nosotros miramos cómo les colaboramos. Y así fue (CNMH, taller de memoria 2, Sardinata, 2016).

De la vereda El Placer las personas recordaron que los lugareños se encontraban trabajando y al ver llegar a los paramilitares se asustaron y empezaron a correr. En reacción, los hombres armados dispararon contra ellos asesinando a varios, situación de terror que produjo el desplazamiento de toda la población de la vereda. Luego, la guerrilla minó los caminos: "tan pronto ellos se fueron a meter, totiaron como cuatro, cinco quiebrapatas de esas. Entonces [los paramilitares] se devolvieron y nosotros seguimos" (CNMH, taller de memoria 2, Sardinata, 2016).

En su trayecto, los paramilitares saquearon casas y robaron a las personas que encontraban en el camino, como lo comentó una mujer en el marco del taller de memoria: "lo que llevaban por encima, todo: relojes, hasta ropa, ropa fina, zapatos finos ¡no perdonaban! las gafas, un par de [botas] Brahama". Por eso en el pueblo solo quedaron tres personas (CNMH, taller de memoria 2, Sardinata, 2016).

Al año siguiente, en 2002, entraron a Chorrerones, recordada como una de las veredas en el corregimiento de Luis Vero a la que "le dieron más duro" y donde toda su población fue desplazada. Al llegar, los paramilitares asesinaron a un hombre adulto porque decían que tenía un hijo en la guerrilla, versión que es desvirtuada por la comunidad, y les dijeron a los pobladores: "tienen cuatro horas pa que desalojen porque aquí de gallinas pa arriba vamos a matar. ¡Vamos a bombardiar!", pues los paramilitares consideraban que allí estaba "el batallón de la guerrilla" (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016). De nuevo, en su recorrido, asesinaron, saquearon y destruyeron los bienes de la población.

4.3.1.4. El Tarra: el desastre

Posterior a la expansión por la zona baja de la región, en el año 2000, el Bloque Catatumbo inició su recorrido hacia la zona rural del municipio de El Tarra. Aunque dejaron atrás las masacres como estrategia de terror, optaron por los asesinatos individuales continuos y escalonados, que sumaron un número importante de víctimas mortales, pero que no eran noticia para los medios de comunicación regionales ni nacionales. Para llegar a El Tarra, generaron una guerra sicológica al intimidar, por medio de panfletos, a los habitantes. Anunciaban su llegada.

El comandante *Camilo* advirtió en junio de 1999 que uno de sus propósitos era tomarse Filo Gringo, al que consideraban bastión de la insurgencia. Estos avisos provocaron un desplazamiento masivo de su población que abandonó el corregimiento al conocer que los paramilitares habían iniciado su expansión hacia el medio y alto Catatumbo. Así, en agosto de 1999, de cerca de 1.200 personas que habitaban el corregimiento, solo quedaban 200. La mayoría de las casas estaban desocupadas. Las amenazas de su arribo se hicieron más persistentes a finales de enero de 2000 y "aunque diversas instituciones, como la Defensoría del Pueblo y ONG de derechos humanos, alertaban sobre la inminente acción paramilitar, el Estado colombiano no tomó las medidas pertinentes para proteger la vida, la libertad y los bienes de esta comunidad ante un ataque criminal[207]" (Asociación Minga y Fundación Progresar, 2008, página 83).

El 29 de febrero de 2000, un numeroso grupo paramilitar se tomó el desolado corregimiento de Filo Gringo, otro punto estratégico por ser la

207 Para ampliar información sobre las denuncias que hicieron diversas instituciones ante la llegada de paramilitares a Filo Gringo, (notinet.com.co, sf).

vía que comunica los cascos urbanos de Tibú y El Tarra y, el 3 de marzo, el caserío fue completamente arrasado:

> Los paramilitares tomaron el control de la vía, incineraron viviendas, tiendas comunitarias, los archivos de las Juntas de Acción Comunal, el colegio, vehículos y hasta la ambulancia. De las casas destruyeron candados y cerraduras y sacaron y quemaron ropa y colchonetas. Robaron electrodomésticos como plantas [eléctricas], televisores, VHS y equipos de sonido, saquearon las tiendas y retuvieron a 50 personas que no alcanzaron a desplazarse (Asociación Minga y Fundación Progresar, 2008, página 83).

En diciembre de 2001 los paramilitares se tomaron las veredas de Buenos Aires, San Martín, La esperanza, Puerto Catatumbo, El Diviso, La Paz, Bocas de Orú, San Isidro, Kilómetro 77, Kilómetro 78, Kilómetro 92 y Playa Cotiza, en la zona rural de El Tarra, además de la vereda La Angalia (Tibú).

> Estos hombres, uniformados y con brazaletes de las AUC, arrasaron con todos los cultivos de pan coger, se llevaron los animales y bienes de los habitantes y utilizaron a la población civil como escudo humano durante los enfrentamientos que tuvieron con la guerrilla en varios puntos, uno de ellos la vereda La Angalia, en el municipio de Tibú. Para apoyar sus acciones, los paramilitares utilizaron un helicóptero[208] privado de color blanco, que sobrevoló la zona todo el tiempo, al parecer para auxiliarlos mientras combatían con la guerrilla, recoger heridos y muertos y dejar provisiones (Asociación Minga y Fundación Progresar, 2008, página 84).

Esto generó un desplazamiento de 84 familias de las veredas Kilómetro 77, Bocas de Orú, El Diviso, Buenos Aires y Filo Gringo, que debieron

208 El uso de un helicóptero o el apoyo recibido por los paramilitares fue referenciado por personas consultadas en varios municipios.

ubicarse en el casco urbano del municipio (Asociación Minga y Progresar, 2008, página 85).

Luego la expansión fue hacia la vereda Tarra Sur, lugar que está en la memoria de las personas ya que allí "mataron a un abuelito porque llevaba un par de botas en una bolsa. Dijeron que eso era pa la guerrilla, lo agarraron a palo y lo mataron" (CNMH, diálogo con campesinos, Cúcuta, 2017).

Todo lo que pasó, pasó en las inmediaciones del Batallón Santander No 15, con sede en Ocaña, del Batallón Especial Vial Energético, con sede en Convención y de patrullas del Batallón Guanes y Luciano D´Luyer (Asociación Minga, 2001).

Después de haber entrado a El Aserrío, en Teorama, y de haber proferido múltiples advertencias, irrumpieron en el casco urbano de El Tarra el 17 de abril de 2002. "Cerca de 250 paramilitares uniformados y armados se concentraron en la vereda El Llano, conocida también como Presidentico, a kilómetro y medio de la cabecera, mientras el casco urbano era patrullado por paramilitares de civil en automóviles y motocicletas" (Asociación Minga, 2002). Un habitante lo recuerda así:

> Al ingresar al casco urbano del municipio, los paramilitares quemaron al menos 100 viviendas y varias fincas y destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Además, ordenaron a más de 400 moradores abandonar todas sus propiedades y dejar la región, o de lo contrario serían asesinados. Inicialmente atacaron el barrio Primero de Enero y El Tarrita y luego tuvieron un enfrentamiento con la Policía, al confundirla con un grupo guerrillero (Asociación Minga y Fundación Progresar, 2008, página 90).

Con la arremetida, del casco urbano de El Tarra se desplazaron líderes comunales y parte de la administración municipal, para proteger sus vi-

das y, en el caso de los servidores públicos, para poder seguir ejerciendo sus labores, desde un escenario de mayor seguridad y autonomía.

Después los paramilitares pasaron a las veredas La Primavera y San Javier, en San Calixto, cercanas al casco urbano de El Tarra. Las FARC que contaba con 700 hombres en armas en la zona, buscaron durante la última semana de febrero de 2002 reforzar su fuerza militar con la llegada de 200 guerrilleros, provenientes de la Columna Móvil Arturo Ruiz, para enfrentar e intentar expulsar a los paramilitares (El Tiempo, 2002, 8 de abril)[209]. Durante estos meses se presentaron numerosos enfrentamientos entre la guerrilla y las AUC, lo que aumentaba el riesgo para las personas y la dimensión de los desplazamientos forzados.

Así fue la expansión paramilitar en la zona del bajo Catatumbo, brutal en el municipio de Tibú y violenta en los municipios de Sardinata y El Tarra. Los paramilitares continuaron expandiéndose por el medio Catatumbo hacia Teorama y el alto Catatumbo. Sin embargo, cabe señalar que, en adelante, la comisión de hechos, aunque violentos, no tuvieron la misma dimensión.

4.3.1.5. Teorama: "da pena contar esto"

Una vez en el corregimiento tarrense de Filo Gringo y antes de entrar al casco urbano de El Tarra, los paramilitares del Bloque Catatumbo se dirigieron hacia El Aserrío en Teorama, un corregimiento que, de acuerdo con los relatos, contaba con 117 viviendas y cerca de 600 habitantes.

209 Durante el predominio paramilitar, las guerrillas se robustecieron en lo militar, por lo que, en el periodo posterior a la desmovilización paramilitar, quedaron fortalecidas, como se abordará el capítulo 6.

Llegaron el 10 de enero de 2002 y se asentaron durante seis días, sin cometer ningún asesinato. Luego siguieron hacia el municipio de Convención, subiendo por las veredas Santa Inés y Filo Bajo, en donde combatieron con el ELN que, para frenar el avance paramilitar, instaló minas antipersona en el recorrido, desplazando comunidades de veredas enteras.

> Así transcurre hasta el 20 de enero y el ELN se sube al cerro de La Fe, que eso pertenece al corregimiento de El Aserrío, la vereda La Fría y ahí se campamentan. Desplazaron totalmente la vereda, desplazaron lo que fue la vereda Cristalina, Guaduas, vamos a Luis Bajo el mal llamado Las Hormigas, San Luis Alto, el Diamante. Pero ya lo que es San Luis, esa vereda sí fue muy difícil porque los paramilitares permanentemente se asentaban en la carretera que conduce del corregimiento de El Aserrío al corregimiento de San Juancito y por ahí a todo el que encontraban lo echaban pal río La Fría. [Los paramilitares] llegan el 20 de enero [de 2002] y desplazan totalmente el corregimiento de San Juancito (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

El 15 de abril del mismo año y, luego de ubicarse en el Filo Paujil, regresaron al casco urbano de El Aserrío. Allí "la fuerza pública compartía con ellos. Da pena contar esto porque la fuerza pública [estaba] en la vereda La Batea y los paramilitares dentro del río" (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

De El Aserrío los paramilitares continuaron su incursión al corregimiento de San Juancito en donde asesinaron a varias personas. Allí se instalaron desde el 20 de enero hasta el 14 de abril de 2002. Un hecho significativo ocurrió el 25 de abril de 2002, paramilitares de *Juancho Prada* cometieron la masacre de Las Flores, conocida así porque se ejecutó en el cerro que lleva este nombre. En versiones libres exparamilitares confirmaron que esta acción se ejecutó porque se suponía que allí se iba a realizar una fiesta en la que participaría alias *Megateo,* del EPL. Así, con

alias *Arturo*[210] como guía, un grupo de 150 paramilitares incursionaron en el cerro y asesinaron a cuatro personas señaladas de ser colaboradoras de la guerrilla. A una de las víctimas la desmembraron y la arrojaron a una fosa (Verdad Abierta, 2011, 31 de octubre).

Algunas personas recordaron que, ante la inminente llegada del Bloque Catatumbo, en El Aserrío y en San Juancito se desplazó casi la totalidad de sus habitantes, tanto los de los cascos urbanos como los de las veredas. Un habitante de Teorama lo recordó: "¡cuando ellos llegan allá, comienzan la deserción de gente ¡virgen santísima! Vea, nosotros nos parábamos, (...) y la mujer me decía: mire, todo el mundo se está yendo, otra camionetada de gente, otro trasteo, otra familia que se va. Eso eran cuatro, cinco familias en el día que bajaban" (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

Ante la necesidad de desplazarse para proteger la vida, las personas optaron por regalar o vender a bajos precios sus pertenencias, incluyendo tierras y propiedades urbanas, lo que les significó un detrimento económico importante y acentuar su ya precaria situación en el lugar de destino. Así se forzó también a una ruptura en los vínculos de los habitantes con su territorio: "la gente se desplazó y regaló lo que tenía, lo vendió y se acomodó a otro método de vida en la ciudad o en otros municipios y optó por no regresar a su territorio o a su municipio" (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

En septiembre de 2002, el Bloque Calima llegó al corregimiento de San Pablo, en donde asesinaron a un hombre adulto. Contrario a lo sucedido en El Aserrío y en San Juancito, en San Pablo no se produjo desplazamiento masivo. En este corregimiento estuvieron pocas horas.

De esta manera, como lo narraron habitantes de la zona baja y media, se configuró la arremetida y expansión del Bloque Catatumbo a los mu-

210 Guerrillero capturado

nicipios de Tibú, Sardinata, El Tarra y parte de Teorama. En octubre de 2002, al resto de Teorama y, en particular, al caso urbano, llegó el Bloque Norte, configurando el cerco militar o "candado" al conjunto de la región.

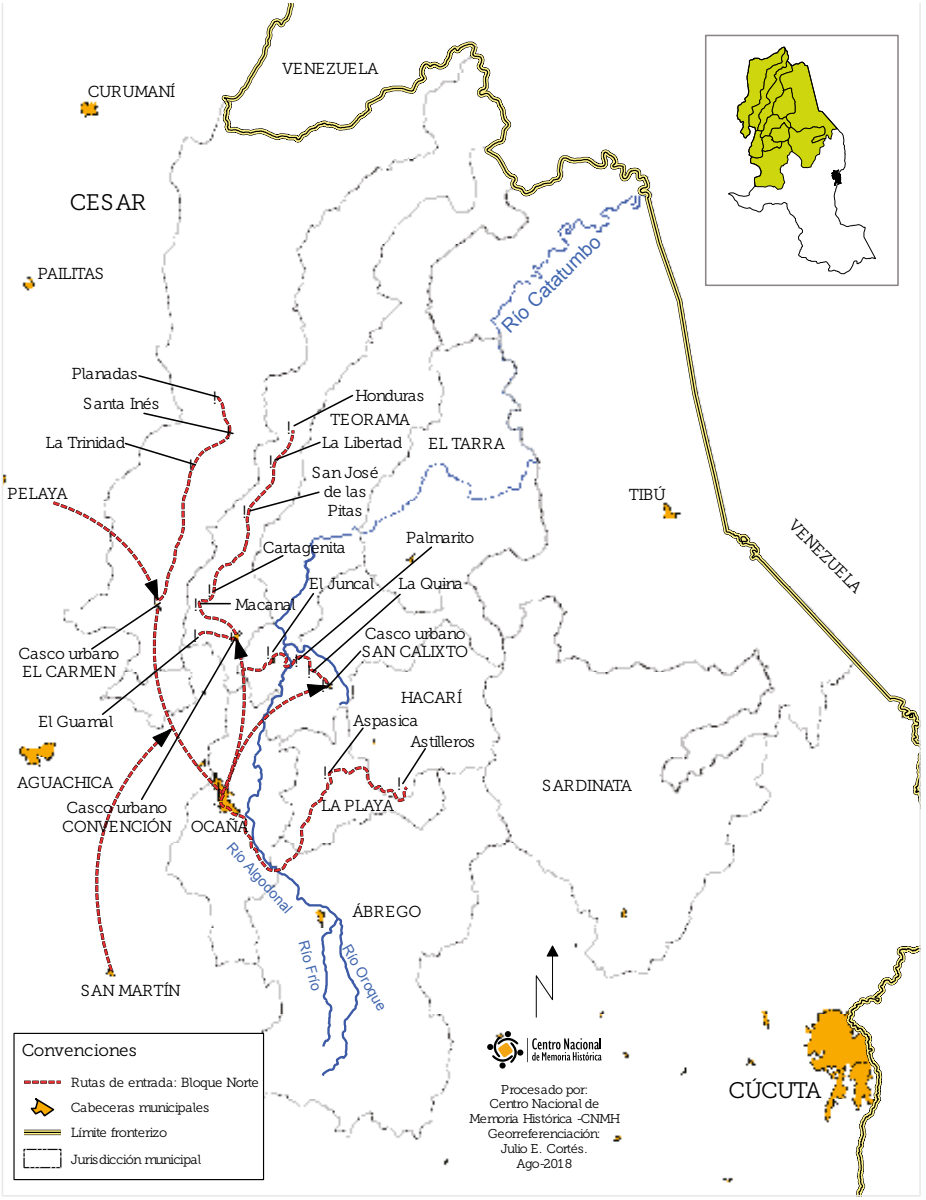
Las acciones del Bloque Norte, como se dijo, son las menos conocidas y difundidas, tanto por los habitantes de la zona baja, como por instituciones y medios de comunicación. En el siguiente apartado se hará una exposición de los hechos que más marcaron a los habitantes por municipio.

4.3.2. Expansión al alto Catatumbo

Vale reiterar que las personas en el Catatumbo no reconocen los nombres: Frente Héctor Julio Peinado Becerra y Frente Resistencia Motilona. Para hacer referencia a los grupos paramilitares presentes en Ocaña y el alto Catatumbo, habitantes del Catatumbo mencionan a "las autodefensas del sur del Cesar", "la gente de *Juancho Prada*", "la gente de *Jorge 40*", "las AUC", "las autodefensas" o "la gente del Bloque Norte". Fueron estas estructuras paramilitares quienes, de forma paralela a las actuaciones del Bloque Catatumbo, arremetieron en los municipios del alto Catatumbo, causando muerte, terror, despojo y destrucción.

Aunque no se tiene absoluta claridad sobre cuál de las dos estructuras (Frente Héctor Julio Peinado Becerra o Frente Resistencia Motilona) hizo presencia en qué municipios o veredas o corregimientos, siguiendo las sentencias, es razonable deducir que el Frente Héctor Julio Peinado Becerra se extendió desde los municipios de Rionegro, San Martín, San Alberto y Aguachica hacia Ocaña y La Playa y, luego a Ábrego y Hacarí. Y que el Frente Resistencia Motilona hizo presencia en Convención, El Carmen, Teorama, San Calixto y Hacarí.

Mapa 17. Rutas de entrada Frente Héctor Julio Peinado Becerra y Resistencia Motilona



Fuente, CNMH, 2018.

De acuerdo con lo narrado por los habitantes de la región, en Teorama fue "la gente de *Jorge 40*, el Bloque Norte" el que continuó con el control de este municipio, en total coordinación y complementación de acciones con el Bloque Catatumbo. Recuérdese que al casco urbano de Teorama llegaron el 24 de octubre de 2002, bajo el mando de alias *El Chivo*, luego, ingresaron al municipio de Convención.

4.3.2.1. Convención: sin población a la cual controlar

De acuerdo con los relatos de la población, las AUC entraron a Convención entre enero y febrero de 2002 para establecerse en gran parte del territorio. "Los paramilitares que entraron, entraron por la Policía normalito, normalito, con complicidad. Yo creo que esa gente venían del Cesar, de Aguachica, de Ocaña, porque ya en Ocaña había presencia" (CNMH, taller de memoria, Convención, 2016).

Montaron un puesto de control en Pelagorro, zona limítrofe entre Convención y El Carmen, y de allí se dirigieron a Mata de Enea en la vereda San Antonio, donde fue asesinado un habitante, como "forma de manifestarse en el municipio" y donde instalaron los primeros retenes. De allí continuaron a Macanal-Cartagenita y luego a Cartagenita, San José de las Pitas, La Libertad, Guamal, San Cayetano (donde pusieron otro puesto de control) y La Laguna.

Postulados a Justicia y Paz mencionaron que el Bloque Norte quería acabar con la guerrilla, en especial con el COCE del ELN y su comandante alias *Gabino*, quien creían se encontraba en el corregimiento de Honduras, al norte de Convención. Esto a través de una estrategia de

copamiento y expansión para cercarlos con el Bloque Catatumbo desde la zona baja y desde la parte alta con el Bloque Norte (CNMH, entrevista, hombre defensor de DD.HH., Bogotá, 2016). Esto coincide con los recuerdos de algunas personas sobre los lugares de irrupción paramilitar y su avance hacia sectores rurales, en especial a la zona centro-norte: las veredas La Trinidad, Miraflores y Honduras.

La irrupción paramilitar en Convención generó un desplazamiento masivo de población, uno de los más significativos en todo el Catatumbo que, sin embargo, tuvo características diferentes a los registrados antes. En este caso, pese a los cientos de personas desplazadas, se destacó el nivel de organización comunitaria, en esencia, de aquellas personas que se dirigieron a la selva. Las comunidades pusieron en marcha dos estrategias importantes, la primera, salir huyendo hacia el casco urbano de Convención, donde aún no habían llegado los paramilitares y, luego cuando las AUC tomaron control de la cabecera municipal, hacia Ocaña y Cúcuta.

La segunda, hacerse invisibles buscando la oscuridad de la selva: para ello, miles de personas encontraron como destino final una de las comunidades de los indígenas Barí, quienes les brindaron apoyo y les permitieron protegerse en medio de una situación de alta vulnerabilidad. Es significativo en esta opción que las personas, pese al miedo y al riesgo, optaron por permanecer en el territorio del Catatumbo manteniendo, a conciencia, su identidad campesina. Conocedores de lo sucedido en el bajo Catatumbo, decidieron dejar a los paramilitares sin población a la cual controlar. Este desplazamiento es recordado por un defensor de los derechos humanos que acompañó el proceso:

> A partir de 2002 la gente hizo un movimiento de fototropía negativa y positiva. Una gente, la mayoría, buscó la selva. Se fueron para territorio indígena de los Barí. Una parte de la pobla-

ción, más de mil personas, se establecieron en Cúcuta. Otras mil quinientas más o menos, en la cabecera municipal de Convención. Y unas quinientas o más, en la cabecera municipal de Ocaña. Esas gentes que salieron a las cabeceras [municipales] eran como la fototropía positiva, en busca de una luz. Los otros buscaron la oscuridad en la montaña. Pero allí en esa oscuridad de la montaña es donde se construye lo que hoy es la organización social del Catatumbo Cisca. Esa fototropía negativa hace que por el miedo busque la oscuridad, hacerse invisible en lo oscuro de la selva, pero también no dejar de ser lo que es en su identidad campesina.

Hay una estrategia social muy bonita que hizo esa gente que se quedó, que fue dejar las cabeceras veredales solas. Entonces cuando llegan los paramilitares a San Juancito, a San Pablo, al Aserrío, a La Cecilia, a La Válvula, a Cartagenita, a La Trinidad, a La Libertad, [los paramilitares] encuentran casas abandonadas con candado. Una tropa necesita [de] gente y al no tener gente a mano, con quien hablar siquiera, cómo enamorar a una joven y [hacer] sus cosas militares, entonces no hay dónde ejercer el control. Eso hace que los paramilitares allí tengan una debilidad en su táctica militar de sostenimiento, porque no encontró población (...). Era mucha gente. Eran más de dos mil, tres mil personas en las montañas (...).

La otra gente [dijo]: salgámonos más cerquita, para los pueblos (...). Ya para el 2003 la gente que había estado en Convención [desplazada] decide irse a Cúcuta, porque el cerco paramilitar no los dejaba regresar a sus fincas de San Juancito, La Libertad y otras cabeceras de corregimientos. Ven que Ocaña es más riesgoso por la connivencia que la fuerza pública y algunos funcionarios estatales le dan -en corrupción absoluta- al paramilitarismo y todas las agresiones que eso causaba: desaparición, ejecuciones, asesinatos selectivos. La gente optó por irse a Cúcuta como un lugar

> más seguro (CNMH, entrevista, hombre defensor de DD.HH., Bogotá, 2016).

No eran solo los habitantes de Convención los que se estaban desplazando, también lo hicieron personas de El Aserrío, San Pablo y San Juancito (de Teorama) y del municipio de El Carmen. Muchas de ellas se dirigieron hacia Güasiles y a Honduras, vereda en donde fueron acogidos por familiares y amigos y, aunque era una vereda pequeña con cerca de cien habitantes, los desplazados se encontraron con condiciones favorables que les posibilitaron establecerse con dignidad.

Sin embargo, les tocó salir de Honduras porque las AUC seguían atacando y "en la medida que iban avanzando, iban haciendo los asesinatos, iban torturando, iban desapareciendo, iban cogiendo gente de la base campesina para que les ubicaran los caminos". Según relatos de habitantes de la región, con los paramilitares se encontraban algunos miembros de los batallones García Rovira y Héroes de Saraguro de Tibú (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

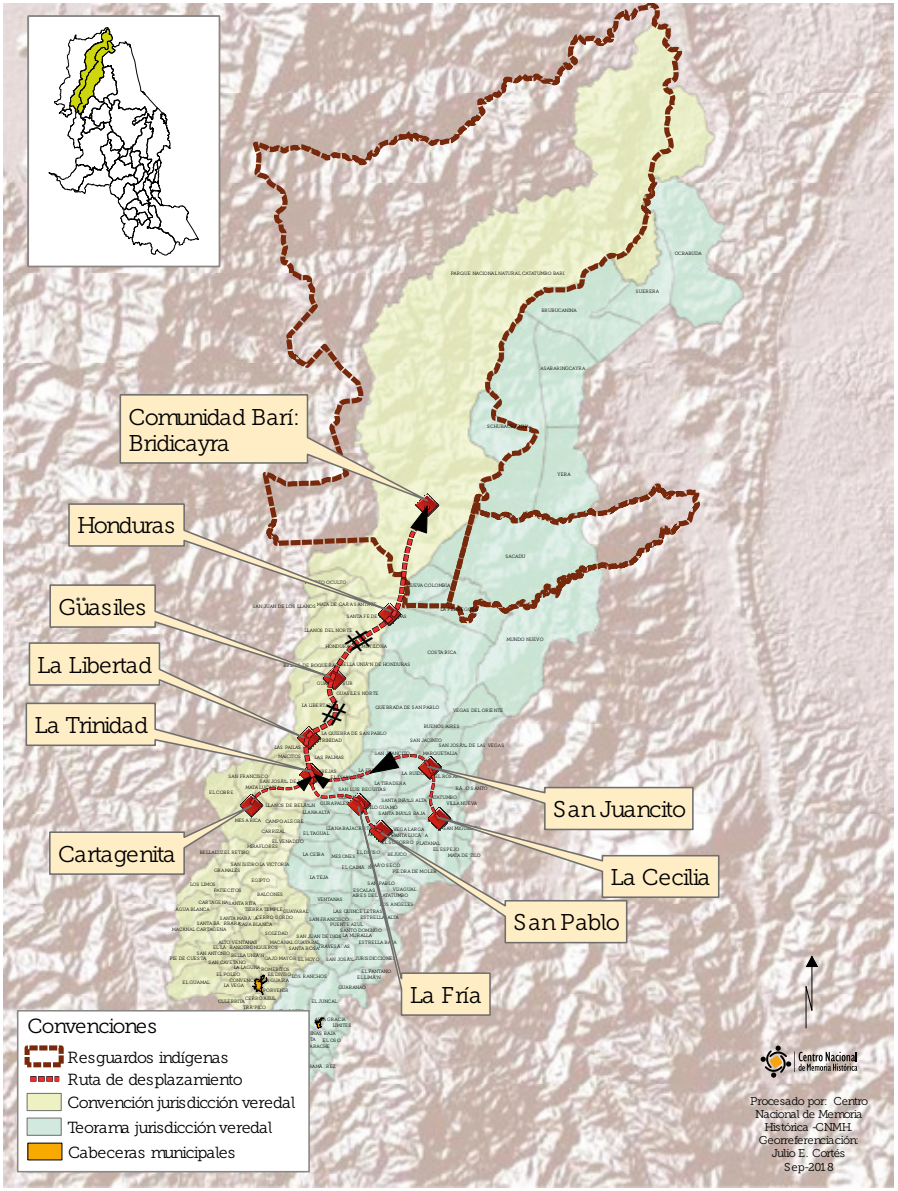
De esta manera, los paramilitares llegaron a la vereda Bella Unión, cerca de Honduras, en donde fueron atacados por la guerrilla con cilindros bomba. Las guerrillas enfrentaron a los paramilitares con acciones ofensivas y en defensa militar de un territorio en el que habían tenido presencia desde los años ochenta. Estos enfrentamientos se dieron en el cerro Güasiles, entre Honduras y La Libertad, zona limítrofe entre los municipios de Teorama y Convención:

> La incursión que ellos hacen de Cartagenita hacia abajo, centro y norte [de Convención], duraron aproximadamente mes y medio en esa incursión, en enfrentamientos constantes, más que todo en la vereda La Libertad, Trinidad, Güasiles Norte y Güasiles Sur (...), entre paramilitares, ELN y FARC. La ELN y las FARC se unieron para combatir la incursión paramilitar, obviamente

> [los paramilitares] con ayuda del Estado, porque en ese entonces caían hasta helicópteros allá a llevarles comida y un helicóptero tiene que pedir autorización para moverse, yo no creo que eso sea tan fácil, entonces tenían comunicación directa con el Estado. Alcanzaron a entrar hasta una vereda que se llama Bella Unión, eso queda aproximadamente a media hora de Honduras, cerca de la comunidad Barí, a Biridicayra. Allí ya son derrotados los paramilitares y ellos retroceden y se asientan totalmente en Convención [casco urbano] y colocan una base (CNMH, taller de memoria, Convención, 2016).

Los pobladores continuaron desplazándose "más hacia dentro", a más de ocho horas de Honduras caminando, llegando a las comunidades de Biridicayra y Corroncayra en territorio Barí, zona que se convierte en punto final del recorrido y punto de encuentro de diversos grupos poblacionales que se estaban desplazando, incluyendo personas del Cesar que huyeron entre 2000 y 2002 por la acción paramilitar en este departamento.

Mapa 18. Ruta de desplazamiento corregimientos de Teorama y Convención



Fuente, CNMH, 2018.

La Asociación Minga, organización defensora de derechos humanos con trabajo en la región[211] empezó a acompañar a las comunidades en ambos procesos de desplazamiento. Con la población que se dirigió a la selva, Minga medió en el proceso de acogida por parte de los Barí y realizó labores humanitarias, como el traslado de comida, médicos y enfermeras en helicóptero a la zona. De esta manera se consolidó un proceso de solidaridad y resistencia y una fuerte alianza indo-campesina, en el que fueron protagonistas el Pueblo Barí y las comunidades organizadas alrededor de Asobobalí[212].

El pueblo indígena permitió que los campesinos desplazados se establecieran en su territorio y que desarrollaran actividades productivas para posibilitar su manutención, algunas actividades como trillar arroz, sembrar caña y hacer panela fueron desarrolladas en conjunto.

Las personas que se habían desplazado a Ocaña y que continuaron sintiéndose en riesgo, decidieron trasladarse hacia Cúcuta en donde fueron acogidos por el Centro de Migraciones de la comunidad scalabriniana. Desde allí Minga, Codhes (Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento), Cencoser, instituciones del Gobierno como la Red de Solidaridad Social y agencias de cooperación empezaron a acompañar un proceso de retorno, entendido como *un traslado* de personas a sus sitios

211 La Asociación Minga trabaja en el Catatumbo desde 1993, y junto con otras organizaciones como la Fundación para la Educación y la Cultura Popular Fundicep, hace acompañamiento desde una apuesta de educación popular y mecanismos en la exigibilidad de derechos humanos, creando y fortaleciendo los Comités de Derechos Humanos municipales de la región. En 2003, llegó a la zona el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y otras organizaciones.

212 El sector del Bobalí se encuentra en su mayoría ubicado al norte del municipio de El Carmen, pero cubre la zona fronteriza entre el Cesar (municipios de Curumaní, Pailitas y una porción de Pelaya), el Catatumbo (zona norte de los municipios de El Carmen y Convención) y la frontera con Venezuela. En el proceso de colonización del Bobalí, las personas empezaron a organizarse en juntas de caminos, juntas de vecinos y posteriormente en JAC, momento cuando se crea la Asociación del alto, medio y bajo Bobalí Asobobalí. Esta organización –que aún existe- junto con las comunidades Biridicayra y Corroncayra del pueblo Barí, se solidarizaron y dieron acogida a la población desplazada.

de origen, dado que las garantías y condiciones de protección y prevención de los derechos humanos, en especial, el de la vida no estaban dadas para que lo hicieran sin acompañamiento.

4.3.2.2. San Calixto: grave vulneración de los derechos

En San Calixto, los habitantes narraron que a ellos "les tocó la gente del Bloque Norte, los paramilitares de *Jorge 40* y cuando fue la incursión general, la grande, también estuvo la gente de Mancuso" (CNMH, entrevista, hombre defensor de DD.HH., Bogotá, 2016). Recuerdan que las AUC irrumpieron en este municipio entre octubre y noviembre de 2002 por La Sabana (zona que comunica con Ocaña), se dirigieron hacia Palmarito y de allí empezaron a expandirse hacia La Cantina, La Quina, San Roque, La Taya, Burgama, la Zona Norte, Quebrada Grande y Casas Viejas, a todas las veredas de la zona central y al casco urbano.

La arremetida paramilitar a Palmarito en 2002 fue recordada como brutal porque se dio además con bombardeos de la fuerza pública, situación de alta vulneración y riesgo para la población, tal y como lo recuerdan habitantes de este municipio:

> Participante 1: Mientras los paramilitares estaban en Palmarito en tierra, en aire estaba el Ejército. Después descargaron el avión, [estaba] el Ejército y el CTI, Sijin, la Fiscalía y llegaron a requisar la casa y yo les dije: ¿usted tiene orden de allanamiento?
>
> Participante 2: Cuando el enfrentamiento de Palmarito, los helicópteros estaban tirando mucho a la población, a las fincas,

> todos los aviones tirando plomo y eso es peligroso con la población civil. Entonces la Defensoría del Pueblo llegó al caserío y la Personería. El mismo día llegaron a hacer allanamiento a las casas, ellos llegan a requisar sin orden de allanamiento (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

Esta situación de grave vulneración de los derechos de los habitantes y la comisión de varios actos de violencia produjo un desplazamiento con el cual Palmarito quedó desocupado, como lo refirieron en el ejercicio colectivo de memoria:

> Llegaron a Palmarito, alias *Tiburón*. Llegaron a maltratar a la población civil, maltrato físico y mental. Lo sacaban a uno de la casa. A un muchacho que no debía nada lo asesinaron, lo despresaron y le pusieron cinta en la boca para que no gritara, para que tuviéramos temor. Llegaron a violar y a secuestrar a la población civil. Llegaron a hacerle tiros a las casas. Tumbaron la torre de la iglesia y las puertas de la escuela. Los animales se los comieron: los puercos, los ganados, las gallinas y las tiendas. Había tienda comunal y tienda de otras personas para la población. Nos tocó dejar el caserío solo, desplazarnos para otros lugares por el temor y el miedo. Cuando llegamos todo lo habíamos perdido (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

Los paramilitares entraron también a La Laguna, La Cristalina, Macondo, San Antonio, Santa Clara, El Caracol, El Perdido, La Fortuna, Santa Catalina, La Esperanza, San Javier, La Cristalina y El Roble, veredas en donde asesinaron, torturaron, desaparecieron y cometieron violencia sexual. Por este copamiento territorial y la instauración del terror, la mayoría de la población se desplazó y perdió lo que tenía, muchas de las personas vendieron sus viviendas a bajos precios, "la gente lo que quería hacer era pal viaje" y habitantes del pueblo "aprovecharon" y se hicieron a numerosas propiedades: "compraron cinco o siete casas". Sucedió con

fincas, ganado y animales "porque no había más que hacer" (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

Así, Convención y San Calixto vieron parte significativa de sus territorios invadidos y violentados por la presencia y accionar paramilitar. Los desplazamientos fueron importantes. En este marco, La Playa tuvo características particulares que permitieron a su población no sufrir los embates de la violencia paramilitar de forma tan masiva.

4.3.2.3. La Playa de Belén: intimidación y dolor

El municipio de La Playa de Belén fue declarado Patrimonio Nacional por el Ministerio de Cultura en 2005, dada la preservación del estilo colonial que caracteriza su cabecera municipal, además, es reconocido porque alberga el parque nacional Los Estoraques, lo que le otorga un énfasis turístico especial. Esa característica ha generado -hasta la actualidad- una afluencia importante de personas externas a la región y una presencia mayor de instituciones diversas. Es posible que esto explique -en parte- porqué los paramilitares tuvieron una presencia corta y menos extendida.

En la Playa de Belén, que cuenta con solo dos corregimientos, la incursión paramilitar fue en particular en la cabecera del corregimiento de Aspasica, donde irrumpieron en 2003 con una acción inicial de intimidación:

> El primer día que llegaron los paramilitares a Aspasica habíamos bastantes porque había un partido de fútbol, y había bastante gente en el pueblito. Cuando [vimos], ahí [estaba] el Ejército [diciendo]

> que: una requisa, pero nosotros no sabíamos quién era. Nos quitaron la cédula y yo dije: esto está como raro. Cuando no sé quién dijo: esos son los paramilitares que están aquí. Nos tenían ahí (...), no nos dejaban movernos, manos a la pared, como un arrume de cerdos (...) acorralaron todo el pueblo y [decían] que iban a hacer una masacre ese día. Lo que valió fue que el Padre (...) habló y, de pronto, lo que iban a hacer quedó así. Nosotros nos fuimos y esa gente quedó ahí y empezaron a matar gente en el pueblo (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016).

Luego de entrar al casco urbano de Aspasica, se extendieron a la vereda Miraflores donde permanecieron cerca de un mes, desde allí emprendieron su recorrido hasta Astilleros, en el municipio de Hacarí. Luego de esa incursión regresaron a La Playa, instalaron un campamento permanente en La Peña "y mataron a una vecina [en Aspasica]. A ella también la sacaron de la casa, la masacraron, tenía dos niños, la dejaron botada en la carretera, amarrada" (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016).

En La Playa de Belén los paramilitares no desplegaron un copamiento territorial tan amplio como en otros municipios del alto Catatumbo, ni sus acciones produjeron -en términos comparativos- un número elevado de víctimas mortales. Sin embargo, al relatar sobre la presencia de las AUC en su municipio y los hechos que produjeron, las y los playeros entrevistados lo viven con igual intensidad y dolor. Situación similar ocurrió en el municipio de Hacarí en donde, si bien la presencia paramilitar fue circunstancial y se ejecutaron menos tipos de violencia, las víctimas que sufrieron la victimización se vieron en alto grado afectadas.

4.3.2.4. En Hacarí: la solidaridad de la comunidad

Del recorrido por todos los municipios de la región y de las conversaciones con sus habitantes, fue en Hacarí en donde se encontraron menos referencias a la violencia paramilitar. Personas con las que se conversó recordaron que los paramilitares no hicieron presencia en todos los corregimientos, ni llegaron al casco urbano del municipio. Las memorias se centran en la salida de los paramilitares desde la vereda Miraflores, de La Playa de Belén y su llegada al corregimiento de Astilleros, el 24 de noviembre de 2003. Una vez allí, entraron a la casa del encargado de la tienda comunitaria y a su llegada lo torturaron física y sicológicamente, robándole todas sus pertenencias:

> Llegaron a mi casa a las cinco de la mañana (...). Me agarraron, me amarraron, me pegaron, me acribillaron y me amenazaron muchisísimo (...). Me pasaron un cuchillo por acá [señala el cuello], otro me ponía aquí una pistola [señala la sien] y me hacía la cruz. A mis niñas (...) les dijeron que las iban a matar, que me iban a matar, que yo pertenecía a un grupo al margen de la ley y, al contrario, uno no conoce eso, sino que uno es un campesino. Yo como tengo una tiendita, tengo 23, 24 años de tenerla, [decían] que era supuestamente de la guerrilla, que yo la administraba (...). Me robaron todo lo que tenía y me dijeron que [me daban] dos horas para que saliera. ¿Qué pasó con todos los bienes? se los llevaron, buscaron carro y se los llevaron. En Ocaña viví por ahí en los andenes, porque qué más hacía (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016).

Durante este evento, varias personas de la comunidad que escucharon lo que estaba ocurriendo, se dirigieron hacia la casa del administrador de la tienda a prestarle ayuda, en un gesto de enorme solidaridad:

> Llegué yo [y le dijeron los paramilitares]: ¿usted pa dónde va? (...). Yo miré la desolación y todo ahí. Yo busqué a [nombre], pasamos para adentro. Eso estaba lleno de militares, cada uno con una bolsa, ya habían cogido lo más útil (...) cuando llegó la comunidad, todos en el preciso momento. Yo me lo llevé pa mi casa, le brindé almuerzo. Una vecina que llegó [dijo] ¡más bien que se vaya! En esas llegó el señor sacerdote y lo sacó y se lo llevó (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016).

Las personas recuerdan que de Astilleros se fueron y no volvieron a entrar a otras veredas de Hacarí. Los paramilitares se regresaron para Aspasica. Sin embargo, aunque no fue masiva la presencia paramilitar, en Hacarí se desplazaron las comunidades de las veredas San Miguel, San Cayetano y la mayor parte de Manzanares, hacia el casco urbano del municipio:

> [Los paramilitares] se metieron el viaje, se llevaron todo el ganado de la familia Ascanio, de [la vereda] San Miguel, les quitaron siete vacas de ordeño y el reproductor, ¡todo se lo llevaron! Los piscos los mataban y los que no podían comerse los dejaban muertos, eso hicieron un desastre muy verraco. Y anunciaban que ya iban para la vereda Santa Catalina [en San Calixto]. Luego se metieron a la vereda La Unión y a la vereda Caracol, que ahorita es corregimiento, donde mataron cuatro personas: en la vereda La Unión mataron dos y en Caracol mataron dos. Los encontraron en su casa y los sacaron y ahí mismo los masacraron. Por la parte de Santa Catalina estuvieron hasta El Perdido [en San Calixto], recogieron todo lo que había y a nosotros nos tocó desplazarnos (CNMH, entrevista, hombre campesino, Cúcuta, 2016).

La explicación que los hacaritenses dan a que los paramilitares sólo llegaran al corregimiento de Astilleros en su municipio y no tomaran control del casco urbano ni de otros corregimientos, es "porque tenían miedo, porque sabían que de allá no podrían salir vivos" por causa de una fuerte presencia guerrillera, en especial del EPL.

4.3.2.5. El Carmen: momentos para no recordar

Los paramilitares hicieron su incursión en El Carmen en 2003, municipio donde ya se encontraba población desplazada del Cesar. Las AUC iniciaron su recorrido en Guamalito, donde se asentaron y pusieron una base permanente, escenario de varios asesinatos. Recuerda la comunidad el contubernio entre la fuerza pública y los paramilitares:

> No es secreto pa nadie que la policía trabajaba con ellos. En Guamalito recuerdan a un muchacho que fue a comprar una medicina y llegó la policía, agarró al muchacho y se lo entregó a los paramilitares y ellos lo mataron, lo que produjo un desplazamiento para [el casco urbano de] El Carmen (CNMH, taller de memoria, El Carmen, 2017).

Luego por Tronadero transitaron hacia la vereda Las Vegas de Aguilar, en donde robaron ganado, para pasar a la vereda Santa Inés hasta la vereda Planadas. De los recuerdos en torno a hechos emblemáticos sobresale la entrada paramilitar a Santa Inés, ubicada al centro del municipio, comunidad descrita como vital y alegre, que vio modificada por completo su vida cotidiana dada la masacre ejecutada por el Bloque Norte, que llegó a la vereda con un desertor del ELN:

> La vereda Santa Inés fue un caseriíto de mucha tranquilidad. Eso diario vivían en fiesta, vivía todo tranquilo. Pero fue al entrar ese grupo que acabó con la vida de muchos seres. ¡Ver que eso quedó en ruinas! Son momentos que uno no quisiera ni recordar, porque mirar un hermano, amigos criados desde pequeños hasta grandes y mirarlos en la puerta de la casa muertos, con cinco, diez tiros en el pecho (CNMH, taller de memoria, El Carmen, 2017).

La incursión paramilitar a esta vereda se dio el 24 de diciembre de 2004, día de navidad y en medio de las fiestas de fin de año. Entraron a la casa de una familia y tomaron a la fuerza a todos sus integrantes, incluyendo un hombre adulto con discapacidad y a un niño. "En Santa Inés había una fiesta. A los que estaban ahí los agarraron, los maniaron[213], los tiraron al piso y eso hicieron y deshacieron con ellos. Ya cuando aclaró el día... buscando a la gente. Mataron personas que no debían, como matar un niño de cinco años" (CNMH, taller de memoria, El Carmen, 2017).

Las casas "las desbarataron a plomo", dejaron las puertas "abiertas de par en par", las tiendas las saquearon y "todo se quedó en una ruina, todo se lo llevaron. Eso fue muy bravo" (CNMH, taller de memoria, El Carmen, 2017). También fue recordado el asesinato de personas en la vereda Vegas de Motilonia. Después de la masacre en Santa Inés, los paramilitares se fueron y regresaron para hacer saqueos, no para instalarse en la vereda.

Estos hechos generaron un desplazamiento de familias enteras hacia las montañas: "yo, cuando eso tenía la mujer embarazada y seis hijos. Dormíamos en el ranchito que teníamos, como a una hora en una montaña y así nos llevamos como dos meses. Ya cuando mataron la gente allá en Santa Inés fue donde nos desplazamos para La Libertad. Ya en La Libertad ya había salido un poco la violencia y ya estaba aquí para el lado de Guamalito" (CNMH, taller de memoria, El Carmen, 2017).

4.3.3. Establecimiento del control paramilitar

Luego de la incursión los paramilitares se establecieron en la mayoría de los municipios e instauraron un control social y territorial que

213 Les ataron las manos.

modificó por completo los hábitos y las costumbres de sus habitantes. Además, establecieron un régimen de terror que mantuvo a la población sometida. Durante su permanencia en la región, las comunidades fueron sometidas al arrasamiento, la humillación y el silencio, vivieron distintos tipos de violencia y fueron estigmatizados.

Representación de presencia paramilitar en el Catatumbo. CNMH, Taller de memoria, Convención, 2017. Fotografía: Jaime Landínez para el CNMH.

Los paramilitares ya instalados en la región, despojaron a las personas de sus pertenencias, incluso de los bienes enseres de las viviendas, dando el mensaje de que, bajo su dominio, podían disponer de todo lo que encontraban a su paso, produciendo o aumentando la precariedad y el detrimento

económico de las comunidades. Al ser despojados del fruto del trabajo y con la irrupción en el espacio íntimo de la casa, en la cama, las cobijas, la cocina, los alimentos, no solo se devastó el entorno de los habitantes, sino además se instaló entre las y los catatumberos una percepción de humillación.

La humillación y el arrasamiento son dos referentes que vinculan los relatos de las personas que padecieron el accionar paramilitar. La humillación se configuró en torno al trato que este actor armado estableció con la población. Las personas debieron renunciar a su criterio y a sus formas de vivir para intentar salvar la vida: "el pueblo vivía sumiso a ellos y uno asustado, entre menos saliera de la casa era mejor, porque uno estaba en la casa con temor, pero si salía había más temor" (CNMH, taller de memoria, El Carmen, 2017).

Por ejemplo, entre otros en el municipio de Tibú, los paramilitares prohibieron que se les mirara a los ojos. Esta obligación además de la imposibilidad de rebatir sus acciones aumentó la relación de dominación que dio forma a la humillación, a los tratos crueles, a la estigmatización, a las amenazas y al desdén con que los paramilitares trataron a las comunidades.

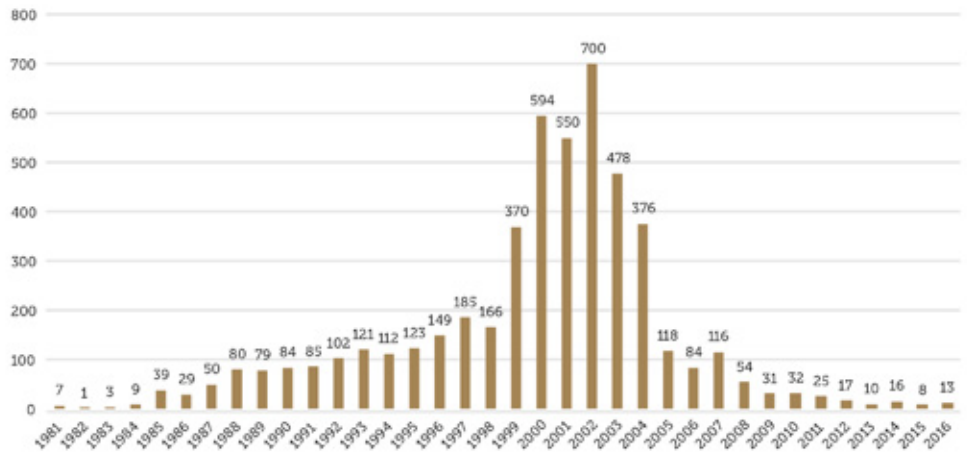
4.3.3.1. Múltiples tipos de violencia

Fueron diversos los tipos de violencia que se experimentaron durante el tiempo en que los paramilitares se establecieron en la región: asesinatos, desaparición de personas, violencia sexual y masacres, entre otros.

El OMC tiene documentados para toda la región 832 casos de asesinatos selectivos entre 1999 y 2006. Este tipo de violencia es recordada con frecuencia y relacionada por la comunidad con hechos de tortura,

tratos inhumanos que no sólo prolongaron cruelmente el sufrimiento de la víctima, sino que generaron terror, a través, por ejemplo, de la sevicia pública: "[A las víctimas] les echaban gasolina por encima vivos, agua caliente, (...) y fuera de eso los agarraban, les machacaban los dedos, las manos, les abrían los ojos, les rajaban la lengua" (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016). De hecho, es significativo el aumento de los casos de homicidios en la región durante el periodo paramilitar (Gráfico 12).

Gráfico 12. Víctimas de homicidio de todos los actores en el Catatumbo 1981-2017



Fuente: CNMH-OMC, fecha de corte 29 de mayo de 2018.

Los asesinatos, así como las masacres, tuvieron directa vinculación con la desaparición de personas[214]. El OMC ha documentado 988 casos de desaparición forzada atribuibles a paramilitares en la región. Solo en Tibú se cometieron 740, en El Tarra 57 y en Sardinata 39[215], por lo que se puede deducir que el Bloque Catatumbo fue el que más utilizó esta tipo de violencia[216].

Sobre la violencia sexual fueron relatados hechos contra niñas a partir de los 10 o 12 años y mujeres casadas. Ellas fueron tratadas como propiedad, se "pedían en calidad de préstamo" a sus esposos. Las mujeres embarazadas fueron especialmente violentadas, particularmente por el Bloque Catatumbo: "Les encantaban las mujeres embarazadas y las mataban después de que las violaban (...). Cómo les parece que les veían la barriguita y les encantaba y saben qué decían: que la patilla era buena[217] (CNMH, taller violencia sexual, Ocaña, 2016).

El OMC tiene documentados 255 casos de violencia sexual cometida por paramilitares en el Catatumbo, destacándose los municipios de Tibú con 88 casos, Teorama con 59, San Calixto con 42, Ocaña con 20 y El Tarra con 30.

---

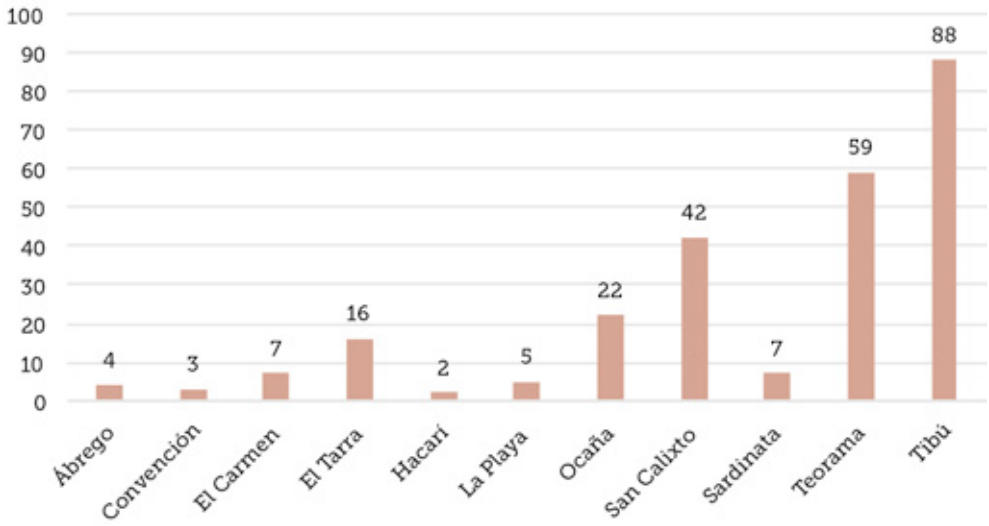
214 En algunos casos se trató de personas "dadas por desaparecidas", que en el contexto y dado el conflicto armado interno y, desde una postura humanitaria, se refiere a aquellas que, aunque no se incluyen en el tipo penal como personas desaparecidas forzosamente, se hallan desaparecidas y son buscadas por familiares o allegados (CNMH, 2016b, página 29).

215 De 1.889 víctimas de desaparición forzada, el total de casos documentados por el OMC en la región entre 1980 y 2017, los grupos paramilitares cometieron el 52 por ciento, el 14 por ciento fueron grupos armados no identificados, el 21 por ciento desconocidos, el 8 por ciento las guerrillas, el 3 por ciento agentes del Estado, y el 1 por ciento grupos posdesmovilización.

216 El Frente Fronteras, adscrito al Bloque Catatumbo, llevó a cabo la abominable práctica de desaparecer 560 cuerpos en hornos crematorios (El Tiempo, 2014, 6 de diciembre) en las veredas Juan Frío de Villa del Rosario y Puerto Santander, como estrategia para ocultar la evidencia de asesinatos cometidos en Cúcuta y otros municipios de su área metropolitana, según las órdenes de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Así lo confesó el comandante paramilitar Jorge Iván Laverde Zapata en 2008 durante versión libre (Osuna, 2015).

217 La expresión *patilla* hace alusión al vientre crecido de las mujeres embarazadas.

Gráfico 13. Distribución de víctimas de violencia sexual de grupos paramilitares 1980-2005



Fuente: CNMH-OMC, fecha de corte 29 de mayo de 2018.

Este tipo de violencia iba dirigido a producir terror en la población y fue usado como mecanismo para obtener el control del cuerpo de las mujeres, del territorio y de las comunidades en su conjunto. Las lesiones que la violencia sexual produce tienen una duración indeterminada. Durante el trabajo de campo se conoció de mujeres que después de 10 o 15 años del hecho victimizante, lo sienten como reciente. En particular, los hechos en los que la agresión sexual se dirigió también contra sus hijos, estos generan sentimiento de culpabilidad y aumentan la dimensión de su tragedia. Derivan en depresiones difíciles de superar, incluso cuando han contado con algún nivel de acompañamiento psicosocial.

Estas sensaciones se intensifican por los niveles de precariedad económica en los que se encuentran por diversas razones, una de las cuales es justo la depresión, pues los continuos ataques de llanto y la sensación de

no poder superarlo les dificulta conseguir una actividad que les produzca ingresos económicos, o lograr la estabilidad emocional para mantenerla. Además de las violaciones sexuales, los paramilitares perpetraron otros actos de violencia sexual como el aborto, la cohabitación y la desnudez forzados.

Otro tipo de violencia referido por los habitantes de la región fue el secuestro. Así, entre 1999 y 2006 el OMC tiene documentados 302 casos, delito en el que se destacan los municipios de San Calixto con 110 casos y Teorama con 71, seguidos por Ocaña con 35 casos, El Carmen con 32 y Tibú con 28. En los relatos fue mencionado con frecuencia que durante los secuestros que -podían durar entre unas cuantas horas y varios días-, los paramilitares infringían torturas e intimidaciones a las víctimas y robaban sus pertenencias.

4.3.3.2. Estigmatización: tildaban a todos de guerrilleros

La representación que los paramilitares construyeron para aludir a cómplices, colaboradores o militantes de las guerrillas fue amplísima y desvirtuó los límites entre el enemigo en armas y la población civil. Nominando a los otros como guerrilleros erigieron un estigma que usaron como explicación de la violencia indiscriminada que perpetraron.

En un contexto en donde se habían establecido tres guerrillas, los supuestos vínculos que los paramilitares le atribuían a la población eran muy variados y podían involucrar acciones como vender alimentos a los combatientes, permitir su paso por las propiedades o ser saludados por guerrilleros.

La estigmatización fue generalizada, cualquiera era susceptible, en cualquier momento y lugar, de ser señalado como guerrillero y, en consecuencia, ser violentado. Así, por ejemplo, les revisaban las manos para comprobar las huellas que deja el trabajo en el campo, en ausencia de callos, heridas o tierra, se les tildaba de guerrilleros. Los Barí también fueron estigmatizados de ser colaboradores o integrantes de la guerrilla:

> Una vez cogieron a uno [un campesino]. Iba yo como pollito asustado. [Los paramilitares] me descargaron cinco, seis bultos de [plátano] hartón y me lo hicieron perder para llevar pa la familia. Y yo asustado. Ellos decían que esos plátanos los llevaba pa los guerrilleros y el cacao también. Eso mencionaban [de] todo y cuando decían: guerrillero, yo estaba asustado, temblaba, así como un pollito frío (CNMH, grupo focal 2 Barí Tibú, 2017).

Sin embargo, pese a que fue generalizado, hubo tres poblaciones más enfáticamente señaladas: miembros de iniciativas organizativas, habitantes de zonas entendidas como guerrilleras y personas con relaciones de consanguinidad o allegados a presuntos combatientes o colaboradores de los grupos insurgentes.

Así, el rotulo de guerrillero se atribuyó a las personas organizadas en colectivos, que estuvieran involucradas en iniciativas de trabajo con y para las comunidades, como miembros y presidentes de las JAC, sindicalistas o líderes sociales. Sus intentos de reunirse, planear actividades, desarrollar marchas, continuar con las tiendas y cooperativas, fueron irrumpidos por acciones paramilitares en su contra. Todo intento de reunión entre campesinos fue caracterizado como amenazante por los paramilitares: “si nos reuníamos era porque éramos guerrilleros” (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

> Para los paramilitares eran guerrilleros los sindicalistas, los presidentes de las juntas, los miembros de las ONG, los líderes popula-

> res, los miembros de partidos de izquierda, todos eran guerrilleros y todos esos eran objetivo militar (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

Las acciones de amedrentamiento desplegadas por los paramilitares, en particular, en contra de las personas que hacían parte de las JAC, implicaron su desestructuración y con ello la pérdida del tejido social que se había construido alrededor del trabajo mancomunado y la toma de decisiones en colectivo. El escenario local de participación y autonomía fue impactando de manera grave y con ello, como se vio en el capítulo 2, uno de los elementos que dotaba de identidad a quienes habitan la región.

En el caso de los sindicatos, fueron impedidas las reivindicaciones sobre las condiciones de trabajo. La protesta social era prohibida. Por esto, hoy se atribuyen los desajustes salariales y la merma en las condiciones de vida de trabajadores de empresas como Ecopetrol, a las acciones de los paramilitares (CNMH, taller de memoria, La Gabarra, 2012).

Las y los docentes fueron también estigmatizados. Los paramilitares decían que quienes ejercían la docencia no sólo eran guerrilleros, sino que se encargaban de formar a los combatientes y, en el caso de las mujeres, las señalaba como "mocitas" de los guerrilleros. Otro motivo de estigmatización para los profesores fue la exhibición de la bandera de Norte de Santander en las instituciones educativas:

> A nosotros los profesores nos gustaba tener en las paredes de las escuelas los símbolos patrios, la bandera de Norte de Santander, el escudo, la bandera de Colombia. Y resulta que para coincidencia, la bandera de Norte de Santander es roja y negra, tiene mucho parecido a la de los *elenos*, el grupo ese insurgente y eso fue uno de los grandes problemas que tuvieron muchísimos profesores que les tocó salir y huir por eso, porque en la escuela donde ellos llegaban y encontraban esa bandera, decían que era

> que el profesor trabaja con los *elenos* (CNMH, entrevista, hombre docente, La Gabarra, 2016).

La proveniencia territorial fue una de las razones más importantes para que los paramilitares -y también la fuerza pública- señalaran a las personas como guerrilleras. El estigma recayó sobre habitantes de lugares específicos como La Gabarra (Tibú), Filo Gringo (El Tarra) o los municipios de San Calixto, Hacarí y Teorama. En el taller de memoria realizado en Teorama, los participantes recordaron que en Ocaña y Tibú los paramilitares dieron muerte a numerosas personas de San Juancito, por decir que venían de este corregimiento[218]:

> Lo que más duele es la estigmatización de la población de los diferentes municipios porque hubo un tiempo en que la gente no podía venir pa Ocaña (...) ya uno le tenía miedo subirse en el mercado al bus, tenía que ir a esperarlo por allá abajo en La Gloria para que no se dieran cuenta que uno viajaba para San Calixto o para Teorama porque había mucha estigmatización por parte de la fuerza pública, de las autoridades, porque les decían que la gente de estos municipios eran colaboradores de la guerrilla (CNMH, taller con mujeres, Ocaña, 2016).

El supuesto interés de acabar con las guerrillas fue usado de manera generalizada por los paramilitares para explicar la violencia, no obstante, hoy es puesto en entredicho a la luz de lo que evidenciaron sus actos:

> Venían con estrategias de matar la gente, no venían buscando la guerrilla, simplemente tuvieron enfrentamientos con la guerrilla, vinieron fue buscando al campesino, digo yo, porque el campesino fue el que sufrió, a la hora de la verdad las organizaciones [guerrilleras] no sufrieron. De toda la gente que mataron en la zona del

218 Incluso hasta no hace muchos años, se mantenía en el imaginario colectivo que los habitantes del casco urbano de Tibú eran *paracos* y los de La Gabarra *guerrilleros*.

> Catatumbo, créame que no mataron a un guerrillero. Matarían en combates, pero créame que guerrilleros no, mataron fue campesinos (CNMH, entrevista, hombre campesino Cúcuta, 2016).

4.3.3.3. Arbitrio sobre los cuerpos

En el Catatumbo los paramilitares impusieron una forma de ser y de actuar "ideal", en donde se volvieron más rígidos los estereotipos bajo los cuales se dictan las conductas "normales" y "deseables" que debían asumir tanto hombres como mujeres en su diario vivir, en un contexto con marcados acentos machistas. Impusieron regulaciones sobre la forma de comportarse y las maneras cómo las personas llevaban su propio cuerpo y lo presentaban ante los demás.

A las mujeres, por ejemplo, se les exigió no usar ombligueras, escotes, minifaldas y *shorts* o tinturarse el cabello. La Fiscalía ha documentado que "las mujeres eran sancionadas por utilizar minifalda o blusas con escote, casos en los que eran cortadas en el estómago con cuchillas de afeitar, otras fueron accedidas carnalmente de manera brutal, torturadas, les cortaban los senos"[219] (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 110016000253 - 200782862 y 200680082, 2013).

Para los hombres era vedado tener el cabello largo. De acuerdo con los relatos, este rasgo era comprendido por los paramilitares como algo que no era de hombres, así quienes tenían el cabello largo eran llamados *maricas*. Sobre sus cuerpos se perpetraron cambios forzados: con cuchi-

219 Para profundizar en las formas de vulneración y resistencias de las mujeres en el Catatumbo, remitirse a la cartilla de relatos *"Estos dolores que nos hacen fuertes. Voces y memorias de mujeres catatumberas"*, que acompaña este informe.

llas y machetes eran trasquilados, a algunos se les permitía cortarse el cabello correctamente, mientras otros eran obligados a permanecer así, cargando sobre sí y a la vista de todos, la huella del castigo paramilitar. Asimismo, se prohibió el uso de botas de caucho y prendas de vestir de color rojo, dado que ambas estaban asociadas a las guerrillas.

Los paramilitares prohibieron además cualquier expresión afectiva o erótica que no cupiera en los estándares heteronormativos, es decir, vedaron aquellos vínculos que no estuvieran basados en una relación entre un hombre y una mujer, imponiendo una heterosexualidad obligada, así como las diversas formas de concebir y sentir la identidad de género, lo que se concretó en violencias ejercidas contra personas con orientaciones sexuales no hegemónicas y personas transgénero[220]: "los homosexuales que había en La Gabarra, unos se fueron y otros pues terminaron violados por ellos también, los violaban y a otros los asesinaron" (CNMH, taller violencia sexual, Catatumbo, 2016).

En las sentencias judiciales sobre el accionar del Frente Héctor Julio Peinado Becerra, una víctima relató que homosexuales y personas transgénero "eran discriminados, golpeados, marginados, maltratados, sometidos a tortura (...) a unos les cortaron el cabello con machete, les echaban bóxer" (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 110016000253 - 200782862 y 200680082, 2013).

No obstante, estas alusiones se hicieron en relación con rasgos visibles en personas con identidades de género no hegemónicas: "los homosexuales tampoco podían ponerse faldas, cabello largo, ni aretes, ni nada, o caminar así (ademán asociado a la forma femenina de caminar)" (CNMH, taller violencia sexual, Cúcuta, 2016). La alusión sobre "homosexuales que se visten como mujeres" interpela respecto a la invisibili-

220 En los diferentes escenarios de encuentro con habitantes del Catatumbo no se aludió a personas bisexuales o intersexuales en relación con la violencia ejercida por los paramilitares.

zación de las personas transgénero, siendo evidencia de los estereotipos existentes sobre personas con identidades consideradas transgresoras y que la discriminación y sospecha no comienza por la llegada de los actores armados, sino que está antecedida por los prejuicios y señalamientos que la misma sociedad elabora[221].

Así, la violencia paramilitar usurpó la dignidad humana de las víctimas, al impedir que las personas vivieran de acuerdo con sus decisiones y deseos, lesionaron sus condiciones materiales para vivir bien, les sometieron a humillaciones e intentaron sustituir su autonomía[222]. Bajo su dominio, la población tenía la obligación de obedecer sus órdenes, que incluían, por ejemplo, enterrar cuerpos, prestarse para sus mandados, trabajar forzadamente, o consumir alimentos o bebidas.

A los paramilitares "no se les podía negar nada. Si necesitaban un equipo de sonido y estaba bonita la planta, había que prestársela. Si le ofrecían a uno carne (...) tocaba recibirles la carne (...). Yo les decía: ¡no, no quiero eso! [y la respuesta era:] tenga pa' que sepa (CNMH, taller violencia sexual, Ocaña, 2016). La gama de violencias utilizadas por los paramilitares en contra de la población en el Catatumbo fue amplia y degradante.

221 Para profundizar sobre violencias y resistencias de personas LGBT en el Catatumbo, remitirse a la cartilla de relatos *"Que nos dejen ser quienes soñamos ser. Voces y memorias de personas lesbianas, gays y trans del Catatumbo"*, que acompaña este informe.

222 I. La dignidad humana es entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). II. La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y III. La dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones) (CConst, Sentencia T-881/02, E. Montealegre).

Representación de las afectaciones emocionales y materiales del paramilitarismo (en el corazón) y de la descomposición de la comunidad (en la cabeza). CNMH, taller de memoria con sacerdotes, Tibú, 2016. Fotografía: Jaime Landínez para el CNMH.

A continuación, se presentan los énfasis de memoria que surgieron en los talleres colectivos, en torno al periodo de permanencia y control paramilitar en cada uno de los municipios, en donde se pueden apreciar diferencias en el tiempo de permanencia, la dimensión del control social y territorial y los tipos de violencia cometidos con mayor frecuencia en cada territorio.

4.4. Control social y territorial

4.4.1. Tibú

Luego de las masacres durante la irrupción paramilitar, Tibú fue controlado y sometido a los designios paramilitares durante cinco años y medio, tiempo en el que desplegaron varios tipos de violencia de gran impacto. Si bien disminuyó el número de masacres, se incrementaron los asesinatos selectivos e indiscriminados:

> Empezaron a haber los asesinatos selectivos, ya no eran masacres, sino que a las personas las sacaban de las casas, se las llevaban y aparecían muertas (...). Enterraron un poco de gente en el barrio La Esperanza. Allá hicieron tres o cuatro fosas comunes, donde enterraron como a sesenta víctimas de diferentes partes. Quedaron fosas donde se encontraban quince, dieciocho personas y, fuera de eso, los que se llevaban y aparecían en los mataderos de siempre, que era para Campo de Yuca y otros que se llevaban para el puente caído de Río Nuevo. Allá era donde aparecían los muertos, aparte de los que desaparecían (Asociación Minga y Fundación Progresar 2008).

Así como ocurrió con las masacres, el elevado número de asesinatos comenzó a llamar la atención, porque los cuerpos de las víctimas fueron arrojados al río Catatumbo, generando una reacción en Venezuela. Por ello se estableció como práctica permanente la desaparición de los cuerpos mediante diversas estrategias que incorporaron crueldad y sevicia:

> Cuando llegaron, agarraron como estrategia botarlos al río, pero en Venezuela hubo una queja, porque muchísimos cadáveres llegaban al lago [Maracaibo]. Ellos, para poder tapar, para que no saliera, porque en Venezuela podían pasar por la televisión eso que hicieron, ya no era mucho lo que tiraban al río, sino que decidieron enterrarlos en la playa [del río], o picarlos (...). A veces quedaban las cabezas por ahí, el cuerpo lo picaban y lo dejaban por ahí, eso no lo enterraban. Ponían a la víctima a hacer el hueco, luego ahí mismo la cortaban y ahí mismo quedaba (CNMH, taller de memoria, La Gabarra, 2012).

> En Matecoco hicieron una pesa[223], ahí no existía y al fondo vendían carne. A la gente la obligaban a comprar carne ahí y dicen que la carne era humana porque los huesos los encontraron hacia adentro, (...) una cantidad de personas encima de otras (CNMH, taller de memoria con docentes, Tibú, 2016).

Los recuerdos sobre la desaparición forzada son más enfáticos en Tibú que en el resto del Catatumbo. Al revisar los datos del OMC, este municipio concentró el 76,3 por ciento de las víctimas de esta modalidad de violencia paramilitar entre 1999 y 2005.

En este contexto de pérdidas, los paramilitares prohibieron a las comunidades recoger y llorar a sus seres queridos, porque si lo hacían corrían la misma suerte, lo que profundizaba el sufrimiento, e impedía los rituales de despedida y entierro, necesarios para concluir el ciclo y hacer los duelos.

El uso del río Catatumbo como espacio de desecho de cadáveres impidió que se siguieran realizando actividades comunitarias y familiares que antes se desarrollaban en sus orillas. Irrumpió además como vía de

223 Negocio donde se expende carne, carnicería.

transporte, de forma tal que la compra de insumos y alimentos se vio afectada. La pesca disminuyó porque los habitantes de La Gabarra y Tibú no querían consumir pescado que posiblemente se hubiera alimentado de restos humanos.

Las trabajadoras sexuales también fueron agredidas, en especial en La Gabarra, Matecoco y Finaria. A ellas "les daban duro", sus cuerpos atacados con sevicia. Son recordados hechos de mutilaciones, torturas y golpes. Sobre ellas se ejerció un recio control: estaban carnetizadas, eran asesinadas cuando se presumía alguna enfermedad y se les obligaba a trabajar sin pago, en calidad de esclavas sexuales. La violencia que los paramilitares ejercieron contra ellas y, que personas de la comunidad caracterizan como persecución, fue causa de su desplazamiento.

Como se vio en el apartado de la arremetida paramilitar en Tibú, fue masivo el desplazamiento de población y, luego del asentamiento y toma de control de este actor armado, continuó dándose, por lo que este municipio se configuró como el de mayores niveles de expulsión en toda la región. Aparejado vino el abandono de predios que, antes de la arremetida paramilitar, se daba en muy bajos niveles. Este fenómeno se disparó de manera exponencial en 1999 y así permaneció durante la presencia paramilitar y se mantuvo de forma residual hasta 2009 (Grafico 14).

Gráfico 14. Abandono de predios en Tibú 1987-2011

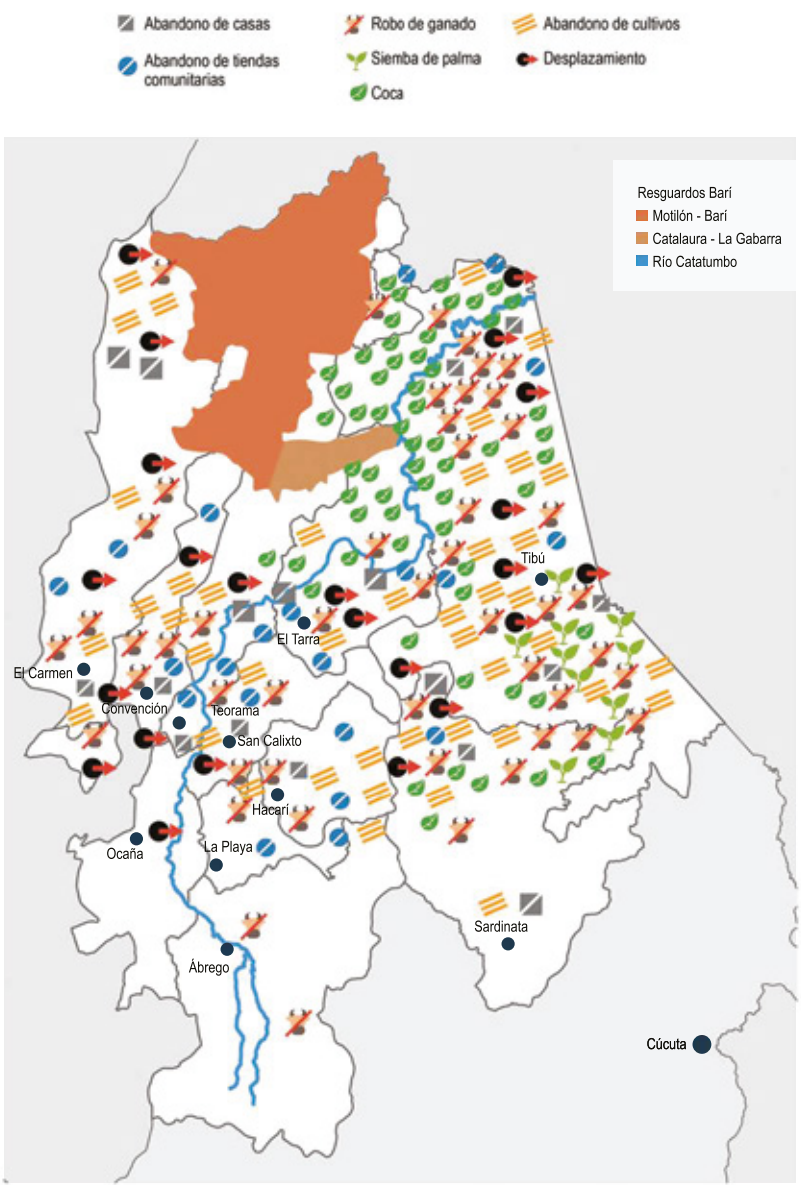
Fuente: Observatorio de Restitución y Regulación de Propiedad Agraria con base en información del RUPTA-Ruta individual.

Así, el desplazamiento forzado significó la ruptura con el territorio, la cotidianidad, el entorno social y los proyectos de vida. Representó dejar enseres, animales y sus actividades de generación de ingresos. Produjo el abandono de predios que, en especial en Tibú, pasaron a otras manos y a otros usos, como se verá en el capítulo 6.

Para los que se quedaron, el régimen de saqueos continuó de forma generalizada, incluyendo el robo de ganado, que fue referido en La Gabarra, Campo Dos, Petrólea, Campo Tres y Ambato, corregimientos ganaderos en donde se desestructuró la base productiva.

El territorio se vio transformado y arrasado, tal y como se observa en el siguiente mapa elaborado con base en lo que personas de la región narraron y dibujaron durante los ejercicios colectivos y entrevistas.

Mapa 17. Cambios del territorio durante el periodo paramilitar



Fuente: CNMH, elaboración propia con base en ejercicios colectivos de cartografía social y entrevistas, 2018.

Los paramilitares incentivaron en Tibú el cultivo de palma aceitera, promoción que fue presentada como posibilidad económica y mecanismo de protección. Introdujeron *la cédula palmera*, documento obtenido por aquellas familias que empezaron a incursionar en esta actividad y que, además de protección, les transformó ante los ojos de los paramilitares, para quienes "persona perfecta, persona transparente, persona recta, es un palmero" (CNMH, recorrido territorial 6, Catatumbo, 2016).

En este contexto, los paramilitares impusieron un férreo control sobre la movilidad de las personas. En La Gabarra, por ejemplo, la limitación se fijó sobre la circulación de las canoas por el río Catatumbo, lo que afectó económicamente a los bogas[224]: sus horarios de trabajo fueron restringidos, los pasajeros disminuyeron y debieron transportar mercancías y animales que los paramilitares robaban.

El establecimiento de retenes y bases de control condicionó el traslado de las y los tibuyanos. Las requisas y la revisión de sus cédulas comenzaron a ser la condición para poder movilizarse. Además de la solicitud de documentos de identificación personal, las AUC pedían a las personas repetir el número, quien no llevara la cédula o no hubiera memorizado el número era sancionado. Así, Tibú se configuró como el municipio de mayores afectaciones, copamiento y control paramilitar, por ello, se convirtió en referente regional y nacional de tal violencia[225].

224 Conductores de canoas con motor.

225 Por este motivo las instituciones (del Estado, ONG y organismos internacionales) y los medios de comunicación han centrado su atención en el seguimiento y acompañamiento a las víctimas de este municipio. La magnitud de la violencia paramilitar en este municipio generó el efecto perverso de que se desconocieran o invisibilizaran las víctimas y actos atroces cometidos por las AUC en los demás municipios y en especial en la zona alta, lo que motivó un esfuerzo especial para documentar y visibilizar lo ocurrido en esta zona de la región.

4.4.2. Pueblo Barí

Los Barí sufrieron diversas afectaciones por la violencia paramilitar, entre las que se destacan las amenazas y el amedrentamiento, los robos, la imposición de normas de control social, el confinamiento de sus comunidades y los desplazamientos individuales y colectivos. Las comunidades más afectadas fueron Boquira e Ishtora, por estar cercanas a La Gabarra.

Algunos indígenas recuerdan cómo, en ocasiones, los *paracos* los obligaron a transportar cadáveres, a embalarlos o a arrojarlos al río Catatumbo para desaparecerlos. En este sentido las comunidades más afectadas fueron Beboquira, Isthoda, Caricachaboquira, Bridicayra, Saphadana y Corroncayra. Los Barí mencionaron que en ocasiones salían a pescar y encontraban cuerpos desmembrados en las aguas de los ríos, eventos que les afectaron su actividad de pesca y también les generó impactos sicológicos.

Ellos y ellas no solo presenciaron asesinatos de la población campesina a su alrededor, también los vivieron al interior de sus comunidades. Obe Dora, hijo del cacique del resguardo Motilón Barí fue asesinado por los paramilitares en Caño Guaduas, así como Jacinto Ayencaychara (Ñatubaiyibarí, 2018)[226]. Estos asesinatos los han afectado de forma individual y colectiva como pueblo, pero también, siguiendo su cosmovisión, han generado un impacto al territorio, a las aves del cielo, a los ríos, pues en conjunto, la naturaleza se ve contaminada por estos hechos de sangre (CNMH, grupo focal 1 Barí, Tibú, 2016).

226 En 2005 el ELN también asesinó al indígena Germán Aytrabana (Ñatubaiyibarí, 2018)

Fotografía de Acucuara Bashuna para el CNMH. Comunidad de Saphadana, durante un recorrido territorial de memoria histórica que lideró Ñatubaiyibarí por el resguardo Motilón Barí, en 2016

Con las confrontaciones entre las guerrilleras y los paramilitares el pueblo indígena se vio en medio del fuego cruzado. Los Barí recordaron que en una ocasión las FARC balearon una canoa en la que se transportaba un indígena, creyendo que allí se estaban trasladando materiales para los paramilitares. Fue recordado de forma especial un enfrentamiento que se dio "de filo a filo", que tuvo una duración de ocho días, en medio del cual hubo bombas, tiros y sobrevuelo de helicópteros, "el ejército bombardeaba y luego llegaban los paramilitares" (CNMH, grupo focal 1 Barí, Tibú, 2016). En estas ocasiones, "hubo también familias que estaban ahí con los hijos" enfrentando un grave riesgo e incluso hubo personas heridas por el impacto de las balas perdidas. También recordaron cuando los paramilitares disparaban contra la población, como medida de amedrentamiento.

> Ellos [algunos Barí] bajaron en la canoa a vender plátano. En ese tiempo es la producción de los plátanos, llevaban 56 maletas de plátano. Entonces ahí es donde bombardean con ametralladora, como eso hace *tracata*[227], [la canoa] se mueve. Ahí cayeron esas balas, pican la piel, vuelan. Entonces, al volarse, le metieron como unos diez proyectiles a las canoas, pero no le pegó al paisano [al indígena Barí]. Él ahí quedó asustado manejando y apagó. Quedó pollito [asustado] otra vez (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017).

Los Barí presentes en los ejercicios de memoria, recordaron que los paramilitares ingresaron a una comunidad Barí en 2003, por la zona de Caño Indio, donde asesinaron a muchos campesinos y saquearon comunidades indígenas. Allí les robaron pollos, ganado, cerdos, chivos, mulas, enseres de las viviendas, plantas eléctricas, canoas y motores. En diversas ocasiones los paramilitares tomaron las canoas del pueblo Barí, las usaron y las regresaron en mal estado o inutilizables.

Una de las mayores afectaciones que ha sentido el Pueblo Barí en los diversos conflictos territoriales que han enfrentado, ha sido la restricción de la movilidad por su territorio ancestral. Esto también se vivió en el marco de la violencia paramilitar y la actuación guerrillera, dado que ambos actores armados les prohibieron la libre circulación por el territorio, entrar o salir de sus comunidades, frecuentar algunos lugares, practicar sus actividades tradicionales de caza y pesca. Les imponían horarios para transitar.

Al respecto, algunos indígenas mencionaron que no podían salir de sus comunidades, porque los paramilitares instalaron retenes e impedían su paso. Estas restricciones a la movilidad les imposibilitaron transitar libremente por su territorio en Colombia y dirigirse hacia a las comunidades Barí ubicadas en suelo venezolano, como han hecho a lo largo de

227 Sonido de la ametralladora descargando balas.

los tiempos, produciéndose eventos de confinamiento. Mujeres Barí comentaron que sentían que no podían salir solas porque podían ser víctimas de violencia sexual y que no pudieron volver a su práctica tradicional de cazar tortugas, sentían miedo: "tenían represados ahí en un solo sitio, y si tu ibas a pasar, pues no se podía por miedo" (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017).

Otro hecho que recuerdan de forma significativa fue la extinción de su cooperativa Coobarí, dado que los paramilitares generaron pánico entre sus integrantes y, además, "secuestraron el camión" que habían conseguido para el transporte de los productos y "ellos mismos nos acabaron llantas, volante, baterías, nos cambiaron conexión, rompieron los cables conexiones de corriente de las llaves. Eso se perdieron las llaves y sacaron copias y se perdieron. Después lo acabaron, lo dejaron ahí" (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017).

> Habíamos creado una Cooperativa Comunitaria, eso fue en el año 82, asociando a la mayoría de ellas a los mismos Barí del sector del resguardo y, en el año 83, 84, se hacen unos acuerdos con los campesinos de la región (...) se crea la red comercialización, por ejemplo, el cacao (...). Entonces ese sistema se acabó cuando hubo la presencia de paramilitares, porque el transporte automotor pasaba por la carretera y la vía era: Cúcuta-Tibú, Tibú-Gabarra, Gabarra-Cooperativa-Río de Oro (...). Entonces ¿qué hicieron los paramilitares? cortaron esas vías. Ese sistema lo acabaron los paramilitares, desafortunadamente lo acabaron (CNMH, entrevista, hombre Barí líder social, Cúcuta, 2017).

Así mismo, los Barí tenían una tienda comunitaria en el resguardo Catalaura y los paramilitares empezaron a cobrarles cien mil pesos como "vacuna", les quitaban algunos insumos como la gasolina, aduciendo que ésta iba a ser entregada a las guerrillas. Y así como les sucedió a los campesinos, los Barí también debieron someterse a la restricción de hacer

mercado sólo de cincuenta mil pesos, pues si compraban más les decían que era para la insurgencia.

Los Barí relataron, además, que miembros de sus comunidades fueron en diversas ocasiones secuestrados por los paramilitares, por periodos que iban desde algunas horas hasta varios días y que, a veces, en estas retenciones eran víctimas de torturas, por ejemplo, cuando le echaron ácido en el cuerpo a un indígena, generándole secuelas que permanecen. Los secuestros o retenciones los vivieron también mujeres de la comunidad, caciques y líderes del pueblo. En estas retenciones los paramilitares además robaban las remesas o dineros que transportaran.

Rememoraron también que debían pintar las canoas de color rojo, para que los paramilitares los reconocieran y no les dispararan mientras iban por el río y además les prohibieron transportar personas blancas o "rabadora". Pese a que a los Barí "nos gustan los pelos largos, las colas largas, a los paramilitares no les gustaba el pelo largo, nos mandaban a cortarlo". Recuerdan que en especial las mujeres eran insultadas y maltratadas verbalmente por los paramilitares (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017).

Todo lo anterior generó desplazamientos de miembros del Pueblo Barí, de forma individual, familiar y colectiva: "hemos recogido también un desplazamiento no declarado ante las instituciones del Estado, pero desplazamiento al fin y al cabo de mucha gente Barí a territorio venezolano. O que les tocaba, ya no podían seguir transitando por las vías por las que siempre transitaban, sino que les tocaba dar toda la vuelta, para llegar al resguardo por Venezuela" (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017). Los desplazamientos y las muertes de indígenas Barí producen afectaciones a las comunidades no Barí, a la población Barí y, de acuerdo con su sistema de pensamiento, causan contaminación de la naturaleza porque le arrancan una parte sustancial a la Ishtana, a la tierra:

> Resulta que Barí de Colombia, con la violencia [paramilitar] se fueron para Venezuela. Sobre todo, se fueron por discriminación, por amenazas, por confinamiento. Entonces ellos se fueron para allá. Allá los acogieron las comunidades [Barí] (...). A la comunidad Barí alcanzaron a matar tres Barí por parte de los paramilitares. La guerrilla, en ese entonces, asesinaron a cinco Barí. [Esas muertes] significan volver otra vez al pasado, porque asesinar a un Barí quiere decir que le están quitando parte de la tierra, porque nosotros somos la otra mitad de la tierra, somos hijos de la selva. Toda esa masacre que hicieron los paramilitares, toda esa masacre que hizo la guerrilla contaminó nuestra madre tierra, (...) por la sangre derramada y por los muertos causados indiscriminadamente. Porque había personas campesinas que no debían absolutamente nada, pero ellos los asesinaron, entonces por esa razón está contaminada (CNMH, entrevista, hombre adulto Barí líder social, Cúcuta, 2017).

Además de la destrucción que produjo la violencia paramilitar en Tibú, incluyendo las agonías del Pueblo Barí, los paramilitares consolidaron su férreo control también sobre su territorio.

4.4.3. Sardinata

En el marco de un ejercicio territorial de memoria, un hombre adulto recordó que, durante la época paramilitar que en este municipio duró alrededor de tres y cuatro años, "eso fue desastroso: robo en las propiedades, desplazamiento masivo, robo de ganado, violencia sexual, maltrato a niños, en este caso niños y niñas, acoso, torturas, desaparición forzada" (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016). A partir de la arremetida paramilitar, los habitantes de Sardinata recordaron que "la fiesta se (...) acabó". En la vereda Jericó asesinaron a un hombre de 73 años, a otro joven y definieron como objetivo militar a los presidentes de las JAC, razón

por la cual el presidente se desplazó abandonando a la comunidad. Esta situación se vivió en varias de las veredas por lo que "nadie se atrevía a presidir" y no se pudieron volver a hacer reuniones de las JAC.

Allí los paramilitares continuaron con los saqueos e intimidaron, amenazaron y violentaron a las personas: "a él lo golpiaron, a él qué no le hicieron y lo hicieron recoger todo el ganado de esa zona y llevarlo a Luis Vero y si no hacía presencia a las tres de la tarde en Luis Vero lo mataban. Ya habían matado a otro muchacho" (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

Las personas además resintieron "el descalabro de la institución educativa. Es que casi todos los profesores que había aquí eran nombrados de planta. Los reubicaron en Cúcuta en algunos colegios y aquí no volvieron a haber profesores nombrados sino contratados (...). ¡Eso fue un ataque contra el sistema educativo!" (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

En este municipio, además, fue referido que quedaron "unas tierras abandonadas. Durante la estadía paramilitar nadie pudo volver a sus tierras. Los pocos que lo hicieron les fue mal, porque regresaron y les tocó ponerse a trabajar: ¡vayan, traigan aquel ganado!. Y les daban esas tandas[228], los torturaban" (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016). Fue recordado también que a muchos de los que regresaron los desaparecieron, por lo que numerosas personas se desplazaron hacia El Tarra (donde todavía no había presencia paramilitar) y hacia Ocaña.

En Sardinata, los paramilitares llegaban a la casa de las mujeres cuando estaban solas u obligaban a los hombres a salir de sus viviendas y a dejar a las mujeres, niños y niñas solos. Así lo recordó un sardinatense:

228 Golpes.

> Como a veces a uno lo sacaban. Por ejemplo, un día llegaron a la vereda y nos dijeron: 'salgan ustedes, y dejen sus hijos y sus hijas ahí en las casas (...). Había el caso en que los papás salían y dejaban a las niñas y a los niños ahí y ellos aprovechaban y abusaban y los amenazaban que se quedaran callados (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

Tal como sucedió en Sardinata, los paramilitares, impusieron en El Tarra sus férreos controles a la vida cotidiana.

4.4.4. El Tarra

Al entrar al casco urbano de El Tarra, los paramilitares establecieron su control poblacional y territorial permanente. Ubicaron sus bases en las veredas La India y La Campana, ya habían instalado un puesto de control en Orú. Una vez establecidos, definieron horarios para la población de la cabecera municipal, por ejemplo, controlaban el funcionamiento de las discotecas y para transitar por las vías, obligaban a dejar encendidos los bombillos de la entrada de las viviendas, además, obligaron a que los patios, los solares y las vías del municipio permanecieran limpios.

Las tiendas comunitarias y las cooperativas fueron saqueadas y destruidas[229], su afectación lesionó la economía de quienes se encontraban asociados a ellas, se perdieron maquinaria y suministros, además, implicó la desestructuración de las formas en que las y los campesinos se habían organizado.

229 Recuérdese que, como se vio en el capítulo 2, en el municipio de El Tarra se levantó y funcionó la cooperativa más significativa para la región, Coomultar, que fuera desaparecida para este periodo.

Las escuelas fueron ocupadas por los paramilitares, como ocurrió con la de la vereda Kilómetro 84. Los paramilitares exigieron al profesor las llaves, se alojaron en los salones y usaron la cocina. Su presencia impidió la realización de clases y, a la postre, cuando desocuparon el lugar, ya no había más de dos estudiantes las demás familias se desplazaron (CNMH, taller de memoria, El Tarra, 2016). Así mismo, un profesor comentó que, en un acto de crueldad, le obligaban a levantar los cadáveres de sus vecinos y a trasladarlos a la funeraria que ellos administraban[230].

Se recuerda que en la vereda Tarra Sur, los paramilitares "hicieron un cementerio", pues llevaban a las personas y las asesinaban allá (CNMH, diálogo con campesinos, Cúcuta, 2017). Así mismo, en este municipio fue referida la perpetración de la violencia sexual, como le sucedió a una mujer transgénero que fue retenida junto con sus dos hermanas en el municipio de El Tarra[231].

De esta manera se observan las prácticas de dominio y control social que los paramilitares del Bloque Catatumbo instauraron y que tuvo énfasis en el bajo y medio Catatumbo, en especial en Tibú. En general, los tipos de violencia de esta estructura paramilitar fueron más atroces y, como se ha reiterado, tuvieron mayores dimensiones en términos de número de víctimas afectadas. Dentro de las prácticas del Bloque Catatumbo se destacan las masacres, violencia sexual, desaparición forzada, asesinatos indiscriminados y selectivos y un sinnúmero de normas impuestas para regular la vida individual y colectiva de las y los catatumberos.

230 Los paramilitares establecieron también su propia economía. Uno de los negocios que impulsaron y de los que se adueñaron y lucraron fueron las funerarias, como sucedió también en La Gabarra (Tibú).

231 Para profundizar en violencias y resistencias de población LGBT, remitirse a la cartilla de relatos "*Que nos dejen ser quienes soñamos ser. Voces y memorias de personas lesbianas, gays y trans del Catatumbo*", que acompaña este informe.

A continuación, se presentan los énfasis de memoria que pusieron las y los habitantes de la región sobre lo ocurrido en Teorama, municipio en el que actuaron diversas estructuras, luego se abordaran los hechos cometidos en los municipios del alto Catatumbo, salvo en Hacarí, que como se referenció, no experimentó una presencia paramilitar permanente.

4.4.5. Teorama

Luego de la incursión paramilitar a este municipio, los habitantes convivieron en el casco urbano con miembros de distintas estructuras paramilitares durante cerca de dos años, bajo su control y en zozobra. También instalaron una base permanente en El Juncal, punto estratégico de salida hacia San Pablo y San Calixto. Muchas personas tuvieron que desplazarse a la cabecera municipal "porque no querían compartir su vivienda con los matones y no saber a qué hora lo podían sacar a uno también y hacerle la fosa"[232] (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016). En un ejercicio colectivo de memoria se recordó:

> Ellos masacres no hicieron nunca, que hubieran agarrado a alguien y lo hubieran dejado ahí y lo hubieran matado delante de los que íbamos o algo, nada. Que había una exigencia que el que no traía cédula lo dejaban ahí hasta que no fueran a traer esa cédula sí, eso sí lo había. Que si el que iba llevaba el mercado y no llevaba factura, la misma cosa, (...) no nos lo dejaban pasar ellos por... que era para la guerrilla que llevábamos (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

232 A este respecto, en varias ocasiones fue recordada como práctica común que los paramilitares pusieran a la víctima a cavar su propia fosa para luego enterrarla allí.

En este municipio también hubo violencia sexual, el OMC tiene 59 casos registrados. El acoso y la agresión fueron mencionados:

> *Felipe* se enamoró de la señora, una señora muy bonita y le dijo: vea, si usted no tiene relaciones sexuales conmigo de aquí a 15 días, ni es pa' su esposo más, ni es pa' mí, va ser para los gusanos. La señora se fue a la plaza de mercado a traer la carne para el restaurante a las seis de la mañana y la estaba esperando, la abrazó y ahí la dejó [muerta] en la plaza de mercado, porque ella no quiso acceder a un romance con él (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

También se reseñaron desapariciones de personas que una vez asesinadas eran arrojadas al río Catatumbo, a la altura de El Aserrío. Se observa la violencia sexual y la desaparición forzada, en el medio y alto Catatumbo fueron usadas en diferentes niveles por las estructuras paramilitares. Llama la atención el uso de los ríos como escenario de desaparición de los cadáveres.

4.4.6. Convención

Luego de su arremetida, los *paras* permanecieron en Convención alrededor de tres años y medio. Después de su derrota militar en Honduras, controlaron la cabecera municipal de Convención, por ser un punto estratégico, como lo relata una defensora de derechos humanos:

> Mantener el casco urbano de Convención bajo su control era fundamental ya que era un punto estratégico, pues así como Tibú es una entrada para la región, permitía controlar El Carmen, El Tarra. Pero, además, por ser un centro comercial importante, su control les permitía sostenerse militarmente. Además, allí estaba

> la base militar. Tú entras por Convención, te metes a Cartagenita y coges inclusive para Guamalito y toda esa zona, o coges para San Pablo que es fundamental, El Aserrío era importante, todo El Tarra y de ahí todas esas zonas (CNMH, entrevista, mujer adulta defensora de DD.HH., Bogotá, 2016).

En la cabecera municipal los paramilitares vestían de civil, pero armados, vivían en casas de las que habían expulsado a sus residentes y establecieron control absoluto de la población:

> Ellos... buscarle a uno la casa prestada para guardar sus armas, de decir que iban a ver el partido de Colombia en la sala. Teníamos que salir a comprarles las cervezas, de que había una fiesta, tenía uno que bailar con ellos (...). Mi papá trabajaba en el centro recreacional La Piscina y nosotros lo ayudábamos a él a atender el personal. Y a la hora que fuera, a veces durábamos hasta las 11 o 12 de la noche porque ellos estaban ahí ¿y quién los sacaba? con sus armas en las mesas, o en las piernas, haciendo disparos y uno tocaba que aguantarse eso (CNMH, entrevista, mujer adulta líder comunal, Convención, 2017).

Un punto neurálgico de control fue el retén instalado en La Cadena (barrio La Primavera) y en la zona comercial impusieron un control absoluto, en donde además fue percibido el contubernio con la fuerza pública:

> Pa la gente mirar esa colusión... inadmisible. Salían estos señores en el mercado, donde está todo el negocio de abastos, de artículos de consumo de la canasta familiar y a los 600 metros se encuentra uno con el retén militar del Batallón Santander de Ocaña y de otro batallón que hiciera parte de esa unidad militar. Uno se dice: ¿cómo en 500 metros no se van a dar cuenta que esta gente a las siete y

> media de la mañana están haciendo control en ese sector? (CNMH, entrevista, adulto mayor defensor de DD.HH., Bogotá, 2016)[233].

Además, pusieron una base militar en la vereda San Antonio, corregimiento La Laguna, por donde habían entrado al municipio, lugar estratégico para ingresar al casco urbano, ir al municipio de El Carmen, a Cartagenita y a Guamal desde donde controlaban la salida de fríjol y café de la zona, la entrada de víveres desde Ocaña y los que se llevaban desde el casco urbano a las veredas. Los convencionistas recuerdan que los paramilitares llevaban a personas de La Trinidad y de otros lugares hacia El Guamal, donde eran asesinadas.

En Convención los paramilitares instauraron un control mucho mayor y más férreo sobre la población y la cabecera municipal, en comparación al impuesto en los municipios del alto Catatumbo, por ser un sitio estratégico.

4.4.7. San Calixto

En San Calixto los paramilitares ejercieron control territorial casi cuatro años. Se asentaron en la cabecera municipal y se tomaron varias casas en los barrios Primero de Marzo, Manizales y Bolívar.

En el corregimiento de Palmarito instalaron un punto de control estratégico, sin embargo, la base la instalaron en La Quina, caserío pequeño con una vía. Allí permanecieron durante tres años y medio y durante su estadía "llevaban a los secuestrados para sacarles información y tortu-

233 En el casco urbano del Convención se encontraba el retén La Esmeralda, del Batallón Vial No 10 del Ejército. Desde allí la fuerza pública ejercía control sobre el mercado de los pobladores y el tránsito de personas.

rarlos", era cometido abuso sexual contra mujeres de la zona rural, prohibieron a las personas conversar con otras que no fueran del caserío y tomaron posesión total del pueblo, como lo recordó un sancalixtano: "yo conviví dos meses con ellos y de ahí me tocó irme, porque donde yo estaba viviendo, ellos eran a diario hasta durmiendo encima de las camas de nosotros, se comían la comida que nosotros nos íbamos a comer" (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

La violencia sexual fue una práctica referida en distintos sitios del municipio. Los relatos apuntan a que se dio en caminos, retenes y puestos de control, en contra de niñas, jóvenes y mujeres adultas. También se recordó que, en el marco de este tipo de violencia, dos hombres fueron obligados a desnudarse. Aunque no hubo altos índices de asesinatos, se recuerda que cuando los había, los paramilitares desaparecían los cuerpos de las víctimas en aguas del Río Tarra. Los habitantes de este municipio recuerdan que fueron frecuentes saqueos, secuestros y tortura,

> ¡Golpiaban a la gente y después el miedo! Detenían en el día a la gente, robaban gallinas y lo que había en las casas (...). Pues no hubo nada grave[234], pero sí hubieron atropellos contra la familia. Los agarraban en el camino y les daban plano[235], patadas, tenían unas cuchillas y les salían [a las personas] en el camino. A un tío mío en la escuela lo agarraron, lo golpiaron, le sellaron la boca con bolsas, le soltaron un chorro de agua y lo tuvieron ahí acostado un buen rato, al rato lo soltaron (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016)

> Los paramilitares aquí casi no mataron personas, pero ¿sabe qué? casi al ochenta por ciento de la población civil de San Calixto y [de] estas veredas se las llevaban, las secuestraban uno, dos días, les sacaban información, las torturaban y volvían y las dejaban ir (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

234 Haciendo referencia a que no cometieron masacres de la dimensión de las ocurridas en Tibú.

235 Golpe dado con la parte plana del machete, llamado también peinilla o cuchilla.

Un hecho ocurrido en La Cristalina fue revestido de particular relevancia simbólica por la sevicia con que lo cometieron y el terror que produjo. El 2 de abril del 2003, las AUC cometieron una masacre contra menores de edad:

> Ellos llegaron y estaban todos jugando fútbol (...). Ese día mataron cinco. Tres hermanos y dos hermanos. Los mandaron a tirar a todos al piso y les dieron con un arma que traían, los agarraron a todos a plano ¡uich! Y les bajaba así la sangre era del planazo que le pegaban a la gente y el muchacho -como miró que habían matado al hermano- él se fue, o sea, no aguantó y se paró y se fue y ahí mismo le tiraron también, lo dejaron ahí tirado. Ese día agarraron las cabezas y las tiraban así y jugaban con las cabezas de los muertos. Los mataron con hacha y con motosierra (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2017).

De todo el Catatumbo, este fue el municipio donde las personas hicieron mayor número de menciones de asesinatos que eran seguidos por la separación de la cabeza del tronco del cuerpo de la víctima y que posteriormente era utilizada para generar terror: "le cortaban la cabeza a las víctimas y jugaban con ellas, como si fuera un balón de futbol", se mencionó en varios espacios de memoria.

Fue recordado, además, que las guerrillas no se fueron, siguieron haciendo presencia en la zona, con acciones aisladas en muchos casos, pues el control sobre el territorio durante este periodo lo ejercieron los paramilitares. Sin embargo, fue recordada una acción ejecutada por las FARC y el EPL en el marco de la cual fue asesinado alias *Barranquilla*, uno de los mandos paramilitares más reconocidos.

Representación gráfica de la presencia guerrillera (izquierda) y de la presencia simultánea de paramilitares en un poblado y de la guerrilla del ELN en las montañas (derecha) (CNMH, taller con mujeres, Ocaña, 2016).

Los participantes de los ejercicios de memoria reiteraron la percepción de maridaje de la fuerza pública en acciones ejecutadas por las AUC, así como actuaciones en conjunto. Estas situaciones ponían en mayor vulnerabilidad a las comunidades, acrecentando la desconfianza hacia el Estado y la percepción de que no tenían quien los protegiera. Incluso los participantes lamentaron indignados que hacer denuncias ante las autoridades representaba para ellos un mayor riesgo contra la vida:

> En el tiempo de las autodefensas teníamos un problema, era el problema más verriondo ¿sabe cuál era? que no teníamos a quien acudir, nadie nos defendía. Porque hubiera una Defensoría, una Personería, hubiera habido una entidad... nosotros pudiéramos denunciar, nosotros lo hacíamos, porque estábamos cansados. Cuan-

> do eso el Ejército llegaba, o la Policía, se tapaban, entregaban a las personas porque sabían que las iban a asesinar, para no quedar mal ellos, pero era la misma cosa. ¡Quedaban mal! Porque ellos como fuerza pública no tienen derecho... tienen que respetar a la población civil (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2017).

Por la presencia extendida y coercitiva que ejercieron los paramilitares, las comunidades tuvieron que recurrir al confinamiento, en especial en las veredas La Cristalina, San Javier del Oriente, Santa Catalina, El Caracol, La Esperanza y San Luis, pues no podían trasladarse a la cabecera municipal ni al vecino municipio de El Tarra, por miedo a ser asesinados. Los pobladores decidieron no hacer mercado en el casco urbano del municipio, sino aprovisionarse en Ocaña, saliendo por la zona de La Sabana. Sin embargo, los sancalixtenses allí tampoco estaban seguros y, de hecho, fue recordado que tanto Hacarí como San Calixto eran municipios controlados desde Ocaña por el Bloque Norte y que "a la mayoría de gente que ha sido asesinada por los paramilitares la mataron fuera de San Calixto, por el hecho de ser de San Calixto los trataban de guerrilleros y los mataban" (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2017).

Así, muchas personas se confinaron, otras optaron por el desplazamiento, otras por el exilio y se recuerda que varios fueron acogidos por el Gobierno de Canadá. Otras personas se desplazaron hacia el monte, a alguna zona rural cercana y boscosa, en donde construían pequeños ranchos para pasar la noche y durante el día regresaban a sus viviendas.

4.4.8. La Playa de Belén

En Aspasica los paramilitares permanecieron siete meses, tiempo en el cual cometieron doce asesinatos, incluido el de un docente y el del di-

rector de la Casa de la Cultura. Por ello, mucha gente se desplazó y otra prefirió no salir de sus casas por el temor de ser asesinados. En la vereda La Peña instalaron un campamento donde se ubicó el comandante.

> Estuvieron en el Alto de la Peña, a los señores de ahí los desplazaron, porque cuando llegaban borrachos empezaban a hacer tiros, se acostaban en la cama de ellos, sacaban la gente, todo lo que usted se puede imaginar de un loco maniático, cuánta maldad se le ocurra, la hacían. Y del lado del Tabacal, Guarina, del Alto de la Peña, los lugares donde ellos se asentaron, fue peor, porque si llegaban a esta casa, usted tenía que irse, dejarles la cama, la cocina, dejarles todo (CNMH, entrevista, hombre adulto, La Playa, 2017).

4.4.9. El Carmen

Después de su arribo y de la masacre de Santa Inés, los paramilitares instauraron el control total del municipio, hasta el punto de que la banda del pueblo fue obligada a tocar en varias oportunidades, luego de un asesinato. Este control obligó al confinamiento de las comunidades, las personas no podían salir de sus casas por temor.

En este municipio los paramilitares se asentaron, pusieron puestos de control en Cerro Azul y El Tanque y una base permanente en Guamalito, corregimiento en donde fue cometida una masacre, el 25 de marzo de 2005, cuando el Bloque Norte se había visto fortalecido con el arribo de los desertados de la desmovilización del Bloque Catatumbo.

Para ejecutar esta masacre, los paramilitares de los frentes Héctor Julio Peinado Becerra y Resistencia Motilona incursionaron en Guamalito, con la excusa de asesinar a presuntos guerrilleros. Ese día cincuenta pa-

ramilitares salieron en tres camiones desde la hacienda La Loma, en San Bernardo (Cesar) hacia Guamalito. De acuerdo con lo contado por exparamilitares en versiones libres, llegaron a las cinco y media de la mañana, se dividieron en grupos y estando en el pueblo, reunieron a la gente, ataron de las manos a las víctimas y luego, con armas blancas, asesinaron a cinco personas. Alias *Chómpiras* relató que, a la salida del pueblo, el ejército capturó a seis de los paramilitares que participaron en la acción, luego de un combate que duró cinco horas y que, pese a las capturas, la mayoría, escapó. Varias víctimas contaron que además de los asesinatos, los paramilitares saquearon dinero y enseres de la población (Verdad Abierta, 2011, 4 de abril). Esto sucedió mientras el Gobierno negociaba la desmovilización de las AUC en Santafé Ralito.

4.4.10. Ocaña

Como ya se dijo, en Ocaña y su área de influencia operaron desde finales de los años ochenta grupos de autodefensa que surgieron y se expandieron desde el sur del Cesar, por lo que se denominaban Autodefensas del Sur del Cesar y la Provincia de Ocaña. Por ello, los habitantes de la región no perciben una arremetida paramilitar, sino más bien, una presencia sostenida en el tiempo de aquellos grupos que luego se dieron a conocer como las AUC, cuando se sintió con mayor fuerza su presencia y control. Lo sucedido en esta ciudad se concibe como una situación permanente de control paramilitar.

Ocaña además de acoger a población desplazada del Catatumbo fue el lugar que les permitía el aprovisionamiento de víveres, cuando estuvieron en situación de confinamiento. Ocaña fue el sitio donde la población del Catatumbo debió hacer gestiones, acudir al médico o hacer trámites ante alguna entidad oficial.

Por tener esta centralidad en la vida de las personas del alto y medio Catatumbo, el control paramilitar alteró de manera significativa el desarrollo de actividades cotidianas y la posibilidad de protegerse ante las amenazas. Personas tanto de Hacarí como de San Calixto mencionaron que estos eran municipios controlados desde Ocaña.

Habitantes de Ocaña recuerdan cómo los paramilitares violentaron a perfiles específicos de población, a los maestros, a quienes describían como gestores de los semilleros de la organización social de los años ochenta.

> En Ocaña hubo mucho joven muerto, la mayoría de los muertos en la provincia de Ocaña y especialmente en el municipio de Ocaña no pasaban de los 30 años de edad, personas jóvenes. La juventud, la mujer, inclusive los grupos LGBTI y las prostitutas fueron muy golpiadas. Los asesinaban, los torturaban, sicológicamente fueron unas personas muy perseguidas, les imponían una forma de vida totalmente diferente a las que ellos tenían (CNMH, entrevista, hombre líder social, Ocaña, 2016).

Los paramilitares tenían fuerte presencia en la ciudad, ejercían mayor control en lugares comerciales como el mercado, "usted iba a comprar alguna cosa en Ocaña y ellos estaban, lo seguían a uno sin que usted se diera cuenta, tenían como un cazadero, cuando llegaba la persona que tenía antecedentes o que sabía algo de ellos, llegaban y hasta ese día vivía, porque cuando lo agarraban ya era muerto, ya no volvía" (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2017).

Allí también eran notorios los vínculos entre fuerza pública y los paramilitares. *Juancho Prada* en versión libre confesó estos vínculos, así como la solicitud por parte del comandante de la Policía de Ocaña de que no cometieran asesinatos en la zona urbana:

> Con comandante de la Policía de Ocaña (...) se habló de cuál era la tajada para él, se llegó a un acuerdo que le iban a dar tres millones de pesos mensuales, para que no acosara a la Policía, a sus subalternos, y nos dejara delinquir en Ocaña y él me puso como punto para él que no le matara ninguno dentro de la zona urbana, que los sacara y los matara en las afueras del pueblo (...). Ya tenía cuadrada a todas las patrullas y contraguerrillas de la Policía de Ocaña, a las cuales se les pasaba cien mil pesos por cada policía y trescientos mil pesos por comandante de patrulla o contraguerrilla, esto se pagaba mensual (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 2006-80014. 2014).

El arreglo del que habla *Juancho Prada* se hizo evidente en el hecho de que los paramilitares se esforzaron por invisibilizar los asesinatos y a sus víctimas. Participantes en los talleres recordaron que a quienes se trasladaban a Ocaña "los agarraban, los echaban a la camioneta y los llevaban para el Agua de la Virgen, Venadillo, al lado del Rodeo y allá los asesinaban" (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2017).

También se hizo referencia a una finca ubicada al lado del matadero de Ocaña; el lugar conocido como el Limón, en la vía que conduce hacia Aguas Claras, en el aeropuerto de Ocaña y Pueblo Nuevo, tres lugares donde los paramilitares instalaron bases permanentes y que se convirtieron en lugares para la comisión de asesinatos y entierro clandestino de personas, por lo que se presume podrían encontrarse allí víctimas de desaparición forzada. Otros puestos de control paramilitar referidos por los participantes fueron El Zul o Cerro Azul (en la vía que de Ocaña conduce a El Carmen), Venadillo (en la vía Ocaña-Río de Oro), Otaré y otro entre Ocaña y Convención.

4.5. Afrontar y resistir la violencia paramilitar

4.5.1. Resistiendo el control paramilitar

Las respuestas de quienes sufrieron la violencia paramilitar estuvieron encaminadas a enfrentarla en lo cotidiano. La primera estrategia fue aprovechar su conocimiento sobre el territorio y las rutinas de los armados. Las personas crearon caminos nuevos y usaron los otrora transitados para poder moverse por la región; asimismo modificaron los horarios de traslados por vías en donde había retenes o puestos de control en horarios donde no hubiera presencia paramilitar.

La segunda estrategia fue el uso de la palabra para desafiarlos e interpelarlos como forma de afrontar el control paramilitar y de contener su violencia:

> Les decía yo ¡a mí me hacen el favor y me respetan! Yo tengo mi esposo y mis hijos, yo no soy mujer de la vida, yo soy mujer de mi hogar. Si me quieren matar, mátenme. Así, porque yo soy una mujer echada pa' lante y yo pienso en mis hijos y en mi esposo, yo no pienso en más nada. Ellos llegaban a mi casa y me ponían la pistola y vea, yo temblaba de miedo, pero uno como mujer, a veces con rabia, se hace valer (CNMH, taller con mujeres, Ocaña, 2016).

Las personas recuerdan cómo, en algunos casos, lograron evitar las agresiones. Acudir a la palabra, dar explicaciones y exponer argumentos en una relación desigual de poder denota valentía, autonomía y también deja entrever un mecanismo a través del cual parece que se valida la au-

toridad del actor armado -y por ello se le dan explicaciones-, pero a la vez se discuten sus determinaciones para persuadir. Esta fue la experiencia de algunos docentes que lograron organizar espacios de encuentro con los paramilitares para enfrentar la estigmatización que sobre ellos recaía:

> Ya después se trató de llegar al diálogo, porque nos cansamos. Muchos profesores nos cansamos de tanto temor que nos han inculcado y dijimos: ¡ya no más!, porque también dijimos: ¿nosotros por qué tenemos que tener temor, por qué tenemos que andar huyendo? si nosotros no debemos nada, ellos tienen que escucharnos. Entonces empezamos a pedir audiencias con ellos, para que nos escucharan, para que respetaran nuestro espacio. El papel de nosotros era de educadores, no formadores de otro tipo de personas, sino formadores de niños. Nosotros las únicas armas que utilizábamos eran los valores, la tiza (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

> En La Quina (San Calixto) una vez [agarraron a] un muchacho (...) y nosotros salimos. El pelado era inocente, a él lo agarraron por guerrillero. Vinieron los de La Cantina y parte de Palmarito también vinieron, bastante gente, a que lo soltaran, porque lo iban a matar, (...) lo tenían amarrado y ellos dijeron que mataban al que se metiera. (...) [Las personas de La Quina] le dijeron [a alias *el Tiburón*]: vea, nosotros no lo dejamos matar a él, [el paramilitar] dijo: ¿quién responde por él? Alzó la mano uno y alzó la mano el otro y alzaron la mano todos: todos, nosotros todos y si quiere mátenos a todos. Sí es así, ustedes responden por él, pero si nosotros sabemos que él alguna cosa, que tenga antecedentes o cualquier cosa, los matamos a ustedes. Mátenos si quiere, gritamos todos y a él lo soltaron, lo liberaron ese día (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

La tercera estrategia de afrontamiento fue el ajuste que las personas hicieron al orden impuesto por los paramilitares, acatando las reglas de juego. En palabras de un sacerdote de la región, “Acatar las reglas de jue-

go, el buen comportamiento (...). Uno sabe que hay alguien que tiene poder, que tiene las armas, es saber convivir con las reglas de juego que se colocan" (CNMH, entrevista, hombre sacerdote, Tibú, 2016).

La cuarta estrategia que tuvieron personas en la región para intentar quebrar el absoluto dominio paramilitar fue el engaño. En San Martín (Sardinata) por ejemplo, se hizo creer a los paramilitares que las JAC estaban desarticuladas, no obstante, la estrategia era *comer calladito*, es decir, usar el silencio estratégicamente:

> Comer calladito, se hacían reunioncitas ahí calladitas, que hace falta que traer, que llevar y que ir al alcalde y hacer esa vaina, pero jamás se les tocaba el tema ese a los *paracos*, eso era entre la misma comunidad ¿qué hacíamos? bajar donde el alcalde: que mire señor alcalde, que necesitamos un [puente] hamaca, que necesitamos una volqueta (CNMH, taller de memoria, Sardinata, 2016).

4.5.2. Dignificación y trámite del dolor

Ante la prohibición de recoger y sepultar a los muertos, familiares de los fallecidos, vecinos de la comunidad y miembros de la Iglesia católica -sacerdotes y religiosas-, intercedieron y lograron en algunos casos revestir de dignidad a quien moría y acoger en el sufrimiento a los dolientes. Para hacerlo, se enfrentaron a los paramilitares para recuperar los cuerpos y, en otros casos, solo los recogían para llevar a cabo las ceremonias correspondientes, siempre con el imperativo de dignificar a la persona fallecida y brindar consuelo a los familiares.

Además de la dignificación a los muertos, las labores de acogida, apoyo y escucha fueron también medios para tramitar los impactos de la

violencia paramilitar, en especial, por miembros de la Iglesia católica: "La misión era escuchar, eso era todo el día uno escuchando la gente, todo el día acompañando a la gente. Las personas llegaban llorando: padre ayúdeme, padre ¡acompáñenos!" (CNMH, entrevista, hombre sacerdote, Tibú, 2016).

Fue recordado, por ejemplo, que el sacerdote de La Gabarra activó la solidaridad luego de la masacre del 21 de agosto de 1999, convocando al día siguiente a la comunidad, a través de las campanas de la iglesia a misa de seis de la mañana. Aunque sabía que no podría llevarla a cabo, permitió que la gente pudiera encontrarse, enterarse de lo sucedido y apoyarse (CNMH, entrevista, hombre sacerdote, Tibú, 2016).

Eventos que se planearon con más tiempo, pero similares propósitos fueron los viacrucis diocesanos y el festival por la vida. Los viacrucis, realizados anualmente entre 2003 y 2006 en Tibú, se desarrollaron con el ánimo de posibilitar espacios de encuentro para la comunidad y para abordar temas de importancia durante ese año, de forma tal que las personas se congregaron en torno a la justicia y la paz, las víctimas y las mujeres. El viacrucis dedicado a las víctimas configuró un espacio de expresión del dolor. El de las mujeres se hizo debido a que los paramilitares estaban cometiendo gran número de victimizaciones contra su dignidad y derechos, entre los que sobresalía la violencia sexual.

Frente al papel de la Iglesia católica, es importante señalar que, pese a que muchas personas en la región reconocieron el papel que jugó en el acompañamiento y apoyo a las víctimas, otras consideraron que no hizo las denuncias y la visibilización que se requerían sobre lo que estaba sucediendo y, en este sentido, que "guardó mucho silencio, porque ellos eran la voz activa de la región en ese entonces y callaron muchas cosas" (CNMH, socialización, Cúcuta, 2017).

Dos años después de la desmovilización del Bloque Catatumbo, en 2006 se comenzó a realizar anualmente el festival por la vida en La Gabarra, intentando hacerle contrapeso a la desesperanza y al dolor y abrirle paso a la construcción de paz en la región. Su organización contó con el apoyo de la MAPP-OEA y con la participación de profesores, líderes y otras personas de la comunidad. Pese a que se realizaron varias versiones las de 2006 y 2007 son las más recordadas "Hicimos un festival inolvidable, de hecho, como el primero y el segundo festival no ha habido otros. Colocamos un lema que decía: Por una vida digna, por una esperanza en acción" (CNMH, entrevista, mujer adulta docente, Tibú, 2016).

4.5.3. El papel de los actores externos

Con el objetivo de visibilizar y frenar la violencia paramilitar, en la región se hicieron presentes actores comprometidos en la lucha por los derechos de las víctimas y de las comunidades en general. Su trabajo se hizo efectivo, por ejemplo, en acciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos a través del acompañamiento jurídico y las acciones de denuncia y exigencia de atención frente al Estado.

Una de las acciones de este tipo más recordadas fue la misión humanitaria realizada por la Asociación MINGA, la ONU (Organización de Naciones Unidas), la Defensoría del Pueblo y otras entidades del Estado en 2004 cuando, desafiando la presencia paramilitar y las prohibiciones de entrar víveres, lograron trasladar alimentos, ofrecer atención médica, crear un escenario para el encuentro entre habitantes de varias zonas y realizar actividades culturales y de denuncia:

> Fuimos unas setenta y algo de personas de varias organizaciones del nivel nacional e internacional (...). Durante tres días la misión humanitaria se dividió en dos buses: uno, nos metimos por Convención - Cartagenita para salir a [La] Trinidad y recorrer todos esos pueblitos; y el otro se metió por Convención, pero para salir por La Esmeralda - San Pablo, a Teorama. Todavía había paramilitares, eso fue en septiembre del 2004. Estuvimos haciendo actos culturales y documentando casos, acompañando gente, médicos y enfermeras [atendiendo]. Fue una misión integral. Terminados esos tres días había un encuentro campesino en medio del paramilitarismo. Fueron unos 400 campesinos. Eso fue un desafío enorme (...). [En] esos cinco días se logró que se rompiera el cerco paramilitar, porque es que la fuerza pública y los paramilitares no dejaban entrar comida, eso tenían un control férreo, terrible. A partir de esa fecha tuvieron que abrir los militares y los paramilitares para que la gente pudiera pasar mercados (CNMH, entrevista, mujer defensora de DD.HH., Bogotá, 2016).

La creación de un espacio en el que los campesinos pudieron volver a reunirse, estando aún los paramilitares en la región, promovió la reactivación de liderazgos y su participación en las iniciativas organizativas. Así, esta misión humanitaria es entendida como un hito en la revitalización de estas dinámicas. En lo referente al acompañamiento jurídico se resalta el papel de la Asociación Minga y del Ccalcp (Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez) que han acompañado procesos penales, actuando como apoderados de las víctimas.

El Gobierno venezolano fue otro actor que cobró relevancia en los relatos, en particular, en lo relacionado con las personas que se desplazaron hacia el vecino país. Catatumberas y catatumberos caracterizaron a este Gobierno como proveedor de refugio, atención y de ayudas como casas, tierras y oportunidades de estabilización económica (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2012).

> (...) abrió la frontera para las víctimas. Fueron abiertas para que la gente pudiera llegar ahí. De hecho, usted va al cruce -como se llama acá- y va a ver a muchísima gente de La Gabarra que se instaló en Venezuela a vivir y que son desplazados de la violencia y que obviamente allá le dieron sus oportunidades de vivir. Yo sí considero que fue un Gobierno solidario (CNMH, entrevista, mujer docente, Tibú, 2016).

4.6. Salida paramilitar

Tanto el Frente Héctor Julio Peinado Becerra como el Frente Resistencia Motilona se desmovilizaron el primer trimestre de 2006 con el conjunto del Bloque Norte (de los 4.760 paramilitares desmovilizados de esta estructura, 251 pertenecían al Frente Héctor Julio Peinado Becerra, 240 eran hombres y 11 mujeres, quienes entregaron 179 armas)[236].

Este aspecto es importante porque la victimización en el alto Catatumbo ha sido desconocida con frecuencia, incluso por entidades oficiales y las personas del bajo Catatumbo no la referencian, dado que fue el Bloque Catatumbo el que mayor impacto violento tuvo en la región. Es por ello por lo que las personas del alto Catatumbo hicieron un llamado para que se reconozca la presencia de otras estructuras paramilitares sus municipios y, a sus habitantes, se los reconozca como víctimas del conflicto armado. Aducen que funcionarios de la UARIV (Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas) no han reconocido hechos victimizantes ocurridos en 2005 y 2006 con el argumento de que el Bloque Catatumbo se desmovilizó en 2004.

236 Del Frente Resistencia Motilona no se tienen datos.

El Bloque Catatumbo se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004, en el corregimiento de Campo Dos (Tibú), con 1.435 miembros (1.399 hombres y 26 mujeres). En vista de las profundas transformaciones en la vida de los pobladores y en el territorio, su salida del Catatumbo es asociada con tranquilidad, con la posibilidad de volver a vivir, resultó un alivio y un motivo de felicidad para las y los catatumberos. La desmovilización implicó que iniciativas como las JAC se reestablecieran y que surgieran nuevas organizaciones sociales y comunitarias como asociaciones de mujeres, de jóvenes, organizaciones campesinas que, como dijo un habitante de la región, "si tuviéramos a las autodefensas acá, los proyectos que se han dado no estuvieran porque prácticamente la región estuviera sola, desolada" (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Tibú, 2016).

Sin embargo, a pesar de la transformación significativa por la salida de los paramilitares del Bloque Catatumbo y del Bloque Norte que conllevó una disminución en los índices y dimensiones de la violencia, en el trabajo de campo emergieron referencias vinculadas a la continuidad de su presencia a través de los desertados, inscritos a nuevos grupos armados posdesmovilización.

5.

EL PASADO Y EL PRESENTE DE LA COCA

La planta de coca, reconocen habitantes del Catatumbo, se sitúa en el centro del conflicto armado en la región. Aunque su inserción en el territorio a mediados de los años noventa no fue consecuencia de la confrontación armada, en breve se convirtió en un elemento condicionante no solo de las dinámicas del conflicto en la región, sino del desarrollo social y económico. Pero la *mata*[237], reconocen, se encuentra en el centro mismo de la construcción de la paz en sus territorios.

Este capítulo recoge las voces, memorias y demandas de las y los habitantes de la región en torno al cultivo de la hoja de coca. Se propone descentrar la mirada sobre esta planta como el pun-

237 Una de las formas más comunes usadas para referirse a la planta de coca en la región.

to de arranque de la cadena del narcotráfico, para andar los caminos de su inserción en la región, la comprensión que de ella hacen cultivadores del bajo y alto Catatumbo y los sentidos que han construido sobre su labor como trabajadores de la coca.

Para ello, en una primera parte se exploran las memorias divergentes de la entrada y exponencial crecimiento de la mata, diferenciando según se trate de los municipios del bajo y del alto Catatumbo. Luego, se describe el proceso de siembra, cultivo y recolección de la hoja de coca por parte de hombres y mujeres de la región, una actividad que, como con el cultivo de fríjol, cacao o maíz, les exige labrar la tierra, abonar la planta, cuidar de ella. Se hace énfasis además en las percepciones y sentidos que individual y colectivamente las personas han construido en torno a las políticas y programas antidrogas que, desde los noventa, se les han propuesto (e impuesto) como solución, aunque con muy pobres resultados. Dada la centralidad del cultivo de la hoja de coca para imaginar en colectivo el presente y el futuro de la región, se reconstruyen las principales apuestas que habitantes del Catatumbo han ideado para hacerle frente a los efectos erráticos de políticas y programas antidrogas.

El capítulo hace, además, un recuento de la interacción de las guerrillas (FARC, ELN y EPL) y paramilitares (en particular del Bloque Catatumbo de las AUC) con el cultivo de coca, las dinámicas de regulación que han implementado en el territorio, su cruenta confrontación por el control del mercado de sus derivados químicos y la reestructuración más reciente de la economía de la coca en la región. Para terminar, se describen algunos de los impactos y transformaciones más significativos del cultivo de la mata y la comercialización de sus derivados en el Catatumbo.

5.1. La inserción de la coca en el Catatumbo

5.1.1. La Gabarra: eso era oro puro

Habitantes del Catatumbo coinciden en recordar los orígenes de la coca en la región: se trató de un fenómeno externo que se expandió de manera acelerada y que ha producido profundas transformaciones en su territorio. Reconocen que fue en la zona rural de La Gabarra, corregimiento del municipio de Tibú, donde inició y se fortaleció de manera exponencial el cultivo de la *mata*.

Como se anotó en el capítulo 2, el hoy corregimiento de La Gabarra fue poblado como consecuencia de diferentes olas de colonización que arribaron al Catatumbo desde mediados de los años cincuenta. En esta época se dio la "colonización del río", que refiere a los primeros colonos que se asentaron en el poblado y en el caserío Kilómetro 60 (Instituto de Desarrollo de la Comunidad Tomo I, 1971). A estos le siguieron familias de otros municipios y departamentos huyendo de los estragos de La Violencia.

Un segundo proceso de colonización, como ya se mencionó, ocurrió entre 1967 y 1968, cuando el Incora (hoy Agencia Nacional de Tierras) inicia el programa de titulación de tierras baldías a colonos, con un resultado de 5.505 hectáreas repartidas a cien familias, hasta 1971. Los colonos que llegaron a habitar estas tierras se encontraron con un

territorio rico en biodiversidad, con copiosos recursos hidrográficos y la posibilidad de empezar una nueva vida promisoria en medio de la abundancia:

> Entonces nos trasladamos para La Gabarra y mi papá se consiguió una finca que llamaban de Incora, que en ese tiempo estaba dando fincas para que trabajaran y pagar con mejora. Y empezamos a vivir ahí en esa finca y mi papá trabajaba con mis hermanos, vengo de una familia de 10 hermanos y ahí empezamos a cultivar la tierra, a trabajar lo que tiene que ver plátano, la yuca, patilla, la ahuyama (...) era eso lo que mi papá en ese tiempo cultivaba y se daba muchisísimo, era demasiado la abundancia de la agricultura. Y otras personas cultivaban lo que era el zapote, el aguacate, la naranja, mandarina. Entonces habían tiempos en que se daban esas cosechas y las llevaban al pueblo y pues las llevaban al pueblo y las sacaban para afuera pero en el camino se perdía porque duraba mucho tiempo en llegar el producto a Tibú o a Cúcuta porque prácticamente carretera no había (...). Entonces el campesino siempre peliaba por eso, se desanimaba porque tras de que tenían que pagar un presupuesto para llegar al pueblo, otro presupuesto para llegar a la ciudad y no se podía aprovechar lo que se cultivaba, entonces todo eso terminaba regalándose en el camino; a veces bajaban los camionados de verduras en el camino y las dejaban porque ya maduro no servía (...) el caso es que me recuerdo mucho que la comida se perdía, había demasiada comida: tú ibas a pescar y eso el río era abundante, eso se sacaba muchísimo pescado, era un río muy agradecido digo yo, salía de toda clase de especie de tipo 9, 10, 12 kilos un paletón, un bagre (CNMH, entrevista, mujer adulta, Cúcuta, 2017).

La coca llegó a La Gabarra hacia finales de la década de los ochenta y se consolidó hacia mediados de la década siguiente, expandiéndose a otras zonas rurales del municipio de Tibú como Campo Dos y veredas colindantes con la parte norte del municipio de Teorama, a Sardinata (en

particular el corregimiento San Martín de Loba) y veredas del municipio de El Tarra más cercanas a Tibú.

Aunque las personas de la región refieren que las primeras semillas o matas de coca fueron traídas por alguien externo, o conocedor de la dinámica de la siembra de coca en otras zonas del país, sus versiones varían en torno a su identidad o procedencia:

> Eso principió a llegar por ahí de Antioquia, eso fue por ahí en el 89 (...) eso principió a llegar gente con semillas de Antioquia, del Urabá, del Guaviare, que por allá ya había esos cultivos y empezaron acá la gente a meterse en eso (CNMH, taller de memoria, La Gabarra, 2012).

> Aquí llegaron 17 familias del Caquetá (...) y comenzaron a sembrar coca acá (CNMH, taller con sacerdotes, Tibú, 2016).

> La coca llegó por *rollos,* así como la semilla de yuca, así por *varillas*[238]. Y uno la picaba y eso nos enseñaron a sembrar esa vaina, eso sí no se dificultó. La trajo un señor del pueblo que no recuerdo muy bien el nombre ahorita (...) el caso es que ese señor fue el primero que llegó a la zona con la dichosa mata y empezaron a decir que por allá en otras partes eso era oro puro, que se les había acabado el sufrimiento, que ya no tenían que bregar con transporte ni con cargas largas ni pesadas, que experimentaran en esa tierra que esa tierra era muy buena y que a lo mejor se daba mucho. Y valía 200 pesos el gajito, o sea la matica. De una varillita podía sacar 10, 20 maticas (...) Entonces la vendían por arrobas o por gajitos, como era hasta ahora naciendo la semilla (CNMH, entrevista, mujer adulta, Cúcuta, 2017).

238 Se refiere a partes del tallo de una planta adulta de coca que, una vez vuelta a sembrar, da origen a una nueva planta.

> Se vio esa tendencia que no la trajo ni el ELN ni la trajo el EPL. La trajo las FARC a la zona del Catatumbo. Sí, claro, la coca la trajo hace 30 años las FARC (CNMH, entrevista, hombre líder social, Ocaña, 2016).

Como sea, desde mediados de los años noventa hasta finales de la década, La Gabarra vivió lo que habitantes de la región recuerdan como un verdadero *boom* de la coca y, en consecuencia, del dinero[239]. Tres rasgos importantes recuerdan para dar cuenta de este fenómeno: la abundancia de dinero circulante, un incremento poblacional acelerado y la popularización de una serie de actividades que trajo consigo el mercado de la coca, en particular, prostíbulos y *bailaderos*.

Un sacerdote de la época recordó que, en La Gabarra, para mediados de los noventa se movían miles de millones, tal vez de dólares, alrededor de la economía de la coca:

> Los que estuvieron de párrocos en La Gabarra se dieron cuenta que fue el boom de la plata. Se dice que se movía en ese entonces 6.000 millones de pesos en un fin de semana en La Gabarra en ese año [1996]. Yo estuve en una misión, en el 96 y fui enviado para la vereda, la más lejana, que se llamaba El Suspiro y Morro Frío, y yo personalmente vi 6 mulas cargadas con dólares. Una cosa era que me hubieran contado y otra que la hubiera visto yo (CNMH, taller con sacerdotes, Tibú, 2016).

239 Un fenómeno que estaba ocurriendo también en otras zonas del país. Según datos de Unodc, a partir de 1997 Colombia superó a Bolivia y a Perú como principal país cultivador de coca en la región andina. Para 1999, Colombia fue responsable del 73 por ciento de los cultivos de coca en la región, por encima de Perú (18 por ciento) y Bolivia (10 por ciento), una tendencia que se mantuvo estable con el paso de los años. En 2002, el área cultivada con coca en Colombia representaba el 59 por ciento del área en la región andina, frente a un 27 por ciento de Perú y un 14 por ciento de Bolivia (Unodc y República de Colombia, 2003, página 10). Por su parte, Bagley afirma que para 1999 los niveles de producción de hoja de coca en Colombia aumentaron más del doble frente a los que se habían registrado el año anterior, alcanzando aproximadamente 220 toneladas (Bagley, 2000, página 5).

A su vez, en referencia a esta época, se recuerdan los "bultos de plata" que se movían por Tibú:

> Aquí hubo un *extendimiento* de coca que ya aquí al pie de la base [militar] había cultivo, enseguida de la base había cultivos (...), ahí prácticamente al pie de ellos. Y un *extendimiento* cosa arrecha, cosa arrecha. Pero era que entonces era una economía, hermano, una economía arrecha [...] yo les echo un cuento a ustedes y ustedes me dirán mentiroso, pero aquí llegaba la plata era por bultos (...) En ese entonces que hubo ese apogeo de plata, muchisísima plata, pa' qué, cantidad de plata; en ese entonces lo que hacía falta era droga porque aquí llegaron carteles muy duros, carteles duros, muy duros (CNMH, entrevista, hombre trabajador de cultivos de coca, Tibú 2016).

Un sacerdote de la región recordó que para mediados de los años noventa se calculaba que, en La Gabarra, un corregimiento de aproximadamente 6.000 habitantes antes del auge de la coca, habitaban unas veinticinco mil personas, cifra que algunos incluso ubican en los cincuenta mil. Un docente de La Gabarra recordó que para entonces era difícil caminar por las calles durante el fin de semana por la cantidad de personas que se congregaban en el poblado. En la escuela en la que trabajaba para entonces, se alcanzó a vender 70 canastas de gaseosa en una semana, 300 bolsas de agua y 3.000 *vikingos*[240] al día, cifras altísimas en relación con años anteriores. En la vereda Vetas Central, una docente experimentó tal incremento poblacional así:

> En el 98 se oyó una bulla de que había mucha plata, eso había muchísimo billete (...) llegó mucha población, esa escuela se llenó. Hasta 50 estudiantes, cuando allá en el pueblo se manejan por ahí 20, 15. Entonces el director de núcleo educativo llegó a una reunión

240 Agua colorada que se vende congelada, en empaques de plástico, y se consume succionando. Por su bajo costo su consumo es muy común en zonas calurosas como este corregimiento.

> allá a La Gabarra y los presidentes de Junta [de Acción Comunal] empezaron a pedir que mandaran más maestros porque [había] muchísimos estudiantes, porque entró muchísima gente de otras partes en el 98 (CNMH, taller de memoria con docentes, Tibú, 2016).

En 1998, relató el docente de La Gabarra mencionado, "parecía que el diablo estuviera suelto", haciendo referencia a la proliferación de bares, prostíbulos y *bailaderos* que existían en el poblado para la época: unos 10 "negocios de bares" (prostíbulos), siendo uno de los más recordados El Ganadero, que llegó a emplear a más de noventa trabajadoras sexuales; 15 discotecas, El Ranchón era la más famosa, recuerdan también la llamada El Festín y Míster Caimán. Todo, acompañado de una proliferación de vendedores ambulantes llegados de todas las regiones del país. Así lo recordó una mujer que visitó La Gabarra por primera vez en 1993: "Entonces yo ver a unos hombres pues sí, bien arreglados. Las niñas con unas cadenitas de oro y mucha bulla, o sea, ¿cómo en un lugar tan pequeño hay tantas discotecas? Para mí eran discotecas, para ellos eran bailaderos" (CNMH, taller violencia sexual, Cúcuta, 2016). Un habitante de La Gabarra narró que para entonces:

> Había una cantidad [de prostíbulos] ¡uy! Hermano, le cuento que aquí en esa época fue una abundancia de prostíbulos y llegaba una cantidad de mujeres. Aquí llegaban de Cúcuta, unas decían que venían de Medellín (...) Usted llegaba un sábado tipo 7 de la noche, 10 de la noche y esas mujeres demoraban más en ir a bañarse que estar el otro esperándola en la puerta. Estas viejas también tuvieron una época muy buena (CNMH, entrevista, hombre trabajador en cultivos de coca, Tibú, 2016).

En sus relatos sobre los primeros años de la coca, habitantes de la región también narraron sus percepciones sobre las causas que motivaron a pobladores de La Gabarra y, poco a poco a los demás habitantes del Catatumbo, a dedicarse a su cultivo. Dan cuenta de los sentidos que las

personas de la región otorgan a la *mata*: si bien se trataba de una despensa alimenticia, para las y los habitantes de La Gabarra y veredas aledañas resultaba bastante desventajoso dedicarse solo a los cultivos de pancoger, frente a las facilidades en la producción y comercialización que les otorgaba el cultivo y procesamiento de la hoja de coca. Como lo expresó una habitante del corregimiento, en esos años "el Estado poco se asomó":

> Y así empezó a llegar la coca a La Gabarra porque en ese entonces, todavía hay ese problema, no hay vías, nos hay carreteras. Entonces ¿por dónde se saca ese producto [agrícola]? Y el producto bueno es pesado, es complicado (...) Hay fincas que quedan muy lejos del río por lo que no son aledañas, entonces tienen que caminar y pues hacía aún más caro el transporte como lo eran las mulas, que por cada bulto cobraban 20.000 o tanto porque siempre se llevaba todo el día un señor de esos llevando una carga al puerto. Y más encima el viaje de la canoa para acá [hacia la vereda], entonces cuando llegaba al puerto, había gastado más de lo que valía el producto. Entonces ya que no había vía y la vaina es que ahí siempre fue solo, ahí el Estado poco se asomó, o sea, no tengo recuerdo del Estado así tipo [años] 90 o eso. Ha sido siempre más bien el campesino solo (CNMH, entrevista, mujer adulta, Cúcuta, 2017).

Haciendo eco de su argumento, un profesor de la zona refirió que:

> Ya se sistematizó La Gabarra donde empezaron a sembrar estos cultivos y dijeron que era un producto en el cual iba a generar muchas ganancias y era en corto plazo y [las personas] veían la plata. Mientras que en los cultivos tradicionales lamentablemente era mucho tiempo y después que sembraban sus cultivos no tenían a quién venderlos. Y lo otro, no habían carreteras para sacar los productos para poderlos comercializar normalmente. Pues debido a todo esto mucha gente vio el facilismo, porque la plata se recogía y se veía *chan con chan*, de una sola vez; terminó el cultivo a los tres meses, rapidito lo fumigaban, lo abonaban y tenían el producto ya

> listo para comercializarlo y lo comercializaban y obtenían la plata de una sola vez (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

Al respecto, es importante considerar dos factores de tipo contextual que fueron referidos por personas y organizaciones campesinas de la región que, argumentan, ayudan a comprender la expansión de los cultivos de coca en zonas como La Gabarra.

En primer lugar, se hizo mención de los efectos negativos que tuvieron sobre las ya frágiles (en muchos casos) economías agrícolas locales las políticas de liberalización de mercados y apertura económica[241]. Si bien se ha visto que las formas en que se articularon las economías campesinas a tales políticas fueron diversas (Machado, 1992) y que las dinámicas del ajuste estructural no las eliminaron, se ha argumentado que en la región sus impactos sí fueron definitivos, en particular en zonas como La Gabarra, donde no se contaba con condiciones básicas de comercialización de productos agropecuarios.

Al respecto, las organizaciones sociales Ascamcat y Cisca coinciden en asegurar que las políticas de apertura económica tuvieron un impacto negativo sobre las economías campesinas, lo que empujó a que, en muchos casos, campesinos y campesinas se dedicaran al cultivo de la hoja de coca como respuesta: "el Cisca comprende que el impacto de las políticas de apertura de mercados al comercio internacional produjo una crisis en la economía agrícola tradicional que indujo al campesinado del Catatumbo al cultivo de la coca como medio de subsistencia" (CNMH, entrevista, hombre adulto defensor de DD.HH., Bogotá, 2018). Una hipótesis de la que hacen eco la Asociación Minga y la Fundación Progresar al afirmar que "los cultivos ilícitos empezaron a ganar terreno" en la región

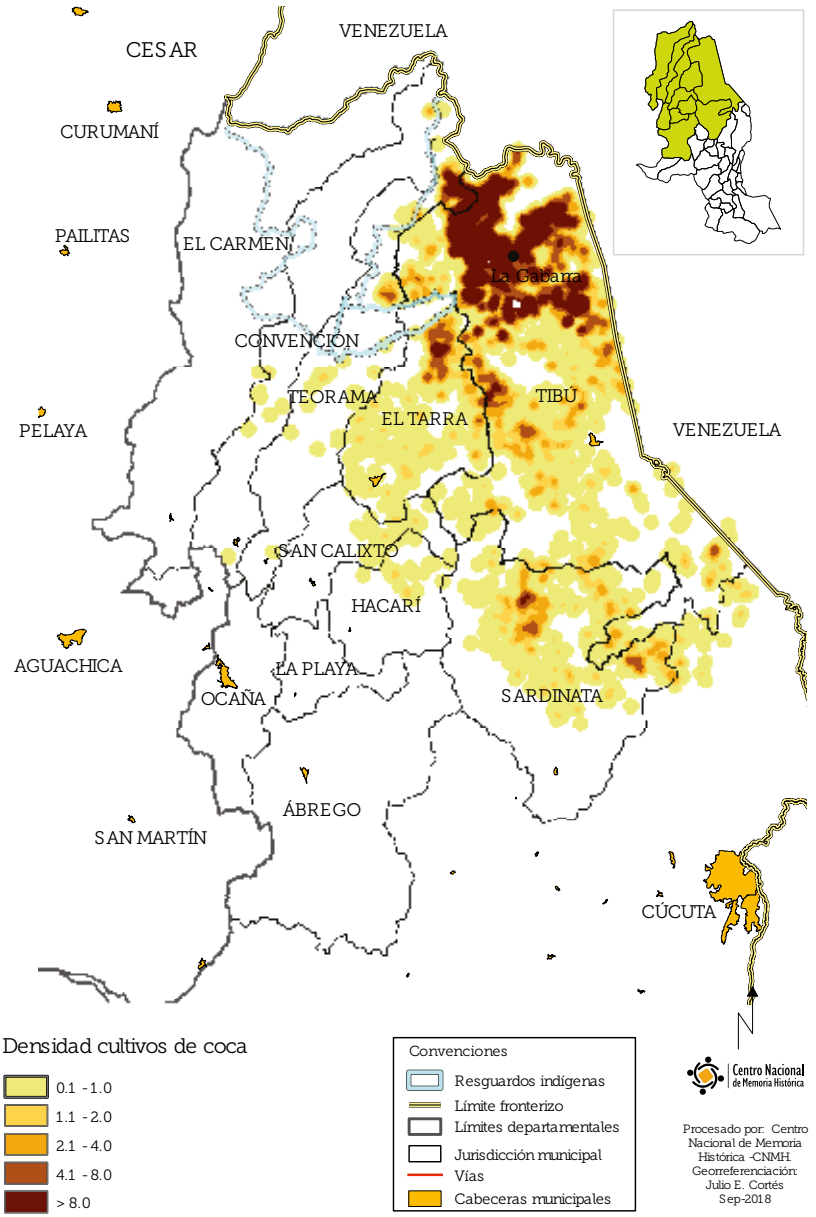
241 Se refiere, de manera general, a la restricción del gasto social y de la intervención del Estado en la definición de políticas de desarrollo social y económico, así como a la apertura de los mercados nacionales hacia la competencia internacional (Aguilar, 1991; Machado, 1992). En el país se ponen en marcha estas políticas neoliberales a partir de los primeros años de la década de los noventa.

como resultado de una crisis de la economía campesina producida por las políticas de apertura económica "que afectaron fundamentalmente la pequeña y mediana agricultura, base de la seguridad alimentaria nacional" (Asociación Minga y Fundación Progresar, 2008, página 36).

Como se mostró en el capítulo 3, en 1992 Ecopetrol clausuró las actividades de refinación en Tibú, argumentando su baja rentabilidad y las dificultades para operar ante los constantes saboteos a la infraestructura petrolera, en particular por parte del ELN. Esto último conllevó al posterior cierre del campo Río de Oro-Puerto Barco, ubicado en zona rural de La Gabarra, a partir de 1999 (CNMH, taller con sacerdotes, Tibú, 2016). Aunque no es posible establecer el impacto directo de esta retirada sobre la economía local de Tibú, personas de la región consideraron factible afirmar que tuvo un efecto negativo y que significó un declive en las condiciones de vida de muchas personas dedicadas a la prestación de servicios y otras actividades vinculadas con la economía petrolera. Ecopetrol jugaba un papel de importancia en la provisión de algunos bienes básicos como equipamientos en infraestructura, cuyo impacto era considerable.

Estos dos factores, aunados a las condiciones de precariedad y marginación descritas, en conjunto, degradaron las condiciones de vida de las y los pobladores de esta zona del Catatumbo. La hoja de coca, un cultivo con el que "se veía la plata", experimentó un auge sin precedentes en Tibú y zonas aledañas, dando paso al "*boom* de la plata" o la "bonanza cocalera", como algunas personas refieren, dinámica que se ubicó entre mediados de los noventa y los primeros años de los dos mil.

Mapa 20. Densidad de cultivos de coca (hectárea por kilómetro cuadrado) 2001



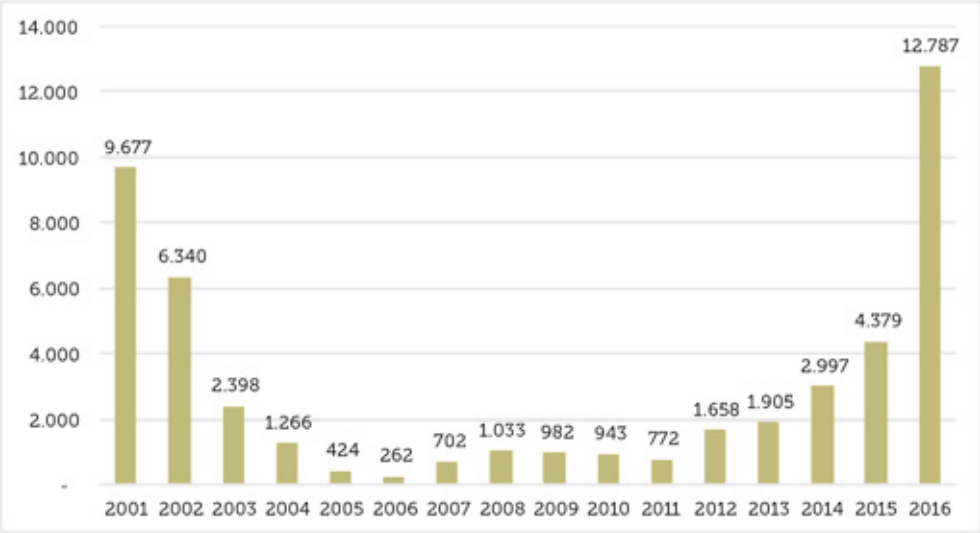
Fuente: Minjusticia y Unodc.

Si bien no existen datos a nivel municipal sobre las áreas de coca cultivadas para antes del 2000, se tienen otras referencias que ayudan a comprender las dinámicas de la expansión del cultivo en la región. Para el año 1997, la revista Semana reportó la existencia de cinco mil hectáreas sembradas en La Gabarra (Revista Semana, 1998, 23 de febrero); a su vez, se registró que en marzo de 1999 el departamento de Norte de Santander tenía 15.039 hectáreas sembradas y en agosto del año siguiente, 6.280 (Unodc y República de Colombia, 2003, página 14).

Dada la concentración para estos años del cultivo en la zona de La Gabarra, es factible afirmar que los datos departamentales corresponden en gran medida a esta área, una dinámica que continuó expandiéndose, para llegar a más de 9.000 hectáreas sembradas en el año 2001. De este modo, Tibú se ha convertido en el principal municipio con área cultivada con coca del departamento, hasta la actualidad, ubicándolo además en varias oportunidades entre los principales diez municipios donde más se cultiva coca en el país[242].

242 De acuerdo con datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Onudc, Tibú ha estado entre los 10 municipios con mayor cantidad de coca sembrada en el país en 2001 (cuarto lugar), 2002 (segundo lugar), 2003 (décimo lugar) y entre 2012-2016. A partir de 2012, hasta el censo de 2016, Tibú se ha posicionado entre los 4 primeros municipios con mayor coca sembrada del país. Para 2016, ocupó el segundo lugar (después de Tumaco, Nariño), representando un 9 por ciento del total nacional. A partir del censo de 2015, El Tarra se sumó a la lista, y Sardinata en 2016.

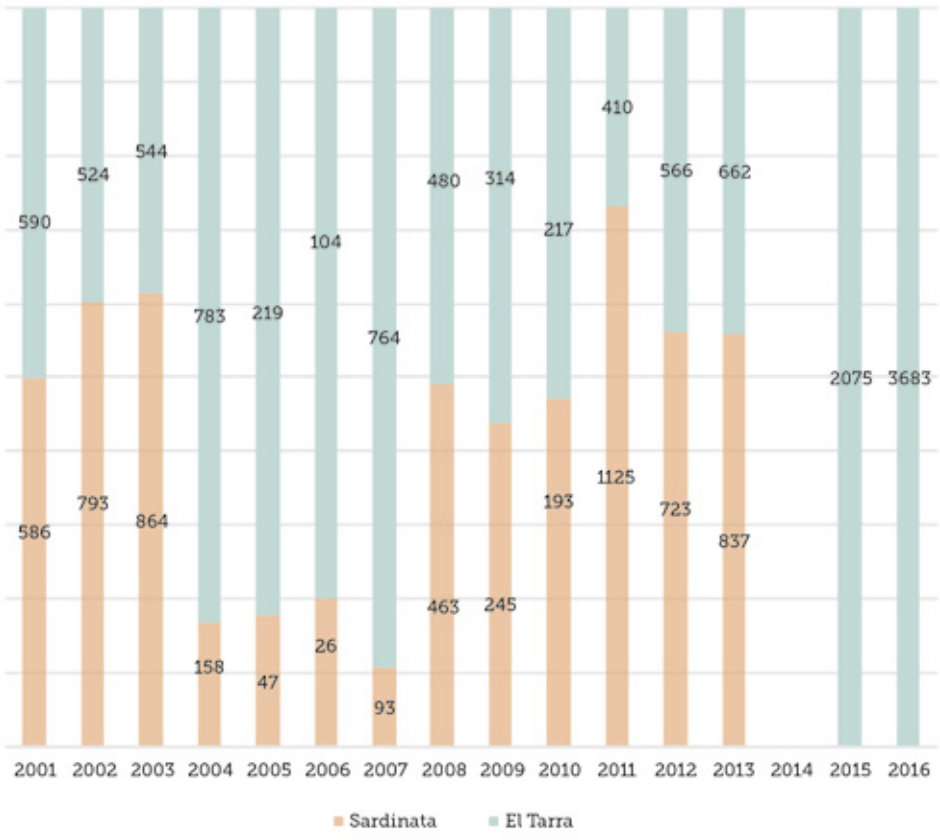
Gráfico 15. Dinámica de las hectáreas cultivadas con coca en Tibú 2001-2016



Fuente: CNMH, elaboración propia con base en datos de los censos de cultivos ilícitos del Simci de Onudc, 2018.

Por su parte, los municipios de El Tarra y Sardinata (ubicados en la zona del bajo y medio Catatumbo) también registraron de manera temprana la presencia de cultivos de coca. Aunque sus dimensiones son bastante menores en comparación con Tibú, la siembra de coca se ha mantenido como una constante con el paso de los años, con un repunte muy significativo a partir de 2013 para el caso de El Tarra.

Gráfico 16. Dinámica de hectáreas de coca cultivadas en El Tarra y Sardinata 2001-2016



Fuente: CNMH, elaboración propia con base en datos del Simci de Onudc, 2018[243].

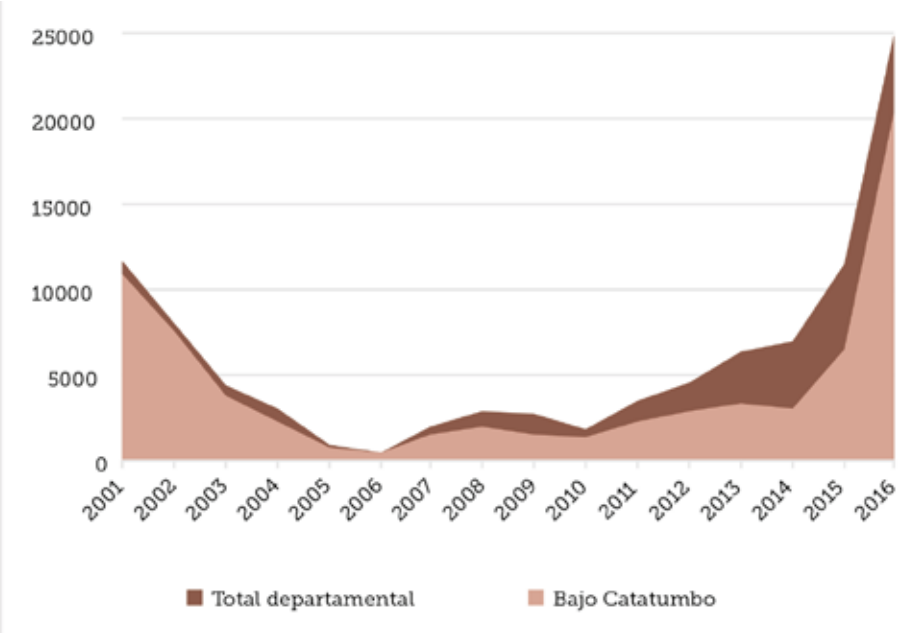
De modo tal que, si se consideran en conjunto los tres municipios que conforman la zona del bajo y medio Catatumbo (Tibú, Sardinata y El Tarra), estos registran la mayor participación de área de coca sembrada del total departamental. El área restante, que crece a partir de 2006, da

243 La discontinuidad en las líneas hace referencia a que el Simci no reporta datos para esos años.

cuenta además de la existencia de cultivos de coca en otros municipios del departamento[244].

Aunque sin las dimensiones del bajo y medio Catatumbo, aquellos que conforman la zona alta de la región (parte alta de Teorama, Convención, El Carmen, San Calixto, Hacarí, La Playa) asumen un significativo protagonismo, como se expone a continuación.

Gráfico 17. Comparativo del área sembrada en el bajo y medio Catatumbo y el resto de Norte de Santander 2001-2016



Fuente: CNMH, elaboración propia con base en datos del Simci de Onudc, 2018[245].

244 Aparte de los municipios del Catatumbo, en el departamento se han registrado cultivos de coca en Bucarasica, Cáchira, Cúcuta, El Zulia, La Esperanza, Lourdes y Toledo. La participación más significativa en el total departamental corresponde a La Esperanza y Cáchira, en donde ha aumentado las áreas cultivadas a partir de 2008, pero su participación es insignificante frente a la representación porcentual de los municipios del Catatumbo.

245 No se incluyen aquí los datos para El Tarra en el año 2014, ni para Sardinata en 2014 y 2015.

5.1.2. El alto Catatumbo: presencia tardía y re-territorialización

El cultivo de coca se extiende a la zona del alto Catatumbo durante la primera década del siglo XX, pero su expansión más significativa ocurre a partir de 2008 y se mantiene en una dinámica de crecimiento a partir de 2010. La coca en esta zona del Catatumbo puede considerarse, entonces, un fenómeno tardío.

No obstante, esta no fue la primera vez que habitantes de esta zona del Catatumbo interactuaron con un cultivo de uso ilícito. Como fue recordado por personas de la región, a finales de los años setenta y primera parte de los ochenta, en la zona se dio el cultivo y la comercialización de marihuana, en particular en los municipios de Ocaña, Teorama, Hacarí, La Playa y Ábrego, en especial por la fuerte conexión comercial que existe entre estos municipios y ciudades como Valledupar y Santa Marta, donde tuvo su mayor desarrollo el cultivo y comercio de esta planta:

> Fue por ahí en los años 82, 83, 84. En esa época hubo la bonanza de marihuana de Santa Marta, entonces unas personas fueron allá y se trajeron la idea que era muy rentable, que les iba muy bien y debido a eso también llegaron personas con ilusión de sembrar la marihuana. Pero según allá no fue mucho tiempo porque la calidad que dio allá no fue la mejor y no había comerciantes, entonces cuando ya se comercializó no quedó mayormente nada, no pagaron el precio justo, entonces fue una temporadita muy corta. Eso duró por ahí un año, ese apogeo de marihuana, pero no fue rentable. Eso fue en La Vega de San Antonio [corregimiento de La Playa] y en todos esos corregimientos y parte de Hacarí, también parte de Ábrego, pero eso no fue muy rentable. No hubo nadie que se hu-

> biera *plantado*[246] con un cultivo de marihuana (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Ocaña, 2017)[247].

Factores como la excesiva oferta de marihuana (lo que pronto abarató su precio), acciones de interdicción como la destrucción del cultivo y el encarcelamiento de cultivadores, hicieron de esta, una bonanza efímera que no tuvo un impacto a mediano plazo en la región[248].

Pobladores del alto Catatumbo se habían relacionado antes con la planta de coca, mas no como cultivadores. La Gabarra se había convertido en fuente de empleo para personas que durante los años del *boom jornaliaron* en fincas en las que se requirió de su mano de obra. En ese sentido, en los noventa La Gabarra se posicionó como el eje de la economía de la coca, ejerciendo influencia no solo en sus zonas aledañas sino en toda la región, en municipios como Teorama y otros más apartados como Convención. Así lo relató un habitante de este último municipio:

> Realmente del 2000 hacia atrás la mayor concentración de coca estaba en El Tarra y Tibú. La gente del municipio de Convención se desplazaba a trabajar, a raspar, como raspachines, a las veredas de La Gabarra hacia arriba. Una vereda que le llamaban El Martillo. Te digo porque tengo algunos familiares y amigos que iban hacia ese sector. De San Juancito, que es del municipio de Teorama, a pie hacia El Martillo se gastaban día y medio, dos días, las personas

246 Haya alcanzado una rentabilidad sostenida

247 En particular en Ocaña hubo personas que se dedicaron al comercio de marihuana y son recordadas como aquellas que en la época tenían "los mejores carros y hacían las grandes fiestas" (CNMH, entrevista, defensor de DD.HH., Cúcuta, 2017). Como se describió en el capítulo 4, organizaciones armadas de carácter privado que fueron creadas en el sur del Cesar prestaron servicios de protección a narcotraficantes y en las rutas de exportación.

248 El presidente Julio César Turbay puso en marcha en 1978 una campaña de erradicación manual y fumigación aérea con el herbicida Paraquat. No hay referencias de fumigaciones para el Catatumbo. El cultivo se recuperó nuevamente a mediados de los ochenta y solo hasta finales de esa década disminuyó de manera considerable (En Ramírez, 2001, página 58).

> que iban a raspar. De allá de ese sector se trajeron las primeras semillas para sembrar en el municipio de Convención, que fue en el sector de La Trinidad y La Libertad. A partir de esa fecha empezó a sembrarse la coca en el municipio, después llegaron otras semillas como la Cuarentana, la Pajarita, pero fue allá en ese sector de La Trinidad a partir del año 2000 (CNMH, taller de memoria, Convención, 2017).

A diferencia de lo reseñado para el caso de La Gabarra, personas del alto Catatumbo se refieren al cultivo de coca poniendo un énfasis particular en que este significó una "salida de emergencia" ante los estragos que les había producido el arrasamiento de los paramilitares en sus cuerpos, tejidos comunitarios y paisajes socioculturales.

Si bien reconocen que el cultivo de coca existía, en bajas proporciones, previo a la entrada y consolidación paramilitar en esta zona, algunas personas entrevistadas aseguraron que el se convirtió en la única opción con la que quedó la población del Catatumbo para volver a habitar su territorio de cara a los estragos producidos por los paramilitares. En ese sentido, el cultivo de coca en esta zona operó como una estrategia de reterritorialización: los paisajes del despojo y del abandono producidos por la guerra fueron habitados por campesinas y campesinos que, al sembrar la tierra, daban forma a sus esperanzas de permanecer en su territorio en condiciones de dignidad:

> En el 2002 que fue la incursión paramilitar, había plantaciones de coca, pero muy bajas, un par de fincas, poquitas, poquitas hectáreas. Yo creo que entre el 2000 y el 2002 no habían más de 20, 30 hectáreas en ese sector [la zona norte del municipio de Convención]. Cuando le tocó a la gente desplazarse por la incursión paramilitar y, como después los paramilitares salen, la gente empieza a retornar después de haber perdido todo. Porque los paramilitares se traen ganado, eso sacaron todo: gente que tenía 80, 100 reses, vivía

> del ganado, lo perdió todo, bestias, perdieron absolutamente todo. Al retornar esa gente a esos territorios y no tener con qué sobrevivir, ahí fue donde empezó el auge importante de la siembra de los cultivos de uso ilícito. Del 2002 en adelante, después que retornan (...) En el mismo 2002, a fines del 2002 y a principios de 2003 la gente inicia el retorno (CNMH, taller de memoria, Convención, 2017).

En un escenario similar, habitantes de San Calixto refirieron que el cultivo de coca se extendió a las zonas noroccidental y sur del municipio[249] hacia 2007, época en la cual sus habitantes habían quedado "a merced de la buena suerte":

> Como el campesino quedó a merced de la buena suerte, porque sus cultivos se perdieron, las fincas quedaron abandonadas (...) al regresar se encontraron con la coca, un producto que a los tres meses más o menos podía terminar de reproducirse. Era una salida de emergencia porque el café prácticamente estaba desapareciendo por los bajos precios y por el abandono que le estaba dando el mismo Estado al campesino. Entonces la guerrilla autorizó, dio vía libre a sembrar los cultivos en las fincas y mire a donde está el problema de los cultivos ilícitos que hasta al mismo Gobierno se le ha salido de las manos (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

Sembrar coca no fue una decisión fácil ni a nivel individual ni comunitario. De sus relatos se deduce que muchos habitantes y líderes comunales del alto Catatumbo debatieron ampliamente la pertinencia y efectos futuros de la coca en su territorio. En particular, el caso del auge de la coca en La Gabarra alertaba a las personas de esta zona, puesto que para mediados de la década de los dos mil ya eran evidentes las profundas transformaciones que el cultivo acarreaba en las comunidades y sus territorios, como se abordará en la última parte de este capítulo. Así lo

249 En la zona oriental del municipio, que colinda con El Tarra, Tibú y Hacarí, había cultivo de coca desde el 2003, aproximadamente.

expresó un líder comunal de La Playa, que relata que el cultivo "llegó en propiedad" hacia el 2004 a esa zona:

> Nosotros los líderes comunitarios no estábamos de acuerdo en que llegara el cultivo y se extendiera en lo largo y ancho del Catatumbo. Porque nosotros mirábamos la situación de La Gabarra, cómo se estaba viviendo, se estaba saliendo de las manos, del control del bien común. Nosotros mirábamos que beneficiaba una parte económicamente, pero mirábamos que podía producir mucho problema también por el alto costo de la vida, porque sabíamos que se iba a bajar mucho la producción de [cultivos de] pancoger. Entonces la gente miraba solo el signo pesos, pero no miraba que digamos por mejorar una parte se empeoraba la otra. Entonces hubo controversias de una parte y de otra (...) hubieron muchas controversias ahí en la misma región, de las mismas JAC y entonces uno no les podía imponer [a los campesinos empobrecidos] porque ellos daban la razón que si ellos no acudían de esa manera, que era lo único que valía más y que ellos prácticamente tenían que hacer plata para solventar las necesidades. Y mirando la crisis cafetera de ese entonces y también cebollera, porque también la cebolla se fue por el piso y el fríjol (...), entonces debido a eso la gente empezó a entrar en conciencia y tocó dejar que la gente cultivara el cultivo de uso ilícito porque no habían vías de acceso, entonces la gente miraba eso: que un kilo de mercancía [pasta de coca] estaban vendiéndolo en dos millones, dos millones quinientos mil pesos y les estaba quedando el 50 o 60 por ciento de recursos (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Ocaña, 2017).

En diálogo con lo mencionado en este testimonio, una mujer de una vereda de San Calixto ilustró el sentimiento de desconsuelo que les produce a campesinas y campesinos la imposibilidad de vender sus productos agrícolas a precios justos, lo que les proporcionaría recursos económicos que facilitarían una vida digna. Esto obligó, no solo a ella, sino a

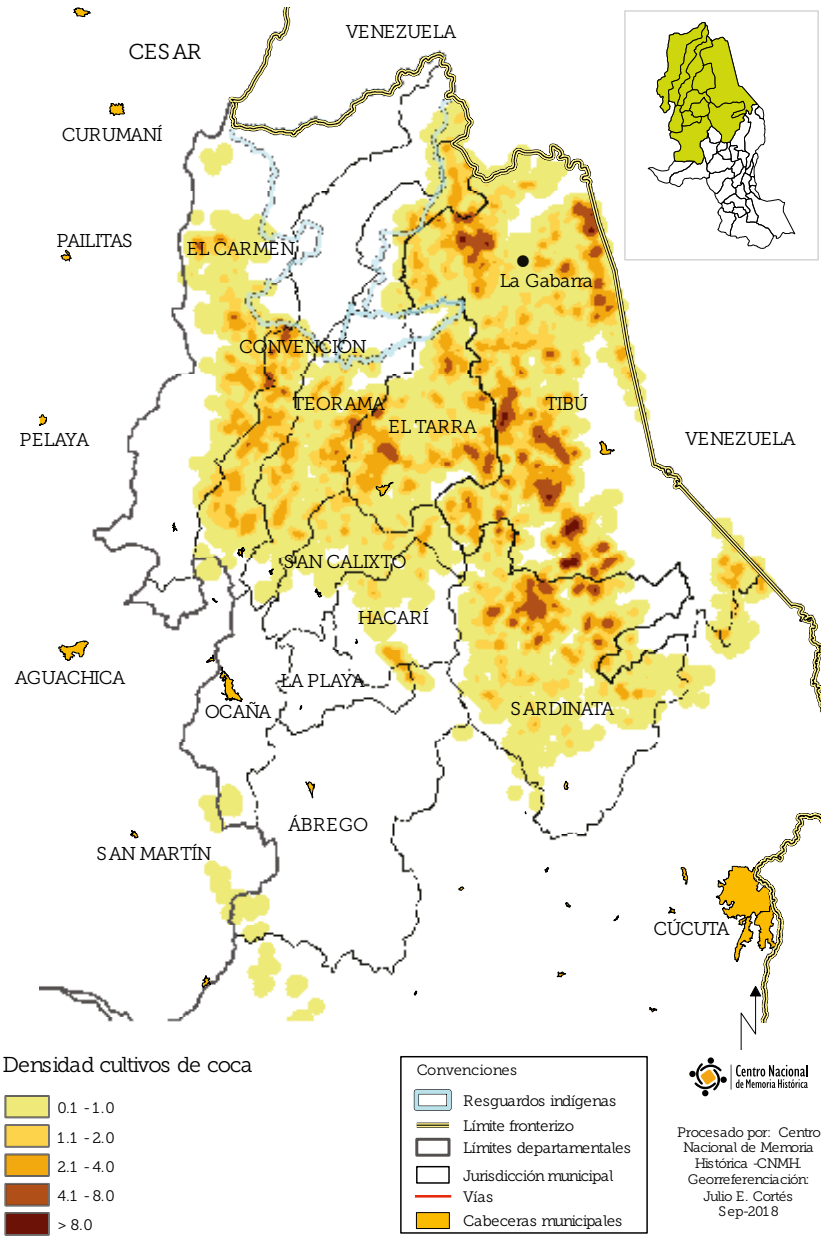
cientos de personas a cultivar coca para sobrevivir:

> Otra cosita: [su vereda] tiene tierras buenas para el pancoger, pero lo que pasa es que cuando uno va a la ciudad de Ocaña a vender, no le vale nada. Un bulto de maíz, de mazorca, lo pagan a 20.000 pesos ¿dígame usted? Una carga de sorgo [la venden a] 300 y pico mil de pesos. La yuca la lleva uno, a veces está barata, todo lo que uno cultiva de pancoger nada le vale. Vamos a Ocaña a venderlos, no dan nada, uno llega es desconsolado, porque [no puede traer] ni un mercado para la casa. Ojalá que el Gobierno le ponga un precio bueno al cultivo de pancoger porque a los campesinos les gusta mucho trabajar la tierra, pero de ver que el cultivo no vale nada, ellos se ponen mal porque ¿qué tiene pa' los hijos, dígame? Ahorita estamos hablando de coca no porque a nosotros nos gusta sembrar coca, pero la obligación nos toca porque no hemos tenido para el sustento de los hijos y pa' darles uno dotación a los hijos, el estudio y todo (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016)[250].

El cultivo de coca en el alto Catatumbo ha experimentado un exponencial ascenso, concentrado en el período que va desde 2010 a 2013, en particular en los municipios El Carmen, Teorama y Convención. El primero pasó de 4 hectáreas en 2001 a 871 en 2013, mientras Convención pasó de algo más de 13 hectáreas a 999 en los mismos años.

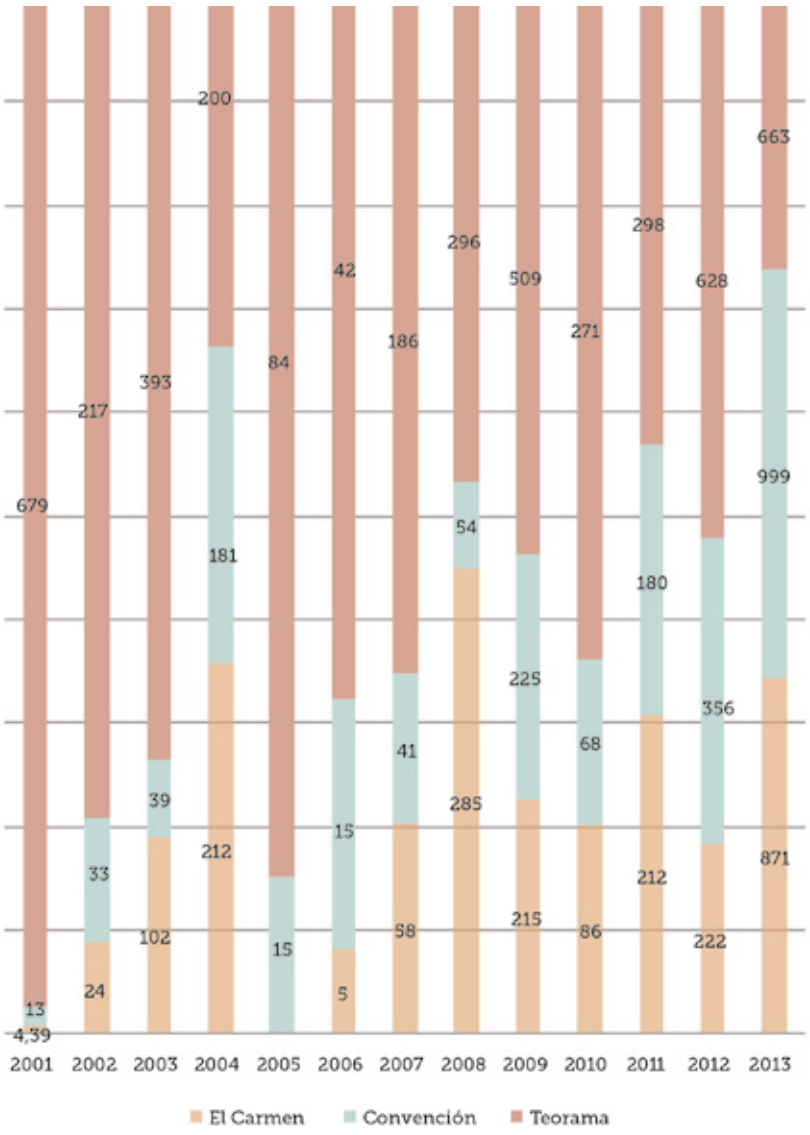
250 En su estudio, Serrano da cuenta del balance económico (ingresos totales menos egresos totales) de productos tradicionalmente cosechados en la región. En los casos del plátano hartón, la yuca y el maíz, el balance es negativo, es decir, que sus cultivadores venden a muy bajo precio la cosecha, lo cual no les alcanza para solventar los gastos de inversión en los que incurrieron. Los datos fueron recabados a partir de la información aportada por productores campesinos de El Tarra, Hacarí y Teorama (Serrano, 2009, página 53).

Mapa 21. Densidad de cultivos de coca - hectárea por kilómetro cuadrado 2014



Fuente: Minjusticia y Unodc.

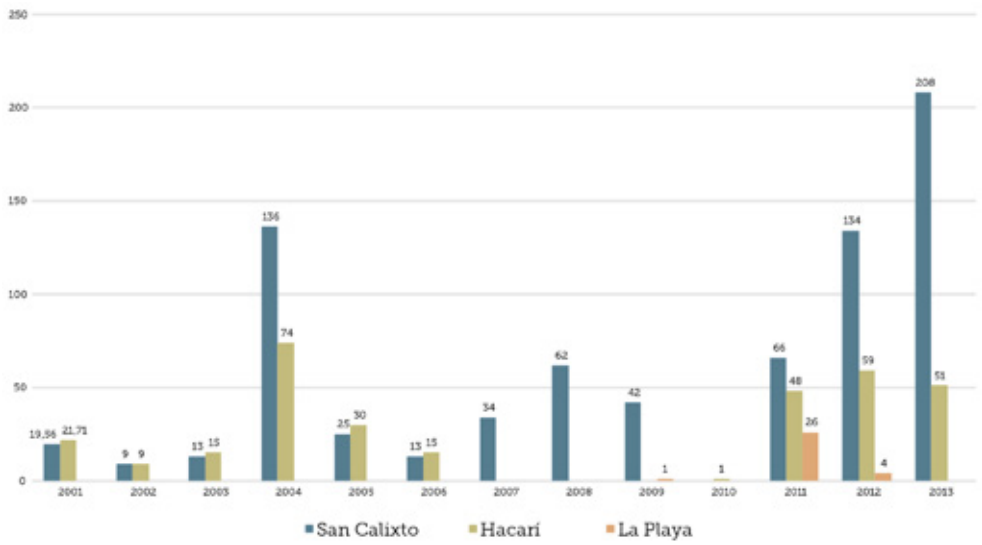
Gráfico 18. Dinámica de las hectáreas cultivadas con coca en El Carmen, Convención y Teorama 2001-2013



Fuente: CNMH, elaboración propia con base en datos del Simci de Onudc, 2018[251].

251 La discontinuidad en las líneas hace referencia a que el Simci no reporta datos para esos años.

Gráfico 19. Dinámica de las hectáreas cultivadas con coca en San Calixto, Hacarí y La Playa 2001-2013



Fuente: CNMH, elaboración propia con base en datos del Simci de Onudc, 2018[252].

Como se puede apreciar, el cultivo de hoja de coca se ha expandido a todos los municipios que conforman el Catatumbo y su densidad se ha hecho uniforme en la geografía de la región. Ello muestra que no se trata de un fenómeno aislado que se circunscribe a una zona particular (como ocurrió durante los años noventa), sino de una dinámica de tipo regional. Al respecto, un elemento de importancia en el desarrollo del cultivo de hoja de coca en el Catatumbo tiene que ver con su repunte sostenido a partir de 2010 y su asombroso crecimiento a partir de 2014, en medio de las negociaciones de paz entre el Gobierno nacional y las FARC.

252 La discontinuidad en las líneas hace referencia a que el Simci no reporta datos para esos años, 2018.

Ello muestra la multiplicidad de factores que dan forma a este fenómeno en la región. Como se ve al revisar la dinámica de crecimiento que ha experimentado después de la desmovilización de estructuras de las AUC en 2004 y 2006 y de las negociaciones de paz con las FARC, el cultivo de hoja de coca no depende para su funcionamiento -de forma inequívoca- de la presencia de un actor armado específico en el territorio. Factores relacionados con el marginamiento y la pobreza rural y de los efectos de la confrontación armada, entre otros, evidencian que la persistencia del cultivo de hoja de coca en la región puede comprenderse menos como una mera práctica atada a las políticas económicas de los armados y más como el resultado de la interacción de complejas dinámicas regionales presentadas en este informe.

Es por esto por lo que habitantes claman para que, tanto la comprensión del lugar de la coca en la región como el avance hacia la implementación de políticas antidrogas con efecto duradero que garanticen la existencia digna de sus cultivadores, se basen en una apuesta de tipo regional que recoja de manera concertada y satisfactoria las particularidades, dinámicas históricas y demandas del Catatumbo.

5.2.
El cultivo y la raspa de la hoja de coca

El eje de la economía *coquera* reside en el cultivo de la hoja de coca. El primer eslabón de la cadena consiste en la siembra de la semilla o del tallo (estaca) que producirá una nueva planta. Los cultivadores en el Catatumbo deben preparar la tierra: *rozar* el terreno y limpiarlo de plantas, malezas y demás vegetación, como es usual, recurriendo a la quema controlada. Del mismo modo que han hecho con la yuca, el maíz, el fríjol o el cacao, campesinos y campesinas del Catatumbo

cultivan la coca acopiando semillas y cuidando los retoños durante las primeras semanas.

Semilla de coca. Fotografía: Camilo Ara para el CNMH, 2016.

La planta de coca tiene distintas variedades. En las conversaciones en el Catatumbo se mencionó que las variedades se han alternado en el tiempo y poseen características que las distinguen. Como lo mencionó un sacerdote, en la región "la primera coca que se siembra es la coca pajarita. Y en menos de un año aparece la coca peruana. Y en menos de 6 años aparece la coca cuarentana, a los 14 años aparece lo que hoy tenemos en el Catatumbo, la famosa injerto, que es una coca que es una combinación entre cuarentana y la peruana" (CNMH, taller con sacerdotes, Tibú, 2016).

Tabla 5. Variedades de coca presentes en el Catatumbo

Variedad	Temporalidad en el Catatumbo	Comentarios de sus cultivadores[253]
La pajarita	Primera variedad en aparecer en la región (en La Gabarra)	*La mata se crecía mucho. En ese entonces que yo raspé era una mata de hoja más pequeña, más dura, más difícil de raspar, entonces la gente optó por dejarla a un lado e irse por La peruana, en ese entonces.*
La peruana	Aparece, más o menos, al año de La Pajarita (se siembra con tallo)	*Es una mata que produce una mercancía muy elegante, una mercancía 1 A, como nombran. Y es una mata que usted la puede trabajar por mucho cada 45 días, cuando se abona bien. La puede raspar cualquier persona. Es muy fácil para trabajar, para quimiquiar[254].* *Es la mata que produce la mejor mercancía*
La cuarentana	Aparece aproximadamente 6 años después de La Peruana	*La que más se seca, se está secando ella sola. Hay partes que se secan hasta 20 matas, 30 matas seguidas solo ese pedazo [donde está sembrada] (...) uno la corta y tiene algo negro el palo por dentro* *La mata se va en puro vicio y no echa nada[255]*
Injerto (combinación entre cuarentana y peruana)	Aparece hacia 2013 en la región	*Esa mata que hay ahorita produce mucha, mucha hoja. O sea, si antes una hectárea de peruana producía, digámosle, por mucho 200 arrobas, el injerto está produciendo bien existidas 400 arrobas (...) en mercancía. La calidad no es igual, es más dura pa' trabajar, es más dura pa' los químicos*

Fuente: CNMH, trabajo de campo, 2016. Los testimonios corresponden a hombres adultos cultivadores y trabajadores en cultivos de coca de La Gabarra.

253 Se hizo mención de otras variedades como La millonaria y la cogollo morado, pero no se profundizó.

254 Proceso de convertir la hoja en pasta base de cocaína.

255 Hace referencia al rendimiento de las hojas de coca en la producción de pasta base de cocaína.

Una vez la mata está madura, lo que toma entre tres o cuatro meses, inicia el ciclo de producción de hoja, para lo cual "hay que estarla limpiando", abonándola y fumigándola de plagas e insectos, como han hecho personas de la región siempre con cualquier otro cultivo. En promedio, una mata adulta "echa hoja" aproximadamente cada tres meses, aunque dependiendo de la variedad puede tomar menos tiempo: "cuando se pone mala la mata, tres meses. Y cuando se pone más o menos buena, que echa bastante hojita, se raspa de dos meses, dos meses y medio" (CNMH, entrevista, hombres trabajadores en cultivos de coca, Tibú, 2016).

Semillero de mata de coca. Fotografía: Camilo Ara para el CNMH, 2016.

El proceso de recolección de la hoja recibe el nombre de *raspa*[256] y a quienes lo llevan a cabo se les conoce como *raspachines* o *raspachos,* una

256 Una mata de coca se *descalza* cuando se raspa por primera vez.

actividad que se realiza con las manos y genera cortadas y heridas, por lo cual las personas suelen protegerse los dedos con retazos de tela o cintas[257].

El cultivo de coca en el Catatumbo se ha desarrollado en general en pequeñas parcelas. Las dimensiones de las áreas cultivadas no significan que el cultivo se da en grandes propiedades. Esta es la excepción en la región, aunque durante los años del auge sí existieron y aún existen, grandes cultivos de coca.

Como se puede inferir de los datos presentados por Simci, el cultivo se desarrolla en su mayoría en lotes que no sobrepasan 1 hectárea. Para 2002, en promedio, el 89 por ciento de lotes con cultivos de coca en los municipios del Catatumbo eran menores o iguales a 3 hectáreas y el 11 por ciento restante correspondía a lotes mayores a 3 hectáreas. En 2013, de manera similar, el 86 por ciento de los lotes con cultivos de coca en los municipios del Catatumbo eran menores o iguales a 1 hectárea y el 14 por ciento era mayor a una hectárea.

Las personas consultadas reiteraron que las posibilidades que brinda el trabajo en el cultivo de coca no conllevan a la riqueza. Además, el hecho de que se convierta en el primer eslabón de una cadena donde se mueven altísimas sumas de dinero, no plantea que la obtención de ganancias requiera menos trabajo en relación con otros cultivos. Antes bien, cultivadores de la hoja de coca comprenden que, ante un reducido abanico de posibilidades existentes en la región para vivir dignamente,

257 En el presente, la recolección de la hoja de coca es llevada a cabo por los mismos cultivadores de la planta en sus parcelas, con ayuda de miembros de su grupo familiar e incluso vecinos, a quienes se les puede pagar o no. En la región también han existido fincas coqueras, grandes extensiones de cultivo donde se contrata mano de obra para la recolección de la hoja por parte del dueño o administrador, a quien se conoce como *patrón*. Allí se ofrece empleo como *raspachín* a personas de la misma región, venidos de otros departamentos, así como hombres y mujeres venezolanas que cruzan la frontera para trabajar raspando.

trabajar con la hoja de coca es una decisión muchas veces que se toma de cara a la necesidad:

> En la Gabarra teníamos una parcelita pa' arriba, por [nombre de vereda], pero allá sí no teníamos vaina de esa [coca], o sea, nosotros no teníamos, nunca cultivamos eso, íbamos a otras partes. Nosotros nunca. No me gustaba, yo esa mata no me ha gustado nunca, me ha tocado trabajar porque qué más, pero le toca a uno por obligación, por la lucha, porque si no hay más ¿de qué maneras puede ser? (CNMH, entrevista, mujer adulta mayor, Venezuela, 2016)

Aunque la coca deje un margen de ganancia mayor que otros productos, en lo que refiere al esfuerzo que demanda la mata para producir se enfatiza en que no se trata de dinero fácil puesto que, como con cualquier otro cultivo, requiere de cuidados, abono, compra y manipulación de insumos agroquímicos, entre otros. Factores como plagas, enfermedades o el mal clima pueden echar a perder un cultivo.

La coca no brinda una diferenciación visible en el nivel de vida de las personas que la cultivan, ni tampoco proporciona un reconocimiento social positivo como, por ejemplo, ocurre en la región para personas que se dedican al cultivo de la palma.

> *Como se recoge la hoja, como se recoge la hoja*
> *Se recogiera la plata*
> *Ya yo fuera millonario, ya yo fuera millonario*
> *Aquí en la plaza Caracas*
> *Ya yo fuera millonario, ya yo fuera millonario*
> *Aquí en la plaza Caracas* (Fragmento de canción, CNMH, recorrido territorial 16, Venezuela, 2016).

Es usual que pequeños cultivadores alternan la coca o la siembran de manera paralela con otros productos, aunque muchos han privilegiado la coca. En la actualidad, los cultivos de pancoger y la cría de animales

domésticos (vacas, cerdos, gallinas) se han reducido a los que permitan la subsistencia del grupo familiar, puesto que se considera que no existen condiciones óptimas para su justa comercialización, como lo narraron dos habitantes de una vereda de La Gabarra:

> Participante 1: No, poquita [mata de plátano], toca a la medida porque se pierde.
> Participante 2: [sembramos] solo pal mero gasto
> Participante 1: porque ¿a quién le va a vender uno? ¿a quién?
> Participante 2: y el que tenga moditos, sí, que le queda por ahí platica. Que de la coca a veces por ahí le queda, entonces compra un animalito, una vaquita por ahí a su potrerito y de ahí vive. Y al que no le queda nada pues no ¿qué va a hacer? (CNMH, entrevista, hombres adultos trabajadores en cultivos de coca, Tibú, 2016).

Entre más matas haya para raspar, se espera que mayores sean las ganancias, por lo cual muchos habitantes de la región han optado por talar bosques con el fin de contar con más terreno para sembrar, una actividad que causa serios impactos culturales y medioambientales y en ocasiones ha tenido lugar en el territorio de los resguardos Barí (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017) y del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, donde se ha registrado cultivos de coca.

La raspa ha sido una de las principales dinámicas socioculturales en el Catatumbo desde los años noventa. Por una parte, se ha constituido en una de las fuentes de empleo más importantes para hombres y mujeres de la región, de otros departamentos y del vecino país Venezuela; por otra, ha traído consigo una serie de dinámicas que han creado una cultura alrededor del cultivo y recolección de la coca y ha generado transformaciones considerables en las dinámicas comunitarias, individuales y económicas de la región.

Aun cuando el cultivo se concentró durante los años noventa en La Gabarra y zonas aledañas, su impacto fue a nivel regional. Hombres y mujeres llegaron a la zona en búsqueda de oportunidades de trabajo que garantizaran el sustento propio y de sus grupos familias[258]. En el caso del corregimiento de Campo Dos, una habitante manifestó que hacia 1996:

> De aquí sacaron niños de las escuelas para llevárselos a La Gabarra a raspar coca. Se iban el papá y se iban los hijos y las mujeres vivían solas porque el papá y los hijos mayores estaban raspando coca en La Gabarra. Eso fue un auge tremendo que trajo mucha muerte, también (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

Un elemento de especial relevancia en el caso del Catatumbo y que emergió de manera reiterada en las conversaciones, es el hecho de que hombres y mujeres de la región inician sus actividades como raspachines muy temprano, durante su infancia y adolescencia.

Personas que participaron en los ejercicios de memoria recuerdan que fue alrededor de los 12 o 13 años que iniciaron sus labores como raspachines. En ese sentido, se ha constatado que en el Catatumbo el "irse a raspar" puede considerarse una suerte de rito de paso, un puente hacia la vida adulta: una vez se abandona el núcleo familiar para moverse hacia otros municipios o veredas a las fincas a raspar, el niño, niña o adolescente emprende un viaje hacia la adultez.

Las condiciones laborales, de mucha dificultad durante los primeros días en la raspa, las emociones asociadas a la autonomía e independencia que niños, niñas y adolescentes deben demostrar, así como la paga por su trabajo, genera un cambio en su estatus y les posiciona ante sus familias

258 Algunas personas comentan que fincas coqueras en La Gabarra albergaron en una misma *raspa* a más de cien *raspachines* durante los años del *boom*.

como seres independientes y, en muchos casos, proveedores de recursos[259]. Así lo recordaron algunas de las personas entrevistadas:

> [Mi mamá] nos sacó [de La Gabarra] y nos llevó pa'l campo y... sí, nos puso a estudiar, pero como usted sabe, uno cuando está pequeño no le importa nada, ya cuando me volví mujercita me puse fue a raspar y a agarrar plata y no me importó estudio ni nada. Yo raspé como desde los 13 pa' lante y esa es la vida, no quise estudiar por estar... claro, agarraba platica, ya bailaba, ya jodía, ya la ropa bien. En la misma vereda ahí nos buscaban a nosotros, entonces hablaban con mi mamá y mi mamá nos dejaba ir (CNMH, entrevista, mujer adulta trabajadora en cultivos de coca, Tibú, 2016).

> Ya nosotros llegamos en una época... de los 15 años ya yo me salí de ahí [de su casa paterna], era el sufrimiento. Y ya apareció La Gabarra, que ya había coca y esa vaina y entonces yo me fui, yo me ilusioné y yo me fui pa' La Gabarra a trabajar. Porque allá uno salía a trabajar el jornalito al día y ya los amigos le decían: no ve que en La Gabarra hay mata, hay coca, vamos a trabajar allá, que allá le sale bien (CNMH, entrevista, hombre campesino, Cúcuta, 2016).

En el caso de una maestra de una escuela rural en La Gabarra a finales de los noventa, narró que había una suerte de desbandada en épocas de raspa que generaba una disminución en la atención de niños y niñas al centro educativo: "el tiempo de la raspa era cada 15 días, tocaba que... los pequeñitos iban a la escuela y ya estando de 12 años, que podían raspar,

259 Es a partir de estos ingresos que niños, niñas y adolescentes pueden acceder a actividades como los billares, que aparte de las canchas de fútbol son de los pocos espacios para el esparcimiento con los que cuentan. En algunos casos estos ingresos les facilitan la compra y consumo de alcohol, la adquisición de motocicletas que se han vuelto el medio de transporte más común en la región, en particular en las zonas donde se cultiva coca.

como había tanto niño, entonces se iban a raspar y uno no podía pasarles la falla, nada (CNMH, taller violencia sexual, Cúcuta, 2016)[260].

Si bien los hombres son la mayoría de quienes se dedican a la raspa, también hay mujeres. No obstante, se espera que sean ellas quienes se hagan cargo de la elaboración de alimentos para los obreros de la finca, una actividad que implica un mayor desgaste de energía, comparada con la raspa:

> Un poquito apretado la cocina pues siempre [hay] más gente, obreros (...) y cuando me toca cocinar, cocino y cuando no toca, pues raspo, porque qué más. A mí me gusta más raspar que cocinar porque [con la raspa] usted llega y se para, se pone sus boticas, trabaja, hará lo que usted quiera, nadie le dice nada. Ya usted agarra sus kilos que va a agarrar, llega al cambuche y lo coloca y reposa y a la 1:00 sale otra vez y a las 4:00 está en la casa otra vez, se baña y se acuesta, no tiene que pensar que la comida, que los obreros, nada. A veces si hay bastante obrero se levanta uno a las 2:00 de la mañana, porque hay que tener el desayuno para las 5:00. En la mañana siempre se hace el caldo, las arepas, lo que es los huevos. Si no hay huevos puede fritar carne, salchichón... al otro día otra vez y así pero el caldo no hace falta en la mañana. A las 10:00 tiene que estar el almuerzo hecho, porque hay obreros que llegan a las 10 a veces [consiste] en la sopa y el seco (...) la comida a veces a las cuatro. Ya a las 4:00 llegan los obreros y va uno sirviendo. Si usted llegó a las 4:00, comió y se acostó a dormir y se bañó y se puso a *recochar* por ahí, pero la cocinera no, porque ya a la cocinera a veces le llegan

260 El CNMH reconoce que, siguiendo los marcos legales existentes, la contratación de mano de obra de niños, niñas y adolescentes corresponde a explotación laboral infantil. Sin embargo, esta investigación evidencia que la niñez y la adultez son construidas y entendidas de manera diferente en el Catatumbo (en particular en zonas rurales), en comparación con las principales ciudades del país. Allí, niños, niñas y adolescentes se insertan en la vida adulta de manera temprana, muchas veces cuando toman la decisión de salir del hogar para irse a trabajar y ganar sus propios recursos económicos. Como se ha mostrado, esto muchas veces es irse a raspar, lo que ocurre a la edad de 12 o 13 años. A partir de allí, en muchos casos, adolescentes conforman sus propios hogares.

> las 10:00 de la noche uno en la cocina metido lavando la loza, que pelando las papas pa' dejarlas pa'l otro día. [Con respecto al pago] hay partes que sí [pagan mejor que a un raspachín], pero en la raspa [es] mejor porque uno gana más [dinero] porque más kilos metió, pa' uno mejor (CNMH, entrevista, mujer trabajadora en cultivos de coca, Tibú, 2016).

En algunos casos, todo el núcleo familiar se movilizó hacia La Gabarra para emplearse en las fincas coqueras. La madre asumía las labores de la cocina, mientras sus hijos varones de todas las edades, se dedicaban a la raspa (CNMH, taller de memoria, El Tarra, 2016). Al tratarse de una actividad con una alta informalidad (no hay requisitos para la contratación, no existe acceso a servicios básicos de salud[261] ni hay un procedimiento formal de pago), el trabajo en las fincas coqueras permite la inserción de hombres y mujeres de todo el país y de Venezuela, incluso de hombres jóvenes Barí (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017), provocando que para muchos la raspa se convierta, como lo sostuvo un habitante de La Gabarra, en "la primera fuente de empleo que pude ejercer en mi vida" y, para otros, en una fuente estable de manutención:_

> Uno no requiere muchos requisitos, no requiere presentación, no requiere estudio, no requiere nada, cédula, nada. Es eso: el irse a raspar, tener los dedos disponibles y las costillas pa' ponérselas al sol, eso es lo que requiere un *raspacho*. Hoy en día el *raspacho* si él quiere proponerse un sueldo depende de él. Hay gente que trabaja medio día y raspa 10 arrobas, son 80 mil pesos [entonces] en la tarde no voy a trabajar (CNMH, entrevista, hombre trabajador en cultivos de coca, Tibú, 2016).

261 Una persona contó que la fiebre era un mal común entre los raspachines, en particular porque se trata de una actividad que se realiza bajo el sol, en algunos casos en zonas que rondan los 35 grados centígrados, únicamente con la protección de un sombrero. Se mencionó además el dengue y también se hizo referencia a que a algunos "les pica la mata". Cada persona debe cargar consigo sus propias pastillas durante la raspa, en caso de enfermedad.

> La coca es como un empleo. El que llega a raspar pues siempre es como un empleo porque él va a sacar el sueldito y él se va a ganar los 200, los 300, los 400 [mil pesos] y él ya va a hacer ahí para mantener a su familia. Entonces uno mira que es como favorable en el mismo instante también. Los que siempre tenemos la matica de coca siempre nos mantenemos como con un sueldo (CNMH, entrevista, hombre campesino, Cúcuta, 2016).

La eficiencia en la recolección de la hoja de coca se mide por medio de la cantidad de hojas que una persona alcance a raspar al día, que son medidas en arrobas[262] por parte del patrón (dueño o administrador de la finca) al finalizar la jornada.

Raspachines en cultivo de coca. Como se nota, en medio del cultivo hay sembradas matas de plátano. Fotografía Camilo Ara para el CNMH, 2016.

En particular para las personas que raspan por primera vez, las duras condiciones del trabajo interfieren de manera negativa en su produc-

262 Unidad de medida de masa que equivale a 25 libras o a 12,5 kilogramos.

tividad y es común que tengan un desempeño mediocre. En las fincas coqueras se les conoce como *pichacomida*, en referencia a que, algunos recolectan tan poca hoja de coca (1 o 2 arrobas en un día de trabajo) que ni siquiera "pagan la comida" [263] al patrón. A quienes se destacan por recolectar más que otros (alrededor de 15 o 20 arrobas al día), se los conoce como *cocos*:

> Los primeros días es duro, pal principiante es duro por lo que a uno los dedos se le vuelven nada, salen ampollas y eso. Los primeros diítas, apenas los patrones le dicen: "bueno, usted nada más trajo pa' la comida", ese es el recibo que le dan los patrones, "nada más pa' la comida" (...) En ese entonces era el dilema aquí: *pichacomida* ¿no? porque usted no paga la comida (CNMH, entrevista, hombre trabajador en cultivos de coca, Tibú, 2016).

En lo referente al pago por sus actividades, los raspachines dependen de que la *mercancía* (pasta base de coca) se venda para recibir la paga. Ello genera una gran informalidad en las fechas y plazos para los pagos, pero también épocas de bonanza que se identifican con facilidad por la forma en que se dinamizan actividades y servicios comerciales en la región, incluido el ejercicio del trabajo sexual.

5.3. *Mercancía,* compra e intermediación

La mercancía es el nombre que recibe en la región la pasta base de cocaína, también referida como *la pasta, la pasta de coca, la pasta base*

263 Es usual que el patrón entregue a cada obrero una panela antes del inicio de la jornada, para que al mezclarla con agua cuenten con una fuente de hidratación durante el día. Otras personas la consumen sola.

y *el alcaloide*. Por medio de un proceso que arranca con el picado de las hojas de coca y que incluye una serie de procedimientos químicos en los cuales estas se deben mezclar repetidas veces con cemento, ácido sulfúrico, gasolina o *pategrillo*[264] y potasio, entre otros, se obtiene *la mercancía*, unas piedritas o terrones que en la mayoría de los casos se obtienen en *cocinas* o *cambuches* que, por lo general, los cultivadores instalan en sus predios[265].

Por su parte, en los *cristalizaderos* o *laboratorios*, algunos de los cuales están ubicados en la región, es donde la pasta base de coca se transforma químicamente para obtener el clorhidrato de cocaína, conocido en el país como *perico, cocaína* o simplemente *coca,* producto listo para ser comercializado y consumido.

Es válido mencionar la necesaria distinción entre la planta de coca y los productos resultantes de la alteración química de las propiedades de sus hojas: la pasta base y la cocaína. Con mucha frecuencia se equiparan ambas realidades, con consecuencias nefastas para los cultivadores de la hoja, como en el caso de una noticia del diario El Tiempo según la cual "El incremento de los cultivos de cocaína en Colombia tuvo un impacto directo en el aumento de la oferta en los Estados Unidos" (El Tiempo, 2017, 22 de agosto). Terminando 2008, se emitió en medios de comunicación masivos una campaña publicitaria con el *slogan:* "No cultives la mata que mata", en referencia a la mata de coca, una iniciativa de la DNE (Dirección Nacional de Estupefacientes). A finales de 2010, la Corte

264 Se obtiene extrayendo el crudo de los tubos que lo transportan, que en el caso de la región corresponde a los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Río Zulia-Ayacucho. Este se somete a un proceso de destilación que resulta en el *pategrillo*.

265 El *rinde* refiere a la proporción de hoja de coca que se requiere para obtener determinada cantidad de pasta base. Si bien existen diferencias según la variedad de hoja sembrada, durante el trabajo de campo se hizo referencia a una proporción de entre 50 y 60 arrobas de hoja de coca para 1 kilo de pasta base.

Suprema de Justicia ordenó que se retirara la mencionada campaña por violar los derechos de los demandantes, los indígenas Nasa.

Conocer los procedimientos químicos para la obtención de la pasta de coca implica un ascenso en la jerarquía de la actividad productiva; en ciertos casos, incluso, se recibe un pago fijo por el trabajo. No obstante, tanto la manipulación de este tipo de sustancias, como su desecho, ha generado la percepción de que el cultivo de coca acarrea múltiples desventajas no solo para las personas sino para los ríos y quebradas que circundan los cambuches y para la tierra. En el primer caso, como lo aseguró un hombre, el trabajo en los cambuches implica que "sí, tiene que tragar químicos y eso sí es muy cierto, porque uno metido entre un *cambuche* donde está lleno de gasolina, cemento, amoníaco, algunas personas son muy delicadas para eso, algunos se enferman" (CNMH, entrevistas, hombre adulto trabajador en cultivos de coca, Tibú, 2016).

No obstante, como se señaló en múltiples ejercicios de memoria en la región, la tierra también se enferma. En particular se mencionó por parte de algunas personas que el proceso de obtención del *pategrillo* genera contaminación en los ecosistemas circundantes, pero sobre todo se hizo énfasis en que los desechos de los demás productos químicos usados para la obtención de la mercancía están envenenando los cuerpos de agua y el suelo.

La *mercancía* es vendida en forma directa por los cultivadores a compradores que llegan a la zona. Como lo expresó un habitante de Convención, echando mano de una analogía con los demás productos agrícolas que conforman las economías campesinas del Catatumbo:

> ¿El campesino qué hace? el campesino normalmente vende la base de coca ¿A quién se la vende? Hay gente, compradores, como comprar café, como comprar caña, como comprar maíz, como comprar panela, como comprar cualquier producto. Hay com-

> pradores en las veredas, en las regiones, autorizados obviamente por unos grupos. Ellos compran la mercancía y ellos tienen unos laboratorios o unas denominadas *cocinas*, que es donde hacen el proceso de perico, clorhidrato de cocaína, que ya ese es otro proceso, con otros químicos (CNMH, entrevista, hombre adulto, Convención, 2017).

De tal modo que, a diferencia de la gran mayoría de productos agrícolas que se dan en la región, con excepción de la palma, la coca es un cultivo que, en general, tiene asegurada su cadena de producción y de comercialización. Cultivar coca genera certezas en quienes lo hacen en tanto se reconoce que alguien pagará, tarde o temprano, por *la mercancía* y que las ganancias serán significativas, por lo menos, frente a lo que ocurre con otros cultivos en la región.

Tales compradores convierten la pasta base de coca en clorhidrato de cocaína en *laboratorios* y articulan el proceso de comercialización del producto resultante hacia afuera[266]. En ese sentido, habitantes del Catatumbo que trabajan con hoja de coca establecen una diferencia muy clara entre su labor y lo que pasa una vez que entregan la mercancía al comprador.

El comprador, que actúa como un puente entre la región y el exterior, fue considerado por una persona de la región como un sujeto que "está en las ligas menores [del narcotráfico]", afirmando que "en las mayores es el que está en las ciudades, en Cúcuta, en Bogotá, en Barranquilla, en cualquier ciudad de Colombia" (CNMH, entrevista, hombre adulto, Convención, 2017).

266 Una habitante de la región hizo mención del caso de una adolescente quien, a mediados de los años noventa, fue utilizada como *mula* en La Gabarra (CNMH, taller violencia sexual, Cúcuta, 2016). Algunos cristalizaderos se encuentran fuera de la región, por lo cual la pasta base sale del Catatumbo para volver a entrar, ya como clorhidrato de cocaína, y desde allí ser transportada hacia los mercados internacionales.

Esa relación de lo urbano con lo rural, o del "afuera" con el "adentro" de la región, funciona como una clara línea divisoria entre la labor de cultivar la hoja de coca, que llevan a cabo campesinos y campesinas, su transformación en clorhidrato de cocaína y su tránsito hacia el exterior, que recae en manos de "mafiosos" y narcotraficantes, como lo expresaron trabajadores de la coca de La Gabarra: "el que se está llenando es el de afuera, el que la está sacando pa' afuera. El que la saca, el propio mafioso. Nosotros no tenemos es sino problemas" (CNMH, entrevista, hombres trabajadores en cultivos de coca, Tibú, 2016).

De este modo, personas consultadas pusieron de presente que la coca enriquece al narcotraficante, no al pequeño cultivador de la hoja. Esta referencia convoca a afirmar la gruesa diferencia existente entre las y los campesinos que trabajan cultivando y raspando hoja de coca y quienes trazan y dinamizan las rutas de tráfico y la venta de cocaína. Es el narcotraficante, el sujeto externo de la opulencia, quien en últimas disfruta de los réditos de la transformación de la hoja que, además, no está involucrado en el proceso que va desde la preparación de la tierra para la siembra hasta la raspa. En esta relación desigual el cultivador, junto con el raspachín, están situados en los lugares más débiles de la cadena productiva de la coca:

> El campesino es el que menos ganancia recibe, al fin y al cabo. Es el que se queda con las peladuras en las manos, el que se queda con el sudor. El campesino es el que se queda con la enfermedad, por estar en contacto con todo eso, con todos los químicos. Y al final de cuentas quien se lleva la ganancia pues son los grandes narcotraficantes del país (CNMH, entrevista, hombre adulto, Convención, 2017).

En la reiteración de la diferencia, quienes trabajan el campo aclaran que ni el consumo de cocaína ni la violencia que se desata en la disputa

por su control, les involucra en forma directa. No obstante, en los relatos se hace alusión al deseo de distintas personas dedicadas al cultivo de dejar esta actividad y retornar a los cultivos de pancoger u otras actividades que les generen sustento digno; sin embargo, las condiciones para tal transformación han sido y continúan siendo desfavorables, como se profundizará más adelante.

5.4. Compleja interacción de los grupos armados con la coca

Guerrillas y paramilitares han jugado un papel fundamental en el sostenimiento y expansión de la economía de la coca en el Catatumbo, no sin silencios y temores de los habitantes de la región. En primer lugar, las FARC son recordadas como el grupo armado que por más tiempo intervino de manera decisiva en la cadena productiva de la coca, en particular en la zona rural de La Gabarra, donde se enclavó a partir de finales de los años ochenta. Como ya se mencionó, a través del Frente 33, expandieron desde el suroccidente del departamento de Norte de Santander hacia Tibú y Sardinata en el Catatumbo. Se asentaron en la zona urbana y rural del corregimiento de La Gabarra y, desde entonces, regularon, dinamizaron y sostuvieron el negocio de la coca.

Aunque algunas personas afirmaron que sus combatientes trajeron el cultivo de coca, lo más probable es que las FARC se hayan insertado de manera definitiva en una dinámica económica que ya existía, a tal punto que durante los años del *boom* esta guerrilla controlaba, de manera casi exclusiva, la cadena de la coca en el bajo Catatumbo, en esencia, en Tibú.

En un primer momento, se sostiene en la región, este control se basó en el cobro de un impuesto o cuota sobre cada kilogramo de pasta de coca que se producía (impuesto sobre el gramaje); así mismo, las FARC permitieron la entrada de carteles de la droga a la zona, los cuales compraban la pasta base. Hacia finales de la década de los noventa, sin embargo, el Frente 33 se involucró además en la compra de la pasta (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2017), de tal modo que para 1999, cuando ingresó a la zona el Bloque Catatumbo, esta guerrilla controlaba de manera hegemónica tanto las dinámicas del cultivo, la compra de la pasta base y la interacción con compradores.

Ello le significó a las FARC una extraordinaria fuente de ingresos y aumentó su presencia y poderío militar en esta parte del Catatumbo. No obstante, estos recursos no se dedicaron en exclusivo al beneficio propio de esta guerrilla. Un profesor de la zona relató que las FARC invirtieron en algunos aspectos que, para el momento, se consideraban fundamentales para el bienestar de las comunidades. Tal fue el caso de los comités de educación:

> En ese entonces que yo trabajaba [como docente], cobraban ellos un impuesto y una parte de ese impuesto dizque se lo daban a la educación. Eso más o menos fue en el tiempo del 94 hasta el 99 y yo trabajaba por los límites con Venezuela, por acá por los lados de río abajo, por el Catatumbo abajo. En eso se manejaban unos comités de educación. Lo llamaban ellos que eran fondos que quedaban de lo que cobraban como cuota de la vaina de la coca y ellos daban una parte de eso para lo que las escuelas necesitaban: que hacer un rancho, que hacer una cocina, que un puente para llegar los niños a la escuela, que para pintura, que para cemento o algo, sí, ellos aportaban por esa vaina (...) en cada vereda formaban un comité, lo llamaban ellos comité de educación, con personas de la misma vereda (...) en la que yo estaba sí, yo me acuerdo tanto que se sacó

> un puente, se sacó una plata para construir una especie de piecita para el profesor, sí (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

El férreo control de los cultivos de coca en La Gabarra por parte del Frente 33 de las FARC fue uno de los motivos que condujo a Carlos Castaño, entonces máximo comandante de las AUC, a planear la incursión paramilitar al territorio del Catatumbo, como ya se mencionó. No obstante, la relación de las estructuras paramilitares en la región (Bloque Catatumbo, Frente Héctor Julio Peinado Becerra y Frente Resistencia Motilona) con el cultivo de la hoja de coca y la comercialización de sus derivados fue diversa. Como lo describió Salvatore Mancuso, comandante del Bloque Catatumbo, uno de los intereses fundamentales de esta estructura armada fue arrebatar a la guerrilla el control del mercado de la coca en el bajo Catatumbo:

> El Bloque Norte, montó su propio laboratorio en el año de 1999 en la zona del Catatumbo... cuando ingresamos allá era muy poco lo que se recogía de base de coca porque la zona estaba totalmente dominada y controlada por la guerrilla, en principio cuando llegamos habían unas 40.000 hectáreas sembradas en poder de la guerrilla y fuimos quitándole progresivamente los territorios, pero en la medida en que los quitábamos se vinieron las aspersiones aéreas y las erradicaciones por el Gobierno, al final de mi comandancia, a finales del 2004 no se alcanzaban a recoger 1.100 a 1.200 kilogramos mensuales porque en la medida en que recuperábamos territorios el Gobierno iba fumigando. Todo el transporte de la droga se hacía en canoas, en camiones, en burro, en helicóptero y era coordinada por los comandantes de cada zona, la operación helicoportada la manejaba YO directamente, se hacían movimientos todas las semanas... En el Catatumbo, entre el año 1999 y nuestra desmovilización en diciembre de 2004, recogieron las autodefensas para comercializar 119.600 kilogramos aproximadamente (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 11001600253200680008, 2014).

De esta manera, la principal fuente de financiación del Bloque Catatumbo provino del estricto control de la economía de la coca y la consolidación de corredores de tránsito que les permitieron la salida de los derivados (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 11001600253200680008, 2014). Fue tan profunda la interacción de esta estructura con el cultivo de la hoja de coca, la producción, compra y comercialización de la pasta base y sus derivados, que muchos habitantes de la región sostienen que, a todas luces, esta parece ser la principal razón para la entrada y consecuente expansión esta estructura paramilitar en la región:

> Porque es cierto de que ellos llegaron detrás no tanto por la guerra contra la guerrilla sino para apoderarse de la zona económica del narcotráfico. Cuentan los habitantes de allá de Petrólea que los primeros que llegaron a matar allá fue a todos los que compraban, o sea, negociaban la mercancía. Ya los traían en lista, o sea, pa' eliminarlos y quedarse ellos con el negocio (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

En efecto, las FARC y los paramilitares se tranzaron en una feroz lucha por el monopolio del mercado de la coca en Tibú. Entre 1999 y 2004, no puede hablarse de un control exclusivo de la economía de la coca en la zona por parte de ninguno de estos actores armados. De ese modo, se configuró una porosa división territorial en torno a la coca, como lo narraron habitantes de Tibú: los paramilitares controlaron el negocio en el territorio ubicado en la margen oriental del río Catatumbo, en la zona más plana; las FARC, por su parte, se concentraron en la margen occidental del río, en la zona más montañosa (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2017).

Esa división territorial del control de la coca estuvo lejos de ser perfecta. Durante este período, FARC y paramilitares disputaron la defini-

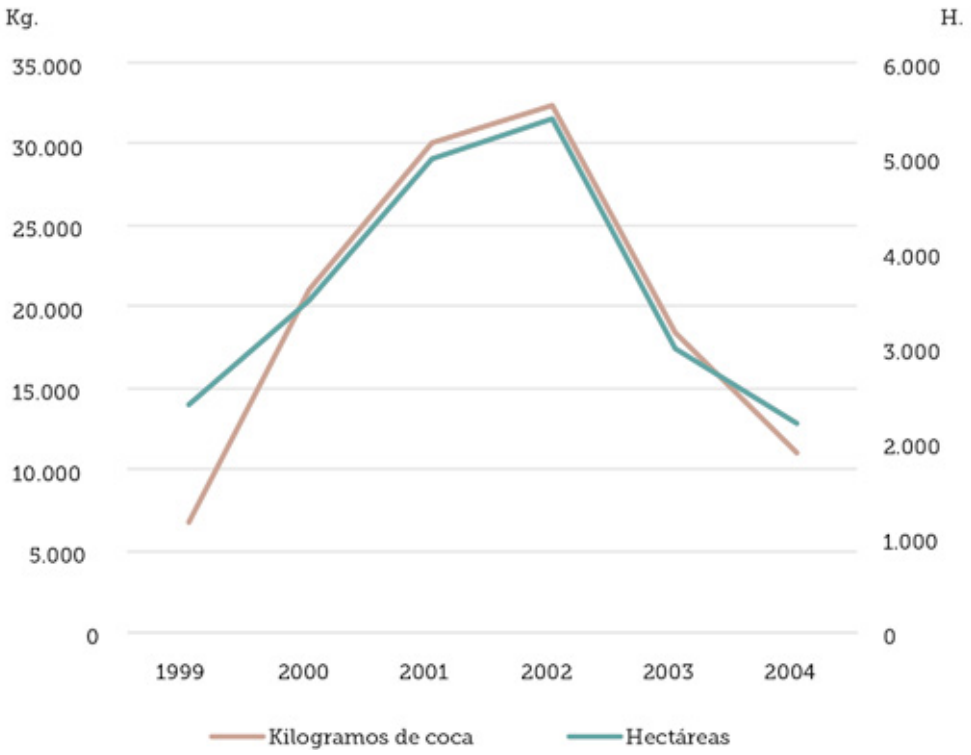
ción de los límites de esta geografía del cultivo de coca. En particular, las FARC recurrieron a la perpetración de masacres durante este período de disputa, una modalidad de violencia que, de parte de esta guerrilla, no conocía la región. Fueron raspachines y trabajadores relacionados con la raspa, las principales víctimas.

Según datos del OMC del CNMH, entre 2000 y 2004, las FARC cometieron 12 masacres en Tibú y por lo menos 8 de estas se relacionaron con la disputa por el control del mercado de la coca con los paramilitares. En 2001, se registran 4 masacres, cuyas víctimas fueron, en su mayoría, raspachines que trabajaban en una finca coquera controlada por paramilitares; en 2002, se registran 2, al igual que en el 2004. En particular el día 15 de junio de 2004, las FARC asesinaron a 34 raspachines e hirieron a 5, en la finca La Duquesa (recordada como La Calavera, en la vereda San Martín de La Gabarra) (CNMH, 2015b, página 117). Esta masacre fue recordada por habitantes de Tibú, tanto por sus dimensiones como por el punto máximo de confrontación al que llegó la disputa por la coca entre las FARC y los paramilitares (CNMH, 2015b, páginas 116-120).

En efecto, el Bloque Catatumbo logró controlar una significativa parte del mercado de la coca que años atrás recaía en exclusivo en las FARC[267]. Se hace una reconstrucción de la cantidad de hectáreas controladas por las Autodefensas y kilogramos de coca recogidos entre 1999 y 2004, a partir de los datos proporcionados por Mancuso en su declaración ante la Fiscalía:

267 En versión libre desde una cárcel en Estados Unidos, Mancuso aseguró que "las AUC destruyeron todos los laboratorios que había en la región y que autorizaron uno solo, al mando de Gerson Álvarez, alias *Kiko*. A su vez, señaló que las AUC controlaron, entre 1999 y 2004, tan solo el 15 por ciento de la producción del narcotráfico, mientras las FARC lo hizo sobre el 85 por ciento restante" (Verdad Abierta, 2009, 6 y 7 de mayo).

Gráfico 20. Kilogramos de coca y hectáreas controladas por el Bloque Catatumbo 1999-2004



Fuente: CNMH, elaboración propia con base en la versión presentada por Salvatore Mancuso contenida en el Escrito de Acusación presentado por la Fiscalía el 8 de noviembre de 2001[268], 2018.

Los paramilitares estimularon el cultivo de hoja de coca, tanto al garantizar la compra de la pasta base como al incentivar su cultivo en mayores proporciones, lo que ocurrió incluso en municipios del alto

268 Las cifras correspondientes a kilogramos de coca deben leerse con el eje vertical de la izquierda; las de hectáreas, con el eje vertical de la derecha (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 11001600253200680008, 2014).

Catatumbo. En el caso de El Carmen, se hizo referencia a la propuesta del Frente Resistencia Motilona para que habitantes de esta zona sembraran coca:

> De la coca tuvimos una reunión en Guamalito de Asociación de Juntas. Asistieron dos comandantes de ellos y ahí dijeron: siembren coca muchachos, que esa es la que nos da plata a nosotros. Hasta le contestó el profesor, de la Asociación de Juntas: no señor. Les recomiendo que no siembren la maldita mata esa, porque esa sirve es pa' comprar armas para darnos a nosotros mismos. Así fresco el pelao les dijo ahí. Ellos sí les convenía que la gente sembraran coca (CNMH, taller de memoria, El Carmen, 2017).

En las personas de la región permanecen las cicatrices de la estricta regulación del mercado de la coca que echó a andar el Bloque Catatumbo, la férrea regulación no solo fue en lo relacionado con la cadena económica, sino de la vida cotidiana de las personas que habitaban en las zonas de cultivo, compra y tránsito de la coca.

Con respecto a la cadena económica de la coca, se hizo referencia al control sobre la compra y venta, en tanto su interés consistió en monopolizar esta transacción y castigar con severidad a quien desobedeciera la orden de venderles la pasta de coca de manera exclusiva, al precio que impusieran. Para lo que ubicaron lugares de compra que, en la práctica, funcionaban como los únicos espacios permitidos donde podía llevarse a cabo esta transacción:

> Ellos establecieron el puesto en La Finaria y ahí obligatoriamente la coca tocaba era venderla allá porque si se daban de cuenta que no la vendieron, mataban. Las personas que encontraban en un vehículo llevando cualquier cantidad de coca lo bajaban, le quitaban el vehículo y lo mataban. Así fuera un gramo (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

> Usted sabe que ellos querían acaparar el negocio y para acaparar el negocio tenían que darle vía un *tatequieto* a los compradores que venían de afuera (...). Y entonces como ellos querían el negocio establecieron la ley de ellos: cero mercancía pa' fuera. A tal precio como nosotros vamos a poner. Ninguno tiene derecho de sobrepasarnos el precio. Todo aquel que llegue a comprar ausente de nosotros, no respondemos, nos da pena pero no respondemos por su vida, pierde la vida, le quitamos la finca, le quitamos la plata, el carro que tenga. Hubo mucha gente que perdió sus propiedades, sus fincas, sus carros, la vida, por meterse en eso (CNMH, entrevista, hombre trabajador en cultivos de coca, Tibú, 2016).

Kiosco del caserío Finaria. Este fue uno de los puntos de compra de coca que instalaron los paramilitares en la zona. Se cuenta que incluso fue dispuesto con vidrios y aire acondicionado. Recorrido territorial 2, La Llana, 2016. Fotografía: María Luisa Moreno para el CNMH.

Tanto en La Gabarra como en Finaria, algunos de sus habitantes recordaron las dinámicas de la compra y pago de la coca. En particular que, en muchas ocasiones, el pago no fue inmediato, puesto que había que esperar días, e incluso semanas, hasta que el mismo se hiciera efectivo. Como lo narró un habitante de La Gabarra:

> En ese entonces pues ellos huyeron un tiempo, eso fue un tiempo para qué, que no había plata, aquí vivíamos de ilusión. Escuchábamos: llegaron los helicópteros, o sea, ¡llegó la plata! Vea eso aquí a cuál más era alquilado esa moto, porque en ese tiempo qué cuento de motos, cualquiera en moto: préstemela. Córrale pa' allá pa una parte que nombraban [nombre] a hacer cola allá (...) y esa era la ilusión de todos: no, que viene la plata, corra a hacer cola. Y entregaban un vale, tal, vaya y reclame y ese vale tenía que aparecer allá a donde ellos llevaban (...) Cuando ya se logró establecer una economía ya, empezaron a establecerse y ya comenzó a ver que sí, que la pagaban, pero cuando la estaban pagando ellos la estaban pagando a dos trescientos [millones de pesos], dos cuatrocientos, o algo así (...) bajó, claro, porque cuando (...) hubo esa abundancia era dos ochocientos, hasta tres doscientos llegó a estar el kilo de base aquí (CNMH, entrevista, hombre trabajador en cultivos de coca, Tibú, 2016).

Por otra parte, los paramilitares restringieron la libre movilidad de las personas, en un interés por controlar la entrada de cualquier comprador no autorizado, o la venta de la coca a compradores que no guardaran relación con el Bloque Catatumbo:

> Yo vivía ahí donde había una estación de policía y me monté ahí [a un carro de transporte intraurbano]. Ellos vieron que me monté y en la bomba estaban requisando y a mí me hicieron bajar los pantalones hasta acá ¡qué pena! yo casi me muero de pena. Hicieron bajar a toda la gente que venía en el carro y ahí dejaron todo lo que

> traían: la yuca se la volvieron pedazos, lechosa[269], todo lo que llevaban por allá pa' la familia ahí quedó. A unas gallinas que llevaba... mire que yo todos los días me recuerdo: le metieron el palo por el... a una gallina pa' mirar qué tenía por dentro la gallina. A mí me hicieron desnudar desde acá. Yo por eso desde ahí empecé a usar licra porque yo dije ¡ay Señor! ya uno no podía montar en un carro porque donde lo requisaban... (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

En el momento de su salida formal, en diciembre del 2004, los paramilitares habían alcanzado un control tal de las rentas derivadas del cultivo y procesamiento de la hoja de coca, que lograron consolidar una serie de rutas de comercialización, puntos estratégicos de control, tasas y tarifas de compra y venta y, sobre todo, una considerable experticia entre sus combatientes en torno a las dinámicas económicas de la coca.

Puesto que este mercado proporcionaba extraordinarios réditos económicos, la salida de los paramilitares del Bloque Catatumbo del territorio significó la disputa entre guerrillas y los GAPD (Grupos Armados Posdesmovilización) por el control de esa economía. Los GAPD emergen con el interés primordial de controlar el, en apariencia, huérfano mercado de la coca en el Catatumbo y sus múltiples conexiones a nivel nacional e internacional.

Es en este contexto donde se hacen visibles el ELN y el EPL y su interacción con la coca en la región. Estas dos guerrillas se habían mantenido ajenas a las dinámicas de crecimiento, expansión y control de la coca en el Catatumbo durante los años noventa, en contraposición con lo descrito para las FARC. En los relatos de habitantes de la región las referencias a estas guerrillas son casi inexistentes para esta época. Solo en un caso se

269 Nombre dado a la papaya

hizo referencia al ELN, poniendo de presente que en algunos sectores de la región arrancó matas de coca en un esfuerzo por impedir la expansión del cultivo y sus consecuentes impactos negativos sobre las economías campesinas, tema que ya se identificaba en La Gabarra (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2017).

La desmovilización del Bloque Catatumbo y los frentes Resistencia Motilona y Héctor Julio Peinado Becerra condujeron a una interacción más próxima del ELN y del EPL en la intermediación del cultivo de coca y la comercialización de la pasta base. Ello guarda relación con el crecimiento del cultivo en los municipios del alto Catatumbo que coincide con las zonas de mayor presencia de estas guerrillas.

Así, las rentas producidas por la coca han sido desde entonces fuentes significativas de financiación para estas dos guerrillas, en particular para el EPL. En este caso, como fue narrado en el Catatumbo, esta guerrilla se especializó en la comercialización de la coca, así como en el tránsito de insumos químicos necesarios para la producción de pasta base y clorhidrato de cocaína, en particular en cabeza de su extinto comandante financiero, alias *Megateo*[270].

En sus relatos, habitantes del alto Catatumbo cuentan que el ELN buscó controlar, o en algunos casos impedir, el crecimiento del cultivo de hoja de coca durante los primeros años. No obstante, terminó por involucrarse de manera cada vez más directa en el ciclo:

> Bueno, hubo muchas reuniones donde había gente que estaba de acuerdo con los sembríos, las plantaciones de coca, pero al final de cuentas quien tomó la última decisión pues fueron las guerrillas de dar autorización y permiso para que las comunidades sem-

270 Dado de baja por las Fuerzas Militares el 2 de octubre de 2015 en zona rural del Catatumbo.

> braran coca, pero obviamente la iniciativa fue de los campesinos, sembrar. No fue porque la guerrilla haya obligado a la gente, no, ni los paramilitares (CNMH, taller de memoria, Convención, 2017).

Sin embargo, habitantes de la región recuerdan que más recientemente las FARC y el ELN buscaron regular el cultivo de coca al exigir a campesinos y campesinas la alternancia de la mata con cultivos de pancoger, en lo cual juega sin duda un papel primordial los efectos que sobre la economía y la cultura campesina tuvo en La Gabarra el *boom* de la coca, que se describirán más adelante. No obstante, el EPL parece tener un interés menos marcado al respecto, centrando su intermediación en garantizar la comercialización, esto es, la salida de la coca hacia fuera de la región. Como lo puso de presente un habitante de Teorama:

> Aunque la guerrilla hace más o menos dos, tres, años implementó una norma ¿sí? Si una finca tiene 5 hectáreas, lo que le permiten sembrar de cultivo ilícito son tres; dos tienen que ser bien sea de yuca, de plátano, algún cultivo lícito. El de la iniciativa fue la FARC como tal y fue la que inicialmente estuvo haciendo bastante incidencia en eso y ponía algunas reglas de juego. Pero el ELN se pegó también a esa norma. El EPL, si ellos [campesinos y campesinas] verán si cultivan las 5 hectáreas, las 10 hectáreas o lo que tengan de coca, no dan mucha mente a esa situación (CNMH, entrevista, hombre adulto, Ocaña, 2016).

El perfil de un/a comandante guerrillero en particular ocupa un lugar importante al considerarlo referente con el control e intermediación del cultivo de coca. Es decir, resultaría inexacto atribuir una única percepción sobre la coca a toda una estructura armada:

> Lo del ELN también está muy focalizado digamos en estructuras, frentes, que optaron por dedicarse al negocio [de la coca], como pasó en Nariño, que allá ese frente es duro y tomó la decisión de dedicarse exclusivamente a eso. Yo creo que ellos al comienzo

> fueron muy fundamentalistas con todo el peso que tiene el tema religioso en ellos y tuvieron una moral frente a la cosa, pero eso se relajó y al final yo los veo bastante metidos en el negocio (CNMH, entrevista, hombre experto en cultivos de uso ilícito, Bogotá, 2017).

En Hacarí, por ejemplo, se hizo referencia a la comandante alias *Tatiana* de las FARC, quien se interesó por evidenciar los efectos de la coca entre las y los habitantes rurales de esta zona: "esa era la pelea que ella tenía, que estábamos acabando los potreros, estábamos acabando todo y que no estábamos dejando ni para sembrar una mata de plátano (...) Eso era lo primero que nos decía: bueno, si usted va a sembrar coca ¿usted de qué va vivir?" (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016).

El desescalamiento de las acciones armadas del Frente 33 de las FARC en el territorio del Catatumbo, a partir de 2015, ha significado un repunte del ELN y el EPL en su intermediación en el mercado de la coca. En los últimos dos años, se hizo referencia en la región, el ELN ha estado al frente de la compra de la pasta base de coca. Como lo expresaron habitantes de El Tarra, en la actualidad la coca debe venderse exclusivamente a las guerrillas, "así haiga otro que compre más caro, no pueden. Eso ya la gente lo ve como muy normal" (CNMH, taller de memoria, El Tarra, 2016).

Por su parte, el EPL, en particular con el liderazgo de *Megateo*, "considerado por la fuerza pública el articulador y gran promotor del narcotráfico en el Catatumbo" (La Opinión 2012, 15 de junio). Al parecer se especializó en la comercialización y en la intermediación frente a los GAPD, que ostentan la capacidad de interacción con carteles del narcotráfico en zonas urbanas de Norte de Santander, como se describirá en el siguiente capítulo.

Sin embargo, en una entrevista concedida a la Revista Semana (uno de los pocos registros públicos de este comandante), *Megateo* manifestó

que el papel del EPL en el Catatumbo se reducía exclusivamente al cobro de un impuesto por kilo de pasta de coca procesada:

> En esta región del Catatumbo habemos tres organizaciones: FARC, ELN, EPL. Nosotros como EPL no estamos diciendo que nosotros no jodemos con la coca. Sería nosotros ser mentirosos, meternos una mentira, no. Aquí no tenemos que esconder guevonadas ni nada parecido. Nosotros, sí, pero no con la droga. Nosotros llegamos, cobramos un impuesto. A nosotros nos tienen que pagar un impuesto por la droga, ¿sí me entienden? Que es una manera de nosotros financiar la guerra. Un impuesto de $400.000 pesos por kilo. Ese es el impuesto que se le da a la organización por ese trabajo. Pero nosotros no es el que pintan que somos los que damos permiso, los que le recogemos, le recibimos a las FARC y al ELN, que nosotros somos los dueños de las cocinas, de todos los laboratorios, que los que damos el permiso, que [somos dueños] de 20, 30 laboratorios. Eso es una vil mentira (Revista Semana, 2013, 20 de julio).

Sin embargo, como fue reconstruido en 2012 por John Jairo Jácome, editor judicial del periódico La Opinión (recurriendo a datos de la Policía Metropolitana de Cúcuta), *Megateo* ocupaba un lugar privilegiado en la configuración de la cadena del narcotráfico en el departamento, en particular por su labor como articulador de los distintos actores con interés en la cadena. De tal modo que a las guerrillas les correspondería lo relacionado con la siembra y la custodia de los cultivos, así como la pasta base de coca.

En lo referente al proceso químico de obtención del clorhidrato de cocaína, describe el periodista que los carteles del narcotráfico (algunos de ellos de origen centroamericano) delegan en miembros de los GAPD (en particular Los Rastrojos y Los Urabeños) el transporte de la pasta base hasta los *cristalizaderos*, así como la obtención de los insumos químicos

requeridos; no obstante, estos espacios son manejados por los narcotraficantes, quienes además ponen la coca en el exterior, mientras los GAPD prestan sus servicios de seguridad en la zona donde están los laboratorios. En sus manos queda, además, el microtráfico y el narcomenudeo en las calles de las ciudades (La Opinión, 2012, 18 de febrero).

La muerte de *Megateo* y las bajas propiciadas por la fuerza pública al comandante de esta estructura y a distintos mandos medios a partir de 2015, han supuesto un reacomodo del mercado de la coca en la región, relevando el rol central del EPL en la configuración de la economía de la coca en el Catatumbo. Durante 2016, se hizo referencia constante a que no había quién comprara la mercancía y, en la actualidad, hay pocas claridades en el Catatumbo sobre la reestructuración de la economía de la coca, que se caracteriza por su dinamismo y constante transformación. En medio, se encuentran pequeños cultivadores para quienes las políticas antidrogas no han logrado tener los efectos positivos duraderos que se espera.

5.5. Paisajes envenenados: fumigas, erradicación y sus impactos

Los programas y políticas estatales de reducción de la economía de la coca se han basado en cuatro grandes ejes:

- Aspersión aérea y erradicación manual forzosa y voluntaria, acompañado de programas de desarrollo alternativo.
- Desmantelamiento de la infraestructura de producción.
- Control de las sustancias químicas utilizadas para el procesamiento de la hoja y de la pasta de coca.

- Control del tráfico de drogas y desmantelamiento de las redes de narcotráfico (Minjusticia y Unodc y 2016b, página 51).

En el caso del Catatumbo, desde mediados de los años noventa, se han implementado programas y políticas concentrados en los cuatro ejes, aunque las personas consultadas hicieron énfasis en los dos primeros. La primera referencia que tienen habitantes de la región se relaciona con el trabajo del programa Plante (Plan Nacional de Desarrollo Alternativo), creado por medio del Decreto 0472 de 1996, dirigido, entre otros, a:

> Los pequeños productores de dichos cultivos en zonas de economía campesina e indígena en las cuales se formularán y ejecutarán, con base en la participación comunitaria, proyectos para crear oportunidades lícitas de generación de ingresos, mejoramiento de la calidad de vida, conservación del medio ambiente y fomento de los valores éticos y culturales para la convivencia pacífica (Decreto 0472, 1996, artículo 3)[271]

El Plante se proponía la creación de programas que les permitieran a cultivadores de coca su sustitución y, a mediano plazo, dedicarse al cultivo de otros productos que garantizaran el sustento económico. No obstante, el incumplimiento de algunos acuerdos con las comunidades y organizaciones locales, así como la lenta ejecución de algunos de sus componentes, generaron malestar en pobladores, como lo relata un líder social de la época:

> El Plante comienza su acción en la región, comienzan a definirse compromisos locales concretos región a región, vereda a vereda, de cómo ir sustituyendo los cultivos, qué programas hay, qué

271 El Decreto 2707 de 1993 había dispuesto la creación de un Comité Nacional para el Desarrollo Alternativo, con la responsabilidad asesorar al PNR en la planeación, coordinación y ejecución de programas y proyectos "de sustitución de cultivos ilícitos en zonas de economía campesina" (Decreto 2707, 1993, artículo 29).

> tipos de inversiones hay para la región. Entonces se negocian unos compromisos con la dirigencia de la región (...) En el transcurso del tiempo comienzan a incumplirse los compromisos, comienza el Gobierno a no resultar con las platas para invertir, para hacer las obras que había que hacer en la región para que la gente en contraprestación fuera sustituyendo sus cultivos, destruyendo ellos mismos, arrancando sus matas de coca para ir sembrando cacao, caucho y una cantidad de propuestas que había para la región. Fíjate que a ese momento nadie había mencionado palma africana para el Catatumbo, nadie habló de eso. Hablamos de otros cultivos, yo fui un pionero en la lucha porque lleváramos caucho, porque conocía los cultivos de caucho en el país, me parecía un recurso de largo aliento que no iba a competir con el entorno ecológico y de las actividades económicas en el campo era de las más fáciles de realizar, más tranquilas, que no te incorporaban necesidades urgentes como recoger una cosecha a tiempo (...) (CNMH, entrevista, hombre movimiento cívico, Cúcuta, 2016).

En particular, algunas personas hicieron referencia a las dificultades que en los noventa implicó el tránsito hacia otros cultivos que tomaban un tiempo mayor en producir, generando interrogantes acerca de las fuentes de sustento de las que podrían echar mano hombres y mujeres de la región, como lo recordó una mujer que vivió en La Gabarra durante los años noventa: "[funcionarios del Plante] le dijeron a la gente que el caucho lo sacaban en 7 años, porque yo estuve en la reunión. Y entonces la gente: bueno ¿de qué vivimos entonces? ¿entonces de qué vivimos? No, porque tenían que arrancar la coca de una vez y esperar los 7 años ¿Entonces de qué vivimos?" (CNMH, taller violencia sexual, Cúcuta, 2016).

Las narraciones de habitantes de la región sobre las políticas y programas de reducción de la coca se concentran en lo ocurrido a partir del año 2000 cuando se inauguran en el Catatumbo las *fumigas*. Nombre con el que se refieren a la política de aspersión aérea con el herbicida glifosa-

to[272], autorizada por el Gobierno colombiano para erradicar cultivos de uso ilícito y que se inauguró en la región con la puesta en marcha del Plan Colombia. Sus recuerdos sobre esta política se relacionan con efectos nefastos en la vida humana y la naturaleza en la región.

Durante el mes de mayo del año 2000, se llevó a cabo la primera operación de aspersión aérea con glifosato sobre el territorio del Catatumbo, se llamó Operación Motilón, incluyó entre otros las veredas El Veinticinco, Vetas Central y La Pradera, del municipio de Tibú[273]. Esta dio como resultado, de acuerdo con datos de la Diran (Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional), 9.584 hectáreas de coca asperjadas. Las aspersiones aéreas estuvieron precedidas de operativos de interdicción que produjeron la destrucción de cerca de 150 laboratorios y la incautación de insumos químicos, hoja de coca, pasta base y clorhidrato de cocaína (Defensoría del Pueblo, 2006)[274].

Como resultado la operación, habitantes de la región, incluidos miembros del Pueblo Barí elevaron una serie de denuncias donde ponían de presente los efectos negativos ocasionados por el glifosato sobre sus vidas, la de sus animales, sus cultivos y fuentes hídricas. En particular, se destaca que a las actividades de aspersión aérea le siguió una serie de manifestaciones por parte de habitantes de Tibú, en particular las del 9, 12 y 15 de junio del 2000. En la primera, se estima la participación de entre 3 mil y 4 mil personas, solicitaban la suspensión de las fumigaciones

272 El glifosato es el ingrediente activo del herbicida que produce la compañía multinacional Monsanto con el nombre *Roundup Ultra*. Su uso para fumigar cultivos de uso ilícito en el país se remonta a mediados de los ochenta. Se estima que la cantidad usada de glifosato en las operaciones de fumigación era un 110 por ciento más concentrada que la versión comercial (Lyons, 2016).

273 De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, esta operación se llevó a cabo sin alertar a las comunidades locales ni a las autoridades. Indígenas Barí protestaron por el nombre escogido para la operación (Defensoría del Pueblo, 2006, página 10).

274 Para esta operación se destinaron 25 aeronaves y más de 300 efectivos (Revista Semana, 2000, 6 de diciembre).

y la suscripción de acuerdos para la sustitución de cultivos. Otras manifestaciones terminaron en disturbios con personas heridas e incluso una muerta (Defensoría del Pueblo, 2006, página 11).

Esta fue solo la primera de muchas operaciones de fumigación aérea que, sumadas a actividades de erradicación forzada y proyectos de sustitución de cultivos, definieron la política antidrogas para el Catatumbo hasta el 2013. También fue una de las primeras oportunidades donde hubo manifestaciones públicas de rechazo protagonizadas por habitantes de la región, que con el tiempo y por la profundización de las consecuencias negativas, se fueron haciendo cada vez más comunes y concurridas.

Durante los primeros años de la década del dos mil se sostuvieron las fumigaciones en el Catatumbo, con un pico en 2003, de alrededor de 14 mil hectáreas asperjadas[275]. El 19 de mayo de 2001 la Diran inició la segunda etapa de fumigaciones (Defensoría del Pueblo, 2006), que se reactivaron en junio de 2002 (Archivo de la diócesis de Tibú)[276]. En enero de 2003 continuó la fumigación (Unodc y República de Colombia, 2003, página 119), y en agosto se puso en marcha la Operación Holocausto, dirigida hacia El Tarra, Teorama y Tibú[277]. En el 2005, se implementaron

275 El desarrollo de estas acciones coincide con la puesta en marcha de la PDSD (Política de Defensa y Seguridad Democrática) en el país (2002 y 2010), y debe comprenderse en el marco de una militarización sin precedentes en el Catatumbo a partir de 2005, como de desarrolla en el capítulo 6.

276 Alias *Mauro*, comandante del frente Tibú del Bloque Catatumbo, refirió en la audiencia de control de cargos que alias *Camilo*, comandante militar del Bloque Catatumbo, pagó la suma de 20 millones de pesos para que las avionetas encargadas de las aspersiones aéreas no asperjaran el herbicida glifosato, sino agua, en la zona de control de los paramilitares: "después con el tiempo me enteré que este dinero que se entregó, era para que los que manejaban el glifosato de las avionetas, esas de fumigación, en vez de echar glifosato echaran agua (...)" (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 11001600253200680008, 2014). Salvatore Mancuso desmiente esta afirmación al señalar que nunca "pagaron las aeronaves" y que, por el contrario, "se permitía la erradicación de los cultivos ilícitos en las zonas que manejábamos nosotros, diferente a lo que ocurría con la guerrilla" (Verdad Abierta, 2009, 6 de mayo).

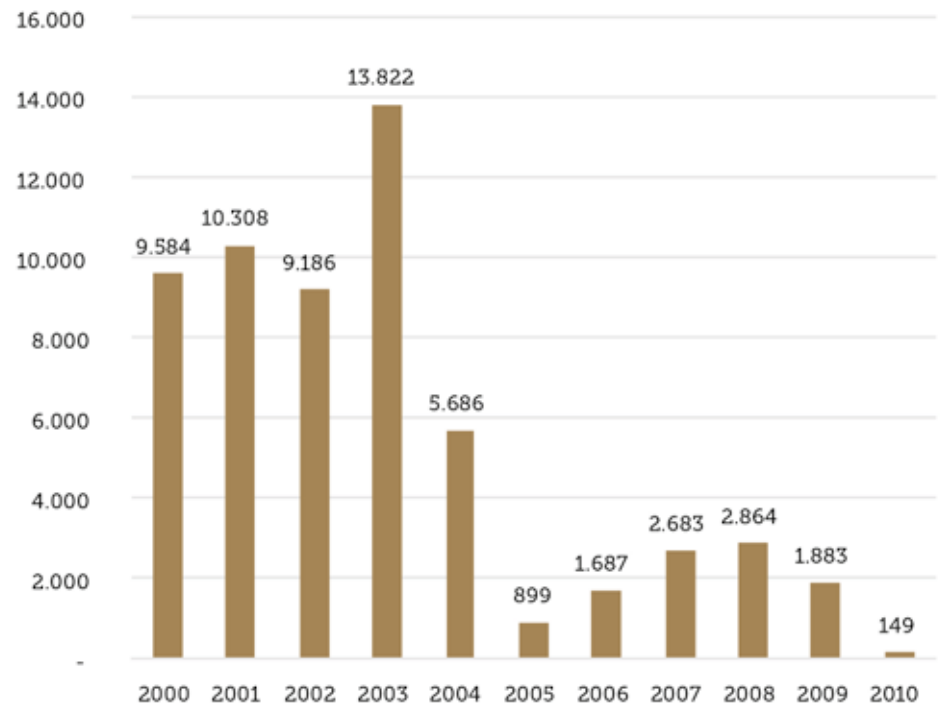
277 El Ejército reportó que a un mes de iniciada la Operación, se habían destruido 78 laboratorios y 6 *cristalizaderos*, efectuado 26 capturas y muerto 26 presuntos guerrilleros, 8 militares y el piloto de uno de los aviones que llevaba a cabo la aspersión aérea (El Tiempo, 2003, 24 de septiembre).

las fases cinco y seis de la Operación Diamante (que se desarrollaba desde 2002) y que se dirigió hacia los municipios El Tarra, Teorama, Hacarí y San Calixto (Defensoría del Pueblo, 2006).

Esta política se interrumpió en 2010 cuando el tripulante de uno de los aviones de aspersión fue atacado (Minjusticia y Unodc, 2016b) y, se mantuvo así, como resultado de los acuerdos obtenidos en el marco del paro campesino del Catatumbo de 2013. A finales de 2015, el Gobierno nacional, dada la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes[278], suspendió las aspersiones aéreas de cultivos de coca con glifosato en el territorio colombiano en cumplimiento del concepto de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre el potencial cancerígeno del herbicida sobre la salud humana (Revista Semana, 2015, 1 de octubre).

278 Creado en 1973 mediante el Decreto 1206, es el órgano asesor del Gobierno nacional en la formulación de políticas, planes y programas contra la producción, comercio y uso de drogas. En mayo de 2016, el Consejo autorizó la aspersión terrestre con glifosato sobre cultivos ilícitos; para llevarse a cabo debe observar una serie de condiciones de protección ambiental y a la salud humana.

Gráfico 21. Hectáreas asperjadas con glifosato en Norte de Santander 2000-2010



Fuente: Unodc, 2017. El dato del año 2000 proviene de Defensoría del Pueblo, 2006.

Las personas consultadas reiteran y coincidieron en describir vívidamente la forma en que el glifosato ha envenenado sus cuerpos, a los animales domésticos y silvestres, sus fuentes hídricas y que incluso ha llegado a esterilizar la tierra:

> Claro, a nosotros nos afectó mucho las fumigaciones en la zona de [nombre del corregimiento], donde hubo una época que allá nos fumigaron y nos dañaron yuca, nos dañaron plátano. Vea, el plátano se pone amarillo, amarillo, amarillo y, a lo último, las hojas se le

> caen y se seca la mata y no da más. La yuca se pone amarilla, la yuca es más resistente porque ella tiene una leche, pero entonces a ella se le amarilla el cogollo y uno va a arrancar de esa yuca y uno no la puede comer, porque eso sale como si uno muerde una piedra. Los animales se ponen así garrapatosos, enfermos, eso se contamina todo, el pescadito, hay unas quebraditas donde hay siempre por ahí lampreas y toda esa vaina y eso es una cosa que contamina todo. Y cuando van y fumigan no fumigan es un cultivo, sino que fumigan es todo: fumigan rastrojeras, fumigan potreros, porque el que está haciendo eso está contratado, eso él va a fumigar con lo que sea y le entregó el listado y vaya y fumigue. Y créame que él está ganando un capital y él no tiene nada que ver con los campesinos, porque él tampoco ha sido una persona sufrida, porque él, mejor dicho, es un empresario, porque se está ganando su capital, entonces él llega y arrebata con lo que pueda mirar adelante (CNMH, entrevista, hombre campesino Cúcuta, 2016).

En el caso de habitantes de la zona rural de La Gabarra narraron que:

> Participante 1: [el avión que llevaba a cabo la fumigación pasaba] bajitico y eso fumigaron potreros, todo, todo.
>
> Participante 2: la yuca. Un corte de yuca duraba por ahí 8 días y ya estaba podrida, o sea el palo se podría, tocaba una varilla y de una vez caía al piso, se deshacía.
>
> Participante 1: la ramita de plátano llegaba y ¡ta! se doblaba.
>
> Participante 2: y las aguas quedaban contaminadas de veneno.
>
> Participante 1: potreros, fumigaban todo (CNMH, entrevista, hombres trabajadores en cultivos de coca, Tibú, 2016).

No sólo las dinámicas relacionadas con la confrontación entre actores armados o el interés de alguno por controlar militarmente el territorio han producido desplazamiento forzado en el Catatumbo. Las aspersiones aéreas con glifosato, enmarcadas en operaciones militares de gran envergadura y la erradicación forzada de la coca han sido responsables

también del éxodo campesino en la región. En particular en el año 2009, bajo el liderazgo de Ascamcat, se creó el Campamento Refugio Humanitario en la vereda Caño Tomás (Teorama), como respuesta a las afectaciones producidas por la política antinarcóticos:

> [En 2009] se viene toda la represión que hemos venido sufriendo los campesinos que tiene que ver con el tema de las erradicaciones forzadas de los cultivos, las fumigaciones y como siempre se manejó la propuesta del qué hacer, entonces eso hace que en el 2009 realizáramos, por primera vez en la historia en la región del Catatumbo y mucho más en la zona fronteriza, el Campamento Refugio Humanitario. ¿Por qué? Porque allá se escuchaba que iba el Ejército igual como si fueran los paramilitares: la gente corría, cruzaban el río, pasaban para el otro lado de la frontera, a Casigua[279] llegaban, eso no dejaba una estabilidad para trabajar en esa área (...) Ahí nacimos como Campamento Refugio Humanitario el 29 de abril de 2009 en la vereda Caño Tomás (CNMH, grupo focal Ascamcat, Cúcuta, 2017).

Fue narrado de manera persistente que en ocasiones las *fumigas* profundizaron las condiciones de pobreza de habitantes a quienes las aspersiones aéreas dejaron en la calle, al tratarse de una estrategia con un amplio radio de afectación que, en minutos, podía destruir el trabajo de años:

> Cuando estaban acá los paramilitares tenían una coquera allá y otra allá y yo estoy acá al medio ¿Qué hicieron? No sé cómo se llama ese veneno [todos: glifosato] Glifosato. Bueno ¿qué hicieron? Llegaron 5 helicópteros y 2 avionetas y ellos no se ponían a reparar que ahí estaban varios metidos ¿Qué hicieron? cuando eso yo era productor: a mí siempre me ha gustado el ganado, tenía bue-

279 Ciudad venezolana en el Estado Zulia.

> nas *pasteras*[280], tenía buenas vacas, sacaba buena porción de leche. Cuando me fumigaron, vea, me dejaron así: en cero. Ahora ¿qué soy? Ahora soy obrero y ¿quién me responde eso? nadie y ¿quién mandó eso? el Estado. Pero el Estado no mandó a alguien a decir: ¿quién fue damnificado? ¿a quién le acabaron las pasteras, ¿a quién dejaron en la calle? Y cómo iba a quejarse si las que mandaban eran las autodefensas y las coqueras eran de ellos. Entonces me quejo que la paz se hace en la casa pero mientras haya inversión en el campo, mientras no haya inversión en el campo, olvídese de paz (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

Autoridades del Pueblo Barí han denunciado en repetidas ocasiones las acciones de aspersión aérea sobre su territorio ancestral, que están reguladas de manera especial por la Corte Constitucional colombiana. Desde la Operación Motilón, los Barí han puesto de presente que las fumigaciones han afectado sus cultivos de yuca, plátano, maíz, aguacate, fríjol, ñame y cacao, así como potreros con ganado y especies menores. Entre las comunidades que más se han visto afectadas por las fumigaciones se señalan Sacacdú, Irocobingcayra, Bacuboquira y Caricachaboquira, en el resguardo Catalaura, además de las comunidades Ishtoda, Beboquira y Caaxbaringcayra, las últimas en particular durante las actividades de aspersión aérea llevadas a cabo en el año 2002 (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017).

280 Parcelas con pasto para alimentar al ganado.

Representación gráfica de las aspersiones aéreas con glifosato realizada por habitantes de La Gabarra. Detalle de dibujo. CNMH, diálogo con campesinos, Cúcuta, 2016. Fotografía: Camilo Ara para el CNMH.

Al glifosato también se le ha atribuido una serie de afectaciones en la salud humana debido no solo a la inhalación del herbicida, sino a los rastros que deja en la tierra y en las aguas que componen el mundo biosocial de las y los habitantes de la región, produciendo paisajes envenenados. Aunado al uso de agentes químicos en el procesamiento de la hoja de coca, cuyos residuos es usual que se viertan en los cuerpos de agua, un

habitante de San Calixto mencionó el glifosato como causa principal de la contaminación que experimentan:

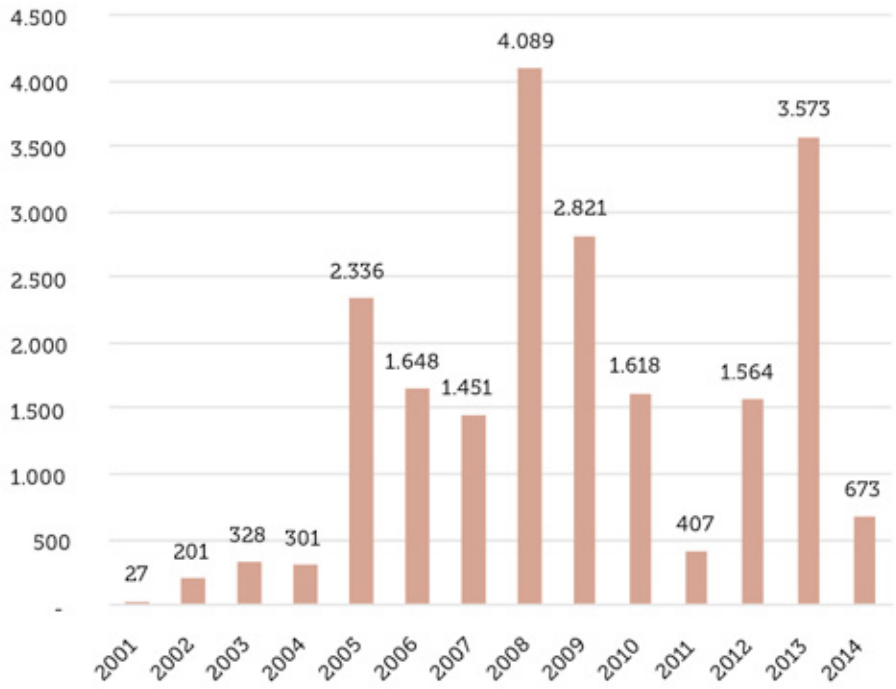
> Ahorita lo que estamos viviendo es la contaminación debido a las fumigaciones que se han hecho en el Catatumbo y la gran cantidad de químicos que está usando, porque la mayoría de todos esos químicos los vamos a inhalar en todas partes. Eso es causa de enfermedades, de cáncer, de tantas enfermedades que están llegando. Y da tristeza que cuando fumigan los cultivos de coca pues no sé por qué no se muere ese cultivo de coca, pero sí se muere la yuca, plátano, cacao y algunos animales. Es decir que la zona norte [del municipio] cuando fumigaron quedó arrasada de productos de pancoger porque la fumigación eso acabaron con todo. Entonces esa gran cantidad de químicos la estamos absorbiendo entre todos (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

La eficacia de los programas de aspersión aérea ha sido mínima en su propósito de reducir las hectáreas sembradas con coca en la región, a ello se suman los nefastos efectos que produce en las personas y sus territorios. Por medio del índice de cronicidad, que mide la relación entre programas de intervención estatal y la permanencia del cultivo en el territorio, el Ministerio de Justicia y Unodc han concluido que:

> En Norte de Santander, la intervención orientada a la reducción directa de los cultivos de coca medida en actividades de aspersión y erradicación manual forzosa indican que solo el 14% del territorio intervenido por alguna de las dos estrategias alcanzó un abandono, estas áreas se localizan al suroccidente del departamento en zonas de Ocaña, La Esperanza y Cáchira; en Hacarí, en el centro y al oriente en zonas periféricas de los focos de concentración de Tibú. En tal sentido, la tasa de eficacia de abandono de la intervención estatal para la reducción directa de los cultivos de coca es apenas del 27% (Minjusticia y Unodc, 2016b, página 53).

La erradicación forzada de la mata, programa a la que una persona consultada se refirió como *las arrancaciones*, fue recordada por habitantes de la región. Esta incluye tres modalidades: erradicación manual voluntaria, erradicación manual forzosa con GME (grupos móviles de erradicación) y erradicación manual forzosa realizada por el Ejército y la Policía en patrullajes (Minjusticia y Unodc, 2016b, página 51).

Gráfico 22. Hectáreas de coca erradicadas manualmente en Norte de Santander 2001-2014



Fuente: Minjusticia y Unodc, 2016a (en las tres modalidades de erradicación manual).

Un habitante de La Gabarra relató así lo que significó erradicación forzosa:

> Por aquí llegaron lo que fue la fumigación, llegaron las *arrancaciones*, que yo fui uno que caí en esas *arrancaciones*, me arrancaron todo, a yo me fumigaron todo. Volví y empecé en eso, a sembrar coca y cuando estaba la mata así grandota, no la había *descalzado*[281], esa mata cuarentana que cuando eso esa semilla era cara y volvió y me la arrancaron, que mire: otra vez así, de mano cruzada. Hasta ahorita que volví a sembrar la matica, una mata que se llama injerta, que ahí tengo como unas tres maticas, pero poquiticas (CNMH, entrevista, hombres trabajadores en cultivos de coca, La Gabarra, 2016).

Las *fumigas* y *arrancaciones* estuvieron acompañadas de acciones como la destrucción de cocinas y laboratorios, incautación de insumos químicos y, en diversos casos, la judicialización del eslabón más débil de la cadena: cultivadores y recolectores de la hoja de coca. Esta dinámica, que en la región se remonta a los primeros años de los dos mil, ha estigmatizado y criminalizado a pequeños y medianos cultivadores[282], así como a hombres jóvenes que se dedican a la raspa como principal fuente para obtener su sustento. Así lo describen habitantes de la región:

> Entonces ¿qué pasa con el Ejército? El Ejército agarra a un muchacho por allá en la cocalera raspando y enseguida lo agarran y en seguida dicen: es un guerrillero y lo informan y pa' la cárcel: tantos años de cárcel porque era un guerrillero, cuando él es simplemente un raspachín y un raspachín ¿por qué lo hace? Porque no hay in-

281 Primera raspa que se efectúa a una mata de coca.

282 El Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986), documento rector de la política del Estado colombiano contra las drogas, "generaliza un tratamiento punitivo" (Ramírez e Iglesias, 2010, página 541) y criminaliza al pequeño cultivador, en tanto define que una persona con más de 20 plantas será sancionada con varios años de prisión y multas. En 2012, el Gobierno presentó al Congreso una propuesta para un nuevo Estatuto.

> versión del Estado en el campo para no sembrar esa mata. Entonces los muchachos, los hijos de uno, los nietos de uno están aquí en esta zona y en esta zona se puede decir que no hay coca, pero está pa' allá la coca, o está pa' allá, o donde esté, entonces ellos de aquí se desplazan a donde está la coca a conseguir trabajo y el Ejército agarra un muchacho de esos y cuando uno se da de cuenta: no, que el muchacho suyo está preso, está preso, ese tiene 15 días de estar preso (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

Fueron múltiples las referencias sobre que los programas de desarrollo alternativo que proponen la sustitución de cultivos de coca y la generación de proyectos productivos, han tenido un impacto poco considerable en la región[283]. En particular, en lo referente a la sustitución de cultivos, dada la manera cómo se ha planteado la sustitución de un monocultivo (coca), por otro (palma, caucho, piña, cacao). Esto llevaría a una sobreoferta de ese producto en una región con precarias condiciones para una efectiva y justa comercialización[284]. Así lo indicó un sacerdote de la diócesis de Tibú:

> Por ejemplo, en Pachelli (...) le dijeron al campesino: siembren plátano que Pachelli se va volver un centro de acopio, mejor dicho, un centro de producción. Y les dieron la semilla y les dieron todo, pero cuando la gente sembró y prácticamente hubo sobreabundancia de plátano, el campesino perdió todo el plátano porque no tuvo comercialización. Entonces cortaba los racimos de plátano y a veces pagaba el flete de la vereda para bajarlo al pueblo porque no había carreteras y llegaba al pueblo y ¿quién lo compraba? ¿Para

283 Según Ramírez e Iglesias (2010), en la política antidrogas conviven la criminalización del pequeño y mediano cultivador de plantas de uso ilícito y las políticas de desarrollo alternativo. Los programas de desarrollo alternativo son ambiguos, pues durante el Gobierno de Pastrana y el de Uribe fueron componentes de la política de seguridad y no una apuesta de desarrollo.

284 Con respecto a los monocultivos, productores agrícolas de la región sostienen que representan una desventaja de considerable en tanto generan dependencia a un único cultivo y, en ese sentido, un solo factor perjudicará la economía local, por ejemplo: plagas, caídas de los precios, bloqueos de vías. Situación que ocurre con la palma de aceite y fue reiterativamente mencionada en Tibú.

> dónde lo sacaban, para dónde lo exportaban? Entonces todo esto se perdió, o sea, ese intento fracasó prácticamente (CNMH, taller con sacerdotes, Tibú, 2016)

Aunque habitantes de la región reconocen los esfuerzos que se han puesto en marcha desde el Gobierno nacional para eliminar los cultivos de uso ilícito y paliar los efectos de las políticas de fumigación y erradicación manual, reiteran la poca capacidad que estos han tenido -en el mediano y largo plazo- para desarticular la economía de la coca. Con respecto al programa Familias Guardabosques, en la modalidad pos-erradicación y contención, que operó en zonas focalizadas de la región entre 2005 y 2009 y, cuyo propósito fue evitar la expansión y resiembra de cultivos de uso ilícito, un habitante de La Gabarra, beneficiario de este programa señaló:

> Pues tanto es que una vez nosotros nos metimos a un programa que se llamaba post erradicación en la vereda, nos dieron unos incentivos, unos contentillos ahí. El primer incentivo que nos dieron fue unos pinches marranos, dos marranos y cinco bultos de concentrado, que nos dieron un concentrado que ni los marranos se lo comían (...), que eso era un incentivo, que tal. Después nos ilusionaron, que como esa vereda aparecía el programa ese de post erradicado, que iban a llegar unas soluciones de acueducto, que de baterías sanitarias. Nos quedamos en veremos. Otra vez dieron un contentillo ahí: dieron unos rollos de alambre, unos motores. Quien quería pedir motor, pedía motor, o el que quería pedir alambre, alambre, o el que quería pedir semilla, pedía semilla... tampoco ningún resultado (CNMH, entrevistas, hombre trabajador en cultivos de coca, Tibú, 2016).

Los efectos negativos y el poco impacto positivo de políticas antidrogas impuestas desde el Gobierno nacional; la estigmatización que ha recaído sobre los cultivadores de la hoja de coca como criminales, así como,

la percepción de que no existe una política que, a largo plazo, genere condiciones dignas y estables que conduzcan a eliminar la economía de la coca, son las principales razones que han movilizado a cultivadores de coca, raspachines y otros habitantes del Catatumbo en encuentros, marchas y protestas, desde los primeros años del siglo XXI.

5.6. Movilizaciones cocaleras

> Mientras al coquero lo dejan quieto él no reacciona, como la colmena de abejas. Pero tan pronto llegue y, como les comentaba, que lo oí por boca del mismo Presidente que dentro de seis meses volvía a fumigar, van a fumigar y créame que las abejas vuelven y se alborotan. Ellos van a salir a la carretera y van hacer el paro, porque es que repetir lo que dijimos ayer: lo que pasa es que mientras el Presidente no asigne recursos hacia el campo para dejar de sembrar la mata, la mata que mata, dicen, no se va acabar el sistema del paro. Vuelvo y lo repito, el coquero es como la colmena de abejas: mientras a él lo dejen trabajar, él está quietecito allá. Pero tan pronto lleguen a fumigar, ellos se alborotan y salen
>
> (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016)

Como se ha mencionado, la coca se ha convertido en el sustento de una gran parte de la población de la región. El hecho de que alguien no cultive la mata no significa, como fue referido en reiteradas ocasiones, que esté por fuera o no se beneficie de los réditos de la economía de la coca. Sin sus cultivos de coca muchas familias no tienen cómo sobrevivir ni pueden solventar sus necesidades básicas.

Este factor, estructural, ha sido la principal motivación para que pequeños y medianos cultivadores de la hoja de coca en el Catatumbo y en

otras regiones del país, se opongan o critiquen con severidad la promulgación y puesta en marcha de políticas y planes para reducir o eliminar las economías de la coca y que, a su parecer, no tienen una perspectiva clara de largo plazo, ni una comprensión del fenómeno tal y como se ha vivido en la región.

Como se mostró en el capítulo 2, el Catatumbo se ha caracterizado por importantes movilizaciones sociales (marchas, paros, plantones) en particular desde mediados de los años ochenta. A partir de la década de los noventa, no obstante, la coca ha ocupado un lugar cada vez más prominente en la serie de reclamos que abanderan las personas que protestan y se movilizan en la región. De manera similar a las manifestaciones de los primeros años, las y los catatumberos han ideado, elaborado y cualificado propuestas y planes para que la reducción de la economía de la coca no signifique su ruina.

Una serie de hitos históricos conforman las memorias colectivas en la región sobre las movilizaciones que, de una u otra forma, han incluido en sus agendas el tema de la coca. Movilizaciones que se remontan a la década de los noventa y perduran en la actualidad. En particular, de los ejercicios de memoria con la población emergieron los siguientes hitos:

Tabla 6. Hitos históricos sobre las movilizaciones

Línea de tiempo	
Año	**Hito**
1996	Marcha campesina del Catatumbo
1998	II Marcha campesina del Catatumbo. Surge el Plan de Desarrollo y Paz para la región
2004	Encuentro campesino en San Pablo (Teorama). Surge el Cisca
2005	Surge Ascamcat
2007	Encuentro regional sobre cultivos de coca en El Tarra, liderado por el Cisca
2009	Refugio Humanitario en Caño Tomás (Teorama). Nace la mesa de interlocución y Acuerdo (MIA) entre el gobierno y Ascmcat
2013	Paro campesino liderado por Ascamcat
2014	Paro agrario en el que confluyeron las organizaciones sociales de la región. Se crea la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular
2017	Creación Coccam

Fuente, CNMH, elaboración propia con base en el trabajo de campo y literatura secundaria, 2018.

En general, estas formas de movilización no se concentran solo en temas relacionados con el cultivo de coca. Con distintos matices, este tema es abordado en el marco de una serie más amplia de exigencias y demandas al Estado. En particular, las marchas campesinas de septiembre de 1996 y octubre de 1998 fueron una exigencia amplia, protagonizada por campesinos, campesinas, cultivadores de coca, indígenas Barí y habitantes urbanos de los municipios de la región en torno al mejoramiento de sus condiciones de vida, en diferentes aspectos: salud, educación, vías, desarrollo rural, cultivos de uso ilícito y derechos humanos, entre otros (CNMH, entrevista, hombre defensor de DD.HH., Bogotá, 2018).

Para finales de los noventa, aún no se había dado inicio a la aspersión aérea de cultivos de coca en la región, pero sí se registró que "hubo la primera amenaza de fumigaciones en el país y la instalación de batallones antinarcóticos y uno de esos iba para La Gabarra" (CNMH, grupo focal Ascamcat 2, Cúcuta, 2017).

Como se puede constatar en el acuerdo entre el Gobierno nacional y el departamental y líderes de la marcha de 1998 (firmado en Cúcuta el 29 de octubre), el debate en torno a la política hacia los cultivos de uso ilícito ocupó un lugar de importancia. En el acuerdo se lee que los representantes de la marcha "destacan y acogen la política del Gobierno nacional en materia de cultivos ilícitos", que se enmarcaba en los siguientes aspectos[285]:

- Que el desarrollo alternativo sea asumido como un asunto prioritario
- Que esta política irá de la mano de la política de paz
- Que por la vía del desarrollo alternativo se reafirma la necesidad de otorgarle un tratamiento social al problema que enfrentan campesinos, colonos y comunidades indígenas cuando se ven abocados a buscar el sustento para sus familias con el cultivo de la coca o bien de la amapola
- Que, en cumplimiento de esta política, se aplicará para la región del Catatumbo, un plan de desarrollo social, económica y ambientalmente sostenible, concertado con las comunidades campesinas e indígenas y con la participación del sector privado.

Sin embargo, como se dijo, la puesta en marcha del Plan Colombia en la región trajo consigo la aspersión aérea de cultivos con glifosato: las

285 Se extrae del Acuerdo entre el Gobierno nacional, departamental, municipales y representantes de la marcha campesina del Catatumbo. Punto 3. Cúcuta, octubre 29 de 1998. Archivo personal de German Cañizares, Tibú.

fumigas, en contraposición de lo acordado durante la marcha campesina de 1998[286]. Desde entonces, diversas formas de movilización en la región han abanderado una crítica oposición a las políticas antidrogas del Gobierno colombiano. Estas políticas que se han enfocado en la eliminación de la economía de la coca en esencia por medio de la aspersión y la erradicación forzada han sido percibidas por las comunidades y organizaciones sociales de la región como medidas drásticas que ponen en riesgo su existencia, como fue narrado en distintos espacios de reconstrucción de memoria histórica. En ese sentido, organizaciones de la región, en particular la Ascamcat, continúan liderando movilizaciones.

Al respecto, es necesario hacer claridad en que, pequeños y medianos cultivadores de hoja de coca, así como Ascamcat, no se oponen a la puesta en marcha de programas y políticas para su eliminación, sino a la implementación de programas de corto plazo que no encarnan una solución estructural. En particular, esta fue una demanda de especial importancia durante el paro campesino del 2013 (53 días), una de cuyas principales exigencias consistió en la "suspensión inmediata e indefinida de las erradicaciones forzosas de los cultivos de coca" y la puesta en marcha de un programa de sustitución gradual y concertada en el marco de la propuesta del Plan de Desarrollo de la ZRC del Catatumbo; a su vez, exigieron mitigación de los efectos producidos por las erradicaciones forzadas por medio de un subsidio monetario mensual a las familias afectadas, al menos, por dos años (Prensa Rural, 2013, 25 de junio)[287].

286 En el marco de los acuerdos de la marcha, se propuso el estudio de factibilidad sobre las plantaciones de cacao, palma aceitera y caucho como cultivos que sustituyeran la coca. Por ese camino, con apoyo de la Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), se dio en 2001 la siembra de mil hectáreas de palma aceitera en la zona sur de Tibú, un área donde no se registraba cultivos de coca de manera significativa. Desde entonces, el cultivo de palma ha crecido de manera exponencial.

287 Una de las principales reivindicaciones del paro de octubre de 2017 fue la reactivación de los canales de interlocución puestos en marcha en 2013 (en particular la Mesa de Interlocución y Acuerdos MIA) y el cumplimiento de los puntos allí acordados.

En sus relatos, pequeños cultivadores del Catatumbo expresan sus percepciones sobre los programas y políticas del Gobierno nacional frente a la coca, develando los motivos que tienen para oponerse y organizarse colectivamente a través de paros y protestas en búsqueda de que su postura sea tenida en cuenta. Hacen énfasis en las propuestas de Ascamcat, que representa solo una de las numerosas perspectivas en torno a la coca en la región. Los habitantes expresaron sus sentimientos de desconfianza e incertidumbre hacia las políticas estatales y su disposición a construir alternativas que les permitan una vida campesina en condiciones de dignidad:

> Ponen un acuerdo, por ejemplo, de que va haber inversión o de que hay proyectos y cuando el Gobierno no lo cumple, entonces nos convocan a nosotros a las marchas pa' que salgamos a protestar, pa' que miren que no son los grandes líderes los que están solos, sino que hay gente, que [hay] propuestas, que nosotros los campesinos protestamos. Y por ejemplo con lo de la coca, Ascamcat tiene un proyecto con el Gobierno de que alguna mata de coca al campesino no se la va tocar mientras no haiga un proyecto y mientras no cumpla el Gobierno con lo que él dice. Por ejemplo, si uno se acoge a arrancar una hectárea, el Gobierno tiene que darle las garantías y cumplirle con las garantías que él le diga que le va a dar a uno. Que no sea simplemente vaya uno a arrancar la coca y después de que uno arranque quede a brazos cruzados. Le tocará irse a robar porque de pronto el Gobierno no le cumple. Entonces esos son los acuerdos y cuando no se cumplen las cosas, entonces por eso es que nosotros salimos a marchas pa' decirle al Gobierno, pa' que mire que sí estamos protestando porque es que de verdad nosotros no es que queramos seguir con coca, pero nos toca. Así nos toca porque el Gobierno mismo nos está haciendo de que vivamos con coca. Porque si el Gobierno llegara y nos dijera: "bueno, hay tanta inversión pa' que arranquen un cultivo", yo de una lo hago y le digo: bueno, pero primero tiene que firmarme él a mí pa'

> que me cumpla con lo que él me va a decir de si es plata, si es gallinas o es proyecto, bueno, sea lo que sea, pero que primero me mire la inversión y de ahí sí arranco la coca (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

> Nosotros por el lado de nuestra asociación es la pela[288] dura y grande que tenemos con el Gobierno, porque estos cultivos no los queremos dejar arrancar ¿Por qué? Hasta que el Gobierno nos dé y nos garantice cuáles son los cultivos y cuáles son los proyectos... pero que no solamente nos llegue con los proyectos, nos los tire y no tengamos nosotros acceso a dónde irlos a llevar ni precios sostenibles ni nada. Pero es que en eso ¿yo qué me voy a meter en un proyecto y ya mañana yo tenga de qué vivir, pero a quién le vendo, a dónde voy? ¿A regalarlo? Pasa la misma vaina. Entonces esto lo podemos acabar nosotros sin necesidad de que mande el Gobierno un soldado, un policía, nada, para que la vaya a arrancar, nosotros mismos la erradicamos (CNMH, taller de memoria, San Hacarí, 2016).

Pequeños y medianos cultivadores de coca, así como otros habitantes de la región reclaman una política efectiva, con impactos positivos a mediano y largo plazo para la región del Catatumbo. Aunque con matices, sus demandas pueden resumirse en las tres características mencionadas por un dirigente de Ascamcat: "para ser efectiva, la política debe ser concertada, gradual y estructural" (CNMH, grupo focal Ascamcat, Cúcuta, 2017). Las voces de habitantes de la región entretejen mejor que nadie sus persistentes demandas y propuestas en torno a la concertación, gradualidad y carácter estructural que debe caracterizar una política frente a la coca para la región:

> Concertado, que tiene que ser concertado, con los actores sociales y los movimientos sociales. Si los tecnócratas siguen

288 Pelea

formulando eso desde Bogotá es como meterle plata a una caneca sin fondo. El otro es el estructural, entonces el Gobierno y los americanos tienen una percepción de que sustituir la coca es cambiar una mata de coca por una de plátano. Eso jamás va a lograr una sustitución estructural. Entonces la sustitución estructural desde nuestro punto de vista va más allá de cambiar una mata por otra, solamente. Está comprobado, el 1 por ciento de nosotros tiene la oportunidad de ir a la universidad en el Catatumbo, esa es una realidad estructural que hay que cambiar para sustituir los cultivos de uso ilícito. Nosotros la mayoría en pleno siglo XXI no tenemos luz eléctrica, eso es una necesidad estructural que tiene que cambiar... (CNMH, grupo focal Ascamcat, Cúcuta, 2017).

un proyecto que fuera rentable, estable, que no se fuera, que uno estuviera estable ¿no? y que viera que usted sembrara cualquier cosa y que salieran y lo compraran, cualquier que lo compre, porque a veces he sembrado yuca, porque aquí la mayoría de gente sembramos yuca, y se la comen los marranos o se pudre donde la siembra uno, porque vale más la sacada de una carga que lo que vale pues un bulto en el pueblo (CNMH, entrevista, hombres trabajadores en cultivos de coca, Tibú, 2016).

Mire, ojalá un proyecto bueno, un proyecto que el campesino se pueda defender. Pero si no hay proyectos, entonces ¿el campesino de qué va a comer, si acaban la coca? Ahora estaba erradicando la fuerza pública, por ahí que arrancaron unas áreas de coca. Yo creo que el Estado todavía no tiene permiso de eso, tienen que darle primero al campesino pa' que el campesino se pueda valer, pueda tener para el mercado, para el sustento diario de la familia. Entonces, ojalá eso que le pongan precio a las cosas, que lleguen proyectos buenos pa' los campesinos para que ellos puedan trabajar la tierra y ojalá para que también pueda sostenerse la familia de lo de la comida, el mercado y todo. Porque así no pueden arrancar el cultivo tampoco, porque de eso depende la gente, del cultivo de la mata de la coca (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

> Pues yo les digo una cosa: también hay gente que quiere eso, hacer ese cambio [sustituir la coca por cultivos de uso lícito] pero siempre y cuando el Gobierno tenga un acompañamiento a toda esa gente. Por ejemplo, aquí todas esas zonas aledañas [al casco urbano de La Gabarra] después de que tengan una vía de entrada carreteable, que usted pueda entrar el carro, descargar los colinos[289] allá directamente en una finca... por ejemplo, aquí la finca que yo tengo, nosotros contamos con una desdicha que pasan las cuerdas de la luz por ahí y esa vereda no está electrificada (CNMH, entrevista, hombre trabajador en cultivos de coca, Tibú, 2016).

La definición de las líneas de una política efectiva hacia el cultivo de coca en la región está en construcción. En enero de 2017 se creó la Coccam, un organismo que se propone liderar, en los territorios, la implementación de lo acordado en las negociaciones entre el Gobierno nacional y las FARC, con respecto a los cultivos de uso ilícito, así como continuar construyendo propuestas integrales y concertadas al fenómeno de la coca, entre sus integrantes se encuentran pequeños y medianos cultivadores de coca del Catatumbo.

La coca persiste como un eje que articula la vida cotidiana en el Catatumbo. Es, en el caso de la mayoría de los cultivadores de la hoja de coca, su única fuente de sustento. Como lo reiteran los habitantes de la región, ni la fumigación ni la erradicación forzada han sido soluciones efectivas y de largo plazo para afrontar el fenómeno de la coca; antes bien, han dejado profundas cicatrices en sus cuerpos, en la vida de la fauna y flora que les circunda, en sus suelos y cuerpos de agua. En sus palabras, narraciones y solicitudes, las y los catatumberos exigen al país una comprensión del problema más próxima a su realidad, demandas y propuestas.

289 Retoños de un cultivo para ser sembrados

5.7. Impactos de la coca en la tierra y en el cuerpo

La coca ha producido profundos cambios y transformaciones en el Catatumbo. En ello coinciden las comunidades tanto de la zona alta como las de la plana. En sus relatos se refieren a un sinnúmero de cambios en su vida individual y comunitaria. Sumadas las dinámicas armadas a su alrededor a los efectos nefastos de las fumigaciones aéreas con glifosato, el cultivo de la coca ha transformado en menos de treinta años los paisajes sociales y naturales de las personas que han habitado esta región. Se trata de cambios perceptibles, manifiestos y notorios que las personas señalan con particular facilidad, en especial, las personas mayores.

En el caso de la producción agropecuaria, identifican que la coca produjo un sorprendente declive en la producción de cultivos de pancoger en la región. Las personas mayores relatan con añoranza cómo se ha transformado el flujo comercial que definió, décadas atrás, a gran parte del Catatumbo como una despensa alimentaria: ya no salen frutas, hortalizas y demás productos para la alimentación humana; antes bien, llegan de Cúcuta y Ocaña, principales centros urbanos. Una transformación indiscutible desde mediados de los años noventa:

> Mi finca era a orilla de carretera en la vía de La Gabarra hacia Tibú y por ahí salía toda la procesión de camiones hacia Cúcuta, lógicamente, y hacia el centro del país; yo me paraba a contar y en un solo domingo podía contar 20 o más camiones cargados de cacao, o 20 camiones cargados de frutas como el zapote y al otro día la misma cantidad, cargados de plátano. Esa era la historia de los años 60, 70, 80. Ya mediando los 90 eso comenzó a mermar. Para los últimos años que yo estuve, miraba pasar para comienzos y mediados del año 97 la yuca y el plátano venidos de Cúcuta para

> La Gabarra. El campesino había dejado de ser productor de la base alimentaria y ahora se importaba otra vez desde afuera, porque él no quería cultivar (CNMH, entrevista, hombre movimiento cívico Cúcuta, 2016).

Una situación similar se experimentó en el municipio de Hacarí, donde se registró escasez de la comida como consecuencia del avance de los cultivos de coca y, en últimas, se puso en riesgo la seguridad alimentaria de sus pobladores:

> Se encarecieron los abarrotes, los víveres, se *escació* también la comida que se producía aquí porque no se volvió a producir el plátano, la yuca, el maíz, el fríjol. Se arrancaron cultivos que habían, todo por sembrar coca. Llegó el momento en que el campesino no tenía para comer sino que todo era comprado, traían incluso la verdura, el plátano, la yuca, la papa de Ocaña; los huevos, la carne, pescado. Entonces eso produjo como consecuencia final que Hacarí se desabasteciera y cuando la coca decayó, se encontró al campesino sin plata y sin cultivos (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016)[290].

La coca también ha producido impactos medioambientales de gran significación, en particular referidos por las personas que se dedican al trabajo de la tierra, por quienes cultivan la mata de coca. El uso de agroquímicos (herbicidas, plaguicidas, abonos) sobre las plantas de coca, así como el uso de diversos químicos en la producción de la pasta base, ha esterilizado los suelos y afectado la tierra. Producir matas de coca de la mejor calidad, resistentes a plagas y enfermedades ha generado una dependencia por parte de los cultivadores al uso de productos con altas concentraciones químicas que, al ser tan fuertes, impactan la riqueza biológica de los suelos:

> Créame que la tierra la esteriliza uno. La tierra donde uno siembra un cultivo de coca ya no le va a servir a uno lo que es para yuca;

290 El monocultivo de palma aceitera ha tenido un impacto significativo en el declive de cultivos de pancoger en Tibú.

> por ahí para plátano de pronto le sirve, con el abono que uno le echa a la coca, pero ya lo que es para yuca, para maíz, para fríjol, es una tierra que queda... que a vuelta de unos 2, 3 o 4 años es que vuelve a servir para uno sembrar cultivo de fríjol, de maíz, o por ejemplo plátano, o yuca. La yuca ella nace, pero entonces no sale buena para comer, sale *runcha*[291] por la vaina que tiene muchos químicos la tierra. Uno siempre la daña [la tierra], entonces yo digo que uno está dañando la salud de uno. Hay unos químicos que entre más días, van saliendo químicos más bravos y es el que uno va comprando para que la matica no se le muera. Porque hay muchas veces que le cae el hielo cuando el tiempo de invierno. Hay un daño que le cae también muchísimo lo verraco que seca la mata, entonces cuando a uno un amigo le dice, o el vecino le dice: "mira, que salió un veneno bueno para fumigar la mata", entonces uno va y lo compra, todo eso uno mismo se contamina. Mucha la contaminación, porque son venenos bravos, olorosos a feo, hediondos (CNMH, entrevista, hombre campesino, Cúcuta, 2016).

La ecuación: entre más más hojas de coca raspe un cultivador mayor será la ganancia, ha generado una constante presión sobre campesinos y campesinas de la región que, ante la precariedad de sus condiciones, han optado por dedicar una mayor parte de sus predios y parcelas a su cultivo, en algunos casos talando bosques que se encuentran dentro o en inmediaciones de los resguardos del Pueblo Barí, como lo señala la comunidad Iquiacarora (CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017).

El uso intensivo del suelo ha conllevado un aumento en la deforestación de la capa vegetal, además con impactos negativos sobre los cuerpos de agua, como se puede apreciar en las imágenes satelitales para dos períodos diferentes para el sector de Las Juntas, en Hacarí, donde el crecimiento de los cultivos de coca en los últimos años ha sido significativo.

291 De difícil cocción, muy dura para ser consumida como alimento.

Imagen satelital de la vereda Las Juntas, Hacarí, para los años 2001 (izquierda) y 2014 (derecha). Fuente: *Google Earth*

Los ríos, caños y demás fuentes hídricas han sido contaminados como consecuencia del vertimiento de los residuos químicos que resultan de la transformación de la hoja de coca en pasta base. Dado que este proceso requiere de cantidades considerables de agua, es usual que los *cambuches* y *cocinas* se ubiquen en las proximidades de cuerpos hídricos y que se viertan los residuos químicos del proceso:

> Usted terminó esa hoja, usted la sacó y la botó. Pero esa hoja lleva todos esos químicos: lleva el petróleo, lleva el cemento, lleva el ácido, lleva la urea, la cal. Cuando cae al agua ¿a dónde va a parar? A las nacientes, a los caños (CNMH, entrevistas, hombres trabajadores en cultivos de coca, Tibú, 2016).

> A veces los botan a los ríos. Usted se va pa' los ríos y encuentra pozos de veneno en las orillas de los ríos. Dónde sacan el *pategrillo*, ese lo sacan es a la orilla de las fuentes hídricas, de las quebradas. Ese olor ya contaminó, todo eso ha afectado (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

Las y los catatumberos también han experimentado cambios considerables en sus formas de relacionamiento y en sus ideas de comunidad. De ello se habló en los diversos espacios colectivos y en las entrevistas, en tanto personas involucradas en la economía de la coca han venido asumiendo roles y actitudes que, en particular personas mayores y líderes, señalan como de ambición o individualismo, consecuencia de las ganancias monetarias de la coca:

> La coca lo que nos ha metido es una ambición, créame, le digo yo a la gente de la comunidad: la coca lo que nos está dejando es una cizaña, una ambición en la mente que solamente coca, coca, coca y ya nosotros no vamos a una reunión de Junta, ya nosotros no nos organizamos, es como que ya nosotros echamos es para el bolsillo, ya no miramos si el vecino está jodido, nosotros no miramos eso (CNMH, entrevista, hombre campesino, Cúcuta, 2016).

La situación que experimentan como comunidad tiene también su explicación en el cambio poblacional que sobrevino en la región después de la salida de los paramilitares. Nuevas personas llegaron a habitar zonas del Catatumbo quienes, como lo expuso un líder de víctimas de Teorama, no en todos los casos desarrollan relaciones de arraigo frente a la historia y cultura de la región (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

Las personas jóvenes han estado expuestas de manera particular a estas transformaciones producidas por la coca. Niños, niñas y jóvenes abandonan sus estudios, en ocasiones de manera temporal, para ir a raspar[292]. Muchos han hecho suya la idea de bienestar asociada a la adquisición de bienes materiales (motocicletas, celulares, entre otros), es considerada necesaria y, en algunos casos, obligatoria.

Es justo por esta serie de transformaciones que han emergido en la región distintas apuestas organizativas, varias de carácter regional, que reivindican las capacidades de las y los catatumberos para pensar, imaginar y administrar su propio territorio, como se describe en el próximo capítulo. En ello, ocupan un lugar primordial las acciones encaminadas a garantizar la permanencia en el territorio de campesinos, campesinas e indígenas, hacerles frente a las transformaciones producidas por la coca y construir, de manera colectiva, la apuesta por una vida en condiciones de dignidad.

292 Un docente señaló que esta situación también ocurre con el fruto de la palma. Jóvenes abandonan sus estudios temporalmente para ir a recolectar estos frutos y ganar algo de dinero (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

6.

PERSISTENCIAS, RECONFIGURACIONES Y DISPUTAS

Después de la desmovilización de las estructuras paramilitares (2004), el conflicto armado estuvo lejos de terminarse en el Catatumbo. Antes bien, durante el período 2005-2016, en la región convergieron una serie de actores legales e ilegales que han configurado un contexto de disputa en torno al control y administración del territorio, en el cual se superponen una diversidad de conflictividades y actores con intereses diversos, cuya emergencia y desarrollo se ha descrito en este informe. En las narraciones de habitantes del Catatumbo se evidencia la manera cómo conflictos previos se suman, interrelacionan y complejizan, con impactos definitivos para el presente y futuro de la región.

Por un lado, la PDSD fue una de las formas que privilegió el Estado para atender las imperiosas necesidades de la región, que se tradujo en un considerable aumento del pie de fuerza y capacidad militar, dinámica nunca vivida en la región. Ello implicó un incremento en las denuncias de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH perpetradas por algunos miembros de la fuerza pública y, como lo refieren habitantes, una militarización de su vida cotidiana.

Las guerrillas, por su parte, que nunca se fueron, sino que se replegaron y modificaron sus formas de actuación durante la presencia paramilitar, retomaron el control de territorios. En una dinámica de reacomodo violento que tuvo lugar entre 2005 y 2014 y, un punto de quiebre producido por los diálogos de las FARC con el Gobierno a partir finales de 2012, las guerrillas reconfiguraron su capacidad militar, así como el control sobre la vida cotidiana de habitantes de la región.

La desmovilización formal del Bloque Catatumbo y el Bloque Norte (con los frentes Héctor Julio Peinado Becerra y Resistencia Motilona) trajo consigo además la temprana presencia y profusión de GAPD, que en su interés por el control monopólico de las rentas ilegales del narcotráfico, el contrabando y la extorsión han producido a su paso una estela de regulaciones y victimizaciones contra habitantes de centros urbanos del Catatumbo (Tibú y Ocaña) y, en particular, de Cúcuta y su área metropolitana.

En este escenario de disputa y reconfiguraciones de los armados, se puso en marcha un modelo agroindustrial y minero energético, representado en la expansión del monocultivo de palma aceitera en el bajo Catatumbo, la exploración de carbón y la continuidad de en la explotación de reservas de petróleo, que buscan conectar la región con los mercados internacionales. Este modelo, facilitado por el desplazamiento forzado y vaciamiento de población ejecutadas por los paramilitares, ha producido

una profunda transformación del territorio y de las relaciones que los habitantes tienen con él.

Contrario a lo que pudiera esperarse, dados los riesgos persistentes, en el Catatumbo se despliega un renacer de las organizaciones sociales y comunitarias, que retoman el acumulado de apuestas organizativas y reivindicativas previas y que se movilizan en torno a la definición de cómo y de qué manera administrar su territorio, a veces en tensión entre ellas.

Así, este capítulo ofrece una mirada panorámica a lo sucedido en la región después de la desmovilización paramilitar hasta el 2016, describiendo el contexto de disputa y superposición de conflictividades de cuya comprensión emergen valiosas lecciones en torno a los retos de proyectar y construir una paz viable en el Catatumbo.

6.1. Disputas por el control militar

6.1.1. Reacomodo de la fuerza pública

Luego de la salida de los grupos paramilitares, en el Catatumbo se puso en marcha la PDSD, uno de cuyos principales énfasis consistió en fortalecer la presencia institucional en el territorio nacional. Durante este período se profundizó en el Catatumbo, como nunca en su historia, la presencia y accionar de la fuerza pública, a lo que le ha seguido un repunte en las denuncias de violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH.

En este apartado se describirán las principales formas que ha asumido en la región la entrada y accionar de la fuerza pública a partir de 2005, con la creación de la Brigada XXX del Ejército nacional. Desde los énfasis puestos por las personas y comunidades entrevistadas, se busca evidenciar cuál es el sentido que le asignan a la militarización de sus territorios y cuáles los efectos que ha producido en su vida diaria.

Para el caso del Catatumbo, la PDSD fortaleció estructuras militares existentes, reseñadas en el capítulo 3, y crearon muchas otras[293], como se puede observar en la tabla a continuación[294].

Tabla 7. Militarización del territorio 2005-2016

Unidad militar o de Policía	Jurisdicción
Brigada XXX, adscrita a la Segunda División del Ejército	Sede en Cúcuta
Brigada Móvil Número 15	Sede en Ocaña y con jurisdicción hasta El Tarra y Tibú
Brigada Móvil Número 23[295]	Sede en El Tarra

293 Entre el 2002 y abril de 2009, a nivel nacional la fuerza pública pasó de 313.406 a 425.112 efectivos (Fuerzas Militares y Policía). En 2003, había 59.460 soldados profesionales y a principios de abril de 2009 su número ascendía a 85.683. La PDSD creó un nuevo tipo de soldado, llamado *soldado campesino* o *soldado de mi pueblo*, que prestaba sus servicios en el territorio del que era oriundo (Schultze-Kraft, 2012, páginas 409-410). Ello estuvo acompañado de la adquisición y uso de nueva tecnología y de sofisticados equipos de transporte terrestre, aéreo y fluvial.

294 Para 2018, el Ejército anunció la activación de seis nuevos batallones con cerca de seis mil efectivos para el Catatumbo. Batallones de operaciones terrestres reemplazarán a las Brigadas móviles existentes y se activará el Comando Operativo Energético (Ejército Nacional de Colombia, 2017).

295 Que reemplazó a la Brigada móvil número 15, clausurada como consecuencia de la comisión de ejecuciones extrajudiciales por parte de efectivos de dicha unidad militar (El Tiempo, 2008, 28 de octubre).

Batallón Especial Energético y Vial Número 10: Coronel José María Concha	Sede en Convención
Programa de soldados campesinos	Tibú
Fuerza de Tarea de Acción Conjunta, Coordinada e Interagencial Vulcano, asistida por las Brigadas Móviles Números 23, 30 y 33	Tibú
Batallón de artillería número 30 "Batalla de Cúcuta"	Puesto de mando en Tibú y El Tarra
Batallón Ingenieros número 30 Coronel José Alberto Salazar Arana, para fortalecer las acciones del Grupo de Caballería Número 5 Hermógenes Maza y de la Brigada Móvil Número 23	Tibú
Bases militares	-Casco urbano, El Tarra -Vereda Motilandia, El Tarra -Vereda Guayabal, Hacarí, -Cerro El Alto, vereda Burgama, San Calixto[296]
Quinto Distrito de la Policía Nacional	-Ocaña[297], al cual pertenecen los Comandos de Policía de Teorama, Convención y El Carmen
Estaciones y subestaciones de Policía	-San Calixto -Teorama -Corregimiento Las Mercedes, Sardinata, -Otros

Fuente: CNMH, elaboración propia con base en diversas fuentes, 2018.

296 Para 2018, el Ejército anunció la activación de seis nuevos batallones con cerca de seis mil efectivos para el Catatumbo. Batallones de operaciones terrestres reemplazarán a las Brigadas móviles existentes y se activará el Comando Operativo Energético (Ejército Nacional de Colombia, 2017).

297 Declarado Distrito Especial en el 2008, reforzado con unidades policiales, motocicletas y vehículos y el establecimiento de un grupo de reacción especial (GOES) (Defensoría del Pueblo, 2009c).

> Vino una militarización sin precedentes en el Catatumbo, sin precedentes. Que el Ejército llegó a zonas donde nunca había llegado en la historia, donde llevaban 20 años sin ir. Por ejemplo, Honduras [corregimiento de Convención] o La Pedregosa [vereda de Teorama], eso era casi imposible en términos militares imaginarse uno que la fuerza pública iba a llegar. Y al llegar pues ustedes se imaginan la elevación de violación de DD.HH. que eso tuvo (CNMH, grupo focal 2 Ascamcat, Cúcuta, 2017).

El aumento en el número de efectivos de la fuerza pública significó su establecimiento de manera permanente en la región. Por medio de la instalación de bases militares, puestos móviles y fijos y zonas de control y de descanso, que en repetidas ocasiones coincidieron con el perímetro de una escuela, polideportivo o plaza municipal, habitantes de la región vieron transformar sus vecindarios y militarizar su vida cotidiana:

> El parque [de San Calixto] es un campo de batalla: hay cambuches ahí, la gente que está a los lados se desplazó (...) está la amenaza latente de que [las guerrillas] se van a meter. Esta noche se meten [dice la gente]. En el día bien, usted normal. Cuando ya empieza a caer la noche empieza a caer el temor y el terror: que va a pasar esto, o aquello otro y, como ya ocurrió, la gente tiene miedo (...) Entre más militares haya, más violencia hay. Y ellos llegan y se acantonan. En San Calixto, donde están ellos es el parque, al lado queda el colegio, en todo el frente queda la alcaldía y a todo el frente también queda la iglesia, cerquita queda el CBI, lo que llamamos guardería, la gente teme, hay deserción escolar (CNMH, taller de memoria con personeros, Ocaña, 2016).

En retenes o visitas continuadas de soldados a sus veredas y centros poblados, los habitantes tuvieron que lidiar con requisas exhaustivas, allanamientos, interrogatorios, señalamientos y judicializaciones por sus presuntos vínculos con las guerrillas que hacían presencia en el Cata-

tumbo. Habitar la región seguía siendo motivo de sospecha por parte de militares y policías, puesto que presumían que sus poblaciones sostenían relaciones de convivencia con las guerrillas, ocultaban a sus integrantes, eran guerrilleros, tenían nexos con el narcotráfico, o eran portadores de información útil para labores de inteligencia militar. Así fue descrito por un habitante de San Martín de Loba (Sardinata), quien en su relato expresa entre risa e indignación la sospecha que sobre ellos recayó por parte de miembros de la fuerza pública:

> Yo estaba ahí en la finquita, en la parcela, tenía un montón de plátano y póngale cuidado el cuento que voy a contar: estaba ahí y estaban todos los hermanos míos cuando vimos que ¡*prum*! puros carros. Nosotros salimos a mirar qué era la bulla, cuando en esas vimos la fuerza pública que iba pasando hasta donde estábamos nosotros. Cuando llegaron de una esquina, un filo: alto, manos arriba, manos arriba. Y yo dije: estoy en mi tierra, estoy trabajando ¿por qué tengo que poner manos arriba? Me decían: manos arriba contra ese árbol. Y yo: ¿cómo voy a poner las manos en ese árbol lleno de espinas? ¿y usted de dónde es? Yo vivo ahí. ¿Qué hace? Estamos empacando plátano, mire el arrume de plátano que tenemos junto acá. Como yo les dije: ¿ustedes no están preparados para la guerra? ¿cómo se van a venir a tratarnos aquí mal, estoy en mi tierra, estoy empacando plátano y ¿manos contra ese árbol? (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

En una infracción a los principios de distinción del DIH, la ubicación de instalaciones militares y de Policía en medio de la población civil significó riesgos para habitantes de la región, exponiéndoles a los efectos de la confrontación armada entre la fuerza pública y las guerrillas. Por su ubicación e infraestructura, escuelas rurales, canchas y polideportivos sirvieron en ocasiones como zonas de descanso y patrullaje para soldados, poniendo en riesgo el acceso de niñas y niños a la educación, a la recreación, a la integridad y a la vida, quienes en

muchos casos dejaron de frecuentar estos espacios por el temor a un posible enfrentamiento entre guerrillas y militares, o a la activación de artefactos explosivos.

Como fue relatado en El Tarra, a veces sucedió que personas de la comunidad pidieron a soldados que se retiraran de las instalaciones de centros educativos o recreativos, ante lo cual ellos "trataban a la comunidad de guerrillera" (CNMH, taller de memoria, El Tarra, 2016).

Ante esta dinámica, el desplazamiento forzado intraurbano e intrarregional (en ocasiones masivo), así como el abandono provisional de predios, se convirtió en una opción de supervivencia para habitantes de la región que aún persiste y que se constituyó en una de las estrategias más comunes a la que recurrieron para salvaguardar sus vidas: desplazarse dentro del casco urbano o entre la zona urbana y la zona rural mientras ocurrían las operaciones militares o se escuchan enfrentamientos armados y bombardeos. Otras personas optaron por habitar sus predios durante el día y pasar la noche en otra residencia o en la zona rural, ante la posibilidad de enfrentamientos.

Habitantes de los barrios Comuneros, Calle Central y Pueblo Nuevo de El Tarra, cercanos a la base militar del Batallón de Artillería No. 30, instalada en 2010 en el barrio Villanueva del casco urbano de esta población, se vieron obligados a desplazarse y pernoctar en lugares diferentes a sus residencias, por el temor a quedar expuestos a ataques armados contra esta instalación. Esto motivó a que habitantes del municipio salieran a marchar pidiendo la reubicación de la base militar, un tipo de demanda que fue vista con sospecha por parte de miembros de la fuerza pública, como lo expresa una participante de la movilización: "Se hizo una marcha pacífica donde invitábamos diciendo que queríamos la paz, que queríamos la tranquilidad (...) El Ejército decía que nosotros, era porque

apoyábamos a la guerrilla. Es que a nosotros nos tildan que todo el mundo somos guerrilleros" (CNMH, taller de memoria, El Tarra, 2016)[298].

Los efectos de las operaciones Fortaleza I y Fortaleza II[299] fueron referidos por habitantes de la región, porque generó el desplazamiento masivo de unas cincuenta familias de la vereda El Suspiro (El Tarra), que se vieron obligadas a resguardar su vida moviéndose al corregimiento San Juancito en Teorama. Por su parte, acciones como bombardeos aéreos, en particular en las zonas rurales, generaron sentimientos de profundo temor y angustia y, en algunos casos, afectaciones sobre la vida, como lo relató un habitante de Hacarí:

> Yo viví un momento muy *bravo*[300], que se llegaron la fuerza pública, helicópteros. Yo nunca había visto un helicóptero así encima de la casa, nada así de bajito. Y yo era metido debajo de la cocina. Fue que un señor llegó y dijo: no, eso no le están echando plomo a usted ni nada, es la bullaranga y el hostigamiento, pero no, a usted no le va pasar nada y uno no conoce de eso (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016).

Por otra parte, los enfrentamientos armados han impactado de manera negativa los ecosistemas naturales, como lo expresó una participante del taller de memoria en Hacarí, al señalar que, como consecuencia de

298 Finalmente, debido a la presión y las denuncias por parte de habitantes del municipio, la base tuvo que ser reubicada a inicios de 2013. Jóvenes participantes del componente de Comunicaciones del proyecto *Catatumbo: memorias de vida y dignidad* produjeron una pieza radial sobre el impacto de esta base militar en la vida cotidiana de habitantes de El Tarra y de sus ruinas como huellas materiales de la guerra.

299 La primera el 1 de marzo y la segunda el 19 de mayo de 2005 (El Tiempo, 2005, 18 de noviembre). No es posible definir con exactitud su área de operaciones, pero de acuerdo con datos de contactos armados entre Fuerzas Armadas y grupos guerrilleros, se puede establecer que el epicentro de Fortaleza II fue el municipio de Tibú y se extendió a Hacarí, Teorama y Convención. En la vía Filo Gringo-El Tarra se registraron retenes y operaciones de control (Vicepresidencia de la República, 2007, página 30).

300 Duro, difícil

un bombardeo aéreo, "se prendió toda una montaña" (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016), afectando la cobertura vegetal de esa zona y, por consiguiente, las fuentes hídricas circundantes.

El Ejército llevaba a cabo o participaba de trabajo comunitario con el fin de acercar a la institucionalidad a las y los habitantes, en particular en las zonas rurales[301]. Este tipo de acciones, que algunas personas en la región reconocen como necesarias y útiles, no obstante, han puesto a las comunidades en riesgo pues generan sospecha por parte de las guerrillas presentes en el territorio. Espacios públicos como las escuelas o parques han sido el escenario en donde han tenido lugar este tipo de actividades. No obstante, una docente de El Tarra, quien considera que las jornadas de recreación ofrecidas por los soldados son un espacio de distracción necesario para sus estudiantes, estas le producen temor:

> Ellos no avisan, llegan y dicen: profe, necesitamos que nos den permiso, traemos un obsequio para los niños, mire, traemos un kit escolar", que tal cosa (...) A veces llegan y lo que dicen es: bueno, traemos un grupito de payasos, vamos a hacerles una recreación y, a veces, por permitirles ese rato de esparcimiento pa' los muchachos, porque no es algo común que llegue cualquier persona y llevar un regalo para los muchachos o un espacio recreativo, entonces hay veces se les permite. Pero desafortunadamente después de que pasa eso, [las guerrillas preguntan] bueno, entonces ¿qué pasó? ¿por qué están dejando entrar al Ejército? (CNMH, taller de memoria, El Tarra, 2016).

301 En marzo de 2012 se llevó a cabo la "primera brigada humanitaria en El Tarra", que se realizó con la alianza de distintas instituciones del nivel departamental y municipal, entre las que se contó la Fuerza de Tarea Vulcano y la Brigada XXX del Ejército (El Tiempo, 2012, 5 de marzo). Durante las jornadas de valoración de labio leporino y paladar hendido que tuvieron lugar en la región en 2012, la primera dama del departamento resaltó el apoyo de la Fuerza de Tarea y de la Brigada XXX que transportaron por vía aérea a beneficiados del Catatumbo y les ofrecieron jornadas de recreación (El Tiempo, 2012, 20 de marzo).

El fortalecimiento de la presencia y accionar militar que tuvo lugar en la región desde mediados de los dos mil ha dejado a los civiles en medio de la confrontación armada y ha producido nuevas dinámicas de desplazamiento forzado y afectaciones físicas y psicológicas entre las y los habitantes, su vigencia es en alto grado preocupante. Como lo describió un personero, en referencia a una vereda donde fue instalado un puesto de control del Ejército a 10 metros de la escuela: "la comunidad está que en el momento en que suene un disparo, ellos se salen, se desplazan" (CNMH, taller de memoria con personeros, Ocaña, 2016).

6.1.2. Breve recuento sobre ejecuciones extrajudiciales

Uno de los efectos más deplorables que ha dejado como resultado la militarización de la vida cotidiana en el Catatumbo ha sido la comisión de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la fuerza pública que, tal como lo relataron las personas consultadas y ha sido fallado judicialmente, tuvo lugar en su mayoría entre 2006 y 2008.

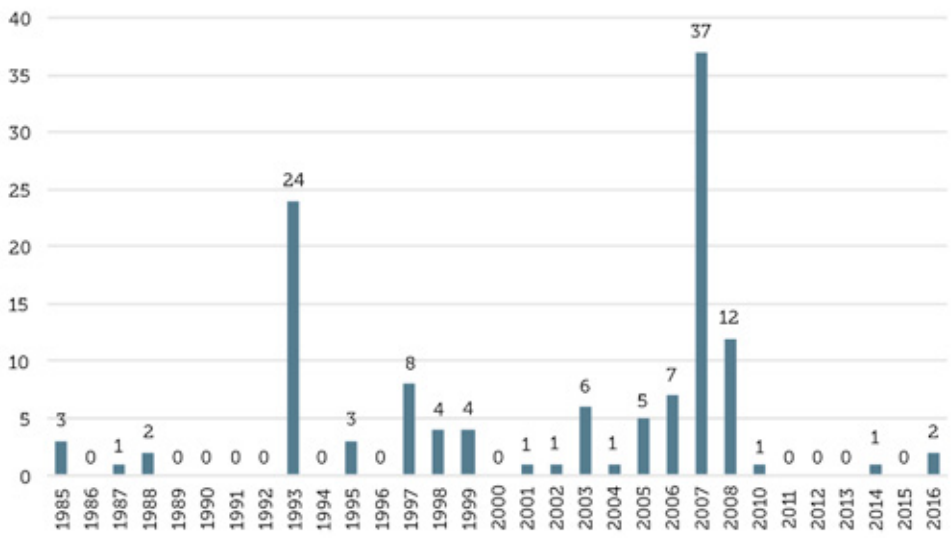
Aunque habitantes del Catatumbo venían denunciando la perpetración de este acto atroz, no fue sino hasta que se hizo público el caso de los jóvenes de Soacha (municipio aledaño a Bogotá) presentados por miembros de la Brigada No. 15 como guerrilleros dados de baja en combate en territorio de Norte de Santander, que se reconoció la existencia de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados *falsos positivos,* y de sus preocupantes dimensiones en todo el país. Así lo recordó un dirigente de Ascamcat:

> En ese año 2008 se incrementa una práctica que se llama los *falsos positivos* en la zona del Catatumbo. Nosotros empezamos a ver que caían campesinos en San Calixto, en Teorama, en El Tarra, en El Carmen, que tuvo un índice muy elevado. El Ejército empezaba por Radio Catatumbo diciendo que: abatido el guerrillero tal, está en la morgue de Ocaña y que fueran a reclamarlo. Cuando uno iba a ver, pues resulta que era mi vecino, era el presidente de alguna JAC, o era el arriero de la vereda. Entonces ahí fue donde nosotros empezamos a conocer el término de los *falsos positivos* (CNMH, grupo focal Ascamcat, Cúcuta, 2017).

Considerando la información disponible para el período 1985-2016, el OMC del CNMH registra la comisión de 123 ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo[302], con dos repuntes significativos en 1993 y en el período 2006-2008, como se observa en el gráfico 23. La información permite concluir que se trata de una victimización que ha tenido lugar, con cierta uniformidad, en todos los municipios de la región, aunque en algunos municipios es donde se registra el mayor número de víctimas, como son los casos de Teorama (18 por ciento), El Carmen (14 por ciento), Hacarí (13 por ciento) y Ocaña (13 por ciento).

302 Incluyendo el municipio de Ábrego; el OMC no ha documentado casos en el municipio de Sardinata

Gráfico 23. Víctimas de ejecuciones extrajudiciales por agentes de Estado 1985-2016



Fuente: CNMH- OMC, fecha de corte 15 de noviembre de 2017[303].

Las víctimas de este crimen fueron hombres jóvenes de la región que, en su mayoría, se dedicaban a las labores del campo y tenían que movilizarse por zonas rurales en general poco habitadas (Ccalcp, 2007). Para el caso del Catatumbo se trató de personas que no tenían un perfil público en sus comunidades, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales fueron personas de bajo perfil, como lo relató una defensora de DD.HH. que ha acompañado jurídicamente a familiares de víctimas de estos crímenes:

303 No hay información disponible para casos ocurridos en el año 2009. No se incluyen los casos de personas de otras regiones presentadas como bajas por parte de miembros de la fuerza pública en el Catatumbo. Según datos del OMC, en 2008 once personas fueron presentadas en Ocaña como presuntos guerrilleros dados de baja. El OMC no ha documentado casos en el municipio de Sardinata.

> En el Catatumbo, a diferencia de otras regiones, no mataron líderes, mataron la gente más humilde y más alejada territorialmente ¿por qué? Por la misma visión de que [las víctimas] no tienen dolientes, o por la misma visión de que es gente ignorante que nadie los va a escuchar, o que no van a ser capaces de denunciar (...) Entonces por eso tú ves que la gente que mataron eran campesinos de bajo perfil, afiliados a las Juntas de Acción Comunal, pero no eran líderes visibles y era gente extremadamente humilde, muy humilde. Entonces creo que en el Catatumbo no fue la estrategia de eliminar líderes, porque es que hacerle un falso positivo a un líder es muy difícil puesto que es una persona pública, entonces puede demostrar con mucho que estuvo de presidente de la Junta, que se la pasa hablando con la alcaldía, que se la pasa pidiendo tejas, que está en la asamblea, que va allí, que va allá ¿A qué horas es guerrillero? Entonces por eso allá no vemos ningún líder como falso positivo. Todo ha sido gente humilde y también gente que tenía que trasladarse en largos trechos sola, o sea, que trabajaban lejos. Casi siempre los mataron, los desaparecieron entre su casa y la zona de trabajo, porque el Catatumbo es inmenso (...) no mataron a ninguna mujer, todos fueron hombres y todos jóvenes (CNMH, entrevista, mujer defensora de DD.HH., Bogotá, 2016).

Para habitantes de la región, en particular aquellos de veredas más alejadas, este contexto de asesinato y desaparición forzada de vecinos, personas conocidas y habitantes de la región que luego fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate, ocasionó que los retenes militares y el encuentro con un soldado les produjera sentimientos de espanto, como lo relató una mujer quien fue retenida junto a su esposo por parte de miembros del Ejército en su regreso a la zona rural de El Carmen desde Ocaña, quienes les repetían: "hoy se mueren ustedes" (CNMH, taller con mujeres, Ocaña, 2016).

La perpetración de estos actos y los consecuentes daños configuraron mecanismos de respuesta entre la población civil, de modo tal que

habitantes y organizaciones nacionales e internacionales acompañantes como la Asociación Minga se movilizaron ante el ascenso en la perpetración de ejecuciones extrajudiciales y su evidente estado de impunidad. En concreto, las comunidades del corregimiento de La Trinidad (Convención) y del casco urbano de El Tarra, llevaron a cabo a mediados de 2007 dos espacios colectivos de reunión con miembros del Ejército, en los cuales solicitaron claridad sobre los casos de vecinos y conocidos que aparecían en los medios de comunicación como presuntos guerrilleros dados de baja en combate y exigieron el fin de esta práctica (CNMH, entrevista, mujer defensora de DD.HH., Bogotá, 2016).

Habitantes de El Tarra reclamaron al Ejército por las ejecuciones extrajudiciales en una audiencia en el polideportivo del pueblo. Fotografía: *Memoria puerta a la esperanza: violencia sociopolítica en Tibú y El Tarra*, Asociación Minga y Fundación Progresar, 2008.

Considerando tales espacios previos como antecedente, en particular el de El Tarra, se llevó a cabo en diciembre de 2007 una audiencia pública en el auditorio de Bellas Artes de Ocaña. Esta contó con la presencia de unos 700 habitantes del medio y alto Catatumbo y de instituciones del Estado como la Fiscalía, el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), del coronel Santiago Herrera Fajardo comandante de la Brigada Móvil No. 15 y del brigadier general Paulino Coronado Gámez, comandante de la Brigada XXX, (CNMH, entrevista, mujer defensora de DD.HH., 2016). Durante la audiencia se presentaron testimonios grabados de familiares de las víctimas y se buscó visibilizar el alcance de la práctica de las ejecuciones extrajudiciales en la región.

Ascamcat y la (Ccalcp), con el apoyo de otras organizaciones sociales nacionales e internacionales, pusieron en marcha el mecanismo comisión de verificación sobre la situación de DD.HH. en el Catatumbo a partir de 2007, que en visitas a veredas y poblados recogía los testimonios de habitantes acerca de las afectaciones producidas por el conflicto armado y las violaciones a sus DD.HH. y DIH de miembros de la fuerza pública.

De modo tal que, desde los primeros informes producidos por la comisión, los habitantes evidenciaron el accionar desmesurado y vejatorio de soldados acantonados en sus veredas: "Íbamos en medio de la militarización y los combates, acompañados por otras organizaciones sociales, la comunidad internacional, a poblaciones como Santa Inés en El Carmen, por ejemplo. La comunidad nunca, en medio del miedo, iba a poder ir a la personería y decir: oiga, es que me mataron a mi papá y lo pasaron como falso positivo" (CNMH, grupo focal Ascamcat, Cúcuta, 2017).

Sin embargo, los casos de ejecuciones extrajudiciales no cesaron. Hacia finales de 2008 se comenzó a conocer de la desaparición de jóvenes de Soacha que fueron presentados como guerrilleros dados de baja en

Cimitarra (Santander) y Ocaña, por lo cual organizaciones sociales del Catatumbo han argumentado que se trató de un cambio en la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, cuya perpetración a todas luces se hacía evidente en la región: se optó por pasar como guerrilleros dados de baja a personas externas al Catatumbo, ante la presión y visibilidad que generaron apuestas como la audiencia de Ocaña en 2007 y las denuncias de habitantes rurales. El país conoció horrorizado, de la comisión de este tipo de prácticas por parte de miembros del Ejército en todo el territorio nacional.

A finales de 2008, el entonces comandante general del Ejército, general Mario Montoya, retiró de su cargo a altos mandos de la Brigada Móvil No. 15 (El Tiempo, 2008, 28 de octubre) y, en un comunicado, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, llamó a calificar servicios o retiró discrecionalmente a 27 miembros del Ejército, entre ellos al brigadier general Paulino Coronado Gámez, comandante de la Brigada XXX y al coronel Santiago Herrera Fajardo, entonces excomandante de la Brigada Móvil No. 15 (Revista Semana, 2008, 29 de octubre).

Como lo manifestó el coronel Herrera en una entrevista con el periódico El Tiempo, la presión por mostrar resultados positivos en la lucha contra las guerrillas siempre existió: "Una presión muy grande que genera también el hecho de estar en un teatro de operaciones tan complicado como el Catatumbo, donde confluyen todas las violencias. Y la presión existía a nivel nacional" (El Tiempo, 2009, 1 de junio)[304]. Como consecuencia de esta cadena de hechos, la Brigada Móvil No. 15 fue clausurada (Revista Semana, 2017, 4 de abril) y en reemplazo se creó la Brigada Móvil No. 23.

304 *Human Rights Watch* dio a conocer la existencia de una directiva militar que establecía recompensas por personas dadas de baja en combate y que presuntamente actuó como un "incentivo perverso" para la ejecución de este tipo de crímenes (Revista Semana, 2017, 11 de noviembre).

Personas de la región también refirieron otras formas de *falsos positivos*, esta vez relacionados con la judicialización y captura por parte de la fuerza pública de presuntos miembros de grupos guerrilleros o de personas relacionadas con el cultivo o la primera transformación de la hoja de coca. Esta situación, que un habitante de Hacarí refirió como *falsos positivos* carcelarios, se ha profundizado en particular durante los meses que siguieron a las movilizaciones sociales que han tenido lugar en el Catatumbo en los años recientes, en especial bajo la figura de capturas masivas.

Ascamcat ha denunciado este tipo de actos que, a su juicio, criminalizan sus apuestas comunitarias y generan un profundo estigma sobre las personas que en la región se movilizan por mejorar sus condiciones de vida. Miembros de esta asociación campesina, denuncian, han sido objeto de capturas masivas y de montajes judiciales, una dinámica que pone en riesgo la continuidad misma de los procesos sociales que líderes y lideresas de la región adelantan: "Entonces el 7 de febrero de 2010 vivimos en carne propia la captura de 17 líderes, comerciantes, inspector de Policía, gente muy reconocida en la zona, en el Catatumbo, que fueron reportados en los medios de comunicación como la red y estructura de apoyo al terrorismo de las FARC y el ELN en la zona" (CNMH, grupo focal Ascamcat, Cúcuta, 2017).

Esta dinámica de interacción entre miembros de la fuerza pública y civiles en el Catatumbo contribuyó a la profundización del estigma que recae sobre sus habitantes como presuntos auxiliadores de las guerrillas, guerrilleros o narcotraficantes. Como se ha mostrado en este informe, estas construcciones estigmatizantes renuevan ciclos de violencia y han justificado y profundizado la guerra en el Catatumbo.

Las personas relatan la manera en que habitar esta región las convierte en sujetos sospechosos frente a miembros de la fuerza pública, tanto en sus poblados como cuando se mueven a ciudades como Ocaña o Cúcuta.

En algunos casos, incluso, habitantes de municipios como San Calixto y Hacarí y de la zona rural de El Carmen, Convención y Teorama, prefieren negar su lugar de procedencia ante el temor de recibir comentarios estigmatizantes o llamar la atención de un miembro de la fuerza pública. Ello es así porque reconocen que habitan y/o provienen de territorios definidos por la política de seguridad y defensa como "zona roja" o "guarida" de guerrilleros, de lo cual hacen eco múltiples medios de comunicación que, al informar sobre la región, además anteponen calificativos tales como: convulsa o selvática:

> Pongamos que nosotros semos de San Calixto. Uno a veces el Ejército le pregunta de dónde viene y uno tiene que decir: de Teorama, porque si uno dice de San Calixto se la montan a uno. Y ¿por qué se la montan? Si semos campesinos trabajadores y lo tratan a uno lo que no debe de ser, porque uno como campesino tiene un derecho, porque de nosotros es que comen, pongamos uno trae de pancoger es para acá pa' la ciudad (CNMH, taller de memoria, San Calixto, 2016).

> Entonces [el policía] dijo: aquí todos son guerrilleros, hasta las piedras. Y yo le dije: me hace el favor, la guerrilla está en el monte ¿Usted ve aquí la gente con los fusiles? Aquí las piedras quiere decir niños. Y respondió: no, lo que pasa es que aquí todos le colaboran a la guerrilla (CNMH, taller de mujeres, Ocaña, 2016).

Sobre hombres jóvenes de origen rural ha recaído con especial intensidad la presunción de ser guerrillero o su auxiliador. Si a ello se suma que muchos se dedican a trabajar como raspachines, se comprende el estado de riesgo e indefensión que experimentan en sus vidas cotidianas y cuando se movilizan por caminos y carreteras frente al accionar de la fuerza pública. Emergen de este modo sentimientos de impotencia, rabia y zozobra, al corroborar que habitar y trabajar en la región se encuentra revestido de un manto de sospecha que pone en riesgo su integridad. Frente a este tipo de situaciones, organizaciones como la Asociación de

Personeros del Catatumbo ha asumido un rol de veeduría y exigencia en el cumplimiento de los principios del DIH.

Sobre líderes comunitarios y personeros de la región también se han construido señalamientos de miembros de la fuerza pública que, en suma, ponen en riesgo las apuestas que abanderan y su vida:

> El tema de señalamiento de la fuerza pública a funcionarios públicos, a líderes sociales, a presidentes de junta es bastante grande también. Eso pone en riesgo a la comunidad en general. Un caso particular: un coronel del Ejército en un consejo de prevención decir que un personero favorece los grupos insurgentes más que a la institucionalidad, eso es ponerlo en riesgo (CNMH, taller con personeros, Ocaña, 2016).

En repetidas ocasiones, personeros de la región, así como líderes sociales y defensores de derechos humanos, están convencidos de que la estrategia de militarizar el Catatumbo no soluciona (ni ha solucionado) las falencias persistentes en la región en términos de acceso a derechos de quienes la habitan, reproduciendo más bien un círculo de violencias, estigmatización y daño que ha aquejado a esta región por décadas. Como lo enunció un personero: "No hay inversión social, ese es el problema. En este sector del país el Gobierno piensa que con meter Ejército se soluciona la situación, pero no llega con planes concretos y efectivos para satisfacer las necesidades mínimas de las comunidades, como en el tema de educación o salud" (CNMH, taller con personeros, Ocaña, 2016).

6.1.3. Persistencia de las guerrillas

Paramilitares y guerrillas del EPL, ELN y FARC convergieron en la región del Catatumbo, aunque siguiendo trayectorias diferenciadas: en algunos casos, las guerrillas se enfrentaron directamente con los paramilitares en combates, en particular el EPL y el ELN; en otro escenario las FARC disputaron con ellos el monopolio de la siembra y comercialización de la hoja de coca, en especial en la zona del bajo Catatumbo.

La desmovilización paramilitar configuró un escenario de fortalecimiento económico, militar y de expansión territorial de las tres guerrillas en la región, en una dinámica de "reacomodo violento" y que se ubica entre 2005 y 2013. En el caso de las FARC, se registra una significativa reconfiguración geográfica y de su accionar armado: concentrada en el municipio de Tibú a finales de los años noventa, se expande hacia los municipios de Sardinata, El Tarra, Teorama, San Calixto y Hacarí.

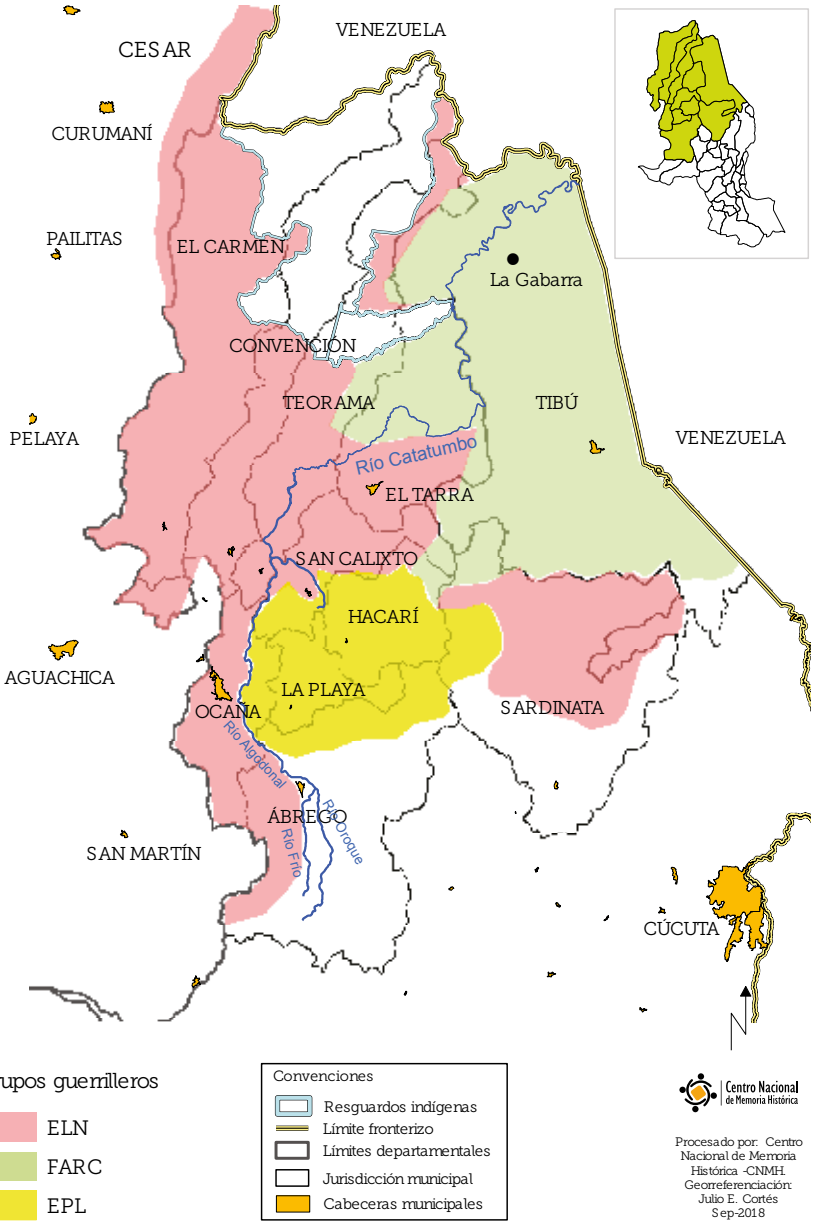
Por su parte, el EPL y el ELN no solo mantuvieron su presencia en los territorios en los que se encontraban antes de la arremetida paramilitar, sino que, en el marco de las negociaciones de paz entre las FARC y el Gobierno, se movieron por la región, copando espacios, antes del dominio de las FARC, como en el caso de zonas de los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata. Esta dinámica de quiebre, que se constata a partir de 2013 hasta la actualidad, ha implicado además una importante expansión y fortalecimiento económico y militar del EPL, como lo han experimentado los habitantes del Catatumbo, en su estrategia por copar los territorios donde desaparecieron las FARC como principal fuerza insurgente.

6.1.3.1.
Reacomodo violento 2005-2013

Durante los años de presencia paramilitar en el Catatumbo, el ELN y las FARC crearon nuevas estructuras armadas. En el caso del ELN creó, en noviembre de 1999, la Compañía Comandante Diego y los frentes Luis Enrique León Guerra y Héctor en el 2000. Las FARC conformaron las Compañías Resistencia Barí y 29 de mayo, así como la Columna Móvil Arturo Ruiz, estructuras nutridas por guerrilleros expertos en combate que provenían de la zona de distensión del Caguán y en 2008 la Columna Móvil Antonia Santos (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Justicia y Paz, Radicado: 11001600253200680008, 2014).

El reacomodo violento de las tres guerrillas se dio en el marco de la militarización sin precedentes, cuyo énfasis principal fue la lucha contrainsurgente y la recuperación militar del territorio. Es así como luego de la nefasta presencia paramilitar, se reconfigura en la región un escenario de intensa disputa militar por el control del territorio.

Mapa 22. Presencia armada del ELN, FARC y EPL 2005-2013



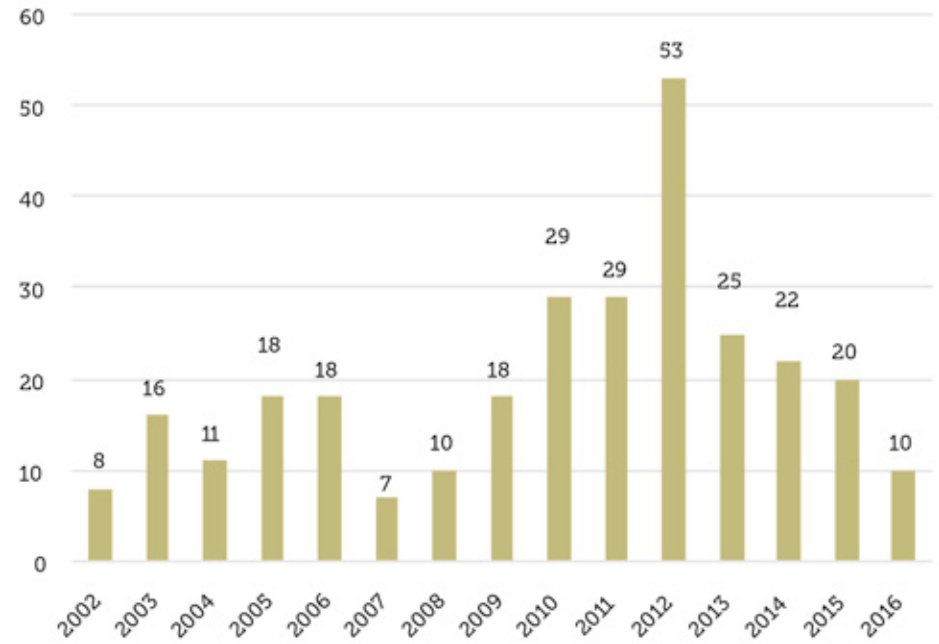
Fuente: talleres colectivos de reconstrucción de memoria histórica, entrevistas individuales y revisión de fuentes secundarias, 2018.

Durante este período el accionar de las tres guerrillas estuvo direccionado de manera prioritaria a contrarrestar, repeler o eliminar la presencia de la fuerza pública. Aunque algunas personas narraron que una vez desmovilizados formalmente los paramilitares, las guerrillas asesinaron a presuntos colaboradores de las AUC, en otros casos se hizo referencia al interés de estas por impulsar la reconstrucción de la vida después del paramilitarismo. Sin embargo, las narraciones sobre las guerrillas en este período resaltan su carácter y capacidad militar.

A las adecuaciones de la fuerza pública y la puesta en marcha de acciones contundentes, los habitantes de la región suman el fortalecimiento de la capacidad militar de las guerrillas, en particular, por la ejecución de acciones armadas con alto impacto en la sociedad civil como el daño a bienes, activación de artefactos explosivos y ataque sorpresivo a instalaciones y efectivos de la fuerza pública que, en muchos casos, estaban localizados en medio de la población civil.

Las acciones de las guerrillas contra la fuerza pública, en sus modalidades de ataque a instalaciones, ataque a población, emboscadas y hostigamientos, alcanzaron durante este período dimensiones nunca vistas en la región. A partir de 2008 hasta 2015, en la región se intensifican acciones, con un énfasis particular en hostigamientos, llevados a cabo en su mayoría por las FARC, seguidas por el ELN y el EPL.

Gráfico 24. Evolución de acciones bélicas con iniciativa de las guerrillas contra la fuerza pública 2002-2016



Fuente: CNMH-OMC, fecha de corte 15 de noviembre de 2017.

Los hostigamientos fueron narrados en todos los espacios colectivos y en múltiples entrevistas individuales como una práctica cotidiana de las guerrillas durante los años que siguieron al paramilitarismo. Aunque en algunos casos habitantes de la región usaron este término para referirse indistintamente a cualquier tipo de acción armada de las guerrillas, un docente entrevistado describió que un hostigamiento es "donde empieza un tiroteo y esos tiroteos vienen acompañados de tatucos, de cilindros" (CNMH, taller con docentes, Tibú, 2016).

Este tipo de acciones, dirigidas contra instalaciones militares y de Policía ubicadas -con frecuencia- en lugares céntricos y de importancia para la vida comunitaria de habitantes de la región, ha generado gran afectación entre la población civil. Las personas hicieron referencia a sentimientos de incertidumbre y zozobra que les producen y que los llevó a desplazarse de manera forzosa. Así lo relató un habitante de Las Mercedes (Sardinata):

> Mucha gente emigró, no se desplazó totalmente. La mitad del pueblo se desplazó hacia otro lugar donde no había presencia militar. Quedó fue la Policía. Entonces en el día a veces se quedaba la gente en las casas porque tenían sus negocios y no podían dejar solo el negocio y en las noches hacían procesiones, todavía las hacen, (...) la gente está habitando allí en el día, en la noche desocupan eso y se van porque hay amenazas todavía continuas de que va a ver hostigamientos y que muy pronto eso lo van a acabar. El decir de los grupos subversivos es que la Policía, junto con todo eso donde ellos viven, tienen que acabarlo porque lo acaban (CNMH, hombre adulto, docente, entrevista 47, Tibú, 2016).

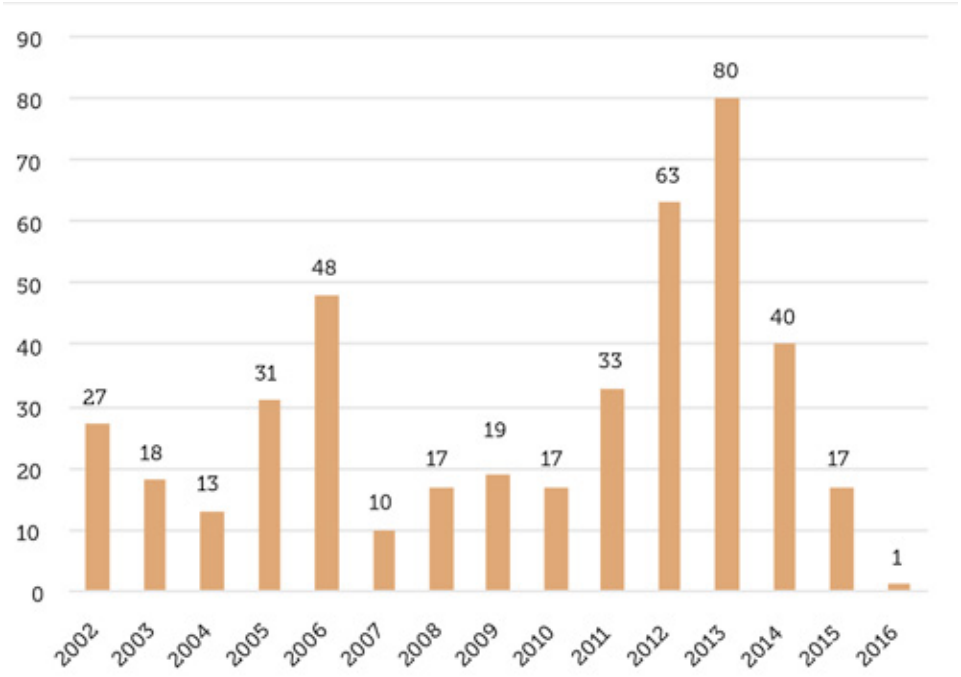
En relación con las acciones de las guerrillas contra la vida de miembros de la fuerza pública y de entes de investigación judicial, uno de los hechos con mayor eco en el país y que hizo visible la capacidad militar del EPL (considerada hasta el momento una guerrilla menor con poca capacidad de acción) fue el asalto y masacre de 17 agentes del DAS que perpetraron el 20 de abril de 2006, en medio de la consternación nacional. Como fue relatado, los agentes fueron engañados y emboscados por el EPL cuando se dirigían a la zona rural de Hacarí a capturar a *Megateo*, jefe de finanzas de esta guerrilla y una pieza clave en la dinámica del tráfico de la pasta de coca en la región (CNMH, taller de memoria, Hacarí, 2016).

A ello se sumó el uso de francotiradores para atentar contra miembros de la fuerza pública, mecanismo de guerra que se puso en marcha en 2012 y 2013

en diferentes municipios. Este tipo de acciones, comunes durante el período 2005-2016, provocó que en distintos municipios de la región: Hacarí, Teorama y San Calixto, entre otros, soldados y policías se acantonaran dentro de sus instalaciones militares excepto para tareas de aprovisionamiento.

Los eventos de daño a bien civil se multiplicaron durante este período, en particular en 2005-2006 y a partir de 2011 hasta el 2014, con un significativo repunte en 2013, cuyo principal responsable corresponde en un 77 por ciento de los casos a las FARC, seguidas del ELN con un 16 por ciento.

Gráfico 25. Evolución de eventos de daños a bienes civiles perpetrados por las guerrillas 2002–2016



Fuente: CNMH-OMC, fecha de corte 15 de noviembre de 2017.

Al respecto, habitantes del corregimiento de Campo Dos (Tibú) describieron el impacto que sobre sus vidas cotidianas tuvo la voladura del puente que comunica a este poblado con la vía que conduce a Cúcuta y que, junto a la activación de un carro bomba frente a la estación de Policía de Petrólea (Tibú), en noviembre de 2010, constituyeron los hechos de mayor recordación durante este período de reacomodo. Las personas de este corregimiento y del casco urbano de Tibú vieron afectada su capacidad para movilizarse, incurriendo en mayores tiempos de desplazamiento y en gastos adicionales. Como lo expresó una habitante: "eso era un briega para todo, para los enfermos, para hacer mercado, para todo" (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016). Para algunos, la voladura del puente no solo generó un impacto en la infraestructura física, sino en sus ideas de comunidad: "Entonces ver el puente quebrado, ver la comunidad partida, desunida…es un impacto, es un trauma" (CNMH, taller de memoria Tibú, 2016).

Por otro lado, acciones como la voladura de infraestructura petrolera fue percibida por habitantes de la región como irracional y perjudicial, en tanto generó serias afectaciones en los entornos naturales que circundan el paso del tubo. De acuerdo con datos del OMC, los años en que más ataques a infraestructura energética se han ejecutado son 2005 y 2006 y posteriormente 2012 y 2013. Para 2013, 54 hechos de un total de 61 fueron atribuidos a la guerrilla de las FARC, una tendencia que cambió en 2014 cuando de un total de 26 casos documentados, se le atribuyeron 11 a las FARC y 14 al ELN.

El impacto de esta forma de violencia es fuerte para las personas de la región, porque el río Catatumbo y sus diferentes afluentes son fuente de alimentación, trabajo y eje estructurante de su identidad y vida cotidiana: los derrames de crudo tardan varios días en ser atendidos, producen la contaminación de las fuentes hídricas que surten acueductos y limitan la pesca. Esta afectación fue narrada en particular en El Aserrío (Teora-

ma), Guamalito y Mariquita (El Carmen), San Martín de Loba (Sardinata) y Campo Dos (Tibú), donde las personas recuerdan que cuando "le dan al tubo" se presentan afectaciones en las fincas aledañas y en ocasiones los hechos devienen en incendios, como sucedió en El Aserrío, cuando "parte del pueblo, que es la que da a la cancha, fue la que sufrió toda la afectación, porque en este lado fue que se prendió el oleoducto, por donde bajaba el crudo" (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

Los sentimientos de rechazo frente a la contaminación de las fuentes hídricas producida por los derrames de crudo por las acciones de guerrillas quedan puestos en evidencia en las palabras de un habitante de La Gabarra: "los mismos guerrilleros yo les decía: (...) bueno, ustedes se bañan, toman de esa agua y ¿por qué hacen eso?: No, para hacerle daño al Estado... Les dije: ustedes no están haciéndole daño al Estado, el Estado sube la gasolina todos los días" (CNMH, recorrido territorial 13, Tibú, 2016).

La dinámica de reacomodo violento de las guerrillas y de disputa contra la fuerza pública trajeron consigo además un significativo aumento en las víctimas por MAP y MUSE (minas antipersonal y municiones sin explotar) en la región. Según datos de Descontamina Colombia (Sistema de Información de Acción Contra Minas Antipersonal de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal), a partir del año 2001 el número de víctimas de accidentes por MAP y MUSE se fue incrementado en la región, con un repunte significativo de cerca de 120 en el 2006, cuando empezó a descender. En su mayoría, las víctimas fueron miembros de la fuerza pública y población civil rural que se movían por campos o zonas donde se habían sembrado este tipo de artefactos. Quienes habitaban zonas rurales, percibieron atónitos bombardeos aéreos y combates, en muchos casos evadiendo trochas, caminos y otros espacios ante la amenaza de la existencia de MAP y MUSE.

En el caso de los Barí, según datos aportados por Ñatubaiyibarí, las guerrillas asesinaron a cuatro miembros de este pueblo durante este período, en 2005, German Aytrabana, de la comunidad Bridicayra, el ELN en 2007 a Antonio Aricba y Chocho Aricbara, de las comunidades Corroncayra y Chirrindacayra, respectivamente, las FARC, en 2010, a German Cocuachila, de la comunidad Corroncayra.

A esto se sumó que, junto a habitantes de las cabeceras municipales, habitantes rurales se vieron forzados a abandonar temporal o definitivamente sus predios con el fin de salvaguardarse de ataques, enfrentamientos y otras acciones armadas. En particular, durante el período 2007-2009 se intensificó el desplazamiento forzado individual, colectivo y masivo entre municipios (sumado al desplazamiento intraurbano). La Defensoría del Pueblo estableció que el número de personas desplazadas recibidas en Ocaña en el año 2008 fue solo superado por el registrado para el año 2002, tiempo en que se daba la expansión paramilitar a la zona del alto Catatumbo:

> La llegada de este alto número de población desplazada a Ocaña se debe a la agudización de la confrontación en la zona del Catatumbo, que se expresa en enfrentamientos armados entre los grupos ilegales y la fuerza pública, la siembra de minas antipersonal, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el desarraigo económico en el que quedan las familias que estaban dedicadas al cultivo de uso ilícito, por causa de la erradicación, entre otras causas (Defensoría del Pueblo, 2009c, página 4).

Este contexto generó que en la región surgieran acciones colectivas de resistencia. En particular, se recuerda el caso de la iniciativa "Amigos por la Paz" en el corregimiento Las Mercedes (Sardinata). Acciones intimidatorias y atropellos llevados de las guerrillas pusieron a los habitantes de este poblado al límite:

> La guerrilla por un lado nos atropellaba, a la hora que ellos querían nos reunían, a la hora que ellos quisieran llegar a las tiendas y pedir lo que fuera. Y se iban y no pagaban, agarraban los carros, se los llevaban sin consentimiento: los necesitamos pa' ya. Lo mismo hicieron los paracos cuando llegaron ahí: necesitamos el carro, gústele o no tenemos que llevarlo, lo mismo las motos. Entonces ya estábamos hasta más allá de la coronilla con esos atropellos, abusos, entonces decidimos hacer un alto (...) sobre todo, en esa época [2005] los que habían del EPL eran muy abusivos, cuando tomaban [licor] llegaban a la casa y lo que ellos querían hacer hacían y ¿quién les decía que no? Tenían las armas, se metieron a las tiendas, se llevaban los mercados, los almacenes se llevaban la ropa que querían y ¿quién les decía algo? Entonces dijimos: ¡no señores! ¡qué pena! ahora nosotros nos vamos a organizar, (...) les dijimos a ellos: las condiciones ahora las vamos a poner nosotros porque ya estamos cansados de ustedes, ya estamos cansados de las autodefensas, siempre a toda hora nosotros los civiles somos los que pagamos el pato, nosotros estamos aquí, no nos podemos ir y no tenemos quién nos defienda, nosotros somos personas de bien y queremos y vamos a exigir el respeto por la vida, vamos a exigir nuestros derechos de ahora en adelante. Las condiciones las vamos a poner nosotros, nosotros somos los que vamos a decir qué es lo que vamos a hacer aquí en Las Mercedes (CNMH, taller de memoria, Sardinata, 2016)[305].

305 Cabe destacar que las personas relataron cómo, después de puestas las condiciones por parte de la población civil, el EPL no fue tan receptivo a las mismas, mientras que las FARC sí brindaron su respeto a las determinaciones impartidas por la comunidad.

6.1.3.2. El proceso de negociación con las FARC

Un punto de quiebre que reconfigura este contexto es el inicio de las negociaciones de paz entre las FARC y el Gobierno nacional a partir de 2012, su posterior concentración y su desmovilización a partir de 2016. Este proceso representó el cese de las acciones armadas de esta guerrilla que, en los años precedentes, se fortaleció en lo militar y expandió su control territorial en la región. Los ejercicios de memoria con los habitantes de la región dejaron ver su percepción sobre el proceso de paz con FARC. Un habitante de la zona rural de San Calixto habló sobre la disminución de acciones armadas:

> Ahorita, pues no digamos que haya habido un cambio de los que uno se merece. Ha habido un cambio, de que ya ha habido un poco más de inversión, hemos mirado un cambio desde que entró a negociar la organización de las FARC con el Gobierno. Yo he mirado, por ejemplo, un cambio muy bueno en ese sentido, porque desde esa época (...) ya no ha habido presencia de militares en la zona, que los avioncitos siempre rondan, pero ya uno está acostumbrado a eso. Pero, por ejemplo, no ha habido hostigamiento cerca de las comunidades (CNMH, entrevista, hombre campesino Cúcuta, 2016).

Sin embargo, la desmovilización de las FARC abrió la posibilidad de que las otras guerrillas presentes en el Catatumbo se extiendan territorialmente e incrementen su accionar armado, en particular para el caso del EPL. En esta dinámica de quiebre, el EPL ha ido copando los territorios donde las FARC eran la principal fuerza insurgente, en ocasiones, en disputa con el ELN. De acuerdo con un líder social de la región, en estricto sentido el ELN y el EPL no coparon territorios abandonados por las FARC, pues las tres guerrillas han convivido y compartido territorios

en la región desde los años 80. Más que "ausencias" y "presencias", se trata de territorios en los cuales una guerrilla actúa como principal fuerza insurgente (CNMH, entrevista, hombre líder social, Cúcuta, 2017).

Sin embargo, un docente del corregimiento de Las Mercedes expresó: "Los del EPL ahorita tomaron fuerza porque como ya las FARC mandaba del pueblo hacia arriba, del pueblo hacia Sardinata la FARC tenía todo el dominio y control; del pueblo hacia abajo mandaban los del ELN, pero como ya la FARC se desmovilizó (...) ya del pueblo hacia arriba el ELN hace presencia" (CNMH, taller con docentes, Tibú, 2016).

En municipios como Convención el EPL se fortaleció a partir de 2014 "y ahora con la desmovilización de las FARC, muchísimo más" (CNMH, taller de memoria, Convención, 2017). De hecho, personas de la región perciben que: "la organización que más ha crecido política y militarmente en los últimos años ha sido el EPL, más que las FARC, más que el ELN" (CNMH, entrevista, hombre defensor de DD.HH., Cúcuta, 2017).

Por medio de la Directiva No. 15 de 2016, el Ministerio de Defensa trazó la ruta para enfrentar militarmente al EPL y define como GAO (Grupo Armado Organizado), lo que significa que le otorga capacidad de perpetrar acciones violentas, pero no le reconoce el estatus político de las insurgencias.

Una de las acciones militares de mayor contundencia contra esta estructura ocurrió el 1 de octubre de 2015, cuando las Fuerzas Armadas desarrollaron un operativo militar que devino en la muerte de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias *Megateo*, su jefe financiero y articulador del narcotráfico en la región, y de cuatro miembros de su esquema de seguridad[306]. Le siguió la captura en Medellín, en septiembre de 2016, de

306 Personas de la región llegaron a considerar a *Megateo* un benefactor y reprobaron el *boom* mediático que su muerte generó.

Guillermo León Aguirre, alias *David León* o *Juan Montes*, máximo jefe de esta estructura armada; un mes después, se registró la muerte de Jader Navarro Barbosa, alias *Caracho,* por causas asociadas a la diabetes y de quien asumió la máxima comandancia; en noviembre de 2016, alias *Ramiro*.

No obstante, los resultados de estas operaciones fueron percibidas por algunas personas de la región como ineficaces para desestructurar definitivamente al EPL. De hecho, se mencionó cómo las muertes de *Megateo* y *David León* no lograron restarle capacidad o eliminar a esta estructura, sino que más bien desordenó a sus combatientes y obligó a una reestructuración que, en la región perciben como peligrosa:

> Estamos precisamente hablando del tema de reclutamiento militar por parte de las guerrillas, que ellos dicen que es voluntario ¿por qué? porque si a ti te dan... tú *desparchado*[307] por allá, que no tienes nada que hacer, sin estudios, sin posibilidades de nada, te dan una moto, te dan una pistola, un arma y un celular con minutos y te dicen (...) que puedes ganar platica alrededor de todo ese tema del narcotráfico, pues te animas (CNMH, entrevista, funcionaria Defensoría del Pueblo, Ocaña, 2016).

> Ahorita hay una equivocación muy grande: el EPL es el grupo más violento que hay de guerrilla, más que el ELN. El Estado pensó que matando a *Megateo* la guerrilla se debilitaba. Eso se está fortaleciendo más y los que están pagando esas consecuencias son los jóvenes, porque se los están llevando engañados, les están diciendo que les van a pagar, que allá mejor dicho van a tener desde moto pa' arriba y eso es una gran mentira (CNMH, taller violencia sexual, Cúcuta, 2016).

307 Se refiere a una persona que está aburrida, sin nada qué hacer, sin un oficio.

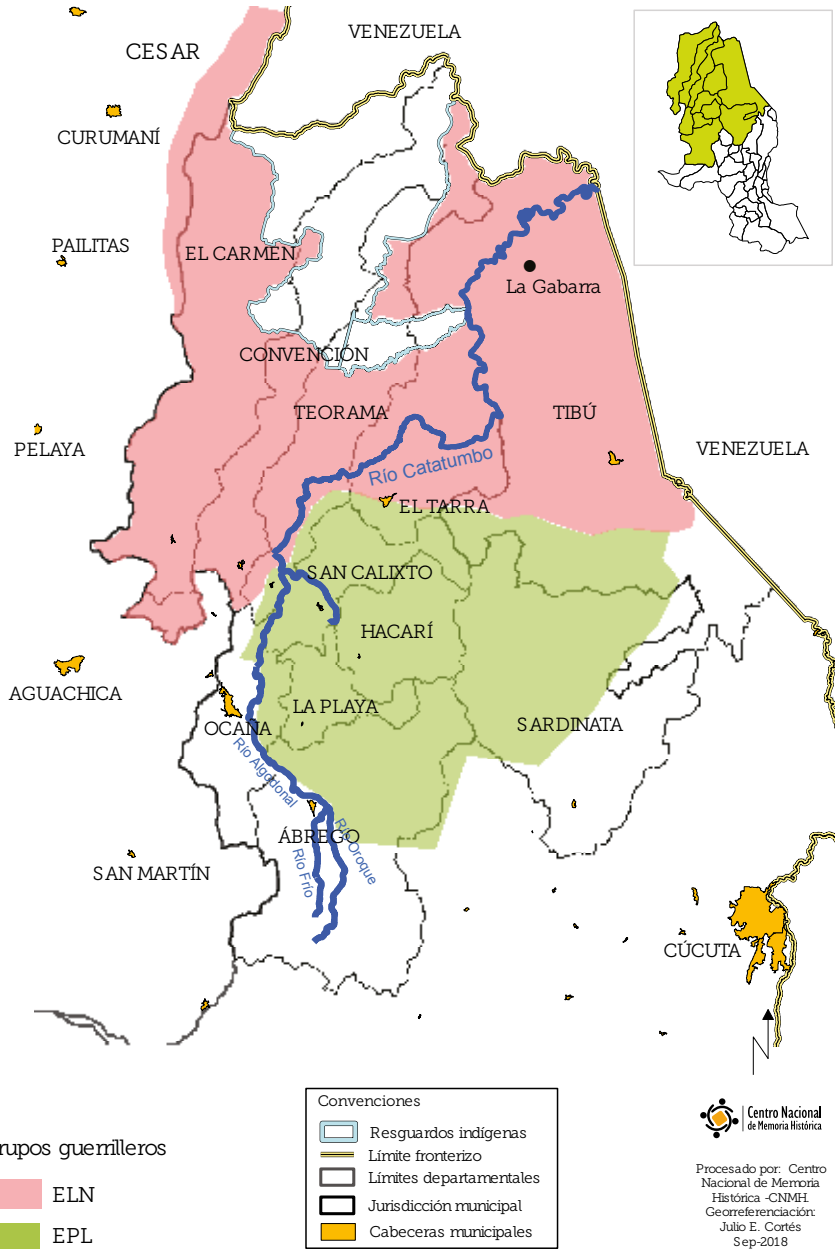
Las represalias del EPL por las bajas propinadas fueron contundentes, sumieron a la región en un permanente estado de zozobra. A finales de 2016, el EPL repartió panfletos intimidatorios (la fotografía ces del 6 de noviembre de 2016) y violó el DIH (16 de noviembre), cuando una ambulancia adscrita al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña fue retenida y pintada con alusiones a este grupo. Pintaron también buses de transporte intraurbano con alusiones al grupo y hubo amenaza de un presunto carro bomba cargado con cilindros de gas propano. Fuente: redes sociales del portal noticioso La Columna de la ciudad de Ocaña. Autor desconocido.

Algunas voces en la región creen que es importante que el Estado considere al EPL como una insurgencia para poder avanzar en una eventual negociación. Haciendo eco de lo expresado por diversos sectores de la región, la Asociación de Personeros del Catatumbo manifestó en un comunicado que:

> El EPL es reconocido entre la comunidad como una insurgencia, con estructura y línea de mando que el mismo Gobierno reconoce, base social y partido político con líneas de pensamiento ideológicas definidas, control del territorio y según se ha visto en artículos de prensa y dicho por autoridades de otros departamentos, ya hacen presencia armada fuera de Norte de Santander (Asociación de Personeros del Catatumbo, 2017).

Insisten en que, solo otorgándole estatus político, el EPL podría abrirse un camino de diálogo, ya iniciado con el ELN, que posibilite una salida negociada al conflicto y la desarticulación de los actores armados que persisten en la región. En esa vía, múltiples voces afirman que, si no se lleva a cabo un proceso de diálogo y negociación también con el EPL, los esfuerzos de la paz en el Catatumbo van a estar en permanente amenaza, pues como se infiere del siguiente mapa, el potencial de expansión y la presencia de las guerrillas del ELN y el EPL en el Catatumbo para el año 2016 fue significativo:

Mapa 21. Presencia armada del ELN y el EPL 2016



Fuente: talleres colectivos de reconstrucción de memoria histórica, entrevistas individuales y revisión de fuentes secundarias, 2018.

Durante los años 2015 y 2016, no obstante, la legitimidad del EPL entró en una dinámica de deterioro, según fue narrado en talleres de reconstrucción de memoria histórica y conversaciones individuales. Ello se enmarca en el contexto de caos por el que atraviesa esta estructura y se caracteriza por su creciente capacidad de intimidación y coerción, que es sentida en todos los niveles de la vida individual y comunitaria en la región.

Por una parte, combatientes del EPL comenzaron a exigir bienes y animales a las personas, desconociendo el mecanismo de la palabra y la negociación que décadas atrás habían caracterizado requerimientos de este tipo. Además, es creciente la percepción de habitantes en torno al interés del EPL por emplear jóvenes y dotarlos de armamento quienes, en muchos casos, carecen de formación política. Por último, el EPL fortaleció su capacidad para dictar y castigar múltiples esferas de la vida cotidiana, como es narrado en voz baja, por habitantes de las zonas rurales de los municipios del alto Catatumbo.

6.1.3.3. La persistencia del control armado sobre la vida cotidiana

Durante el período que siguió a la desmovilización paramilitar, las guerrillas continuaron sus políticas de vigilancia y regulación de la vida cotidiana que se habían puesto en marcha en la región desde su entrada al territorio, descritas en el capítulo 3. Con un énfasis en el ELN y el EPL, habitantes de la región mencionaron distintas prácticas, normas y sanciones que les fueron impuestas para establecer controles a su vida social e individual.

Las guerrillas ejecutaron prácticas de castigo contra presuntos ladrones y consumidores de drogas (en particular, marihuana) y regularon los horarios de entrada y salida a veredas y corregimientos, así como, de circulación por las vías. Además, prohibieron que los hombres lleven cabello largo, aretes, tatuajes o *piercing*, sobre ellos recayeron castigos, pues como lo mencionó un habitante de Teorama: "aquí en la región hay un concepto que la persona que tiene el cabello largo (...) son personas que no son trabajadoras" (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016).

Las guerrillas cobraban "vacunas", cuotas que impusieron sobre la venta y distribución de distintos productos de uso común. En Hacarí, por ejemplo, se especificó que el cobro se hacía sobre las bebidas alcohólicas; en Convención se refirió que la cuota también recaía sobre los agroquímicos, mientras que en El Tarra además se impuso sobre productos básicos como el arroz, sumado a lo que cada finca donde se cultiva hoja de coca debe pagar. Respecto a la "vacuna" impuesta a las empresas de transporte terrestre y a la venta de cerveza en El Tarra, se recordó que esta práctica fue realizada por las FARC, previa su desmovilización.

Esta situación encareció los productos, pero a su vez aportó a la financiación de los distintos grupos guerrilleros, una dinámica que es de conocimiento generalizado para habitantes de la región y que han vuelto un elemento propio de su cotidianidad, puesto que "eso se ve ya como legal" (CNMH, taller de memoria, El Tarra, 2016).

En la región las guerrillas desarrollaron una micropolítica de la sospecha y la vigilancia de todo aquello considerado cercano o afín a la fuerza pública, al Gobierno o considerado "no deseado" en la región.

En el caso del municipio de Convención, se hizo alusión a que la estricta vigilancia de las guerrillas respecto a quiénes ingresan a las zonas rurales ha provocado afectación en el desarrollo de iniciativas. Lidere-

sas de organizaciones de mujeres, recuerdan cómo algunas tuvieron que pedir permiso o dar explicaciones para que fuera permitido el ingreso de funcionarios públicos y otras instituciones a sus veredas para llevar a cabo actividades de capacitación, lo cual puso en riesgo sus actividades asociativas.

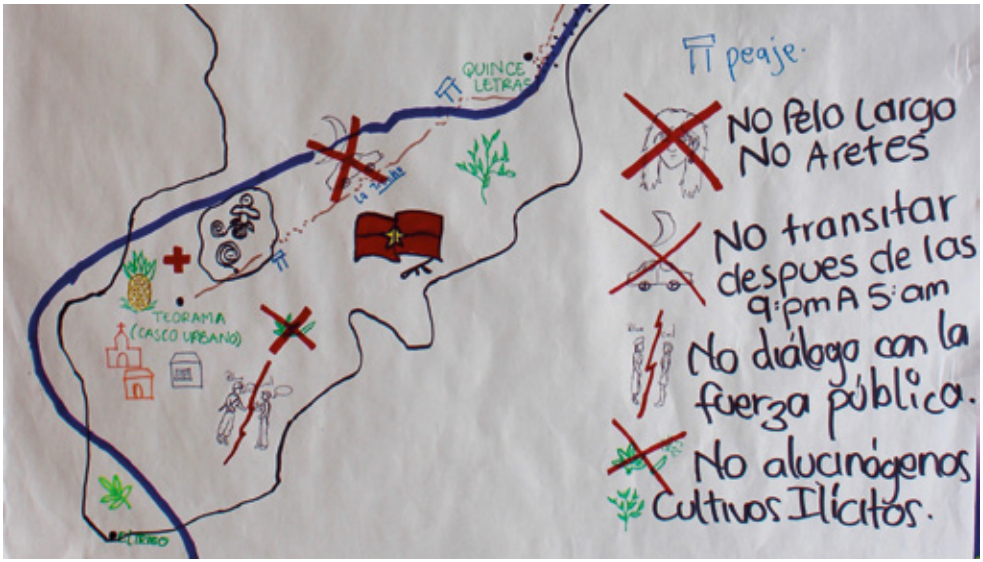
Trabajadoras sexuales de La Gabarra (Tibú) narraron cómo su trabajo fue objeto de múltiples regulaciones por parte de las guerrillas, en tanto su labor es con frecuencia vista con sospecha, se han justificado múltiples vulneraciones sobre sus cuerpos y su oficio. Para el caso del municipio de Tibú y, en particular para los corregimientos de La Gabarra y Campo Dos, donde en los últimos años se registró un incremento en el ejercicio del trabajo sexual, las mujeres describieron la dinámica de sospecha e intimidación que caracteriza su oficio:

> Moderador: ¿y la guerrilla alguna vez les ha llamado la atención, las ha reunido?
> Trabajadora sexual 1: a mí una amiga me dijo que el lunes pasado la subieron
> Trabajadora sexual 2: sí, nos subieron pa' por allá.
> Moderador: ¿a dónde las subieron y qué les dijeron?
> Trabajadora sexual 2: no, pues [nos hablaron] sobre el vicio[308], sobre las mujeres que roban a los clientes
> Trabajadora sexual 1: te leen una cartilla, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Y cuidarte, que si tú haces una de esas, pecas con uno de esos y ahí sí...
> Moderador: ¿y cuáles son las fallas que ustedes podrían hacer y que ellos castigarían?
> Trabajadora sexual 1: aceptarle a una persona droga, no robar al cliente (....)

308 El consumo de droga

> Moderador: ¿y también hablaron del tema de las enfermedades de transmisión sexual, que tenían que cuidarse?
> Trabajadora sexual 1: Por eso fue que mataron a una muchacha allá en El Tarra, porque estaba enferma.
> Moderador: ¿y las que fueron, que llevaran exámenes y todo eso?
> Trabajadora sexual 2: sí, llevamos exámenes, todo (CNMH, entrevista, trabajadoras sexuales, Tibú, 2016).

Es significativa la persistente amenaza e intimidación de las guerrillas que recayó sobre personas de sectores LGBT de la región, quienes manifestaron haber sido violentadas de diversas maneras, en múltiples ocasiones. Quienes tienen identidades sexuales y de género distintas, encuentran que no pueden vivir o hacerlo con tranquilidad en municipios del Catatumbo (en especial en zonas rurales), pues su existencia propicia, de manera inmediata, que las echen o las golpeen, en particular para el caso de mujeres transgénero.



Detalle de representación gráfica del municipio de Teorama elaborada por jóvenes de este municipio, donde se ilustran las prácticas de control social ejercidas por las guerrillas del ELN y del EPL. Fotografía: Jaime Landínez para el CNMH, 2016.

Así mismo, en el ejercicio colectivo con personas de sectores LGBT, se hizo referencia a acciones llevadas a cabo por las guerrillas como medida correctiva. En particular, fue narrado el caso de un hombre gay del área rural de un municipio del alto Catatumbo cuya familia recurrió a la guerrilla para que "corrigiera" su orientación sexual. La corrección consistió en llevarlo a que tuviera relaciones sexuales con una trabajadora sexual; a su vez, se hizo mención del caso de una mujer lesbiana víctima de violencia sexual por parte de guerrilleros, en un municipio del alto Catatumbo, quienes cometieron este acto atroz también para "corregir" su orientación sexual (CNMH, taller con personas LGBT, Cúcuta, 2016).

- Las personas que han sido violentadas por su identidad y orientación sexual equiparan la violencia guerrillera a la violencia paramilitar. Ellos y ellas no perciben distinciones en la ejecución de estas violencias. En muchos casos, las vejaciones hacen parte de una trayectoria continuada de violencias que inicia en el hogar, la escuela y la iglesia. Así relató una mujer transgénero la constante percepción de amenaza que ha experimentado en el marco de la presencia y accionar de guerrillas y demás grupos armados:

> Facilitador: ¿tú sientes que en este momento hay pueblos vetados para ti en el Catatumbo? o ¿a cuál irías más o menos tranquila?
> Mujer trans: no, ningún pueblo, no estoy segura yo para allá, ni pa' Tibú ni pa' El Tarra, ni Convención. En vez de eso, uno irse pa' Barranquilla que queda más cerca, no entrar a Ocaña, porque a mí me dijeron que Ocaña ahorita está peligrosísimo para las chicas trans (CNMH, taller con personas LGBT, Cúcuta, 2016).

Por último, las guerrillas vetaron la interacción de civiles con miembros de la fuerza pública, en una dinámica que replicó y, en ocasiones profundizó, la vigilancia y control de las guerrillas en el período previo al paramilitarismo, tal como se señaló en el capítulo 3. Sin embargo, en ese contexto de militarización sin precedentes, habitantes de la región

encontraron imposible evadir, incluso, disimular su interacción con policías y militares. Como lo refirió un habitante de Teorama: "no le puede dar los buenos días o las buenas tardes a un militar porque ahí lo están señalando" (CNMH, taller de memoria, Teorama, 2016). En el caso de las relaciones afectivas entre habitantes de la región y miembros de la fuerza pública, recae una prohibición expresa: "Aquí las mujeres no se pueden enamorar de un soldado", fue narrado en San Calixto, "no puede saludarlo, ni mirarlo ni nada".

6.2. Mirada panorámica a los GAPD

Después de la desmovilización del Bloque Catatumbo en diciembre de 2004 y del Bloque Norte en marzo de 2006, las personas relataron que, aunque se registró un descenso en las acciones armadas y de control de la vida que caracterizaron al paramilitarismo, no hubo tranquilidad completa, pues los paramilitares "se desmovilizaron, pero se quedaron".

Norte de Santander fue uno de los primeros departamentos del país en que se dio a conocer la presencia de GAPD, que a lo largo de los años han recibido diversos nombres como bacrin, bacrines, bacrim, neoparamilitares, entre otros. En particular, a inicios del año 2006, se registró la existencia y accionar del GAPD Las Águilas Negras, cuya existencia formal "se dio a conocer entre marzo y abril de 2006 con una serie de panfletos intimidatorios que circularon de manera casi simultánea en Cúcuta y Ocaña" (Defensoría del Pueblo, 2007, página 2). A continuación, se establecerán las razones de la temprana presencia de los GAPD en la región, así como un breve recuento de su accionar (y disputa); luego sus principales dinámicas de control sobre la vida cotidiana, que han impuesto y a lo cual suele prestarse poca atención al enfatizar el

interés de estos grupos en el control de las rentas ilegales disponibles en la región.

6.2.1. Temprana presencia y expansión de los GAPD

A la desmovilización de las estructuras de las AUC le siguió un descenso en las acciones armadas en los municipios del Catatumbo; sin embargo, en los principales centros urbanos del departamento de Norte de Santander[309] se registró un preocupante incremento en acciones como los asesinatos selectivos, que se explica con la temprana aparición de los GAPD.

Los GAPD se caracterizan por ser grupos con un interés en las economías "donde prima el nodo, la red y no la estructura jerárquica" (CNMH, 2017b, página 102), se trata de organizaciones con altísimas capacidades de adaptación y reacomodo, una alta fragmentación, la constitución de alianzas frágiles entre actores y la constante disputa entre estructuras (MAPP/OEA, 2017).

Dado que en el Catatumbo muchas de las cabezas visibles de los GAPD fueron mandos medios o excombatientes de las estructuras paramilitares que hicieron presencia en la región, las personas asocian estas dos estructuras. Sin embargo, como lo han señalado habitantes y estudiosos de la región, los GAPD han cambiado a lo largo de los años, diferenciándose de las estructuras paramilitares precedentes:

309 Cúcuta y su área metropolitana (conformada por los municipios circundantes Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander), Ocaña y Tibú. Este apartado hace un énfasis en esta zona, reconociendo a su vez los vasos comunicantes que existen entre las dinámicas del conflicto armado, la economía del narcotráfico y el contrabando entre el Catatumbo y Cúcuta y los demás municipios de frontera.

> Ha sido un fenómeno que ha ido mutando y se ha ido acomodando, pues no se encuentra un patrón sistemático o una estrategia sistemática de persecución contra líderes sociales, miembros de la oposición política, de organizaciones sociales en el territorio y, aunque siguen ocurriendo, no es sistemático. Pero hay otras cosas que se mantienen: la presencia de estos nuevos grupos se da en los mismos territorios donde las AUC ejercían un control muy estricto, social, político, económico. Son unos territorios importantes del departamento. Estos grupos conocen estos territorios y su importancia estratégica en términos de generación de rentas ilegales, las posibilidades financieras que ellos representan, especialmente Ocaña, Tibú, área metropolitana de Cúcuta y zona de frontera. Pero no hacen presencia al interior del Catatumbo, no tienen intereses ahí. Son estructuras que no tienen la capacidad de resistir un enfrentamiento con la guerrilla, pues no son ejércitos con preparación y dotados militarmente, y su intención no es enfrentarse o acabar con la guerrilla, entonces corren gran riesgo. Su presencia es esporádica en municipios como Tibú, Ocaña y Sardinata, son corredores importantes para el tráfico de contrabando y rutas de droga (CNMH, entrevista, hombre defensor de DD.HH., Cúcuta, 2017).

Con respecto a las razones para la emergencia de estas estructuras en Tibú, Ocaña, El Tarra y Cúcuta y su área metropolitana, las personas consultadas hicieron referencia a, por lo menos, dos importantes razones. La primera, falencias en el proceso de desmovilización y reincorporación de excombatientes de las AUC; la segunda, la disponibilidad de apetecibles rentas ilegales asociadas con el narcotráfico, pero que también incluyen el contrabando de hidrocarburos, extorsiones y prestación de servicios de seguridad privada. Estas rentas ilegales se constituyen en el motor de la disputa por el control y aprovechamiento de estos réditos por parte de una multiplicidad de actores emergentes.

Con respecto a las falencias en el proceso de desmovilización y reincorporación, cobra relevancia recordar, como se evidenció en el capítulo 4, que una altísima proporción de combatientes del Bloque Catatumbo no eran originarios de esta región ni del departamento de Norte de Santander. Así, como lo expone el CNMH, luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo quedaron combatientes con una experticia acumulada "sin lazos fuertes ni con la región ni entre ellos" (CNMH, 2017b página 109), lo que facilitó la organización de nuevas estructuras armadas que, no pocas veces, se enfrentaron entre sí en una cruenta disputa por el control monopólico de rentas ilegales.

Un caso particular reviste el desarme del Frente Héctor Julio Peinado Becerra, una realidad que a veces parece subsumirse al contexto del Bloque Catatumbo. Contrario a lo relatado para el caso del Bloque Catatumbo, muchos de sus comandantes y combatientes hacían presencia en la región desde antes de la conformación misma de las AUC, por lo cual se trata de un fenómeno endógeno a la región del Sur del Cesar, con una importante influencia en los municipios de la provincia de Ocaña desde mediados de los años ochenta.

Es en ese sentido que muchas personas de Ocaña y de municipios del sur del Cesar hacen referencia a que "los paramilitares de *Juancho Prada* nunca se han ido del territorio", configurando una amenaza latente para los habitantes de esta zona, como lo ilustró la MAPP/OEA:

> Al temor generado por la presencia de facciones armadas ilegales, se le suma el control que tienen sobre instancias la familia Prada y el grado de control social. Especialmente en San Martín [Cesar], las víctimas relatan que en el momento de diligenciar los formatos de hechos atribuibles [ante la Unidad de Víctimas], los funcionarios municipales se rehúsan a escribir los nombres de po-

> sibles perpetradores –miembros de la familia Prada– (MAPP/OEA, 2009, página 8)[310].

Además, algunas personas hicieron referencia a la entrega de armas por parte de los combatientes durante la ceremonia de desmovilización. Según datos de la MAPP/OEA, se desmovilizaron 1.425 miembros del Bloque Catatumbo, quienes hicieron entrega de 1.115 armas (largas y cortas), lo que indica que no se alcanzó la proporción de un arma por persona; situación similar ocurrió en el caso del Bloque Héctor Julio Peinado Becerra, se desmovilizaron 251 combatientes que entregaron 179 armas. En un contexto de guerra en el cual -como lo explica un estudioso del tema en la región- todos los combatientes, sobre todo aquellos que portan uniforme, utilizan un arma larga y, en muchos casos, también un arma corta, "la relación debía ser superior a un arma–hombre y no fue así" (CNMH, entrevista, hombre líder social, Cúcuta, 2017).

En muchos casos el proceso de reintegración a la vida civil no logró ofertar un incentivo económico que lograra hacer contrapeso a dinámicas y herencias de organizaciones armadas cuyo énfasis estaba en la consecución y acumulación de riqueza (CNMH, 2017b)[311].

La segunda razón que se identificó como propicia para el surgimiento de los GAPD la resume con claridad un habitante del municipio de Ocaña: "Es bien claro que el único interés que tienen [los GAPD] es el económico: el manejo del contrabando, de la explotación ilegal de hidrocarburos, minería y la droga. Estos grupos criminales su base no es

310 El informe de la MAPP/OEA señala la cercanía y lazos de consanguineidad existentes entre Juan Francisco Prada, *Juancho Prada* y diversos funcionarios de la administración municipal del municipio de San Martín, Cesar para el año 2009.

311 El VI informe de la MAPP/OEA anota que Las Águilas Negras ejercían "una fuerte presión" sobre los excombatientes del Bloque Catatumbo, lo que produjo que algunos de ellos fueran asesinados, se desplazaran y, en ocasiones, integraran esta estructura. Así, algunos mandos medios del Bloque Catatumbo tuvieron que salir del país para huir de estas propuestas de ilegalidad (CNMH, 2017b).

ideológica, buscan es enriquecimiento con la ilegalidad" (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Ocaña, 2018). En esta dinámica juega un rol central Tibú y municipios del área metropolitana de Cúcuta que comparten una larga y porosa frontera con Venezuela, así como la histórica conexión (y relativa cercanía) de Ocaña con las principales ciudades del Caribe colombiano.

El control monopólico sobre las rentas ilegales ha conducido, primero, a la profusión de estructuras armadas con interés por controlar la totalidad o parte de los mercados ilegales, lo que ha conducido, a su vez, a una cruenta y sostenida disputa entre diversos GAPD, con afectaciones sobre la población civil. Como lo expone la Fundación Progresar, esta disputa tiene cabida por "apropiarse de un mercado ilegal que garantiza altísimos niveles de rentabilidad e impunidad" (Fundación Progresar, 2017, página 11).

Este factor que explica la persistencia de los GAPD en la región permite comprender, a su vez, por qué su presencia se concentra en los principales centros urbanos del Catatumbo (Tibú y Ocaña) y del departamento (Cúcuta y municipios aledaños), pues estos funcionan como centros de control y acopio de mercancías, garantizan movilidad entre los principales ejes de las economías ilegales de la coca y el contrabando y propician una alta demanda en la prestación de servicios de seguridad.

Al hacer memoria en torno a la presencia de estructuras posdesmovilización en la región, algunas personas recordaron que el primer GAPD que hizo presencia fue Las Águilas Negras. Una de las particularidades de esta estructura tiene que ver con su carácter endógeno, dado que se "estructuró localmente" (CNMH, 2017b), conformándose, en esencia, con excombatientes del Bloque Catatumbo y paramilitares no desmovilizados.

Su surgimiento se circunscribió a las ciudades de Cúcuta y Ocaña para expandirse en 2007 a municipios del área metropolitana de Cúcuta y a El Carmen, La Esperanza, Convención y Ábrego, cuando contaba con entre 300 y 400 personas en armas (MAPP/OEA, 2007a, página 8). Las Águilas Negras operaron en las principales ciudades de la región y en algunas vías[312], desde donde controlaron las rentas ilícitas y llevaron a cabo acciones con "un alto impacto e intimidación entre la población", como asesinatos, cobro de "vacunas", extorsiones, amenazas y la imposición de normas de comportamiento (Defensoría del Pueblo, 2007, página 5).

Llama la atención que, como lo narraron personas de la Ascamcat y otras organizaciones, la población fue intimidada por miembros de la fuerza pública con la amenaza de que llegarían Las Águilas Negras para "ajusticiar a todos los cómplices de la guerrilla", con el propósito de hacer "limpieza social", además, con que si denunciaban estos hechos los iban a matar (Ccalcp, 2007).

Las Águilas Negras, lideradas por Juan Carlos Rojas Mora, alias *Jorge Gato*, mantuvieron un control predominante en la región entre 2005 y 2007, hasta su asesinato el 28 de diciembre de 2007. Para entonces, Los Rastrojos, grupo que ya hacía presencia en el occidente del país, se posicionó en la región, cooptando a los miembros de la estructura ya existente[313]. A diferencia de Las Águilas Negras, Los Rastrojos llegaron a Norte de Santander como guardia personal de Wilber Varela, alias *Jabón*, líder narcotraficante del cartel del Norte del Valle, que huyó a Venezuela para

312 El SAT de la Defensoría advertía en 2007 que era posible que la presencia se extendiera a área rurales y semirrurales de Ocaña y a ciertos tramos de las vías Ocaña – Ábrego – Cúcuta; Ocaña - Río de Oro- Aguachica; Ocaña - Convención, Ocaña - El Carmen y Ocaña-Teorama (Defensoría del Pueblo, 2007, página 5).

313 Se estima que las Águilas Negras existieron y accionaron hasta 2010, cuando fueron absorbidas por Los Rastrojos. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que, en 2013, un grupo de jóvenes de la zona rural de El Aserrío (Teorama) fue retenido momentáneamente por hombres armados que portaban camisetas alusivas a Las Águilas Negras, quienes les presionaron a entregar información sobre la presencia de guerrillas (Defensoría del Pueblo, 2014, páginas 12-13).

evadir a las autoridades y alias *Don Diego*, con cuyo ejército privado: Los Machos, libraba una guerra (Verdad Abierta, 2014, 31 de octubre)[314].

Durante 2008 y 2009, aparte de Los Rastrojos, también hicieron presencia Los Paisas, otro grupo criminal asociado al narcotráfico que copó las zonas que habían sido de influencia de Las Águilas Negras. En 2010, Los Rastrojos consolidaron una ventajosa alianza con Las Águilas Negras que terminó absorbiéndolas y les permitió proyectarse como la estructura predominante entre los GAPD en el departamento (CNMH, 2015e).

En el año 2011, se da el ingreso de Los Urabeños[315], que venían expandiéndose hacia el norte y el nororiente del país. Su ingreso a la región se relaciona con Carlos Andrés Palencia González, alias *Visaje*, antiguo subcomandante del Frente Fronteras de las AUC, quien se encontraba prófugo de la justicia[316]. Como una "guerra" o una "guerra a muerte" describieron las autoridades y otras fuentes la disputa por el control de las economías ilegales de la zona entre Los Rastrojos y Los Urabeños, que se ha mantenido durante los años y que a mediados de 2011 produjo masacres en el municipio de Villa del Rosario, en las cuales murieron al menos 10 integrantes de Los Rastrojos (Fundación Progresar, 2017, página 14)[317].

Los Urabeños lograron posicionarse en Puerto Santander y Cúcuta, municipios claves para lograr garantizar el tráfico de droga hacia Vene-

314 Tras la captura de *Don Diego* y la muerte de alias *Jabón* en Mérida (Venezuela) en 2008, se disolvió el Cartel del Norte del Valle y Los Rastrojos desaparecieron. Cuando exmiembros de las ya desmovilizadas AUC volvieron a las armas, Los Rastrojos resurgieron, esta vez bajo el liderazgo de los hermanos Comba.

315 También conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan Úsuga y nombrado recientemente por el Gobierno colombiano como Clan del Golfo.

316 Panfletos y grafitis anunciaron el traslado de Los Urabeños "hasta este rincón fronterizo del país para combatir y cumplir con nuestra misión" (Fundación Progresar, 2017, página 11).

317 *Human Rights Watch* refería en 2010 que a un año de la desmovilización del Boque Catatumbo habían sido asesinados 35 de sus exintegrantes y 55 habían sido capturados (Human Rights Watch, 2010). En años posteriores estas muertes y capturas se han seguido produciendo.

zuela y obtener el control del contrabando de la gasolina (Verdad Abierta, 2016, 25 de mayo), a la vez que alcanzaron una fuerte presencia en el municipio de Ocaña. Los Rastrojos, por su parte, se han concentrado en el área de frontera (CNMH, entrevista, hombre líder social, Cúcuta, 2017).

Para el 2016, Los Urabeños se habían impuesto sobre los demás grupos y tenían presencia considerable en la mayoría de los municipios del departamento, en particular en los principales centros poblados. Aunque esta estructura no se encuentra de forma permanente activa en el Catatumbo, sí despliega su presencia en momentos específicos en lugares que juegan un papel importante en la cadena del narcotráfico y en otras economías ilegales de la región, como han reseñado sus habitantes y lo refirieron medios de comunicación especializados al afirmar que "en los últimos seis meses, a raíz del aumento en los cultivos de coca y el cese al fuego de las Farc, los Urabeños se han fortalecido y buscan acercarse al Catatumbo" (Verdad Abierta, 2016, 25 de abril).

Además de estos tres grupos, en Norte de Santander se ha registrado la presencia y accionar de bandas delincuenciales identificadas como Los Canelones, Los Carteludos, Los Diablos y Los Cebolleros, que han controlado actividades de contrabando, microtráfico y extorsiones (Fundación Progresar, 2017); asimismo, el Comando Escorpión que, en febrero de 2011, profirió amenazas de muerte por medio de panfletos a diversos grupos sociales y supuestos colaboradores de las guerrillas (Defensoría del Pueblo, 2011) y, más recientemente, como producto de la fuerte confrontación entre Los Rastrojos y Los Urabeños, y del desmantelamiento de las ANS (Autodefensas del Norte de Santander Nueva Generación), surgió el EPN (Ejército Paramilitar Nortesantandereano) comandado por excombatientes paramilitares, antiguos miembros de Los Urabeños y bandas delincuenciales, dedicados al cobro de extorsiones y microtráfico (Fundación Progresar, 2017).

Estos distintos grupos "se han adecuado a la estructura tipo red, que flexibiliza su operatividad y facilita relaciones más fluidas con otras organizaciones similares o del mismo tipo" (MAPP/OEA, 2015, página 19) lo que implica, en la práctica, acuerdos, pero también rencillas y territorios vedados entre ellos (Fundación Progresar, 2017, página 12).

En el área metropolitana de Cúcuta y en sectores del Catatumbo también han hecho presencia "narcos duros", entre los que fueron referidos "Los Mellizos" y "Los Mexicanos", entre otros, sin cuyos intereses sobre la región es imposible comprender el accionar de los GAPD, como lo relata un estudioso de la zona:

> Incluso en algunos momentos cobraron mucha fuerza los grupos de los narcos. Los Pepes, Los Boyacos, que fueron los que canalizaron toda esta gente de autodefensa que estaba relacionada con temas de narcotráfico. Mandos de autodefensa que conocían rutas, seguridad en laboratorios, que tenían relaciones, terminaron con estos grupos de narcos. Estos grupos se pusieron al servicio de Los Rastrojos, Los Urabeños (CNMH, entrevista, hombre defensor de DD.HH., Cúcuta, 2017).

Los esfuerzos de las autoridades para contrarrestar la expansión de los GAPD han sido significativos. En 2007, se conformó en Norte de Santander un Cuerpo Élite de Búsqueda, integrado por 120 miembros del Ejército, la Policía, la Fiscalía, el DAS y el CTI, cuyo objetivo fue frenar la expansión de Las Águilas Negras (MAPP/OEA, 2007b, página 8).

El Ministerio de Defensa Nacional emitió la Directiva Permanente No. 14 de 2011, que estableció la Estrategia Nacional de lucha contra las bacrim; sin embargo, ante la capacidad de adaptación y flexibilidad de estas estructuras, la directiva fue reemplazada por la Directiva Permanente No. 15 del 22 de abril de 2016, que trazó nuevos lineamientos para caracterizar a las bacrim como GDO (Grupos Delictivos Organizados) y GAO,

según las características de cada uno. En la actualidad se constituye en la hoja de ruta de la política del Estado contra los GAPD, ha sido considerada insuficiente, en tanto, se enfoca más en el combate militar y menos en las condiciones sociales que han permitido su emergencia y continuidad.

La Fundación Progresar muestra que, según datos de la Policía Nacional, las autoridades capturaron, en el período 2005-2016 a 1.449 miembros de bandas criminales, grupos delictivos y GAO, el 86 por ciento de los cuales fueron capturados en el área metropolitana de Cúcuta (Fundación Progresar, 2017, página 27).

Aunque se han puesto en marcha estos esfuerzos y arreglos institucionales, los GAPD continúan haciendo presencia en la región y ejerciendo control y, en muchos casos, según información recogida por medios de comunicación escritos, Los Urabeños habrían contado con apoyo de miembros de la Policía nacional, lo cual produjo la captura de algunos efectivos en el área metropolitana de Cúcuta en los últimos meses de 2011 (El Tiempo, 2011, 2 de mayo). Por su parte, la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado consideraba a Los Urabeños como la organización "con más poder de corrupción dentro de las instituciones del Estado" y resaltaba que tan solo en 2014, el organismo había capturado a 27 servidores públicos por nexos con esta estructura (El Universal, 2015, 30 de marzo).

6.2.2. Control de las rentas ilegales

Aunque algunas personas de la región sostienen que la presencia de los GAPD está en directa relación con el control de rentas ilegales, en conversaciones con otros habitantes del Catatumbo y de Cúcuta y su

área metropolitana, así como en la revisión de fuentes secundarias, es posible constatar que, además, los GAPD han intervenido de manera significativa en la vida social e individual por medio de la promulgación de normas de comportamiento, amenazas, intimidaciones y reclutamiento forzado, entre otros. Líderes sociales de Ocaña manifestaron que la presencia de GAPD en la ciudad se registra en "los barrios más desprotegidos, donde se ha asentado la población desplazada" (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Ocaña, 2018).

Habitantes del Catatumbo asocian actos de violencia sexual contra mujeres y personas de sectores LGBT a miembros de los GAPD, en particular en el caso de Tibú y Ocaña. En El Tarra, fue referido un caso en el que a una muchacha "le dijeron: móntese en la moto y ella se montó y se fue. La sacaron del pueblo (...) y la iban a violar, sino que unos *manes* se dieron de cuenta y les hicieron unos tiros a los muchachos, pero no se supo quién fue y, presumiblemente, eran *los bacrines* o Los Urabeños que andan por ahí (CNMH, taller violencia sexual, Cúcuta, 2016).

Este tipo de agresiones se exacerba cuando es en contra de personas de sectores LGBT, que también padecen amenazas, amedrentamiento y desplazamiento forzado. El siguiente relato es de un hombre joven gay que vivió su infancia en Ocaña y que, buscando una mejor vida, se fue a trabajar a Cúcuta. En esta ciudad, siendo aún menor de edad, empezó a hacer un tránsito para asumir una identidad femenina, pero por los hechos descritos debió regresar a Ocaña y asumir de nuevo una identidad masculina para protegerse. Los perpetradores de este acto, cuenta, eran los mismos que cobraban "vacunas" a los bares, como lo había constatado en múltiples ocasiones:

> Salí del negocio donde yo estaba trabajando, era un bar y yo iba caminando y dos tipos se me pegaron al trote. Cuando eso yo me hice amigo de una pelada que trabajaba en otro bar y entonces

> ese día ella me dijo que fuera a buscarla a ese negocio. Entonces yo salí como a las cuatro de la mañana, porque esa hora era que yo salía. Iba llegando a un puente que hay ahí (...), entonces uno de los manes me jaló el bolso y me lo rompió todo y me tumbó al piso, entonces yo salí corriendo, cuando me salió el otro por el otro lado, (...) uno me cogió del pelo y me arrastró, me arrastró hasta ahí hasta abajo hasta un puente que hay ahí y me alcanzó a violar uno, uno de los manes me alcanzó a violar y me robaron, me dieron duro y había un celador que se dio cuenta de todo y no hizo nada (...). Y no, a mí me tocó irme porque ni la policía hizo nada, yo el reporte..., o sea, llegamos a un CAI[318] aquí, porque yo quedé inconsciente, yo no supe de nada y nos mandaron para El Zulia y ahí llamaron a mi mamá, porque yo era menor de edad y llamaron a mi mamá y a mi hermano mayor y nada, lo mismo. Ahí me embarcaron y me tocó irme así para Ocaña. Todo me pasó cuando yo vestía de mujer (CNMH, entrevista, hombre joven gay, Cúcuta, 2016).

De igual forma mujeres lesbianas han sentido el acoso y la violencia en su contra por parte de GAPD. En el taller de memoria con personas de sectores LGBT, una mujer de Ocaña mencionó cómo en esta ciudad tales grupos han hecho uso de listas de señalamiento y de amenazas en su contra, lo que les ha obligado a esconderse y, en muchos casos, a desplazarse: "ella [refiriéndose a su expareja] estaba viviendo en la finca porque en Ocaña habían salido los panfletos con el nombre de nosotras (...) y llegó a manos de la familia de ella, que: se van a matar a las lesbianas, a los marihuaneros y aparecía un listado" (CNMH, entrevista, mujer lesbiana, Cúcuta, 2016).

La Defensoría del Pueblo señaló en 2009 en Convención la aparición de panfletos de los GAPD que amenazaban a la comunidad con accio-

318 Centro de Atención Inmediata de la Policía.

nes violentas de "limpieza social" (Defensoría del Pueblo, 2009a) y se reportó la distribución de panfletos amenazantes "con supuestos llamados al buen ejemplo, a no consumir drogas y a la reconciliación", así como, amenazas e intimidaciones contra estudiantes y personas que laboraban en la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña (Defensoría del Pueblo, 2009b, página 5).

Liderazgos sociales también han estado bajo la mira de los GAPD en la región. Como ha sido denunciado por diversas organizaciones, las amenazas y asesinatos a líderes y lideresas (sobre todo aquellos que trabajan con víctimas del conflicto armado y que demandan la restitución de sus predios) y defensores de DD.HH. (CNMH, 2015a), lo cual ha ocasionado que, incluso, hayan tenido que salir del país para proteger su vida y la de sus familias (Defensoría del Pueblo, 2009c). Una dinámica que ha tenido un preocupante repunte en los últimos meses y que se abordará en el apartado final de este informe, sin duda ha sido dinamizada por los GAPD, en tanto estos prestan sus servicios de seguridad "al mejor postor" (CNMH, entrevista, hombre líder social, Cúcuta, 2017).

Además de estas agresiones, los asesinatos selectivos son una de las victimizaciones más referidas cuando se habla de los GAPD y su accionar en el departamento. Esta ha sido una dinámica que se ha insertado de manera preponderante en Cúcuta y en Ocaña y que continúa ocurriendo y genera terror entre habitantes de estas ciudades. Una mujer desplazada del Catatumbo que vive en Cúcuta compartió su percepción y la de tantas otras personas:

> [Yo pinté] una calavera porque lo que tenemos en Cúcuta es muertes, todos los días matan gente (...) todos los días encontramos muertos, recién matados, descompuestos, mujeres. Aquí en Cúcuta no sé por qué, pero mensualmente no dejan de matar de una a dos mujeres, eso es impresionante. Que nosotras sepamos, porque

> [hay] mucha gente que no sabemos (CNMH, taller con mujeres en situación de desplazamiento, Cúcuta, 2016).

La Defensoría del Pueblo alertó que los GAPD han llevado a cabo asesinatos disparando de manera indiscriminada contra grupos de personas, llegando a utilizar incluso "artefactos explosivos de alto poder y granadas" (Defensoría del Pueblo, 2009b), una práctica que se ha vuelto frecuente y parte estructurante de la vida cotidiana de habitantes en especial de Cúcuta y Ocaña.

Este complejo, cambiante y adaptable escenario de presencia de GAPD se constituye en un factor de riesgo para las comunidades del Catatumbo y de todo el departamento, sumado al aumento de los cultivos de coca, uno de los principales intereses de estos grupos en la región. Sus intereses y prácticas de amedrentamiento sumen a habitantes, en especial, a los urbanos en un clima de constante zozobra que, junto a la expansión y prácticas de control de las guerrillas del ELN y el EPL y sus dinámicas de confrontación con la fuerza pública, configuran las principales amenazas para la construcción de la paz en la región.

6.3. Disputas por la tierra y los territorios

A las dinámicas de reconfiguración de actores armados se suma, durante este período, el establecimiento y profundización de un modelo de desarrollo agroindustrial y minero energético para la región que, como lo describen personas que compartieron sus recuerdos, es de carácter excluyente y no garantiza a campesinos, campesinas, indígenas Barí y demás habitantes rurales, la existencia digna en sus territorios. Antes bien, este modelo pone en riesgo el acceso a los derechos a la tierra y al territo-

rio por parte de las y los catatumberos y ha generado, en particular en la zona del bajo Catatumbo, un preponderante proceso de transformación del paisaje y de descampesinización[319].

La puesta en marcha de este modelo tiene al menos dos componentes, por un lado, las profundas reconfiguraciones en el uso del suelo rural, por medio de la implementación del monocultivo de palma aceitera, la reactivación de la explotación de petróleo y la exploración de carbón, que en muchos casos ha coincidido con los territorios ancestrales del pueblo indígena Barí. Ha generado extraordinarias reconfiguraciones en el mercado de tierras, en el uso del suelo rural, en las dinámicas de seguridad y soberanía alimentaria, en la pervivencia cultural del Pueblo Barí y, en general, en las formas en que habitantes rurales del municipio de Tibú se relacionan con el territorio que habitan.

Por el otro, estas dinámicas han generado una serie de apuestas socioterritoriales de carácter regional, con fuertes lazos con organizaciones y movimientos a nivel nacional e internacional que, ante la amenaza del desplazamiento forzado, el despojo y el desarraigo, han ideado y puesto en marcha propuestas de ordenamiento del territorio. Estas, que incluyen la constitución de una ZRC, la instauración de territorios campesinos agroalimentarios, así como el saneamiento y ampliación del resguardo indígena Motilón Barí, se describirán más adelante.

319 Hace referencia a un proyecto de tipo político y económico apalancado por el Estado, a través del cual campesinos y campesinas han sido comprendidos e integrados al relato del Estado central. Se ha basado en una "marginalización negativa" de lo campesino, que ha impuesto un discurso según el cual las relaciones y temporalidades con la tierra y las concepciones de territorialidad campesinas son "ineficientes" o "subdesarrolladas". El proyecto de descampesinización se propone integrar a campesinos y campesinas a las dinámicas de los mercados nacional e internacional, convirtiéndolos en "empresarios del campo", produciendo la pretendida eficiencia y competitividad (CNMH, 2015c, páginas 30-33).

6.3.1. El cultivo de la palma

La historia de la palma de aceite[320] en el Catatumbo se remonta a los acuerdos producidos entre el Gobierno y los marchantes de 1998, cuya movilizaron obedeció a la exigencia por mejorar de sus condiciones de vida y por el cumplimiento de acuerdos de la marcha de 1996.

En 1998 se acordó la renovación de 3.000 hectáreas de cacao y realizar estudios de factibilidad para el desarrollo de plantaciones de caucho y de palma, que pudieran sustituir los cultivos de hoja de coca. En 2001, con el apoyo de la Usaid, se puso en marcha el cultivo de 1.000 hectáreas de palma, que beneficiaron 133 familias. Estuvo enfocado en habitantes de la zona de dos del municipio de Tibú, en particular del corregimiento de Campo Dos y veredas aledañas. De este modo, se inauguró el cultivo de palma que se ha mantenido y extendido de manera exponencial. Así relató los primeros años del cultivo de palma una habitante del corregimiento Campo Dos:

> Entonces el Gobierno propone cultivo de cacao y cultivo de palma. El proyecto lo habían enfocado hacia La Gabarra, allá no lo tomaron como propuesta. Vinieron a la parte organizativa que había en Campo Dos, que son JAC, hicieron la propuesta. Ahí sonaba y no sonaba; algunas personas quisieron profundizar sobre cómo era el proyecto, qué beneficios y qué cosas negativas producía, o el impacto ambiental y si era viable o no. Entonces se condensa y se logra consolidar después de varias reuniones, un proceso de 8 a 12 meses en la escuela Villanueva. Ahí nace Asogpados[321] y de

320 En este apartado, se usarán como sinónimos *palma de aceite, palma aceitera* y *palma*. Todos hacen referencia a la palma de aceite o palma africana (*Elaeis guineensis*).

321 Asociación Gremial de Productores de Palma de Campo Dos. Desde entonces, se han multiplicado estas asociaciones gremiales, todas con el nombre Asogpados, diferenciándose por números (en 2016 existía hasta Asogpados 10).

> ahí viene todo el proceso. Entonces ¿cómo nació esa empresa? Por personas voluntarias que quisieron erradicar cultivos ilícitos y cambiarse a un proyecto productivo; un grupo de personas trabajó con cacao y otros trabajamos con palma (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

No obstante, líderes sociales de la región han expresado que, para finales de los años noventa, en la zona de Campo Dos no había una significativa siembra y recolección de hoja de coca, como sí ocurría en la zona rural del corregimiento de La Gabarra (Mapa 18), distante unos 76 kilómetros de Campo Dos y que, antes bien, el proyecto se localizó en esta zona porque ofrecía las mejores condiciones climáticas y de mercado para su futura expansión:

> La zona de La Gabarra no es muy apta para el tema de la palma porque no es tan plano, no tiene tanta infraestructura, carreteras, por ejemplo, y allá había muchas dificultades de orden público. Cuando decían que sustitución de cultivos de uso ilícito, pues la zona de Campo Dos y Campo Tres no tenía muchos cultivos de coca. Incluso la gente se puso a sembrar por ahí unas matas para que los incluyeran dentro de las primeras familias que sembraron palma en esa zona (CNMH, entrevista, hombre líder social, Tibú, 2017).

Esta expansión en la zona de Campo Dos y aledaños ocurrió a partir de la desmovilización de los paramilitares del Bloque Catatumbo en diciembre de 2004. Este proceso se vio posibilitado y favorecido, por la existencia de un mercado de tierras desregulado y anómalo (Uribe, 2013) que, a su vez, es consecuencia de las prácticas de saqueo, robo y despojo de tierras, animales y bienes que perpetraron los paramilitares y produjeron un prominente vaciamiento territorial en vastas zonas del Catatumbo. Todo ello generó una profunda transformación en la estructura agraria local, que se vio reflejada en cambios en la dinámica de compraventa

de tierras, aumento en el índice de Gini de concentración de propietarios y, de manera más evidente, en la expansión del monocultivo de palma aceitera.

Durante los años que siguieron a la desmovilización de los paramilitares, se llevó a cabo en Tibú una masiva compraventa de tierras, entre las que se encontraban predios abandonados por personas desplazadas de manera forzada, que favoreció transformaciones en su uso y en la estructura de propiedad. Como lo describe Uribe, el despojo y vaciamiento paramilitar "resultó fundamental" para la reconfiguración del mercado de tierra rural en el municipio de Tibú[322], lo cual generó "de facto y sin restricción un mercado desregulado que transformó de manera formal las estructuras de tenencia y uso productivo de la tierra" (Uribe 2013, página 265). El contexto de conflicto y la confluencia de diversos actores armados en la región empujó la venta de predios rurales (CNMH, 2015b).

De acuerdo con datos del PPTP (Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada) de Acción Social, el valor por hectárea en ciertas zonas rurales del municipio de Tibú aumentó, entre 2005 y 2010, hasta en un mil por ciento en zonas donde se proyectaban cultivos tecnificados. A su vez, el PPTP registra que la compraventa fue el principal acto referente a transacciones sobre la tierra en el municipio de Tibú, entre 2005 y 2010. Al menos el 11,47 por ciento del total de los predios del municipio cambiaron de titular, el 3 por ciento de transacciones translaticias de dominio de bienes inmuebles estuvieron "asociadas o en cabeza de empresas de la agroindustria" (PPTP, 2010, página 144).

322 Los predios que agrupan el 50 por ciento de la superficie municipal iniciaron su tradición como baldíos, es decir, que "gran parte de la conformación inicial del municipio de Tibú proviene de los procesos de reforma agraria" (PPTP, 2010, página 145). Entre 1901 y 2012 se titularon 164.642 hectáreas de baldíos en el Catatumbo (CNMH, 2015b, página 39).

Las prácticas inhumanas del Bloque Catatumbo, descritas en el capítulo 4, conllevaron a que habitantes de Tibú transaran sus predios a precios muy por debajo del justo valor, lo que facilitó su adquisición por parte de compradores masivos, en muchos casos externos a la región[323]. Este es un proceso que habitantes de Tibú recordaron vívidamente porque muchos lo experimentaron en carne propia. Así caracterizó un docente del municipio:

> Aquí se compraron extensiones, hubo gente que compró, una sola persona, extensiones de tierra para el cultivo de la palma. Acá hay una vereda (...) donde solamente quedó una familia, de resto la compró toda una sola persona (...) para sembrar palma. Para mí eso es uno de los objetivos que tuvo esto, porque hubo la incursión paramilitar y aquí la tierra se desvalorizó completamente: fincas de cien hectáreas fueron vendidas hasta en diez millones de pesos, cuando hoy en día para usted ir a comprar una hectárea de tierra le piden tres millones de pesos por hectárea. Entonces, claro, la gente que tuvo que irse... lo que le dieran, lo que le dieran. Lo importante era poder sacar algo para poder abandonar la región (CNMH, entrevista, hombre docente, Tibú, 2016).

Como se ha descrito en el informe *Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo* (CNMH, 2015b), con base en sentencias de restitución de tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta del año 2013, el *modus operandi* que se puso en marcha con mayor frecuencia en las transacciones de tierras en Tibú consistió en encargar a comisionistas que identificaran a víctimas que se encontraban en situación de desplazamiento en Cúcuta y otros lugares del país, incluso aquellas que habían cruzado la frontera y se encontraban refugiadas

323 El CNMH, con base en datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, reseña que, entre otros, correspondió a Bioagroindustrial de Colombia Ltda. (1.111 hectáreas), Inversiones Palma del Oriente S.A. (525 hectáreas), Ganadería Puerto Rico Ltda. (770 hectáreas), Palmeros Afiliados de Colombia S.A.S (381 hectáreas) (CNMH, 2015b, página 171).

en Venezuela, y les ofrecieran por sus tierras un valor muy por debajo del precio justo. En muchos casos, jugó la angustia de propietarios por deudas contraídas con el Banco Agrario y el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) que estaban en mora a causa del desplazamiento (CNMH, 2015b, página 172).

El Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada de Norte de Santander, en cabeza de la gobernación del departamento, había ordenado en 2002 la protección colectiva de todos los inmuebles rurales abandonados o en riesgo de despojo del municipio de Tibú (en el marco de la Ley 387 de 1997). Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para contrarrestar la compra masiva de tierras, el Comité recibía varias solicitudes para la enajenación de predios, que en su mayoría se justificaban "para un proyecto de palma" (CNMH, 2015b, páginas 169-170).

El carácter externo de la mayoría de los empresarios de la palma es un elemento que emergió de manera continua en los relatos de habitantes de la región. Las personas consultadas se identifican como pequeños productores o pequeños palmeros, mientras señalan que los dueños de las propiedades más grandes son externos a la región. En su relato, un habitante del corregimiento San Martín de Loba (Sardinata) narró que: "La mayoría de palmeros acá en el corregimiento somos pequeños productores, pero sí hay algunos grandes terratenientes. Por ejemplo, la vereda de Miraflores de donde yo soy, donde yo vivo, la mitad de la vereda es de terratenientes. Podríamos hablar que la mitad de la vereda es de grandes empresarios que solamente tienen palma allí en esa parte" (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

A los terratenientes, además, se les considera como agentes con muy poco o ningún interés en el bienestar de la región. Desconocedores de las dinámicas propias del territorio donde crece la palma de su propiedad,

generan daños considerables a fuentes hídricas y bosques, pues su interés principal en esta zona del Catatumbo es económico:

> Esas gentes que vienen a comprar esas inmensidades de tierra no viven en la zona. Son empresas que viven en Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá. Son empresarios grandes que no les interesa que el Catatumbo viva, o sea, yo cuando hablo de que el Catatumbo viva me refiero a otras cosas, por ejemplo, que el Catatumbo tenga agua, que el Catatumbo tenga árboles, que el Catatumbo tenga fauna, que el Catatumbo tenga flora, porque hay una riqueza tan inmensa, pero nosotros la estamos acabando; cuando digo nosotros me refiero a todas esas empresas grandes que están comprando esas cantidades de tierras sin ser de la región siquiera. El otro tema es que ellos cuando vienen, en una cava grandota traen las cervezas, el agua, el güisqui. Ellos no pueden consumir agua de la zona de la que consumimos nosotros porque se enferman. Entonces a ellos no les importa el Catatumbo, les importa por el dinero, por el lucro de la plata, enriquecerse cada vez más y no les importa acabar con lo que hay (CNMH, entrevista, hombre líder comunal, Tibú, 2016).

Esta compleja dinámica ha profundizado la inequidad en el acceso y tenencia de la tierra en la zona del bajo Catatumbo. De acuerdo con la información del *Atlas de Distribución de la Propiedad Rural en Colombia* del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) (2012), los índices Gini de tierras y propietarios[324] para el municipio de Tibú muestran un aumento significativo a partir del año 2010, en particular para el caso de propietarios. Así, el Gini de tierras pasó de 0,53 en el 2000 a 0,67 en 2011; por su parte, el Gini de propietarios pasó de 0,55 en el 2000 a 0,79 en 2011, lo que indica la profundización de la inequidad en el acceso y propiedad de la tierra en el municipio.

324 Indicador que mide la desigualdad en la distribución. Va de 0,0 para igualdad total hasta 1,0 máxima desigualdad.

Entre 2002 y 2009, el uso del suelo en Tibú se transformó. Según datos del PPTP (2010), uno de los principales cambios corresponde a la disminución en 14.506 hectáreas de la cobertura en bosque natural y el declive en 2.172 hectáreas del área destinada a cultivos transitorios (arroz, yuca, maíz, plátano); por el contrario, se incrementaron los cultivos de palma de aceite y los pastos manejados en 30.012 y 6.077 hectáreas, respectivamente. Con respecto a la palma, el suelo destinado a su cultivo y a la producción del fruto (corozo) ha continuado en aumento. Según datos de Fedepalma (Federación Nacional de Cultivadores de Palma), en 2016 se destinaban 15.224 hectáreas al cultivo en el departamento de Norte de Santander[325] (Fedepalma, sf).

La dinámica de expansión de la palma ha sido facilitada por el modelo de alianzas estratégicas, en el cual se asocian pequeños y medianos propietarios –"socios estratégicos"– con un "socio comercial", esto es, un empresario agroindustrial. Este último es quien apalanca la consecución de recursos económicos para la puesta en marcha de la siembra y producción de la palma en la tierra de propiedad de los pequeños y medianos productores, quien suministra las semillas, fertilizantes y la asistencia técnica. Por su parte, los asociados se comprometen a vender el corozo, en exclusividad, para que este sea procesado en la planta extractora de propiedad del empresario agroindustrial, así como responder a tiempo con las obligaciones financieras asumidas con los bancos[326].

La palma en Tibú es el único producto que cuenta con una cadena de producción, asistencia y comercialización totalmente asegurada. Como

325 Incluye a los municipios de Cáchira, Cúcuta, El Zulia, La Esperanza, Sardinata y Tibú, donde existen cultivos de palma. En el caso del Catatumbo, las principales plantaciones se localizan en la zona rural de los corregimientos de Campo Dos y San Martín de Loba (Sardinata), y se ha extendido a predios ubicados a los lados de la vía que conduce de Tibú a La Gabarra.

326 Encuentre una descripción del modelo de "alianzas estratégicas" (Verdad Abierta, 2015, 15 de enero).

lo expresó un dirigente gremial de la zona: "ha sido el único proyecto que ha sido bien concebido en la región, que tiene toda la cadena de valor asegurada, que eso es lo que ha hecho que de pronto no sean exitosos los proyectos, que no se piense bien desde lo que se produce hasta cuando se procesa o se comercializa" (CNMH, entrevista, hombre adulto palmero, Tibú, 2016).

El cultivo de la palma ha generado empleo y, en muchos casos, mejorado las condiciones de vida de pequeños y medianos propietarios. Esta es una realidad innegable para personas de esta zona del Catatumbo que se han asociado e invertido recursos y esfuerzos en la palma. Al respecto, su cultivo fue visto en muchos casos como la única opción que permitiría hacerle frente a las precarias condiciones económicas después de la desmovilización de los paramilitares: "la palma llega en un momento en que esos productos no valían nada. Hay una crisis fuerte porque había muchos productos alimentarios que no valían nada: la yuca, el limón, el ganado" (CNMH, recorrido territorial 7, Tibú, 2016).

En ese sentido, no es el cultivo *per se* sino el modelo de asociaciones productivas, ligado al carácter de monocultivo que impone la palma aceitera, lo que es considerado por algunos habitantes de la región –dedicados o no al cultivo de la palma– como el factor principal que les pone en enorme desventaja, como lo expresó un habitante de Campo Dos:

> El modelo de la palma ¿qué pudiera haber hecho el Gobierno con nosotros? Bueno, asociarnos, sí, pero habernos dicho: aquí está la plata para los cultivos, pero aquí también está la plata para que la planta extractora sea de ustedes y no traernos a otro tipo que sin tener una palma sea el mayor accionista de esa planta extractora. Porque si vamos a ver, si llegamos al 20 por ciento de esa planta extractora es mucho y somos los que ponemos toda la materia prima, los pequeños productores de palma (CNMH, entrevista, hombre adulto mayor, Tibú, 2016).

Este dinámico cultivo de la palma en Tibú ha traído consigo una serie de transformaciones que se evidencian tanto a nivel de lo cotidiano como a nivel estructural. Ha reconfigurado el territorio y las relaciones que catatumberos y catatumberas sostienen con la tierra, lo que ha conllevado a que en esta zona del Catatumbo sus habitantes pierdan el sentido de qué es ser campesino, como lo expresó un líder comunal de Campo Dos.

En primer lugar, la expansión de la palma en la zona del bajo Catatumbo ha puesto en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de sus habitantes. Como mostró en el capítulo 2, esta era una zona donde se producía comida en abundancia y donde sus habitantes se dedicaban al cultivo y comercialización de productos como yuca, arroz, plátano, cacao, una amplísima variedad de peces, ganado vacuno, entre otros. El monocultivo de palma ha transformado este contexto:

> El proyecto de la palma me da pena decir, pero algo bien interesante y es que nos hemos dedicado mucho al cultivo y por eso vemos solamente palma en todas las veredas, pero no vemos otros cultivos, por ejemplo, como el cacao, el plátano, la yuca, el arroz, como otras cosas que son muy importantes y eran muy importantes para este corregimiento. Aquí se cultivaba mucho la yuca, el plátano, el arroz, el cacao (...) inclusive hasta la misma ganadería, porque es que hay fincas que eran ganaderas y hoy son palmeras (CNMH, taller de memoria 1, Sardinata, 2016).

Por otro lado, habitantes del bajo Catatumbo identificaron los impactos del cultivo de palma sobre las fuentes hídricas y la fauna. En particular, se hizo mención del alto consumo de agua de las plantas, aproximadamente 20 a 30 litros de agua al día por cada una. Para lograr hacer frente a esta demanda, cultivadores de palma -los grandes propietarios- han llevado a cabo drenajes de caños y siembras hasta los límites de ríos y quebradas, con el fin de aprovechar al máximo el terreno para la siembra y expansión del cultivo, lo cual genera afectaciones en la zona, además,

de estar prohibido por las autoridades ambientales. Algunos habitantes de Campo Dos atribuyen a esta dinámica los efectos negativos que han tenido con las recientes sequías registradas en Tibú:

> Dumian Agroindustrial tiene una finca, nos compró una finca... donde nos nacían unas aguas. Llegaron con unas maquinarias buldócer y otras máquinas que acabaron con todo: toda la vegetación, todos los arbolitos los tumbaban y los arrumaban a los caños y nosotros vivimos a la parte de abajo y nos tocaba tomarnos toda esa agüita así toda contaminada. Entonces son cosas que decimos: no, aquí hay que denunciar (CNMH, entrevista, hombre líder comunal, Tibú, 2016).

El drenaje de fuentes hídricas, así como la deforestación de bosques para la siembra de más palma, ha tenido también un impacto negativo en la fauna existente en zonas de cultivo. A su vez, las grandes plantaciones de palma producen ecosistemas homogéneos que no ofrecen las condiciones para que mamíferos, aves e insectos subsistan:

> Acá en La Catorce acabaron esas nacientes tan bonitas donde había los paticos, esos gallitos, esos animalitos tan bonitos, los pescados. Eso lo canalizaron, lo volvieron pedazos (CNMH, taller de memoria, Tibú, 2016).

> Después de que el cultivo crece es tan homogéneo que no permite esa diversidad para que los animalitos puedan vivir en ese medio, además estará ocupado con personas que están en la recolección del fruto, entonces perturban la estadía de cualquier clase de fauna que pueda vivir allí (CNMH, entrevista, hombre exfuncionario, Tibú, 2016).

Las dinámicas de despojo y abandono de tierras y territorios en zonas rurales de Tibú van más allá de la pérdida de derechos legales sobre un

bien material. Estas han engendrado a su vez "formas sostenidas, ordinarias y legitimadas de despojo" (Ojeda, 2017, página 22), que tienen maneras particulares de concretarse en la vida diaria, dándole forma a un proceso de descampesinización en esta zona del Catatumbo:

- Persistente presión sobre habitantes de Tibú para dedicarse únicamente al cultivo de palma, o a expandir el ya existente, puesto que es el único bien cuya cadena de mercado se encuentra asegurada.
- Creciente incapacidad y desincentivo para producir y comercializar alimentos, pues el énfasis está puesto en sostener la productividad de la palma y responder a las obligaciones financieras que sostienen el modelo de asociaciones productivas.
- Imposición de la economía de la palma como única opción laboral para habitantes de esta zona, quienes se ven empujados a vender su fuerza de trabajo en los distintos eslabones de la cadena palmera (en particular, muchos jóvenes se emplean como recolectores del corozo).
- Prohibición de usar y disponer de fuentes hídricas -como lo ilustró en su testimonio el habitante de Campo Dos-. En general, la transformación de la relación entre humanos, plantas y animales.
- Prohibición de tomar un camino o atajo que se encuentra ahora en un predio de propiedad privada debidamente alambrado/señalizado.
- Rompimiento de relaciones vecinales de tipo campesino, como lo expuso un habitante de Campo Dos:

> Entonces, que el vecino no puede llegar a mi parcela en chanclas y, automáticamente no puede entrar por seguridad, son reglamentos de seguridad para la certificación que no pueden sin casco, lo atiendo ahí afuerita, no me entre. A las personas no las puede entrar, si no llevan botas punta de hierro, es decir, la norma dice que no deje entrar. Entonces, lo que uno ve ahorita como acción comunal, que nos tiene preocupados es hasta dónde nos puede llevar esa certificación de la palma a ser vecinos comunales pero

> dispersados (...) lo que se está viendo es que nos está separando cada día más. Porque si yo llego a su casa, a pesar de ver los letreros y usted me dice: ay no, no tiene casco, no pueden entrar, automáticamente eso me aleja del vecino y me dice: bueno ¿ese señor qué? (...) Entonces uno dice: ahorita, puede ser muy poco el efecto que tenga, pero a largo plazo puede ser muy fuerte, más que todo de un rompimiento de un tejido social de la amistad, del vecino, del hermano (CNMH, entrevista, hombre líder comunitario, Tibú, 2016).

Las transformaciones en el mercado de la tierra y en sus usos productivos descritos han vulnerado el derecho de las víctimas al retorno y a la restitución material y jurídica de sus tierras (CNMH, 2015b, página 277), poniendo en vilo el acceso a sus derechos a la reparación material y simbólica y a la no repetición. A la par, este proceso ha revertido políticas estatales previas, tales como la adjudicación de baldíos que, en Tibú, tuvo especial relevancia. De tal modo que, como afirma Uribe, los incentivos gubernamentales a la expansión del cultivo de palma en esta zona del Catatumbo, en un contexto como el descrito, puede interpretarse como una validación del modelo de concentración de tierras y, en últimas, legitimar la expulsión-exclusión de la población rural campesina (Uribe, 2013, página 79).

En síntesis, como ha sido elaborado por Ojeda, el vaciamiento y el despojo de bienes y de territorios que ha tenido lugar en la zona del bajo Catatumbo "está asociado a la pérdida de autonomía". Ello, en últimas, ha alterado de manera definitiva la capacidad de campesinos, campesinas e indígenas Barí "para reproducir la vida" (Ojeda, 2017, página 34), configurando un proceso de descampesinización que continúa profundizándose en la región.

6.3.2. Disputas por el subsuelo: petróleo y carbón

Recientes estudios y prospecciones pusieron de presente que el Catatumbo (en particular la zona media y baja) posee enormes reservas (probadas y potenciales) de petróleo y carbón, lo cual se ha convertido en una de las banderas del modelo de desarrollo agroindustrial y minero energético que se ha puesto en marcha, con consecuencias adversas para la pervivencia física y cultural del Pueblo Barí y de la vida campesina.

La creación de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) en 2003 reactivó las actividades de sísmicas en la región, así como la recuperación de otros pozos (Puerto Barco - Río de Oro) y la posibilidad de nuevas concesiones (CNMH, 2015d, página 274; Ordóñez, 2007). De acuerdo con mediciones recientes, las reservas probadas (que ascienden a 17 millones de barriles de petróleo equivalente) y probables (102 millones de barriles de petróleo equivalente) en la cuenca del Catatumbo aportan el 2 por ciento de las reservas totales del país (Conpes, 2013, página 14).

Además, el Catatumbo cuenta con una reserva potencial de carbón de más de 340 millones de toneladas (UPME, 2005, página 33), en una zona que abarca parte de los municipios de Tibú, Sardinata, El Tarra, Teorama y Convención, en lo que podría convertirse en la explotación a cielo abierto más grande en el país después de El Cerrejón (CNMH, 2015d, página 275).

Esta apuesta se ha visto materializada, entre otras, en la concesión de títulos mineros y la exploración en manos de empresas y empresarios del sector minero energético del país y del extranjero. Según datos del PPTP, para 2010 el 26,84 por ciento del municipio de Tibú estaba ti-

tulado para minería de carbón y, el 41,48 por ciento en solicitud (PPTP, 2010, página 144).

Los habitantes del Catatumbo le temen a la reproducción de un modelo extractivista que, como se mostró en el capítulo 1, se impuso con violencia en la región durante las primeras décadas del siglo XX. Como entonces, catatumberas y catatumberos reconocen los intereses económicos que guían esta apuesta minero-energética y las pocas posibilidades de que sus dividendos redunden en la construcción de condiciones de vida dignas para la región. Por su parte, en el caso de los Barí el proyecto petrolero de inicios del siglo XX provocó una violencia sin límites y la extinción sin precedentes en su pueblo, disminuyendo casi en un 70 por ciento su población y vulnerando, para siempre, lugares, prácticas y relaciones ancestrales.

Un caso en particular evidenció la amenaza que el modelo de desarrollo minero-energético impone a este pueblo indígena. Entre las actividades de reactivación de la exploración y explotación petrolera, Ecopetrol definió el área de perforación exploratoria Álamo 1 en jurisdicción del municipio de Tibú, e inició actividades de prospección en 2002. Desde entonces, los Barí dieron a conocer que estas actividades estaban teniendo lugar en terrenos ancestrales que, además pertenecen al Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, y que había serias inconsistencias en los estudios ambientales con los cuales se iba a solicitar la respectiva licencia ambiental (CConst, T-880/2006).

Estos terrenos, ubicados también en territorio de Reserva Forestal Serranía de los Motilones, estaban protegidos a través de la Resolución No. 145 del 24 de julio de 1967, en la cual el Incora y el Ministerio de Agricultura dispusieron cambiar la destinación de una parte de la reserva para llevar a cabo una colonización especial, en donde se establecerían solo indígenas Barí.

Además, los Barí recalcaron que los ministerios del Interior y de Justicia negaron la existencia del Pueblo Barí y del bohío Socbacayra para llevar a cabo las actividades petroleras, ignoraron que allí se encontraban las comunidades Bacuboquira e Ishtoda y que en este territorio indígena estaba haciendo presencia la fuerza pública (Ñatubaiyibarí, 2018).

Por medio de Asocbarí (Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia), los Barí interpusieron una demanda ante la Corte Constitucional que a través de la sentencia T/880 del 2006 resolvió en el primer punto: ordenar a Ecopetrol detener las actividades exploratorias en el Pozo Álamo I y, en el cuarto: ordenar al Ministerio del Interior en su Dirección de Asuntos Étnicos llevar a cabo un procedimiento de consulta previa con este pueblo indígena, poniendo por delante los derechos de los Barí (CConst, T-880/2006). Ello estuvo acompañado de marchas a los principales centros urbanos (Tibú y Cúcuta), en una acción que, hasta ese momento, no había sido usual para el Pueblo Barí:

> En esa época, en el 2006, el pueblo Motilón Barí convocó a hacer la primea marcha a las ciudades, a la ciudad de Tibú y a Cúcuta. El pueblo Barí nunca era partícipe de estas acciones, pero esto incentivó a que la comunidad Barí se organizara y se hiciera partícipe de las acciones jurídicas y legales, donde la Corte Constitucional reconoce que Sogbakaira es un punto ancestral del pueblo Barí (CNMH, entrevista, hombre líder Barí, , resguardo Motilón Barí, 2016).

Marcha cultural en el municipio de Tibú el 12 de octubre de 2006, en el marco de la cual más de mil Barí colocaron tres placas que indicaban lugares donde existieron bohíos ancestrales antes de la implantación de la industria petrolera. Foto cortesía de Ñatubaiyibarí.

Con respecto a las reservas de carbón en la zona del bajo y medio Catatumbo, los Barí y habitantes de las zonas han expresado de forma reiterada una profunda preocupación por su magnitud. En primer lugar, se trata de una serie de dinámicas que son desconocidas para la gente de la región, quienes en muchas ocasiones expresaron que la información oficial sobre las reservas es deficitaria y que tampoco pueden acceder a información certera sobre las transformaciones que para la región conllevaría la exploración y explotación.

Además, se teme por los efectos medioambientales que un proyecto de esta envergadura podría ocasionar en una región que cuenta con amplias

riquezas hídricas y de fauna y flora. Así narró un habitante de Campo Dos el complejo panorama frente a la expansión de los intereses carboníferos sobre la región:

> Hoy, si la explotación se llega a dar en La Gabarra: ¿cuáles son los primeros que van a sufrir? Los Motilones de La Gabarra, los indígenas, porque todo su potencial de riqueza de carbón –yo no soy estudioso en eso, solamente he escuchado– dicen que esa mina es inmensa y está en toda la zona de los Motilones Barí de La Gabarra. Y si el Gobierno llega a hacer esa exploración a cielo abierto, eso queda convertido en un desierto. Entonces el río Catatumbo muere, el río Tibú muere, el río Sardinata muere, el río Nuevo muere y parte del río Zulia también muere (CNMH, entrevista, hombre líder comunal, Tibú, 2016).

La apuesta por un modelo de desarrollo agroindustrial y minero energético en la región ha estado acompañada, además, de la activación y/o continuación de una serie de megaproyectos de infraestructura para apalancarlo, conectando a la región con los principales mercados internacionales (CNMH, 2015d). Con énfasis, líderes de la región hicieron referencia al proyecto carreteable Tibú-El Tarra-Convención-La Mata (en Cesar), que se asocia con los intereses de llevar la producción carbonífera del Catatumbo a la Costa Caribe y, de allí, a los mercados internacionales. Entre otros, estas obras de infraestructura se refieren a:

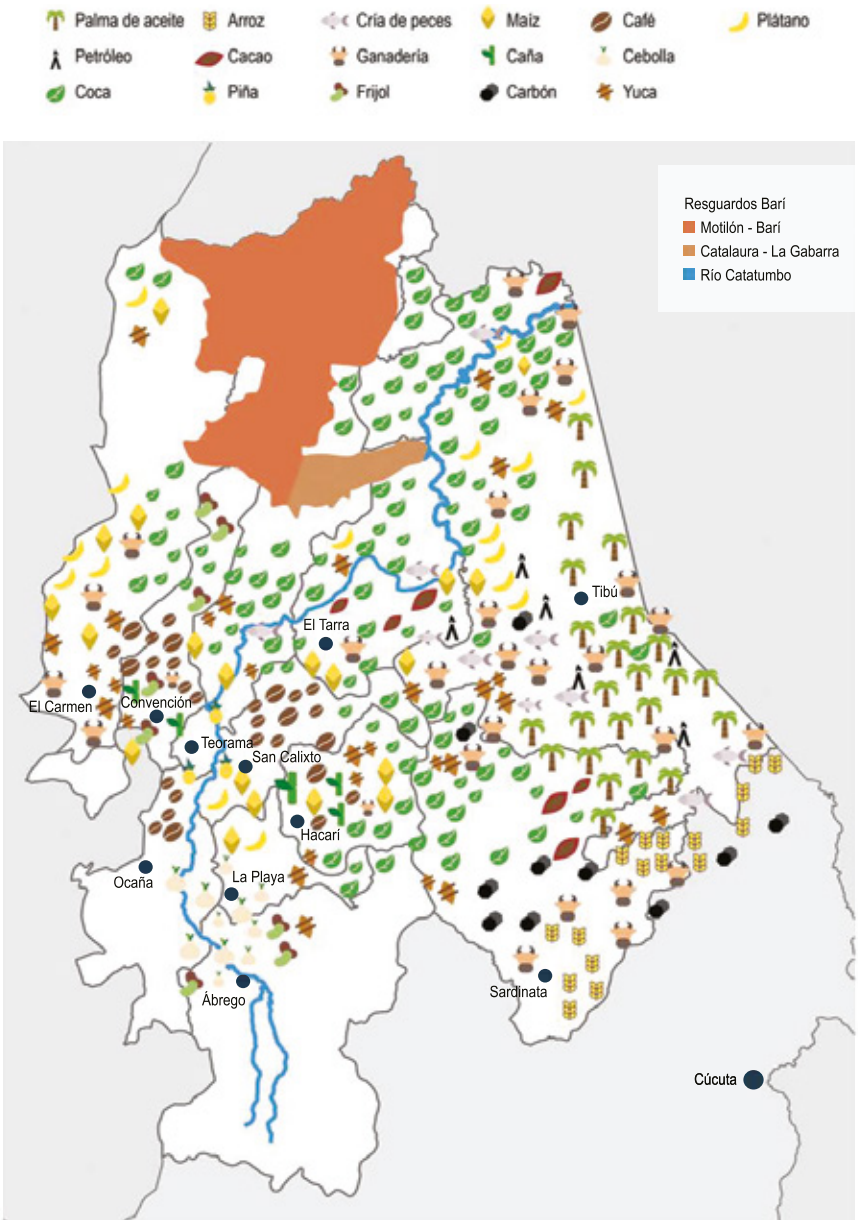
> Zona de Integración Fronteriza Binacional; oleoducto transandino Venezuela-Colombia-Tumaco; extensión del gasoducto colombo-venezolano Antonio Ricaurte hacia Centroamérica; proyecto corredor vial Quito-Buenaventura-Bogotá-Caracas y mejoramiento del sistema de conectividad de los pasos de frontera de la IIRSA[327] (CNMH, 2015d, páginas 276-277).

327 Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana de los países de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas).

Así las cosas, la expansión del monocultivo de la palma, así como las actividades de producción y exploración minero-energética han generado una profunda transformación en la región, en términos del uso productivo del suelo, de la relación de sus habitantes con la tierra y sus concepciones sobre el territorio, estableciendo nuevas amenazas a la pervivencia física y cultural del Pueblo Barí.

Construido con base en los ejercicios de los talleres colectivos de memoria, el siguiente mapa recoge las principales transformaciones que ha tenido el uso del suelo en el Catatumbo. Como es posible identificar, en particular en la zona del bajo Catatumbo se está llevando a cabo un prominente proceso de descampesinización. En contraste con los paisajes y dinámicas descritas en el capítulo 2, asociados a la abundancia de comida y especies de fauna y flora, en la actualidad la multiplicación del monocultivo de palma, coca y proyectos de explotación minero-energética han transformado de manera definitiva las relaciones de campesinos, campesinas e indígenas Barí con su territorio.

Mapa 24. Usos recientes del suelo en la región 2016



Fuente: Elaboración propia con base en ejercicios de cartografía social en talleres colectivos de memoria, 2016.

La puesta en marcha de este modelo ha generado profundas disputas frente a una concepción del desarrollo enfocado en la explotación de recursos y en la conectividad con mercados internacionales, que atenta y vulnera los derechos de campesinos, campesinas e indígenas a la tierra y al territorio. La constante amenaza de una nueva dinámica de desplazamiento forzado, abandono y despojo de bienes, esta vez en función del nuevo modelo de desarrollo, sumada a las cicatrices de una guerra incesante en el Catatumbo y una marginación de larga data, han engendrado a su vez un proceso de resistencia por parte de habitantes de esta región quienes, desde diversas orillas y, en ocasiones, con elementos en tensión, han gestionado y puesto en marcha apuestas por la pervivencia y la vida digna en el territorio

6.4. Renace el Catatumbo

En el Catatumbo ha habido una insistente persistencia por la vida y la dignidad. Aún en condiciones de profunda adversidad, marginamiento, débil presencia del Estado, zozobra y control armado, e imposición de un modelo y actividades económicas que afectan formas de vida y aspiraciones de habitantes de la región, se han movilizado, creado organizaciones y, reactivado, procesos comunitarios en busca de una existencia digna en sus territorios.

Como lo expresó un defensor de derechos humanos, este es un acumulado que existe en la región y que debería apalancar procesos más efectivos de interlocución entre el Estado y la sociedad civil en la formulación de planes y políticas públicas a implementarse en la región: “Aquí ha habido experiencias (…) interesantísimas de cómo hacer las cosas (…) nosotros tenemos ese valor agregado, ese acumulado” (CNMH, entrevista, hombre defensor de DD.HH., Cúcuta, 2017).

En este primer segmento se describen las cuatro apuestas de organización social que han emergido o se han fortalecido en el Catatumbo luego de la salida de las estructuras paramilitares. Procesos que son apuestas de carácter regional, que trascienden los límites veredales o municipales y se embarcan en pensar e imaginar la región en su conjunto. En ese sentido, se trata de organizaciones socioterritoriales que emergen por una reivindicación alrededor del territorio y su gestión.

Aunque estas organizaciones divergen en algunos elementos, en otros confluyen: i) evidencian las condiciones de marginación y estigmatización que han recaído sobre la región y sus habitantes y que reproducen ciclos de violencia; ii) demandan una participación real, efectiva y concertada de las comunidades en la definición de planes y proyectos; iii) establecen la capacidad existente en el Catatumbo para proponer y poner en marcha formas de gestión y administración del territorio que estén más cercanas a los intereses y capacidades de sus habitantes y iv)cuestionan y señalan los efectos adversos del modelo de desarrollo agroindustrial y minero-energético que ha descampesinizado a la región y amenazado la pervivencia física y cultural del Pueblo Barí.

El Cisca nació en medio del control paramilitar. Como se vio en el capítulo 4, fue en el marco del desplazamiento masivo de población hacia la selva en reacción al ingreso paramilitar de 2002, que se dan los gérmenes de esta organización social. Les movía el interés por romper "el cerco paramilitar" que se les había impuesto. En diálogo con ONG de DD.HH. y con apoyo de diversas organizaciones internacionales, se llevó a cabo el Encuentro Comunitario del Catatumbo "Integración, Vida y Territorio", del cual emergió el Cisca como un proceso encaminado a "defender la región, defender la vida, defender el territorio" (CNMH, entrevista, hombre líder social, El Tarra, 2017).

Un año después, también en medio de los cercos impuestos por la confrontación armada, en particular el desplazamiento forzado producido por la operación militar Fortaleza II, surgió la Ascamcat, inaugurada en 2006 en el corregimiento San Pablo (Teorama).

Estas apuestas socioterritoriales se sumaron a la ya existente Asocbarí, creada en 1978 para exigir los derechos del Pueblo Barí al territorio, a una lengua propia y a una identidad como pueblo indígena, así como liderar la interlocución entre los Barí y el Gobierno municipal, departamental y nacional. Esta organización cambió su nombre en 2010 a Asopbarí (Asociación Pueblo Barí de Colombia), para establecerse desde 2012 como Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí (Ñatubaiyibarí).

Un elemento entrelaza estas apuestas que convergen en la región: las tres reconocen que su surgimiento (para el caso del Cisca y de Ascamcat) y configuración actual (Ñatubaiyibarí), recogen y potencializan apuestas y demandas sociales previas que habían tenido lugar en la región, como se evidenció en los capítulos 1 y 2. En ese sentido, el Cisca y Ascamcat se reconocen como una continuación de procesos comunitarios interrumpidos por la guerra, cuyos orígenes se remontan a los años ochenta.

Tanto las condiciones de marginamiento, exclusión e imposición de un modelo de desarrollo en las que ha transcurrido la vida en el Catatumbo, como los efectos del conflicto armado en esta región, han movilizado a estas organizaciones a idear, proponer y demandar la puesta en marcha de diversas propuestas de ordenamiento socio-territorial que les garanticen a las y los catatumberos la permanencia en el territorio, el desarrollo de una vida digna y la construcción de su identidad colectiva como campesinos e indígenas. Estas formas de ordenamiento, sin embargo, se sobreponen en la región, son divergentes y, en ocasiones, generan tensiones entre sus líderes.

En el caso del Cisca, su propuesta organizativa gira en torno a "la integración social del Catatumbo alrededor de la construcción del territorio campesino agroalimentario, dotado de un plan de vida como alternativa al desarrollo en la región" (CNMH, entrevista, hombre líder social, El Tarra, 2017). A la par, su apuesta tiene como objetivo el reconocimiento político del campesinado y de sus derechos territoriales. En ese sentido, esta organización propone la figura de los territorios campesinos agroalimentarios, que hace parte de una apuesta nacional liderada por el CNA (Coordinador Nacional Agrario), que busca proteger los sistemas ecológicos presentes en los territorios y las economías campesinas que allí tienen lugar.

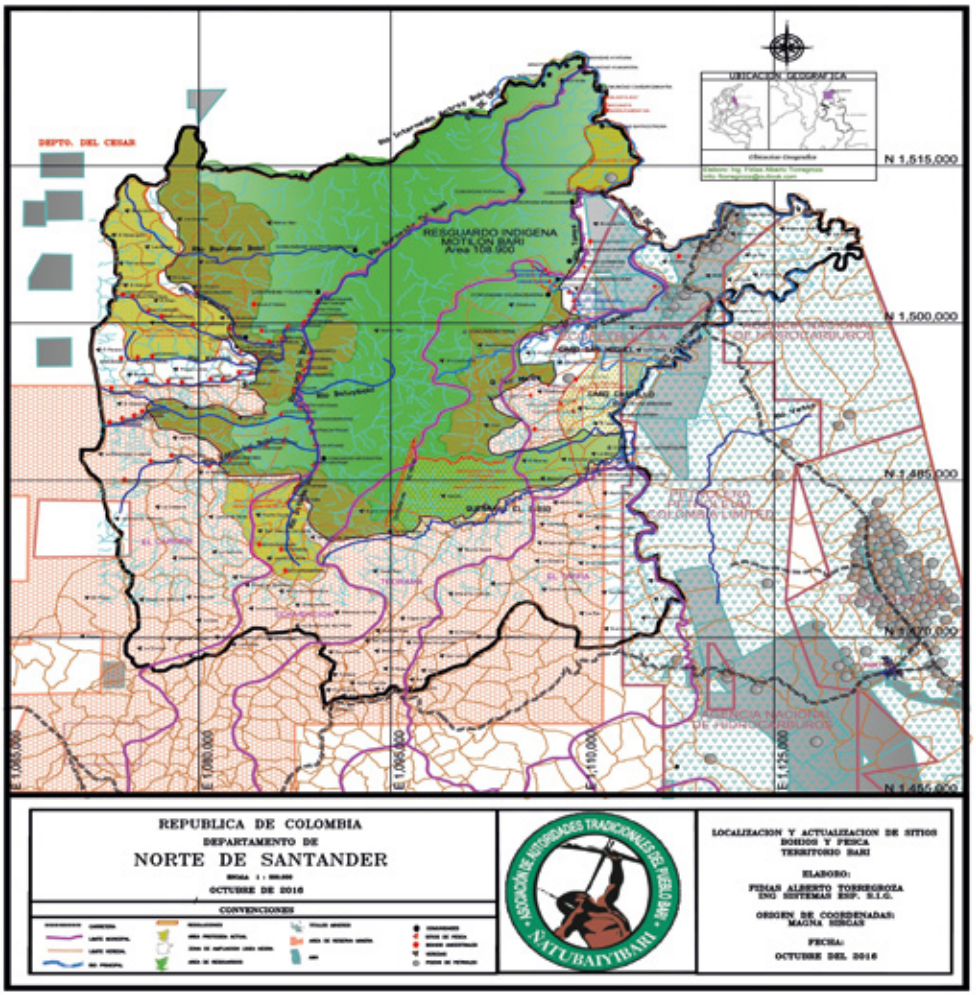
La propuesta de Ascamcat gira alrededor del reconocimiento y puesta en marcha de la ZRC en la región (contemplada en la Ley 160 de 1996 y el Decreto 1777 de 1996), como una forma de gestión y administración del territorio que "vemos como la oportunidad para los campesinos de tener su pedazo de tierra (...) pero también es una cortina de resistencia para las multinacionales avanzar en el tema de explotación minera a gran escala" (CNMH, grupo focal Ascamcat, Cúcuta, 2017). La del Catatumbo y otras ZRC confluyen en la Anzorc (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina).

El tejido organizativo en la región también está conformado por el MCP (Movimiento por la Constituyente Popular), que hace parte de la Asonalcam (Asociación Nacional Campesina y Agraria), que se fortaleció en la zona del alto Catatumbo a partir de 2014. El MCP se propone en esencia la gestión y el fortalecimiento de iniciativas y proyectos productivos de importancia para habitantes de las áreas rurales de esta parte de la región.

En el caso de Ñatubaiyibarí, reivindica en el presente la delimitación, saneamiento y ampliación de los resguardos, para consolidar lo que denominan la línea negra, o el reconocimiento de su territorio ancestral. Para ello, ha sido necesaria la ubicación y el registro de los bohíos an-

cestrales, que lo demarcarían, por lo cual el Pueblo Barí ha venido realizando en los últimos años un laborioso trabajo de ubicación de estos bohíos, producto del cual se elaboró el siguiente mapa que los ubica. Esta referencia cartográfica permite comprender el tamaño del área que están solicitando para la ampliación de sus resguardos en la línea negra.

Mapa 23. Ubicación de bohíos ancestrales Barí y delimitación de la línea negra



Fuente: Ñatubaiyibarí, 2016a.

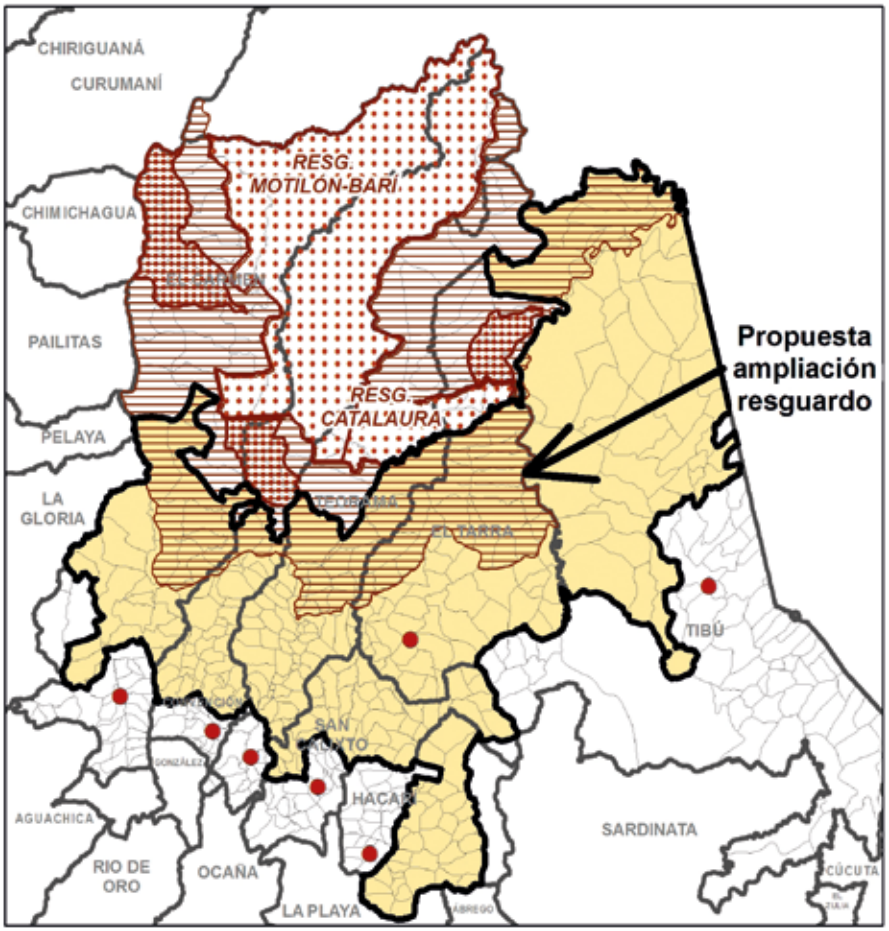
Desde su perspectiva, es la manera de garantizar la pervivencia física y cultural de este pueblo, así como de reconocer los daños producidos por la imposición de modelos de desarrollo y por el conflicto armado:

> En estos momentos (...) la organización Ñatubaiyibarí ha venido tomando acciones jurídicas de cómo empezar a determinar lo que se llama la línea negra, poder determinar el territorio, de empezar a construir con aquellos campesinos que están en estos territorios, generar normas de convivencia, empezar a interactuar y que el Gobierno empiece a reconocer como territorios autónomos lo que existe en esa franja. También una función del Gobierno es generar saneamiento dentro de la línea negra, generar autonomía, conservación y empezar a sustituir los cultivos de uso ilícito (CNMH, entrevista, hombre líder Barí, resguardo Motilón Barí, 2016).

No obstante, se han dado distintas olas de colonización que han significado el asentamiento de campesinos y campesinas en zonas que pertenecen a los resguardos Motilón Barí y Catalaura-La Gabarra, o que se ubican en el territorio ancestral Barí. Esta realidad se ha evidenciado ante la demanda, liderada por Ascamcat, sobre la constitución de la ZRC del Catatumbo[328], puesto que algunas de las zonas que engloba esta figura coinciden con la propuesta de ampliación del territorio Barí.

328 Entre el 19 y 21 de septiembre de 2014 se llevó a cabo en Tibú el IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, donde se declaró de hecho la ZRC del Catatumbo. "Declaración política del IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina" (Prensa Rural, 2014, 20 de septiembre).

Mapa 26. Traslape de la propuesta de saneamiento y ampliación del territorio Barí con la ZRC



La zona en color amarillo corresponde a la propuesta de constitución de la ZRC del Catatumbo. La zona en líneas horizontales corresponde al territorio que se traslapa. Fuente: cortesía Ascamcat.

En 2013, el Pueblo Barí presentó ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad, señalando que la ZRC no puede constituirse sin surtir primero un proceso de consulta previa con los gru-

pos étnicos que podrían verse afectados por este proceso. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-052, 2017, en su punto tres, ordenó que se avance en el saneamiento del territorio Barí antes de tomar una decisión sobre la constitución de la ZRC. Además, llamó la atención sobre la necesidad de hallar "fórmulas de armonización" que permitan, por una parte, reconocer el derecho a la consulta previa del Pueblo Barí que, a su vez, "resguarden" el interés de comunidades campesinas en la conformación de una ZRC. Para ello, la Corte ordenó la creación de una Mesa Consultiva entre Ascamcat y representantes de los Barí, que sirva como espacio de discusión y concertación de intereses de campesinos e indígenas.

Asociado a la construcción y socialización de propuestas de ordenamiento socio-territorial, estas organizaciones, en particular el Cisca y Ascamcat, han privilegiado los paros y marchas como mecanismos para dar a conocer y demandar sus exigencias, formas de movilización social en la región que, como se mostró en el capítulo 2, se remontan a los años ochenta. Con algunas experiencias de este tipo en los años noventa, las grandes movilizaciones campesinas retoman fuerza a partir de 2013. Desde entonces, comunidades del Catatumbo se han movilizado por una serie de demandas que ya son históricas en la región: condiciones para la comercialización de productos agropecuarios, mejoramiento de vías, acceso a salud y educación, sustitución gradual y concertada de los cultivos de uso ilícito, entre otros. Estas se han puesto una y otra vez sobre las mesas de negociación en el marco de grandes movilizaciones entre 2013 y 2017.

En particular, el Paro Campesino de 2013 que empezó el 11 de junio y duró 53 días, demandó, entre otras, la constitución de la ZRC del Catatumbo y la sustitución gradual y concertada de los cultivos de coca. Un papel central jugó en este contexto la MIA que, surgida del Campamento Refugio Humanitario instalado por Ascamcat en Caño Tomás (vereda de Teorama), se constituyó en el canal de diálogo y concertación entre las

personas movilizadas y el Gobierno nacional y departamental. Así mismo, como producto de esta movilización, el Gobierno nacional suspendió la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en el Catatumbo. Un habitante de Convención recordó este paro:

> Inicialmente llegó todo el personal de la zona rural aquí al casco urbano [de Convención], hubo algunos líderes del sector urbano que se sumaron a la marcha, presidentes de juntas, líderes de asociación y de organizaciones y de aquí se fueron hasta Ocaña. Yo fui a ese paro con el fin de hacer bloqueo a las vías pues para que nos escucharan. Ahí desafortunadamente perdimos a dos amigos que fueron a protestar en Ocaña, ahí en Aguas Claras fueron asesinados por la Fuerza Pública, eran de Teorama (...) es que habían de varios municipios, no solo de aquí de Convención, había de El Tarra, Teorama, San Calixto (...) o sea, las veredas que podían llegar a Convención, que eran de Teorama, de San Calixto y del Tarra hacían presencia aquí. Y los otros se iban por Tibú, a hacer presencia por allá por la otra zona, porque acuérdese que eso fue un bloqueo grande (CNMH, taller de memoria, Convención, 2017)[329].

Como resultado de esta y otras movilizaciones sociales en el país en el 2013, como el Paro Nacional Agrario, surgió la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, conformada por organizaciones con vínculos en la región como el CNA y Anzorc. Ante una serie de incumplimientos expuestos por Ascamcat a los acuerdos alcanzados durante el Paro Campesino de 2013, la Cumbre Agraria se movilizó en 2014 en la región y, aunque no tuvo la misma magnitud que la movilización del año anterior, mostró la capacidad de las organizaciones del Catatumbo para llegar a acuerdos y hacerles constante seguimiento.

329 Debido a los bloqueos en carreteras, el paro dificultó o imposibilitó la entrada de alimentos hacia algunas zonas de la región, en particular el casco urbano de Tibú y La Gabarra, generando desabastecimiento. Por ello, algunas personas consultadas hicieron saber sintieron estas acciones como excesivas y que, en algunos casos, pusieron en riesgo su bienestar.

A estas dos grandes movilizaciones le han seguido otras, en particular la de 2016, liderada por el Cisca, en la cual también se movilizaron personas en La Mata (Cesar). Otras dos tuvieron lugar en 2017. La primera, inició el 12 de octubre y estuvo liderada por el Cisca, se concentró en sectores de Ocaña y Ábrego y produjo la instalación de la Mesa Social y Comunitaria por la Vida Digna en el Catatumbo, cuyo propósito fundamental fue el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos pactados en el Paro del Nororiente de 1987, descrito a profundidad en el capítulo 2.

A partir del 13 de octubre de 2017 se llevó a cabo un paro convocado por Ascamcat que se focalizó en Tibú y que se levantó el 5 de noviembre. Esta movilización condujo a acuerdos entre el Gobierno nacional y los marchantes, que incluyeron, entre otros, la reactivación de la MIA (La Opinión, 2017, 5 de noviembre).

El liderazgo de estas organizaciones socioterritoriales ha tenido eco en el Catatumbo no solo en lo referente al alcance de acuerdos con el Gobierno departamental y nacional, que habitantes de la región reconocen y apalancan, sino en su capacidad para abrir oportunidades para que levantar la voz frente al marginamiento y los efectos del conflicto armado en sus vidas y proyectos comunitarios. Este, sin lugar a duda, es uno de sus principales legados para la región. Como lo manifestó una mujer de El Carmen:

> Se han dado a la tarea de romper el hielo y decir: la gente puede hablar, la gente puede denunciar, la gente puede reclamar. Entonces a través de organizaciones sociales se ha ido tomando otra vez aquel valor civil para denunciar, para reclamar y para exigir los derechos (CNMH, taller con mujeres, Ocaña, 2016).

6.4.1. Las JAC: el corazón de la organización social

Como se documentó en el capítulo 4, el paramilitarismo provocó la desaparición casi absoluta de las JAC en veredas y corregimientos, lo que generó la desarticulación de una forma de organización con un profundo arraigo en la región. No obstante, estas formas de administración han venido recuperando su capacidad para articular las dinámicas de la vida comunitaria, de tal modo que volver a organizarse desde las JAC ha sido restablecer uno de los ejes fundamentales en torno a los cuales se desarrolla la vida en la región, en particular en las zonas rurales:

> Hoy estamos retomando ese tema otra vez, volviendo a decir: "esto tenemos que agarrarlo nosotros, esto es el Gobierno nuestro, esto es lo que nos hace vivir", porque es que una vereda sin Junta de Acción Comunal es una vereda muerta, no hay por ejemplo una ley (...). Si llega un proyecto, lo primero que dicen es: "bueno ¿ustedes están conformados como junta de acción comunal?". Si no hay, no hay proyecto. Y lo otro: estamos mirando y estamos tomando la iniciativa de que nosotros, las juntas, seamos los que montemos los proyectos, que los proyectos no sean impuestos, porque es que a veces se le dice a la gente "siembre esto", cuando la gente no quiere. Entonces a la gente hay que conversarla, hay que decirle "bueno, qué es lo que nosotros tenemos". Como comunidad queremos no es que nos impongan, porque por ejemplo ahorita hay muchos proyectos: la palma, el cacao y, a veces, montan un proyecto, un ejemplo, de cacao y siembran cacao donde la tierra no es apta para el cultivo del cacao (CNMH, entrevista, hombre líder comunal, Tibú, 2016)[330].

330 Algunas JAC jugaron un papel fundamental en la reconstrucción de los lazos comunitarios después del paramilitarismo, como fue narrado en el caso del corregimiento Luis Vero, en Sardinata.

Así como en el pasado, el papel que hoy en día juegan las JAC les ha permitido ganar reconocimiento y legitimidad como ninguna otra organización de base en el Catatumbo. La débil presencia institucional y la precaria atención por parte del Estado a necesidades imperiosas -con mayor profundidad en las zonas más alejadas de los centros urbanos- ha generado que las JAC sean de nuevo reconocidas como una forma de autoridad y Gobierno local, pues estas hacen veeduría, administran los pocos recursos que existen, convocan a reuniones para tomar posición y decisiones en torno a temas que tienen un impacto en la comunidad y brindan soluciones a las problemáticas de su vida cotidiana y la de sus veredas.

Es así como algunas han diseñado e implementado reglas de convivencia (incluyen prohibiciones, amonestaciones y multas) que, entre otros, i) buscan hacer viable la vida comunitaria por medio del comité conciliador, ii) abordan problemáticas medioambientales, a través de comités ecológicos y, iii) recaudan fondos con el fin de reinvertirlos en el bienestar de la comunidad, como ocurre con el cobro de peajes que se ubican en carreteras internas de la región y se proponen su construcción o mejoramiento.

Las JAC han permitido articular demandas de habitantes de la región y construir en colectivo planes para abordar sus necesidades desde una mirada cercana a sus expectativas y capacidades. Uno de estos casos es el del corregimiento de Pacelli, en Tibú, donde se construyó el plan de desarrollo integral sostenible que, entre otras cosas, postula tres condiciones básicas para promover el desarrollo social: i) el reconocimiento y valoración de la economía campesina; ii) la seguridad jurídica sobre la tierra y el territorio y, iii) la dotación de bienes públicos esenciales.

Así mismo, Asojuntas, como espacios de articulación donde convergen representantes de JAC de distintos barrios y veredas de un mismo municipio o corregimiento y cuyo origen se remonta a la Constitución

Política de 1991, tiene un peso importante en la región. Casos como Asojuntas de La Gabarra (Tibú), por ejemplo, fueron referidos como espacios de gran envergadura con una capacidad reconocida para proponer y echar a andar propuestas de gestión y administración del territorio.

La reactivación y fortalecimiento de las JAC en la región ha posibilitado además que mujeres y personas jóvenes cuenten con un espacio desde el cual aportar en la construcción colectiva del bienestar de sus comunidades. Si bien se hizo referencia a que durante los años ochenta y noventa las juntas directivas de las JAC eran espacios con predominio masculino, en la actualidad se encuentra que mujeres y personas jóvenes asumen cargos directivos. Aunque las mujeres señalaron que asumir liderazgos es todavía una tarea que implica dificultades, en particular, por los retos que conlleva labrarse un lugar en espacios en eminencia masculinos, también reconocen que hoy sienten que desde espacios como las JAC han podido sacar proyectos y posicionarse como lideresas dentro de sus comunidades.

6.4.2. Un tejido de voces

A las organizaciones socioterritoriales y JAC se suman en la región diferentes iniciativas que son impulsadas en especial por víctimas del conflicto armado, mujeres y personas jóvenes.

Las organizaciones de víctimas están conformadas por personas que vivieron diversas formas de victimización, quienes trabajan para que el Estado cumpla con su deber como garante de derechos, con aquellos relacionados con verdad, justicia, reparación y no repetición. Su consolidación no se produjo solo después de la desmovilización paramilitar, pues incluso operando estas estructuras, grupos de personas ya se reunían

para hacerle frente a la devastación que el conflicto armado ha dejado, inclusive si ello les ponía en riesgo[331].

Este es el caso de Asodepo (Asociación de Desplazados de Ocaña), que surge en 2002 y que se conformó con personas en situación de desplazamiento provenientes de distintos municipios, en particular, de la Provincia de Ocaña. Las condiciones en las que fueron tratadas por autoridades y habitantes de Ocaña y la situación de vulneración en que vivían, fueron las circunstancias que les impulsaron a conformar la organización. Las JAC sirvieron como experiencia previa que inspiró la puesta en marcha de Asodepo:

> Le dije al señor: no, aquí tenemos que organizarnos, así como nosotros teníamos las Juntas en nuestros pueblitos, tenemos que organizarnos aquí y crear algo. Entonces él dijo: es que no tenemos idea cómo es y nosotros no somos un barrio para crear una Junta. Había otro compañero que dijo: pues vayámonos a averiguar en algún lado. Y nos fuimos para Cámara y Comercio y hablamos con alguien allá y nos dijo: la situación de ustedes se parece como a lo de los indígenas. Aquí hay unos estatutos, sáquenle copia y miren a ver cómo hacen. Sí, nos pusimos a leerlos y uno se sentía como identificado con lo que ellos habían planteado ahí. Entonces dijimos: vamos a crear una asociación, pero ¿cómo hacemos?, aquí nos matan los paramilitares si nos ponemos a organizarnos (CNMH, entrevista, hombre líder comunal, Ocaña, 2016).

Voz a voz lograron reunir un nutrido grupo de personas en situación de desplazamiento y en noviembre de 2002, a la luz de velas, pues el espacio donde se reunieron carecía de fluido eléctrico, definieron el nombre de su asociación y nombraron a la junta directiva. Aunque en sus inicios el eje sobre el cual se articuló su apuesta fue el desplazamiento forzado,

331 Estas organizaciones existen con independencia de los escenarios de participación planteados por la ley 1448 de 2011. En la región, además de mesas municipales de participación de víctimas, existe la Mesa de Víctimas de Norte de Santander.

han ampliado sus acciones de defensa de derechos hacia víctimas de otras modalidades de violencia. Ello se ha visto reflejado en la construcción de un monumento de memoria en el barrio Brisas del Polaco[332], dedicado a las víctimas asesinadas y luego desaparecidas en el río Catatumbo. Así lo narró uno de sus dirigentes:

> Nosotros consideramos que todos los muertos que nos tiraron de todos los lados que están en conflicto, paramilitares, guerrilla y el Gobierno nacional en su fuerza pública, la mayor parte de la violencia fue escondida tirándola a nuestro río, al río Catatumbo, para desaparecer esa historia. La Asociación, en 2002 o 2003 más o menos, mirábamos que uno tiende a olvidar lo que le ha tocado vivir. Decidimos crear un monumento en el barrio, por fortuna nosotros separamos espacios en la conformación del barrio. Consideramos que fuera el bocachico porque él absorbió ese dolor y él nunca lo va a poder contar y por eso le dimos el nombre de testigo en silencio (CNMH, entrevista, hombre líder comunal, Ocaña, 2016).

En El Carmen surgió en 2004 la Asociación de Víctimas de Guamalito (corregimiento del municipio) que se propone, entre otras, ser un espacio de encuentro e interlocución de víctimas del conflicto armado de esta zona que "cumple un papel de estar organizado, de estar unido y de tener más fuerza" (CNMH, entrevista, hombre adulto, Ocaña, 2016), lo que les permite posicionar sus demandas de acceso a derechos de manera articulada.

332 Por medio de una tutela, la Asociación logró que la Alcaldía municipal de Ocaña le entregara un predio en el cual se estableció el barrio "Brisas del Polaco", que les garantizó el acceso a vivienda a las familias desplazadas que la conformaban.

Monumento Testigo en silencio, construido por Asodepo en Ocaña. Fotografía Camilo Ara para el CNMH, 2016.

Organizaciones de este tipo han emergido también en Convención, donde existen La Chaguala y La Laguna, dos organizaciones que, a la par del trabajo del capítulo en Convención de Funavi (Fundación Nacional de Víctimas de la Violencia), trabajan por el reconocimiento y acceso a derechos de las víctimas. A estas se suman esfuerzos de articulación, tales como la Corporación Coordinadora de Víctimas de Norte de Santander, con trabajo en Sardinata y la zona de frontera, que recoge organizaciones de víctimas del departamento y demanda la promoción, protección y defensa de las víctimas del conflicto armado residentes en Colombia y en la frontera colombo venezolana.

La labor de dignificación y reconocimiento de quienes han sufrido la violencia tiene lugar también en escenarios culturales, litúrgicos y de congregación, tales como los Festivales por la Vida realizados en La Gabarra (Tibú), abordados en el capítulo 4, más de una década después, no solo siguen convocando a personas, sino que son replicados en lugares como Luis Vero (Sardinata), donde la comunidad construyó su propia versión.

En el año 2009, distintas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos llevaron a cabo la conmemoración de los 10 años de la arremetida paramilitar en el Catatumbo. Por medio de actos conmemorativos, se buscó recordar a las víctimas del paramilitarismo y, a la vez, dar a conocer a nivel nacional los actos de barbarie que tuvieron lugar en la región. Una de sus actividades centrales fue una peregrinación a La Gabarra (Tibú), que se propuso "borrar las manchas de sangre del río Catatumbo". Una serie de placas conmemorativas se instalaron en distintos lugares emblemáticos del accionar paramilitar en el municipio de Tibú, por ejemplo, en el puente sobre el río Catatumbo en el corregimiento de La Gabarra.

Placa en conmemoriación a las víctimas en el puente de La Gabarra. Fotografía: María Luisa Moreno para el CNMH, 2016.

Además, han emergido propuestas orientadas hacia la reconstrucción de la memoria del conflicto armado. En Teorama se refirió el propósito de establecer la Casa de la Memoria de El Aserrío y, en Tibú, una residencia del caserío Kilómetro 60 está siendo propuesta como espacio de memoria: Esta vivienda fue usada por los paramilitares para ejecutar su violencia con altos grados de sevicia.

De otro lado, en todos los centros poblados, corregimientos y veredas han venido cobrando relevancia las organizaciones de mujeres y de jóvenes. En lo que respecta a las mujeres focalizan su trabajo en el reconocimiento de las condiciones de marginación histórica que viven y se reproducen en sus vidas cotidianas y en hacerle frente a los efectos desproporcionados del conflicto armado sobre sus vidas y proyectos.

Así, por ejemplo, en El Tarra se pusieron en marcha la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado del Catatumbo, conformada por más de 70 mujeres de las zonas rural y urbana y la Asociación de Madres Emprendedoras, organizaciones que se proponen "resaltar el valor de la mujer" y liderar proyectos que les permitan a sus afiliadas solventar sus apremiantes condiciones económicas. En San Calixto, la Asociación de Mujeres Campesinas, conformada por 91 mujeres víctimas del conflicto y madres cabeza de hogar, se ha trazado como una de sus principales líneas de trabajo la generación de ingresos. Por su parte, en Hacarí existe la Asociación de Mujeres Cabeza de Hogar, que lidera proyectos productivos y, en la zona rural de Convención, la Asociación de Mujeres de Cartagenita cuyas integrantes, en su mayoría mujeres víctimas del conflicto, se proponen "ser semillas de vida en el territorio", con énfasis en propiciar condiciones que les garanticen la soberanía alimentaria.

Personas jóvenes de la región también se han organizado en torno a diversas apuestas y han buscado demostrar en distintos escenarios que son capaces de comprender sus contextos y poner en marcha acciones para mejorar sus condiciones de vida. La corporación Catatumbo Jóvenes Para la Paz y el Desarrollo Social, Tibuyanos Unidos y la asociación Jóvenes Mercedeños Luchadores por la Paz, trabajan con jóvenes y llevan a cabo acciones de apoyo dirigidas a personas víctimas del conflicto y en situación de pobreza.

En la región han tomado fuerza apuestas sustentadas en el arte y la música. El grupo de rap Los Reyes Magos de El Tarra, por medio del rap, el grafiti y el *breakdance* da a conocer las demandas y propuestas de jóvenes de esta zona por construir una región donde sea posible vivir dignamente a través del fortalecimiento de las economías campesinas. El Colectivo de Jóvenes Oro Negro Crew de Tibú surgió para que jóvenes forjaran mecanismos de participación a través del arte "porque todo el mundo opinaba y hacía por nosotros y nosotras" (CNMH, entrevista, mujer joven artista, Tibú, 2016).

Aunque el ejercicio de los liderazgos en la región signifique en muchos casos una posición de riesgo, por la presencia continuada de actores armados y por los estigmas que recaen sobre esta región, su papel es definitivo en la actualidad. Como fue mencionado en el Catatumbo en múltiples ocasiones, ignorar o desconocer las propuestas y demandas de habitantes, organizaciones y asociaciones de la región, contribuye a la prolongación de las condiciones de marginación que han caracterizado al Catatumbo por años y a la continuación y superposición de los ciclos de violencia que han generado profundas cicatrices en la vida individual y comunitaria a sus habitantes y territorios.

7.

REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

En el Catatumbo, región de exuberantes montañas, numerosos ríos y tierras fecundas, su población le ha salido adelante a los embates de la marginación y de la guerra. Sus gentes se han llenado de valor y fortaleza para permanecer en su territorio; encarar con valentía la muerte y el dolor; hacer frente a la imposición de un modelo de desarrollo, en muchos casos, contrario a sus aspiraciones y necesidades y apalancar iniciativas de gestión para su vida en comunidad y para mejorar de sus condiciones de existencia.

Quienes habitan la región han forjado la esperanza en medio de la pobreza y la devastación producida por el conflicto armado, creando y reactivando apuestas comunitarias por la vida. Esta es una de las principales lecciones de

memoria que aporta este informe: en el Catatumbo está tejiendo una persistente insistencia por la dignidad.

Sin embargo, como lo narraron sus habitantes, en el Catatumbo se ha producido, reproducido y se mantiene una multiplicidad de violencias, ciclos que antes que cerrarse se incrementan de manera preocupante.

Este apartado recoge algunas reflexiones finales y presenta una serie de recomendaciones, agrupadas en ejes temáticos que emergieron de los ejercicios de memoria en la región. Estas se configuran en mensajes que desde el Catatumbo comunican sus habitantes, en perspectiva de continuar construyendo, como país, las condiciones para que los estragos de la guerra no se repitan y se consoliden las apuestas por una vida digna en la región[333].

7.1. Atender las necesidades apremiantes de la gente

Como se hace evidente en este informe y fue narrado en distintos tonos y repetidas ocasiones por habitantes del Catatumbo, esta ha sido una región históricamente marginada. Para sus pobladores la presencia del Estado está asociada en esencia a políticas de carácter punitivo. Esa presencia, en concreto, se han traducido en el interés por la explotación

333 Las reflexiones presentadas a continuación son producto de los ejercicios de reconstrucción de memoria histórica que se llevaron a cabo en la región entre 2016 y 2017 y se recogieron en este informe. De forma particular se presentan los aportes que compartieron víctimas de la región, instituciones presentes en el departamento y organismos internacionales durante los espacios de socialización de la versión preliminar del informe, llevados a cabo a finales de 2017 en Cúcuta, Tibú y Ocaña, en donde se abordó de manera explícita la pregunta sobre recomendaciones y retos para la construcción de paz en el Catatumbo. Es así como se recogen las consideraciones, demandas y alertas construidas por comunidades de la región en su empeño por dar a conocer sus memorias en torno a la vida, la guerra y la dignidad.

de recursos naturales para atender las demandas de los mercados internacionales; por la imposición de políticas poco eficientes para la erradicación de cultivos de uso ilícito y por una elevada presencia militar que, pareciera, es la única respuesta a los persistentes, diversos y complejos conflictos vigentes en la región.

A este escenario, que habitantes relacionan con una ingente inversión de recursos financieros, se contrapone la pobreza y marginamiento en el que vive un alto porcentaje de la población, en particular, la que habita zonas rurales. Esto explica por qué, en forma reiterada, catatumberos y catatumberas hicieron referencia a la ausencia de Estado para narrar el eje principal que explica la persistencia de los conflictos y la marginación en el Catatumbo. Evalúan que las políticas punitivas en el territorio no solo no contrarrestan las precarias condiciones de vida, sino que, por un lado, fortalecen los estigmas asociados a su población y, por el otro, profundizan la falta de credibilidad de la población catatumbera en el Estado.

En este contexto, una de las principales exigencias es una presencia del Estado que atienda las apremiantes necesidades que tiene la región y logre garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de sus pobladores. Como fue relatado en los espacios de reconstrucción de memoria histórica: atender esas precarias condiciones de existencia de quienes habitan la región, es la materia prima para sentar las bases sobre las cuales se establezca una paz estable y duradera en el Catatumbo.

En la actualidad, la región continúa teniendo los peores indicadores sociales de Norte de Santander, situándose por encima del promedio nacional en indicadores de pobreza, mortalidad infantil, embarazo adoles-

cente, cobertura de servicios públicos y saneamiento básico[334]. El actual porcentaje de población con alguna necesidad básica insatisfecha es alarmante, según el DANE, para 2018 es del 32 por ciento para la población que habita los cascos urbanos de los municipios y del 69 por ciento para la población rural. Lo que se agrava si se tiene en cuenta que en el Catatumbo la población rural es mayoritaria.

En lo referente a la salud, la región tiene pocas UBA (Unidades Básicas de Atención) y no cuenta con hospitales de tercer y cuarto nivel de complejidad[335]. El conflicto armado ha ocasionado que profesionales de la medicina o profesores rechacen sus nombramientos en la región, lo que en la actualidad se traduce en un déficit de estos profesionales.

El desempleo, en especial en la zona rural, sobrepasa el 50 por ciento (Conpes, 2013) y la oferta existente, en muchos casos, es precaria. Se trata de empleos temporales y con malas condiciones de remuneración. De hecho, 97 por ciento de los trabajos son informales (Conpes, 2013).

Los poco más de dos mil kilómetros de infraestructura vial con los que cuenta el Catatumbo -la mayoría construida para la explotación petrolera (PNUD, 2014)-, se encuentran en pésimas condiciones, lo que perpetúa su aislamiento tanto de Cúcuta como de Ocaña, principales centros urbanos del departamento, y de allí con el resto del país.

Así mismo, el sector campesino no cuenta con programas y políticas que garanticen su sostenibilidad en condiciones dignas, no hay oferta de asistencia técnica, líneas de créditos, incentivos, seguros o apoyos nor-

334 La pobreza multidimensional de todos los municipios del Catatumbo se encuentra por encima del 73 por ciento, exceptuando a Ocaña, que registra un 52 por ciento. El Tarra (92 por ciento) y Hacarí (93 por ciento) son los municipios con el mayor porcentaje de personas pobres (Conpes, 2013, página 19).

335 Fue inaugurada la ampliación del hospital de Tibú, pero este solo ofrece servicios de baja complejidad.

mativos que promuevan la producción y comercialización de sus productos, como sí ha ocurrido en la región con proyectos agroindustriales como el de la palma aceitera.

Por este contexto de persistente vulneración de las condiciones básicas de existencia de los habitantes de la región, El CNMH recomienda a los Ministerios de Educación, Salud, Transporte, Agricultura y Desarrollo Rural, al Departamento de Prosperidad Social, así como a las instituciones responsables de estos temas a escala departamental y municipal, la implementación y seguimiento de programas que garanticen la concreción de los postulados del Estado social de derecho en el Catatumbo.

A su vez, se hace necesario el reconocimiento de las difíciles condiciones en las que docentes del Catatumbo tienen que llevar a cabo su labor, muchas veces en medio de situaciones de zozobra y miedo por estar inmersos en un contexto de conflicto armado vigente.

La adecuación y ampliación de hospitales de mayor complejidad y de centros de salud, en especial en el sector rural, es una necesidad que clama la región.

Como se mostró en el capítulo 2, campesinos y campesinas de la región establecen en sus memorias una compleja paradoja: habitan una región rica en recursos naturales, suelos fértiles, agua abundante y una biodiversidad exuberante, sin embargo, reconocen que dedicarse a trabajar la tierra y a la producción y comercialización de cultivos de pancoger significaría en muchos casos su ruina. Ello ocurre porque en la región no existen canales que garanticen la siembra y posterior comercialización en condiciones justas de cultivos como la yuca, maíz, cacao, frutales, entre otros. En particular, los habitantes hicieron mención de las pésimas condiciones de vías y caminos existentes en la región, sobre todo en las zonas rurales, lo cual dificulta que los productos de pancoger que cul-

tivan lleguen en buenas condiciones y a tiempo a los mercados para su comercialización. En muchos casos se encuentran, además, con que el pago por estos productos no retribuye el trabajo y recursos invertidos.

A esta dinámica se suma la puesta en marcha de un modelo de desarrollo agroindustrial y minero-energético en la región que, como se describió en el capítulo 6, se enfoca más en dinamizar la producción de cultivos a escala industrial como el de la palma de aceite, desestimando las prácticas agropecuarias que constituyen las economías campesinas de la región, un proceso de descampesinización en ciernes.

Es por lo que, el CNMH, hace suya la voz de la comunidad para solicitar al Ministerio de Transporte y al Gobierno departamental y municipal que se garantice la gestión e inversión de recursos para la ampliación y el mejoramiento efectivo de la infraestructura vial de la región, con particular énfasis en las zonas rurales. A su vez, recomienda al Estado el respaldo al campesinado como sujeto económico, social y cultural de derechos y por esta vía, el fortalecimiento de las economías campesinas.

7.2. Reconocer y proteger las dinámicas organizativas

En las memorias de habitantes de la región permanecen vigentes los reclamos que han puesto en marcha desde sus corregimientos, veredas, municipios y organizaciones para exigir al Estado soluciones efectivas que garanticen una vida digna en el territorio. Estas exigencias, se han elaborado en distintos momentos, en numerosos espacios y echando mano de una diversidad de repertorios.

Como fue abordado en los capítulos 2 y 6, las comunidades del Catatumbo han encontrado formas de organización y acción comunitaria que han buscado atender sus necesidades más sentidas, desde las cuales se ha erigido el movimiento comunal y cooperativo, una red que, entre los años ochenta y noventa, apalancó una diversidad de apuestas comunitarias, en particular, de habitantes rurales; la implementación de propuestas de comercialización y transformación de productos a nivel local y regional; la construcción de planes de vida; los planes alternativos de sustitución de cultivos de uso ilícito y la defensa de sus derechos, entre otras.

Muchas de las demandas de habitantes de la región se han articulado alrededor de movilizaciones y protestas acompañadas de pliegos de peticiones que han conducido a las ya numerosas negociaciones con el Gobierno regional y nacional. Sustentadas en el conocimiento que construyen las comunidades sobre su entorno y en el fortalecimiento de la economía y la identidad indígena y campesina.

En conjunto, esta experiencia social regional se convierte en un valioso acumulado de aprendizaje con un potencial para encontrar salidas viables a los persistentes problemas que aquejan al Catatumbo. Dado que muchas de las políticas que se implementan en la región son vistas por sus habitantes como imposiciones, en la medida en que no son consultadas ni se corresponden con sus capacidades e ideas de bienestar, se considera indispensable abrir espacios de participación que reconozcan, legitimen y den impulso a este acumulado, esto permitirá la consolidación de un ambiente favorable desde el cual construir apuestas concertadas, viables y reconocidas socialmente que, en últimas, redundaran que el Estado recupere la legitimidad que se ha visto lesionada[336].

336 Una queja reiterada, en conversaciones individuales y colectivas, fue que algunas entidades del Estado utilizan los listados de asistencia de reuniones y talleres como prueba de la participación de la ciudadanía, mecanismo con el cual formalizan decisiones sobre el territorio. Habitantes de la región señalaron que esos escenarios no son suficientes ni están diseñados para abordar las prácticas de habla, escucha, conversación y propuesta de campesinos, campesinas e indígenas.

Uno de los elementos que de manera persistente emergió en las conversaciones con personas de la región fue la necesidad de poner en marcha espacios efectivos de información y participación. En la actualidad, habitantes reclaman que los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) –creados en el marco de la firma del Acuerdo final con las FARC e implementados por la ART (Agencia de Renovación del Territorio)–, pese a que han sido concebidos para ser construidos de manera participativa, no se han dado a conocer de forma adecuada y completa, o se han desconocido temas esenciales, por ejemplo, los intereses y necesidades del Pueblo Barí, o las formas que tienen las comunidades campesinas para adelantar procesos democráticos de consulta y toma de decisiones[337]. A ello se suma la reiterada percepción de habitantes de la región de que la intervención estatal se da de forma desarticulada, dispersa y errática, lo que genera incertidumbres no solo en la consecución de metas y objetivos, sino que además atenta contra la garantía de los derechos de la población.

Por lo anterior, el CNMH considera importante que el Gobierno nacional, departamental y los municipales hagan un esfuerzo conjunto por reconocer el acumulado organizativo, el conocimiento colectivo, las instancias de toma de decisiones y las apuestas de la población, con miras a establecer mecanismos y espacios de diálogo en donde se tomen decisiones de manera informada y concertada sobre el acontecer futuro del Catatumbo. En especial, relevante es el reconocimiento y fortalecimiento de las JAC, órgano fundamental y corazón de la vida comunitaria de la región, así como las organizaciones indígenas de los Barí.

337 Por inconformidades, algunas comunidades le han cerrado las puertas a la posibilidad de que se sigan implementando este y otro tipo de acciones. Desde una perspectiva diferente (Ábrego, La Playa y Ocaña), han exigido su inclusión en los PDET, dado que estos municipios no hacen parte de los territorios priorizados por este plan de Gobierno.

Siente la población catatumbera que, en su gran mayoría, los compromisos adquiridos en los escenarios de movilización social colectiva no han sido cumplidos; en otros casos, los que se han ejecutado han resultado insuficientes, lo que ha generado no solo el aplazamiento indefinido de las acciones que resuelvan los problemas existentes identificados y priorizados por las comunidades y organizaciones, sino que, además, ha significado el aumento de la desconfianza que las comunidades y organizaciones han acumulado hacia las actuaciones del Estado. En el caso de la puesta en marcha de planes de desarrollo para la región, habitantes reconocieron que en muchos casos no se recibió la inyección de recursos necesarios para su implementación, generando desgaste (pues han pasado por múltiples escenarios de elaboración de diagnósticos locales) y la posterior frustración por la no ejecución de lo proyectado.

Por otra parte, en muchos casos las y los líderes de movilizaciones y protestas han sido y continúan siendo señalados y estigmatizados, situación que vulnera su integridad y que, en no pocos casos, ha significado la pérdida de su vida, con los impactos a mediano y largo plazo que ello les imprime a las distintas formas de movilización social existentes en la región.

En este sentido, es vital que el Gobierno nacional, departamental y los municipales, retomen y cumplan los acuerdos y compromisos adquiridos con los pobladores en los múltiples escenarios de negociación establecidos. Así mismo, se deben fortalecer acciones que contribuyan a eliminar la estigmatización que ha recaído sobre dirigentes y líderes de las movilizaciones sociales.

El actual escenario de conflicto latente, afecta de manera particular a los líderes y lideresas de la región, tales como presidentes y presidentas de JAC y miembros de asociaciones de diverso tipo que, aunque con un marcado subregistro, se ha dado en su contra con un incremento reciente

de amenazas y homicidios, sin que se conozcan los avances de las investigaciones[338]. Frente a este preocupante panorama, se hace impostergable que el Gobierno nacional y las entidades competentes agudicen y den continuidad a acciones efectivas, planes y programas que garanticen la vida y seguridad de líderes y lideresas, así como el ejercicio de sus labores de exigencia de derechos.

7.3. Desarmar estigmas y cerrar ciclos de violencia armada

Cuando se indagó a los habitantes del Catatumbo acerca de los inicios del conflicto en la región, en algunos casos sus recuerdos se remontaron a la llegada de las primeras guerrillas al territorio, mientras muchas otras personas elaboraron sus recuerdos en torno a la entrada de las empresas petroleras durante las primeras décadas del siglo XX que, entre otros, desencadenó la brutal violencia que produjo la desaparición casi completa del Pueblo Barí.

A partir de allí catatumberos y catatumberas construyen sus relatos en torno a la región considerando, en todo momento, distintos tipos de violencia en el marco de los cuales han tenido que poner en marcha sus proyectos individuales y comunitarios. De este modo, las violencias no se encuadran solo en las producida por el conflicto armado, puesto que a esta se han sumado otras que en su conjunto han imposibilitado el acceso de habitantes de la región a sus derechos.

338 De acuerdo con datos del programa Somos Defensores, entre 2010 y lo corrido de 2018 han sido asesinados 20 líderes y lideresas sociales en los municipios que conforman la región del Catatumbo.

Como se mostró en el capítulo 3, en la región hicieron presencia temprana las guerrillas del ELN y el EPL (finales de los años setenta), a las que se sumaron las FARC (a mediados de los ochenta). Desde entonces y hasta la firma del Acuerdo final entre el Gobierno nacional y las FARC, estas tres estructuras armadas permanecieron en el Catatumbo y ELN y EPL continúan activas en la región.

Al accionar y expansión de las guerrillas le siguió la respuesta militar por parte del Estado. Esta consistió en una política de lucha contrainsurgente que durante los años ochenta y noventa definió al Catatumbo como "zona roja" o "zona de orden público" y que, en muchas ocasiones, señaló a civiles, líderes y lideresas sociales, sindicalistas, entre otros, como afines a las guerrillas o guerrilleros vestidos de civil.

De modo tal que catatumberas y catatumberos han tenido que convivir con el estigma que sobre ellos recae de ser presuntos colaboradores de uno u otro grupo armado, una situación que se agudizó con la expansión del cultivo de coca en la región, cuando políticas antidrogas recayeron sobre pequeños cultivadores de hoja de coca y los definió como narcotraficantes y auxiliadores de la guerra. Después, la entrada y arrasamiento paramilitar se fundó en gran medida en la presunción de que todos los habitantes de esta región eran, de alguna forma, auxiliadores de la guerrilla, lo que justificó la violencia en su contra. En muchos casos, los paramilitares arrasaron con todo para no dejar ningún rastro de la presencia guerrillera, configurando así una violencia sin precedentes en la región que ha marcado, hasta la actualidad, los espacios, recuerdos, corporalidades y territorios de catatumberos y catatumberas.

Como lo evidencian estas páginas, son múltiples los estigmas que se han construido en torno a la región y a su población y que de manera preocupante todavía persisten. Sobre el Catatumbo se ha dicho que es "zona roja", zona ingobernable, zona cocalera, el Bronx de Colombia,

entre otros. En referencia a los Barí se dijo en los años treinta que era un pueblo de salvajes y, sobre el resto de la población, se continuó con señalamientos de comunista, a cualquier persona que hiciera parte de un sindicato o liderara apuestas organizativas.

Este tipo de señalamientos y estigmatizaciones generan un grave impacto: pone en riesgo a personas y colectividades y, a su vez, desautoriza su voz y la de sus organizaciones, invisibilizándolas y deslegitimándolas y, en casos como el de la expansión paramilitar en el Catatumbo, justificando los más atroces actos de violencia.

Es por lo que se recoge un reclamo persistente que hacen quienes habitan esta región para que cesen los estigmas que sobre ellos recaen, lo que en muchos casos los ha llevado, incluso, a negar su procedencia regional para evitar la violencia. Se hace un llamado a la sociedad colombiana en su conjunto y, en particular, al Estado a construir y desarrollar mecanismos de comunicación y pedagogía que permitan eliminar del imaginario los estigmas que sobre la población del Catatumbo han recaído. Mecanismos que permitan comprender esta región desde su historia y multidimensionalidad, las circunstancias en las que su población ha vivido y sus apuestas para enfrentar la vida con dignidad.

Esta investigación evidencia cómo en el Catatumbo se producen y reproducen los ciclos de violencia de manera preocupante. Como lo expresaron personas participantes de los talleres colectivos de reconstrucción de memoria histórica, en esta región han hecho presencia una multiplicidad de actores armados y, a su vez, ha albergado distintos procesos de dejación de armas y/o reincorporación a la vida civil (el primero con el EPL en Campo Giles, Tibú; el segundo con el Bloque Catatumbo de las AUC en el corregimiento de Campo Dos, Tibú; el tercero,en la vereda Caño Indio, Tibú, con la instalación de una zona de concentración de las FARC). Sin embargo, la guerra en el Catatumbo está vigente.

Aunque comunidades de la región recibieron con alivio la reintegración a la vida civil de combatientes de las FARC, una y otra vez alertaron sobre la importancia de que este hecho, en sí mismo, no significa la consecución de la paz en sus territorios. Será una paz incompleta, repitieron habitantes de la región, mientras continúen en armas las guerrillas del ELN, el EPL y los GAPD y no se aborden las dinámicas de marginación y pobreza que ya se han mencionado como parte de esta serie de recomendaciones.

Es por esto por lo que en este escenario de conflicto armado vigente y agudizado y, recogiendo el sentir de las y los catatumberos, se hace un llamado al Gobierno nacional para persistir en los diálogos con la guerrilla del ELN hasta lograr su efectivo desarme y posterior desmovilización. A su vez, se insiste en que se pongan en marcha investigaciones y rutas de acción para desmantelar grupos y redes criminales, así como la investigación, castigo y desmonte de los nexos que presumiblemente existen entre estas estructuras y servidores públicos.

En esta misma perspectiva, como se ha descrito, el EPL sigue haciendo presencia en la región, muchas comunidades y organizaciones siguen considerándola como una guerrilla con presencia histórica y sostenida en los municipios. Su eventual reconocimiento como insurgencia permitiría una salida negociada al conflicto y la desarticulación de este actor armado que persiste en la región, fortaleciendo las iniciativas de construcción de paz.

Dado que en el Catatumbo persisten condiciones sociales que dificultan el goce efectivo de derechos de sus habitantes y que, como se mostró en el capítulo 6, existen boyantes economías ilegales que demandan constante mano de obra, se recomienda al Gobierno nacional fortalezca la implementación efectiva de programas y proyectos que les hagan viable, en particular a los excombatientes de las FARC, su total desvincula-

ción de las actividades ilegales y de guerra, que les brinden garantías para su reincorporación social y económica a la sociedad en entornos seguros y de protección de la vida.

7.4. Ampliar espacios de consulta, información y participación

Los capítulos 1 y 6 describieron la puesta en marcha de un modelo de explotación petrolera que se inauguró en la región a principios del siglo XX, así como la implementación reciente de proyectos que se proponen conducir al Catatumbo por la senda del desarrollo agroexportador (representando principalmente en el monocultivo de palma de aceite) y minero-energético (petróleo y carbón). Vale reiterar que en muchos casos estos modelos han generado reticencias y miedos entre habitantes rurales e indígenas Barí, quienes conocedores de los impactos del modelo petrolero del siglo XX, temen perder sus espacios, capacidades y apuestas por sostener su existencia.

Este es un tema de especial relevancia en la actualidad en la región y fue mencionado en reiteradas ocasiones por sus habitantes, énfasis hecho por los Barí.

Por una parte, los Barí reconocen que la puesta en marcha de la explotación carbonífera y la profundización de la explotación petrolera pone en riesgo su pervivencia cultural y física, puesto que algunas de las actividades de exploración y explotación podrían llevarse a cabo dentro de su territorio ancestral o en sus límites; esto afectaría sus modos de vida

y su cultura, con un impacto definitivo en su existencia como pueblo indígena[339].

En el caso de campesinos y campesinas, enfrentarían amenazas de desplazamiento y desarraigo, aumentando el fenómeno de descampesinización presente en la región y la vulneración de su seguridad y soberanía alimentaria. Además de la drástica transformación del paisaje, esta industria afectaría el uso del suelo rural y, como ya ha sucedido en Tibú, podría promover un mercado desregulado de tierras que favorezca un fenómeno de despojo y concentración. Además, en un contexto vigente de conflicto, existe el riesgo de que actores armados coaccionen a la población para que trancen forzadamente sus predios.

Habitantes de la región temen que, así como ha sucedido con décadas de explotación petrolera, la actividad carbonífera no genere beneficios económicos para la región. Además, expresan que esta traería graves afectaciones al medio ambiente, pues la extensa zona que abarca la reserva de carbón es rica en fauna, flora y agua, este último recurso ya fuertemente afectado por el monocultivo de la palma. Preocupa que hasta el momento las comunidades del Catatumbo no han sido informadas ni consultadas sobre las perspectivas de implementación de esta actividad extractiva en la región.

En estas circunstancias, se hace un llamado al Gobierno nacional para establecer escenarios y mecanismos de información, diálogo y concertación entre el Gobierno, los sectores productivos y las comunidades, en torno a este y otros proyectos que se conciba implementar en la región, en donde con información oportuna y completa, las comunidades puedan incidir en las decisiones. A su vez, dado que el modelo mine-

339 Por medio del Auto 266 de 2017, la Corte Constitucional reconoció que, junto a otros pueblos indígenas, el Barí presenta "situaciones de riesgo y afectaciones diferenciales que ponen en peligro su existencia" (CConst, Auto 267/2017, G. Ortiz).

ro-energético y agroindustrial podría poner en riesgo los derechos de la naturaleza e incrementar los conflictos socio territoriales, se recomienda la protección al medio ambiente como un imperativo para lograr la consolidación de la paz territorial, una idea reiterada en la región y sobre la cual ha hecho énfasis el sistema de las Naciones Unidas en Colombia (ONU, 2014).

En el caso particular de los Barí, se invita al Gobierno nacional y a las instituciones correspondientes a cumplir con lo mandatado por la Corte Constitucional en el Auto 266 de 2017 y dotar de una respuesta culturalmente adecuada, integral y progresiva en la implementación del Plan de Salvaguarda Étnica de este pueblo, que reconozca los impactos diferenciales del conflicto armado y el desplazamiento forzado, atienda los derechos de las víctimas y prevenga su desaparición física y cultural.

Frente a este panorama, pero también como consecuencia de la marginación, la pobreza y los daños que el conflicto armado y el cultivo de coca le han ocasionado a la región, organizaciones sociales han puesto en marcha propuestas de ordenamiento del territorio que, en muchos casos como se evidenció en el capítulo 6, entran en tensión entre sí.

Al respecto, se recomienda al Estado colombiano prestar la mayor atención posible a las solicitudes, por un lado, de reconocimiento y puesta en marcha de una ZRC en la región y, por el otro, de reconocimiento del territorio ancestral Barí a través de la línea negra, de forma tal que se le garanticen los derechos a la tierra y al territorio tanto a indígenas como a campesinos y campesinas de la región. Por ello, las instituciones y organizaciones concernidas deben continuar implementando lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia T 025 de 2017, para avanzar en el saneamiento del territorio Barí antes de tomar una decisión sobre la ZRC y hallar “fórmulas de armonización” que permitan el derecho a la

consulta previa del Pueblo Barí y, a la vez, resguardar el interés de comunidades campesinas.

7.5. Replantear las políticas frente a la coca

El cultivo de hoja de coca y las actividades relacionadas con el narcotráfico siguen vigentes y pujantes en el Catatumbo. La población es consciente como nunca de que este sigue siendo un incentivo y un insumo que alimenta el conflicto, pero también de que se localiza en el centro de las soluciones a los conflictos que persisten en el Catatumbo.

De acuerdo con lo descrito en el capítulo 5, habitantes de la región tienen presentes las políticas antinarcóticos de carácter punitivo implementadas, tales como las fumigaciones aéreas con glifosato y la erradicación forzada de cultivos. Desde su perspectiva, como lo sostienen organizaciones sociales de la región, tanto estas políticas como los esfuerzos por implementar programas de desarrollo alternativo no tuvieron el impacto en reducción de número de hectáreas que se esperaba. Por el contrario, produjeron el envenenamiento de animales domésticos y silvestres, fuentes de agua, la tierra y el cuerpo de los habitantes de las zonas donde se han implementado. Han producido desplazamientos forzados y en muchos casos han profundizado sus condiciones de pobreza; el Pueblo Barí también se vio afectado con las fumigaciones en sus potreros y en sus cultivos de pancoger.

Sin embargo, como se vio en el capítulo 5, la hoja de coca es, para las personas del Catatumbo, un cultivo como cualquier otro, al cual muchas llegaron como consecuencia de las condiciones de precariedad y pobreza

en las que se encontraban. Aunque ofrece mejores condiciones económicas y más estables que las que brindan los cultivos tradicionales de pancoger, las actividades vinculadas con la *mata* no representan riqueza para los pequeños cultivadores ni para los raspachines, apenas se traducen en condiciones para sobrevivir.

Por todo lo anterior, el clamor de las comunidades es que las políticas que se pongan en marcha para acabar con los cultivos de uso ilícito sean abordadas desde una perspectiva diferente a la coercitiva o de persecución policial y judicial que los criminaliza, en especial, al pequeño cultivador y a quienes se dedican a la raspa. Como se describió, el cultivo y raspa de coca se ha convertido, para la mayoría de los habitantes de la región (y de otros lugares), en la única opción viable para sobrevivir y generar ingresos.

En esta vía, este informe evidencia las demandas de catatumberas y catatumberos para que se aborde el tema de la coca desde una perspectiva de reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y desde la precariedad histórica en la que ha estado sumergida la región.

En consecuencia, las políticas antinarcóticos que se han implementado en el Catatumbo no han resultado eficaces para la disminución de la problemática del cultivo, procesamiento y comercialización de la hoja de coca y sus derivados y, por el contrario, han sido perjudiciales para la población y en muchos casos ha aumentado sus niveles de precariedad. Por ello, invitan al Estado colombiano a evaluar políticas alternativas de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito que sean concertadas con las comunidades y las organizaciones sociales de la región, que tengan en cuenta las propuestas ya estructuradas por sus pobladores y que brinden garantías de sostenibilidad económica a corto, mediano y largo plazo. Así mismo, se recomienda un abordaje multidimensional al cultivo de la hoja de coca que, entre otros, pase por reconocer las dinámicas y dife-

rencias locales que han estructurado su cultivo, se asuma como central eliminar los estigmas que recaen sobre sus cultivadores y se evidencie el lugar central que ocupa como una de las pocas opciones viables que en la región permiten cierto grado de bienestar económico.

7.6. Verdad, reparación y no repetición

Como se mostró en la introducción de este informe, la memoria juega un papel central para las comunidades que reconocieron su papel en la no repetición de los hechos de violencia que han tenido que afrontar; en la dignificación de sus víctimas; en el reconocimiento de los elementos comunes que les definen; en las posibilidades de construir un futuro en colectivo; en su papel central de "construir [su] propia sanación" y en tejer los lazos de la empatía hacia adentro y hacia fuera de la región.

Se hace evidente en estas páginas y lo constatan los diversos ejercicios de reconstrucción de memoria, que catatumberos y catatumberas reconocen la importancia y la imperiosa necesidad de reconstruir colectivamente los efectos del conflicto armado en la región con una visión de futuro. Para hacerlo posible también es menester señalar que frente al Catatumbo al país le hace falta una decidida capacidad de escucha empática.

Esta investigación evidencia la capacidad de habitantes de la región para, individual y colectivamente, reconstruir los hilos de su pasado, construir explicaciones en torno a lo que les ocurre como consecuencia del conflicto armado y su capacidad para echar a andar la vida en medio

de la zozobra y la precariedad. Es en ese sentido que se hace un llamado al Estado y a las instituciones responsables para que continúen desarrollando y apoyando procesos de construcción de memoria histórica a nivel regional, que privilegien las voces y experiencias de las víctimas del conflicto armado, lo cual pasa además por reconocer e impulsar la multiplicidad de iniciativas, colectivos y proyectos en torno a la memoria histórica que han germinado en la región.

Este tipo de apuestas, enmarcadas en el derecho de las víctimas y la sociedad colombiana en general a la verdad y a la reparación simbólica, debe hacer énfasis en los impactos diferenciados del conflicto armado sobre los distintos sectores sociales que conforman la región, prestando particular atención a la situación de las mujeres; niñas, niños y adolescentes; Barí y personas de sectores sociales LGBT. Por medio de sus voces y, en tantos casos, de sus silencios, habitantes de la región urgieron un abordaje diferenciado de las dimensiones e impactos del conflicto.

En este aspecto, además, se recomienda adelantar procesos de reconstrucción de memoria histórica que den luces sobre la violencia vivida en contra de trabajadores de la industria petrolera y de otros sindicatos que hicieron presencia en la región durante los años ochenta y noventa, así como de los movimientos políticos A Luchar, Unión Patriótica y Frente Popular, que tuvieron una fuerte presencia en el Catatumbo.

En lo referente a los actores armados, como fue puesto de presente en particular en los capítulos 3, 4 y 6, existe con el Catatumbo una inmensa deuda en torno al esclarecimiento de los actos de violencia que perpetraron. Se recomienda al, ahora partido político FARC, el reconocimiento público de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que otrora cometieron, pedir perdón a sus víctimas y comprometerse de manera decidida con el derecho a su reparación simbólica.

De igual manera, se recoge la demanda de habitantes del Catatumbo por conocer los móviles y responsables de lo que ocurrió, en particular durante los años del paramilitarismo. De ese modo se invita al Estado a continuar las investigaciones que den luz sobre el entramado de relaciones, alianzas y acuerdos que permitieron la llegada y consolidación del Bloque Catatumbo y de los frentes Héctor Julio Peinado Becerra y Resistencia Motilona de las AUC a la región, como se describió en el capítulo 4. Así mismo, a continuar las labores de esclarecimiento en torno al papel que presuntamente jugaron empresas privadas y dirigentes políticos en la conformación, fortalecimiento y accionar paramilitar en la región, así como los beneficiarios directos e indirectos de sus acciones. En el marco del deber de memoria del Estado consignado en la Ley 1448 de 2011, se recomienda reconocer públicamente las connivencias que tuvieron lugar, garantizar que no vuelvan a ocurrir estos hechos y que se materialice el derecho de las víctimas y de la sociedad colombiana a conocer la verdad.

Por esta ruta, se hace visible la importancia expresada por diversos sectores en la región para que el Gobierno nacional gestione el regreso a Colombia de Salvatore Mancuso y de Rodrigo Tovar Pupo, excomandantes de los bloques Catatumbo y Norte, con el fin de que contribuyan efectivamente a esclarecer la verdad de lo sucedido, en especial, en lo relacionado con el Frente Resistencia Motilona, estructura de la cual se dispone información precaria.

Por último, en un contexto de violencia latente, han surgido y continúan trabajando en la región organizaciones de víctimas que buscan su dignificación, que se conozcan los hechos vividos, sus responsables y que se adelanten procesos de reparación simbólica. A estas se suman las organizaciones de mujeres y de jóvenes que, desde diversas orillas, apalancan múltiples apuestas por la vida digna. El CNMH hace un llamado a las entidades del Gobierno nacional para que fortalezcan y/o pongan en marcha políticas que garanticen la sostenibilidad y protección de estas

organizaciones, su reconocimiento y fortalecimiento para que continúen aportando a la construcción de la paz desde su labor cotidiana.

***

El Catatumbo le ha hablado de múltiples maneras al país y a la propia región. Catatumberos y catatumberas han compartido, no sin temor, sus memorias en torno a los estragos del conflicto armado y sus diversas e ingentes apuestas por la vida digna en su territorio. Es el turno de aproximarse empáticamente a sus relatos de vida y dignidad y construir en colectivo los caminos hacia el reconocimiento y la no repetición. Resuenan las palabras de una mujer de El Carmen, quien haciendo eco de las voces de las demás mujeres que participaban de un espacio de memoria, demandó: "les estamos dando nuestra alma, nuestro corazón a ustedes, para que manifiesten todo esto, vayan y cuenten las cosas como son y que, por favor, nos tengan en cuenta".

8.

A MANERA DE EPÍLOGO. EN MEDIO DE UNA GUERRA QUE NO DA TREGUA: LA VIDA

Aunque los diálogos y la posterior desmovilización de las FARC significaron un alivio para las y los catatumberos en relación con las acciones violentas con las que convivían, este escenario de relativa tranquilidad fue pasajero, pues en la región hacen presencia los GAPD y el ELN y el EPL, guerrillas que han continuado su fortalecimiento militar y expansión territorial, situación entre otras, que ha puesto en jaque la construcción de la paz en la región.

Por esta vía, después de que en 2016 dejara de operar el Frente 33 de las FARC, entre el ELN y el EPL se inició una confrontación militar por el control de la economía de la coca y otras rentas ilegales y por la expansión del EPL hacia zona fronteriza con Venezuela, en el Catatumbo bajo, y a zonas con presencia histórica del ELN. A estas disputas se sumaron diferencias políticas, como las mismas guerrillas han manifestado, en especial vinculadas con el tipo de acciones que ejercen y con la forma en que se relacionan con la población civil. Esta confrontación ha afectado en su conjunto a los habitantes del Catatumbo, incluyendo al Pueblo Barí.

En este sentido, un hecho ha cobrado relevancia en la región: el 20 de enero de 2018 algunos Barí se transportaban en canoa por el río De Oro, cuando recibieron disparos de fusil del ELN, hirieron a dos indígenas, el cacique Leonardo Castú, autoridad de la comunidad Bokshí de Venezuela fue quien recibió las heridas que revistieron mayor gravedad.

Por este hecho, los Barí decidieron expulsar a milicianos de esta guerrilla que se encontraban en unas casas a orillas del río y mujeres indígenas destruyeron un campamento guerrillero y rociaron con la sangre del cacique a los insurgentes. Luego, las comunidades Barí de Colombia y Venezuela se declararon en asamblea permanente y emitieron, el 3 de febrero, la Declaración de Bokshí, comunicaron a la opinión pública que:

> A partir de esta fecha nos reconocemos como Nación Barí, dispuestos a volver a la ley de origen y derecho mayor, reivindicando nuestros principios de la cultura Barí por el territorio, la autonomía territorial y cultural, invocando la Unidad de nuestra Nación (...). Como Nación Barí estaremos dispuestos a ejercer nuestro derecho ancestral o ley de origen y derecho mayor sobre nuestras comunidades y personas que estén en nuestro territorio, a partir de esta necesidad definimos crear la Guardia indígena Barí (Autoridades Tradicionales y Ancestrales de la Nación Barí, 2018).

A partir de esta asamblea, tomaron la trascendental decisión de reivindicarse públicamente como una nación y de pedir a campesinos y colonos ubicados al interior de sus resguardos en Colombia y Venezuela desalojar los predios donde se habían instalado, considerando que esta población también vulneraba sus derechos territoriales. Así mismo, declararon al Gobierno de Colombia y al de Venezuela que estaban en contra de la presencia de empresas multinacionales, latifundistas y todo aquel que pretenda perturbar el orden natural establecido por Sabaseba. Señalan que no permitirán la extracción minera, la ganadería extensiva, los cultivos de coca, ni ninguna otra actividad que vaya en contra de su integridad como Pueblo Barí. Asimismo, y teniendo presencia de las guerrillas y de la fuerza pública en su territorio, exigieron su salida y el levantamiento de sus campamentos.

Pese a estas acciones contundentes de resistencia y de defensa del territorio, las dinámicas de confrontación entre las guerrillas continuaron incrementándose. Estas incluyeron la imposición de paros armados, la difusión de comunicaciones amenazantes hacia la población, la ejecución de asesinatos selectivos, hostigamientos y combates, así como la intensificación de las dinámicas de control social. Este contexto ha producido un estado de zozobra y tensión que ha puesto en grave riesgo a los habitantes de la región y ha desencadenado desplazamientos masivos, parálisis del transporte, confinamiento, cierre de comercios, desabastecimiento e inasistencia de niños y niñas a las instituciones educativas, en entre otras graves consecuencias.

Ante esta difícil problemática las JAC, las asociaciones comunales y de mujeres, organizaciones de víctimas y de jóvenes, la Iglesia católica en cabeza de las diócesis de Tibú y de Ocaña, representantes de diferentes credos religiosos, así como las organizaciones sociales de carácter regional, llevaron a cabo asambleas comunitarias y movilizaciones para exigirles a las guerrillas el cese al fuego y de hostilidades[340].

340 Comunicado del 15 de marzo de 2018, firmado por las Asojuntas, JAC, asociaciones

Este escenario condujo a que 34 organizaciones, acompañadas por la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y varias alcaldías de la región, crearan y se agruparan en la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo. Esta iniciativa muestra que, pese a las diferencias o tensiones que puedan existir, las comunidades del Catatumbo y sus organizaciones siguen convergiendo, como lo han hecho siempre, para resistir, organizarse, pronunciarse y buscar salidas a los contextos de marginalidad y violencia que las oprime.

Dando continuidad a su espíritu organizativo, la Comisión y más de seis mil personas procedentes de todos los municipios de la región se reunieron el 22 de abril en El Tarra. Esta expresión de la población, que demuestra una increíble fuerza social y que le dio legitimidad al encuentro, a sus decisiones y a sus organizaciones, se reunió en el casco urbano de este municipio para exigir, además del cese de hostilidades de las guerrillas, el cumplimiento del Acuerdo de Paz adelantado con las FARC por parte del Gobierno nacional; a su vez, le instaron a no optar por una salida militar frente a esta coyuntura, pues como se ha visto en el territorio, ello conduce a que se agrave y agudice la vulneración de los derechos de la población:

> El Estado debe abstenerse a la militarización de los territorios como única solución a un conflicto de carácter multidimensional como el que se desarrolla en Colombia y en particular, en el Catatumbo. Ratificamos que la salida al actual contexto de la región no puede ser el incremento del pie de fuerza, sino la inversión social[341].

gremiales, organizaciones sociales, autoridades civiles y religiosas en El Tarra. Comunicado del 17 de marzo de 2018, firmado por la Asamblea General de JAC con participación de movimientos y organizaciones sociales y personas de las comunidades del Catatumbo, firmado en Teorama. Además, la iglesia católica impulsó la acción colectiva denominada #SOS Catatumbo, a la que se articularon organizaciones internacionales, humanitarias, movimientos sociales, sectores religiosos y agencias institucionales (Archivo Diócesis de Tibú).

341 Comunicado del 22 de abril de 2018. "Catatumbo: Nuestro clamor de paz es más fuerte que la guerra".

Así, este escenario permitió a comunidades de la región seguir insistiendo, como lo han venido haciendo por décadas, en la necesidad de que el Estado haga presencia de manera más integral en la región, no solo desde su faceta militar, para que de esta manera responda ante las necesidades básicas y apremiantes que la población enfrenta. Así mismo, les impulsó a exigir "una participación activa y efectiva de las comunidades"[342] en las decisiones que se tomen en torno al futuro del Catatumbo.

Pese al clamor de catatumberas y catatumberos, el 3 de junio se desarrolló un intenso operativo militar en contra del EPL, que incluyó bombardeos y ametrallamientos aéreos. De acuerdo con las organizaciones comunales y sociales de la región, estas acciones dejaron dos civiles heridos y provocaron de nuevo un desplazamiento forzado de campesinos, como se hizo evidente en un comunicado de la misión de verificación de la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo de junio de 2018. El reporte de OCHA (Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) daba cuenta de 500 familias desplazadas en el municipio de Hacarí (OCHA, 2018)[343].

La guerra en el Catatumbo no da tregua, sume a muchos de los habitantes de esta región en el miedo y la desesperanza. Sin embargo, el poderoso tejido social que se ha venido reconstruyendo por años le ha hecho frente de manera valerosa a los embates de estas nuevas reconfiguraciones del conflicto en la región.

342 Comunicado del 22 de abril de 2018. "Catatumbo: Nuestro clamor de paz es más fuerte que la guerra".

343 Por el incremento de acciones armadas y la consecuente victimización de pobladores de la región, se hace un llamado urgente para que la Unidad de Víctimas y la Secretaría de Víctimas, Paz y Postconflicto reconozca a las víctimas que está generando la confrontación actual y sean incluidas en el Registro Único de Víctimas, de conformidad con la Ley 1448 de 2011.

En un escenario de implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las FARC, catatumberos y catatumberas han señalado una y otra vez los retos y posibilidades que identificaron para que se lleve a cabo la implementación de la paz en el territorio, algunos de los cuales se abordaron con una perspectiva histórica en este informe. Por ello, urge que como sociedad se comprendan las particularidades del Catatumbo, desde las voces, expresiones y reflexiones de sus habitantes, en un esfuerzo por construir, en colectivo, las condiciones para que cese de forma definitiva la guerra en esta región. Este informe y, en particular los ejercicios de reconstrucción de memoria histórica que lo hicieron posible esperan constituirse en una apuesta en esa dirección.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

Centro Nacional de Memoria Histórica

_____(2012a), *Justicia y paz. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares,* Bogotá, CNMH.

_____ (2012b), *Justicia y paz: verdad judicial o verdad histórica*. Bogotá, CNMH.

_____ (2013), *Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970 – 2010)*, Tomo II, Bogotá, CNMH.

_____ (2013a) ¡*BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*, Bogotá CNMH-GMH.

_____ (2014), *Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de Santander*, Bogotá, CNMH.

_____ (2015a), *Limpieza social. Una violencia mal nombrada*, Bogotá, CNMH-IEPRI.

_____ (2015b), *Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo*, Bogotá, CNMH.

_____ (2015c), *Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo, Meta*, Bogotá, CNMH.

_____ (2015d), *Una nación desplazada. Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia*, Bogotá, CNMH.

_____ (2015e), *Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUC*, Bogotá, CNMH.

_____ (2016a), *Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013)*, Bogotá, CNMH-IEPRI.

_____ (2016b), *Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia*, Bogotá, CNMH.

_____ (2017a), *En honor a su memoria: Víctimas del Bloque Norte de las AUC en el Caribe colombiano,* Bogotá, CNMH.

_____ (2017b), *Grupos Armados Posdesmovilización (2006-2015). Trayectorias, rupturas y continuidades,* Bogotá, CNMH.

_____ (2018), *Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica, 1984-2002,* Bogotá, CNMH.

Fuentes académicas e institucionales

Academia de Historia de Ocaña (2012), *La violencia contemporánea en Ocaña,* disponible en https://www.facebook.com/150593761670954/posts/la-violencia-contempor%C3%81nea-en-oca%-C3%91a/392571637473164/, recuperado el 1 de septiembre de 2017.

Acosta, Alberto (2011), "Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición", en: Lang, Miriam y Mokrani, Dunia (compiladores), *Más allá del desarrollo* (páginas 83-120). Quito. Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala., en: http://www.rosalux.org.mx/docs/Mas_alla_del_desarrollo.pdf, recuperado el 18 de noviembre de 2017.

Aguilar, Luis Ignacio (1991), "Sustitución de importaciones y apertura económica" en *Revista Análisis Político* N. 13 May/Ago, sin paginación.

Aguilera Peña, Mario (2006), *"ELN: entre las armas y la política",* en María Emma Wills y Gonzalo Sánchez (coordinadores editoriales), *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia,* Bogotá, Grupo Editorial Norma.

(2010), *Las FARC: la guerrilla campesina, 1949-2010. ¿Ideas circulares en un mundo cambiante?*, Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris.

Amnistía Internacional (1995), Aumenta la violencia política en el departamento de Norte de Santander y en el sur del departamento de Cesar disponible en https://www.amnesty.org/download/.../amr230371995es.pdf, recuperado el 10 de octubre de 2016.

Aponte, Andrés Felipe (2012), "Cúcuta y el Catatumbo: entre la integración y la marginalización", en F. González, O. Gutiérrez, C. Nieto, A. Aponte y J. Rodríguez, *Conflicto y territorio en el Oriente colombiano*, Bogotá, Odecofi-Cinep.

Autoridades tradicionales y ancestrales de la nación barí, (2018), Declaración de Bokshi: el pueblo barí declara su reconocimiento como nación y anuncia su disposición para ejercer su autonomía, Bokshi, a orillas del río Ikí Bogkyí, Rio de Oro en lengua español, disponible en http://www.onic.org.co/images/noticias/2018/02/DECLARACI%C3%93N_DE_BOKSHI_FINAL.pdf, recuperado el 19 de junio de 2018.

Asociación Civil Perijá (2011), *Los Barí de Perjiá,* disponible en http://yukpaybari.blogspot.com.co/2011/05/los-bari-de-perija.html, recuperado el 1 de marzo de 2018.

Asociación Minga (1994), Carta de denuncia dirigida a la Procuraduría General de la Nación, junio 24 de 1994 (sf), *¿Quiénes somos?*, disponible en http://asociacionminga.org/index.php/quienes-somos, recuperado el 25 de julio de 2018.

_____ (2001), Alerta temprana en el Catatumbo Colombiano. Archivo de la Asociación.

_____ (2002), Acción Urgente No 1 de la Asociación Minga, dirigida al comandante de la V Brigada del Ejército, General Jairo Duván Pinedo Niño el 17 de abril de 2002. Archivo de la Asociación.

Asociación Minga y Fundación Progresar (2008), *Memoria puerta a la Esperanza. Violencia sociopolítica en Tibú y El Tarra. Región del Catatumbo. 1998-2005,* Bogotá.

Asociación de Personeros del Catatumbo (2017), Comunicado, octubre 18 de 2017, Ocaña.

Bagley, Bruce (2000), "Narcotráfico, violencia política y política exterior de Estados Unidos hacia Colombia en los noventa", en *Revista Colombia Internacional N. 49-50*, páginas 5-38.

CICR (2008), *¿Cuál es la definición de "conflicto armado" según el derecho internacional humanitario?*, disponible en https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf, recuperado el 20 de febrero de 2018.

Colombia, Congreso Nacional de la República (2005, 25 de julio), "Ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", Artículo 17, en Diario Oficial 45.980 julio 25 de 2005.

Comisión Colombiana de Juristas y CNMH (2013), *Desafiando la intransigencia*, Bogotá, Opciones Gráficas Editores Ltda.

Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (2007), *Informe preliminar, Comisión de verificación sobre la situación de Derechos Humanos en el Catatumbo Organizada por la Asociación de Campesinos del Catatumbo ASCAMCAT, agosto 9 al 12 de 2007. Corregimiento La Trinidad, Honduras y San Juancito.* Norte de Santander (2009), Informe de ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Norte de Santander. Ccalp, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Comité provisional impulsor del proyecto de comercialización del Catatumbo (1990), *Las cooperativas en el Catatumbo. Análisis crítico de su papel actual y futuro dentro de la problemática socioeconómica regional.* Mimeo. Archivo de la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, Bogotá.

Conpes (2013), *Conpes 3739* disponible enhttp://corponor.gov.co/publica_recursos/POBLACION_VULNERABLE/Conpes_3739_de2013.pdf recuperado el 15 de abril de 2018.

Defensoría del Pueblo (2006), *Resolución defensorial N. 46. Situación social y ambiental de la región del Catatumbo – Norte de Santander.*

_____ (2007, noviembre 23), Sistema de Alertas Tempranas, Informe de riesgo No. 034-07.

_____ (2008, noviembre 18), Sistema de Alertas Tempranas, Nota de seguimiento No. 036-08 Segunda al Informe de Riesgo No 006-08 A.I. del 30 de abril de 2008.

_____ (2009a, marzo 20), Sistema de Alertas Tempranas, Informe de riesgo No. 006-09 A.I.

_____ (2009b, septiembre 28), Sistema de Alertas Tempranas, Nota de seguimiento No. 023-09 Cuarta Nota al Informe de Riesgo No. 034-07 Emitido 23 de noviembre de 2007.

_____ (2009c, marzo 02), Nota de seguimiento No. 002-09 Tercera Nota al Informe de Riesgo No. 034-07A.I. de 23 de noviembre de 2007.

_____ (2011, febrero 28), Sistema de Alertas Tempranas, NT 4 No. 002-11 a IR No 006-08 A.I. Tibú y El Tarra.

_____ (2012, abril 13), Sistema de Alertas Tempranas, Informe de riesgo No. 004-12 A.I.

_____ (2014, junio 20), Sistema de Alertas Tempranas, Nota de Seguimiento No. 011-14 Segunda al Informe de Riesgo No. 004-12 A.I. Emitido el 13 de abril de 2012.

_____ (2017, marzo 30), Sistema de Alertas Tempranas, Informe de Riesgo No. 010-17 A.I.

Echandía Castillo, Camilo A (1998), *El conflicto armado y las manifestaciones de la violencia en las regiones de Colombia,* Bogotá, Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Echandía Castillo, Camilo A (2006), *Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia 1986-2006*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia.

Ejército Nacional de Colombia (2017, diciembre 29), "En el Catatumbo son activados seis nuevos batallones con cerca de seis mil hombres" disponible en: https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=428133, recuperado el 15 de junio de 2017.

Equipo Coordinador para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Provincia de Ocaña (1991), Denuncia 21 de noviembre de 1991, Archivo de la Asociación Minga.

Espinosa Moreno, Nubia Fernanda (2013), *Propuesta y trayectoria del movimiento social y político A Luchar 1984-1991*; Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de Magíster en Estudios Políticos, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-IEPRI.

Fajardo Cely, Diego Mauricio (2017), *Luchas, resistencias y genocidio del movimiento ¡A Luchar!*; Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Bogotá, Colombia, disponible en http://bdigital.unal.edu.co/61085/1/1052391494.2017.pdf, recuperado el 15 de abril de 2018.

Fedepalma (sf), *La palma de aceite en el departamento de Norte de Santander,* disponible en http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/infografia_norte_santander(1).pdf recuperado el 02 de abril de 2018.

Fedepalma (sf), *Alianzas estratégicas* disponible en http://web.fedepalma.org/sostenibilidad-social-alianzas-estrategicas, recuperado el 02 de abril de 2018.

Fundación Paz y Reconciliación (2013), *Las BACRIM después de 2013 ¿pronóstico reservado?,* disponible en http://www.pares.com.co/wp-content/uploads/2013/12/INFORME-BACRIM-2013.pdf, recuperado el 20 de octubre de 2017.

Fundación Progresar, Capítulo Norte de Santander (2017), *Una mirada local al crimen organizado en la frontera colombo venezolana,* Cúcuta.

González, Fernán; Bolívar, Ingrid y Vásquez, Teófilo (2003), *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado,* Bogotá, Cinep.

Human Rights Watch (2010), *Herederos de los paramilitares. La nueva cada de la violencia en Colombia* disponible en https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/colombia0210spwebwcover.pdf, recuperado el 20 de octubre de 2017.

Instituto de Desarrollo de la Comunidad,

Tomo 1 (1971), *La colonización del Catatumbo. Estudio socio-económico y plan integral de desarrollo. Estudio socioeconómico*, Bogotá, Corporación Minuto de Dios.

Tomo 3 (1971), *La colonización del Catatumbo. Estudio socio-económico y plan integral de desarrollo. Los indios motilones*, Bogotá, Corporación Minuto de Dios.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC (2012), *Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia*, Bogotá.

Lyons, Kristina (2006), "Decomposition as life politics: soils, selva and small farmers under the gun of the U.S – Colombia war on drugs", en Cultural Anthropology 31, No. 1.

López, Héctor (2016), *Historia del Catatumbo II. Los trabajadores petroleros del Catatumbo y su resistencia a la Colombia Petroleum Company,* Bogotá, La Fogata Editorial.

Machado, Absalón (Compilador) (1992), *Desarrollo rural y apertura económica. Seminario internacional*, Bogotá, Fondo DRI, IICA.

Mancuso Salvatore, Carta abierta dirigida a Álvaro Uribe, el 22 de marzo de 2009, página 11, en https://www.elespectador.com/articulo145410-mancuso-le-dijo-uribe-vienen-capitulos-mas-dolorosos, recuperado el 14 de abril de 2018.

Medina Gallego, Carlos (1996), *ELN: una historia contada a dos voces: entrevista con 'el cura' Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez Bautista, 'Gabino'*, Bogotá, Rodríguez Quito Editores.

Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (2016a), *Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Norte de Santander,* Bogotá.

Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (2016b), *Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Norte de Santander,* Bogotá.

MAPP/OEA (2006). Séptimo informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia.

_____ (2007a). Octavo informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia.

_____ (2007b). Noveno informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia.

_____ (2009). Decimosegundo informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia.

_____ (2015). Vigésimo informe del secretario general al consejo permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos.

_____ (2017). Vigésimo segundo informe del secretario general al consejo permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos.

Naciones Unidas (2014), Construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia, Bogotá, disponible en http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/MedioAmbiente/undp-co-pazyambiente-2015.pdf, recuperado el 2 de mayo de 2018.

Moré, Gabriel (sf), *Rancho Grande. La historia de Coveñas*, disponible en https://es.scribd.com/document/14092881/2-Contenido-La-Historia-de-Covenas, recuperado el 14 de abril de 2018.

Movice (2008), *Colombia Nunca Más. Crímenes de lesa humanidad en la zona V*, Bogotá, disponible enhttp://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/NortedeSantander.pdf recuperado el 10 de junio de 2017.

Ñatubaiyibarí (2016a), *Informe final de trabajo*, Convenio Ñatubaiyibarí-CNMH, Bogotá.

_____ (2016b), *Segundo recorrido y encuentro de memoria histórica con el pueblo Barí. Núcleo 3*. Convenio Ñatubaiyibarí-CNMH, Bogotá.

_____ (2017a), *Primer producto: documento diseño de línea de tiempo y afectaciones desde la noción de tiempo para los Barí.* Convenio Ñatubaiyibarí-CNMH, Bogotá.

_____ (2017b), *Segundo producto: documento de línea de tiempo de afectaciones por el conflicto armado en las comunidades y territorios del resguardo Motilón Barí, con énfasis en las luchas y resistencias del pueblo Barí.* Convenio Ñatubaiyibarí-CNMH, Bogotá.

_____ (2018), *Comunicación personal.*

Nizo Cárdenas, Nayib Gustavo (2016), *Estudio comparado de la acción política de las organizaciones A Luchar Y Unión Patriótica en Colombia, años 1985-1990.* Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de: Magister en Estudios Políticos Latinoamericanos, Universidad Nacional de Colombia Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Bogotá, Colombia, disponible en http://bdigital.unal.edu.co/54353/7/nayibgustavonizo.2016.pdf, recuperado el 31 de julio de 2018.

OCHA (2018), Flash Update No. 1-Desplazamiento masivo en Hacarí (Catatumbo - Norte de Santander), disponible en https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/colombia-%E2%80%93-flash-update-no-1-desplazamiento-masivo-en-hacar%C3%AD, recuperado el 10 de junio de 2018.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1994), *Informe conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las resoluciones 1994/37 y 1994/82 de la Comisión de Derechos Humanos. Visita*

de los Relatores Especiales a la República de Colombia del 17 al 26 de octubre de 1994, disponible en http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/rest/E-CN-4-1995-111.html, recuperado el 1 de mayo de 2017.

_____(1998), *Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la oficina en Colombia, al 54 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos* disponible en http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/acdh/E-CN-4-1998-16.html, recuperado el 10 de abril de 2018.

Ojeda, Diana (2017), "Los paisajes del despojo: propuestas para un análisis desde las reconfiguraciones socioespaciales", en *Revista Colombiana de Antropología* Vol. 52 No. 2, páginas 19–43.

Osuna, Javier (2015), *Me hablarás del fuego*, Bogotá, Ediciones B.

Ordoñez, Freddy (2007), "Notas para una aproximación a la dinámica del conflicto armado en El Catatumbo. La seguridad democrática y las transformaciones de la guerra", en Ciencia Política No. 4, páginas 151–189.

PNUD (2014), *Catatumbo: análisis de conflictividades y construcción de paz*, Bogotá, disponible en http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-catatumbo-2014.pdf, recuperado el 2 de mayo de 2018.

Procuraduría General de la Nación, (1983), "Comunicado sobre la investigación del MAS" en Carlos Jiménez Gómez, *Los documentos del Procurador*, *Vol. I*, Bogotá, Editorial Retina.

Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada (PPTP) - Acción Social (2010), *Estudio de tenencia de derechos sobre la tierra y territorios. Municipio de Tibú – Norte de Santander*. Bogotá.

Ramírez, María Clemencia (2001), *Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo,* Bogotá, ICANH-Colciencias.

Ramírez, María Clemencia e Iglesias, Juliana (2010), "Paradojas del desarrollo alternativo en la Amazonía occidental colombiana", en Chaves, Margarita y Carlos Del Cairo (compiladores), *Perspectivas antropológicas sobre la Amazonía contemporánea*, Bogotá, ICANH-Pontificia Universidad Javeriana.

Rincón, John Jairo (2003), *El Catatumbo. Múltiples experiencias de trabajo asociativo y cooperativo: 1980-1990*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-IEPRI.

Romero, Mauricio (2002), "Democratización política y contrarreforma paramilitar en Colombia en Política y Sociedad" en xxxxxx Vol. 39 Núm. 1, páginas 273-292.

Salazar, Carlos A (2005), *Ishtana, el territorio tradicional Barí. Informe final sobre territorio tradicional del Pueblo Indígena Barí, región del Catatumbo, Norte de Santander,* ASOCBARÍ, CECOIN, OXFAM, disponible en http://www.asocbari.org/informes/informe_final_ishtana_y_mapas.pdf, recuperado el 18 de febrero de 2018.

Schultze-Kraft, Markus (2012), *"La cuestión militar en Colombia: la fuerza pública y los retos de la construcción de la paz"*, en Angelika Rettberg (compiladora.), *Construcción de paz en Colombia*, Bogotá, Universidad de los Andes.

Serrano López, Miguel (2009), *Conflicto armado y cultivos ilícitos: efectos sobre el desarrollo humano en Colombia.* Trabajos de grado CIDER, Bogotá, Universidad de los Andes.

Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIV (2015), *Guía de lineamientos sobre la creación y apropiación social de lugares de memoria,* Bogotá.

Tobri-Acei y Rincón Vega, Néstor Adrián (2014), *Catatumbo, Los Barí y su resistencia a las compañías petroleras*. Fondo Editorial Periferia, Medellín.

UNODC y República de Colombia (2003), *Censo de coca en diciembre de 2002 & Estimado inter-censal en Julio de 2003*, Bogotá.

UNODC (2017), *Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016,* Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Gobierno de Colombia, Bogotá.

Uribe, Sonia (2013), "Transformaciones de tenencia y uso de la tierra en zonas del ámbito rural colombiano afectadas por el conflicto armado. El caso de Tibú, Norte de Santander (2000 – 2010)" en *Estudios Socio-Jurídicos, 16(1)*, páginas 245–287.

Vega, Renán y Aguilera, Mario (1995), *Obreros, colonos y motilones: una historia social de la Concesión Barco, 1930-1960*, Bogotá, Fedepetrol-CISF.

Vega, Renán; Núñez, Luz Ángela y Pereira, Alexander (2009a), *Petróleo y protesta obrera, la USO y los trabajadores petroleros en Colombia. En tiempos de la Tropical*, Bogotá, USO, Corporación Aury Sara Marrugo y ABV-FGTB.

Vega, Renán; Núñez, Luz Ángela y Pereira, Alexander (2009b), *Petróleo y protesta obrera, la USO y los trabajadores petroleros en Colombia. En tiempos de Ecopetrol*, Bogotá, USO, Corporación Aury Sara Marrugo y ABV-FGTB.

Vicepresidencia de la República (2007), *Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo*, Bogotá, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

Vidas Silenciadas (2017), *Llana caliente y la fortuna 24/29-may-88*, disponible en https://vidassilenciadas.org/hechos/574, recuperado el 06 de junio de 2018.

Fuentes constitucionales y judiciales

CE 3, enero 26 de 2006, R. Correa.

CConst, T-881/02, E. Montealegre.

CConst, T-880/2006, A. Tafur.

CConst, Auto 267/2017, G. Ortiz.

CSJ – Sala de Casación Penal (2007). Proceso 28017. J. Socha.

D, 0472/1996, artículo 3.

D, 2707/1993, artículo 29.

Fiscalía Regional de Bogotá, 1996, 9 de agosto. Informe de inteligencia militar 0725-BR20-BR-GP511 radicado 23.453

Juzgado Once, 2011-a, mayo 24, Sentencia condena contra José Bernardo Lozada Artuz, Rad. 110001 3107011-20110-00016, Bogotá.

Sentencia T-052 (2017), Derechos de las comunidades negras, afrodescendientes raizales, palenqueras, pueblos room y demás grupos étnicos, protección constitucional, Corte Constitucional.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (2013). Radicado: 110016000253 - 200782862 y 200680082. Postulados Armando Madriaga Picón y Jesús Noraldo Basto.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (2013). Radicado: 11001600025320068001 2-02. Postulado Rodrigo Pérez Álzate.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz (2014). Radicado: 2006-80014. Postulado Juan Francisco Prada Márquez.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz (2014). Radicado: 11001600253200680008 N.I. 1821. Postulados Salvatore Mancuso y otros.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala De Justicia y Paz (TSJP) -Sentencias-, 2014, octubre 31, Sentencia contra Salvatore Mancuso Gómez y otros. Rad. 2006-80008. M.P. Alexandra Valencia Molina, Bogotá.

Tribunal Superior Distrito Judicial Barranquilla - Atlántico. Justicia y Paz - Sala de conocimiento. (2016). Radicado: 08001-22-52-002-2009-83560. Postulado Randys Julio Torres Maestre.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz (2016). Radicado: 11001600025320078279 4 N.I. 1357. Postulado José Lenin Molano Medina.

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Ministerio de Minas y Energía, (2005), *El carbón colombiano. Fuente de energía para el mundo*. Bogotá.

Medios de comunicación

Caracol Radio

(1999, 18 de agosto), "Juan Pablo II llama a la pacificación tras secuestro de Obispo". disponible en http://caracol.com.co/radio/1999/08/18/nacional/0934956000_016857.html, recuperado el 10 de octubre de 2017.

(2011, 14 de abril), "Capturan en Nariño a excapitán de la Policía por homicidios en Norte de Santander", disponible en http://caracol.com.co/radio/2011/04/14/regional/1302806880_455572.html recuperado el 10 de marzo de 2018.

El Espectador

(2009, 22 de marzo), "Mancuso le dijo a Uribe vienen capítulos más dolorosos" en https://www.elespectador.com/artículo 145410, recuperado el 14 de abril de 2018.

(2010, 9 de septiembre), "Por secuestro de obispo de Tibú condenan a guerrillero del EPL", disponible en https://www.elespectador.com/fiscalia/articulo-223433-secuestro-de-obispo-de-tibu-condenan-guerrillero-del-epl, recuperado el 10 de octubre de 2017

(2017, 18 de abril), "Se cumplen 19 años del asesinato de Eduardo Umaña Mendoza", disponible en https://www.elespectador.com/noticias/judicial/se-cumplen-19-anos-del-asesinato-de-eduardo-umana-mendoza-articulo-689873, recuperado el 7 de octubre de 2017.

El Heraldo (2011, 19 de junio), "Masacre en Villa del Rosario: 4 muertos" disponible en https://www.elheraldo.co/nacional/masacre-en-villa-del-rosario-4-muertos-26098, recuperado el 15 de noviembre de 2017.

El Tiempo

(1979, 1 de febrero), "Tres golpes guerrilleros", disponible en https://news.google.com/newspapers?nid=N20snxbUuuUC&dat=19790201&printsec=frontpage&hl=en, recuperado el 1 de mayo de 2017.

(1999, 15 de marzo), "Persecución en caliente a ELN hasta Caracas", disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-879162, recuperado el 9 abril de 2018.

(2002, 08 de abril), "Catatumbo: una guerra a muerte entre FARC y AUC", disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1315967, recuperado el 18 de abril de 2018.

(2003, 24 de septiembre), "Las operaciones de Oriente", disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1013059, recuperado el 7 de octubre de 2017.

(2005, 18 de noviembre), "Ejército arremete de nuevo en el Catatumbo", disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1832799, recuperado el 30 de octubre de 2017.

(2008, 28 de octubre), "Designan nuevo comandante de la Brigada Móvil N. 15, con sede en Ocaña (Norte de Santander)", disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4630727, recuperado el 30 de octubre de 2017.

(2009, 1 de junio), "'Presión por resultados era muy grande': coronel Santiago Herrera, destituido por 'falsos positivos'", disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5328709, recuperado el 30 de octubre de 2017.

(2011, mayo 2), "Desarticulan estructura de 'Los rastrojos' en Norte de Santander", disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9255942, recuperado el 9 de noviembre de 2017.

(2012, 5 de marzo), "Desarrollan primera brigada humanitaria en El Tarra", disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11277482, recuperado el 30 de octubre de 2017.

(2012, 20 de marzo), "Arrancó jornada de valoración de labio leporino y paladar hundido", disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11386222, recuperado el 30 de octubre de 2017.

(2014, 06 de diciembre), "Condena confirma que Mancuso usó hornos crematorios, como los nazis", disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14941295, recuperado el 18 de abril de 2018.

(2017, 22 de agosto), "Cocaína colombiana representa el 92% de lo incautado en EE.UU", disponible en http://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/dea-da-informe-de-produccion-de-coca-en-colombia-122214, recuperado el 10 de noviembre de 2017.

El Universal (2015, 30 de marzo), "Otoniel, auge y crisis del capo más buscado del país", disponible en: http://www.eluniversal.com.co/colom-

bia/otoniel-auge-y-crisis-del-capo- mas-buscado-del-pais-189149, recuperado el 17 de noviembre de 2017.

Especiales Pirry (2012), "El Catatumbo: La espiral que no da tregua, Parte 2".

La Opinión

(1994, 15 de marzo), "Guerrilla quemó urnas electorales", recuperado del Archivo de la Asociación Minga, Bogotá.

(1994, 31 de mayo), "Guerrilla destruyó 40 urnas", recuperado del Archivo de la Asociación Minga, Bogotá.

(2012, 18 de febrero), "Cadena del narcotráfico en Norte de Santander", disponible en https://www.laopinion.com.co/cadena-del-narcotr-fi-co-en-norte-de-santander-25807#OP, recuperado el 17 de noviembre de 2017.

(2012, 15 de junio), "Megateo es el Pablo Escobar de Norte de Santander", disponible en https://www.laopinion.com.co/judicial/megateo-es-el-pablo-escobar-de-norte-de-santander-33039#OP, recuperado el 7 de octubre de 2017.

(2017, 5 de noviembre), "Se levanta el paro del Catatumbo", disponible en https://www.laopinion.com.co/region/se-levanta-el-paro-del-catatumbo-143154#OP, recuperado el 15 de noviembre de 2017.

Notinet.com.co (sf), "La acción de grupo interpuesta por Asociación Minga en contra de la nación-Ministerio de defensa, 1999", disponible en https://www.notinet.com.co/pedidos/0004.doc, recuperado el 8 de abril de 2018.

Prensa Rural

(2013, 25 de junio), "Pliego de exigencias del campesinado movilizado del Catatumbo", disponible en https://prensarural.org/spip/spip.php?article11099, recuperado el 20 de octubre de 2017.

(2014, 20 de septiembre), "Declaración política del IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina", disponible en http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article15070, recuperado el 20 de octubre de 2017.

(2017, 21 de junio), "La Guardia Campesina del Catatumbo, autoridad legítima de paz", disponible en http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article21672, recuperado el 11 de noviembre de 2017.

Revista Alternativa, Sentir, pensar, actuar (mayo-junio 1998), Preguntas y respuestas a la muerte. No 19.

Revista Semana

(1989, 24 de julio), "La guerra cruda", disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/la-guerra-cruda/12009-3, recuperado el 1 de mayo de 2017.

(1998, 23 de febrero), "Como arar en el mar", disponible en https://www.semana.com/nacion/articulo/como-arar-en-el-mar/35158-3, recuperado el 27 de octubre de 2017.

(2000, 6 de diciembre), "Operación Motilón", disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/operacion-motilon/42238-3, recuperado el 27 de octubre de 2017.

(2008, 29 de octubre), "Comunicado del gobierno sobre la purga en el Ejército", disponible en http://www.semana.com/nacion/conflicto-armado/articulo/comunicado-del-gobierno-sobre-purga-ejercito/96785-3, recuperado el 30 de octubre de 2017.

(2013, 20 de julio), "Habla 'Megateo': el poder oculto del Catatumbo", disponible en https://www.youtube.com/watch?v=e4VxNQ8Rvf1), recuperado el 27 de octubre de 2017.

(2015, 1 de octubre), "El fin de las fumigaciones con glifosato", disponible en https://www.elespectador.com/noticias/politica/el-fin-de-fumigaciones-glifosato-articulo-590103 recuperado el 27 de octubre de 2017.

(2017, 4 de abril), "Falsos positivos de Soacha: condenan a 21 militares a penas entre 37 y 52 años de prisión", disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/falso-positivo-de-soacha-condenas-de-hasta-52-anos/520904, recuperado el 12 de noviembre de 2017.

(2017, 11 de noviembre), "Los incentivos perversos detrás de los 'falsos positivos'", disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/human-rights-watch-denuncia-directivas-de-falsos-positivos-en-el-ejercito/546990, recuperado el 12 de noviembre de 2017.

Verdad Abierta

(2008, 29 de diciembre), "'El Iguano', Jorge Iván Laverde Zapata", disponible en http://www.verdadabierta.com/victimarios/660-perfil-jorge-ivan-laverde-zapata-alias-el-iguano, recuperado el 20 de junio de 2017.

(2009, 06 de mayo), "El narcotráfico de Mancuso en el Catatumbo, Norte de Santander", disponible en https://www.youtube.com/watch?v=A-CI7OSE4Ppo, recuperado el 27 de octubre de 2017.

(2009, 07 de mayo), "El cartel de Mancuso", disponible en http://www.verdadabierta.com/la-historia/1208-el-cartel-de-mancuso, recuperado el 27 de octubre de 2017.

(2010, 26 de octubre), "¿De dónde salieron los 'paras' en Cesar?, disponible https://verdadabierta.com/ide-donde-salieron-los-paras-en-cesar/, recuperado el 4 de abril de 2018.

(2011, 04 de abril), "Las masacres de Puerto Patiño y Guamalito contadas por 'paras'", disponible en https://verdadabierta.com/las-masacres-de-puerto-patino-y-guamalito-contadas-por-paras/, recuperado el 4 de abril de 2018.

(2011, 07 de septiembre), "Tierra prometida en La Bellacruz", disponible en https://verdadabierta.com/tierra-prometida-en-la-bellacruz/, recuperado el 18 de marzo de 2018.

(2011, 31 de octubre), "Las otras masacres de 'Juancho Prada'", disponible en https://verdadabierta.com/las-otras-masacres-de-juancho-prada/, recuperado el 4 de abril de 2018.

(2013, 2 de octubre), "Así planearon las Farc tomarse el país en los años 90", disponible en https://verdadabierta.com/asi-planearon-las-farc-tomarse-el-pais-en-los-anos-90/, recuperado el 1 de junio de 2018.

(2013, 31 de octubre), "Las Convivir, motor de la guerra paramilitar", disponible en https://verdadabierta.com/las-convivir-motor-de-la-guerra-paramilitar, recuperado el 18 de marzo de 2018.

(2014, 31 de octubre), "¿Qué se hicieron los desmovilizados del Bloque Catatumbo?", disponible en http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/502-bloque-norte/5496-que-se-hicieron-los-desmovilizados-del-bloque-catatumbo, recuperado el 9 de noviembre de 2017.

(2015, 15 de enero), "La encrucijada de los pequeños palmeros del Catatumbo", disponible en https://verdadabierta.com/la-encrucijada-de-los-pequenos-palmeros-del-catatumbo/, recuperado el 10 de abril de 2018.

(2016, 25 de abril), "La tensión armada en el Catatumbo", disponible en: https://verdadabierta.com/aumenta-la-tension-armada-en-el-catatumbo, recuperado el 9 de noviembre de 2017.

(2016, 12 de mayo), "La Directiva N. 15: estrategia tardía que abre varios interrogantes", disponible en https://verdadabierta.com/la-directiva-n-15-estrategia-tardia-que-abre-varios-interrogantes, recuperado el 20 de noviembre de 2017.

(2016, 25 de mayo), "El Catatumbo Teatro de Guerra", disponible en: http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/los-resistentes/6284-el-catatumbo-teatro-de-guerra, recuperado el 9 de noviembre de 2017.

(2017, 11 de enero), "Pacelli, el pueblo ejemplo del Catatumbo", disponible en: https://verdadabierta.com/pacelli-el-pueblo-ejemplo-del-catatumbo/, recuperado el 10 de octubre de 2017.

(2017, 20 de junio), "Fallos de Justicia y Paz muestran diversas facetas de las AUC", disponible en https://verdadabierta.com/fallos-de-justicia-y-paz-muestran-diversas-facetas-de-las-auc/, recuperado el 18 de marzo de 2018.

CNMH - Trabajo de campo

Talleres Territoriales

Taller de memoria, La Gabarra, 2012.

Recorrido territorial 1, Tibú, 2012.

Recorrido territorial 2 Tibú, 2012.

Taller de memoria, Tibú, 2012.

Taller de memoria, Cúcuta, 2012.

Taller de memoria, Campo Dos, Tibú, 2016.

Taller de memoria, Convención, 2017.

Taller de memoria, El Carmen, 2017.

Taller de memoria, El Tarra, 2016.

Taller de memoria, Hacarí, 2016.

Taller de memoria, San Calixto, 2016.

Taller de memoria 1, San Martín, Sardinata, 2016.

Taller de memoria 2, casco urbano, Sardinata, 2016.

Taller de memoria, Teorama, 2016.

Talleres por tipos específicos de violencia

Taller de memoria, víctimas de violencia sexual, bajo Catatumbo, Cúcuta, 2016.

Taller de memoria con mujeres víctimas de desplazamiento forzado, Cúcuta, 2016.

Talleres sectoriales

Taller de memoria con mujeres alto y medio Catatumbo, Ocaña, 2016.

Taller de memoria con sacerdotes de la Diócesis de Tibú, 2016.

Taller de memoria con personas de sectores LGBT, 2016.

Taller de memoria con adolescentes y jóvenes, Tibú, 2016.

Taller de memoria con docentes, Tibú, 2016.

Taller de memoria con personeros, Ocaña, 2016.

Conversatorio "Escenarios de memoria: aportes de diversos actores y territorios para la construcción de paz", Trigésima Brigada del Ejército Nacional, Cúcuta, julio de 2016.

Grupos Focales

CNMH, grupo focal 1 Barí, Tibú, 2016.

CNMH, hombres adultos, La Bogotana, Vegas de Motilonia y Santa Inés - El Carmen, grupo focal 1, El Carmen, 2017.

CNMH, hombres adultos, dirigentes de Ascamcat, grupo focal, Cúcuta, 2017.

CNMH, grupo focal 2 Barí, Tibú, 2017.

Socializaciones de la primera versión del informe

CNMH, socialización, Tibú, 2017.

CNMH, socialización con víctimas, Cúcuta, 2017.

CNMH, socialización con instituciones, Cúcuta, 2017.

CNMH, socialización, Ocaña, 2017.

Recorridos territoriales

CNMH, recorrido territorial 1, punto La Valera-Tibú, 2016.

CNMH, recorrido territorial 2, Caserío La Llana-Tibú, 2016.

CNMH, recorrido territorial 3, Río San Miguel-Tibú, 2016.

CNMH, recorrido territorial 4, Vereda Ambato-Tibú, 2016.

CNMH, recorrido territorial 5, Caserío Petrólea-Tibú, 2016.

CNMH, recorrido territorial 6, Caserío Campo Tres-Tibú, 2016.

CNMH, recorrido territorial 7, Puente Socuavó-Tibú, 2016.

CNMH, recorrido territorial 8, Caserío El Mirador-Tibú, 2016.

CNMH, recorrido territorial 9, Vereda Caño Indio-Tibú, 2016.

CNMH, recorrido territorial 10, Caserío Vetas Central-Tibú, 2016.

CNMH, recorrido territorial 11, Casco urbano La Gabarra-Tibú, 2016.

CNMH, recorrido territorial 12, Río Catatumbo-Tibú, 2016.

CNMH, recorrido territorial 13, Caserío Km. 60-Tibú, 2016.

CNMH, recorrido territorial 14, Calles del casco urbano y parque principal-El Carmen, 2017.

CNMH, recorrido territorial 15, Cementerio-El Carmen, 2017.

CNMH, recorrido territorial 16, Venezuela, 2016.

Entrevistas

CNMH, hombre adulto, habitante del municipio, entrevista 1, Convención, 2017.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 2, Convención, 2017.

CNMH, mujer adulta, habitante del municipio, entrevista 3, Convención, 2017.

CNMH, mujer adulta, líder comunal, entrevista 4, Convención, 2017.

CNMH, mujer adulta, habitante del municipio, entrevista 5, Convención, 2017.

CNMH, adulto mayor, habitante del municipio, entrevista 6, El Carmen, 2017.

CNMH, hombre adulto, habitante de Aspasica, entrevista 7, La Playa, 2017.

CNMH, hombre adulto, habitante de Aspasica, entrevista 8, La Playa, 2017.

CNMH, mujer adulta mayor, habitante de Aspasica, entrevista 9, La Playa, 2017.

CNMH, mujer adulta, habitante de Aspasica, entrevista 10, La Playa, 2017.

CNMH, hombre adulto, habitante municipio, entrevista 11, Hacarí, 2016.

CNMH, mujer joven, campesina, entrevista 12, Hacarí, 2016.

CNMH, hombre joven, funcionario del municipio, entrevista 13, Hacarí, 2016.

CNMH, hombre adulto, campesino, entrevista 14, Hacarí, 2016.

CNMH, mujer adulta, lideresa comunal, entrevista 15, Hacarí, 2016.

CNMH, hombre adulto mayor, líder comunal, entrevista 16, Hacarí, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder comunal, entrevista 17, Hacarí, 2016.

CNMH, hombre adulto, habitante del municipio, entrevista 18, Hacarí, 2016.

CNMH, hombre adulto, funcionario, entrevista 19, Hacarí, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder comunal, entrevista 20, Hacarí, 2016.

CNMH, mujer adulta mayor, docente, entrevista 21, Hacarí, 2016.

CNMH, hombre joven, líder comunal, entrevista 22, San Calixto, 2016.

CNMH, hombre adulto barí, líder social, entrevista 23, Cúcuta, 2017.

CNMH, mujer adulta, campesina, entrevista 24, San Calixto, 2016.

CNMH, hombre adulto, exfuncionario, entrevista 25, San Calixto, 2016.

CNMH, mujer adulta, campesina, entrevista 26, San Calixto, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder comunal, entrevista 27, San Calixto, 2016.

CNMH, mujer adulta, defensora de DD.HH., Bucaramanga, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder comunal, entrevista 29, Pacelli-Tibú, 2016.

CNMH, mujer adulta, lideresa de organización de mujeres, entrevista 30, Pacelli-Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder comunal, entrevista 31, Pacelli-Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto, campesino, entrevista 32, Pacelli-Tibú, 2017.

CNMH, mujer adulta, habitante del corregimiento, entrevista 33, Campo Dos-Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto mayor, líder comunal, entrevista 34, Campo Dos-Tibú, 2016.

Hombre adulto, entrevista 35, Ocaña, 2011, investigación Memoria Puerta a la Esperanza, cortesía Asociación Minga.

CNMH, hombre gay adulto entrevista 36, Cúcuta, 2016.

CNMH, hombre gay joven, entrevista 37, Cúcuta, 2016.

CNMH, mujer trans adulta, entrevista 38, Cúcuta, 2016.

CNMH, mujer trans joven, entrevista 39, Cúcuta, 2016.

CNMH, mujer lesbiana adulta, entrevista 40, Cúcuta, 2016.

CNMH, mujer joven, entrevista 41, Cúcuta, 2016.

CNMH, mujer adulta, entrevista 42, Cúcuta, 2016.

CNMH, mujer adulta, entrevista 43, Cúcuta, 2016.

CNMH, mujer joven, entrevista 44, Cúcuta, 2016.

CNMH, mujer adulta, entrevista 45, Cúcuta, 2016.

CNMH, mujer adulta, entrevista 46, 2016.

CNMH, hombre adulto, docente, entrevista 47, Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto, docente, entrevista 48, Tibú, 2016.

CNMH, mujer adulta, docente, entrevista 49, Tibú, 2016.

CNMH, mujer adulta, docente, entrevista 50, Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto, docente, entrevista 51, La Gabarra, Tibú, 2016.

CNMH, mujer adulta, lideresa social, entrevista 52, Cúcuta, 2016.

CNMH, hombre adulto, defensor de DD.HH, entrevista 53, Bogotá, 2016.

CNMH, hombre adulto mayor, defensor de DD.HH, entrevista 54, Bogotá, 2016.

CNMH, mujer adulta, defensora de DD.HH, entrevista 55, Bogotá, 2016.

CNMH, hombre adulto, defensor de DD.HH, entrevista 56, Bogotá, 2016.

CNMH, hombre adulto mayor, sacerdote, entrevista 57, Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto mayor, sacerdote, entrevista 58, Pamplona, 2016.

CNMH, hombre adulto mayor, sacerdote, entrevista 59, Bogotá, 2016.

CNMH, hombre adulto mayor, sacerdote, entrevista 60, Bogotá, 2016.

CNMH, hombre adulto, sacerdote, entrevista 61, Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto mayor, sacerdote, entrevista 62, Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto mayor, líder social, entrevista 63, Tibú, 2017.

CNMH, mujer adulta, docente, entrevista 64, Tibú, 2016.

CNMH, mujer adulta, habitante del municipio, entrevista 65, La Gabarra-Tibú, 2016.

CNMH, mujer adulta mayor, ex sindicalista de Norte de Santander, entrevista 66, Bogotá, 2017.

CNMH, hombre adulto, extrabajador y ex sindicalista de Tibú, entrevista 67, Bogotá, 2017.

CNMH, hombre adulto mayor, extrabajador y ex sindicalista de Tibú, entrevista 68, Bogotá, 2017.

CNMH, mujer adulta, docente, entrevista 69, Ocaña, 2017.

CNMH, hombre adulto, sindicalista de Norte de Santander, entrevista 70, Cúcuta, 2017.

CNMH, hombre adulto, sindicalista de Norte de Santander, entrevista 71, Cúcuta, 2017.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 72, El Tarra, 2017.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 73, El Tarra, 2017.

CNMH, hombre adulto mayor, líder social de El Tarra, entrevista 74, Convención, 2017.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 75, Cúcuta, 2017.

CNMH, hombre adulto, dirigente del paro del nororiente, entrevista 76, Bogotá, 2017.

CNMH, mujer joven, docente, entrevista 77, Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto mayor, líder comunal de La Playa, entrevista 78, Ocaña, 2017.

CNMH, hombre adulto mayor, líder comunal de La Playa, entrevista 79, Ocaña, 2017.

CNMH, hombre adulto mayor, líder comunal, entrevista 80, El Tarra, 2017.

CNMH, hombre adulto, líder comunal, entrevista 81, El Tarra, 2017.

CNMH, mujer adulta, lideresa comunal, entrevista 82, El Tarra, 2017.

CNMH, hombre adulto, movimiento cívico, entrevista 83, Bogotá, 2016.

CNMH, hombre adulto mayor, movimiento cívico de Tibú, entrevista 84, Cúcuta, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 85, Ocaña, 2017.

CNMH, hombres adultos, trabajadores en cultivos de coca, entrevista 86, La Gabarra, Tibú, 2016.

CNMH, mujer adulta, trabajadora en cultivos de coca, entrevista 87, La Gabarra, Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto, trabajador en cultivos de coca, entrevista 88, La Gabarra, Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto, experto en cultivos de uso ilícito, entrevista 89, Bogotá, 2017.

CNMH, mujer adulta, trabajadora sexual, entrevista 90, La Gabarra, Tibú, 2016.

CNMH, mujeres jóvenes, trabajadoras sexuales, entrevista 91, La Gabarra, Tibú, 2016.

CNMH, mujer, entrevista 92, Catatumbo, 2016.

CNMH, mujer, entrevista 93, Catatumbo, 2016.

CNMH, mujer, entrevista 94, Catatumbo, 2016.

CNMH, mujer, entrevista 95, Catatumbo, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder comunal, entrevista 96, Ocaña, 2016.

CNMH, hombre adulto, habitante del corregimiento de Guamalito - El Carmen, entrevista 97, Ocaña, 2016.

CNMH, hombre adulto, entrevista 98, Ocaña, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 99, Ocaña, 2016.

CNMH, hombre adulto, docente, entrevista 100, Ocaña, 2016.

CNMH, Hombre adulto, líder de víctimas, entrevista 101, Sardinata, 2016.

CNMH, hombre adulto, exlíder social de El Tarra, entrevista 102, Canadá, 2017.

CNMH, hombre adulto, ex gestor cultural de Hacarí, entrevista 103, Bogotá, 2017.

CNMH, mujer joven, lideresa comunal, entrevista 104, Tibú, 2016.

CNMH, hombre joven, habitante de Campo Dos, entrevista 105, Tibú, 2017.

CNMH, hombre adulto, campesino de San Calixto, entrevista 106, Cúcuta, 2016.

CNMH, hombre adulto, comerciante, entrevista 107, La Gabarra, 2016.

CNMH, hombre adulto, palmero, entrevista 108, Tibú, 2016.

CNMH, hombre, cacaotero, entrevista 109, Catatumbo, 2016.

CNMH, hombre adulto, funcionario, entrevista 110, Valledupar, 2017.

CNMH, Mujer Adulta, funcionaria SAT de la defensoría, entrevista 111, Ocaña, 2016.

CNMH, Hombre adulto, entrevista 112, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 113, Bogotá, 2016.

CNMH, hombre, entrevista 114, Ascamcat, Catatumbo, 2016.

CNMH, mujer adulta, lideresa de organización de mujeres, entrevista 115, El Tarra, 2016.

CNMH, mujer adulta, lideresa de organización de mujeres, entrevista 116, El Tarra, 2016.

CNMH, mujer adulta, lideresa social, entrevista 117, La Gabarra Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 118, El Tarra, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder de organización de víctimas, entrevista 119, Ocaña, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder de organización de víctimas, entrevista 120, Convención, 2016.

CNMH, hombre joven, líder juvenil, entrevista 121, Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto, persona en condición de discapacidad, líder social, entrevista 122, Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 123, El Tarra, 2016.

CNMH, hombre adulto, habitante del municipio, entrevista 124, Convención, 2016.

CNMH, hombre adulto, habitante de Hacarí, entrevista 125, Ocaña, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 126, El Tarra, 2017.

CNMH, hombre adulto, entrevista 127, Catatumbo, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 128, Tibú, 2017.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 130, El Tarra, 2017.

CNMH, hombre adulto, entrevista 131, Catatumbo, 2016.

CNMH, hombre adulto, entrevista 132, productor agrícola, La Gabarra-Tibú, 2017.

CNMH, mujer Adulta mayor, entrevista 133, Catatumbo, 2017.

CNMH, mujer adulta, entrevista, 134, Catatumbo, 2017.

CNMH, hombre adulto, líder social de Tibú, entrevista 135, El Tarra, 2016.

CNMH, hombre adulto, habitante de Tibú, entrevista 136, El Tarra, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 137, Ocaña, 2017.

CNMH, hombre, entrevista 138, Catatumbo, 2017.

CNMH, hombre adulto, entrevista 139, Catatumbo, 2016.

CNMH, mujer adulta, entrevista 140, Catatumbo, 2016.

CNMH, adulto mayor, extrabajador petrolero, entrevista 141, Catatumbo, 2017.

CNMH, hombre adulto, defensor de DDHH, entrevista 142, Cúcuta, 2017.

CNMH, mujer adulta barí, entrevista 143, Cúcuta, 2017.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 144, Convención, 2017.

CNMH, Adulta mayor, entrevista 145, Catatumbo, 2017.

CNMH, mujer adulta, lideresa social, entrevista 146, Convención, 2017.

CNMH, mujer adulta, entrevista 147, Venezuela, 2016.

CNMH, hombre adulto, entrevista 148, Venezuela, 2016.

CNMH, mujer adulta, entrevista 149, Venezuela, 2016.

CNMH, hombre adulto, entrevista 150, Venezuela, 2016.

CNMH, Hombre adulto mayor, entrevista 151, Venezuela, 2016.

CNMH, mujer adulta mayor, entrevista 152, Venezuela, 2016.

CNMH, hombre adulto, habitante de Teorama, entrevista 153, Ocaña, 2016.

CNMH, mujer lesbiana adulta, entrevista 154, Ocaña, 2017.

CNMH, mujer trans habitante de Ocaña, entrevista 155, Cúcuta, 2016.

CNMH, hombre joven, habitante del municipio, entrevista 156, Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto, funcionario, entrevista 157, El Tarra, 2016.

CNMH, hombre adulto mayor, habitante del municipio, entrevista 158, El Tarra, 2016.

CNMH, mujer adulta, habitante del municipio, entrevista 159, El Tarra, 2016.

CNMH, entrevista 160, Catatumbo, 2017.

CNMH, mujer adulta, habitante de Teorama, entrevista 161, Teorama, 2017.

CNMH, hombre adulto, campesino, entrevista 162, La Gabarra - Tibú, 2016.

CNMH, Hombre adulto mayor barí, sabio, entrevista 163, Resguardo Motilón Barí, 2017.

CNMH, Hombre adulto barí, entrevista 164, Tibú, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder de víctimas, entrevista 165, Ocaña, 2017.

CNMH, hombre joven, artista, entrevista 166, El Tarra, 2016.

CNMH, Hombre joven, artista, entrevista 167, El Tarra, 2016.

CNMH, mujer joven, artista, entrevista 168, Tibú, 2016.

CNMH, mujer joven, artista, entrevista 169, Tibú, 2016.

CNMH, mujer adulta, habitante San Calixto, entrevista 170, San Calixto, 2017.

CNMH, mujer adulta, lideresa de organización de mujeres, entrevista 171, Ocaña, 2017.

CNMH, entrevista 172, Catatumbo, 2017.

CNMH, hombre adulto, habitante del municipio, entrevista 173, El Aserrío-Teorama, 2017.

CNMH, mujer adulta mayor, habitante del corregimiento, entrevista 174, El Aserrío- Teorama, 2017.

CNMH, mujer adulta, entrevista 175, 2017.

CNMH, mujer adulta, entrevista 176, 2017.

CNMH, mujer adulta, campesina, entrevista 177, 2016.

CNMH, hombre adulto, entrevista 178, 2016.

CNMH, mujer adulta, entrevista 179, 2016.

CNMH, Hombre adulto, campesino, entrevista 180, 2016.

CNMH, mujer adulta, entrevista 181, San Calixto, 2016.

CNMH, hombre adulto, habitante del municipio, San Calixto, 2017.

CNMH, hombre adulto mayor, habitante de San Calixto, entrevista 183, San Calixto, 2017.

CNMH, mujer adulta, ex habitante de La Gabarra, entrevista 184, Cúcuta, 2017.

CNMH, hombre adulto, líder comunal, entrevista 185, Teorama, 2016.

CNMH, mujer adulta, entrevista 187, realizada para CNMH, Con licencia para desplazar, masacres y reconfiguración territorial Tibú, Catatumbo, 2015.

CNMH, hombre adulto, líder comunal, entrevista 188, Ocaña, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder barí, entrevista 189, resguardo Motilón Barí, 2016.

CNMH, mujer adulta mayor, sabia Barí, entrevista 190, 2016.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 191, Tibú, 2017.

CNMH, hombre adulto, líder social, entrevista 192, 2018.

CNMH, hombre joven, líder comunitario, Campo Dos, Tibú, entrevista 194, 2016

CNMH, hombre, exfuncionario, entrevista 195, Tibú, 2016

CNMH, hombre adulto, defensor de DD.HH, entrevista 196, Bogotá, 2018.

Diálogos por la memoria

Diálogo con campesinos, Cúcuta, 2017.

Diálogo con jóvenes, Cúcuta, 2017.

Diálogo con docentes, Cúcuta, 2017.

Bases de datos

Archivo Asociación Minga.

Archivo de la Diócesis de Tibú.

CNMH-IEPRI. Tomas guerrilleras en el Catatumbo, base de datos a diciembre de 2013.

CNMH-Observatorio de Memoria y Conflicto Armado.

Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos-CNMC.

Archivo investigación realizada para CNMH, *Con licencia para desplazar, masacres y reconfiguración territorial en Tibú Catatumbo*, 2015.

Catatumbo es hoy el eje en torno al cual se entrecruzan los más diversos conflictos internos y, en términos humanitarios, uno de los puntos más sensibles de las zonas fronterizas en América Latina. Es metafóricamente, para utilizar el nombre que le dieron los indígenas Barí, la "región del trueno".

Una compleja convergencia de conflictos armados, sociales y fronterizos entrelazados han convertido al Catatumbo en una zona en ebullición y turbulencia. Es una realidad social, política y bélica que perturba y que interpela.

Pero no todo en ella es negativo, como lo muestra este informe de Memoria Histórica: el Catatumbo es también ejemplo de solidaridades y de resistencias comunitarias.

Al informe *Catatumbo: memorias de vida y dignidad*, construido con la Diócesis de Tibú, y las múltiples voces de la región, incluidas las del Pueblo Barí, se le suman los esfuerzos de instituciones nacionales y de cooperación internacional, comprometidas con la memoria y la paz en la región y en el país. Un trabajo mancomunado tejido con la convicción de que una mejor comprensión del conflicto nos permite evitar la estigmatización de la región y de sus habitantes, y buscar con elementos objetivos y de interpretación aportados por sus propias gentes, miradas integrales para superar todas las violencias cruzadas.

Gonzalo Sánchez Gómez
Director General del Centro Nacional
de Memoria Histórica

ISBN: 978-958-5500-15-0

GOBIERNO DE COLOMBIA
PROSPERIDAD SOCIAL
Centro Nacional de Memoria Histórica
OEA MAPP
cooperación alemana
giz